

Lavlaboratorio

REVISTA DE ESTUDIOS SOBRE CAMBIO ESTRUCTURAL Y DESIGUALDAD SOCIAL

Nº 34 2

Clases sociales y entramados de la desigualdad en América Latina y el Caribe // ISSN: 1852- 4435



André Vieira
Camila Santos
César Augusto Ricardi
Morgavi
Clara Marticorena
Damián Kennedy
David Pineda Talavera
Ernesto Najmias
Germán Duarte

Hernán Fair
Ignacio Paola
José Navarro Cendejas
Correo
José Llopis Hernández
Julio Paredes
Kevin Alberto Cruz
Lola Fainsod
Luanda Botelho

Lucila D'Urso
Maia Vojnov
Marcelo Boado
María Dolores Liaudat
Mario Enrique Pineda
Talavera
Matías Daniel Romero
Matías Gomiz
Pablo Dalle

Paula Boniolo
Paula Daniela Franco
Rodolfo Elbert
Santiago Nardin
Verónica Maceira
Vicente Espinoza



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES

IIGG | **GINO**
GERMANI

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

SUMARIO

3 Introducción. Paula Boniolo, Pablo Dalle, Rodolfo Elbert, Jérica Lorena Pla

DOSSIER

10 Diferenciación social y perfiles político-ideológicos. El Área Metropolitana de Buenos Aires en un contexto de derechas globales. Verónica Maceira, Santiago Nardin.

40 Heterogeneidad e incongruencia estructural en las clases sociales chilenas. Una consideración sobre la pertinencia de las clasificaciones. Vicente Espinoza

69 Fluidez Social en Montevideo, 1996-2024. Marcelo Boado.

96 El impacto de la pandemia en la conflictividad laboral del sector de la salud pública en la Ciudad de Buenos Aires (Argentina). Clara Marticorena, Lucila D'Urso, Maia Vojnov, Ernesto Alejandro Najmias.

124 Tipo de carrera de egreso en educación superior como estratificador en México: Construcción y validación de un esquema para la investigación de la desigualdad de resultados. César Augusto Ricardi Morgavi, José Navarro Cendejas Correo

151 Desigualdades Interseccionais Entre Graduados na Educação Superior e Mercado de Trabalho no Brasil (2016-2022). André Vieira, Luanda Botelho, Camila Santos.

176 Caracterización de la estructura de clases en Honduras. José Octavio Llopis Hernández, David Pineda Talavera, Kevin Alberto Cruz, Mario Enrique Pineda Talavera

198 Estructura social y ocupacional en aglomerados urbanos de Entre Ríos: descripción a partir de la Encuesta Permanente de Hogares. Matías Daniel Romero.

ARTÍCULOS

229 Sobreeducación y sobrepoblación relativa. La fuerza de trabajo universitaria argentina por sector de empleo a lo largo del período 2004-2023. Lola Fainsod, Damián Kennedy, Ignacio L. Paola

253 Precarización laboral en el AMBA: reflexiones sobre el tiempo, salario y sobrecarga de trabajo en ámbitos laborales feminizados. Paula Daniela Franco, Germán Duarte, Matías Gomiz.

276 ¿Qué piensa sobre economía y sociedad el “campo”? Aproximación a las subjetividades

políticas en el agro pampeano actual. María Dolores Liaudat

301 Identidades y subjetividades políticas de los/las ciudadanos argentinos sobre el rol del Estado, la gestión de la pandemia y los referentes de gobierno del Frente de Todos en la segunda ola del COVID. Hernán Fair

COMUNICACIONES

333 Rompiendo Barreras: El Potencial de la IA en la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad Auditiva. Julio Paredes



INTRODUCCIÓN

Paula Boniolo

boniolopaula@gmail.com

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, Instituto de Investigaciones Gino Germani. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7756-095X>

Pablo Dalle

pablodalle80@hotmail.com

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, Instituto de Investigaciones Gino Germani. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4367-8562>

Rodolfo Elbert

elbert.rodolfo@gmail.com

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, Instituto de Investigaciones Gino Germani. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8445-0265>

Jésica Lorena Pla

jpla@sociales.uba.ar

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, Instituto de Investigaciones Gino Germani. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5564-9988>

Este nuevo número de Lavboratorio nos encuentra en un contexto de cambios y reacomodamientos en los diferentes planos de la estructura social: la vida laboral, las estructuras productivas, las opciones políticas, las transformaciones ideológicas.

En el caso de nuestra revista presentamos un segundo dossier, coordinado por Paula Boniolo, Pablo Dalle y Rodolfo Elbert, colegas queridos del área de estratificación del Instituto Gino Germani. Ellos desde hace años colaboran activamente con la revista, con artículos, como evaluadores, en las presentaciones y difusión de la revista. La colaboración coordinando un dossier ha marcado, para nosotros un nuevo paso en el trabajo académico colectivo, con ganas de crecer y posibilidades de sumar sinergias a futuro.

En ese sentido, ellos nos han regalado estas palabras de presentación de los artículos del dossier.

Clases sociales y entramados de desigualdad social en América Latina y el Caribe

América Latina y el Caribe presentan un mapa social signado por profundas desigualdades y por dispares orientaciones políticas, pautas de crecimiento y modelos de desarrollo económico-social en el marco de una inserción dependiente en el capitalismo informático-global. La pandemia de COVID-19 dejó un escenario de profundización de la desigualdad estructural, que no se revirtió en los años recientes, expresada en la erosión de los ingresos económicos y la persistencia de la precariedad laboral que afecta sobre todo al segmento informal de la clase trabajadora; a las mujeres, y a los grupos étnicos subalternizados.

En este contexto social y económico se torna relevante analizar los procesos de estructuración de clases sociales en nuestra región, en relación con el género, la educación, el territorio y el origen étnico. Este análisis postula una mirada “horizontal” respecto a la manera en la cual la clase social se combina con otros mecanismos sociales y, a su vez, requiere de la identificación de procesos “diacrónicos” de acumulación de la desigualdad a lo largo del tiempo (por ejemplo, a través de generaciones). Se resalta, por tanto, la relevancia de analizar los procesos de estratificación en clases sociales en las diferentes sociedades latinoamericanas y su articulación con otros mecanismos sociales en la conformación de una matriz compleja de desigualdad.

A su vez, es necesario comprender la manera en la cual estas desigualdades estructurales tienen una expresión en las experiencias biográficas y subjetivas de las personas que ocupan esas posiciones, y su articulación en pautas de organización colectiva en un contexto social de elevada desigualdad. Comprender las clases implica, también, analizar cómo se vive y percibe la desigualdad en los distintos países y desde una perspectiva comparativa: qué significa ser clases medias privilegiadas, medias bajas, trabajadora formal o precarizada y élites en nuestras realidades diversas y cuáles son las prácticas de asociación y de organización colectiva que expresan estos sectores.

El presente dossier de la revista Lavboratorio reúne investigaciones centradas en el análisis de la desigualdad de clase social en diferentes países de América Latina, incluyendo México, Brasil, Chile, Honduras, Uruguay y Argentina. Los trabajos seleccionados luego de un proceso de revisión doble ciego nos brindan información novedosa sobre diferentes aspectos de esta problemática a lo largo de nuestra región y postulan diferentes hipótesis testeadas empíricamente mediante una diversidad de diseños metodológicos. En términos generales, los trabajos muestran las profundas desigualdades entre clases que hay en nuestra región, y su articulación con otros procesos de desigualdad, incluyendo el género, el origen étnico-racial y los recursos educativos.

Los artículos utilizan diversas fuentes de datos orientadas a responder sus objetivos de investigación, incluyendo entrevistas en profundidad y análisis de diversas bases de datos cuantitativas, como la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC, Argentina), la Encuesta Permanente de Hogares y Propósitos Múltiples (INE, Honduras), el Suplemento Anual de Educação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (IBGE, Brasil), el Módulo de Movilidad Social Intergeneracional de la Encuesta Nacional de Hogares (INEGI, México), el Estudio Longitudinal Social (COES, Chile), la Encuesta sobre Clase y Formación de Clase en el AMBA (IIGG-UBA/UNGS, Argentina), la Base de Conflictos Laborales

(Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Argentina) y la la Encuesta Movilidad Ocupacional y Trayectorias Educativas (EMOTE - Uruguay). Este caleidoscopio metodológico se corresponde con la diversidad de enfoques teóricos y temáticas abordadas por los diferentes artículos, todas incluidas bajo el paraguas teórico del análisis de clases sociales.

En la primera parte del dossier presentamos tres artículos centrados en el estudio de la estructura de clases de diferentes países del Cono Sur en los cuales se analizan las pautas de desigualdad estructural según diversos esquemas de clase social y su articulación con procesos de formación de clase y de movilidad/reproducción intergeneracional en la estructura de clases.

En primer lugar, el artículo de Maceira y Nardin analiza la reconfiguración de las orientaciones político-ideológicas y las dinámicas de clase en el contexto de las crisis económicas recientes y el ascenso de la derecha radical en la Argentina y la región. Los autores despliegan un diseño metodológico cuantitativo con foco en los procesos de diferenciación social en la clase trabajadora y la pequeña burguesía, así como las trayectorias de voto y los perfiles ideológicos de los principales segmentos de clase. El artículo permite comprender cómo las tensiones económicas y políticas globales impactan en las configuraciones sociales y electorales locales. Se rescata la centralidad de las clases para comprender los procesos políticos y sociales cambiantes de la historia Argentina reciente.

En segundo lugar, podemos mencionar dos trabajos realizados en Chile y Uruguay con un foco en la formación de la estructura social, tanto en lo que refiere a sus clases y segmentos actuales como a su reproducción intergeneracional. El artículo de Vicente Espinoza se pregunta si clases sociales siguen siendo un principio clave para entender la estructura social contemporánea, y desarrolla un exhaustivo recorrido acerca de la construcción teórico-empírica de estas clases sociales para el análisis cuantitativo. Este artículo revisa la vigencia del esquema EGP (Erikson, Goldthorpe y Portocarero) a través del análisis de su homogeneidad interna y su capacidad para capturar fenómenos como la informalidad laboral. Con una mirada que integra discusiones teóricas sobre clases sociales en América Latina, clasificaciones chilenas y datos de una encuesta panel, el texto ofrece una perspectiva profunda y crítica sobre cómo se configuran las categorías sociales en términos productivos, contractuales y de posición de mercado.

Por su parte, el artículo de Marcelo Boado ofrece un análisis actualizado sobre la movilidad social intergeneracional en la ciudad de Montevideo (Uruguay), retomando y expandiendo los resultados presentados por el autor en 2016. A través de un enfoque metodológico cuantitativo, se exploran las tendencias de movilidad relativa y las particularidades de los resultados por subpoblación y período, evaluando la validez de la tesis de la fluctuación sin tendencias frente a la evolución temporal de la modernización. Con un análisis diferenciado para hombres y mujeres mediante modelos avanzados de cuasi-independencia, cruces, distancias y topológicos, este estudio invita al lector académico a profundizar en las dinámicas sociales inter-temporales para este caso de estudio y ponerlos en diálogos con los desafíos teórico-metodológicos que plantea el estudio de la movilidad social en contextos contemporáneos.

Luego de los artículos enfocados en la estructura de clases y en los procesos de formación de clase, el dossier presenta un artículo enfocado en las pautas de organización colectiva de la clase trabajadora en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El artículo de Marticorena, D'Urso, Vojnov y Najmias despliega un diseño metodológico mixto para comprender las dinámicas de conflictividad laboral de trabajadores/as de la salud en el contexto de la post pandemia de

Covid-19. Con un foco en las dinámicas de poder de clase y la posición estratégica de la clase trabajadora, el artículo analiza las estrategias de organización de los trabajadores de la salud para enfrentar pautas de mayor precariedad laboral en un sector central para la reproducción social. Los cambios sociales que implicó la pandemia brindaron una mayor centralidad al sector de salud, lo cual se tradujo en un mayor poder estratégico para este grupo de trabajadoras. Sin embargo, las autoras también señalan que la fragmentación del colectivo debilita las dinámicas de organización. La identificación de estas pautas contradictorias constituye un aporte importante a los actuales debates teóricos sobre las condiciones para un fortalecimiento del movimiento obrero en un contexto de ajuste permanente, polarización política y fragmentación social; a su vez que es una invitación a reflexionar sobre las tensiones laborales y las resistencias en un sector clave y profundamente feminizado.

A continuación, el dossier presenta dos artículos que enfocan en la articulación entre las desigualdades de clase y otros factores de desigualdad en las sociedades latinoamericanas contemporáneas. César Augusto Ricardi Morgavi y José Navarro Cendejas Correo analizan cómo la expansión de la educación terciaria en México ha transformado el panorama profesional en ese país, con un foco en sus consecuencias para las pautas generales de desigualdad social. Este artículo analiza, a partir de datos secundarios cuantitativos, cómo el tipo de carrera influye en la posición laboral y las oportunidades materiales de los graduados, revelando patrones de estratificación en el mercado laboral. Descubre cómo áreas como la salud y la educación destacan en posiciones privilegiadas, mientras que otras enfrentan desafíos en su inserción profesional, ofreciendo una perspectiva clave para entender las dinámicas de desigualdad educativa y laboral.

Seguidamente, el artículo de Vieira, Botelho y Santos analiza cómo se entrelazan género, raza, ingresos y discapacidad para moldear las desigualdades en la educación superior y el mercado laboral en Brasil. Este artículo explora, a partir de datos nacionales de 2016 y 2022, los efectos de la interseccionalidad en las trayectorias de graduados, analizando su distribución en los segmentos educativos y los ingresos laborales. Los hallazgos revelan dinámicas complejas que trascienden la acumulación de opresiones, evidenciando cómo la expansión de la educación superior reproduce y transforma desigualdades estructurales. Una lectura imprescindible para quienes buscan comprender los desafíos contemporáneos en la lucha por la equidad educativa y laboral.

Finalmente, el dossier cierra con dos trabajos que dan prioridad a las pautas de precariedad laboral expresadas en el mercado de trabajo latinoamericano contemporáneo. El artículo, elaborado por José Octavio Llopis Hernández, David Pineda Talavera, Kevin Alberto Cruz y Mario Enrique Pineda Talavera, se pregunta ¿cómo han cambiado las dinámicas sociales y económicas en Honduras en los últimos años? La investigación ofrece una visión profunda de la transformación en la estructura de clases entre 2019 y 2023, marcada por el impacto de la pandemia de COVID-19 y los cambios en el mercado laboral. Utilizando el modelo EGP adaptado, se analizan fenómenos como el aumento de la informalidad, la desagrarización rural y las desigualdades de género y edad en el empleo. Una lectura esencial para comprender cómo las reconfiguraciones económicas recientes están redefiniendo las oportunidades y los desafíos para diversos grupos sociales según clase, género y grupos etarios.

El artículo de Romero se centra en una pregunta fundamental para comprender las desigualdades en un país geográficamente extenso y dispar como es la Argentina: ¿es posible pensar la provincia de Entre Ríos como una unidad social y económica homogénea? Este

artículo explora la estructura social y ocupacional urbana de la región entre 2003 y 2022, utilizando datos de la EPH y EPH-TU, y aplicando la Condición Socio-Ocupacional de Torrado como herramienta de análisis. A través del estudio de los aglomerados de Gran Paraná, Concordia y el resto de Entre Ríos, se revela una compleja red de entramados productivos que da lugar a una marcada heterogeneidad en la estructura laboral y social. Una lectura imprescindible para comprender cómo las dinámicas productivas moldean las relaciones sociales y económicas en esta región clave de Argentina. Refuerza la visión de una segmentación social en el mercado de trabajo de nuestro país, expresada en este caso a nivel provincial y en la preponderancia de diferentes ramas de actividad económica en cada una de las regiones analizadas.

Este dossier ofrece una mirada profunda y multidimensional sobre las transformaciones en la estructura de clases en América Latina y el Caribe, en un contexto marcado por profundas desigualdades, precariedad laboral y reconfiguraciones políticas y económicas. A través de artículos que exploran dinámicas en países como Argentina, Brasil, México, Honduras, Chile y Uruguay, se abordan temas clave como la movilidad social, la precarización del trabajo, los conflictos laborales y la interseccionalidad en el acceso a la educación y el mercado laboral. Con una amplia gama de enfoques teóricos y metodológicos, este conjunto de investigaciones no solo ilumina la complejidad de las desigualdades estructurales en la región, sino que también proporciona herramientas analíticas para reflexionar sobre las experiencias de vida, las percepciones de clase y las formas de organización colectiva. Invitamos a los lectores a sumergirse en estos artículos, que aportan nuevas perspectivas para entender las dinámicas de clase y la interrelación de desigualdades en las sociedades latinoamericanas.

Artículos generales y comunicaciones: los desafíos de la desigualdad y la inclusión social

La sección artículos generales y comunicaciones retoman, como es el ánimo de nuestra revista, las problemáticas de integración y sociabilidad, tanto desde miradas centradas en procesos estructurales como aquellas que dan cuenta de transformaciones en términos ideológicos y simbólicos.

En primer lugar el artículo de Lola Fainsod, Damián Kennedy e Ignacio Paola analizan las consecuencias de la sobre-educación de la fuerza de trabajo universitaria, poniendo en evidencia que la formación profesional constituye un elemento regulador del ingreso y calidad del empleo, pero sobre todo en el sector formal y en el público, mientras que en el sector informal esta población ha vendido su fuerza de trabajo abiertamente por debajo de su valor, constituyendo una fuerte extraordinaria de plusvalía.

En una línea similar, a continuación, Franco, Duarte y Gomiz analizan otro sector precarizado del mercado de trabajo: la población femenina. Y lo hace poniéndola en relación con la reproducción social, incorporando una mirada integral sobre la estructura. Las autoras hacen foco en tres aspectos: el salario, la sobrecarga de trabajo y la consecuente pobreza de tiempo de las trabajadoras, a fin de analizar el impacto que tienen en la vida personal de las trabajadoras y en las relaciones con su núcleo familiar. Concluyen que el impacto que produce este proceso de precarización en los hogares de las trabajadoras se materializa por un lado en la búsqueda constante de mejorar los ingresos de manera que la pérdida de poder adquisitivo

repercuta de la menor forma posible en los recursos y servicios necesarios en la reproducción de la familia. Por otro lado, la sobrecarga de trabajo en sus diferentes formas se traduce en problemas de salud físicos y emocionales, períodos de estrés y escasez de tiempo libre para compartir con el núcleo familiar.

Los últimos dos artículos reflexionan sobre las transformaciones en las identidades y las subjetividades. En primer lugar María Dolores Liaudat, a partir de los datos de una encuesta llevada adelante durante Junio de 2023 analiza las disputas entre posiciones ideológicas neoliberales y nacional-populares sobre temáticas socioeconómicas, y entre posiciones conservadoras y progresistas sobre cuestiones culturales y sociales, buscando dar cuenta si existe alguna diferencia entre las opiniones de los actores agrarios y las del resto de la sociedad. Señala la autora que la hegemonía de la perspectiva liberal en actores agrarios bonaerenses se extiende al conjunto de los actores que se vinculan con el agro en toda la región pampeana, y al referirse a temas que exceden la intervención estatal en la actividad agropecuaria. Identifica una mirada muy negativa sobre el Estado en general, un fuerte rechazo a los impuestos caracterizados como una traba para la inversión privada y una explicación mayoritaria sobre la desigualdad que deposita la responsabilidad en los individuos: en los pobres porque no quieren trabajar o no se educan y en los ricos por su esfuerzo o mentalidad innovadora.

En ultimo lugar de artículos generales, Hernán Fair analiza, desde una metodología cualitativa, las representaciones sociales de los/las ciudadanos/as argentinos sobre el rol del Estado, la gestión del COVID del gobierno del Frente de Todos, las responsabilidades y expectativas, durante la segunda ola de la pandemia (2021). Encuentra posiciones en tensión sobre el gobierno de Alberto Fernández, su gestión de la pandemia, la concepción sobre las libertades y las responsabilidades políticas, que se expresaron con diferentes grados, intensidades y matices. Una parte de los/las entrevistados/as reconocen las circunstancias excepcionales e imprevisibles de la pandemia. Sin embargo, la mayoría de los/las entrevistados expresa fuertes críticas a la gestión gubernamental de la pandemia, cuyas consecuencias se extienden en términos simbólicos y políticos culturales hasta la actualidad.

Cierra este número el aporte de Julio Paredes, en el cual presenta los resultados de un estudio exploratorio sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la inclusión laboral de personas con hipoacusia profunda. Paredes nos demuestra que las nuevas tecnologías, con la regulación pertinente, puede usarse para mejorar la inclusión social de personas pertenecientes a colectivos históricamente rezagados. Su apuesta es profunda en tanto y en cuanto nos obliga a repensar los vínculos entre el Estado, la generación de políticas públicas, el bienestar de las personas y las transformaciones estructurales por las que atravesamos las ultimas décadas. Y así, si bien hemos visto cambiar el mundo en unas décadas, los retos de la desigualdad y la reproducción social siguen presentes, desafiándonos desde nuevas estructuras que generan nuevas capas de desigualdad, pero habilitan también nuevas herramientas para seguir pensando que un mundo mejor es posible y necesario.

Pla, Jérica Lorena (editora)

Paula Boniolo, Pablo Dalle, Rodolfo Elbert (coordinadores del dossier)

Diciembre 2024

DOSSIER



DIFERENCIACIÓN SOCIAL Y PERFILES POLÍTICO - IDEOLÓGICOS. EL ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES EN UN CONTEXTO DE DERECHAS GLOBALES

Verónica Maceira

maceiraveronica@gmail.com

Universidad Nacional de General Sarmiento, Instituto del Conurbano.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-0341-4554>

Santiago Nardin

santiagonardin@gmail.com

Universidad Nacional de General Sarmiento, Instituto del Conurbano.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6374-7791>

Resumen

El trabajo articula el estudio de los cambios de mediano plazo a nivel de las condiciones de estructuración de las clases en el AMBA con el análisis de las orientaciones político-ideológicas predominantes en los distintos segmentos, en el marco del proceso de fortalecimiento de las opciones políticas de derecha radical a nivel global. Se profundiza en el estudio del periodo 2016-2023 caracterizado por una doble crisis y posterior recuperación económica sin distribución del ingreso. Se examinan las transformaciones más relevantes de la estructura social y el bienestar de los hogares en la región, con especial atención a los procesos de diferenciación social al interior de la clase trabajadora y la pequeña burguesía. Se describen perfiles político ideológicos dominantes en los segmentos de clase así como la composición social del electorado de las principales fuerzas políticas y su trayectoria de voto reciente. En las conclusiones se retoman los principales hallazgos en diálogo con la literatura actual sobre los fenómenos de interés. El artículo se basa en un estudio cuantitativo que utiliza datos de la Encuesta sobre Clase y Formación de Clase 2023, realizada en el AMBA, en colaboración entre equipos de investigación de la UNGS y la UBA, con el apoyo de la Agencia I+D+i, Mincyt.

Palabras clave: análisis de clases; estructura social; diferenciación social; perfiles ideológicos; nuevas derechas.

**SOCIAL DIFFERENTIATION AND POLITICAL-IDEOLOGICAL PROFILES.
THE BUENOS AIRES METROPOLITAN AREA IN A GLOBAL RIGHT-WING
CONTEXT**

Abstract

The article analyses recent changes in the social structure of the Metropolitan Area of Buenos Aires and political-ideological orientations according to class positions. It delves into the study of the period 2016-2023 characterized by a double crisis and subsequent economic recovery without income distribution. The most relevant transformations of the social structure and the well-being of households in the region are examined, with a particular focus on the processes of social differentiation within the working class and the petite bourgeoisie, as well as the role of the State in social protection. Then, the ideological orientations according to class positions are described, especially in relation to the growth and radicalization of the right. Finally, the electoral support of the main political forces in the first round of the 2023 presidential elections are analyzed, from a class analysis perspective. The conclusions take up the main findings in dialogue with the current literature on the phenomena of interest. The article is based on a quantitative study that uses data from the 2023 Survey on Class and Class Formation, carried out in the CABA/Conurbano Region, in collaboration between research teams from UNGS and UBA, with the support of the I+D+i Agency, Mincyt.

Key words: class analysis; social structure; social differentiation; ideological profiles; new right.

DIFERENCIAÇÃO SOCIAL E PERFIS POLÍTICO-IDEOLÓGICOS. A ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES EM UM CONTEXTO GLOBAL DE DIREITA

Resumo

Este artigo articula o estudo das mudanças de médio prazo nas condições de estruturação de classe na AMBA com a análise das orientações político-ideológicas predominantes nos diferentes segmentos, no âmbito do processo de fortalecimento das opções políticas de direita radical em nível global. Aprofunda-se no estudo do período 2016-2023, caracterizado por uma dupla crise e posterior recuperação econômica sem distribuição de renda. Examina as transformações mais relevantes na estrutura social e no bem-estar das famílias da região, com atenção especial aos processos de diferenciação social dentro da classe trabalhadora e da pequena burguesia. Os perfis políticos e ideológicos dominantes nos segmentos de classe são descritos, bem como a composição social do eleitorado das principais forças políticas e seus recentes padrões de votação. As conclusões apresentam os principais resultados em diálogo com a literatura atual sobre os fenômenos de interesse. O artigo baseia-se em um estudo quantitativo que utiliza dados da Pesquisa sobre Classe e Formação de Classe 2023, realizada na AMBA, em colaboração entre equipes de pesquisa da UNGS e da UBA, com o apoio da Agência I+D+i, Mincyt.

Palavras-chave: análise de classe; estrutura social; diferenciação social; perfis ideológicos; novos direitistas.

Introducción¹

Recientemente, en una conferencia en Buenos Aires, Álvaro García Linera abordaba la problemática del fortalecimiento de las opciones de derecha radical en América Latina, como respuesta a lo que llama el agravio de la democracia. Se mencionaba allí (2024) un conjunto de agravios asociados al despliegue de la democracia en el subcontinente que, bien mirados, involucran la experiencia de distintas clases y segmentos sociales. El agravio de las clases dominantes, desafiadas por los gobiernos progresistas de principios del Siglo XX. El de los sectores medios, que vieron acortadas sus distancias durante el mismo período, ante el avance de derechos de la clase trabajadora. El de segmentos de los sectores populares, marginalizados ante el fracaso de la democracia capitalista en su promesa de ampliación de la inclusión social. En estas condiciones emerge, según el disertante, un “contra movimiento anti igualitario” que da lugar a una “politización des democratizadora” de distintas fracciones sociales.

En la conferencia de García Linera resonaban así un conjunto de sugerencias que las ciencias sociales han ido proponiendo, en su intento por comprender las orientaciones ideológicas, especialmente en los procesos de radicalización política, a partir del carácter de clase de las posiciones de quienes las expresan y del derrotero que experimentan estas clases y segmentos. En esta clave de prolongar el interés por el carácter de clase, no de la orientación que asume este proceso mismo en su conjunto, pero sí de sus núcleos de apoyo entre los sectores no dominantes, es que presentamos aquí el resultado de un ejercicio empírico. El mismo explora la relación entre lo que aparece como la expresión electoral actual y local del fenómeno de las nuevas derechas, y la morfología y los cambios contemporáneos en la estructura de clases.

Nuestra hipótesis general de trabajo nos lleva a explorar en qué medida, el avance de las propuestas de derecha radical expresa, parafraseando a Torre (2017), la “productividad política” de los procesos de desigualdad social en las últimas décadas, pero también de diferenciación de los sectores subordinados, sin desmedro y en confluencia con la especificidad de procesos políticos e ideológicos que son tanto de orden local como global. No queremos aquí establecer una causalidad estructural de estas orientaciones político ideológicas, sino más bien, buscamos que el estudio de la intersección de ambos procesos, nos permita arrojar elementos para la comprensión tanto de la dimensión subjetiva de los cambios en la estructura de clases como del fenómeno político en curso. Entre muchos ejes en juego, interesará aquí, avanzar en la identificación de perfiles ideológicos con dominancia en las distintas posiciones de clase, y precisar la caracterización de los apoyos sociales de las ofertas partidarias, localizando los estratos, y/o segmentos involucrados.

El ejercicio se acota al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), principal aglomerado urbano del país, cuya estructura social, niveles de intervención estatal y trayectoria político electoral, tiene contornos propios, con diferencias y semejanzas respecto de un escenario nacional, que se compone a su vez de estas múltiples particularidades regionales. El AMBA reúne dos territorios heterogéneos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Conurbano Bonaerense, que aun cuando constituyen una unidad urbana y mercado regional, involucran distintas dependencias jurídico-políticas, discriminación que se incluirá en nuestro análisis.

El estudio asumió un diseño cuantitativo. Sus bases empíricas principales son, la Encuesta sobre Clase y Formación de Clase 2023, un relevamiento probabilístico propio de 1000 casos,

¹ Este estudio forma parte de una investigación solventada con fondos de la convocatoria PICTO UNGS 2022. Agencia I+D+i. Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación.

con dominio CABA/Conurbano, realizado en forma presencial en octubre de 2023², y anexamente la EPH-INDEC.

Valen aquí algunas advertencias. Por un lado, en la medida en que se trata de una aproximación cuantitativa, el estudio se orienta a definir pautas generales de correspondencia, no a desentrañar y describir en profundidad procesos de construcción de estas configuraciones subjetivas y sus articulaciones internas. En esa dirección, busca identificar perfiles ideológicos y su vinculación con las posiciones sociales para el conjunto de la población: como señala la bibliografía especializada (Mudde, 2021), tales perfiles pueden tener fuertes diferencias con los del núcleo activo militante de las respectivas fuerzas políticas. Por otro, la Encuesta que constituye su base empírica, se relevó en octubre del 2023, por lo que cuenta con información respecto del comportamiento en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. No consideramos esto una limitante, nos parece una aproximación relevante, en la medida en que nos permite discriminar las bases socialmente distintas de los candidatos que constituyeron alianzas electorales en la segunda vuelta. Finalmente, reconocemos la limitación que tiene una encuesta probabilística a población y hogares para predicar sobre las clases dominantes (directivos y empresarios de mayor porte) dado que, por su escaso número y difícil acceso, no tienen presencia estadísticamente significativa en este tipo de relevamiento.

El artículo se organiza de la siguiente manera. En la segunda sección se reponen sugerencias para el análisis del carácter social de los procesos políticos y de la relación entre diferenciación social y orientaciones político-ideológicas. En este marco, se articulan también antecedentes puntuales de la profusa discusión actual en relación a las derechas y su radicalización, en la medida en que exploren a su vez la vinculación que interesa a este ejercicio. En el punto tres, se reseñan sucintamente cambios relevantes en la estructura social, la intervención del Estado y los niveles de bienestar de los hogares en nuestro país, con precisiones para el AMBA, que importan un análisis de las condiciones estructurales que contribuyen a comprender el fenómeno político en estudio. En el punto cuatro, se describen las orientaciones ideológicas identificadas en las distintas posiciones de clase, atendiendo a dimensiones pertinentes para el análisis de las derechas. En el quinto, se analizan los perfiles ideológicos de los votantes de las tres fuerzas principales participantes en las elecciones de primera vuelta presidencial en el 2023. En el punto seis, se siguen la trayectoria de voto reciente y la composición social del voto. El artículo cierra, con resumen y remarcando hallazgos.

Perspectivas y antecedentes

Señalamos párrafos antes, que los procesos de radicalización por derecha suscitan un conjunto de hipótesis acerca del carácter social de las fracciones expresadas por estos movimientos. No son aquellas mencionadas por García Linera las únicas ni tampoco las más popularizadas. Entre estas últimas encontramos la acuñada para dar cuenta del nacionalsocialismo y el fascismo europeo, que atribuye el protagonismo de estos procesos al espanto de los sectores medios pauperizados, en contextos de crisis. Esta tesis tuvo especial consenso entre los primeros estudios sobre el fenómeno y llega vigente a fines del siglo XX.

² Esta encuesta fue diseñada e implementada de manera colaborativa entre nuestro equipo con sede en el Instituto del Conurbano-UNGS y el proyecto del equipo del PI-Clases-IIGG-UBA dirigido por la Dra. Paula Boniolo, articulando objetivos e intereses para concretar una muestra probabilística de la Región. Ambos equipos contaron con sendos apoyos de la Agencia I+D+i, Mincyt.

(v.g. Hobsbawn, 1995:129). Con un enfoque crítico, Val Burris (1995) especifica, sin embargo, que la investigación historiográfica reciente abona el apoyo de la pequeña burguesía al nazismo pero no una adhesión diferencial por parte del asalariado de cuello blanco. Asimismo, no encuentra evidencia empírica respecto de una disminución de las brechas de ingreso entre asalariados de cuello blanco y de cuello azul y de su igualación en la pobreza-que se ha referido como fundamento del “pánico de status”.³ Sobre la mencionada matriz se desarrolló a su vez en la sociología americana de los ´50 un consenso sobre el potencial reaccionario de la “baja clase media”, aplicándose más tarde a la interpretación de distintos movimientos como el KuKlux Klan y el McCarthyismo, e incluso posteriormente, del reaganismo. A su vez, este segmento de las viejas clases medias, ha sido sindicado como base de apoyo de dos antecedentes que entroncan con el posterior auge de la derecha francesa: el boulangierismo de fines del siglo XIX y posteriormente, el poujadismo, también en los años cincuenta. (Reggiani, 2017).⁴

Las primeras décadas de este siglo son testigos de una vigorización de la derecha internacional, su “cuarta ola” que, entre otros rasgos, se distingue de derechas de décadas anteriores, por su desmarginalización. Como precipitante de esta revitalización, la bibliografía especializada no duda en consignar la gran recesión económica internacional del 2008. En los países centrales, la misma se conjugó con procesos de otro orden, como los atentados del 11 de septiembre del 2001 y la llamada “crisis de los refugiados” de 2015, enlazándose con el despliegue de una fuerte dimensión xenofóbica que caracteriza estas configuraciones (Mudde, 2021; Reggiani, 2017).

Para las derechas europeas y como en los estudios clásicos, Jacobs y Kaiser (2023) ponen en foco la hipótesis de la relación entre estos fenómenos y la movilidad social descendente. No encuentran evidencias que abonen la hipótesis en términos intra sino intergeneracionales. Por otro lado, concluyen que no habría apoyatura empírica suficiente respecto de la concentración de adhesiones a la derecha radical entre los sectores más desaventajados. También en la interpretación del trumpismo en Estados Unidos, se reversiona la hipótesis de la experimentación de la amenaza a la pérdida de posiciones dominantes, especialmente entre los varones blancos. En este caso, se considera cómo la disminución de la presencia relativa de población blanca anglosajona y las mejoras relativas en los derechos y las posiciones económicas de las mujeres y los grupos étnicamente subordinados se conjugaron con una pérdida de preeminencia nacional en el escenario global, creando condiciones para interpelaciones sexistas, racistas y xenofóbicas (Mutz, 2018). Asimismo, la interpretación sobre el ascenso de Bolsonaro en Brasil, postuló una articulación de factores, retomando a la vez la hipótesis del “cultural backlash” presente en otras latitudes: la gravitación del punitivismo, la politización del resentimiento racial, el partidismo negativo en relación a la alianza petista (Valente y Borba, 2023).

Por su parte, un corpus sobresaliente de antecedentes locales, constituyen una tradición propia respecto de la relación que interesa a este artículo, en al menos dos recorridos estrechamente vinculados. Aquel que remite a la línea de estudios sobre el Estado, procesos

³ El autor reconstruye que esta tesis fue asumida como propia por la socialdemocracia europea y el movimiento comunista internacional y recogida por los intelectuales de la Escuela de Frankfurt emigrados a los E.E.U.U, tras la Segunda Gran Guerra, con trabajos especialmente influyentes como los de Adorno (1965).

⁴ Con sus importantes diferencias, ambos movimientos son considerados expresión colectiva de la incertidumbre de estos segmentos, con menores posibilidades de adaptarse al escenario de crisis. Se vertebraron como manifestación del “hombre común” y direccionaron su radicalidad contra el parlamentarismo, la política corrupta y, a diferencia de las expresiones posteriores en la misma Francia, también contra las elites.

políticos y alianzas de clases, y las investigaciones específicas del campo de la sociología electoral, cuya hipótesis de partida es, justamente, la correspondencia entre el voto y la estructura socio-ocupacional (Mora y Araujo, 1980). La problematización de la diferenciación social interna de los trabajadores que aquí interesan es una de las dimensiones centrales que acicateó esta producción intelectual, buscando caracterizar tanto las identidades sociales que constituían el principal apoyo del peronismo en sus orígenes, como, a partir de ello, el carácter social mismo del primer peronismo (Germani, 1962, Murmis y Portantiero, 1971; Torre, 1990, entre otros).

Desde entonces y hasta la última dictadura cívico militar, el voto en Argentina se distinguió de otros comportamientos regionales, por la importancia con la que expresó un clivaje de clase (Mainwaring y Scully, 1995 y Lupu y Stokes, 2009). Las investigaciones discutieron la medida en que estos apoyos remitían específicamente a la clase obrera o más ampliamente al mundo popular. Al respecto, Mora y Araujo (1980) precisaba la caracterización del peronismo hasta 1973 como “partido obrero en las regiones más desarrolladas, y partido popular, policlasista, en las regiones menos desarrolladas”. En contraposición, se ha postulado que los sectores medios se construyeron identitariamente por oposición a aquella experiencia (Adamovsky, 2019), vertebrándose, no por espanto frente al empobrecimiento, sino como reacción ante al trastocamiento del régimen de clasificación que había operado el peronismo histórico.

En la reinstalación democrática, la UCR logró la migración de apoyos provenientes de “sectores altos de la población asalariada, obreros especializados y empleados” (Torre, 2003), quebrando la hasta entonces considerada ley de hierro de la dinámica electoral local. El período inaugura un cambio relevante en la significación de los distintos segmentos de la clase trabajadora que serían su principal apoyo: el Partido Justicialista se hizo eco de la heterogeneización de la clase trabajadora que supuso la instalación de un régimen de valorización financiera en nuestro país, operando entonces un intenso proceso de desindicalización y territorialización del peronismo (Levitsky, 2004). Posteriormente, y tras la debacle de 2001, la conjugación kirchnerista del peronismo, incorporó las organizaciones sociales de estos segmentos a su construcción política, a la vez que buscó el reclutamiento de su tradicional base obrera, a través de su fortalecimiento estructural y de una reposición del papel sindical en el sistema de relaciones laborales (Palomino, 2007). Si tras la neoliberalización del peronismo, el menemismo había incorporado al electorado del centro derecha (Gervasoni, 1998), el kirchnerismo logra interpelar a segmentos de los sectores medios identificados con la centro-izquierda, huérfanos también de representación electoral (Torre, 2003). Asimismo, Jorrat y Riveiro (2011), comprueban el crecimiento de los apoyos obreros a la candidatura de Cristina Fernández en 2007, considerando sin embargo que la Argentina ocupaba un lugar intermedio en el voto tradicional de clase, en comparación con mapas electorales típicamente clasistas. La conformación de la coalición Cambiemos, que llegará al gobierno a fines del 2015, será una novedad relevante tanto en términos de alianzas sociales como confluencias electorales. Siguiendo a Vommaro (2019) en su recuperación de O’Donnell (1977), la misma supone la expresión política de la burguesía agraria - protagonista del lock out opositor del 2008- y rompe con la debilidad electoral histórica de la alianza antiperonista.

Nuestro estudio dialoga con la investigación local actual que busca identificar orientaciones políticas de los distintos segmentos sociales, así como las bases sociales de la derecha radical a nivel local. En esa dirección, retenemos para nuestra exploración que Elbert y Morales (2022),

en el marco de la pandemia Covid 19, identificaron un “bloque promercado” compuesto por gerentes y empleadores y un bloque “progresista”, más propenso a la intervención estatal, que contiene al proletariado informal, expertos sin autoridad, proletariado formal y cuenta propias no calificados. Seman (2023) localizó a parte del segmento del cuentapropismo informal entre los apoyos sociales del fenómeno mileista, categoría que, según el autor, es interpretada por los propios sujetos como “laboral y moral al mismo tiempo”, identificando a “la sociedad de emprendedores que se hacen cargo de sí mismos y han llegado a la conclusión de que el Estado no ayuda sino que obstaculiza”. Piva (2023), infirió semejanzas en los perfiles sociales del voto peronista y mileista en el conurbano bonaerense, a partir de un análisis ecológico en el que se exploró la asociación entre desempeño electoral y nivel de precariedad laboral, a nivel municipal. Señala que Milei disputa el voto peronista y lo hace más exitosamente allí donde “la lealtad de ese voto está en crisis”, esto es, en municipios antes ganados por el peronismo o con elecciones pasadas oscilantes. Finalmente, Balsa (2024) explora y encuentra correspondencias entre segmentos de clase y orientación neoliberal y retoma la tesis de Semán y Welschinger (2023) a propósito de los apoyos mileístas de un sector fuera de las regulaciones laborales, cuyos integrantes se reconocen como “emprendedores” y articulan su identidad alrededor del esfuerzo personal, pero no localiza niveles diferenciales de informalidad entre los apoyos mileistas.

Doble crisis y recuperación sin distribución

En este apartado nos interesa reponer los cambios en la estructura social del AMBA durante el período reciente, refiriendo procesos y rasgos que, a nuestro entender, pueden ser leídos como condiciones estructurales que aportan a la comprensión de las orientaciones y de los cambios políticos del período.

La clase trabajadora y las posiciones intermedias (estas últimas, desde nuestra perspectiva, conceptualizadas como posiciones contradictorias -Carchedi, 1977-), salieron de la década kirchnerista en condiciones de estructuración muy distintas, no solo puntualmente respecto de la crisis del 2001, sino en relación a los cambios morfológicos de los noventa. La expansión observada entre 2003 y 2012, no significó la reversión de las transformaciones sustantivas operadas previamente en la estructura social, como lo indica el porcentaje de 31% de hogares cuyos jefes/as se mantenían en el proletariado informal en la Región hacia el 2014 (Maceira, 2022). Sin embargo, cierto es también que, sin desmedro de limitaciones bien identificadas en cuanto a la profundidad de cambios sustantivos en el patrón de acumulación (Schorr, 2012), la década supuso, como graficaba Palomino, una recomposición de las zonas centrales de la estructura de clases y, como establecimos en trabajos previos, un fortalecimiento del segmento formal de la clase trabajadora, que en GBA experimenta un aumento de 11 puntos porcentuales en su significación relativa (Maceira, 2022 en base a EPH-INDEC).

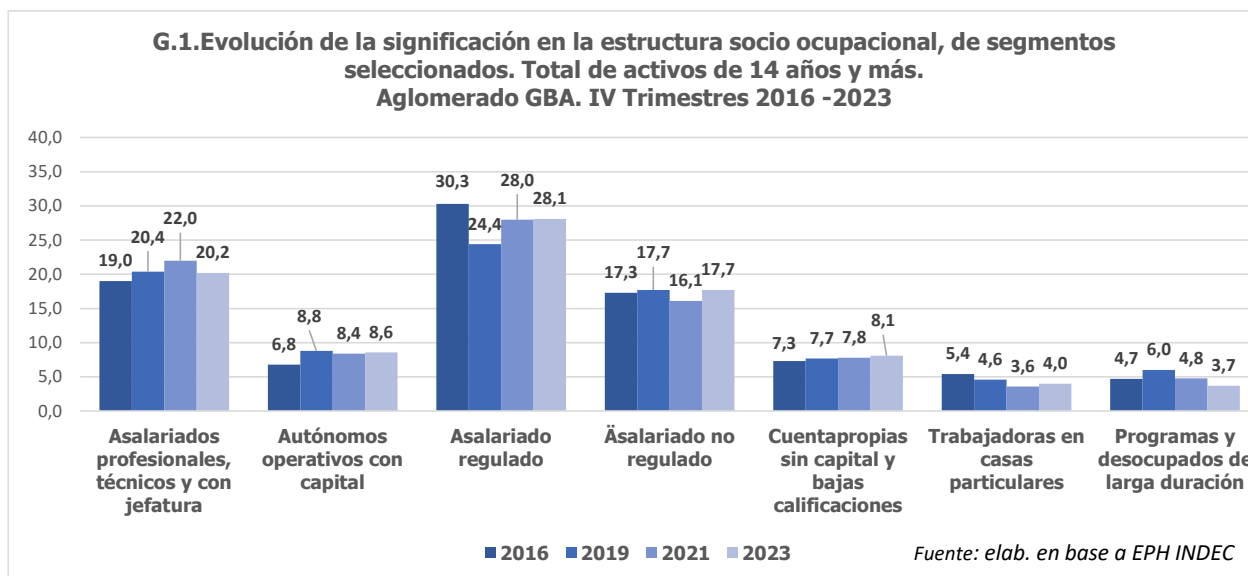
El estancamiento en el crecimiento del asalariado registrado entre 2012-2013 y su posterior recuperación en el 2015 (en base a SIPA-MTEySS) es el preámbulo de la doble crisis posterior en la estructura social. Doble, porque tiene orígenes distintos y golpea, en lo sustantivo, a distintas fracciones de las clases populares (Benza, Dalle y Maceira, 2023).

Precisemos que la primera, (2016-2019), vinculada al arribo de Juntos por el Cambio al gobierno nacional, (con una reorientación del sentido de la intervención estatal -Danani y Hintze, 2010-, y una reposición de un patrón basado en la rentabilidad financiera -Cassini, Zanotti y Schorr, 2019), significó un punto de inflexión respecto del proceso anterior,

resultando en una retracción de -2.9 puntos del empleo asalariado registrado a nivel nacional (noviembre 2015-2019- en base a SIPA-MYySS). En términos de la estructura socio ocupacional del AMBA, esto operó a nivel de las posiciones del conjunto de la población en edades activas, en una pérdida de significación de la clase trabajadora formal (de -6 puntos), con especial impacto en los obreros industriales y de la construcción. La contracara de esto fue el crecimiento de los trabajadores supernumerarios abiertamente excedentes (+1,3), de la pequeña burguesía pobre (+2 puntos) y en menor medida del segmento autónomo y marginalizado de la clase trabajadora⁵ y del asalariado no registrado (Gráfico 1, en base a EPH-INDEC) (que acompañan la caída de 3,8 puntos de la tasa de asalarización del aglomerado y el aumento de dos puntos de la tasa de no registro en el mismo período).

Dado su carácter desaventajado, autónomo o bien precario, son estas capas, las que quedarán especialmente expuestas en el segundo período de crisis, vinculada al aislamiento dispuesto frente a la pandemia Covid-19. Será pertinente subrayar y retener los procesos de diferenciación al interior de la clase trabajadora ya presentes, que se refuerzan en este período. Al respecto, las políticas de sostenimiento del empleo (prohibición de despidos y cobertura salarial para los ocupados) lograron proteger los puestos de trabajo de los asalariados registrados tanto a nivel nacional como regional, mientras todos los grupos socio-ocupacionales con inserciones autónomas o informales experimentaron desgranamientos muy superiores al ya importante 23,8% de variación porcentual intertrimestral negativa promedio en el AMBA. Se destaca en este contexto la repulsión inter-trimestral de más la mitad (56.7%) de la fuerza de trabajo asalariada no registrada de bajas calificaciones, el 38,1% de las trabajadoras en casas particulares, así como el 30,7% del cuentapropismo de bajas calificaciones (en base a EPH-INDEC II a III trimestre 2020). En términos del riesgo laboral enfrentado por los trabajadores/as del AMBA a nivel de sus trayectorias, interesa remarcar que durante el período más álgido de aislamiento, esto supuso una permanencia en sus puestos de solo el 30% para el caso de los no registrados y del 35% para el cuentapropismo de bajas calificaciones, frente a la continuidad interanual en sus puestos de trabajo del 85% de los asalariados registrados (porcentaje similar a la media de transiciones interanuales) (Maceira, 2022, en base a panel intertrimestral EPH-INDEC)

⁵ Siguiendo conceptualizaciones clásicas, referimos como pequeña burguesía pobre, a los cuenta propias con algún medio propio (vehículo, local, maquinaria, esto es, por ejemplo, taxista, mecánico con taller, pequeño comerciante con local). Por su parte, la clase trabajadora autónoma es aquel segmento que no es incorporado a la explotación por parte del capital, pero logra sostener su reproducción sin medios propios de alguna envergadura (típicamente, trabajadores de un oficio dedicados al rubro de refacciones). Finalmente, el cuentapropismo changuista (vg. productores de comidas caseras y vendedores ambulantes) forma parte del estrato más desaventajado de la estructura, que aquí referimos como segmento marginalizado. Por segmento marginalizado, referimos al resto de las posiciones de clase trabajadora más desaventajada que no son incorporadas a la explotación por el capital: además del cuentapropismo changuista, las trabajadoras en casas particulares, los perceptores de programas de empleo y los desocupados de bajas calificaciones. Ciertamente, estos distintos segmentos forman parte de la reserva de fuerza de trabajo, aunque con características y dinámicas diferentes.



Aún en el marco de la ampliación de la desigualdad (tanto en términos de riesgo e ingresos) que se expresa también a este nivel del acceso diferencial a un sistema de protección social, cierto es que los segmentos más expuestos no quedaron al margen de la intervención estatal. Las características que asumieron las medidas orientadas a contener su situación laboral y social, fueron motivo de intensos debates públicos, durante y después: Elbert y Morales (op cit) han localizado que la implementación del IFE o el ATP suscitaron apoyos diferenciales según la posición de clase y Maceira y Beccaria, (2021) señalaron su valoración positiva por oportunidad e innovación, en la periferia del aglomerado. También fueron criticadas, por lo reducido de su monto, su baja frecuencia y especialmente, por su discontinuidad en la post pandemia, cuestión sobre la que volveremos inmediatamente. De acuerdo a nuestra elaboración en base a la ESAYPP/PISAC-Covid-19/PIRC- ESA para el AMBA, el 40% de los cuenta propias con medios propios y el 51% de los cuenta propias sin medios, del asalariado registrado y del segmento marginalizado, fueron alcanzados por el IFE, amén de otras prestaciones puntuales y paliativas, enfocadas en la población activa vulnerable, con bajo alcance para la población en general, pero que en el caso de los individuos con posiciones de clase trabajadora autónoma, alcanzaron entonces un 10% (como REPRO, seguro de desempleo, el entonces más acotado Potenciar y otros sostenes sectoriales específicos).

Ambas crisis supusieron una contracción sustantiva en los ingresos ocupacionales individuales y de los hogares en términos reales. En consonancia con lo observado a nivel nacional (Benza, Dalle y Maceira, 2022), la variación relativa en el promedio de los ingresos ocupacionales individuales reales en la Región fue de -20,2 % entre 2016 y 2019, ampliándose esa caída a un total de 25,6 % hacia fines del 2020. Por su parte, la variación porcentual del ingreso per cápita promedio de los hogares del Área fue de -14,3% entre 2016-2019, ampliándose a una caída total total de 25,6% hasta finales del 2020 (en base a IV trimestres EPH-INDEC y variación IPC-INDEC).

La expansión del empleo fue relativamente acelerada en la inmediata post pandemia, aunque con ritmos distintos entre el segmento regulado y el precarizado y autónomo. Como coordenadas del período, repongamos que a nivel nacional se verifica un crecimiento del asalariado registrado privado de 9 puntos entre noviembre. 2020-2023, que si bien se detiene en agosto del 2023, desanda los seis puntos de la contracción sumada del gobierno de JxC y de

la pandemia, y se ubica tres puntos por encima del 2015 (en base a SIPA-MTEySS). Remarquemos que, a nivel del GBA, esto operó una recomposición del orden de significación de los distintos segmentos de la estructura socio ocupacional, con un fortalecimiento relativo del segmento asalariado regulado (especialmente de aquellos insertos en la producción y la circulación de bienes), de + 3,7 puntos en relación a la pre-pandemia (Gráfico 1). Es necesario advertir también que se recupera la significación prepandemia del asalariado no registrado en unidades económicas (en correspondencia con el aumento de la tasa de no registro), que retoma los niveles previos a la gestión macrista. El proceso se da en el marco de un incremento de la tasa de actividad y de empleo, mientras la tasa de asalarización se mantiene en los niveles de la pre pandemia.

Enfatizamos entonces que, sin desmedro de las características estructurales del área, inalteradas en la postpandemia, y aun considerando la ralentización de mediados de año, el rasgo clave de la coyuntura no es la crisis del empleo, sino el hecho de que su recuperación postpandemia se articula con una fuerte aceleración inflacionaria, con distribución regresiva del ingreso, en el marco de un gobierno peronista de plataforma distribucionista. La magnitud del proceso regresivo es severa. Luego de una primera recuperación en la post pandemia, los ingresos ocupacionales reales en el Área sufren una pronunciada caída vinculada con la mencionada aceleración inflacionaria. Según las mediciones del segundo trimestre del 2023 (esto es, a las puertas del período electoral), los ingresos ocupacionales eran, en promedio y en términos reales, un 30% más bajos que el IV trimestre del 2016, mientras que la variación negativa del ingreso per cápita familiar completaba un -18,6% en el mismo período.

En este cuadro de situación cabe también calibrar la relevancia que tiene la discontinuidad de parte de las medidas innovadoras en términos de protección social implementadas en la pandemia, y en particular, volviendo a un señalamiento anterior, el desplazamiento de la iniciativa de implementación de formas de ingreso social recurrente y de amplio alcance. Al respecto, en septiembre del 2023 y considerando exclusivamente los instrumentos de transferencia para la población en edad de trabajar, nuestra encuesta indica que las prestaciones sociales alcanzaron al 3,2% del cuentapropismo con medios, al 5,3% del cuentapropismo de oficio, al 4,8% del asalariado no registrado de bajas calificaciones, y al 14,5% del segmento marginalizado (en base a ECyFC, AMBA 2023). Si bien se trata de un relevamiento puntual, presenta indicios de una significación muy acotada de la presencia estatal en la reproducción de estas posiciones más expuestas, en comparación con lo que reportamos para el período excepcional de la pandemia.

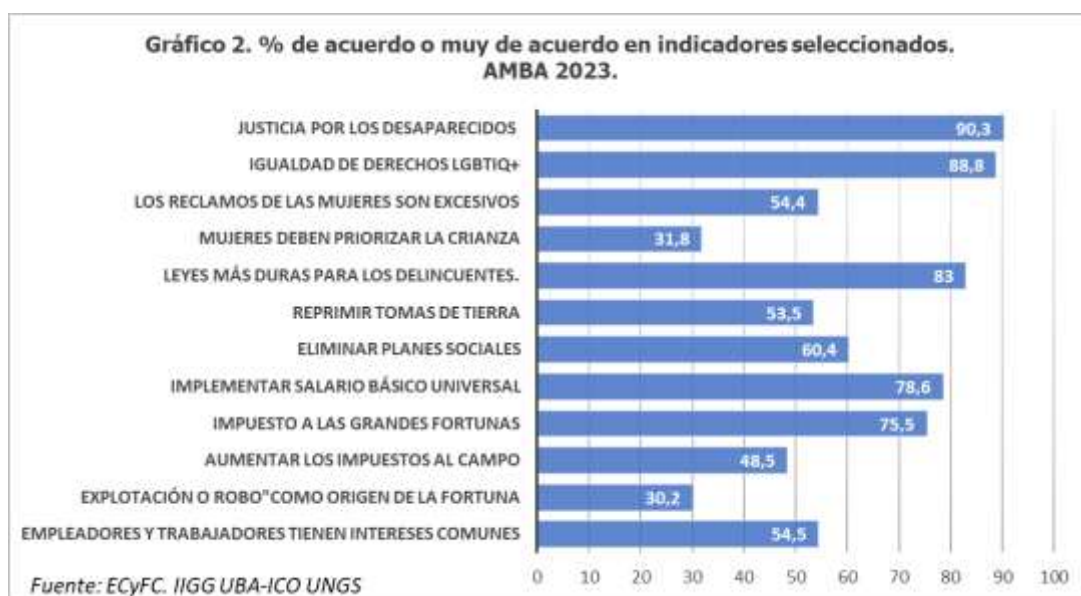
Diferenciación social y perfiles ideológicos

Interesa en esta sección, en primer lugar, identificar rasgos centrales para la caracterización ideológica de las fracciones y segmentos referidos previamente.

Retomando los antecedentes, nuestra investigación discrimina un conjunto de dimensiones consideradas en estudios sobre orientaciones en general y sobre rasgos de las derechas contemporáneas en particular: en primer lugar, el posicionamiento respecto de la intervención estatal frente a la desigualdad, diferenciado a su vez por su objeto, ya sea: i-redistribución del excedente (a través de políticas impositivas que gravan el capital concentrado) y ii-políticas anti o pro-igualitaristas, respecto de las fracciones más desaventajadas de la estructura social (registrado a través de apoyo a transferencias sociales de ingresos). Junto con ello, medimos el

antagonismo social, que permite abordar el posicionamiento de clase de las distintas fracciones y segmentos, a la vez que aproximarse al carácter anti-elitista o no, de los perfiles ideológicos que estamos estudiando. Finalmente, incorporamos tres dimensiones especialmente señaladas como de interés en el estudio de las derechas: iv- punitivismo; v-feminismo; vi-negacionismo (estas últimas, también claves en la agenda político cultural progresista y de izquierda). La estrategia de abordaje empírico supuso requerir a los encuestados su alineamiento, ya sea sobre iniciativas de políticas públicas específicas, ya sea en referencia a determinadas afirmaciones respecto de la vida social. En la medida en que el instrumento de relevamiento debió ser especialmente sintético, se acotaron los indicadores a los que resultaron más significativos en investigaciones propias anteriores y sondeos ad hoc previos.

Los indicadores considerados de manera independiente permiten identificar orientaciones dominantes en la población bajo estudio (Gráfico 2). Es de interés retener lo que estas señalan como tendencia general, vis a vis lo esperado en el contexto político actual. El paneo nos permite también precisar la interpretación que atribuimos a estos indicadores simples, que serán articulados luego, en dimensiones algo más complejas.



Sintéticamente, se registra, por un lado, un apoyo relativamente alto a políticas que gravan a las grandes fortunas (75,5%) y menor para un aumento a las retenciones agropecuarias (política signada en sus términos específicos por el conflicto político asociado a su actualización en el 2008, 48,5%).

Las interpretaciones que el/la analista puede derivar de estos posicionamientos se acotan al considerar los niveles medios de antagonismo social que se hacen presentes en relación al empresariado y la cúpula económica. En efecto, si bien prácticamente casi la mitad de los encuestados identifican intereses económicos contrapuestos entre empleadores y trabajadores, un 70% de los encuestados adhiere a su vez a explicaciones sobre el origen de la riqueza que expresan una orientación mayormente no antagonista (entre las opciones no antagonistas presentadas se cuentan aquellas que apelan a la suerte, al trabajo y esfuerzo y al espíritu innovador).

Por su parte se registra un apoyo medio a las políticas de transferencia de ingresos: medio alto cuando se recurre a la opción del llamado Ingreso Básico Ciudadano (78,6%), pero -en sintonía más estrecha con lo que serían las propuestas de las derechas locales-, medio-bajo, cuando las transferencias asumen el formato de “planes sociales” (el 60,4% manifestó su acuerdo con la eliminación de estas políticas).

El punitivismo presenta una alta intensidad general en este universo. Expresa la severidad con la que se experimentan problemáticas ciertamente complejas, pero también una orientación hacia el cierre y resolución autoritaria de las mismas que, vale anotar, es un rasgo característico de las derechas tanto tradicionales como actuales. Particularmente, obtiene un apoyo mayor la propuesta general de endurecimiento de penas a quienes transgreden la ley (83%), y relativamente menor, la propuesta más autoritaria consultada, que refiere a la intervención represiva concreta en caso de protestas que acudan a la acción directa (53,5%).

Por último, se constata en este universo que, a pesar del consabido corrimiento electoral en la coyuntura, las orientaciones antifeministas parecen tener una adhesión limitada: apenas el 32% acuerdan con que las mujeres deben priorizar la crianza de sus hijos por sobre otras actividades, y un 54,4% juzga excesivos los reclamos de las mujeres. Asimismo, tanto los derechos de los colectivos LGBTQ+ como, en otro plano, la búsqueda de justicia para las víctimas de la dictadura cívico militar, siguen siendo dos principios fuertemente legitimados en el universo de análisis (88,8% y 90,3% respectivamente).

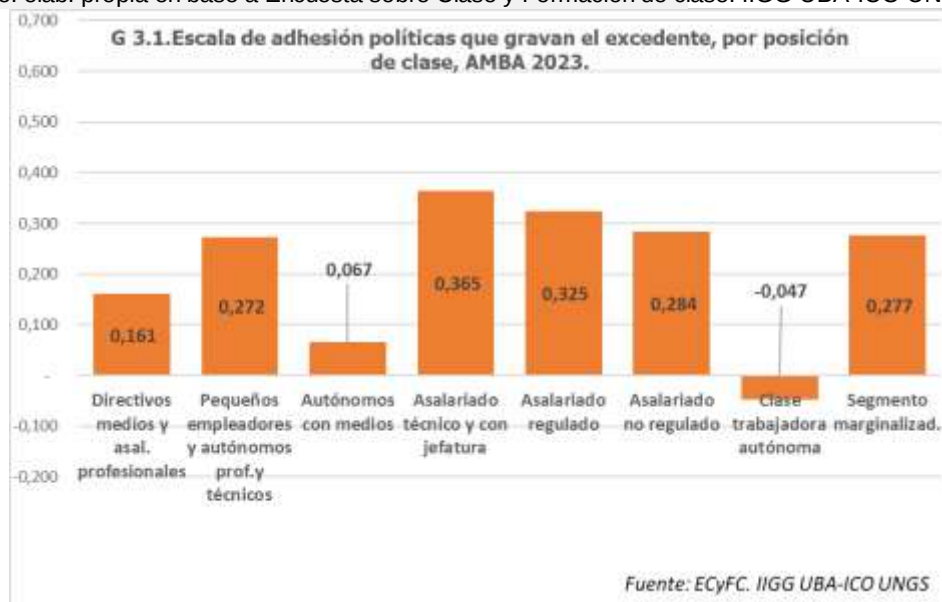
Es pertinente advertir que esta orientación global es una “composición” que soslaya una heterogeneidad relevante, con sesgos tanto en términos de clase y segmento de clase, como de género y edad, a la que, justamente, nos referiremos a continuación.

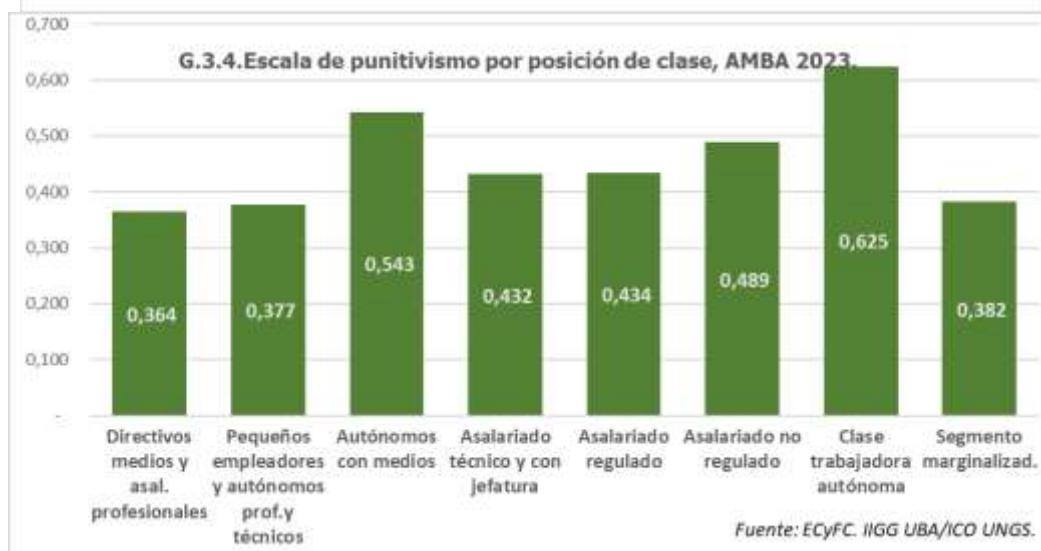
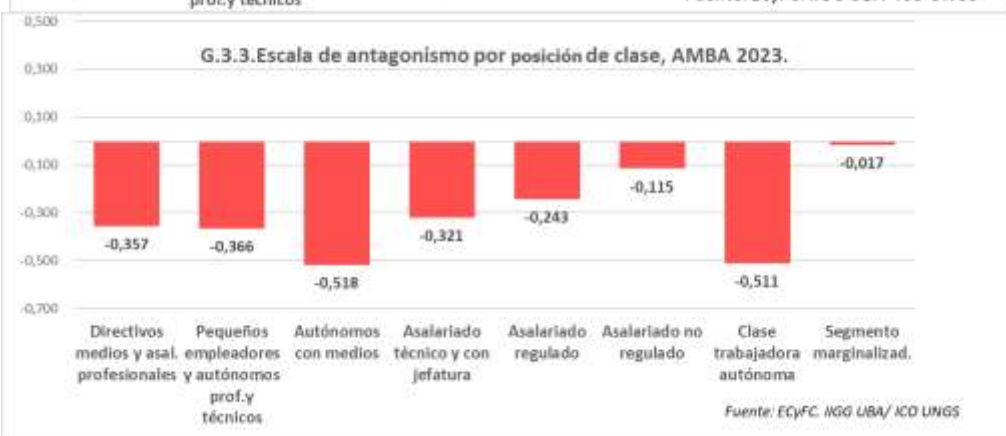
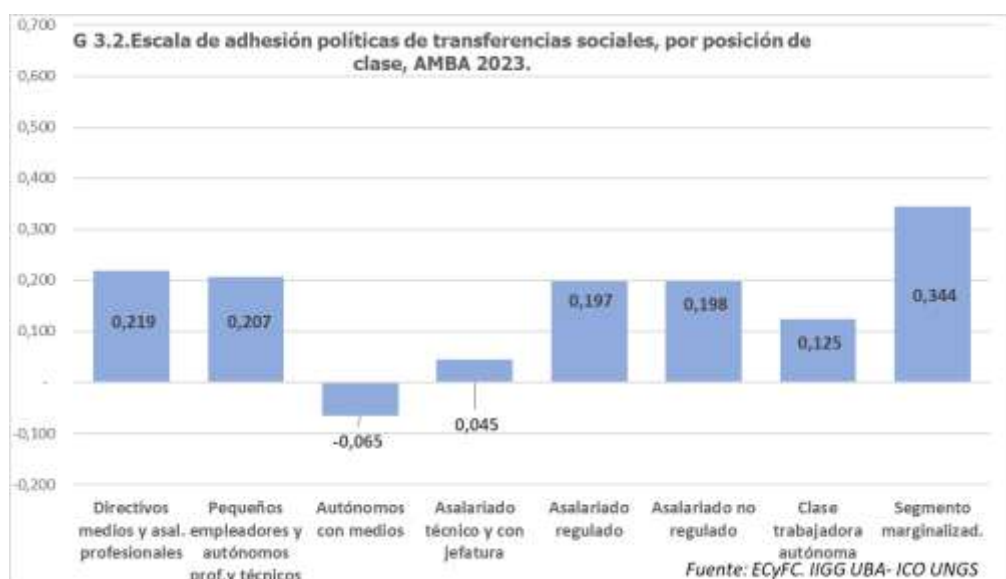
Como señalamos en la introducción, dadas las características de nuestro instrumento, estamos observando aquí una estructura social trunca. Esto es, se trata de un conjunto de posiciones de clase que, con su nivel importante de diferenciación interna, son en definitiva todas ellas, socialmente subordinadas. Con estas limitaciones, se esquematizan aquí tendencias generales respecto de la relación entre la inscripción en la estructura social y los alineamientos en las distintas dimensiones de las configuraciones ideológicas. Para avanzar en esa dirección, se confeccionaron escalas sumatorias con los indicadores de cada dimensión ya presentados de manera independiente en los párrafos anteriores, con rango de variación promedio +1/-1, donde +1 significa muy de acuerdo con el conjunto de medidas y -1, muy en desacuerdo. En la siguiente tabla, se observa el promedio de cada escala para el universo estudiado, además de sus variaciones por atributos socio-demográficos, cuestión esta última sobre la que volveremos más adelante. La construcción de escalas que se presenta tiene un propósito comparativo y asume los valores generales de apoyo ya expuestos en párrafos anteriores, profundiza en las distancias relativas entre segmentos, mostrando correspondencias y articulaciones. Aclaremos que la apreciación de estas escalas debe realizarse considerando su amplio rango, desde el acuerdo total con todas las postulaciones hasta el rechazo total de las mismas. Destacamos ahora las líneas principales de observación.

Cuadro 1. Escalas según variables sociodemográficas seleccionadas.**Area Metropolitana de Buenos Aires, 2023.**

	Apoyo a gravar el excedente	Apoyo a transferencias sociales	Alineamiento antagonista	Punitivismo	Apoyo Feminismo
Promedio	0,265	0,182	-0,256	0,431	0,356
Subregión					
Ciudad BsAs	0,223	0,233	-0,335	0,418	0,457
Conurbano	0,277	0,169	-0,235	0,435	0,328
Género					
Varón	0,236	0,148	-0,297	0,454	0,302
Mujer	0,303	0,225	-0,204	0,402	0,424
Grupo de edad					
20-29	0,320	0,207	-0,285	0,393	0,435
30-39	0,312	0,186	-0,193	0,357	0,426
40-49	0,166	0,154	-0,258	0,481	0,310
50-59	0,333	0,202	-0,256	0,481	0,264
60-64	0,092	0,140	-0,388	0,506	0,246

Fuente: elab. propia en base a Encuesta sobre Clase y Formación de clase. IIGG UBA-ICO UNGS.





De manera consistente con su carácter contradictorio, las fracciones superiores de los sectores medios expresan un antagonismo de clase menos intenso que la clase trabajadora, así como menor apoyo a las políticas que gravan el excedente, especialmente entre los segmentos asalariados, directivos y cuadros profesionales (Gráficos 3.1 y 3.2).

Por su parte, dentro de la clase trabajadora, también en términos agregados, las orientaciones antagonistas (con presencia media baja en el universo en general), son más intensas en los segmentos precarios, incluso en los marginalizados y excedentes, que en los segmentos más estables de la clase trabajadora (considerando entre estos últimos, al asalariado técnico, a quienes tienen cargos de jefatura y al asalariado regulado de calificaciones medias y bajas) (Gráficos 3.1 y 3.2).

Distintos son los alineamientos en relación a las políticas de transferencias sociales de ingresos y de las políticas de seguridad pública, medidas que en todo caso ponen en juego el posicionamiento respecto de los segmentos más desaventajados de la estructura social. De manera quizás anti-intuitiva, se comprueba que el apoyo a las políticas de transferencias es menor y el punitivismo es mayor entre la clase trabajadora formal que entre los segmentos superiores de las posiciones intermedias (Gráfico 3.3). En este punto, recuperamos antecedentes locales que pueden asistir en la interpretación, dando cuenta, de la manera en la que parte del asalariado formal presenta objeciones a los programas de transferencias sociales de ingresos. Se ha señalado que, en la medida en que el trabajo se constituye en una dimensión central en la construcción de la identidad de estos segmentos (Maceira y Feldman, 2019), supone el establecimiento de una distancia respecto de un “otro social y moralmente distinto” identificado con el “no trabajo” (Danani y Grassi, 2008), no adscrito a la cultura del esfuerzo y en deuda ante la comunidad que lo sostiene (Paugam, 2007), invisibilizando modalidades laborales diferentes de aquellas formas salariales típicas.

Nos detenemos un momento en la caracterización de los asalariados técnicos y quienes ejercen funciones de jefatura en los procesos de trabajo, posiciones que otros autores consideran como el segmento inferior de los sectores medios asalariados pero que aquí entendemos ya como las fracciones más calificadas de la clase trabajadora. Este segmento también muestra un perfil diferenciado. Presenta niveles de antagonismo social menores a los del resto de la clase trabajadora asalariada, pero esto se conjuga con un alto nivel de demanda en cuanto al gravamen de la ganancia capitalista y un bajo nivel de solidaridad con los desaventajados -en términos de distribución del ingreso a través de transferencias sociales- (Gráficos 3.1 a 3.4). Completando el perfil, se trata además del segmento que, de acuerdo a nuestro propio registro, presenta más altos niveles de participación en la protesta social, incluyendo no solamente protestas virtuales, sino concentración y movilización. En principio, y también acudiendo a la bibliografía clásica antecedente (Goldthorpe, et al, 1968; Hobsbawn, 1973), antes que como segmentos reaccionarios de la clase media baja, estos asalariados aparecen con rasgos propios de las capas menos desfavorecidas de la clase trabajadora, relativamente moderadas en términos de su antagonismo clasista, pero contenciosas en términos específicamente corporativos, es decir, con altas demandas económicas pero sin incorporar a las mismas a otros segmentos relegados de su misma clase social.

Por otro lado, también al interior de los sectores populares, pero enfocando en las posiciones autónomas, encontramos, una importante sintonía entre las orientaciones de las fracciones en la frontera entre la pequeña burguesía pobre y el segmento autónomo de la clase trabajadora. Junto con ello, se destaca su diferenciación respecto de otras fracciones de la clase trabajadora, tanto el asalariado regulado y no regulado, como el resto de las posiciones marginalizadas y abiertamente excedente. Los rasgos definitorios en estos dos segmentos autónomos son el menor nivel de apoyo a políticas redistributivas, escasa solidaridad con las fracciones más desaventajadas, muy bajos niveles de antagonismo y muy altos niveles de punitivismo. Estos segmentos actúan entonces en tales indicadores como “tester de derecha”, en términos de

alinearse consistentemente con valores más extremos de las escalas propuestas según dicha orientación, con más fuerza la pequeña burguesía pobre que el segmento autónomo de la clase trabajadora.

Estas últimas observaciones resultan en sintonía con aquellos señalamientos respecto de las posiciones autónomas referidos por la bibliografía clásica y que fueran validados por la investigación empírica más reciente en nuestro país. Vale aquí retomar algunas de las coordenadas que caracterizan la inserción de estos dos segmentos y que confluyen en la estructuración de estas orientaciones. Se trata de trabajadores que experimentan un proceso laboral individualizado, sin relación de explotación directa por parte del capital ni tampoco de construcción de intereses colectivos. Su situación de separación de los medios de trabajo o bien la propiedad de medios muy limitados, además de calificaciones medias operativas no específicas, supone una alta vulnerabilidad para la reproducción de sus condiciones de existencia. Particularmente, el contexto que estamos estudiando, expresa de manera acentuada esta dinámica, experimentando ambos segmentos tanto su engrosamiento como refugio en el momento de contracción como la extrema precariedad de sus condiciones frente a la pandemia Covid 19.

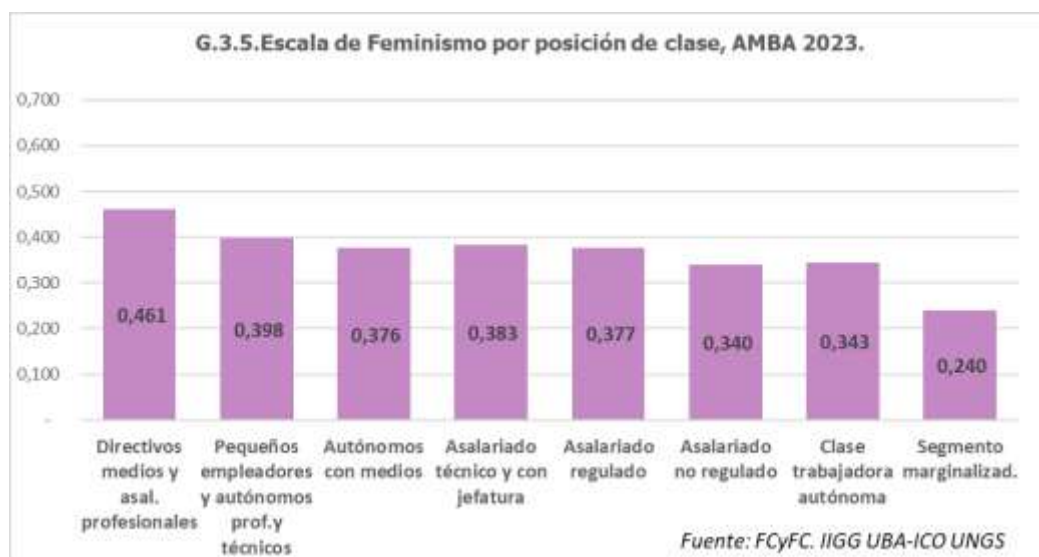
Volviendo a nuestro universo en general, otros conjuntos de relaciones también condicionan estas orientaciones, articulándose en pautas que definen sesgos específicos al interior de los segmentos de clase (Cuadro 1). En esa dirección, comprobamos un sesgo consistente de las mujeres en las distintas dimensiones consideradas, un apoyo mayor a las políticas de igualdad distributiva y menores niveles de punitivismo, rasgos que podrían hipotéticamente vincularse a la doble situación de desventaja social de las mujeres junto a su protagonismo en los cambios culturales del período, articulación que las vuelve más permeables a posiciones progresistas.⁶

Por otro lado, la consideración de las diferencias etarias matiza la recurrente referencia a los jóvenes como sostén de las nuevas derechas locales. En efecto, en este universo, quienes tienen entre 20 y 24 años presentan apoyos más intensos a las políticas de transferencias de ingreso y menores niveles de punitivismo, mientras que son los mayores de 60 años quienes portan un perfil fuertemente conservador, se caracterizan por su intensidad punitiva, sus bajos niveles de antagonismo y de apoyo a las políticas redistributivas. Estas correspondencias, expresan socializaciones diferenciales de las distintas cohortes, pero también, momentos distintos de los ciclos de vida, confluencias que, en todo caso, ameritan ser profundizadas para cada grupo etario en un contexto de indagación específico.

Los cuatro tópicos discriminados hasta aquí refieren a dimensiones interrelacionadas, en la medida que en todos estos alineamientos están operando, en última instancia, las formas de comprender y posicionarse respecto de la desigualdad de clase. Esto es así también en relación al punitivismo, habida cuenta del carácter de clase de quienes son primordial objeto de las políticas de endurecimiento de penas. Si bien no con dirección unívoca, era esperable entonces que las configuraciones ideológicas involucren y permitan leer algún grado mayor o menor de consistencia interna o articulación entre estas dimensiones.

⁶ Las mujeres presentan también menores niveles de antagonismo social, cuestión que abre interrogantes a profundizar respecto de la manera en que estas posiciones y procesos se articulan en la significación de sus protagonistas durante el período.

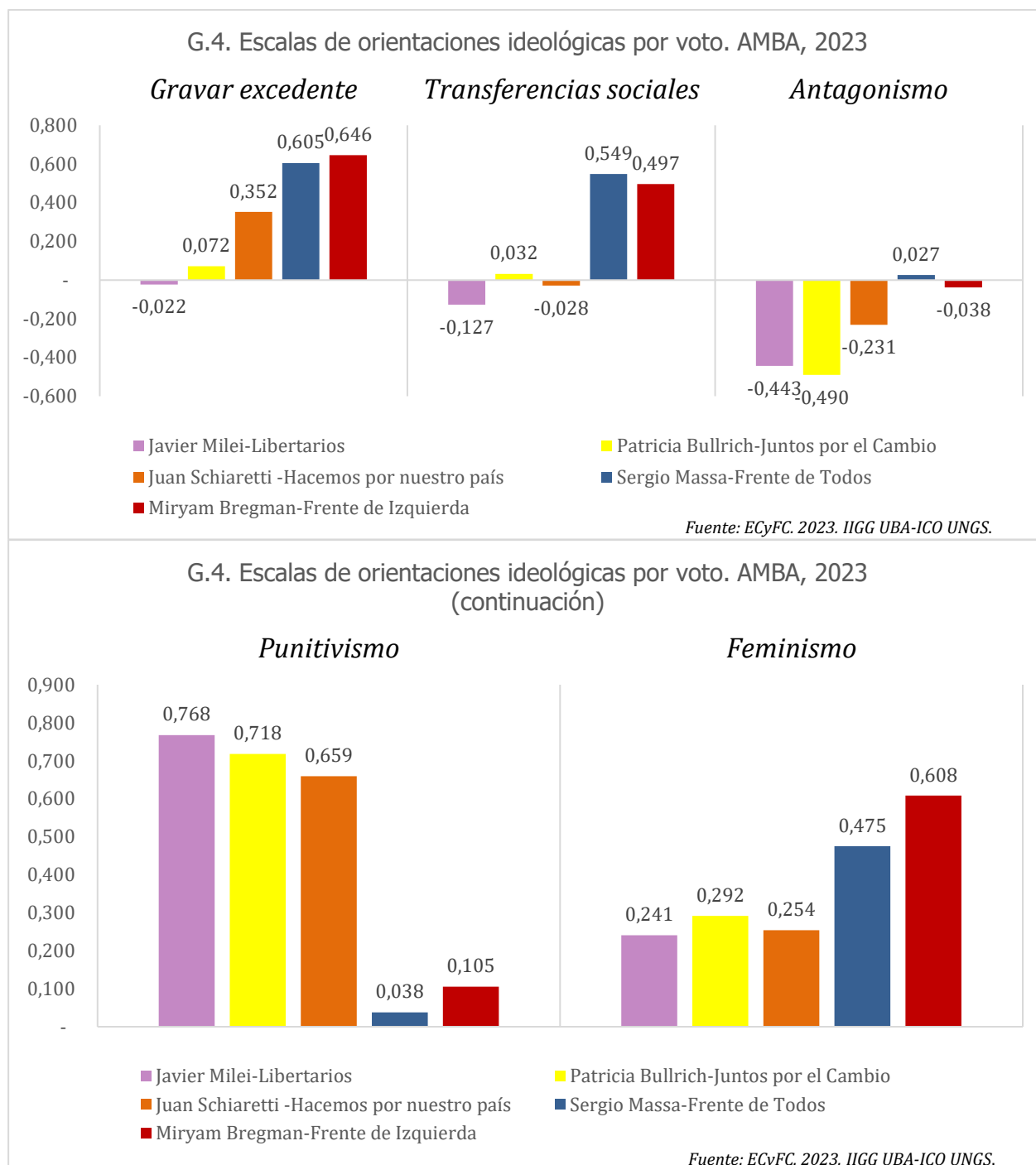
Los alineamientos en relación a las políticas e iniciativas sobre la desigualdad de géneros se desplazan de esta articulación, estructurándose en mayor medida ciertamente por las relaciones de género mismas y las diferencias etarias, que por las posiciones de clase. Asimismo, el gradiente de apoyo feminista a lo largo de la estructura social responde en mayor medida al acceso a mayores logros educativos y culturales en términos generales que a segmentos de clase en términos estrictos. Así, el alineamiento resulta ampliamente más progresista en las mujeres que en los varones, en los jóvenes que en los mayores, y entre quienes alcanzaron niveles educativos superiores, cuestión que a su vez puede ser considerado indicador de acceso a otros bienes culturales (Gráfico 3.5).



Perfiles ideológicos y confluencia electoral

Sea que consideremos con Bobbio (2014) que la distinción sustantiva entre izquierda y derecha refiere al posicionamiento frente a la igualdad, o que la traduzcamos con Wright (1997), como el alineamiento pro capital o pro socialismo, cierto es que los tópicos considerados hasta aquí son dimensiones de configuraciones ideológicas que se ordenan entre estos polos, siendo esperable entonces que se articulen en mayor o menor medida en una confluencia político partidaria. En todo caso, interesa aquí la intensidad de esta articulación, cuestión que colabora a su vez a leer el significado de la coyuntura electoral y a calibrar el nivel del cambio en las orientaciones que la misma conlleva.

Las alternativas político-partidarias se organizan en el eje derecha/izquierda polarizando fuertemente en todas las dimensiones consideradas, por un lado, los electorados de Milei+Juntos por el Cambio+ Schiaretti (este último, en intensidad algo menor) vs. el Frente de Izquierda -FdeI- y Unión por la Patria -UxP- (estos últimos, con configuraciones notablemente isomórficas en sus orientaciones e intensidades). (Gráfico 4).



En sintonía con lo analizado en el apartado anterior, también aquí destacamos que las cuatro dimensiones que involucran relaciones de desigualdad de clase presentan variaciones extremas entre ambos polos, todas ellas del mismo orden de magnitud, con brechas mayores en torno a las políticas que gravan el excedente. Tanto en esta última dimensión como en aquella que explícitamente remite al antagonismo con las personificaciones del capital, el valor extremo no es asumido por el partido de LLA sino directamente por Juntos por el Cambio. Ambas versiones de las derechas partidarias dominantes localmente carecen igualmente del nivel de antagonismo con “los de arriba” característico de las versiones populistas. Asimismo, la intensidad extrema en términos de punitivismo y oposición a los programas de transferencias sociales de ingreso, es asumida por LLA. Estas diferencias entre ambos perfiles de derechas son de poca magnitud

cuantitativa en estas escalas, pero sintomáticas, en la medida que resultan consistentes, como veremos párrafos más adelante, con el distinto carácter social de sus respectivos electorados

Tan o más relevante que la corroboración de lo esperado, son las observaciones que van en contrario. Al respecto, enfatizamos ya el acotado eco que parecen tener las interpelaciones antifeministas y negacionistas que caracterizan el discurso de LLA. Agregamos aquí que, aun considerando exclusivamente al votante mileista, los avances y la lucha llevada adelante por la igualdad de las mujeres, moviliza una adhesión relevante vis a vis la intensidad conservadora de otros indicadores, adhesión que aumenta incluso para los derechos de las disidencias.

Si bien nuestra exploración al respecto fue limitada, cabe reponer lo constatado sobre el apoyo a la continuidad de los procesos de memoria, verdad y justicia en nuestro país, precisando que el mismo alcanza su nivel máximo en el electorado del Frente de Izquierda-FdeI- (97%), siendo mayoritaria entre los electores del Unión por la Patria -UxP- (95%) y de juntos por el Cambio-JxC- (90%), con valores más bajos pero todavía claramente dominantes entre los votantes de La libertad Avanza -LLA- (80%). ⁷

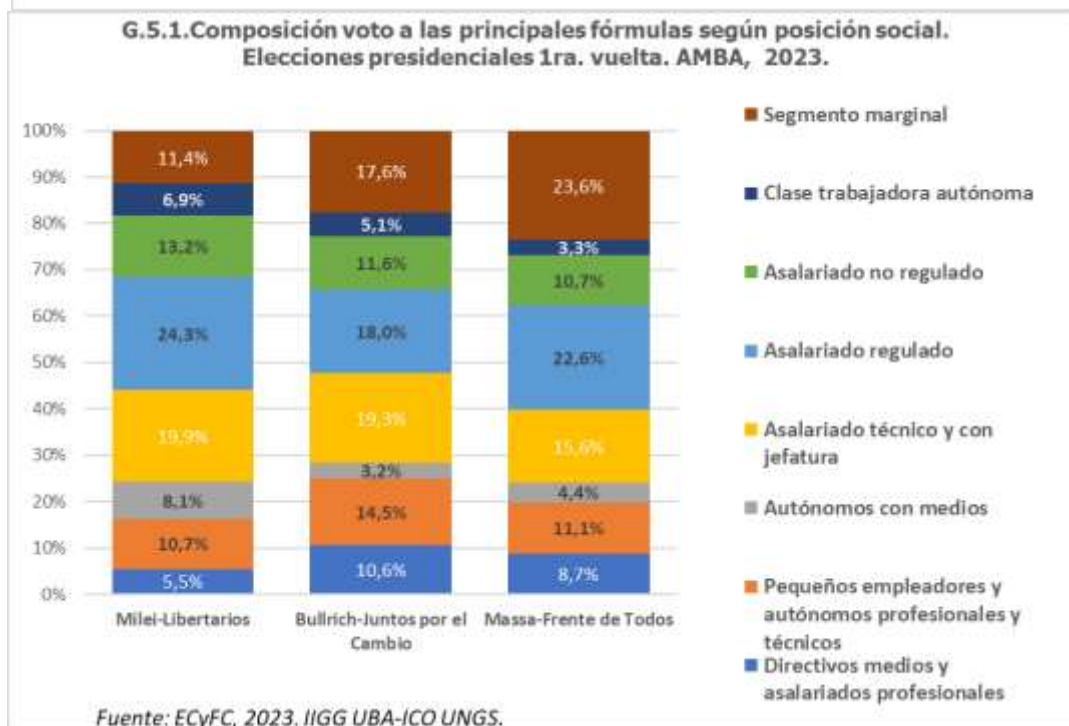
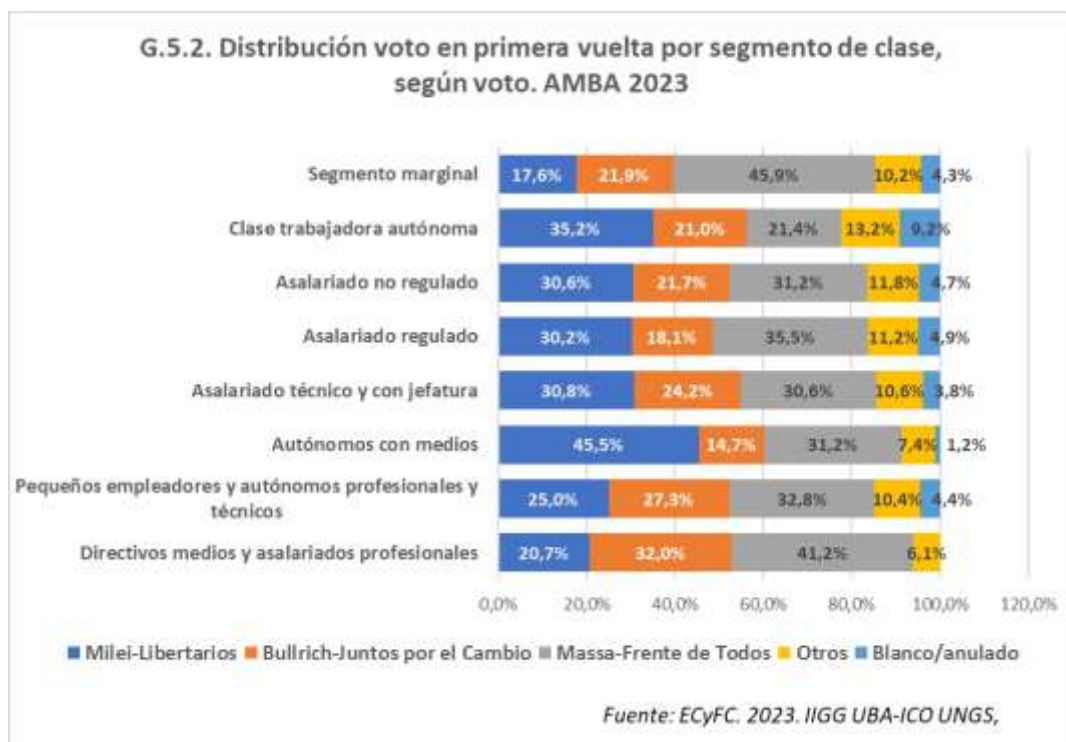
Las bases sociales de la disputa electoral

Los soportes más importantes de las tres principales fuerzas partidarias participantes en la primera vuelta, expresan también los procesos de diferenciación social al interior de la clase trabajadora y los segmentos subordinados en general.

Como se observa en el gráfico 5.1., Juntos por el Cambio, recluta sus electores a lo largo de toda la estructura, pero es una fuerza partidaria cuyo núcleo principal se encuentra en la pequeña burguesía y las posiciones contradictorias asalariadas (profesionales y directores y supervisores), aunque dentro de estas últimas, especialmente los cuadros con inserción en la empresa privada.

Unión por la Patria mantiene su núcleo más sólido en los sectores más desaventajados de la estructura social: las trabajadoras en casas particulares, los changarines, quienes trabajan en Programas de Empleo y las y los trabajadores desocupados. Si bien la incorporación de los segmentos más desaventajados es un rasgo histórico del peronismo, este señalamiento es consistente con lo recuperado en los antecedentes, cuando advierten la manera en que el partido reforzó sus bases de apoyo en estas fracciones respondiendo, a partir de los años noventa, a los cambios radicales experimentados entonces por la estructura social.

⁷ El subrayado en la lectura de estos últimos guarismos en principio discordantes responde también a la centralidad que, siguiendo la bibliografía especializada, estas dimensiones tienen en la configuración político de la derecha mileista. En efecto, según señalan Morresi y Vicente (2023), por un lado, el antifeminismo y la defensa de los responsables de crímenes de lesa humanidad, suponen un antiizquierdismo cultural extremo que posiciona a la LLA a la derecha del PRO y JXC, a la vez que supone una convergencia entre dos tradiciones de derecha diferentes, la liberal conservadora y la nacionalista reaccionaria.



El mileísmo entra en sintonía con configuraciones ideológicas significativas entre la pequeña burguesía pobre y el segmento autónomo de la clase trabajadora, que analizamos. En términos de la subjetividad de estos sectores, distintos autores que abordan este nivel de análisis (Ipar, 2018; Seman, 2023; Wegelin, 2024), señalaron que las derechas argentinas lograron interpretar e interpelar a estas fracciones. En un primer movimiento, la celebración de la figura del emprendedor, que enlazó una significación positiva en línea con un “individualismo popular” (Martuccelli, 2019) presente en los sectores populares. En un segundo movimiento, la captura de su fragilidad social. Esto es, un proceso de politización tanto de la diferenciación

social que señalamos en el primer capítulo como de los disímiles niveles de protección social al interior de los sectores populares. La captura de esta disconformidad política se dirigió hacia la “casta”, es decir la supuesta élite que se beneficiaría de un Estado cuyas políticas les son esquivas, pero también hacia el más débil, en forma de estigmatización, desolidarización y punitivismo.

Se suma tendencialmente aquí otro segmento, cuya configuración ideológica hipotetizamos en el apartado anterior, sindicados como los menos desfavorecidos de la clase trabajadora, esto es, los asalariados técnicos y con cargo de jefatura, y dentro de esta capa, nuevamente de manera más intensa, aquellos con inserción en la empresa privada.

La alianza antimileista logra incorporar con claridad al asalariado profesional estatal y, en mucha menor medida, al asalariado técnico de los servicios públicos. En efecto, entre los asalariados profesionales estatales, el voto a Massa alcanza el 63% en esta muestra.

Finalmente, los segmentos de la clase trabajadora regulada constituyen un territorio social más disputado. Los polos de esta disputa se definen mejor si consideramos el distrito electoral. En la CABA, UxP tiene apoyo sustantivo entre la clase trabajadora formal y polariza con Juntos por el Cambio, aunque con un caudal de votos notablemente mayor. En el Conurbano, polariza con LLA, en ajustada paridad.

Sometimos estas observaciones descriptivas a un análisis de regresión logística binomial, en el que consideramos las oportunidades relativas de votar a Javier Milei versus no votarlo (agrupando allí el resto de las opciones electorales).

En el Cuadro 2 se observan los resultados de la regresión. El modelo presenta el esquema de clases e incluye una serie de variables de control que resultaron relevantes en el análisis descriptivo de las orientaciones: el ámbito de inserción laboral (privado o público), el distrito (CABA o Conurbano), el género y los grupos de edad. El análisis de las posiciones de clase ofrece evidencia significativa para comprender las orientaciones de dos grupos en particular: el segmento marginalizado y los cuentapropia con medios. Tomando como categoría de referencia a los asalariados regulados, observamos que las oportunidades de votar a Milei se reducen un 44% entre los sectores más desaventajados de la clase trabajadora, representando el grupo más refractario a la oferta libertaria; es también, como ya hemos visto, la categoría en la que el candidato peronista exhibe mayores fortalezas. En un sentido contrario, pertenecer al segmento de los cuentapropias con medios aumenta las posibilidades de votar a Milei casi en un 60% respecto de los asalariados registrados.

Cuadro 2. Regresión logística: chances relativas de factores que inciden en el voto a Milei en primera vuelta electoral.

Población de 20 a 64 años, AMBA 2023.

Posición de clase (Ref: asalariados regulado)	Sig. Exp(B)	
directivos medios, jefes profesionales y asalariados profesionales	0,712	0,879
pequeños empleadores y autónomos calificados	0,794	0,93
cuentapropia con medios y/u oficio	0,079*	1,596
jefes no profesionales y asalariados técnicos	0,477	1,185
asalariados no registrados	0,977	0,993
segmento marginal y abiertamente excedente	0,03**	0,565
Sector Privado* (Ref: Público)	0,025**	1,738
DISTRITO Conurbano* (Ref: CABA)	0,001***	2,039
Género Varón* (Ref: Mujer)	0,045**	1,371
Edad (Ref: 40-49)		
20-29	0,001***	1,974
30-39	0,012**	1,69
50-59	0,053*	0,6
60-64	0,347	0,689
R cuadrado de Nagelkerke	0,108	

*** p < 0.01; ** p < 0.05; * p < 0.1

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta sobre Clase y Formación de clase. IIGG UBA-ICO UNGS.

Por su parte, el ámbito de actividad es un predictor relevante de la preferencia electoral, ya que desempeñarse en la actividad privada aumenta un 74% las posibilidades de optar por Milei respecto de quienes se insertan en el sector público. En términos espaciales, las probabilidades de votar al libertario se duplican en territorio conurbano en comparación con la Ciudad de Buenos Aires.

Respecto de las variables género y edad, los resultados están en línea con aquello que numerosas investigaciones sobre el fenómeno libertario han reportado: su importante gravitación entre los varones jóvenes. Por un lado, las oportunidades de votar a Milei entre los varones es un 37% mayor que entre las mujeres. Si observamos los grupos de edad, tomando como referencia el segmento "40-49", los jóvenes de entre 20 a 29 duplican las probabilidades de votar a Milei, mientras que en el grupo de 30 a 39, hay casi un 70% más de chances de optar por ese candidato. Por el contrario, entre los segmentos de mayor edad caen las posibilidades de voto a Milei. La adhesión de los jóvenes abre interrogantes a futuro, en la medida en que, como analizamos en el punto anterior, los mismos presentan configuraciones más abiertas, con orientaciones divergentes en las distintas dimensiones consideradas.

En aras de calibrar (al menos embrionariamente) la novedad que trae este giro electoral, exploramos en qué medida la mencionada disputa del voto de las clases populares debe ser leída como un drenaje de votos peronistas y su traslado al mileismo emergente.

Al respecto, el voto del FdeT del 2019, mantiene el más alto nivel de fidelidad, reteniendo el 75,1% en la fórmula propuesta por la UxP. En menor medida, lo hace el FdeI, reteniendo poco más de la mitad de sus votos presidenciales (C.3.1). Justamente, UxP no logra ampliar su electorado más allá de cosechar gran parte de estos votantes de izquierda que entendemos prefieren correrse al centro y asegurar la elección en primera vuelta (C.3.2.). Por su parte, los votos de LLA provienen en un 67,6% de JxC, 17,2% del Frente de Todos y un 7,3% que no había votado por otro candidato. El mileismo recluta entonces fundamentalmente en la

radicalización de la derecha (radicalización que data ya del segundo momento del macrismo gobernante) y en mucha menor medida, en la frustración del último voto peronista.

De estos flujos se deduce que, considerando el AMBA, la derrota del FdeT se dio en tres tiempos. El primero, con el desgranamiento de votos del Frente para la Victoria en el 2015, luego la radicalización de la derecha que data del segundo bienio del macrismo gobernante y, finalmente, su corrimiento electoral hacia LLA.

C.3.1. Trayectoria electoral: Distribución del voto a presidente 2019 según destino del voto en la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2023. Total AMBA.

Voto Primera Vuelta Elecciones Presidenciales 2023							
Voto 2019	Bullrich- Juntos por el Cambio	Milei- Libertarios	Massa- Frente de Todos	Schiaretti - Hacemos por nuestro país	Bregman- Frente de Izquierda	En blanco/anulado/ no votó	Total
Macri -Juntos por el Cambio	44,9%	47,8%	2,3%	2,0%	0,8%	0,9%	100,0%
Fernández -Unión Ciudadana del Caño - Frente de Izquierda	5,0%	11,2%	73,5%	5,1%	1,7%	1,9%	100,0%
Lavagna - Consenso Federal	5,6%	6,1%	25,9%	2,4%	56,1%	3,8%	100,0%
Ninguno	30,6%	31,3%	7,7%	14,8%	2,1%	12,1%	100,0%
Total	1,7%	45,8%	2,8%	4,2%		41,3%	100,0%
	21,2%	27,1%	33,9%	4,3%	5,5%	4,1%	100,0%

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta sobre Clase y Formación de clase. IIGG UBA-ICO UNGS.

C.3.2.Reclutamiento electoral: distribución del voto a presidente en la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2023, según origen voto presidencial 2019. Total AMBA.

Voto Primera Vuelta Elecciones Presidenciales 2023							
Voto 2019	Milei- Libertarios	Bullrich- Juntos por el Cambio	Massa- Frente de Todos	Bregman- Frente de Izquierda	Schiaretti - Hacemos por nuestro país	En blanco/anulado/ no votó	Total
Macri -Juntos por el Cambio	67,6%	81,0%	2,6%	5,9%	19,6	8,4	39,3
Fernández -Unión Ciudadana del Caño - Frente de Izquierda	17,2%	9,9%	90,0%	13,0%	53,6	19,0	42,7
Lavagna - Consenso Federal	1,7%	2,0%	5,9%	79,3%	4,7	6,8	7,9
Ninguno	5,4%	6,8%	1,1%	1,8%	17,5	14,3	4,8
Total	7,3%	0,3%	0,4%		4,6	45,0	4,4
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta sobre Clase y Formación de clase. IIGG UBA-ICO UNGS.

Racconto y consideraciones finales

En este trabajo articulamos el estudio de los cambios de mediano plazo a nivel de las condiciones de estructuración de las clases en el AMBA con el análisis de las orientaciones político-ideológicas predominantes en los distintos segmentos. Buscamos con ello contribuir al conocimiento de las identidades de estratos y clases en la región y a la comprensión de las bases sociales de fenómenos políticos actuales, en el marco de la derechización global.

Repusimos en primer lugar, evidencia empírica que describe una doble crisis en la estructura social a nivel del AMBA, prepandemia y pandemia, y avanza en el análisis de indicadores centrales de la postpandemia, particularmente hasta el momento de la compulsa electoral.

En relación a ambas crisis, pusimos el foco en los procesos de diferenciación social. Referimos la contracción del segmento formal de la clase trabajadora y la expansión de los segmentos autónomos de bajas calificaciones, precarizados y/o abiertamente excedentes, durante la gestión de Juntos por el Cambio. Para el contexto de pandemia Covid 19, seguimos el impacto relativo al que quedaron expuestas estas últimas posiciones, coyuntura que subrayó fuertes desigualdades preexistentes.

En la bibliografía local, la reacción de estos segmentos a las severas limitaciones de la intervención estatal aparece como uno de los elementos que contribuye a explicar la adhesión a opciones de derecha. En nuestro ejercicio, hicimos a su vez una aproximación muy parcial que muestra, a partir de fuentes propias, que dicha intervención se orientó y alcanzó a los distintos segmentos de la clase trabajadora y de las fracciones más desaventajadas de la pequeña burguesía, aunque lo hizo con distinta intensidad y con instrumentos de muy disímil cobertura y potencia. Señalamos también que, en todo caso, una limitación clara de la intervención estatal ha sido la discontinuidad de tales instrumentos, que pesquizamos parcialmente aquí, y más en general, el rápido desplazamiento de la iniciativa de un piso de protección para el importante segmento de trabajadores y trabajadoras precarios y excedentes en edades activas en condiciones de caída de los ingresos, que había logrado instalarse en agenda durante el Covid 19.

Por otro lado, en relación a la post pandemia, parece asumirse crecientemente en el debate público, que el ciclo que se cierra lo hace con una crisis de incorporación de fuerza del trabajo. La expansión relativa del segmento formal de la clase trabajadora, que se mantiene hasta mediados del 2023 y se ubica por encima de los niveles del 2015, sumada al crecimiento acelerado del asalariado no registrado, son indicadores de otro tipo de proceso. Antes bien, el rasgo definitorio del período parece ser la distribución fuertemente regresiva del ingreso, aún en un contexto de recuperación relativa de la ocupación durante la pospandemia.

El estudio abona, a nivel de las trayectorias electorales metropolitanas, las observaciones de la bibliografía precedente en el sentido que la adhesión mileista proviene mayormente de electores previos de otras opciones de derecha y centro derecha. Esto matiza, en parte, el carácter de total novedad de las orientaciones mismas. Por un lado, supone que, hasta el momento y al menos en términos electorales, se trataría efectivamente en mayor medida de un corrimiento a la derecha de las derechas, deslizamiento que la bibliografía consigna ya hacia mediados del mandato de JXC. Por otro, confirma la presencia no coyuntural de las derechas en el mapa político nacional y local y su complejización. En todo caso, contribuye a dimensionar, también, la ventana de oportunidad que significaba el interregno que se cerró, en el marco de una tendencia de mediano plazo hacia el avance de la derecha global y local.

En términos de las orientaciones predominantes de las clases subalternas del AMBA, destacamos un nivel medio alto de apoyo general a las políticas tributarias que gravan la riqueza y menor a las retenciones, un nivel medio bajo de antagonismo social y un alto nivel de punitivismo y de desolidarización con los segmentos más desaventajados. Junto a estas orientaciones que se vertebran en función del alineamiento frente a las desigualdades de clase, pesquizamos la adhesión medio alta a medidas que involucran tópicos feministas y muy altas en favor de los derechos de LGTBQ+ y a la continuidad de los procesos de memoria, verdad y justicia, todas dimensiones centrales en la agenda cultural del progresismo y las izquierdas. Estas últimas orientaciones dominantes, se localizan aún entre el electorado mileista (con un sesgo ciertamente más moderado) y se enfatizan entre los jóvenes. A nuestro entender, involucran indicios en contrario de interpretaciones previas que descartan la posibilidad de una interiorización de estos valores por parte de sectores importantes de la ciudadanía.

Según nuestras metas, localizamos sesgos en la presencia relativa de distintos perfiles ideológicos en clases y segmentos, y los vinculamos a su experiencia social.

Un perfil bien definido, que se caracteriza por su intenso punitivismo, bajísima solidaridad y bajísimo antagonismo social, con presencia mayor entre la pequeña burguesía pobre pero también en la clase trabajadora autónoma, segmentos que se diferencian entre sí apenas por una muy incipiente capitalización. Estas observaciones resultan en sintonía con las realizadas por investigaciones antecedentes. Entran asimismo en correspondencia con la experiencia individualizada de estos segmentos en el proceso de trabajo, sin participación en procesos de explotación directa pero tampoco de cooperación⁸ y con alto nivel de riesgo (y bajo nivel de protección) frente a los vaivenes del ciclo económico y las crisis del período.

Localizamos otros dos perfiles, que tienen saliencia en distintos segmentos de la clase trabajadora, diferenciación a su vez productiva en términos de sus orientaciones políticas.

Por un lado, un perfil que caracteriza su estrato superior, relativamente moderado en términos de su antagonismo de clase, pero contencioso en términos específicamente corporativos, es decir, con fuertes demandas económicas, pero sin incorporar a las mismas a otros segmentos relegados de su misma clase social. Se trata esta de una hipótesis interpretativa a partir de la articulación de pautas cuantitativas y la bibliografía clásica precedente, que vale prolongar en estudios en profundidad.

Por otro, el segmento más desaventajado de la misma clase, con orientaciones en sintonía con su posición. Esto es, relativamente más antagonista, con mayor adhesión a las políticas redistributivas y con bajos niveles de punitivismo. En este caso, la presencia más intensa de una orientación más refractaria a la ideología neoliberal y proclive a la intervención distribucionista, corrobora hallazgos de trabajos antecedentes.

El estudio de las bases de la confluencia electoral desde el análisis de clases, dibuja la estructura social como territorio de confrontación, con segmentos donde las distintas fuerzas electorales parecen hacer baza y otros fuertemente disputados.

En el AMBA, las dos variantes de la derecha local atraviesan la estructura, pero se distribuyen sus segmentos. Confirmando parte de los antecedentes, identificamos que la LLA avanza en la pequeña burguesía pobre y el segmento autónomo de la clase trabajadora, pero encontramos que la pequeña burguesía propiamente dicha es antes bien un asiento socialmente afín a JXC. En la región, la segunda vuelta significa entonces, la alianza de dos derechas socialmente complementarias.

Por su parte, la alianza peronista retiene el segmento más precarizado de la clase trabajadora, (trabajadoras en casas particulares, changarines, desocupados de baja calificación), esto es, su bastión principal post transformaciones neoliberales. El resultado remarca la pertinencia del análisis de clase y consecuente discriminación de las distintas posiciones que aparecen englobadas usualmente en la bibliografía como informales, en la medida en que no solamente tienen dinámicas socioeconómicas distintas sino también distintos perfiles político-ideológicos.

Como señalamos, la alianza peronista logra incorporar con claridad al asalariado profesional estatal y, en mucha menor medida, al asalariado técnico de los servicios públicos. En esta

⁸ Vale retener los bajos niveles de antagonismo respecto del capital identificados en estos perfiles, para una profundización ulterior, en la medida que resulta un indicador que permite discriminar estas configuraciones de las características de otras derechas, enroladas en un populismo de la protesta, de contenido plebeyo y antielitista (Reggiani, op cit).

disputa entre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio por los segmentos intermedios, se devela la distinción público/ privado, no como simples inserciones laborales sino como clivaje de diferenciación social interna de estas posiciones y de construcción de su divergencia ideológica y polarización política.

Finalmente, las fracciones o segmentos de la clase trabajadora regulada, son el territorio social más disputado, disputa en la que el peronismo polariza con distinto adversario según el distrito electoral.

Como identifica la bibliografía sobre las nuevas derechas, hay novedades relevantes en las configuraciones ideológicas contemporáneas. También, operadores, sesgos y retazos de los posicionamientos estudiados, fueron reportados por investigaciones precedentes sobre este mismo territorio, en períodos en los que estas alternativas radicales no estaban en carpeta. En todo caso, el proceso electoral muestra el resultado de una nueva costura, enhebrada por las interpelaciones políticas que nos ocupan. Volviendo a los antecedentes y al nudo de nuestro interés, enfatizamos que este avance no operó sino sobre el fracaso en la disputa por dotar al proceso de recuperación postpandemia, de una direccionalidad que incorporase, al menos, las aspiraciones de mejora de bienestar relativo de las clases subalternas. El mismo señala, también, el debilitamiento de ese rasgo histórico del peronismo que fue articular la amplia y cambiante heterogeneidad de la experiencia social de la clase trabajadora y de los sectores populares, de la que aquí intentamos dar cuenta.

Bibliografía

Adamovsky, E. (2009). Historia de la clase media argentina: apogeo y decadencia de una ilusión, 1919-2003. Buenos Aires: Planeta.

Adorno, T. (1965). Estudios sobre la Personalidad Autoritaria, Buenos Aires| Proyección.

Balsa, J. (2024). ¿Por qué ganó Milei?: Disputas por la hegemonía y la ideología en Argentina. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Benza G., Dalle P. y Maceira V. (2023). “Estructura de clases de Argentina (2015-2021): efectos de la doble crisis prepandemia y pandemia en el empleo, los ingresos y los gastos de los hogares”. En Dalle, P. (comp.) Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia (Tomo 1), Buenos Aires: Imago Mundi-IIGG.

Bobbio, N. (2014). Derecha e izquierda. Taurus.

Burris, V. (1995). The discovery of the new middle classes. In The new middle classes: Life-styles, status claims and political orientations (pp. 15-54). London: Palgrave Macmillan UK.

Carchedi, G. (1977). *On the Economic Identification of Social Classes*. Londres. Routledge & Kegan Paul.

Cassini, L; García Zanotti, G; Schorr M. (2019) El poder económico durante el gobierno de Cambiemos., en AA.VV.: La economía política de Cambiemos. Ensayos

Danani C. y S. Hintze (2010). Protecciones y desprotecciones: la seguridad social en la Argentina 1990-2010. Los Polvorines. Universidad Nacional de General Sarmiento.

Elbert, R. G., & Morales, F. S. (2022). “Clase social y evaluación de políticas públicas”, en Dalle, P. (comp.) Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia (Tomo 1), Buenos Aires: Imago Mundi-IIGG.

Germani, G. (1962). Política y sociedad en una época de transición. De la sociedad tradicional a la sociedad de masas. Buenos Aires: Paidós

García Linera, A. (2024) La democracia como agravio. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO; Facultad de Ciencias Sociales.

Gervasoni, C. (1998). Del distribucionismo al neoliberalismo: los cambios en la coalición electoral peronista durante el gobierno de Menem. Reunión anual Latin American Studies Association, Chicago.

Goldthorpe, J. et al. (1968) The Affluent Worker: Industrial Attitudes and Behaviour. Cambridge Studies in Sociology

Grassi E. y Hintze S. (2018) Tramas de la desigualdad. Las políticas y el bienestar en disputa. Buenos Aires: Prometeo.

Hobsbawm, E. J. (1998). Historia del siglo XX. Buenos Aires: Crítica.

----- (1973). Lenin y la tesis de la aristocracia obrera. En Revolucionarios. Ensayos contemporáneos. Barcelona: Crítica

Ipar, E. (2018). Neoliberalismo y Neo-autoritarismo. Política y Sociedad, 55(3), 825-849.

Jacobs, A. M., & Kayser, M. A. (2023). Downward Mobility and Far-Right Party Support: A Broad Assessment. Preprint on SocArXivPapers, available on <https://doi.org/10.31235/osf.io/yunw2>.

Jorrat, J. R., & Riveiro, M. (2011). Exploraciones sobre el voto kirchnerista: 2003-2007. En X Congreso Nacional de Ciencia Política. SAAP y Universidad Católica de Córdoba.

Levitsky, S., & Wolfson, L. (2004). Del sindicalismo al clientelismo: la transformación de los vínculos partido-sindicatos en el peronismo, 1983-1999. Desarrollo Económico, 3-32.

Lupu, N., & Stokes, S. C. (2009). The social bases of political parties in Argentina, 1912–2003. Latin American Research Review, 44(1), 58-87.

Mainwaring, Scott, and Timothy R. Scully, eds.(1995) Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America. Stanford, CA: Stanford University Press

Maceira, V. (2023). Doble crisis y reactivación económica en Argentina (2016-2022): transiciones socio-ocupacionales y diferenciación social de las y los trabajadores. Lavboratorio, (33), 37-62.

----- (2021). Cambios en la estructura socio-ocupacional en Argentina en el período 2016-2020: entre la restauración neoconservadora y la crisis socio-sanitaria. *Realidad Económica*, 51(344).

----- (2006) Heterogeneidad social de los trabajadores e identidad peronista en el conurbano bonaerense. *Revista Estudios Sociales* Número 31. Universidad del Litoral, Santa Fe.

Maceira V. y Beccaria A. (2021) El Conurbano en el segundo año de la pandemia. Cuarto Informe en base a relevamiento colaborativo a referentes de los barrios populares. Instituto del Conurbano-UNGS

Maceira, V. y Feldman, S. (2019). Entre la recomposición de la clase obrera formal y la reorientación neoconservadora. *Revista Estudios del Trabajo*. ASET, (58).

Martuccelli, D. (2019). Variantes del individualismo. *Estudios sociológicos*, 37(109), 7-37.

Mora y Araujo, M. (1991). Ensayo y error: la nueva clase política que exige el ciudadano argentino. Buenos Aires: Planeta.

Mora y Araujo, M., & Llorente, I. (Eds.). (1980). El voto peronista. Ed. Sudamericana.

Morresi, S. D., y Vicente, M. A. (2023). “Rayos en cielo encapotado: la nueva derecha como una constante irregular en la Argentina.” En Semán, P. (Coord.). *Está entre nosotros: ¿De dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir?*. Siglo XXI Editores.

Mudde, C. (2021). *La ultraderecha hoy*. Barcelona: Paidós.

Murmis, M., y Portantiero, J. C. (2019). *Estudios sobre los orígenes del peronismo*. Siglo XXI editores.

Mutz, D. C. (2018). Status threat, not economic hardship, explains the 2016 presidential vote. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(19), E4330-E4339.

O'Donnell, G. (1977). Estado y alianzas en la Argentina, 1956-1976. *Desarrollo económico*, 16(64).

Paugam, S. (2007). *Las formas elementales de la pobreza*. Madrid: Alianza Editorial.

Palomino H. (2007). La instalación de un nuevo régimen de empleo en Argentina de la precarización a la regulación. *Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo (RELET)*, Año 12, N°. 19, 2007.

Palomino H. y Dalle P. (2016). Movilización, cambios en la estructura de clases y convergencia de ingresos en Argentina entre 2003 y 2013. En *Desarrollo Económico*; Buenos Aires; vol. 56.

Piva, A. (2023) Más allá del 19 de noviembre. En *Revista Jacobin*. Disponible en <https://jacobinlat.com/2023/11/mas-alla-del-19-de-noviembre/>

Reggiani, A. (2017). Persistencia y mutaciones de la extrema derecha francesa. En Nueva Sociedad, (270).

Schorr M. (2012) ¿Nuevo modelo o «viento de cola»? Una caracterización en clave comparativa; En Nueva Sociedad, 237.

Semán, P. (2023). Está entre nosotros: ¿ De dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir?. Siglo XXI Editores.

Semán, P. y Welschinger, N. (2023). Juventudes mejoristas. La crítica al Estado, la política y la economía en la generación pandémica. Cuadernos de antropología social, (58), 29-52.

Torre, J. C. (1989). Interpretando (una vez más) los orígenes del peronismo. Desarrollo Económico, 28.

----- (2003). Los huérfanos de la política de partidos Sobre los alcances y la naturaleza de la crisis de representación partidaria. Desarrollo económico, Vol. 42, No. 168.

----- (2017). Los huérfanos de la política de partidos *revisited*. Revista SAAP, 11(2), 10-30.

Valente, R. y Borba, J. (2023). Tropical Trump, or a very Brazilian tale? Social class resentment as a moderating factor between anti-PT sentiment and the vote for Jair Bolsonaro in 2018. Opinião pública, 29(1), 24-41.

Vommaro, G. (2019). Estado y alianzas..., cuarenta años después. Elementos para pensar el giro a la derecha en Argentina. Revista de Ciencias Sociales, 32(44), 43-60.

Wegelin Lucía (2024). Presentación al IV Seminario Latinoamericano sobre Desigualdad y Políticas Socio-Laborales. IIGG-UBA/PS-ICO-UNGS.

Wright, Erik Olin (1997) Class counts: Comparative studies in class analysis, Cambridge: University Press.

SEMBLANZA

Verónica Maceira

Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, Magíster en Ciencias Políticas (IDAES UNSAM) y Licenciada en Sociología (Facultad de Ciencias Sociales, UBA). Investigadora-docente Titular de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en el Instituto del Conurbano, y Profesora de Doctorado. Facultad de Ciencias Sociales (UBA).

Santiago Nardin

Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, Magíster en Estudios Urbanos (UNGS) y Licenciado en Sociología (Facultad de Ciencias Sociales, UBA). Investigador Docente Jefe de Trabajos Prácticos de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en el Instituto del Conurbano, y docente en la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).

Organismos colaboradores: la investigación fue financiada por la Agencia I+D+i Mincyt en su convocatoria PICT 2021 UNGS.

Disciplina: Sociología.

Subdisciplinas: análisis de clases: sociología política.

Tipo de método: abordaje cuantitativo en base a encuesta probabilística propia.



HETEROGENEIDAD E INCONGRUENCIA ESTRUCTURAL EN LAS CLASES SOCIALES CHILENAS. UNA CONSIDERACIÓN SOBRE LA PERTINENCIA DE LAS CLASIFICACIONES

Vicente Espinoza

profespinoza2010@gmail.com

Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. COES. Chile

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2943-4430>

Resumen

El artículo presenta una discusión crítica sobre la pertinencia de la clasificación propuesta por Erikson, Goldthorpe y Portocarrero (EGP), en el marco de los estudios latinoamericanos sobre clases sociales y movilidad social. En su desarrollo conceptual, el artículo presenta, primero, un encuadre general de los análisis de clase; sigue con una revisión sintética de las discusiones sobre clases sociales y movilidad social en América Latina, y considera tres clasificaciones chilenas y su congruencia con el esquema EGP, desarrollando las definiciones del sector informal en términos productivos y contractuales. En términos empíricos revisa la consistencia de las categorías de la clasificación en términos de su homogeneidad interna, respecto de la posición de mercado, incluyendo la informalidad, utilizando datos de la encuesta panel Estudio Longitudinal de la Sociedad Chilena (ELSOC). Los resultados del análisis permiten afirmar que una conceptualización basada en relaciones laborales como el esquema EGP resulta consistente con el concepto de clase social característico de la región. La revisión de la consistencia del esquema muestra, sin embargo, la necesidad de resolver los criterios de clasificación en clases de servicio y de la condición laboral de supervisor. En cuanto al sector informal, el artículo propone mirarlo desde el punto de vista del empleo.

Palabras clave: Clases sociales, EGP, Movilidad social, Chile, Empleo informal

HETEROGENEITY AND STRUCTURAL INCONGRUENCE IN CHILEAN SOCIAL

CLASSES. A CONSIDERATION OF THE RELEVANCE OF THE CLASSIFICATIONS

Abstract

The article presents a critical discussion on the relevance of the classification proposed by Erikson, Goldthorpe and Portocarrero (EGP), within the framework of Latin American studies on social classes and social mobility. In its conceptual development, the article presents, first, a general framework of class analysis; it continues with a synthetic review of the discussions on social classes and social mobility in Latin America, and considers three Chilean classifications and their congruence with the EGP scheme, developing the definitions of the informal sector in productive and contractual terms. In empirical terms, it reviews the consistency of the classification categories in terms of their internal homogeneity, with respect to market position, including informality, using data from the panel survey Longitudinal Study of Chilean Society (ELSOC). The results of the analysis allow us to affirm that a conceptualization based on labor relations such as the EGP scheme is consistent with the concept of social class characteristic of the region. The review of the consistency of the scheme shows, however, the need to resolve the criteria for classification into classes of service and the supervisor's employment status. As for the informal sector, the article proposes to look at it from the point of view of employment.

Keywords: Social classes, EGP, Social mobility, Chile, Informal employment

HETEROGENEIDADE E INCONGRUÊNCIA ESTRUTURAL NAS CLASSES SOCIAIS CHILENAS. UMA CONSIDERAÇÃO DA RELEVÂNCIA DAS CLASSIFICAÇÕES

Resumo

O artigo apresenta uma discussão crítica sobre a relevância da classificação proposta por Erikson, Goldthorpe e Portocarrero (EGP), no âmbito dos estudos latino-americanos sobre classes sociais e mobilidade social. Em seu desenvolvimento conceitual, o artigo apresenta, em primeiro lugar, um quadro geral de análise de classe; continua com uma revisão sintética das discussões sobre classes sociais e mobilidade social na América Latina, e considera três classificações chilenas e sua congruência com o esquema EGP, desenvolvendo as definições do setor informal em termos produtivos e contratuais. Em termos empíricos, revisa a consistência das categorias de classificação em termos de sua homogeneidade interna, no que diz respeito à posição de mercado, incluindo a informalidade, utilizando dados da pesquisa de painel Estudo Longitudinal da Sociedade Chilena (ELSOC). Os resultados da análise permitem afirmar que uma conceituação baseada nas relações de trabalho, como o esquema EGP, é consistente com o conceito de classe social característico da região. A revisão da consistência do esquema mostra, no entanto, a necessidade de resolver os critérios de classificação em classes de serviço e o status de emprego do supervisor. Quanto ao setor informal, o artigo propõe analisá-lo do ponto de vista do emprego.

Palavras-chave: Classes sociais, EGP, Mobilidade social, Chile, Emprego informal

INTRODUCCIÓN

Las clases sociales pueden definirse en un sentido amplio como un conjunto de posiciones

estructurales que expresan la desigualdad de los integrantes de una sociedad en el acceso a los recursos económicos y que inciden en sus condiciones de vida y comportamientos. Los esquemas que operacionalizan esta aproximación deben ser capaces de mostrar cómo una posición económica se convierte en un elemento significativo de la vida social, en tanto principio que organiza las desigualdades. Un esquema de clases sociales, por lo tanto, debe unir la presentación descriptiva de la distribución de los recursos valorados en una sociedad con los principios teóricos que explican la desigualdad social. Un ejemplo de presentaciones descriptivas que no guardan relación con categorías sociales significativas lo constituye la utilización de los niveles de ingreso individual o de los hogares para definir clase media o pobreza. Esta forma de identificarlos no garantiza que los individuos que comprende constituyan, en efecto, un grupo, más allá de compartir una cualidad común, en este caso, pertenecer a un rango de ingreso.

La pregunta general que responde el artículo es ¿hasta qué punto resulta conveniente utilizar una esquema de clases elaborado en países cuya realidad dista de asemejarse a la latinoamericana? Responder a esta pregunta requiere despejar varios aspectos necesarios para darle sustancia sociológica antes que convertirla en una pura cuestión operativa. La primera discusión se refiere a mostrar la vigencia de las clases sociales en tanto principio articulador de la estructura social. En lo más propiamente latinoamericano, conviene revisar los debates y clasificaciones que se propusieron y utilizaron anteriormente. Si bien la discusión y los datos están concentrados Chile, se aportan antecedentes de autores argentinos y brasileños que fueron referentes para las elaboraciones chilenas. El tercer aspecto se refiere la presentación de la escala propuesta por Erikson, Godthorpe y Portocarrero (EGP) y su aplicación en América Latina. Un aspecto que se discute es hasta qué punto las características del sector informal en América Latina debieran llevar a reformular la clasificación EGP. Finalmente, sin buscar una validación se realizan pruebas de consistencia de las categorías EGP, en términos de su homogeneidad interna y respecto de la posición de mercado, incluyendo la informalidad.

Escapa a los objetivos del artículo realizar una revisión exhaustiva de los debates sobre clases sociales, así como de los esquemas propuestos. La discusión será necesariamente esquemática y ciertamente injusta con la obra de los autores mencionados, que es mucho más amplia, y sobre todo con otros participantes en el debate, que no serán mencionados. El criterio de selección tiene que ver la pertinencia para el estudio comparativo de la movilidad social que requiere clasificaciones armonizadas. En este sentido, el artículo no es una discusión acerca de la estructura de clases sociales en América Latina y el Caribe, si bien tiene que abordar necesariamente este aspecto para atender a la validez teórica de las clasificaciones propuestas. Esta es una discusión que cobra sentido, sobre todo, en la sociología de la movilidad social.

El objetivo del artículo consiste discutir críticamente la pertinencia de la clasificación EGP en el marco del debate latinoamericano sobre clases sociales y movilidad social. Después de la introducción y la metodología, se presentan de manera sucinta las grandes tradiciones europeas en el análisis de clases sociales. A continuación, como antecedente, se presenta un debate latinoamericano de los 1960s sobre sobre clases sociales y movilidad social, que encuadra el caso chileno. La sección que sigue examina tres clasificaciones de clase propuestas para Chile, realizando una apreciación de su pertinencia para el estudio de la movilidad. Las secciones siguientes se dedican a mostrar las características del esquema EGP, su reformulación en la Escala Socioeconómica Comparativa Europea (ESeC) y su aplicación en América Latina. La sección siguiente discute la principal observación a la aplicación de la escala EGP en América Latina, como es la presencia del sector informal. Finalmente, se presentan pruebas de

consistencia que, sin buscar una validación de la escala, revisan los supuestos de su construcción para derivar algunas recomendaciones en su aplicación y uso.

Datos y Metodología

El artículo utiliza datos del Estudio Longitudinal Social de Chile (ELSOC), del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social (COES). La encuesta panel comprende siete olas, entre 2016 y 2023. ELSOC es una encuesta representativa de la población nacional urbana de entre 18 y 75 años, que analiza la estabilidad y cambio de las creencias, actitudes y percepciones que tienen los chilenos y chilenas respecto de la convivencia y del conflicto, la cohesión y una amplia gama de aspectos políticos y sociales a lo largo del tiempo. Este estudio sigue la evolución de alrededor de 4.500 chilenos y chilenas en el tiempo. Los temas de estudio y su aspecto longitudinal convierten a la encuesta ELSOC en un recurso único en Chile y América Latina para analizar la evolución de la sociedad chilena y para el desarrollo de las ciencias sociales en Chile. Puede verse más información [en línea] <https://coes.cl/encuesta-panel/>. Las bases de datos y documentación correspondientes se encuentran disponibles, de manera libre y gratuita, en el enlace [en línea] <https://dataverse.harvard.edu/dataverse/elsoc>.

En el artículo se utilizan datos ponderados transversalmente considerando el peso derivado del diseño (probabilidad de inclusión), la no respuesta, una post-estratificación y reescalamiento para expandir al tamaño de la muestra. Los análisis procesan los datos del panel en formato “apilado” o “largo”, lo cual involucra que los ponderadores son diferentes entre mediciones y reconstituyen los tamaños poblacionales de acuerdo con las características de la muestra en cada medición. Los detalles de la construcción de los ponderadores pueden encontrarse en línea <https://pondedadores-long-elsoc.netlify.app/>

La principal razón para utilizar estos datos es que, dentro de Chile es la única encuesta actual con un número grande de casos que contiene la información necesaria para calcular el esquema de clases EGP: ocupación con clasificación CIUO88 a 4 dígitos, tipo de relación laboral (empleador, cuenta propia o asalariado), condición de supervisor, número de trabajadores supervisados, tamaño de la empresa, y sector de actividad. La clasificación ocupacional fue revisada para detectar inconsistencias, las cuales fueron corregidas, de forma que la clasificación reflejara los criterios de la escala EGP. Lo anterior permite generar una variable única de situación de empleo que incorpora todos los elementos anteriores.

La tradición europea de los estudios de clases sociales

Las clases sociales se refieren a la posición de los individuos en la economía, es decir en los mercados y el sistema productivo y su proyección en la estructuración de la desigualdad social. Desde su introducción por Saint-Simon en el siglo XIX, las clases sociales aparecieron como una especie de fenómeno social total, que condensaba y resumía la desigualdad de la sociedad industrial. Las clases no solamente reflejaban la posición en el sistema económico, sino que iban asociadas con identidades, culturas, proyectos, organización en torno a intereses y capacidad de acción colectiva.

El concepto de clase ocupa un lugar central en la teoría social marxista, que representa el orden social como una jerarquía de grupos definidos por relaciones de explotación dentro del proceso productivo. La desigualdad ocurre porque el bienestar de una clase depende de su poder

para apropiarse de la riqueza creada por otra (Wright, 2005). En las sociedades capitalistas industriales la explotación ocurre en el sistema económico mismo, al convertir la fuerza de trabajo en una mercancía. En esta medida, las clases sociales son complementarias desde el punto de vista del funcionamiento del sistema económico, pero poseen intereses antagónicos en cuanto grupos sociales. Marx, sin embargo, no propuso una definición formal y siguió la de Saint-Simon, ni llevó a cabo un análisis sistemático de la estructura de clases, más allá de esquemas estilizados. En sus estudios, no obstante, prestó atención a los procesos vinculados a la condición de clase bajo el capitalismo, especialmente la alienación y la explotación. Estos análisis fundamentan las teorías sobre clases sociales desarrolladas posteriormente por autores marxistas (Wright 1994).

A comienzos del siglo XX, Max Weber (1864–1920) expandió el concepto de clase social al destacar tres tipos diferentes de poder – económico, político y social – que definen tres principios de diferenciación: clases, grupos de estatus y partidos. Las conceptualizaciones de estas fuentes de poder, así como su interacción, dieron origen a diferentes tradiciones en el estudio de las clases sociales. Las clasificaciones pueden tomar formas no jerárquicas (Bourdieu, 1984, Erikson y Goldthorpe 1992) o la forma de diferenciaciones graduales (Ganzeboom y Treiman 2003). Una alternativa a los esquemas que suponen que las clases están compuestas por unos pocos grupos relativamente numerosos es el de las micro-clases que, tomando inspiración en Durkheim, usa el grado de institucionalización de las ocupaciones (Grusky, 2005).

Sea cual sea la perspectiva que se adopte, al proponer clasificaciones de clases sociales, siempre se corre el riesgo de soslayar el concepto y de que la clasificación se convierta en un propósito en sí mismo, construyendo categorías que pueden tener poca relevancia para la comprensión de la desigualdad social. Para Pakulski (2005) dimensiones ajenas a la esfera económica, que definen fronteras morales y funcionales, tales como género, etnia, nacionalidad, edad, entre otros, serían principios fuertes que articulan la desigualdad. En la escena británica, un provocador artículo de Ray Pahl (1989) puso en cuestión el paradigma de análisis de clase argumentando que existía un desalineamiento entre la posición de clase, la conciencia de quienes se ubicaban en ellas y su comportamiento o formas de acción. Pahl puso el foco sobre los grupos de estatus, asociados con el consumo, especialmente los barrios y vecindarios, que serían más homogéneos en términos de conciencia y comportamiento.

En las décadas que siguieron al artículo de Pahl (1989), el análisis de clase, sin embargo, no fue abandonado del todo, y aparecieron tanto nuevas propuestas analíticas como nuevos esquemas. En el debate, hubo quienes buscaron mostrar que las clasificaciones de clase seguían siendo el mejor factor explicativo para diversas expresiones de desigualdad, sin descartar ajustes necesarios por las nuevas condiciones sociales (Goldthorpe y Marshall, 1992). Otros destacaron la heterogeneidad interna de las grandes categorías, abogando por medidas multidimensionales (Dubet, 2000). También, la diferenciación horizontal en "lógicas de trabajo" permitiría entender mejor la diversidad que se observaba en las grandes categorías de clase (Oesch, 2006). Una medida que adquirió popularidad en Gran Bretaña fue la propuesta por Mike Savage y colegas (Savage et al., 2013) quienes, definieron la clase en base a sus "capitales" económico, cultural y social. La referencia a "capitales" sigue las líneas del análisis de Bourdieu (1984) para quien las clases sociales son un constructo relacional dinámico, que agrupa individuos en un espacio o campo social de relaciones de poder, recursos y distinciones simbólicas. La clase misma queda definida por el volumen de capitales y sus combinaciones disponibles para un individuo. Los capitales relevantes dependen de las dinámicas de poder en

el campo, por lo que no pueden definirse a-priori o de forma general.

Los estudios que mantienen el uso de las clases sociales en sus análisis, especialmente los estudios de movilidad social (Yaish y Andersen 2012, Smallenbrowk 2024), toman la clase como una categoría de análisis que prácticamente no requiere demostración. Las posiciones de origen y destino social están definidas como clases sociales, entre las cuales no existe una relación de gradualidad o jerarquía predeterminada. Además, suponen que las clases son relativamente pocas y, por lo tanto, de gran tamaño. Más aun, los estudios europeos (Breen 2004) y, crecientemente, los Latinoamericanos (Solís y Boado 2016) utilizan para fines comparativos el esquema de clases desarrollado por Erikson, Goldthorpe y Portocarrero (EGP) desde los años 1970s ([Rose y Harrison, 2010](#)). La clasificación EGP, no obstante, fue desarrollada en el marco del análisis de sociedades industriales, una formación social que no ha sido ni probablemente nunca será el caso de Chile u otras sociedades latinoamericanas.

El esquema EGP se ha utilizado principalmente asociado con los estudios de movilidad y una de las razones para introducirlo en los estudios latinoamericanos fue, precisamente, para comparar pautas y modelos de movilidad entre países utilizando el mismo esquema de clases (Solís y Boado, 2016). Cabe preguntarse si la ventaja de comparar procesos de clase con categorías semejantes supera los riesgos de utilizar esquemas inadecuados. En el artículo presentamos una apreciación crítica del esquema EGP, ofreciendo el contexto histórico de los debates latinoamericanos sobre las clases sociales, así como los desarrollos actuales de la escala para estudios comparativos.

Las clases sociales y su movilidad en el debate latinoamericano

La identificación de las relaciones que vinculan a los trabajadores entre sí y las clases entre ellas depende tanto de la orientación teórica como del contexto histórico, por lo que es necesario hacer una revisión de esta discusión en el contexto Latinoamericano. La presentación de las primeras discusiones sociológicas sobre estructura de clases en la región se hace de forma estilizada, enfocada principalmente sobre dos autores, José Medina-Echavarría y Gino Germani. Ambos autores refieren la discusión sobre la estructura de clases latinoamericana al papel de la movilidad social en el análisis de esa estructura. Por cierto, la obra de estos autores es mucho más amplia y no es el objeto del artículo discutirla exhaustivamente, sino destacar lo que concierne al estudio de la estructura de clases en su vinculación con la movilidad social. Además, el debate sobre estructura de clases en esos días involucró muchos otros participantes, pero estos dos resultan ser los más pertinentes para los objetivos del artículo.

El uso en las sociedades latinoamericanas de esquemas de clase provenientes de países industriales ha sido objeto de discusión desde los años 1960s, en el marco de la sociología del desarrollo. José Medina-Echavarría (1963), destacó el peso del latifundio en la explicación de la desigualdad en los países latinoamericanos y, en alguna medida, en el curso posterior de la modernización. El control de grandes extensiones de tierra por terratenientes, típico de América Latina, estuvo ausente en las sociedades europeas desde los albores de la industrialización. Más aún, la actuación política de los terratenientes en defensa de sus intereses les hacía aparecer más como una oligarquía que como una clase. Florestán Fernández (1975, 2008[1980]) hace notar que en la desigualdad social latinoamericana las clases sociales no constituyen una realidad generalizada, pues la dominación racial y el carácter patrimonialista del estado en que se asienta, muestran la persistencia de un régimen de castas junto con un sistema de clases.

La discusión sobre los procesos y esquemas de estratificación en América Latina en los años 1960s se enfoca fundamentalmente sobre tres grupos: las clases dominantes, donde los elementos capitalistas aparecen mezclados con relaciones estamentarias e incluso feudales. Las clases medias donde se distingue entre las antiguas y nuevas, vale decir en qué medida se encuentran asociadas con la modernización de la estructura económica. Finalmente, los grupos marginales urbanos, que resultan de la migración del campo a la ciudad dando lugar a una expansión del sector de servicios en ocupaciones de baja productividad. Su posición en el mercado laboral se asienta posteriormente en el concepto de sector informal urbano. El marco del debate viene dado por la crítica sociológica de las tesis estructuralistas del desarrollo económico, expresadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), de acuerdo con las cuales la industrialización sustitutiva de las importaciones daría lugar a una expansión del empleo productivo en la manufactura y los servicios asociados con ésta (Bernasconi et al 2019). A fines de los años 1950s podía apreciarse que los resultados del proceso eran al menos debatibles, dando lugar a elaboraciones críticas sobre el proceso de desarrollo, cuya culminación sería la teoría de la dependencia (Cardoso y Faletto, 1968).

La sociología del desarrollo criticaba las definiciones de clase asociadas con la teoría de la modernización, y además era renuente a elaborar esquemas de estratificación social, que asociaban con la sociología funcionalista. Medina-Echavarría (1963:73), por ejemplo, critica los estudios de estratificación social de los años 1950s porque los planteamientos y las técnicas que utilizan corresponden a una estructura social diferente, agregando que "la materia está teñida por añadidura con pertinaces preconceptos ideológicos". Sus dardos, fundados en su lectura interpretativa de Weber, los dirige en particular contra los estudios de movilidad social, tributarios del "culto de las cifras" y ciegos a los procesos sociales.

Tal ha ocurrido con el tema epidémico de la llamada movilidad social, analizado más de una vez por influjos de la moda académica en relación - ¿y cómo no? - con el desarrollo económico, sin saber propiamente qué es lo que con todo ello se buscaba. [Es más probable que en ese tipo de investigación] abunden las tablas de porcentajes y sean escasas en cambio las exploraciones político-sociales de los modos de pensar y sentir de los distintos estratos. (p73-74)

La sociología del desarrollo, sin un interés particularmente profundo en el análisis de las clases sociales, puso de relieve los problemas teóricos que debían resolverse para que su estudio tuviera significación sociológica. En primer lugar, que se trataba de clases que no correspondían a una sociedad industrial, sino a clases de sociedades que se modernizaban a ritmos irregulares y donde persistía un sector terrateniente difícilmente asimilable al proceso de desarrollo capitalista. En segundo lugar, dentro de las clases medias se encontraban notorias diferencias de productividad en las unidades económicas en las cuales se empleaban. Finalmente, algunos de los migrantes del campo a la ciudad lograron ocupaciones obreras en la industria manufacturera, pero un grupo creciente vino a constituir el sector informal urbano.

Germani (1971), por su parte, aborda la estratificación social en el marco de un diálogo con la sociología parsoniana, que en esos días definía la escena académica norteamericana, con un énfasis particular en la movilidad social. En su planteamiento, en las sociedades modernas "la división del trabajo queda sometida a la eficiencia" lo que implica "una estructura de clases relativamente abierta" (Germani 1971:110). En este contexto, la mayor movilidad social resalta como un prerrequisito funcional de las sociedades modernas, donde las oportunidades están más gobernadas por el logro que la adscripción (Germani 1971:110). En comparación, aparece

menos relevante la modificación de las categorías ocupacionales por la desaparición de unos oficios o el surgimiento de otras actividades. Con ello, la agenda de la estratificación social viene más definida por el estudio comparado de la movilidad social o el grado de apertura de los sistemas de clase, que por la definición de categorías asociadas con posiciones sociales.

La condición de apertura en la estructura de clases implica permeabilidad de las fronteras entre posiciones sociales, "hasta el punto que se llega a cuestionar la existencia de clases como grupos sociológicos reales" (Germani 1971:217). Una consecuencia de la división del trabajo en las sociedades modernas es el incremento en las posiciones intermedias, que da origen a una identificación social como "clase media". El enfoque teórico sirve como punto de referencia para contrastar la condición moderna de las sociedades latinoamericanas desde el punto de vista de su estructura social, según sea su grado de movilidad y el peso de la clase media (Germani 1971:224). Germani advierte que los datos que tiene a su disposición no le permiten sacar conclusiones firmes porque se refieren a cambios estructurales en sociedades tradicionales (transición demográfica y migración rural-urbana) y no al funcionamiento de una sociedad moderna. Por ello recomienda investigar la heterogeneidad de los sistemas de estratificación: "[considerar] que coexisten diferentes patrones de estratificación y la manera con la cual tal coexistencia interfiere en el desarrollo y en la movilidad" (Germani 1971:225).

Esquemas de clasificación de clases sociales en Chile y América Latina

Dado el nivel de generalidad en el cual ubica su reflexión, Germani utilizó varios esquemas de clases sociales, de acuerdo con el foco de sus estudios o la información que tenía disponible. Sus análisis de clase no desarrollan el concepto, particularmente con respecto al rol de las relaciones de clase y del conflicto en su estructuración ([Murmis, 2010](#)). Puede discutirse, no obstante si su preferencia por la ocupación como principal descriptor de la clase social se debe a mera conveniencia por su disponibilidad o si connota una aproximación teórica weberiana o marxista no explicitada por el autor ([Sautu et al., 2010](#)). Sus análisis de clase comprenden una perspectiva histórica, donde la clave corresponde a la formación de las clases y su comportamiento, particularmente de la clase media. En otros estudios de corte más transversal busca asociar las clases "objetivamente" definidas con la auto-percepción de la posición social, el prestigio atribuido a las ocupaciones, el nivel socioeconómico y los comportamientos electorales.

Otros autores desarrollaron esquemas específicos de la estructura de clases, tomando como punto de partida las categorías utilizadas en censos nacionales y encuestas de empleo. Los esquemas más específicos resultaban clave para comparar entre países y analizar la movilidad social. Raczynski ([1974](#)) propuso una estratificación para Chile basada en el sector de ocupación, la categoría ocupacional y la ocupación. Los 11 grupos se obtienen de la agrupación de las 27 categorías en las cuales clasifica la fuerza de trabajo, y que separan los "estratos" rurales de los urbanos, para distinguir dentro de cada uno trabajadores autónomos (cuenta propia y empleadores) de dependientes, los cuales estratifica en altos medios y bajos, respectivamente.⁹ La clasificación de Raczynski guarda alguna similitud el esquema propuesto por Filgueira y Geneletti ([1981](#)) quienes utilizan la distinción entre asalariados y autónomos, el

⁹ Una revisión extensa de esta y otros esquemas de clase propuestos en Chile se encuentra en Barozet ([2024](#)).

sector productivo y la estratificación en base a las ocupaciones.

Martínez y León (1987) propusieron una "matriz de categorías sociales" que buscaba sintetizar las tendencias de los procesos de formación de clases en Chile, alejando el foco de la jerarquización entre grupos. La clasificación extendida consta de 48 grupos (Martínez y León [1987:89](#)) cuya construcción utiliza datos de encuestas de empleo y combina: categorías de clase y ocupación (obreros, proletarios, burgueses, empleados, burócratas, empresarios, profesionales, artesanos, asalariados, trabajadores domésticos y marginales), sector productivo (agricultura, minería, manufactura, comercio, transporte), productividad (tradicionales, segunda industrialización y estratégicos), sector institucional (público y privado), estratificación (alto, medio y bajo dentro de los burócratas, por ejemplo), área geográfica en la agricultura. Los grupos presentados en la publicación no corresponden, por cierto, a una tipología extendida, sino a una versión reducida en base a criterios sustantivos y de tamaño.

La riqueza descriptiva de la clasificación propuesta suponía que los investigadores podrían realizar distintas agrupaciones a partir de las categorías sociales presentadas por Martínez y León ([1987](#)). En la práctica, las dificultades para replicar la clasificación, que dependen de datos y algoritmos nunca compartidos por los autores, permiten disponer de una serie compacta que comprende desde 1971 a 2009, ([Ruiz y Boccardo 2014](#)). La clasificación compacta comprende: Estratos agrícolas, Empresarios, Sectores medios (públicos, privados e independientes), Clase obrera (en minería, manufactura y construcción, comercio y servicios), Grupos marginales (trabajo doméstico, comercio marginal, servicios.) La versión compacta de la clasificación, actualizada en 1998 ([León y Martínez, 1998](#)), utiliza los mismos títulos de la clasificación propuesta por Torrado ([1992](#)), que distingue Clase alta, Clase media, Clase obrera y Trabajadores marginales, subdividiendo los tres últimos en autónomos y asalariados. La clasificación chilena posee un carácter único, difícilmente replicable en otros países o incluso dentro de Chile por investigadores independientes, pues la composición de los grandes agrupamientos de clase es diferente en cada esquema.

Apreciación de los esquemas de clase propuestos en Chile

Con relación a las grandes preocupaciones de los años 1960s sobre las clases sociales en América Latina, los tres esquemas revisados los resuelven sólo parcialmente. En la medida que la urbanización y la reforma agraria redujeron el peso de la población rural y el latifundio, ello dejó de estar presente en el debate sobre clases sociales. Si bien las relaciones laborales de tipo capitalista están hoy más extendidas en la agricultura, puede debatirse si son asimilables a los esquemas desarrollados para contextos urbanos (Espinoza [et al., 2013](#)). La cuestión de las "clases medias" se convirtió principalmente en un tema de estratificación, junto con la permanente discusión sobre sus preferencias políticas, dejando de lado las cuestiones relativas a su productividad. Tampoco se ha incorporado en esta discusión el peso del empleo público, cuyas relaciones laborales tienen un estatuto diferente al resto de los trabajadores. Finalmente, y ligado a lo anterior, sigue la discusión sobre cómo incorporar al sector informal urbano en los esquemas de clase.

Con excepción del esquema de Torrado ([1992](#)), los otros tres esquemas revisados no pueden mapearse con facilidad en el esquema de clases EGP, el más difundido en la ola actual de estudios de movilidad social en América Latina ([Torche, 2006](#); [Solís y Boado, 2016](#)). Ahora bien, los esquemas de clasificación cobran pleno sentido cuando se utilizan en estudios de

movilidad, mirando dinámicamente las categorías, por lo que cabe preguntarse ¿qué preguntas quedan sin responder al utilizar el esquema EGP en lugar de otros?. En el esquema de Raczynski (1974) destacan tres distinciones en los procesos de movilidad: el ascenso o descenso entre estratos, el paso entre la agricultura y el resto de las ocupaciones, el paso entre posiciones asalariadas y autónomas. Las hipótesis que puedan plantearse al respecto pueden contrastarse, no obstante, si se utiliza el esquema EGP y, de hecho, el modelo de movilidad propuesto por Erikson y Goldthorpe (1992) posee parámetros para las tres barreras. En el caso de Filgueira y Geneletti (1981) están planteadas las preguntas acerca del carácter jerárquico de la estructura de clases, junto con el tránsito entre asalariados y autónomos, pero también la movilidad entre sectores de actividad económica primario, secundario y terciario. Estas cuestiones también pueden modelarse en el marco de los modelos de movilidad asociados con el esquema EGP.

La clasificación de Martínez y León (1987) se preocupa menos por la jerarquía de los grupos y más por el tránsito entre sectores de actividad, pero incorpora elementos nuevos. En primer lugar, hay una distinción entre empleo público y empleo privado, que debe plantear al menos la pregunta acerca de si sus relaciones laborales son asimilables entre sí. En los esquemas EGP y European Socio-economic Classification (ESeC) se asume que las relaciones laborales son equivalentes entre el sector público y privado (Rose y Harrison, 2010). Puede argumentarse que no serían directamente asimilables en la medida los ascensos en base a antigüedad o el clientelismo que caracterizan al empleo público del sur de Europa distorsionan el peso de los activos laborales específicos (Maloutas, 2007). El esquema chileno plantea además una clasificación gruesa de los niveles de productividad en servicios y manufactura, que resulta clave en el marco de las discusiones sobre heterogeneidad estructural. Estos últimos elementos no son posibles de recuperar en el marco de la EGP y abren la discusión acerca de la necesidad de incorporar este tipo de distinciones en los esquemas de clase.

Las instanciaciones¹⁰ del esquema EGP

El esquema de clases EGP, utilizado especialmente en los estudios de movilidad social, tuvo su origen en los años 1970s y ha tenido diversas actualizaciones para mejorar su validez externa. La clasificación establece clases sociales según las posiciones de mercado especificadas por relaciones laborales, con distinciones específicas para los asalariados. El esquema de clases sociales EGP es el resultado de una combinación de la ocupación, es decir el trabajo desempeñado por una persona, con la relación de empleo que especifica su situación de mercado, de forma que cada trabajador/a puede asignarse a una categoría.

En el esquema EGP la ocupación se codifica a partir de la descripción de las tareas desempeñadas, utilizando la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) que, gruesamente, corresponde a una jerarquía basada en la complejidad de las tareas. En los estudios europeos del mercado de laboral se ha asociado la jerarquía de las ocupaciones con la relación de empleo definida en el contrato laboral, de forma que ocupaciones más complejas o que requieren mayor calificación para su desempeño se corresponden con mayor autonomía o flexibilidad del trabajador en la definición de sus tareas y metas. La situación de mercado separa los empleadores, los trabajadores por cuenta propia y los empleados dependientes, entre quienes

¹⁰ Instanciación se refiere a crear una instancia, vale decir, la aplicación específica de un principio. En este caso EGP y ESeC son instanciaciones de un esquema de clases basado en las relaciones laborales. ESeC no es una actualización porque aplica los principios de forma diferente a la EGP.

se distingue su nivel de autoridad o subordinación en el trabajo. Adicionalmente, el sector productivo y el tamaño de los establecimientos refinan la asignación de los trabajadores en clases.

Las categorías de la clasificación EGP no deben interpretarse como una variación gradual o jerarquía ordinal de posiciones, sino como clases discretas. Pueden existir ordenamientos parciales entre las clases, por ejemplo, según niveles de calificación o escalas de operación, pero ellos no pueden extenderse al resto de la escala. En la generación de las categorías de clase, los elementos ordinales intervienen sólo una vez que se ha realizado la clasificación basada en relaciones laborales. Si acaso las clases están asociadas con ordenamientos según ingresos o educación es un tema de análisis empírico y no un criterio de clasificación.

En 2007 la ESeC fue presentada con una nueva "instanciación" del esquema EGP ([Rose y Harrison, 2010](#)). En esta versión apuntó a facilitar su uso comparativo en la Unión Europea, armonizando los títulos ocupacionales y proveyendo una versión más fundamentada del concepto de "relaciones laborales", utilizando indicadores de autonomía y flexibilidad en los puestos de trabajo. El nuevo esquema aborda también problemas planteados respecto de países del sur de Europa donde existen muchas unidades económicas pequeñas y el empleo público tiene una incidencia notoria en el mercado de trabajo ([Maloutas, 2007](#)).

La discusión a propósito de la construcción de la escala ESeC permite apreciar algunas de las limitaciones de la versión 1992 del esquema EGP, particularmente en cuanto a la conceptualización de las relaciones laborales. El problema se hacía presente al establecer las diferencias entre empleados, las cuales debían evaluarse según si la relación laboral era de servicio o contractual. En la práctica, el esquema EGP diferencia los empleados según si sus tareas son de tipo manual o intelectual y según la calificación del oficio, distinciones que no pertenecen al ámbito de las relaciones laborales. Una segunda confusión se refiere a la identificación de las relaciones laborales con su regulación ([Rose y Harrison, 2010](#)). Las relaciones laborales son un conjunto general que define las posiciones de mercado, las cuales se aplican a todos los trabajadores, mientras que la regulación del trabajo es una distinción pertinente entre los empleados.

En la construcción del esquema ESeC el tipo de relación de empleo estuvo sujeta a validación usando indicadores como autonomía de los empleados para definir sus tareas, dificultad para monitorear sus metas de trabajo o el nivel de habilidades específicas para el desempeño de las tareas ([Rose y Harrison, 2010:49](#)). Las relaciones de servicio corresponden a situaciones en que los indicadores muestran consistentemente valores altos y, en el extremo opuesto se encuentran los contratos laborales. Los tipos mixtos caracterizan ocupaciones que poseen elementos de la relación de servicio, pero que se mezclan de manera dispareja, dando lugar a relaciones de servicio o contratos laborales modificados. De acuerdo con esta aproximación, el problema planteado por la clase IIIb (Trabajadores de rutina no manual baja) en el esquema EGP, cuyas relaciones laborales la ponían más próxima a la VIIa (Operarios semi-calificados), llevó a la creación de una nueva clase de servicios bajos, separada de funcionarios y administradores. Por similares razones las clases I (Clase de servicios alta) y II (Clase de servicios baja) fueron especificadas separando los directores de empresa de los profesionales, respectivamente.

Computación de la EGP y alternativas en América Latina

La aplicación del esquema EGP en los estudios Latinoamericanos se ha hecho sin cuestionar mayormente los supuestos de su construcción, salvo recientes consideraciones respecto al sector informal ([Solís et al., 2019](#)). La posibilidad de validar esta escala sobre la base de la autonomía en el ejercicio de los puestos de trabajo debe superar la escasa información disponible sobre relaciones de empleo en el mercado de trabajo en América Latina, más concentrada en temas de calidad del empleo o la formalización, que en las relaciones laborales mismas. La construcción de un esquema de clases a partir de la equivalencia en pautas de movilidad como lo hizo Torche ([2006](#)) no permite responder directamente la pregunta acerca de la validez del esquema EGP, porque en su aplicación combinó grupos usando criterios distintos a las pautas de movilidad. El principio responde a la definición de clase social como destino común y sigue siendo válido si se aplica estrictamente.

La aproximación propuesta por Torche ([2006](#)) para la construcción de una clasificación ocupacional puede comprenderse como una validación "inductiva" del esquema EGP. En efecto, la autora elabora una clasificación de 27 grupos en base a su ocupación y situación de mercado (categoría ocupacional), que son los elementos básicos para especificar las relaciones laborales en el esquema EGP. Los grupos se ubican en una tabla de movilidad intergeneracional y se reducen utilizando principios de equivalencia basados en la pauta de movilidad. No obstante, en la construcción de los grupos se incorporan los niveles educacionales de los trabajadores y la capacidad de consumo, que son atributos individuales, lo cual contamina la clasificación. Esto último dificulta su utilización porque, en el estudio de los retornos a la educación, por ejemplo, quedaría poco claro cuánto es efecto de la educación y cuánto un resultado de la clasificación misma.

Un problema similar presenta la clasificación ocupacional propuesta recientemente por CEPAL ([Martínez et al., 2022](#)) que, luego de revisar críticamente la clasificación EGP, hace una propuesta alternativa que agrupa las categorías ocupacionales ajustándolas por nivel socioeconómico. La clasificación usa los numerales romanos típicos de la clasificación EGP (aunque denotando otras clases), pero en ningún caso constituye un refinamiento de ésta, sino una propuesta basada en el nivel socioeconómico de las ocupaciones, y no en las relaciones laborales. De hecho, en 5 de las 7 categorías combina asalariados, cuenta propia y pequeños empleadores con las mismas ocupaciones; las categorías de gran empleador y pequeño empleador menos calificado, sin embargo, se tratan como clases separadas. Estrictamente, esta es más una clasificación de grupos socioeconómicos que una clasificación de clase social.

En el contexto de las actualizaciones del esquema EGP resulta pertinente preguntarse qué tipos de ajuste podrían requerirse en el contexto de América Latina ([Solís et al., 2019](#); [Torche, 2006](#)). La versión utilizada en los estudios Latinoamericanos corresponde a la presentada por Erikson y Goldthorpe ([1992](#)) construida, habitualmente, utilizando el algoritmo provisto por Ganzeboom y Treiman ([2003](#)). Hay razones sustantivas y operativas para tomar con cautela el esquema. Sustantivamente, la clasificación EGP fue desarrollada en el marco del análisis de países desarrollados con alto nivel de industrialización y formalidad en el mercado de trabajo, que no es el caso de los países latinoamericanos. Operativamente, el algoritmo corrientemente utilizado tiene limitaciones conocidas, pues sobreestima la clase I (Clase de servicios alta), incluyendo pequeños empresarios y subestima la clase V (Técnicos y supervisores), al incluir solamente supervisores de trabajadores manuales ([Rose y Harrison, 2010](#)). En los estudios más recientes la Clasificación CIUO-08 se convierte a CIUO-88, las que plantean problemas de

correspondencia pues en las ocupaciones obreras se distinguió a los supervisores técnicos que pasaron a ser clasificadas en el grupo 3 de la CIUO-08. Rose y Harrison ([2010:294](#)) realizan la validación utilizando una "matriz de derivación" que clasifica las ocupaciones CIUO según el tipo de relación laboral y las asocia con la clase EGP. La matriz de derivación de las clases EGP no es de dominio público, aunque sí es posible consultar este instrumento en el caso de la ESeC.

Sector informal y empleo informal. Desafío para los esquemas de clases

Desde los años 1960s, los estudiosos de la modernización latinoamericana habían detectado la presencia de un grupo significativo de habitantes de las ciudades que residían en asentamientos marginales y desempeñaban actividades económicas fuera de los sectores más productivos ([Nun, 1969, 1999](#); Quijano 1973). Este grupo no correspondía a ninguna categoría social asociada con la industrialización europea, desarrollada con "oferta ilimitada de mano de obra" (Lewis 1960, [Singer, 1976](#)). No eran el lumpen-proletariado de las ciudades europeas pre-industriales, ni tampoco se encontraban en transición hacia empleos productivos (Touraine 1976, Solari et al 1976, [Castells, 1973](#)). Finalmente, este grupo pasó a denominarse "sector informal urbano", parte de una "economía informal" característica de la región (Tokman 1978, PREALC/OIT 1991). En esta parte discuto la pertinencia de este concepto en la economía chilena que experimentó una profunda reestructuración capitalista de corte neoliberal.

El enfoque más corriente de la economía informal la caracteriza de acuerdo con los atributos de las unidades económicas, considerando tamaño, tecnología, organización, productividad o estatus legal ([Raczynski, 1978](#); Solari et al 1976; De Soto 1986; Hoffman y Centeno 2003). Las unidades que pertenecen al sector informal se ubican en los rangos bajos de las dimensiones anteriores, aunque no siempre es sencillo trazar el límite con las empresas formales, que pueden tener algunas de las características de las formales; por ejemplo, pueden existir empresas grandes de baja productividad. Generalmente, se considera que las empresas informales son de pequeña escala, con una organización de baja complejidad, habitualmente asociada con relaciones de parentesco o de proximidad social. Las mediciones habitualmente especifican lo anterior con el tamaño (los umbrales varían entre 5 y 10 trabajadores), descartando unidades pequeñas del sector público o privadas legalmente constituidas (OECD/ILO, 2019; [Solís et al., 2019](#)).

Una segunda aproximación a la economía informal lo hace sobre la base del empleo y la calificación laboral (OECD/ILO 2019, Dell'Anno 2022). Ocupaciones tales como cuenta-propia no profesionales, trabajadores familiares no remunerados, trabajadores no calificados en servicios, trabajos de corta duración o temporales pertenecerían a la economía informal porque forman parte de un sistema de relaciones laborales que no está sujeta a la normativa vigente, lo cual priva a los trabajadores de derechos y beneficios. Por cierto, no es sencillo trazar el límite basado solamente en las ocupaciones y descuidando el contexto de su ejercicio, lo cual hace aparecer problemas con ocupaciones semi-calificadas. Como ejemplo, puede considerarse el empleo en costuras y sastrería, que en algunas circunstancias se ejerce de manera informal, mientras que en otras puede ubicarse en los marcos de una empresa formal, sea como proveedor o empleado. Otro ejemplo posible son los preparadores físicos, cuya actividad a veces puede asimilarse a la informalidad, lo que no siempre es el caso. De acuerdo con los autores mencionados, pueden existir empleos informales en empresas formales y viceversa, dependiendo del tipo de relación laboral.

En la actualidad, la economía informal puede comprenderse mejor como un sistema de relaciones laborales que la vincula con el sector formal en la dinámica de la acumulación capitalista, en lugar de un conjunto segmentado o incluso separado de la economía formal. De hecho, el dualismo estructural, esto es el supuesto de que desde el punto de vista productivo la economía formal y la informal operan en mercados paralelos, fue descartado tempranamente en el estudio del sector informal, para concentrarse en las formas de articulación entre ambos sectores (Souza y Tokman 1976, Moser 1978, Connolly 1985, Kowarick 1975). La pregunta pendiente, sin embargo, es cuáles son las características y funciones de estas relaciones.

Las actividades informales en el comercio y otros emprendimientos de carácter ilegal (aunque no los criminales), el trabajo estacional, la subcontratación a pequeñas empresas, economías de subsistencia o incluso el trabajo familiar no remunerado resultan funcionales a los segmentos más dinámicos y productivos de la economía (Castells y Portes 1989, Díaz 1991). El trabajo barato asociado con el sector informal incrementa los retornos del capital al reducir los costos laborales; de manera similar, la subcontratación amortigua los efectos de los ciclos económicos descendentes, que son absorbidos, en primer lugar, por las empresas informales (Portes and Walton 1981, Benería and Roldán 1987).

La viabilidad de la economía informal depende en gran medida de la precarización de sus condiciones de trabajo, vale decir una operación que no respeta estándares de seguridad, instalación o mantenimiento, así como por la ausencia de ahorro para pensiones o seguros de salud. La condición de posibilidad de la economía informal se encuentra en la desregulación de los mercados de trabajo, un aspecto que acompaña la modernización capitalista de la economía chilena, así como de otras economías modernas, aún en condiciones de crecimiento económico y mejoría de los ingresos. En la actualidad, los trabajadores que encadenan contratos temporales y, en gran medida, los trabajadores de "plataformas" tienen una presencia significativa en el trabajo desregulado, al punto que pueden representar un segmento distinto del mercado de trabajo (Gutiérrez-Crocco y Atzeni 2022).

La desregulación del trabajo tiene varias ventajas para el funcionamiento de la empresa capitalista, que explican la persistencia y características de la economía informal en las economías urbanas modernas. Antes que nada, rebaja los costos del trabajo y otros, como mantención de plantas o ciertas tareas de supervisión, que se asocian con una gran masa laboral. Además, la empresa queda en condiciones de transferir a las unidades menores cualquier pérdida causada por fluctuaciones económicas (Castells y Portes 1989, Benería & Roldán 1987). Más aún, la desregulación asegura al empresario un negocio libre de conflictos laborales. Los vínculos con empresas más pequeñas proveen también a las empresas la posibilidad de diversificar sus productos y acceder a mercados pequeños sin que a ellos resulte antieconómico. Todos estos elementos amplían las posibilidades de ganancia de las empresas del sector formal, reducen sus costos, minimizan sus riesgos y liberan su medio ambiente de turbulencias (Portes y Walton 1981:86, Benería y Roldán 1987, Smith 1984).

Chile es un caso interesante porque muestra las características de la economía informal en una economía que, desde mediados de los años 1970s experimentó una profunda modernización capitalista de orden neoliberal. En Chile, el empleo informal comenzó a medirse en 2017 –a requerimiento de la OCDE– siguiendo las recomendaciones de la OIT.¹¹ Con anterioridad se

¹¹ Véase la definición chilena en <https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/mercado-laboral/informalidad-laboral>

suponía que el empleo informal constituía una realidad marginal. Los primeros resultados mostraron que alrededor del 30% de la fuerza de trabajo se ubicaba en la actividad informal, lo cual exigió una reinterpretación de las características del mercado laboral chileno ([Albagli y Tapia, 2018](#), OIT 2018).

La actual desregulación del mercado de trabajo ocurrió en Chile a partir de 1981 cuando el código del trabajo desarrollado bajo la dictadura redujo la influencia del sindicalismo, a la vez que introdujo formas de contratación ampliamente favorables al sector empresarial. La informalidad chilena no se asemeja a la descrita por DeSoto (1986) para el Perú, que la caracteriza como un conjunto de empresas frenadas en sus posibilidades de crecimiento por infinidad de reglamentos y regulaciones. Por el contrario, como lo muestran incluso estudios recientes, la economía informal chilena es una opción subóptima que asumen los trabajadores ante la dificultad de acceso o permanencia en el sector formal ([Albagli y Tapia, 2018](#)).

La desregulación afecta al conjunto de los trabajadores chilenos, al punto de convertirse en una condición de operación del modelo de acumulación. De aquí no se sigue, sin embargo, que la pobreza generalizada sea la consecuencia inevitable de la desregulación. De hecho, los estudios de ingreso no han encontrado un corte claro entre las actividades desreguladas y las de los trabajadores del sector formal (Souza y Tokman 1976). Por ello resulta difícil pensar que el fenómeno de la informalidad se agote en la terciarización espuria. La presencia de otras dinámicas de trabajo informal requiere identificar este sector, como primer paso.

En suma, la desregulación de las relaciones laborales –presentado por los empresarios como "flexibilización del mercado de trabajo"– es un componente clave de la economía informal que permite abordar su componente de clase mejor que atendiendo a las características de las empresas. La desregulación es el resultado de la menor protección pública del trabajo asalariado, donde los trabajadores se ven enfrentados a alta rotación, periodos de desempleo, intermitencia de su participación laboral y baja capacidad de negociación. Todo lo anterior, para quienes no logran conservar sus puestos de trabajo, afecta su posibilidad de "hacer carrera" y, en muchos casos, verse en la obligación de entrar al empleo informal ([Barozet et al., 2021](#)).

La medición del empleo informal en Chile le asimila en gran medida al trabajo desregulado, pero no debe tomarse como un sinónimo de precariedad laboral, como lo hace por ejemplo Marques (2023) para quien el sector informal puede asimilarse a un "precariado". La precariedad laboral tiene puntos de contacto con el empleo informal, pero no es directamente equivalente. Demás está decir que la precariedad laboral puede ocurrir en grandes empresas competitivas; por ejemplo, entre los chilenos bajo la línea de la pobreza se encuentran trabajadores asalariados con contrato indefinido en grandes empresas, vale decir, trabajadores formales ([Espinoza y Barozet, 2019](#)). El marco de la precariedad se desarrolló en conceptualización de la erosión de la seguridad y el bienestar económico y social en el contexto del orden neoliberal que incorpora la desregulación del empleo como una de las dimensiones que caracterizan la precariedad (Vejar 2022). La precariedad refiere a un fenómeno multidimensional menos afincado en las relaciones laborales y más en la acumulación capitalista y el rol de Estado (Vejar 2022).

De forma similar la "calidad del empleo" tampoco debe considerarse sinónimo de empleo informal, pues toma una perspectiva normativa donde las condiciones de trabajo observadas se contrastan con empleos de calidad, típicamente asalariados con contrato indefinido y niveles de ingreso que satisfagan las necesidades del trabajador (Ruiz-Tagle y Schnbruch 2015). El

concepto de calidad también se extiende hacia aspectos distantes de las relaciones laborales como el bienestar económico, social y psicológico de los trabajadores, por ejemplo, turnos abusivos, alto nivel de riesgo, o malos tratos (Galleguillos 2014).

La informalidad alude a la vinculación con la actividad económica en condiciones de desregulación de la relación laboral, lo cual identifica un sector excluido de los derechos establecidos por la legislación laboral. La conceptualización original dio cuenta de las peculiaridades del mercado de trabajo, donde una parte de los trabajadores que establecía relaciones de trabajo desreguladas contribuía a la operación de las empresas capitalistas formales (Tokman 1978). La distinción entre formal e informal aparece insuficiente hoy en día para dar cuenta de la operación de un mercado de trabajo fracturado de muchas formas diferentes: terciarización, micro-tareas, gig-economy, subcontratación, combinación trabajos formales e informales, entre otros (Maurizio 2016, Tubaro y Casilli 2019). Muchas veces, quienes desempeñan estas actividades para generar sus ingresos, ni siquiera le consideran trabajo. El trabajo en plataformas y las plataformas para el trabajo free-lance no han hecho otra cosa que extender la función desreguladora del sector informal hacia terrenos insospechados (Haidar et al 2023),

En Chile, el registro de la actividad informal sobre la base de la desregulación laboral, comprende un rango de situaciones que apuntan a condiciones y relaciones de trabajo diferentes. En particular, no todos los trabajadores informales se encuentran en situaciones de desprotección o vulnerabilidad. Por ejemplo, cerca de 30% de los trabajadores informales chilenos poseen educación universitaria y son calificados como tales porque en el mercado laboral establecen relaciones de tipo comercial. Se trata de profesionales que operan como trabajadores independientes y que emiten boletas de honorarios por sus servicios. Los trabajadores que se encuentran legalmente retirados no poseen la obligación de cotizar para su pensión y también se registran como informales. Si bien las pensiones en Chile son bajas en promedio, es probable que algunos de ellos no sean estrictamente informales.

La divergencia estructural dentro de las clases sociales

A continuación, se presentan algunas pruebas de la pertinencia y confiabilidad de la clasificación EGP, partiendo por la consistencia de las clases con el algoritmo propuesto por Ganzeboom y Treiman (2003) que genera la clasificación y revisando también su asociación con la informalidad laboral que caracteriza América Latina, dado que este tipo de relación laboral permea todas las clases sociales.

Cuadro 1. Distribución de las clases EGP, en porcentaje. Chile años 2016, 2018 y 2021

	2016	2018	2021	Total
I. Clase servicios alta	12.5	11.7	15.8	13.1
II. Clase servicios baja	17.9	19.0	18.3	18.5
IIIa. Rutina no manual alta	9.3	6.9	6.4	7.5

IIIb. Rutina no manual baja	7.3	9.5	7.7	8.3
IVa. Pequeño empleador	4.6	2.0	5.5	3.8
IVb. Trabajador por cuenta propia	9.2	13.8	14.8	12.7
V. Supervisores y técnicos menores	5.1	3.6	3.2	4.0
VI. Manual calificado	12.7	12.0	11.0	11.9
VIIa. Manual semicalificado	21.1	19.5	15.4	18.8
VIIb. Obrero agrícola	0.3	1.0	1.3	0.9
IVc. Pequeño agricultor	0.1	1.0	0.7	0.6

Fuente: Encuesta ELSOC

En los estudios de estratificación que utilizan la clasificación EGP se usa un código convencional consistente en numerales romanos para las clases y letras minúsculas para las subdivisiones dentro de una clase. Cada código está asociado con una etiqueta descriptiva, por ejemplo, la clase I corresponde a "Clase de servicios alta". Para simplificar la lectura, en este documento se utilizará esta nomenclatura en el primer cuadro y luego se utilizará solamente el código. El Cuadro 1 presenta sólo a título ilustrativo la distribución de las clases EGP, en porcentaje, para los años 2016, 2018 y 2021. Los cálculos se hicieron con datos ponderados para cada uno de los años y luego en formato largo para el total. Por tratarse de una encuesta representativa de la población urbana, los datos de obreros agrícolas (VIIb) y pequeños agricultores (IVc), se presentan a título ilustrativo pues corresponden a empleados en la agricultura que viven en ciudades, lo cual no representa a la población agrícola.

La clase de servicios reúne a los grandes empleadores, directores y altos ejecutivos en grandes empresas, profesionales de alto rango, así como empleados cuyo régimen de contrato les permite autonomía en la definición de sus metas y flexibilidad en sus formas de trabajo. La diferencia entre los dos niveles responde al tamaño de los establecimientos, así como a la condición de supervisor que se asigna a la clase II. En Chile, la clase de servicios alcanza, en promedio 13,1% en el nivel alto y 18,5% en el bajo, 31,6% en total. La Rutina no manual corresponde a trabajadores dependientes en administración y comercio, así como otros empleados de oficina. El nivel alto se reserva para trabajadores de administración en puestos calificados o que supervisan personal. En Chile representan 7,5% y 8,3% respectivamente, para un total de 15,8%. Pequeños empleadores y cuenta propia alcanzan 3,8% y 12,7% respectivamente. En las clases asalariadas predominan obreros y operarios no calificados (18,8%), seguidos por los trabajadores manuales calificados (11,9%). Supervisores y técnicos representan 4% en los datos. En suma, la clase de servicios con 31,6% y los obreros con 30,7% son las clases mayoritarias en la fuerza de trabajo chilena. Dentro de las clases intermedias destacan los trabajadores por cuenta propia no profesionales (12,7%), seguidos por los empleados en ventas (IIIb).

En la sección siguiente se revisa la consistencia de esta clasificación con respecto a las relaciones laborales, como una forma de asegurar que las asignaciones, especialmente a las clases mayoritarias no trasgredan los principios de la clasificación.

El esquema EGP y las relaciones laborales

La conveniencia de contar con un algoritmo que genera la clasificación EGP ha convertido a éste en una caja negra que conviene examinar, porque su uso plantea varios problemas ([Rose y Harrison, 2010:294](#)). El más relevante es que se pierde la visión de conjunto de las relaciones laborales al tratar por separado la supervisión y el autoempleo, de forma que los autoempleados pueden aparecer como supervisores y, en algunas versiones del algoritmo son asignados automáticamente como tales. Unido a lo anterior, el número de supervisados se usa como un *proxy* del tamaño del establecimiento lo cual, cuando se aplica a empleadores y cuenta propia, los puede llevar a la clase I y, si no se aplica, los supone ocupados en establecimientos pequeños, dejando en la clase I solamente a los profesionales universitarios. Otro aspecto a considerar es que la asignación a la clase V de supervisores considera solamente quienes supervisan trabajadores "manuales", dejando sin considerar, por ejemplo, a los supervisores en comercio u oficinas.

A continuación, como una forma de validar la clasificación, se utiliza una variable de relaciones laborales que identifica la situación de cada trabajador en el mercado laboral, de forma exhaustiva y mutuamente excluyente. La situación laboral no asigna la condición de supervisores a los empleadores, aunque sí a los trabajadores por cuenta propia que declaran supervisar a otros trabajadores, lo que es asimilable a la condición de supervisor.¹² La situación laboral de los trabajadores consiste en las siguientes categorías: empleadores en establecimientos de 10 o más trabajadores, empleadores en establecimientos menores a 10 empleados¹³, trabajadores por cuenta propia, supervisores y empleados en general.

Cuadro 2: Distribución de los trabajadores según situación laboral, en porcentaje. Chile 2016, 2018 y 2021

Situación laboral	2016	2018	2021
Empleados	51.1	55.5	50.4
Supervisores	27.1	23.7	23.5
TCP	16.3	17.0	19.9
Empleadores < 10	4.7	3.0	5.7
Empleadores 10+	0.9	0.8	0.5

¹² Es probable que algunas empresas externalicen la supervisión, mantenimiento, mejoría de procesos o desarrollo de productos computacionales contratando profesionales o pequeñas empresas. En este caso, un contrato comercial mimetiza una relación laboral.

¹³ El corte en un tamaño de 10 trabajadores se hace para mantener la comparación con dos trabajos que utilizan este umbral (Solis et al 2019, Harrison y Rose 2010). El corte busca reflejar un contraste entre empresas de baja complejidad y el resto. Por cierto, puede discutirse si la complejidad es igual en una empresa de 12 trabajadores equivale a la de una con 120. Para los fines de este trabajo, sin embargo, resulta poco conveniente complicar el análisis introduciendo categorías intermedias.

Fuente: Encuesta ELSOC

Desde el punto de vista de su situación de mercado, alrededor de la mitad de los trabajadores lo hacen en condición de empleados; otra cuarta parte con empleados que supervisan. En cuanto al auto-empleo, los grandes empleadores representan poco menos del 1% de esta muestra, los pequeños empleadores alrededor de 5%, y los trabajadores por cuenta propia entre 16% y 20%. El peso de las situaciones es relativamente similar en las tres mediciones, con excepción de los trabajadores por cuenta propia que incrementaron su peso luego de la pandemia, lo cual tiene su contrapartida en la disminución de los empleados.

Se puede mirar ahora la distribución de las clases EGP de acuerdo con la situación laboral. El Cuadro 3 presenta la distribución condicional de las clases EGP según la situación laboral de los trabajadores, agrupando los tres años de medición. La distribución debiera mostrar concentración de casos en algunos casilleros y cero en otros, de acuerdo con los criterios usados para definir clases. La heterogeneidad dentro de las clases debiera ser baja, en alguna medida asociada con error estadístico y la diversidad de clase dentro de las situaciones laborales debiera ser más posible entre supervisores y asalariados. Los empleadores debieran concentrarse en las clase I y IV, y en alguna medida en la II; mientras que los trabajadores por cuenta propia debieran concentrarse en la clase IVb. En el resto de las clases debieran predominar los empleados asalariados. Los supervisores debieran aparecer en las clases II, V y VI. El Cuadro 3 presenta tal distribución en números brutos del esquema EGP, obtenida aplicando el algoritmo de Ganzeboom y Treiman (2003), según la situación laboral del trabajador. Los cálculos ponderados fueron hechos con el paquete survey de R (Lumley 2024), que permite estimar el error estadístico en diseños muestrales complejos. En la tabla se pone entre paréntesis los casos en los cuales el intervalo de confianza contiene el cero por lo que el conteo puede atribuirse a error estadístico.

La distribución en el Cuadro 3, en lo grueso corresponde a lo esperado según los criterios de situación laboral que gobiernan la clasificación EGP, con excepción de los supervisores. Los grandes empleadores, los pequeños empleadores y los trabajadores por cuenta propia muestran su mayor volumen en las clases I, IV-a, y IV-b, respectivamente. Los empleados aparecen en las clases donde no hay pequeños empleadores ni trabajadores por cuenta propia, especialmente en la clase VIIa. y su presencia en las clases I y II corresponde a empleados de rango gerencial. Los supervisores aparecen concentrados en las clases I y II, lo cual requiere depuración pues, si son supervisores de trabajadores no manuales, pertenecen a la clase II. Con excepción de los empleadores grandes, en el resto de las categorías se encuentran casos desalineados cuya presencia no puede atribuirse al error estadístico. particularmente entre los supervisores, que aparecen en las clases I y VI.

**Cuadro 3. Distribución de clases EGP según situación laboral.
Número de casos ponderados. Chile 2016-2021**

Clase	Empleador 10+	Empleador < 10	TCP	Supervisa	Empleado
-------	------------------	-------------------	-----	-----------	----------

I	43	12	58	490	185
II	0	39	53	516	501
IIIa	0	0	133	0	320
IIIb	0	0	0	0	497
IVa	-2	201	17	-8	0
IVb	0	0	761	0	0
V	-1	0	0	238	0
VI	0	0	0	177	540
VIIa	0	0	18	41	1072
VIIb	0	0	0	3	49
IVc	-1	-5	-16	-15	-1

Fuente: Encuesta ELSOC. Nota: Los números entre paréntesis indican las estimaciones en las cuales el cero pertenece al intervalo de confianza

Mirando la distribución dentro de las clases, la máxima heterogeneidad de situaciones laborales se encuentra en la clase I, lo cual en alguna medida explica su sobre-estimación. Aunque quienes son asignados a la clase I son relativamente pocos entre los pequeños empleadores y trabajadores por cuenta propia, llama la atención el número de supervisores y empleados que alcanzan esta clase. Un comentario similar puede hacerse para la clase II. Muchos de los clasificados como clase I corresponden propiamente a la clase II, particularmente los supervisores ([Rose y Harrison, 2010:295](#)). La asignación de supervisores manuales a la clase VI también llama la atención porque debieran ser asignados a la clase V. Futuros estudios deberán revisar con detalle la condición de supervisor de personal; por ahora cabe simplemente señalar como una fuente de incertidumbre en la generación de la clasificación EGP.

Rose y Harrison ([2010:294](#)) sugirieron algunos "parches" obvios para mejorar el desempeño del algoritmo. Las correcciones propuestas, sin embargo, provienen del conocimiento de una "matriz de derivación", en la cual las ocupaciones son asignadas a clases según su situación de mercado. En la medida que tal matriz de derivación no es pública, no hay una versión completa de las correcciones, pues se han presentado solamente algunos casos como ejemplo de clasificación incorrecta y son claramente incompletos o confusos en la asignación de las clases II y IIIb. No resulta aconsejable hacer una aplicación parcial de las correcciones que, aun cuando suavice las distorsiones más obvias de la clasificación obtenida por la aplicación del algoritmo, consistiría en un mero ejercicio casuístico. Los datos expuestos recomiendan, al menos, cautela al analizar los resultados de las clasificaciones. Una segunda posibilidad consistiría en utilizar directamente la clasificación ESeC, que se encuentra debidamente documentada, pero tal evaluación ello escapa a los objetivos de este artículo.

Los trabajadores informales en el esquema de clases sociales

En la clasificación de trabajadores informales se puede adoptar una perspectiva productiva, como lo hacen Solís y colegas ([2019](#)), donde la clase de trabajadores informales consiste en los autoempleados y asalariados en empresas de menor tamaño. Una segunda alternativa consiste considerar una definición del sector informal basada en el empleo desregulado sin restricción de tamaño ([Espinoza et al., 2023](#)). Ambas aproximaciones poseen ventajas y desventajas. La productiva remite a un segmento bien identificado, pero incluye todas las pequeñas empresas,

de las cuales algunas pueden no ser informales. La entrada por el trabajo desregulado puede incluir empleados formales que aparecen desregulados porque establecen un vínculo comercial y no laboral, como ocurre en Chile con los consultores y otros trabajos subcontratados. Puede ocurrir también que aparezca como informal un trabajador que recibe pensión de retiro y que en Chile posee un régimen de contrato diferente, sin cotizaciones previsionales.

En la clasificación siguiente se consideran informales desde el punto de vista productivo y de la regulación de las relaciones laborales. Desde el punto de vista productivo, son informales los autoempleados que no emiten boleta o factura, vale decir que desarrollan su actividad sin pagar impuestos. Entre los empleados se consideran informales en cualquiera de los siguientes casos: trabajadores dependientes sin contrato de trabajo o sin cotizaciones previsionales y familiares no remunerados. En el cuadro siguiente se presenta la evolución de los trabajadores informales en empresas de cualquier tamaño y en establecimientos con menos de 10 ocupados, incluyendo trabajadores por cuenta propia.

Cuadro 4: Proporción de trabajadores informales según tamaño del establecimiento. Chile 2016, 2018, 2021

	2016	2018	2021
Cualquier tamaño	30.6	33.8	32.3
Menos de 10 ocupados	22.0	23.6	24.6

Fuente: Encuesta ELSOC

Se aprecia una variación en la proporción de trabajadores informales según el tamaño del establecimiento. Cuando no hay restricción en el tamaño, la proporción de trabajadores informales alcanza alrededor de un tercio de los ocupados, cifra cercana a la proporción reportada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (Espinoza et al 2023). Si se aplica la restricción de considerar solamente para establecimientos con menos de 10 ocupados, la proporción disminuye, para representar entre 22% y 25% de los ocupados. Solís et al. (2019) reportan 25% de informales en promedio para América Latina y 15,3% para Chile. Las diferencias con las estimaciones de este artículo más que a la fuente de los datos se debe a la diferencia de criterio para definir al informal.

Cuadro 5: Distribución de trabajadores informales en clases EGP, en porcentaje. Chile. 2016-2021

Clase EGP	Empresas de todo tamaño	Empresas < 10 trabajadores
I	8.7	3.7
II	13.4	10.5
IIIa	8.3	8.5
IIIb	7.2	6.5

IVa	3.6	4.8
IVb	30.1	41.1
V	1.3	1.3
VI	6.9	5.3
VIIa	18.4	16.3
VIIb	1.0	0.7
IVc	1.1	1.4

Fuente: Encuesta ELSOC

El procedimiento seguido por Solís y colegas (2019), además de restringir la informalidad a las empresas pequeñas, consiste en un refinamiento de la clasificación EGP, de manera que por definición no hay informales en las clases I, II, IIIa y IVa. Al seguir el criterio de Solís y colegas (2019) en los datos chilenos, la informalidad disminuye a 16,9%, cerca de la estimación de Solís y colegas, con otros datos. Como se vio en la sección anterior, la heterogeneidad inducida por el algoritmo en las clases I y II hace poco conducente definir la informalidad de esta forma. Eliminar la informalidad por definición en algunas clases parece plausible desde la lógica de la clasificación, pero puede llevar a la sorpresa de que en realidad se encuentren allí trabajadores informales que no pertenecen a esas clases. En el Cuadro 5 se presentan la distribución de la informalidad en las clases EGP para los datos chilenos considerando todas las empresas y solamente las de tamaño menor a 10 trabajadores.

En Chile, podemos encontrar informalidad en las relaciones laborales de todas las clases, pero es especialmente marcada entre Trabajadores por Cuenta Propia y Pequeños empresarios, donde alcanza cerca dos tercios de los ocupados en empresas de cualquier tamaño y 44,9% en las empresas más pequeñas. El porcentaje de informalidad entre los obreros semicalificados alcanza 18,4% (16,3% en empresas pequeñas). Llama la atención la presencia de trabajadores informales en las clases de servicio (I y II), que alcanza 22,1% cuando no se considera el tamaño de la empresa y 14,2% en empresas pequeñas. Estos últimos datos deben interpretarse con cautela pues, como se mostró en el Cuadro 4, es probable que algunos trabajadores se encuentren incorrectamente clasificados. Otras explicaciones requieren considerar las características del mercado de trabajo, por ejemplo relaciones laborales establecidas en el marco de contratos comerciales, como ocurre con la subcontratación o trabajadores pensionados que, legalmente, no pagan cotizaciones previsionales. También se podrían encontrar en esta categoría consultorías expertas ofrecidas por no profesionales, como ocurre, por ejemplo, en la minería.

El Cuadro 6 verifica la consistencia de la clasificación de informalidad con la situación laboral para los datos de 2016 a 2021. Los casilleros representan la proporción de trabajadores informales respecto del total de ocupados en cada casillero y, por la construcción de la tabla, no suman 100 en ninguna dirección.

Clave de lectura: El 36,4% de los empleadores en establecimientos de 10 o más trabajadores lo hacen en condiciones de informalidad.

La informalidad en las relaciones laborales se encuentra en todas las situaciones laborales, pero especialmente entre los trabajadores por cuenta propia, donde alcanza sobre 70% de los trabajadores. Existe informalidad entre los empleadores de todo tamaño, vale decir, empresas

que operan sin encontrarse legalmente constituidas. Entre los empleados, la informalidad es menor en las empresas de menor tamaño, pero ello refleja que hay menos trabajadores, especialmente supervisores, que son poco requeridos en operaciones de baja complejidad. El porcentaje de informalidad entre los supervisores en establecimientos de mayor tamaño, puede reflejar tanto un incremento debido al aumento de la escala de operación como sistemas de subcontratación bajo relaciones comerciales que se asimilan a una relación laboral. En el total, el porcentaje de informalidad se incrementa de 23,4 a 32,4 según se considere las empresas pequeñas o todas las empresas, respectivamente.

Cuadro 6. Proporción de trabajadores informales según situación laboral tamaño del establecimiento y tamaño del establecimiento . Chile 2016-2021

Situación laboral	Todos los tamaños	Menos de 10 ocupados
Empleador 10+	36.4	0.0
Empleador < 10	28.4	28.4
TCP	72.3	70.9
Supervisores	18.5	6.9
Empleados	25.8	15.1
Total	32.4	23.4

Fuente: Encuesta ELSOC

Esto indica que en las empresas mayor tamaño se encuentra prácticamente un tercio de los trabajadores informales. En consecuencia, al restringir la informalidad a las empresas más pequeñas queda fuera de consideración una proporción notoria de trabajadores informales.

Conclusiones

- El examen de las discusiones en torno a los fundamentos de los esquemas de clase muestra la pertinencia de usar las relaciones laborales, pues responden a las discusiones y criterios utilizados históricamente en la elaboración chilena sobre las clases sociales. Las clases, sin embargo, no corresponden a Grupos Socioeconómicos, que en la discusión puede confundirse con el concepto de clase. La medida en que las clases se asocian con preferencias, comportamientos, logros educacionales, calidad de vida y otros aspectos de la vida social, es un problema diferente, que requiere estudios específicos y debiera abordarse de manera acorde. Este tipo de estudios puede demandar refinamientos a los criterios de clasificación, pero el objetivo de una clasificación de clase es mostrar cómo las posiciones en la estructura económica, mediadas por las relaciones laborales, explican las pautas de desigualdad en la sociedad. Si las clases se construyen como grupos socioeconómicos, problemas asociados con la desigualdad de clase, como los niveles de ingreso o los retornos de la educación no podrían estudiarse porque forman parte de los criterios de estratificación.

- En términos operativos, el análisis realizado entrega indicaciones de las limitaciones y problemas del algoritmo utilizado para generar la clasificación EGP, que debe examinarse cuidadosamente. Más que continuar con los esfuerzos por adaptar la clasificación lograda con el algoritmo debiera iniciarse un esfuerzo comparativo que permita validar el esquema y

establecer criterios claros de asignación. Complementariamente, podría validarse la ESeC, que buscó resolver algunos de los problemas que aparecen en la discusión latinoamericana, como el carácter de las pequeñas empresas y las prácticas clientelistas en el empleo público. Un estudio comparado debiera incorporar también un análisis de las relaciones laborales en las ocupaciones en términos de autonomía en la gestión de metas y flexibilidad de horarios y sistemas de trabajo.

- Finalmente, con respecto del sector informal, la perspectiva de la desregulación, separando las empresas que no pagan impuestos, ofrece mejor rendimiento que considerar solamente las empresas de menor tamaño. Al menos en Chile, no hay razones para sostener que la desregulación laboral y comercial esté concentrada solamente en las empresas de menor tamaño. Más aún, el funcionamiento del mercado de trabajo presenta hoy múltiples complejidades que la distinción formal-informal no permite comprender adecuadamente. La perspectiva de la desregulación puede responder mejor al desafío de integrar estas lógicas en los esquemas de relaciones laborales. También resulta complejo operar con la distinción entre formalidad e informalidad en los estudios de movilidad intergeneracional. Operativamente es poco probable que se pueda determinar con claridad la condición de informal en la generación de origen. Conceptualmente, porque las condiciones que definen la informalidad en el mercado laboral actual pueden no corresponder a las de la informalidad en las generaciones de origen. Por ello parece más pertinente verificar la homogeneidad de pautas de movilidad entre trabajadores formales e informales en la generación de destino, que intentar introducir la distinción en la clasificación misma.

- La distinción entre formal e informal captó, hace 50 años, una fisura evidente del mercado de trabajo, pero hoy no da cuenta de las complejidades que ha alcanzado el mercado laboral en su progresiva incorporación de formas desconcentradas y desreguladas de trabajo. Lo anterior plantea el desafío de entender el mercado de trabajo de forma menos esquemática, usando conceptualizaciones menos rígidas que tomen en cuenta el entramado reticular que caracteriza la operación del mercado de trabajo (Tubaro 2021). La idea clave es que la clasificación de las clases no puede separarse del proceso más amplio de estructuración social ([Giddens, 1983](#)), la cual puede plantearse en términos de equivalencia estructural ([White et al., 1976](#)). La condición de agrupamiento que plantea la clase social supone que los individuos poseen relaciones similares con personas en su posición o en otra, lo cual hace que su posición sea equivalente en términos estructurales. La relación con otros trabajadores corresponde, por ejemplo, al componente comunitario de la clase, mientras que la vinculación con empleadores los hace equivalentes en su condición de empleados. Desde este punto de vista, la ocupación tiene menos relevancia en sí misma que el contexto de relaciones sociales en la cual se ejerce ([Pahl, 1984](#)). Si acaso las posiciones definidas se condicen con intereses comunes u oportunidades de vida es una cuestión empírica, posterior a la clasificación (Espinoza y Otero 2024).

Referencias

Albagli, E., y Tapia, M. (2018). *“Mercado laboral: hechos estilizados e implicancias macroeconómicas”* [Documento de Trabajo]. División de Política Monetaria. Banco Central de Chile.

Barozet, E. (2024). Cincuenta años de evolución de los estudios de estratificación social en

chile: un breve recuento mediante hitos. En R. Baño (Ed.), 1973. *Unidad popular interrumpida* (pp. 39–66). FACSOL-LOM.

Barozet, E., Contreras, D., Espinoza, V., Gayo, M., y Méndez, M. L. (2021). Clases medias en tiempos de crisis: vulnerabilidad persistente, desafíos para la cohesión y un nuevo pacto social en Chile. En *Documentos de proyectos LC/TS.2021/101*. CEPAL. <https://hdl.handle.net/11362/47184>

Benería, L. y M. Roldán. (1987). *The crossroads of class and gender. Industrial homework, subcontracting and household dynamics in Mexico City*. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Bernasconi, M. S.; Golovanevsky, L. A.; Romero, M. A.. (2019). Desigualdad y desarrollo. Multidimensionalidad y heterogeneidad estructural. *Lavboratorio*, 29:13-33 ISSN 1852-4435

Bourdieu, P. (1984). *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. London: Routledge.

Breen, Richard (2004). *Social Mobility in Europe*. Oxford:Oxford Academic <https://doi.org/10.1093/0199258457.001.0001>

Cardoso, Fernando H. y Faletto, E. (1968). *Dependencia y Desarrollo en América Latina*. Siglo XXI

Castells, M. y A. Portes. (1989). "World underneath: The origins, dynamics and effects of the informal economy." Pp. 11-40 en *Labour class and the international system*. Alejandro Portes, Manuel Castells y Lauren Benton (Eds). New York: Academic Press Inc.

Castells, M. (1973). *Imperialismo y urbanización en América Latina*. G. Gili.

Connolly, P. (1985). "The politics of the informal sector: A critique." En *Beyond Employment. Household, gender and subsistence*. Editado por Enzo Mingione and Nanke Redclift. Oxford, UK: Basil Blackwell.

Dell'Anno, R. (2022). Theories and definitions of the informal economy: A survey. *Journal of Economic Surveys*. 36(5):1610-1643

DeSoto, H. (1986). *El otro sendero*. Lima: El Barranco.

Díaz, A. 1991. "Nuevas tendencias en la estructura social chilena. Asalarización informal y pobreza en los ochenta" *Proposiciones* 20:88-119. Santiago, Chile

Dubet, F. (2000). *Les inégalités multipliées* (p. 70). Editions de L'Aube.

Erikson, R., y Goldthorpe, J. H. (1992). *The constant flux: A study of class mobility in industrial societies*. Clarendon Press.

Espinoza, V. y Barozet, E. (2019). Contention, debates and policies about social inequality in Chile today. En E. Bogalska-Martin y E. Matteudi (Eds.), *The social question in the global world. The quest for an effective paradigm* (pp. 81–108). Cambridge Scholars Publishing.

Espinoza, V; Barozet, E.; Méndez, M.L.; Gayo, M.; Contreras, D. (2023). "Estratificación, desigualdad y pacto social en el Chile actual: evaluaciones y preferencias de la población para la política pública". En *Documentos de proyectos (LC/TS.2023/114)*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Espinoza, V., Barozet, E., y Méndez, M. L. (2013). Estratificación y movilidad social bajo un modelo neoliberal: El caso de Chile. *Revista Lavboratorio*, 25, 169–192.

Espinoza, V. y Otero, G. (2024). "Social capital and network processes in the making of social class inequality. Debates, concepts and measurement". pp 333-351 in *The Handbook on Inequality and Social Capital*. Edited by Steve McDonald, Rochelle Côté y Jing Shen. UK: Edward Elgar Publishing Ltd

Fernandes, F. 1975. *Sociedade de classes e subdesenvolvimento*, Rio de Janeiro, Zahar

Fernandes, F. 2008[1980]. En los marcos de la violencia. pp 151-194 en *Dominación y desigualdad: el dilema social latinoamericano*. Florestan Fernandes; compiladora Heloísa Fernandes. Bogotá: Siglo del Hombre Editores y CLACSO

Filgueira, C., y Geneletti, C. (1981). *Estratificación y movilidad ocupacional en América Latina* (Vol. 39). Naciones Unidas, Cepal.

Galleguillos, C. (2014). Elementos para la observación de la calidad del empleo en la estructura ocupacional en Chile. *Revista Némesis*, XI, 45-57.

Ganzeboom, H. B. G., y Treiman, D. J. (2003). Three internationally standardised measures for comparative research on occupational status. En J. H. P. Hoffmeyer-Zlotnik y C. Wolf (Eds.), *Advances in cross-national comparison: A european working book for demographic and socio-economic variables* (pp. 159–193). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-9186-7_9

Germani, G. (1971). *Política y sociedad en una época de transición. De la sociedad tradicional a la sociedad de masas*. Paidós.

Giddens, A. (1983). *La estructura de clases en las sociedades avanzadas*. Alianza Editorial.

Goldthorpe, J. H., y Marshall, G. (1992). The promising future of class analysis: A response to recent critiques. *Sociology*, 26, 381–400. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:145767336>

Grusky, D. (2005). Foundations of a neo-Durkheimian class analysis. In E. Wright (Ed.), *Approaches to Class Analysis* (pp. 51–81). Cambridge: Cambridge University Press.

Gutiérrez Crocco, F. y Atzeni, M. (2022), Entre precarización, control algorítmico y movilización. Efectos de la pandemia de COVID-19 en las y los repartidores de plataformas en Argentina y Chile. *Revista Internacional del Trabajo*, 141:489-511. <https://doi.org/10.1111/ilrs.12206>

Haidar, j.; Arias, C.; Diana Menéndez, N. (2023). Precarización y trayectorias laborales itinerantes de trabajadoras/es de plataformas de reparto en la ciudad de Buenos Aires (2020-2022). *Lavboratorio*, 33.2:9-35 ISSN 1852-4435

Hoffman, K. y Centeno, M. A.. (2003). The Lopsided Continent. Inequality in Latin America. *Annual Review of Sociology*. 29:363:390

Kowarick, L. (1975). *Capitalismo e Marginalidade na America Latina*. Rio de Janeiro:Paz e Terra.

León, A., y Martínez, J. (1998). La estratificación social chilena hacia fines del siglo XX. En C. Toloza y E. Lahera (Eds.), *Chile en los noventa* (pp. 285–312). Presidencia de la República/Dolmen.

Lewis, A. W. (1960):"Desarrollo económico con oferta ilimitada de mano de obra". *El Trimestre Económico*, vol.XVII, 108, 629-675.

Lumley T. (2024). "survey: analysis of complex survey samples." R package version 4.4.

Maloutas, T. (2007). Socio-economic classification models and contextual difference: The 'European socio-economic classes' (ESeC) from a South European angle. *South European Society and Politics*, 12, 443–460. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:154925883>

Martínez, J., y León, A. (1987). *Clases y clasificaciones sociales. Investigaciones sobre la estructura social chilena 1970-1983*. CED / SUR Ediciones.

Martínez, R., Holtz, R., Silva, L. H., y Espíndola, E. (2022). "Estratificación y clases sociales en América Latina: Dinámicas y características en las dos primeras décadas del siglo XXI". En *Documentos de proyectos (LC/TS.2022/214)*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Márques Perales, I. (2023). Élités, estratificación e informalidad: tres propuesta desde el análisis de clases. *Lavboratorio*, 33.1:176-188 ISSN 1852-4435

Maurizio, R. (2016). Non-standard forms of employment in Latin America: Prevalence, characteristics and impacts on wages / Roxana Maurizio ; International Labour Office, Inclusive Labour Markets, Labour Relations and Working Conditions Branch. - Geneva: ILO. (Conditions of work and employment series ; No. 75)

Medina-Echavarría, J. (1963). Consideraciones sociológicas sobre el desarrollo económico de América Latina. CEPAL. E/CN.12/646

Moser, C. (1978). "Informal sector or petty commodity production: Dualism or dependence in urban development?" *World Development* 6 (9/10):1041-1064.

Murmis, M. (2010). Clases sociales en el primer Germani. En C. Mera y J. Rebón (Eds.), *Gino Germani. La sociedad en cuestión. Antología comentada* (pp. 70–75). CLACSO.

Nun, J. (1969). Superpoblación relativa, ejército industrial de reserva y masa marginal. *Revista Latinoamericana de Sociología*, V(2), 178–236.

Nun, J. (1999). El futuro del empleo y la tesis de la masa marginal. *Desarrollo Económico*, 38(152), 985–1004. <http://www.jstor.org/stable/3467265>

OECD/ILO (2019), Tackling Vulnerability in the Informal Economy, Development Centre Studies, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/939b7bcd-en>.

Oesch, D. (2006). *Redrawing the class map: Stratification and Institutions in Britain, Germany, Sweden and Switzerland*. Palgrave Macmillan.

OIT (Organización Internacional del Trabajo).(2018). El mercado laboral en Chile: Una mirada de mediano plazo. Santiago: Oficina de la OIT para el Cono Sur.

Pahl, R. (1989). Is the emperor naked? Some questions on the adequacy of sociological theory in urban and regional research. *International Journal of Urban and Regional Research*, 13, 709–720.

Pahl, R. E. (1984). *Divisions of labour*. Blackwell.

Pakulski, J. (2005). *Approaches to class analysis* (E. O. Wright, Ed.; pp. 152–179). Cambridge University Press. <http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511488900.007>

Portes, Alejandro y John Walton. (1981). Labor, class and the international system. New York: Academic Press Inc.

PREALC-OIT. Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe. Oficina Internacional del Trabajo. 1991. PREALC, retrospectiva del sector informal urbano en América

Latina : una bibliografía anotada. Ginebra: La Oficina

Raczynski, D. (1974). La estratificación ocupacional en Chile. En R. Downey (Ed.), *Los actores de la realidad chilena* (pp. 33–100). Editorial del Pacífico-IDEP.

Raczynski, D. (1978). El sector informal urbano. interrogantes y controversias. En *Estudios cieplan*.

Rose, D., y Harrison, E. (2010). *Social class in Europe: An introduction to the European Socio-economic Classification* (1st ed.). Routledge.

Rose, D., y Harrison. 2010. ESeC in retrospect and prospect. An epilogue. pp 267-298 en Rose, D., y Harrison, E. (Eds.). *Social Class in Europe: An introduction to the European Socio-economic Classification* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203930588>

Ruiz, C. y Boccardo, G. (2014). Santiago: Fundación Nodo XXI y Ediciones El Desconcierto.

Ruiz-Tagle, J. y K. Sehnbruch. (2015). ¿Más trabajo pero no mejor en Chile? La importancia capital del contrato indefinido. *Revista Internacional del Trabajo*, 134(2):247-274

Sautu, R., Boniolo, P., Dalle, P., y Rodríguez, S. (2010). Las clases sociales según Gino Germani. En C. Mera y J. Rebón (Eds.), *Gino Germani. La sociedad en cuestión. Antología comentada* (pp. 76–84). CLACSO.

Savage, M., Devine, F., Cunningham, N., Taylor, M., Li, Y., Hjellbrekke, J., Le Roux, B., Friedman, S., y Miles, A. (2013). A new model of social class? Findings from the BBC's Great British Class Survey Experiment. *Sociology*, 47(2):219–250. <https://doi.org/10.1177/0038038513481128>

Singer, P. (1976). Urbanización, dependencia y marginalidad en América Latina. En *Estudios e investigaciones*. <https://EconPapers.repec.org/RePEc:ecr:col093:34526>

Solari, A. E.; R. Franco, y J. Jutkowitz. (1976). Teoría y acción social del desarrollo en América Latina. Mexico: Siglo XXI.

Solís, P., y Boado, M. (2016). *Y sin embargo se mueve. Estratificación social y movilidad intergeneracional de clase en América Latina* (P. Solís y M. Boado, Eds.). El Colegio de México.

Solís, P., Chavez Molina, E., y Cobos, D. (2019). Class structure, labor market heterogeneity and living conditions in Latin America. *Latin American Research Review*, 54(4), 854–876. <https://doi.org/10.25222/larr.442>

Smallenbroek, O., Hertel, F. R., & Barone, C. (2024). Measuring Class Hierarchies in Postindustrial Societies: A Criterion and Construct Validation of EGP and ESEC Across 31 Countries. *Sociological Methods & Research*, 53(3), 1412-1452. <https://doi.org/10.1177/00491241221134522>

Smith, J. (1984). "Non-wage labour and subsistence." En *Households and the world economy*. Edited by Joan Smith, Immanuel Wallerstein and Hans-Dieter Evers. Beverly Hills: Sage Publications.

Souza, P. R.; Tokman, V. E. (1976). "The informal urban sector in Latin America". *International Labour Review*, Vol. 114, No. 3, pp. 355–365

Tokman, V. E. (1978). An exploration into the nature of informal-formal sector

relationships. *World Development*, 6(9–10), 1065–1075.

Torche, F. (2006). Una clasificación para la sociedad chilena. *Revista de Sociología (Universidad de Chile)*, 2, 15–44.

Torrado, S. (1992). *Estructura social de la argentina 1945-1983*. Ediciones de la Flor.

Touraine, A. (1976). Las sociedades dependientes. Ensayos sobre América Latina. Mexico: Siglo XXI Editores.

Tubaro, P. (2021). Disembedded or Deeply Embedded? A Multi-Level Network Analysis of Online Labour Platforms. *Sociology*, 55(5):927-944. 10.1177/0038038520986082

Tubaro, P. y Casilli, A. A. (2019). Micro-work, artificial intelligence and the automotive industry. *Journal of Industrial and Business Economics* 46:333–345 <https://doi.org/10.1007/s40812-019-00121-1>

Vejar, D. J. (2022). La precariedad como condición transversal de las sociedades contemporáneas. Pp 39-56 en *Precariedades del trabajo en América Latina. Continuidades estructurales, experiencias de coyuntura y desafíos ante la pandemia*. Coordinado por Sandra Guimenez y Francisco Favieri. Colección Pensamiento Nacional. Buenos Aires: Edunpaz. Editorial Universitaria.

White, H. C., Boorman, S. A., y Breiger, R. L. (1976). Social structure from multiple networks. i. blockmodels of roles and positions. *American Journal of Sociology*, 81, 730–780. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:11070646>

Wright, E. (2005). Social class. In G. Ritzer (Ed.), *Encyclopedia of Social Theory* (pp. 718–724). London: Sage Publications.

Yaish, M. ; Andersen, R. (2012). Social mobility in 20 modern societies: The role of economic and political context, *Social Science Research*, 41(3):527-538.

SEMBLANZA

Vicente Espinoza. Investigador adjunto de la línea "Geografías del Conflicto y la Cohesión" de COES. Doctor en Sociología por la Universidad de Toronto, Canadá. Investigador principal del Fondecyt N° 1171426, "La estructura de la sociabilidad en Chile y sus consecuencias para nuestra convivencia. Análisis longitudinal de redes sociales" (2017-2022), haciendo uso del Estudio Longitudinal Social de Chile (ELSOC) de COES; Co-investigador del Fondecyt Regular (2021-2024) "'No, esos no se cuentan'. Instituciones informales y cohesión social: legitimación, crítica y disputas en el orden normativo en el Chile actual". Ha publicado cuatro libros y más de un centenar de artículos académicos. Su investigación se centra en cohesión social, inequidad y capital social; instituciones políticas informales y política subnacional.

Agradecimientos / financiación: ANID/ Fondecyt / 11240249, ANID / FONDAP / 15130009 / 1523A0005

Disciplina: Sociología

Subdisciplina: Clases sociales

Tipo, método o enfoque del estudio: análisis estadístico.



FLUIDEZ SOCIAL EN MONTEVIDEO, 1996 - 2024

Marcelo Boado

mrbmsoc2001@gmail.com

Universidad de la Republica, Departamento de Sociologia.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6156-8335>

Resumen

Este trabajo analiza la movilidad social para la ciudad de Montevideo en 1996, 2010 y 2024, y en esa dirección, busca actualizar los resultados del autor de 2016, y debatir algunas conclusiones. Se suprimió la referencia a la movilidad absoluta de 2016, y se analiza solamente la movilidad relativa (asociación) del período 1996-2024. Se hace en dos partes, primero se analiza la asociación que subyace a las tendencias de período, el objetivo es probar la vigencia de la tesis de la fluctuación sin tendencias (FST) frente a la evolución temporal de la modernización (ETM) a lo largo del período, en las subpoblaciones de hombres y mujeres; la segunda parte exploran las peculiaridades de la asociación en dichas subpoblaciones en cada año de relevamiento del período, para medir los efectos herencia y movilidad por medio de modelos de cuasi-independencia, de cruces, de distancias y topológicos.

Palabras clave: movilidad social, estructura de clases, Uruguay, evolución de las clases.

SOCIAL FLUIDITY IN MONTEVIDEO, 1996 - 2024

Abstract

This paper analyses social mobility for the city of Montevideo in 1996, 2010 and 2024, and in that direction, seeks to update the author's 2016 results, and discuss some conclusions. The reference to absolute mobility for 2016 has been removed, and only relative mobility (association) for the period 1996-2024 is analysed. It is done in two parts, first analysing the association underlying the period trends, the aim being to test the validity of the trend-free fluctuation thesis (FST) against the temporal evolution of modernisation (ETM) over the period, in the sub-populations of men and women; the second part explores the peculiarities of the association in these sub-populations in each survey year of the period, to measure the

inheritance and mobility effects by means of quasi-independence, crossover, distance and topological models.

Key-words: social mobility, class structure, Uruguay, class evolution.

FLUIDEZ SOCIAL EM MONTEVIDÉU, 1996 - 2024

Resumo

Este artigo analisa a mobilidade social da cidade de Montevidéu em 1996, 2010 e 2024 e, nesse sentido, busca atualizar os resultados do autor de 2016 e discutir algumas conclusões. A referência à mobilidade absoluta para 2016 foi removida, e apenas a mobilidade relativa (associação) para o período de 1996 a 2024 é analisada. Isso é feito em duas partes: a primeira analisa a associação subjacente às tendências do período, com o objetivo de testar a validade da tese de flutuação sem tendência (FST) em relação à evolução temporal da modernização (ETM) durante o período, nas subpopulações de homens e mulheres; a segunda parte explora as peculiaridades da associação nessas subpopulações em cada ano de pesquisa do período, para medir os efeitos de herança e mobilidade por meio de modelos de quase-independência, cruzamento, distância e topológicos.

Palavras-chave: mobilidade social, estrutura de classes, Uruguai, evolução de classes..

Introducción.

Este trabajo analiza la movilidad social para la ciudad de Montevideo en 1996, 2010 y 2024, y en esa dirección, busca actualizar los resultados del autor de 2016, y debatir algunas conclusiones. Se suprimió la referencia a la movilidad absoluta de 2016, y se analiza solamente la movilidad relativa (asociación) del período 1996-2024. Se hace en dos partes, primero se analiza la asociación que subyace a las tendencias de período, el objetivo es probar la vigencia de la tesis de la fluctuación sin tendencias (FST) frente a la evolución temporal de la modernización (ETM) a lo largo del período, en las subpoblaciones de hombres y mujeres; la segunda parte exploran las peculiaridades de la asociación en dichas subpoblaciones en cada año de relevamiento del período, para medir los efectos herencia y movilidad por medio de modelos de cuasi-independencia, de cruces, de distancias y topológicos.

El análisis de las tendencias y patrones de la movilidad social.

En la siguiente sección se repasan las conclusiones que argumentan la importancia de analizar las tendencias temporales de la movilidad social según la fluctuación sin tendencias (FST) y la evolución temporal de la movilidad (ETM), porque apuntan a medir la evolución de la relación de orígenes y destinos de clase en las sociedades contemporáneas

En un inicio el fervoroso esfuerzo de Sorokin (1927) aportó, con un marco histórico evolutivo, aunque incompleto, una conclusión sorpresiva: en el largo plazo no era posible predecir una tendencia de las transformaciones de la estructura de clases, estas podrían obedecer a cambios súbitos como resultados de guerras, revoluciones y plagas, o a cambios mínimos y parciales, no exentos de bloqueos y fronteras de clases. Fue el inicio de la tesis de la fluctuación sin tendencias (en adelante FST¹⁴).

En la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, la preocupación por la reconstrucción de las sociedades europeas, universalizó del debate sobre la contraposición de los senderos capitalistas y comunistas al desarrollo (Kuznets, 1955; Rostow, 1960). Y ello resucitó en la sociología una preocupación por las tendencias de las transformaciones de las sociedades industriales. En esa dirección los trabajos de Glass, Svalastoga, Lipset, Bendix y Zetterberg, apostaron a domar las tendencias evolutivas de la movilidad social, que hoy se llaman absolutas. Lipset, Bendix y Zetterberg (1963), a contrapelo de los pronósticos de Sorokin, apostaron por una tendencia convergente de la tasa bruta de movilidad social en las sociedades industriales de economía de mercado. El resultado a medida que se aplicaron nuevas encuestas tuvo dificultades en ser verificado, pero abrió el camino al surgimiento de la evolución temporal de la movilidad social (en adelante ETM).

Un mojón que abrió el camino a los modelos loglineales fue el trabajo de Goodman (1965), que invitaba a reconsiderar a la luz del análisis de asociación la hipótesis de la movilidad perfecta propuesta por Glass, a partir de nuevos métodos, precisamente para los ejemplos británico y danés.

Hasta mediados de los años 70s del siglo XX, con los trabajos comparativos de Featherman, Jones y Hauser (1975), no emergió una hipótesis dura respecto de las tendencias de la movilidad social que se uniera con el análisis de asociación. A partir de entonces, ya no fueron las tendencias descriptivas de los outflows, inflows, ni las movilidades estructurales y circulatorias, sino la asociación fundada en la presencia de un patrón asociativo entre orígenes y destinos (a través de las cohortes presentes en la muestra) lo que fundamentaría la caracterización de la movilidad en las sociedades industriales. A esa conclusión se le conoció desde entonces como tesis FJH (acrónimo de sus autores), y sostenía que en las sociedades de economía de mercado y predominio de familias nucleares, la movilidad social era estable entre las generaciones.

Fundados en pormenorizados estudios de la estructura de clases de Reino Unido (Golthorpe et al 1969), y desafiados por la hipótesis de la constante universal de Treiman (1977) y por la convergencia de la movilidad social entre cualquier tipo de países observada por Ganzeboom (1989), Erikson y Goldthorpe (1992) ensayaron una cerrada defensa de la vigencia de la tesis FJH para todos los países industriales¹⁵. El trabajo de estos autores fue innovador y sus efectos

¹⁴ Precisamente Erikson y Goldthorpe lo señalaron y lo recuperaron para sustentar su conclusión de 1992.

¹⁵ Examinaron datos de los años 70s de sociedades europeas comunistas y capitalistas industrializadas: Gran Bretaña, Francia, Irlanda, Irlanda del Norte, Polonia, Hungría, Alemania Federal, Holanda,

llegan hasta nuestros días. Primero, distinguieron entre las tendencias de la movilidad absoluta y la relativa; de la primera señalaron su inconveniencia para sacar conclusiones de largo plazo como pensaron Lipset, Bendix y Zetterberg, y de la segunda destacaron su importancia para examinar la desigualdad de oportunidades a partir del análisis de asociación. Segundo, realizaron la importancia de examinar las tendencias temporales de la movilidad social, para lo que situaron a las posiciones marxistas y liberales en los polos de las tendencias sobre la movilidad social, y rescataron la vigencia de la tesis FJH sobre la estabilidad de la movilidad social, para lo que recuperaron tesis de la fluctuación sin tendencias de la movilidad social de Sorokin (FST). Tercero, para consolidar el objetivo previo, desarrollaron una forma precisa de medir la variación temporal de las tendencias, que amenazaba la vigencia de la tesis FJH, con los modelos Unidiff, un método que prosigue en uso. Y cuarto, apostaron a desarrollar un modelo (topológico) de examen profundo de la asociación, propio para las sociedades industriales, que recogió muchos aportes disciplinarios sobre los efectos de: la herencia de clase, la segmentación de clase, la segmentación sectorial y los circuitos de movilidad entre clases sociales.

Este trabajo marcó un antes y un después porque, por un lado, incentivó a definir condiciones para examinar los cambios temporales con modelos loglineales (que en un momento sólo favorecían la estabilidad) apoyando la tesis FJH (FST), y por otro lado, aportó formas de exploración alternativas de la movilidad social, indicando y precisando factores sustanciales como la herencia, la segmentación ocupacional, las afinidades y bloqueos entre clases, apoyando los aportes de Goodman (1979,1984), Hout (1983), Hauser (1978) y Goldthorpe (1987).

Sus principales conclusiones se situaron en el ámbito de la teoría macro sociológica: la primera fue que la movilidad social observada fluctuaba sin tendencia clara entre los grupos de edades de las poblaciones de los países analizados, porque precisamente las tendencias subían o bajaban entre las edades y no había un comportamiento monotónico; la segunda, destacó que, pese a las diferencias de modos de producción, podía identificarse una tendencia propia de los países industriales (core model), pese a las variaciones idiosincráticas de los países; y la tercera y más severa, fue que la movilidad social expresaba un mecanismo de desigualdad social variable y durable, de difícil reversión, salvo cambios socio-políticos que invirtieran las condiciones de vida de una generación a la siguiente. Aunque no negaron su incidencia, poco se aventuraron a decir sobre los períodos históricos, sobre las políticas sociales, fiscales, sanitarias, educativas o institucionales.

Años después, Breen y Luijkxs, Valet, y Mueller y Pollack (ver Breen 2004), iniciaron una serie de aportes sobre la movilidad social en sus países y con comparaciones entre sus países. Y concluyeron en la inaplicabilidad de la tesis de la fluctuación sin tendencias (FST) de la movilidad social de Erikson y Goldthorpe. Con datos posteriores a 1980 y aplicando los modelos de Erikson y Goldthorpe, las conclusiones se basaron en el análisis de grandes

Checoslovaquia; y de no europeas: Japón, Australia y USA. Sin menoscabo, cabe aclarar que las muestras usadas fueron de muy desigual tamaño.

conjuntos de datos que cubrían largos períodos de observación, principalmente para Suecia, Francia Alemania, Holanda y Gran Bretaña y otros países de Europa. A través de varios trabajos los mencionados autores concluyeron en la identificación de una larga y sostenida tendencia a la mejora de la movilidad social (ETM), y al debilitamiento del efecto de los orígenes de clase sobre las posiciones de clase actuales (Breen et al, 2009). Y casi todos ellos con nuevos métodos (Breen, 2010; Vallet 2017; Mueller y Pollack, 2015) concluyeron que el debilitamiento de los orígenes de clase sobre los destinos de clase se debió a la expansión de políticas educativas y a la reducción de la segregación de clase en el acceso a la educación (Breen et al 2021). Es decir, las políticas de bienestar, en muchos países industrializados de Europa, habrían tenido un efecto sedimentario de igualación a mediano plazo, que mejoró las oportunidades de las generaciones desde fines del siglo XX hasta inicios del siglo XXI. La particularidad de sus conclusiones fue que los cambios fueron observados en las cohortes, sin una clara identificación de períodos. Esto reforzó la tesis ETM, aunque de un modo diferente y mucho más preciso que en su formulación original. No obstante, hay trabajos que señalan que es posible identificar desigual suerte ocupacional entre las generaciones (Chauvel, 2006; Bukodi y Goldthorpe, 2019), lo cual no deja de contraponer la importancia de los períodos, o etapas donde las cohortes tuvieron su experiencia.

En conclusión, los trabajos sobre las tendencias de la movilidad social se han consolidado sobre modelos loglineales, que miden la evolución de la asociación entre los orígenes y destinos de cohortes en base a de sucesiones de muestras de poblaciones de países industriales. Claramente se ha consolidado la visión de que el patrón asociativo podría ser estable de no mediar un comportamiento monotónico a la baja, o al alza, entre los grupos de edades que integran las muestras de cada país. Ello sugiere que la experiencia de las propias cohortes ponderaría el patrón asociativo y reforzaría más a ETM que a FST.

En América Latina no existen aún conjuntos de datos estandarizados y para varios países con muestras similares y comparables como en Europa, por ende, las hipótesis son más fragmentarias. No obstante, existe una tradición extensa sobre la movilidad social que -sin aportar innovaciones metodológicas- ha proseguido investigado y pensando sobre la movilidad y el desarrollo social. En un inicio, vinculados a un proyecto común que aportó un sólo tipo de muestra Germani, Ahumada, Costa Pinto, Labbens y Solari - y contemporáneos a Lipset, Bendix y Zetterberg- (ver Boado 2022), forjaron visiones esperanzadas sobre la movilidad social para el desarrollo de sus países en Sudamérica¹⁶. Y también cifraron esperanzas en el papel de la educación. Pero al respecto, Germani, Solari et al, no ocultaron su preocupación por el desencuentro de la educación y las ocupaciones que ya se advertía en sus sociedades, y que podría conducir un proceso que no consolidara la meritocracia y debilitara la democracia.

Los estudios de movilidad social contemporáneos en América Latina, han recorrido un largo camino: desde los esfuerzos solitarios de Jorrat, Espinoza y Kessler, Boado y Solís, luego reunidos por el impulso del Centro Espinosa Yglesias para un nuevo tratamiento comparativo

¹⁶ Buenos Aires en Argentina, Santiago en Chile, Montevideo en Uruguay y Río de Janeiro en Brasil.

de países a nivel continental liderado por Solís y Boado¹⁷; pasando por el soporte de la red DEMOSAL, que desde Argentina aportó una secuencia invaluable de periódicos encuentros de investigadores sobre desigualdad y movilidad social; hasta la red INCASI, que con seminarios internacionales, publicaciones (2021), becas y pasantías, ha viabilizado y visibilizado el intercambio académico y el perfeccionamiento de investigadores sobre estratificación y movilidad social.

Desde ese sendero podemos recoger tres trabajos que aportan insumos a la reflexión que nos ocupa sobre las tendencias de la movilidad en América Latina. Solís y Boado (2021), revisando y expandiendo su trabajo de 2016, observaron que los niveles generales de fluidez social de Argentina, Brasil, Chile, México y Perú no diferían significativamente de los observados en los países de industrialización temprana. Pero en la comparación detallada con algunos países europeos, y más allá del volumen promedio general de fluidez social, hallaron que los países latinoamericanos mostraban una importante polarización de la movilidad social. Porque en ellos emergía un patrón dominante de las distancias sociales entre las clases agrícolas, las intermedias y las de servicios; mientras para los europeos las distancias entre las clases resultaban más atenuadas y graduales.

Fachelli et al (2021) apoyados en los anteriores resultados retomaron la tarea comparativa de los patrones de movilidad entre cinco América Latina (Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay) y 6 de Europa (Gran Bretaña, Francia, España, Italia, y Finlandia), en torno a la verosimilitud de la hipótesis de Ishida y Miwa (2011), que sostiene que en las sociedades de industrialización tardía se generaron mayores desigualdades sociales y concentraciones más dispares de las oportunidades de movilidad social. Fachelli et al procedieron en tres pasos. Primero, confirmaron, como Boado y Solís, que pese al nivel bruto de fluidez, los países europeos son más fluidos y los países latinoamericanos son más rígidos. Chile, México y Argentina se destacaron como los más rígidos en comparación con el resto; y por su parte Francia, Italia, Gran Bretaña y Finlandia resultaron los más fluidos, en gran medida impulsados por la movilidad social de las mujeres de estos países. En segundo lugar, cuando estudiaron las diferencias entre clases en cada país, confirmaron lo anticipado por Solís y Boado, un orden jerárquico de las clases compartido entre los países latinoamericanos, que refrendaba una marcada polarización de clases, con las clases agrícolas en un extremo y las clases de servicios en el otro. Las tendencias medidas a través de cohortes para cada país mostraron que los hombres de Brasil y Chile, y las mujeres de México y Chile, sufrían las mayores desigualdades de oportunidades. Mientras que, por el lado europeo, los hombres de Italia, España y Gran Bretaña, y las mujeres de Francia, Gran Bretaña y Finlandia, mostraron una menor desigualdad de oportunidades. En tercer lugar, al poner a todos los países en conjunto, buscaron medidas comparativas de desigualdad relativa entre clases y entre países. Esto permitió ver que la

¹⁷ El libro fue liderado Solís y Boado como se refiere de en la Bibliografía y fue editado por El Colegio de México y el Centro Espinosa Yglesias. El proyecto fue financiado por los mencionados centros más la FCS de Udelar. Los co-autores fueron Martín Benavides y Emanuel Etesse por Perú, Vicente Espinosa por Chile, Carlos Ribeiro por Brasil, Raúl Jorrat y Gabriela Benza por Argentina; y Patricio Solís por México y Marcelo Boado por Uruguay.

movilidad relativa entre clases era menos frecuente en los países latinoamericanos que en los europeos. Con ello corroboraron que había barreras altas para la movilidad social de hombres y mujeres en especial en Brasil, Chile y Argentina en comparación con los demás países. En cuarto lugar, Fachelli et al, avanzaron desde las conclusiones de Solís y Boado, y aportaron fiabilidad a la tesis de Ishida y Miwa, sosteniendo que la desigualdad de oportunidades de movilidad social entre países era consecuencia del diferente estadio de desarrollo industrial: con Gran Bretaña y Francia como industrialización temprana, Italia, España, y Finlandia como industrialización intermedia, y Argentina, Brasil, Chile México y Uruguay como industrialización tardía.

Recientemente Jorrat et al (2024) analizaron la movilidad social en Argentina Chile y Uruguay, explorando cómo la relación de la clase de origen con la clase de destino (OD) varió en función de la expansión educativa de esos tres países y a través de las cohortes de nacimiento relevadas en las muestras utilizadas. En el caso de Argentina y Chile sólo observaron variaciones en la asociación origen-destino a lo largo de las cohortes, que pasó de fuerte asociación para los nacidos a principios de los años 60, y se debilitó recién para los nacidos desde los años 80. Este resultado no se observó para Uruguay, donde la fluidez fue constante. Seguidamente, hallaron que en Argentina no se debilitó esa asociación a través de los niveles educativos, sino que se fortaleció, en contra de lo que propone la tesis composicional. En Chile y Uruguay, esa tesis tampoco tuvo andamio, sino que se afianzó una fluctuación sin tendencias. Jorrat et al concluyeron que la educación no habría desempeñado un papel notorio en la reducción de los efectos de los orígenes de clase en los destinos de clase como verificaron los estudios de Breen, Vallet, Mueller y otros (2021). En resumen, frente a los efectos temporales los autores prefirieron la explicación de tesis de la fluctuación sin tendencia (FST); y frente a los efectos de la educación convergieron con la opinión de Goldthorpe (2016) sobre controversial eficacia de las políticas educativas en la promoción de la movilidad social.

En conclusión, de la revisión de los antecedentes se reivindican los dos objetivos de este trabajo: la importancia de examinar las tendencias de la movilidad confrontando FST y ETM, y la importancia la peculiaridad de la asociación que subyace a la movilidad social.

Pero, tenemos algunas diferencias a favor, la mayoría de los trabajos, internacionales, regionales y nacionales, sólo han contado con una muestra, y eso hace que el examen de las tendencias sólo se ampare en las experiencias de las cohortes en muestra. En nuestro caso dispondremos de 3 muestras separadas cada 14 años. Nuestro trabajo pasado no realizó aperturas por cohorte, sino que fue un análisis en base a la repetición de muestras con un período de 14 años. Y ahora adicionamos otro período de 14 años más.

En nuestro trabajo de 2016 sobre las 2 primeras muestras fue difícil sostener cambios a la fluidez constante, no obstante, como indicamos, se percibía algo diferente en el comportamiento general de la asociación de OD para los hombres, que examinaremos si continua o se revierte ahora. Para las mujeres se ha observado a nivel internacional mayor movilidad social absoluta que los hombres, y que ésta suele ser en mayor medida ascendente que descendente. Sin

embargo, la movilidad relativa hace que las cosas cambien, y las tendencias de la asociación OD comenzaron a no distinguirse tan claramente de las de los hombres.

En consecuencia, hacemos nuestro el interés del conocimiento internacional y regional, sobre la plausibilidad del debilitamiento del efecto de los orígenes, pero en este trabajo no se medirán los efectos de la educación, ni de las cohortes; sino que apuntaremos a medir la evolución a través de los períodos, y de los efectos propios de la movilidad social y la reproducción de clases al interior de cada uno.

Datos y métodos

Los datos provienen de la Encuesta Movilidad Ocupacional y Trayectorias Educativas (EMOTE), que realizamos nosotros. Cubren historias retrospectivas de hombre y mujeres activos, mayores de 18 años, de la ciudad de Montevideo, durante un período de 28 años (1996, 2010 y 2024) para la ciudad de Montevideo. Las muestras de 2010 y 2024 fueron de 2030 casos, y la de 1996 de 850 casos; se seleccionó al azar un caso por hogar.

Siempre se analizaron por separado las subpoblaciones de hombres y mujeres, salvo en una instancia específica que se justifica su reunión.

Para medir la clase social de origen y de destino se aplicó el algoritmo EGP de Ganzeboom, adaptado por Solís y Boado (2016) para la realidad latinoamericana. En un primer paso se construyó EGP a 11 clases y en un segundo paso se colapsó en 5 clases (O: Orígenes de clase, D: clase actual: I+II, IIIab, IVab, V+VI, VIIab)¹⁸, luego se excluyeron todos los casos que tuvieran orígenes y destinos rurales, que por tratarse de muestras urbanas eran muy escasos (IVc y VIIb).

En la primera parte exploramos las tendencias asociativas a lo largo de un período de 28 años, con 3 encuestas. Para medir tendencias del período entre muestras se prefirieron modelos loglineales de 3 y 4 vías (se explican en próxima sección) (Erikson & Goldthorpe, 1992; Vallet 2004b, 2017). Se formularon en cada caso los modelos de asociación constante - que mide la hipótesis FST, y de variación uniforme -que mide la hipótesis ETM. En la segunda parte, para bucear dentro de los resultados de cada año, realizamos un análisis en profundidad de la herencia, la movilidad, la distancia entre clases, la segmentación y la afinidad de clases, y aplicamos modelos de cuasi-independencia, cruces, línea por línea, y topológicos (Goodman 1984, Hout, 1983, Erikson y Goldthorpe, 1992).

Resultados I Los efectos de período.

¹⁸ Ver Anexo.

En este primer análisis del lapso 1996-2024, no se analizaron los efectos de las cohortes, como suelen hacer otros estudios, porque se atribuye mayor importancia a los efectos período, que son los que experimentan muchas cohortes, y los que ofrecen amplitud suficiente de observaciones y de tiempo como para evitar las sobreposiciones de datos que suelen suavizar las tendencias. Y en nuestra opinión los que mejor sirven para medir a las hipótesis FST y ETM.

La pregunta que subyace a este primer análisis es: ¿qué ha pasado con la movilidad social de hombres y mujeres en Montevideo en 28 años? El análisis de las tendencias se desarrolló en dos pasos. Por un lado, para cada sexo, se aplicaron modelos de 3 vías, con las variables clase de Origen (O) clase de destino (D) y Período (P), para medir las hipótesis de fluidez sin tendencias (FST) o fluidez constante, y la de evolución temporal de la movilidad (ETM) o de variaciones uniformes. Y por otro lado, se reunió a ambas subpoblaciones un modelo 4 vías, sumando a O, D y P el efecto del sexo (S), también para medir FST y ETM, aunque modificadas a los efectos de escalar los resultados de las tendencias observadas de hombres y mujeres. Para una fácil lectura se fijó la base de comparación para los modelos ETM en la condición de las mujeres en 1996, que pensamos podría ser la más desfavorable para ellas. En la tabla 1 exponemos el análisis de las tendencias temporales.

Los modelos de 3 vías formulados apuntan a probar la vigencia o la modificación del modelo de fluidez constante; para lo cual es necesario identificar como verosímiles -o no- las tendencias temporales. Por ello pensamos que no tiene relevancia ni lugar considerar como modelo basal a uno que sostenga la independencia, que estará además muy lejos de los datos. Pero, además, los modelos de 3 y 4 vías apuntan a medir los efectos que modifican al modelo de asociación constante, que son los efectos empíricos de interés. Entonces, siguiendo las conclusiones de Erikson y Goldthorpe para nivel de 3 vías, y de Breen y Vallet para el nivel 4 vías, fijamos como basal al modelo de fluidez constante.

Volviendo a la tabla 1 en el panel A tenemos hombres y en el B mujeres, y en el C a ambos sexos. En los dos primeros tenemos los modelos de 3 vías para ver la tendencia para cada sexo¹⁹, y nos indican resultados dispares para hombres y mujeres a lo largo de 28 años. Para los hombres no ajusta el modelo de fluidez constante, sino el de variaciones uniformes (ETM), lo que señala una tendencia significativa a la mayor fluidez en un período de 28 años. Para nosotros es muy importante porque reafirma un resultado que visualizábamos en 2016, aunque no resultaba plenamente verosímil en los datos: que para los hombres había una tendencia a la mejora la fluidez social. Allí decíamos que para los hombres se percibía una tendencia al debilitamiento del efecto de los orígenes de clase sobre los destinos de clase. Por ese entonces, señalábamos que el desempeño de los hombres se había vuelto convergente con el desempeño típico de las mujeres, que era de una mayor movilidad. Hoy, el resultado 2024 confirma nuestra presunción previa. Y veremos que también se fortalece con el resultado del modelo de 4 vías.

¹⁹ Tabla P*O*D (Período*Origen*Destino=3*5*5=75 celdas) mide la estabilidad o la tendencia al cambio; Período (P: 1996, 2010, 2024); Clase de Origen (O: I+II, IIIab, IVab, V+VI, y VIIa); y Clase de Destino (D: I+II, IIIab, IVab, V+VI, y VIIa)

En el panel B para las mujeres en 2016 hallamos que, si bien fueron más móviles que los hombres en general, los datos indicaban una tendencia hacia la rigidez; y ahora observamos que se debilitó esa tendencia, y se inició otra nueva hacia la fluidez desde 2010 a 2024. En consecuencia, para las mujeres la contraposición de tendencias obliga sostener un modelo de fluidez constante entre 1996 y 2024.

Finalmente abordamos un modelo 4 vías en el panel C de Tabla 1 uniendo al sexo con los efectos período, origen y destino ²⁰. Allí vemos que un modelo indiferenciado como el basal, no representaría la suerte de hombres ni mujeres a lo largo del período. También vemos que un modelo que sólo distinga entre períodos, mejora mínimamente al basal, pero no captura las tendencias de hombres y mujeres. Por su parte, un modelo que sólo distinga sexos claramente no captura las tendencias, y apenas se diferencia del basal. Finalmente llegamos a un modelo que sí captura la interacción de sexo y período, lo que distingue la suerte de hombres y mujeres a través de las clases y del tiempo. Si bien este modelo no ajusta a los datos por poco, indica con una diferencia casi significativa la próxima parte de nuestro análisis: es necesario examinar lo que hay dentro. Pese a ello elaboramos el gráfico 1 que contrapone las tendencias de los “fi” (ϕ) de cada sexo, que resultan del producto del efecto sexo*período, y que están escalados. Esto es importante porque se trata de un modelo casi verosímil, que generó mejoras respecto del modelo basal pero también porque permite medir el un cambio temporal, y comparar la divergencia. Los hombres no sólo se vuelven más móviles en el último período, sino que se vuelven más móviles que las mujeres. Este resultado es inesperado, pero no es completamente inverosímil: si las distancias entre hombres y mujeres se redujeron es porque las mujeres comenzaron a heredar y a experimentar segmentación como los hombres, y a poder defender sus trayectorias como ellos, todo lo cual fortalece el papel de las clases. Así para los hombres avanzaría en 28 años un modelo ETM, y para las mujeres un modelo FST.

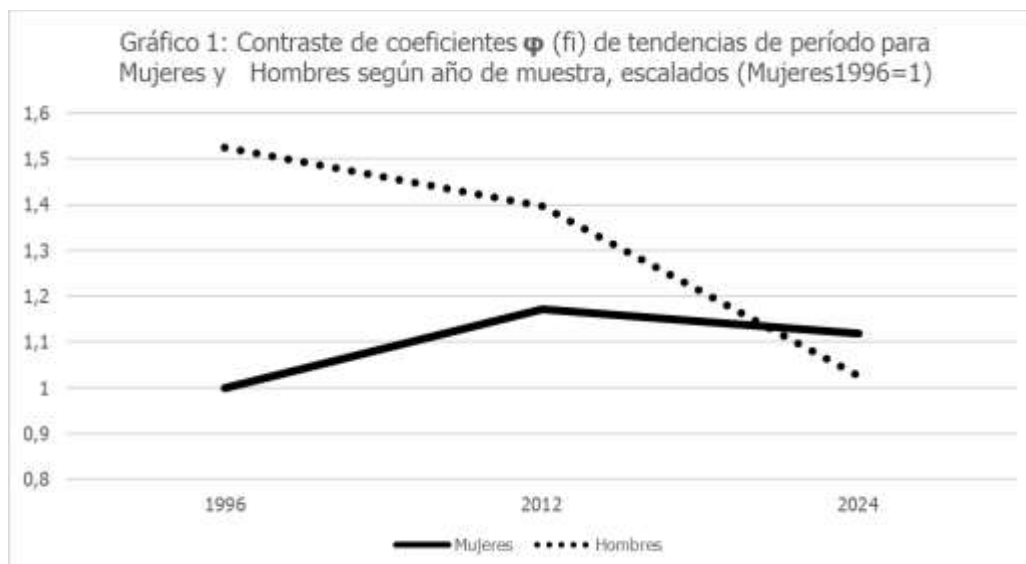
Tabla 1: Bondades de ajuste de modelos de Orígenes (O) y Destinos (D) y de efectos de Período y Sexo para cada subpoblación y para el total.

	L2	GL	P	ΔL	ΔGL	P
A.HOMBRES						
{PO, PD, OD}	50,29	32	0,021			
{PO, PD, ($\Phi\Psi$ OD)}	42,65	30	0,063	7,43	2	0,0219
B.MUJERES						
{PO, PD, OD}	43,77	32	0,08			
{PO, PD, ($\Phi\Psi$ OD)}	43,35	30	0,05	0,42	2	NS
C.TODOS JUNTOS						
{SPO, SPD, OD}	115,33	80	0,01			
{SPO, SPD, ($\Phi\Psi$ OD)}	110,81	78	0,01	4,52	2	NS

²⁰ La tabla 4 ways incorpora a la anterior relación el sexo. Sexo (S: Hombre, Mujer); así tenemos una tabla $S*P*O*D=2*3*5*5=150$ celdas.

{SPO, SPD, (Φ S Ψ OD)}	114,08	79	0,00	1,24	1	NS
(SPO, SPD, (Φ SP Ψ OD)}	104,8	75	0,01	11,03	5	0,053

Fuentes: Encuestas EMOTE 1996,2010,2024



Fuentes:

Encuestas EMOTE 1996,2010,2024

Resultados II: Rastrillando la movilidad social de hombres y mujeres.

La segunda parte de este trabajo apunta a examinar el comportamiento de factores de importancia para la interpretación de la movilidad social en Montevideo para mujeres y hombres. No trabajaremos ya con FST ni ETM, pero los tendremos presentes como resultados previos, que señalan que: para las mujeres hubo tres momentos diferentes de movilidad, apertura, rigidez y nuevamente apertura, y para los hombres, rigidez, apertura y nuevamente apertura. A continuación, aplicaremos un conjunto de modelos usuales y muy formalizados, provistos por Goodman, Hout, Hauser y Goldthorpe, para el análisis de asociación de la movilidad social, son los modelos de cuasi-independencia, esquinas quebradas, cruces, distancias, y topologías. Reiteramos los mismos modelos que en 2016 porque el fin comparativo es doble: por un lado, examinar las bondades de ajuste de las hipótesis que sostienen los diferentes modelos para las mujeres y los hombres de cada año, y por otro lado, como se indicó al fin de la revisión teórica por parte varios resultados de investigación, hay que examinar los factores subyacentes a la desigualdad (herencia, segmentación, afinidad, bloqueos).

En cada tabla en forma apaisada de mujeres y hombres, hay tres paneles que corresponden a los años de relevamiento. Y dentro de cada uno 4 bloques con los mismos modelos. Todos los modelos se basan en tablas bivariadas de clase de origen por clase de destino. Todos los modelos suponen una hipótesis y un método que pondera positiva, o negativamente, la

estimación de los valores esperados²¹. El modelo basal en cada panel (año), contra el que se miden todos los modelos propuestos, ahora sí es el de modelo de independencia, que por definición supone el no condicionamiento del destino al origen. El Índice de verosimilitud, o L2, mide la brecha global entre los datos observados y los valores esperados, por cada modelo de factores propuesto para explicar esos datos. Los grados de libertad indican los factores adicionales incorporados al modelo basal por cada modelo alternativo. Y los valores p la probabilidad de ocurrencia que indica la bondad de ajuste del modelo a los datos²².

Para perfeccionar las hipótesis posibles más allá del ajuste es importante, evaluar las diferencias de las verosimilitudes, de los grados de libertad y los valores p correspondientes, entre el modelo basal y los sucesivos modelos propuestos, y en algunos casos, las diferencias entre estos mismos. De esta forma es posible estimar la magnitud de la mejora propuesta por el nuevo modelo o si ella resulta trivial. Indicaremos cuando los modelos se comparen entre sí y no con el basal.

Goodman en 1965 propuso los modelos de cuasi o pseudo independencia demostrando que la movilidad podría ser evaluada por separado de la herencia, y que era factible crear más hipótesis que la movilidad perfecta para medir la movilidad social. El objetivo de estos modelos era postular algún tipo de independencia manteniendo fija la inevitable herencia, de manera de no exigir a los datos una condición que no pueden cumplir (Boado, 2023). La pregunta ahora es: ¿tiene el origen social un efecto sobre los destinos logrados, más allá de la propia reproducción? Esta pregunta recoge la preocupación por la reproducción y por la apertura de oportunidades, y si bien puede ser especificada de diversos modos, aquí se prefirieron sólo algunos. Entonces al modelo de independencia (para nosotros: O+D) se le agregarán términos, que representaremos con acrónimos. El modelo QI_A sostiene que el efecto del origen se restringe solamente a la herencia de posiciones en la diagonal principal de la tabla, es igual en todas las clases sociales, y es nulo en el resto de la tabla. Se generaría así un único parámetro positivo de efecto herencia. El modelo QI_B sostiene que el efecto del origen es diferente entre las clases sociales, se restringe solamente a la herencia de posiciones, y es nulo fuera de la diagonal principal. Se generarían 5 parámetros positivos de efectos, uno por cada origen. El modelo QI_C sostiene que el efecto del origen es diferente entre todas las clases, pero no se restringe sólo a la herencia de posiciones, sino que tiene un alcance mayor, presente en las 2 celdas adyacentes a la cumbre (I+II) y en las 2 celdas adyacentes a la base la base de la estructura social (VIIa); pero es nulo en el resto de la tabla. A los cinco parámetros positivos previos se le agregarían dos más, uno para el par de celdas adyacentes a la cumbre (H01) y otro para el par adyacente a la base de la estructura de clase (H02). Y para finalizar, el modelo QI_D sostiene que el efecto del origen es diferente entre todas las clases, pero hay efectos del origen que se vuelcan a las celdas vecinas a la diagonal principal en ambos sentidos. Así al modelo previo que especificaba efectos en las celdas adyacentes a la cumbre y la base, se le incorporan las celdas adyacentes a los orígenes intermedios (IIIab, IVab, V+VI) (HA). Esto propone junto

²¹ Las matrices de diseño de los modelos que se aplicaron detallan en el Anexo2.

²² Que tiene límite de aceptación a partir del 5%.

a la herencia, la vigencia de la movilidad de corta distancia, porque se especifican efectos plausibles para todas las clases y sus destinos más inmediatos, tanto en el ascenso como en el descenso social. Se agregaría un parámetro de efecto positivo más a los del modelo previo, igual para todas estas celdas adyacentes a las clases intermedias. Tendríamos ocho parámetros.

Los siguientes dos modelos se denominan modelos de “cruces”. Sostienen que más allá de la herencia hay fronteras entre las clases sociales, que son tangibles en los recorridos observados en las celdas. Para ser móvil hay que ser capaz de atravesar una o varias fronteras de clases. Estas fronteras no son iguales entre sí, porque no se componen de los mismos parámetros ni de la misma cantidad de ellos. Téngase presente que aportan parámetros para todas las celdas de la tabla, y que están simétricamente situadas. Aquí usaremos al modelo de cruces de las fronteras de clases dos veces, con el tipo de herencia homogénea (Cruces+QI_A) y con la diferencial entre las clases (Cruces+QI_B) (Ver anexo). Un modelo de cruces genera cuatro parámetros para esta tabla 5x5; cuando la herencia es homogénea se le suma uno sólo para la diagonal; y cuando la herencia es diferencia por clase se le suman cinco.

El modelo de asociación línea por línea (LxL) (no se grafica) postula que hay diferencias entre las clases sociales que se reflejan en diferencias entre las categorías. Estas diferencias se representan por puntajes. Siguiendo la experiencia de 2016 preferimos puntajes enteros de 1 a 523. El efecto de ajuste de esa variable latente a partir de las distancias entre las clases es muy importante comparado con casi todos los modelos previos que buscan separarse de la independencia enfatizando otras dimensiones de la desigualdad, como la herencia, la segmentación de clases, o las afinidades entre clases. Aplicamos al modelo LxL en 3 pasos: primero la estimación de modelo LxL solo, y luego adicionamos el efecto de la herencia desigual (LxL QI_B), que vimos pertinente, y el efecto de la herencia desigual más la movilidad de corta distancia (LxL QI_D).

Hasta el momento dimos varios pasos dentro de una familia gradualista y simétrica de modelos sobre la desigualdad de herencia y movilidad social, a continuación, aplicaremos un modelo que postula otro tipo específico de herencia, de segmentación y de movilidad social que es el llamado “Core Model”. Este modelo fue creado con el fin de mejorar la performance del modelo de fluidez constante, por Erikson y Goldthorpe (1992). Fue creado para explicar de un modo más preciso la fluctuación sin tendencia de la movilidad social de las sociedades industriales, dando espacio a la herencia, la movilidad sectorial, las fronteras de clase, los senderos de movilidad de corta distancia entre clases, y los bloqueos a la movilidad social.

Recordemos que las tres muestras de Montevideo fueron de PEA urbana, entonces al modelo “Core” fue necesario hacerle modificaciones, suprimiendo todos los parámetros referidos a las clases rurales, porque no estarían presentes en el análisis; pero además se

²³ Con LxL se estima un solo parámetro positivo. Pero no podemos perder de vista que los scores que afectan a orígenes y destinos relacionan la ocupación al momento de la encuesta (en tres años diferentes) con los temporalmente diversos orígenes de clase, por lo que nos resultó arriesgado sostener cualquier serie de scores que no fuera lineal (Boado 2023).

suprimió al parámetro de movimiento sectorial rural urbano y al parámetro de la afinidad negativa, que señalaba los casi imposibles movimientos de muy larga distancia entre las clases I+II y VIIb. En consecuencia, replicamos la modificación del modelo “Core” de 2016 y le llamamos el modelo “Core reducido” (CR). Que se expresa como: $O+D+H1+H2+J1+J2+A2$, es decir, la suma al modelo basal de los cinco efectos que explicaremos seguidamente²⁴. El primer componente que mantuvimos del modelo “Core” se refiere a la herencia de clase social, y se indica con dos parámetros de efecto positivo: Herencia 1 (H1) es la variable que indica la tendencia a general a la herencia y reproducción en todas las clases sociales, y que puede verse que en cierto sentido iguala al concepto de la cuasi-independencia homogénea; y Herencia 2 (H2) es la variable que indica que hay clases con mayor influencia del origen que otras; en nuestro caso señala la mayor propensión a la herencia de las clases I+II, las de servicio, y las clases IVab, que comprenden a la pequeña propiedad urbana. El segundo componente del modelo se refiere a la segmentación entre las clases. En lugar de ordinalidad o jerarquía lo que importa es el concepto de frontera y el de la distancia cualitativa que significa esa frontera. Entrar o salir de clase I+II es un salto cualitativo; como lo es entrar o salir del grupo de clases III, IV V+VI; y como también lo es salir o entrar de la clase VIIa. La variable jerarquía 1 (J1) aporta el diseño de esas chances. La variable Jerarquía 2 (J2) reafirma el efecto particular de las fronteras para ciertas clases, la frontera en el acceso a la clase I+II para la clase de origen VIIa, y por contraparte, la frontera de salida de la clase de origen I+II hacia la VIIa. Entonces esta variable reafirma las pocas chances de ingresar desde la base, y las de caer desde la cumbre. Como ambas variables indican reducción de chances su signo debe ser negativo, y también, los valores de estos parámetros deben ser muy bajos porque reducen la probabilidad en la celda. Finalmente, la última variable es la afinidad positiva (A2) que refleja los movimientos de intercambio entre clases, por un lado, entre I+II y IIIab y IVab; y por otro entre V+VI y VIIa. Este parámetro es de signo positivo, pero adviértase que es uno sólo para todos mientras que en modelo de herencia más esquinas (Q_IC) proponía 2 diferentes. En 2016 aplicamos el modelo CR en bloque, pero ahora lo aplicaremos por pasos, para medir y poder comparar sus efectos, primero las herencias, luego las jerarquías, y finalmente la afinidad.

Los resultados para las mujeres están en Tabla 2. Aunque en la literatura más recibida se indica que las mujeres serían menos propensas a la herencia por su alta movilidad absoluta, la movilidad relativa muestra que la herencia es un factor importante para ellas en general y según clases sociales, lo vemos en los resultados de Q_IA, y de QI_B. En ninguno de los tres años Q_IA, el modelo más básico de herencia, ajusta a los datos, pero siempre muestra una mejora respecto de la independencia. En 1996 y 2010 Q_IB no alcanza para ajustar, pero en 2024 sí. Como vemos la herencia de clase gana importancia para las mujeres. En 1996 y 2010 la mejora que produce Q_IC (Herencia diferencial más esquinas (H01 y H02)) alcanza para generar un ajuste, y también hay una mejora válida y ajuste en 2024. Vemos que ajuste en base a herencia y movilidad de cercanías es un camino fiable. El ajuste con herencia, esquinas, y corta distancia (QI_D), sólo es viable en 2010, el momento de mayor rigidez, mientras en 1996 y 2024 los momentos de mayor movilidad, no resulta adecuado. ¿Qué podemos decir? La herencia es

²⁴ Las matrices de diseño de estos modelos están en el anexo.

importante, la movilidad de adyacencias también es importantes, pero la corta distancia sólo es válida cuando hay más rigidez social. ¿Podría ser que cuando hubiera más apertura la movilidad fuera de más larga distancia? No queda claro y es necesario ahondar más.

Un primer examen de los cruces de las fronteras de clase para estimar la movilidad de media y larga distancia nos ayuda sobre lo anterior, porque supone un tipo de especificación gradual de las fronteras de clase. Y porque identifica para cada clase un tipo de frontera a cruzar²⁵. Los modelos de cruces siempre incluyen efectos de herencia, primero usamos homogénea (Q_IA) y luego diferencial (Q_IB). Con Q_IA sólo hay ajuste del modelo de cruces en 1996 y 2024, los momentos de mayor movilidad, y no hay ajuste en el momento de rigidez creciente 2010. El modelo de cruces con Q_IB nuevamente ajusta en 1996 y 2024, los momentos de mayor movilidad social para las mujeres, y no ajusta en 2010. En suma, identificar de modo preciso a las fronteras de clase, reconociendo también un efecto de la herencia, sea diferenciada o no, resulta en un modelo fiable en 1996 y 2024, pero no en 2010, lo cual condice con las tendencias generales observadas. Sería posible que en 2010 las fronteras fueran más duras de cruzar con lo que la propensión a la movilidad de larga distancia tendría menos chances. De hecho, podríamos pensar lo siguiente: los modelos de cruces son de trayectorias inter-clases de tipo mediano y largo, y sumados con efectos de herencia diferencial u homogénea, ajustan a los datos justo cuando hay más movilidad general; mientras que los movimientos de cortas distancias, tanto de esquinas como de clases intermedias, pero siempre pegadas al efecto de la herencia diferencial, representan a los datos en el momento de más rigidez.

LxL es un modelo que da cuenta de las distancias entre las clases, pero no como los cruces sino que fija un patrón, que en nuestro caso fue igual para origen y destino. Vemos que LxL solo produce una mejora en el ajuste de en todos los años de observación, aunque con más fuerza en 2010, el momento de más rigidez. Si bien reconocer la vigencia de las distancias de clases ya dice mucho, incorporar la herencia es necesario como ya vimos, y sumamos Q_IB. Esto produce el ajuste a los datos en todos los años. Un paso ulterior es ver si las distancias entre clases (que estiran las chances de movilidad), conviven con la herencia y las movilidades de corta distancia, y sumamos Q_ID. Y por sorpresa este paso en ningún año resulta significativo. Entonces de esta forma para las mujeres las distancias y la herencia diferencial entre clases se imponen a la movilidad de corta distancia. Lo cual no se opone a los resultados de cruces+Q_IB, y juntos quizás indican la existencia de otros senderos de movilidad.

Ahora arribamos al modelo “core reducido” (CR), un modelo menos formal que los previos, que propone que hay formas de heredar, formas de intercambiar miembros y formas de bloquear movimientos en las sociedades industriales. Y por ello lo aplicamos en secuencia. El primer paso fue medir el impacto de la herencia todos los años. Podemos advertir que ese formato para medir la herencia no resulta particularmente apto para las mujeres, porque genera una mejora de ajuste de menor entidad que Q_IB. Lo que sugiere que para las mujeres los efectos del origen

²⁵ Pero como por definición son fronteras simétricas llevan el mismo signo, ya asciendan o descendan, lo cual es una característica difícil de sostener.

de clase necesariamente deberían considerarse de otra forma más enfática. Seguidamente incorporamos la segmentación y produjo novedades. En 1996 no tuvo efecto alguno; en 2010 cobró importancia, y su mayor énfasis llegó en 2024. Adviértase que podríamos estar frente a situaciones bien diversas. 2024 sería el momento de recomposición de la tendencia de la fluidez para las mujeres, cuando algunas fronteras pesan más que la herencia, y sólo con ellas dos ya se ajustan los datos. En 2010 la segmentación fue ligeramente mayor que el efecto de la herencia, pero ambas no alcanzaron a ajustar a los datos. Y en 1996 no alcanzaban a presentarse como efectos distinguibles uno de otro. En el último paso llegamos al efecto de la afinidad, la movilidad de corta distancia donde las clases cercanas a la cumbre, o a la base, intercambian individuos claramente. De una manera precaria diríamos que sólo recoge algunos efectos de los modelos de cruces. Y es allí donde vemos los cambios. Esta movilidad de distancia corta da cuenta de la importancia de la movilidad en 1996, mientras que en 2024 no resulta sustantiva, y no aporta significación. Y en 2010, el año de la rigidez, es el último elemento que aporta una mejora válida y ajuste al modelo CR. Entonces, vemos que la importancia de la afinidad ha variado en el período. Es decir, que los circuitos de movilidad fueron más importantes antes de 2024. Algo para reflexionar.

Tabla 2: Bondades de ajuste de modelos para mujeres según años

MODELOS	1996						2010						2024					
	L2	GI	Sig.	DL2	Dgl	Sig.	L2	GI	Sig.	DL2	Dgl	Sig.	L2	GI	Sig.	DL2	Dgl	Sig.
O+D	46,20	16	0,00	-	-	-	150,34	16	0,00	-	-	-	138,759	16	0,00	-	-	-
O+D+Q _{IA}	33,28	15	0,00	12,92	1	0,00	112,26	15	0,00	38,08	1	0,00	40,42	15	0,00	98,34	1	0,00
O+D+Q _{IB}	28,49	11	0,00	17,71	5	0,00	82,52	11	0,00	67,82	5	0,00	17,30	11	0,10	121,46	5	0,00
O+D+Q _{IC} *	14,58	9	0,10	13,1	2	0,00	15,6	9	0,08	66,92	2	0,00	5,46	9	0,79	11,84	2	0,01
O+D+Q _{ID} *	11,49	8	0,18	3,09	1	NS	8,08	8	0,43	6,98	1	0,00	2,84	8	0,94	2,62	1	NS
O+D+CROSS+Q _{IA}	16,28	11	0,13	29,92	5	0,00	75,86	11	0,00	74,48	5	0,00	7,24	11	0,78	131,52	5	0,00
O+D+CROSS+Q _{IB}	14,58	7	0,10	31,62	9	0,01	41,05	7	0,00	109,29	9	0,00	5,46	9	0,79	133,30	7	0,00
O+D+LxL	23,85	15	0,07	22,35	1	0,00	14,72	15	0,47	135,62	1	0,00	18,78	15	0,22	119,98	1	0,00
O+D+LxL+Q _I B	15,62	10	0,11	30,58	6	0,00	8,56	10	0,57	141,78	6	0,00	3,46	10	0,97	15,32	6	0,02
O+D+LxL+Q _I D*	8,85	7	0,26	6,77	3	NS	6,02	7	0,54	2,54	3	NS	2,53	7	0,93	0,93	3	NS
O+D+H1+H2*	38,14	14	0,00	8,06	2	0,00	110,14	14	0,00	40,2	2	0,00	85,71	14	0,00	53,05	2	0,00
O+D+H1+H2+J1+J2*	37,88	12	0,00	0,34	2	0,97	61,96	12	0,00	48,18	2	0,00	11,06	12	0,52	74,66	2	0,00
O+D+H1+H2+J1+J2+A2	10,44	11	0,49	27,73	1	0,00	18,73	11	0,07	43,23	1	0,00	8,75	11	0,65	2,30	1	NS

Fuentes: Encuestas EMOTE 1996,2010,2024

Tabla 3: Bondades de ajuste de modelos para hombres según años

MODELOS	1996						2010						2024					
	L2	Gl	Sig.	DL2	Dgl	Sig.	L2	Gl	Sig.	DL2	Dgl	Sig.	L2	Gl	Sig.	DL2	Dgl	Sig.
O+D	100,7	16	0,00	-	-	-	196,8	16	0,00	-	-	-	149,2	16	0,00	-	-	-
O+D+Q_IA	63,37	15	0,00	37,15	1	0,00	123,2	15	0,00	73,63	1	0,00	45,59	15	0,00	103,59	1	0,00
O+D+Q_IB	57,54	11	0,00	43,18	5	0,00	99,47	11	0,00	97,33	5	0,00	24,65	11	0,01	124,54	5	0,00
O+D+Q_IC*	21,17	9	0,01	22,01	2	0,00	31,01	9	0,00	68,47	2	0,00	5,61	9	0,78	19,04	2	0,01
O+D+Q_ID*	21,06	8	0,01	0,94	1	NS	18,93	8	0,02	12,08	1	0,00	4,68	8	0,79	0,93	1	NS
O+D+CROSS+Q_IA	24,29	11	0,01	76,43	5	0,00	69,36	11	0,00	127,4	5	0,00	12,78	11	0,31	136,41	5	0,00
O+D+CROSS+Q_IB	21,17	7	0,00	79,55	9	0,00	49,39	7	0,00	147,4	9	0,00	5,61	9	0,78	143,58	7	0,00
O+D+LxL	36,18	15	0,00	64,54	1	0,00	38,82	15	0,00	158	1	0,00	36,99	15	0,00	112,20	1	0,00
O+D+LxL+Q_IB	23,17	10	0,01	77,55	6	0,00	22,85	10	0,01	174	6	0,00	5,03	10	0,89	31,96	5	0,02
O+D+LxL+Q_ID*	13,26	7	0,07	9,91	3	0,02	12,18	7	0,10	10,67	3	0,01	4,65	7	0,70	0,38	3	NS
O+D+H1+H2*	54,83	14	0,00	45,89	2	0,00	111,5	14	0,00	85,28	2	0,00	48,75	14	0,00	100,44	2	0,00
O+D+H1+H2+J1+J2*	38,17	12	0,00	16,66	2	0,00	63,55	12	0,00	47,97	2	0,00	19,59	12	0,08	29,16	2	0,00
O+D+H1+H2+J1+J2+A2	16,68	11	0,12	21,49	1	0,00	27,63	11	0,00	35,92	1	0,00	9,64	11	0,56	9,95	1	0,00

Fuentes: Encuestas EMOTE 1996,2010,2024

En la tabla 3 replicamos el mismo ejercicio de secuencias de modelos para los hombres para interpretar los cambios entre etapas que han conducido al incremento de la fluidez.

También se sostiene en la bibliografía que la herencia es un elemento importante en la movilidad de los hombres, y se reflejó en nuestros datos, pero cambió su importancia a lo largo del período. Los modelos de herencia homogénea (Q_IA) y diferencial (Q_IB) no ajustaron a los datos en los tres años de observación, aunque aportaron mejoras significativas. La herencia diferencial unida con la movilidad de esquinas (Q_IC) no ajustó a los datos en 1996 -el momento de más rigidez- ni en 2010 -el momento intermedio de fluidez-; recién alcanzó ajuste en 2024 -el momento de mayor fluidez-. Pero en todos los años indicó mejoras en favor de la herencia y la movilidad de cercanía a la cumbre o la base. El modelo con herencia desigual y movilidad de cortas distancias entre todas las clases (Q_ID), no indicó mejoras ni ajuste en 1996, generó una mejora válida, pero no ajuste en 2010, y no generó mejora válida respecto de Q_IC, pese al ajuste, en 2024. Por ello vemos bajo esta serie de modelos una tendencia creciente a especificar la movilidad hacia un modelo de distancias cortas cercanas a la cumbre y base de tipo QI_C y no de todas las cortas distancias.

Los modelos de cruces suponen movimientos explícitos -y simétricos-, dando espacio a la media y larga distancia entre las clases. Se aplicaron con herencia homogénea y con herencia

diferencial, y produjeron siempre mejoras de interés respecto del modelo basal, pero no ajustaron a los datos en 1996 ni en 2010, y sólo sí lo hicieron ambos en 2024. Estos modelos ponderan y suavizan todos los movimientos que implican pasajes de clase desde media y larga distancia, pero sólo fueron en 2024, donde ya vimos que podría ajustar un modelo que considere movimientos más cortos, además de la herencia.

El modelo LxL propone otra forma de medir las distancias entre las clases, y en ningún año ajustó a los datos; no obstante, exhibió su potencia con mejoras sustanciales respecto al modelo basal por manejarse con un solo parámetro. El modelo de LxL con herencia diferencial (LxL+Q_IB) pese a la mejora que aportó no ajustó a los datos en 1996 y 2010, sólo llegó al ajuste en 2024. Es decir que las diferencias entre las clases, las diferencias de herencia, y de movimientos están indicando las regularidades para 2024, de manera más clara más en los años previos.

Cuando LxL suma a la herencia de clases toda la movilidad de corta distancia (LxL+Q_ID), en 1996 hubo avance válido y ajuste, y también en 2010, y en 2024 hubo ajuste, pero el avance fue trivial porque la restricción de la movilidad de corta distancia no implicó un avance respecto el modelo anterior. Hasta aquí lo que pasa de 2010 a 2024 es una polarización de la reproducción con declive de la movilidad de corta distancia y un aumento de la movilidad no determinada.

Con el modelo CR surgen nuevos elementos para la reflexión. Por un lado, observamos que la forma de representar los efectos de la herencia es importante para examinar las mejoras significativas hacia el ajuste. En 1996 el efecto herencia fue el más importante de los tres años; pero hacia 2010 y 2024 las cosas cambiaron, y con esa formulación de medida el efecto herencia declinó. En consecuencia, la medición fue menos precisa a lo largo del período. La adición de los efectos de segmentación -o fronteras de clase-, proveen mejoras significativas en 1996 y 2010, aunque el CR no ajustó. Pero en 2024 herencia y segmentación fueron suficientes para proveer un ajuste a los datos del modelo CR.

Finalmente, se suma la afinidad, que es la existencia de circuitos de intercambios entre clases. En 1996 la afinidad completó al ajuste de CR. En 2010 mejoró la fluidez, la afinidad aportó un cambio válido, pero CR no ajustó. Adviértase que, en este año habría un parteaguas porque el modelo LxL+Q_ID fue el único que consiguió ajustar, y es un modelo de muchos parámetros. Mientras en 2024, ya se produjo el ajuste de CR con la incorporación de las fronteras de clase, si bien la afinidad de clases también produjo un avance para el modelo. Es decir, en el momento intermedio (2010) se deben haber producido muchos cambios en las relaciones entre las clases, en las formas de herencia y de movilidad de corta distancia (y seguramente cambios en los desempeños de las cohortes, que aquí no se observaron). Para 2024 y 1996 el CR es un modelo de 11 gl, y de 5 parámetros más que el basal, que consigue ajustar a los datos, pero su representación en 2010 un momento de cambios no fue suficiente.

Pensamos que hay un proceso de cambio diferente de 1996 a 2010 respecto de 2010 a 2024. En 2010 no ajustaría CR porque no refleja un patrón de cambio cercano a la movilidad de corta distancia, mientras que eso habría cambiado hacia 2024. Quizás por eso el modelo cruces que mide movilidad de media y larga distancia impacta mejor; y también por ello la afinidad en 2024 se sobrepone a herencia y segmentación. Lo que se hace nítido es que hay más movilidad y por vez primera en los 3 años es fiable la media distancia. O sea, hubo un proceso progresivo de apertura en 28 años. Por ello los modelos más restrictivos ceden lugar a los menos restrictivos.

Conclusiones

En primer lugar, se midieron tendencias a lo largo de 28 años con tres muestras para hombres y mujeres. Los hombres, a lo largo del período, exhibieron una tendencia a incrementar la fluidez. Notoriamente los coeficientes de período lo sostienen de modo válido al ETM. Las mujeres exhibieron tendencias contrapuestas, que sólo permiten sostener al FST, porque, por un lado, robustecieron un efecto de clase al desplazarse hacia una mayor rigidez de 1996 a 2010, y luego retomaron una leve tendencia a la movilidad de 2010 a 2024.

De manera general, amparándonos en las conclusiones de Breen, Vallet y Mueller (2021), podría entenderse la mayor propensión a la fluidez en el período 2010-2024 como una consecuencia de una mejora del bienestar entre 2008 y 2019 experimentó el Uruguay. Todo lo contrario de lo que podría esperarse del período 1996-2010. También hay que entender que los efectos de mejoría de la igualdad de oportunidades, para un país de casi nulo crecimiento vegetativo, se transmiten con lentitud en la estructura socio-ocupacional. Por otra parte, las situaciones de hombres y mujeres no sólo serían distintas, sino que sugieren diferentes formas de aprovechamiento del proceso. Sin duda los resultados merecen una exploración ulterior, con el contraste efectivo entre los efectos cohorte y período, y que incorpore los efectos de la educación al análisis.

En segundo lugar, siguiendo la experiencia que realizamos en 2016, replicamos los mismos modelos de cuasi independencia, cruces y topológicos, para actualizar la comparación, y por su utilidad para el examen en profundidad de los efectos que las desigualdades de clase basadas en la herencia y las afinidades, las distancias entre clases, las fronteras de clases, de la movilidad y la herencia, de hombres y mujeres.

Esos resultados los analizamos y comparamos atendiendo a las tendencias observadas a nivel general (mayor fluidez o mayor rigidez social), y apreciando las contribuciones en la mejoría de las bondades de ajuste. Los modelos que se aplicaron fueron los que enfatizaron el papel de la herencia de las clases sociales y su impacto sobre clases cercanas; el papel de las distancias de la movilidad y su chance de cruzar fronteras de clases; el papel de las distancias entre clase sociales sumado a la herencia; y las formulaciones de los mismos que aporta el

modelo Core sobre la movilidad social en países industrializados, en una versión reducida y adaptada.

Para las mujeres vimos que la herencia del origen social siempre resultó un efecto importante en contra de lo que indicaría la movilidad absoluta. El efecto de la herencia es importante, y cuanto más precisa es su definición más clara es su influencia. Sumada con la movilidad de corta distancia adyacente, resultó importante. Pero sumada a toda la movilidad de corta distancia sólo resultó ajustada en el momento de mayor rigidez. Los modelos de cruces más la herencia ajustaron, en los momentos de más movilidad (1996 y 2024), pero no en el de mayor rigidez (2010). Hasta aquí los modelos aplicados nos sirven para ver que: aquellos que contemplan la movilidad de larga distancia caminan en los años de fluidez, y los que contemplan la movilidad de corta distancia el de rigidez.

LxL es un modelo sencillo de distancia de clases, y siempre produce mejoras aunque no ajuste; por eso su efecto es más notorio en 2010 que en 1996 y 2024. De alguna manera vemos que las distancias de clases se imponen a la movilidad de corta distancia.

No resultó conveniente la forma de medir la herencia en el modelo core (CR) para las mujeres. La forma que se la propone en CR cae a lo largo del período. Pensamos que debe formularse de forma más enfática. La segmentación en CR se comportó en forma opuesta a la herencia, e incrementó su efecto a lo largo del período, de haber sido casi indistinguible con la herencia en 1996, pasó a ser mayor que ella en 2024. Finalmente, la afinidad de clases expresó un efecto mayor en 1996 y 2010, que en 2024, esto parece indicar que habría otros circuitos que soportan la movilidad social cercana a la cumbre y la base.

Para los hombres, entre quienes crece a lo largo del período la movilidad, se advierte la pérdida de importancia del efecto de la herencia. La cuasi independencia homogénea y diferencial no ajustaron solas a los datos, y sólo ocurrió cuando se suma la movilidad de las esquinas de la tabla en 2024. La herencia, con las esquinas y la corta distancia no ajustó en 1996, el momento de mayor rigidez, tuvo una mejora válida en 2010 y una no válida en 2024. Los modelos de cruces sumados a la herencia homogénea, o la diferencial, no aportan ajuste en año alguno. Los modelos de línea por línea con herencia diferencial capturaron ajuste en 2024, pero no en 1996 ni 2010; lo que señala que las diferencias entre clases y formas herencia, y cierta movilidad, resultan más claros hacia el final del período. Las distancias de clase aunados a la herencia y la movilidad de corta distancia de todas las clases no son el modelo de 2024, aunque sí expresan mejoras en 1996 y 2010. Finalmente, el modelo CR reitera algunos hallazgos que convergen con lo visto en las mujeres. La forma de medir la herencia del CR declinó en el tiempo, a la vez que la segmentación ganó presencia en la explicación en el mismo lapso. La afinidad ajustó mejor en 1996 y en 2024, mientras que en 2010 su aporte no fue suficiente para ajustar.

Vemos que a lo largo del período hay aspectos que convergen para hombres y mujeres, mientras otros divergen. La medición del papel de la herencia y sus efectos en la movilidad de

cercanía, o las afinidades como las denomina CR, fluctúan en el tiempo. Esto indica que para hombres y mujeres el papel de la herencia de clase ha cambiado, y en 2024 no juega el papel que tuvo en 1996. La retención del origen, junto al papel de contención que habría jugado la movilidad de corta distancia, estarían erosionándose. Eso no parece desconocer o restringir el papel de las distancias de clase, como tampoco de las fronteras de clase, pero las mismas parecen estar más expuestas a la permeabilidad por aspectos como la educación, que aquí no consideramos de momento.

En próximos trabajos someteremos estos hallazgos al habitual análisis de las cohortes y del proceso educativo. Pero este paso inicial de exploración de las tendencias generales para hombres y mujeres, y de la importancia de las clases y sus influjos en la herencia y en la movilidad de cercanías, de la entidad de las fronteras de clases y de la segmentación, nos ha permitido tener una visión completa y útil de por dónde seguir.

Referencias bibliográficas

Boado, M. (2009). La movilidad social en el Uruguay Contemporáneo. Montevideo:

Boado, M. (2016). Movilidad intergeneracional en Montevideo 1996-2010. En Solís, Patricio y Boado, Marcelo (coords.) Y sin embargo se mueve. Estratificación social y movilidad intergeneracional de clase en América Latina. México: El Colegio de México.

Boado, M (2022). La movilidad social en Buenos Aires y Montevideo de 1960 a 2012. *Empiria* (55) 25-55, UNED.

Boado, M. (2023). Revisión de Tablas e introducción a modelos loglineares. Material de cursos Maestría y Doctorado en Sociología. Departamento de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales. Montevideo: UdelaR.

Breen, R. (2004). *Social Mobility in Europe*. Oxford: Oxford University Press.

Breen, R (2010) Educational expansion and social mobility in the 20th century. *Social Forces* 89(2), 365–388.

Breen, R. Luijkx, R. (2007). "Social mobility and education : a comparative analysis of period and cohort trends in Britain and Germany" ; En: Eds Scherer, S; Pollak, R; Otte, G; Gangl, M; "From origin to destination: Trends and mechanisms in social stratification research". Frankfurt, Campus Verlag. (102-124).

Breen, R. Luijkx, R. Müller, w. Pollak, R. (2009). " Non persistent inequality in educational attainment: evidence from eight European countries"; *American Journal of Sociology*, 114(5), (1475–1521).

Breen, R; Mueller W. (2021) *Education and Intergenerational Social Mobility in Europe and the United States*. Stanford. Stanford University Press.

Bukodi, E; Goldthorpe, J. (2019). *Social Mobility and Education in Britain*. Research, Politics and Policy. Cambridge, Cambridge University Press.

Chauvel, L. 2006: *Le destin des générations, structure sociale et cohortes en France au XXe siècle*, Presses Universitaires de France, Paris.

Erikson, R; Goldthorpe, J. (1992). *The constant flux. Study of class mobility in industrial societies*. Oxford: Clarendon Press.

Fachelli, S; Marqués-Perales, I; Boado, M; Solís, P. 2021 "Social mobility from a comparative perspective between Europe and Latin America" (Ch7) in López- Roldán, P, Fachelli, S (eds.) *Towards a Comparative Analysis of Social Inequalities between Europe and Latin America*: Springer Cham.

Featherman, D; Jones, FL; Hauser, R. (1975) *Assumptions of Mobility Research in the US: The Case of Occupational Status*. *Social Science Research*, 4(4), 329-360.

Germani, G. (1961b). *Estratificación y Movilidad Social*. *Desarrollo Económico*, 1 (2), 145-150. BsAs. Instituto de Desarrollo Económico

Goldthorpe, J; Llewelin, C; Payne, C. (1987). *Social mobility and class structure in Modern Britain*. Oxford: Oxford University Press.

Goldthorpe, J; Lockwood, D; Bechhofer, F; Platt, J. (1969). *The Affluent Worker in the Class Structure*. London, Cambridge University Press.

Ganzeboom, H. B. G, De Graaf, P. M., Treiman, D. J. (1992) *A standard international socio-economic index of occupational status*. *Social Science Research*. Volume 21, Issue 1, March 1992, Pages 1-56

Goodman, L. (1965). *On statistical analysis of mobility tables*. *American Journal of Sociology*. Volume 70. May. Chicago: The University of Chicago Press

Goodman, L. (1979). *Simple models for the analysis of association in cross-classifications having ordered categories*. *Journal of the American Statistical Association*, 74, 537-552.

Goodman, L. (1984). *The Analysis of Cross-Classified Data Having Ordered Categories*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Hauser, R. 1978. *A structural model of the mobility table*. *Social Forces* vol 56 num3 (919-953)

Hout, M. (1983): *Mobility Tables*. Beverly Hills: Sage.

Ishida, H., Miwa, S. (2011). *Comparative Social Mobility and Late Industrialization*. Paper presented at Workshop of the Center for Research on Inequalities and the Life Course (CIQLE), Yale University (January 14).

Jorrat, R; Boado, M; Espinosa, V. (2024) *Trends in intergenerational class mobility and education in Argentina, Chile, and Uruguay, over common birth cohorts*.

Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *American Economic Review*, Vol XLV #1.

Labbens, J; Solari, A. (1964). Movilidad social en Montevideo. En: Solari, A; Estudios sobre la estructura social uruguaya. Montevideo, Arca.

Lipset, S; Bendix, R. (1963). Movilidad social en la sociedad industrial. Buenos Aires: EUDEBA.

Müller, W.; Pollack, R. (2004). Social mobility in West Germany: the long arms of history rediscovered? En: Breen, R. (Ed): *Social Mobility in Europe*.

Pollack, R; Mueller W. (2021) Education as an equalizing force:¿How Have Declining Educational Inequality and Educational Expansion Contributed to More Social Fluidity in Germany?. In; Breen & Mueller, 2021 “Education and Intergenerational Social Mobility in Europe and the United States. Stanford. Stanford University Press

Rostow, W. (1964). El proceso del Desarrollo. BsAs. Edit Veja y Lea.

Solari, A; Campiglia, N; Prates, S. (1967). Education, occupation, and development. *International Social Sciences Journal*, 19(3), 404-429.

Solís, P; Boado, M. (2016). Y sin embargo se mueve. Estratificación social y movilidad intergeneracional de clase en América Latina. México: El Colegio de México y Centro Espinosa Yglesias.

Solís P; Boado, M. 2021. Movilidad intergeneracional de clase en América Latina. En Salido y Fachelli 2021 Perspectivas y fronteras en el estudio de la desigualdad social: movilidad social y clases sociales en tiempos de cambio. CIS. Centro de Investigaciones Sociológicas

Solís, P; Dalle, P. (2019). La pesada mochila del origen de clase. Escolaridad y movilidad intergeneracional de clase en Argentina, Chile y México. *Revista Internacional de Sociología* 77 (1), 118, 1-17.

Sorokin, P. (1959). *Social and Cultural Mobility*. Glencoe. The Free Press.

Treiman, D.J. (1977). *Occupational Prestige in Comparative Perspective*. New York: Academic.

Vallet, L. (2004). Change in Intergenerational Class Mobility in France from the 1970s to the 1990s and its Explanation: An Analysis Following the CASMIN Approach. En Breen, Richard (coords.) *Social Mobility in Europe*. Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/0199258457.003.0005>

Vallet, L. (2017). Mobilité entre générations et fluidité sociale en France: Le rôle de l'éducation. *Revue de l'OFCE*, 1(1), 27-67. <https://doi.org/10.3917/reof.150.0027>

Anexos

Tabla 1: Bondades de ajuste de modelos de Origenes (O) y Destinos (D) y de efectos de Periodo y Sexo para cada subpoblación y para el total.						
	L2	GL	p	ΔL	ΔGL	p
A. HOMBRES						
{PO, PD, OD}	50,29	32	0,021			
{PO, PD, (φPψOD)}	42,65	30	0,063	7,43	2	0,0219
B. MUJERES						
{PO, PD, OD}	43,77	32	0,08			
{PO, PD, (φPψOD)}	43,35	30	0,05	0,42	2	NS
C. TODOS JUNTOS						
{SPO, SPD, OD}	115,33	80	0,01			
{SPO, SPD, (φPψOD)}	110,81	78	0,01	4,52	2	NS
{SPO, SPD, (φSψOD)}	114,08	79	0,00	1,24	1	NS
{SPO, SPD, (φSPψOD)}	104,8	75	0,01	11,03	5	0,053

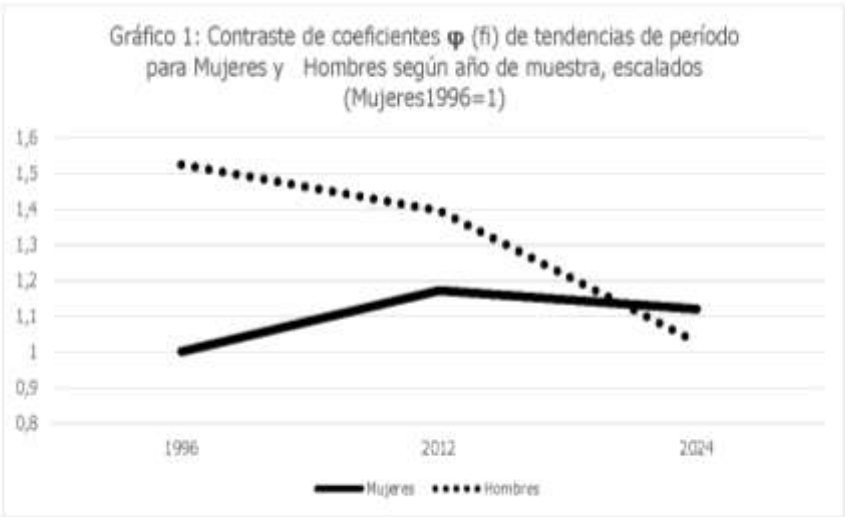


Tabla 2: BONDADES DE AJUSTE DE MODELOS PARA MUJERES SEGUN AÑOS																		
MODELOS	1996						2010						2020					
	L2	G	Sg	DL2	Dg	Sg	L2	G	Sg	DL2	Dg	Sg	L2	G	Sg	DL2	Dg	Sg
O=D	48.20	16	0.00	-	-	-	103.54	18	0.00	-	-	-	136.76	18	0.00	-	-	-
O=D+Q _{JA}	33.26	15	0.00	12.82	1	0.00	112.26	15	0.00	36.08	1	0.00	40.42	15	0.00	84.34	1	0.00
O=D+Q _{JB}	26.49	11	0.00	17.71	5	0.00	82.52	11	0.00	57.62	5	0.00	17.30	11	0.10	121.48	5	0.00
O=D+Q _{JC}	14.58	9	0.10	13.1	2	0.00	13.6	8	0.06	66.82	2	0.00	5.46	9	0.79	11.84	2	0.01
O=D+Q _{JD}	11.43	8	0.18	3.08	1	NB	8.08	8	0.43	8.38	1	0.00	2.84	8	0.04	2.82	1	NB
O=D+CROSS+Q _{JA}	16.29	11	0.13	28.92	5	0.00	75.86	11	0.09	74.48	5	0.00	7.24	11	0.78	131.52	5	0.00
O=D+CROSS+Q _{JB}	14.56	7	0.10	31.62	9	0.01	41.03	7	0.00	186.29	9	0.00	5.46	9	0.79	135.38	7	0.00
O=D+LxL	22.88	15	0.07	22.38	1	0.00	14.72	15	0.47	135.82	1	0.00	18.78	15	0.22	118.88	1	0.00
O=D+LxL+Q _{JB}	15.62	10	0.11	35.58	8	0.00	8.56	10	0.57	141.76	8	0.00	3.46	10	0.97	15.32	8	0.02
O=D+LxL+Q _{JD}	6.89	7	0.20	6.77	3	NB	6.02	7	0.94	2.54	3	NB	2.82	7	0.00	0.82	3	NB
O=D+H1+H2	28.14	14	0.00	8.08	2	0.00	110.14	14	0.00	40.2	2	0.00	85.71	14	0.00	23.05	2	0.00
O=D+H1+H2+J1+J2	37.68	12	0.00	0.34	2	0.97	81.86	12	0.00	46.16	2	0.00	11.08	12	0.52	74.66	2	0.00
O=D+H1+H2+J1+J2+K2	10.44	11	0.49	27.73	1	0.00	16.73	11	0.67	43.23	1	0.00	8.75	11	0.85	2.30	1	NB

Tabla 3: BONDADES DE AJUSTE DE MODELOS PARA HOMBRES SEGÚN AÑOS																		
MODELOS	1996						2010						2020					
	L2	G	Sg	DL2	Dg	Sg	L2	G	Sg	DL2	Dg	Sg	L2	G	Sg	DL2	Dg	Sg
O=D	100.72	18	0.00	-	-	-	198.8	18	0.00	-	-	-	148.19	18	0.00	-	-	-
O=D+Q _{JA}	83.37	15	0.00	37.15	1	0.00	123.17	15	0.00	73.83	1	0.00	45.59	15	0.00	105.59	1	0.00
O=D+Q _{JB}	57.54	11	0.00	42.18	5	0.00	89.47	11	0.00	97.33	5	0.00	24.05	11	0.01	124.54	5	0.00
O=D+Q _{JC}	21.17	9	0.01	22.01	2	0.00	31.01	9	0.00	88.47	2	0.00	5.61	9	0.78	19.04	2	0.01
O=D+Q _{JD}	21.06	8	0.01	0.94	1	NB	18.83	8	0.02	12.09	1	0.00	4.66	8	0.78	0.93	1	NB
O=D+CROSS+Q _{JA}	24.29	11	0.01	76.43	5	0.00	89.38	11	0.00	127.44	5	0.00	12.78	11	0.31	136.41	5	0.00
O=D+CROSS+Q _{JB}	21.17	7	0.00	79.55	9	0.00	49.39	7	0.00	147.41	9	0.00	5.61	9	0.78	143.56	7	0.00
O=D+LxL	36.18	15	0.00	64.54	1	0.00	38.82	15	0.00	157.88	1	0.00	36.99	15	0.00	112.20	1	0.00
O=D+LxL+Q _{JB}	23.17	10	0.01	77.55	8	0.00	32.85	10	0.01	173.95	8	0.00	5.03	10	0.88	31.95	8	0.02
O=D+LxL+Q _{JD}	13.26	7	0.07	5.91	3	0.02	12.18	7	0.10	10.87	3	0.01	4.65	7	0.75	0.38	3	NB
O=D+H1+H2	54.83	14	0.00	45.89	2	0.00	111.52	14	0.00	85.28	2	0.00	49.73	14	0.00	100.44	2	0.00
O=D+H1+H2+J1+J2	36.17	12	0.00	16.66	2	0.00	82.55	12	0.00	47.97	2	0.00	19.59	12	0.08	29.16	2	0.00
O=D+H1+H2+J1+J2+K2	16.88	11	0.12	21.49	1	0.00	27.63	11	0.00	35.92	1	0.00	9.64	11	0.56	8.95	1	0.00

Anexo1: Matrices de diseños de modelos																							
Q1A				Q1B				Q1				Q2				Q3				Q4			
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5				Q1C				H01				H02				Q1D				HA			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
CRUCES				CRUCE1				CRUCE2				CRUCE3				CRUCE4							
0	1	12	123	1234				0	1	1	1	1				0	0	0	0	0			
1	0	2	23	234				1	0	0	0	0				0	0	0	0	1			
12	2	0	3	34				1	0	0	0	0				0	0	0	0	1			
123	23	3	0	4				1	0	0	0	0				0	0	0	0	1			
1234	234	34	4	0				1	0	0	0	0				1	1	1	1	0			
CORE REDUCIDO				A2				H1				H2				J1				J2			
H1H2	J1A2	J1A2	J1	J1J2				0	1	1	0	0				0	1	1	1	1			
J1A2	H1	0	0	J1				1	0	0	0	0				1	0	0	0	1			
J1A2	0	H1H2	0	J1				1	0	0	0	0				1	0	0	0	1			
J1	0	0	H1	A2				0	0	0	0	1				1	0	0	0	1			
J1J2	J1	J1	A2	H1				0	0	0	0	1				1	1	1	1	0			

Anexo2: Definiciones y agrupamientos de EGP	
Definiciones	Agrupaciones utilizadas
Clase I Propietarios, presidentes de directorio, gerentes generales y administradores de grandes empresas de todas las ramas de actividad; directivos y gerentes de las empresas públicas. Profesionales universitarios. Autoridades y altos jerarcas de la Administración Central; miembros electos del Poder Legislativo; Jueces de la Suprema Corte, Tribunal de lo Contencioso administrativo, Corte Electoral; Gobiernos departamentales.	I+II
Clase II Profesionales de rango inferior, administradores y gerentes generales de empresas medianas, técnicos superiores cualificados, supervisores no-manuales.	
Clase IIIa Empleados calificados de trabajo no manual rutinario de la administración y comercio.	IIIab
Clase IIIb Empleados no calificados de trabajo no manual rutinario del comercio y de los servicios personales.	
Clase IVa Pequeños propietarios de la industria y el comercio; artesanos; con empleados a su cargo.	IVab
Clase IVb Pequeños propietarios de su negocio, artesanos; sin empleados a su cargo y urbanos.	
Clase V Técnicos de rango inferior y supervisores de trabajadores manuales.	V+VI
Clase VI Trabajadores manuales calificados.	
Clase VIIa Trabajadores manuales semi y no calificados de la industria, el comercio, los servicios en ramas secundaria y terciaria.	VIIa NO SE APLICAN
Clase IVc Granjeros y pequeños productores rurales; autónomos rurales proveedores de trabajos y servicios.	
Clase VIIb Trabajadores manuales del sector primario.	

SEMBLANZA

Marcelo Boado

(1961, Montevideo, Uruguay), es Doctor en Sociología por el Instituto Universitario de Pesquisas de Río de Janeiro (IUPERJ). Desde 1985 es docente en la Universidad de la República (Udelar). Actualmente es Profesor Titular e Investigador con Dedicación Total del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS). Enseña sobre estructura social del Uruguay, deserción estudiantil, desigualdad y movilidad Social, y modelos

loglineares. Fue Director del Departamento de Sociología; fue Coordinador del Doctorado de Sociología, de la Maestría de Sociología; y de la Maestría en Métodos Avanzados de Investigación. Su libro más reciente es: “Y sin embargo se mueve. Movilidad social comparada en América Latina”, en colaboración con Patricio Solís.

Disciplina: Sociología

Subdisciplina: movilidad social.

Tipo, método o enfoque del estudio: análisis estadístico.

Organismos colaboradores: Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC/UDELAR), y salarios Com. Central de Dedicación Total (CCDT/UDELAR)



EL IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LA CONFLICTIVIDAD LABORAL DEL SECTOR DE LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (ARGENTINA)

Clara Marticorena

claramarticorena@gmail.com

Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-7085-9648>

Lucila D'Urso

ldurso@campus.ungs.edu.ar

Universidad Nacional de General Sarmiento, Instituto del Conurbano; Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3383-2711>

Maia Vojnov

maia.vojnov@gmail.com

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-9259-224>

Ernesto Alejandro Najmias

ernesto.najmias@gmail.com

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-4832-3419>

Resumen

En el capitalismo contemporáneo, los/as trabajadores/as de la salud han protagonizado conflictos destacados en distintos países como respuesta a la precariedad laboral y a las políticas de austeridad. Las condiciones de trabajo y la conflictividad en este sector de la reproducción social, altamente feminizado, ha ganado creciente atención en el marco de la pandemia.

En Argentina, durante la pandemia los/as trabajadores/as de la salud protagonizaron intensos conflictos en las principales ciudades del país, como Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires. En este marco, nuestro trabajo indaga el impacto de la pandemia en la conflictividad de los/as trabajadores/as de la salud pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recuperando debates actuales en torno al poder de clase y la

posición estratégica, consideramos la evolución de la conflictividad laboral y sus principales características con el propósito de analizar sus reconfiguraciones durante la pandemia y el modo en que se expresan en las dinámicas de conflicto emergentes en la inmediata post pandemia.

Para el desarrollo de la investigación propuesta utilizamos un enfoque metodológico mixto, basado en el análisis cuantitativo de la conflictividad sectorial a partir de la Base de Conflictos Laborales de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (ex Ministerio), el cual fue complementado con el análisis cualitativo de fuentes documentales y hemerográficas, y de entrevistas a informantes clave.

Palabras claves: Pandemia, conflicto laboral, Salud, Sector público, Argentina.

THE IMPACT OF THE PANDEMIC ON LABOUR CONFLICT IN THE PUBLIC HEALTH SECTOR IN THE CITY OF BUENOS AIRES (ARGENTINA)

Abstract

In contemporary capitalism, the health workers have been the protagonists of important conflicts in different countries as a response to labour precariousness and austerity policies. Working conditions and conflicts in this highly feminized sector of social reproduction, have gained increasing attention in the context of the pandemic.

In Argentina, during the pandemic, health care workers were the protagonists of intense conflicts in the main cities of the country, such as Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Neuquén and the City of Buenos Aires. In this context, our work investigates the impact of the pandemic on the conflicts of public health workers in the City of Buenos Aires. Recovering current debates on class power and strategic position, we consider the evolution of labour conflict and its main characteristics to analyse its reconfigurations during the pandemic and how they are expressed in the emerging conflict dynamics in the immediate post-pandemic.

For the development of the proposed research we used a mixed methodological approach, based on the quantitative analysis of the sectoral conflict from the Labor Conflict Database of the Secretary of Labor, Employment and Social Security (ex-Ministry), which was complemented with the qualitative analysis of documentary and newspaper sources, and interviews to key informants.

Keywords: Pandemic, Labour conflict, Health, Public sector, Argentina.

O IMPACTO DA PANDEMIA NA CONFLITIVIDADE TRABALHISTA NO SECTOR DA SAÚDE PÚBLICA NA CIDADE DE BUENOS AIRES (ARGENTINA)

Resumo

No capitalismo contemporâneo, os trabalhadores do sector da saúde têm estado no centro de conflitos proeminentes em diferentes países, em resposta à precariedade laboral e às políticas de austeridade. As condições de trabalho e os conflitos neste sector altamente feminizado da reprodução social ganharam uma atenção crescente no contexto da pandemia.

Na Argentina, durante a pandemia, os trabalhadores da saúde foram protagonistas de intensos conflitos nas principais cidades do país, como Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Neuquén e a cidade de Buenos Aires. Neste contexto, o nosso trabalho investiga o impacto da pandemia nos conflitos dos trabalhadores da saúde pública na Cidade Autónoma de Buenos Aires. Recuperando os debates actuais sobre poder de classe e posição estratégica, consideramos a evolução do conflito laboral e as suas principais características para analisar as suas

reconfigurações durante a pandemia e a forma como se expressam nas dinâmicas conflituais emergentes no período imediatamente pós-pandêmico.

Para o desenvolvimento da investigação proposta recorreremos a uma abordagem metodológica mista, assente na análise quantitativa da conflitualidade setorial a partir da Base de Dados de Conflitos Laborais da Secretaria do Trabalho, Emprego e Segurança Social (ex-Ministério), a qual foi complementada pela análise qualitativa de fontes documentais e jornalísticas, e por entrevistas a informantes-chave.

Palavras-chave: Pandemia, Conflito trabalhista, Saúde, Setor público, Argentina.

Introducción²⁶

En el capitalismo contemporáneo, los/as trabajadores/as de la salud han protagonizado conflictos destacados en distintos países, como respuesta a la precariedad laboral y a las políticas de austeridad (Nowak y Gallas, 2014; Moody, 2017; Womack et al., 2023). Las condiciones de trabajo y la conflictividad en este sector de la reproducción social, altamente feminizado, ganaron creciente atención en el marco de la pandemia.

En Argentina, fue uno de los principales colectivos de trabajadores que protagonizaron la conflictividad social en el contexto de aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio, llevando adelante intensos conflictos en distintas ciudades del país, como Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Neuquén y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Los datos agregados sobre la conflictividad laboral para el período, marcan un significativo salto en los niveles de conflictividad en el sector de la salud a nivel nacional en el año 2020, siendo aún mayor en la CABA, donde mantiene niveles elevados en los años inmediatamente posteriores, en el marco de una tendencia descendente en la conflictividad total.

En este contexto, nuestro trabajo busca analizar el impacto de la pandemia en la conflictividad de los/as trabajadores/as de la salud pública en la Ciudad de Buenos Aires. Nos interesa estudiar la evolución de la conflictividad laboral y sus principales características, considerando la frecuencia, el tipo de conflicto, el tipo de reclamo, los actores que impulsan la acción conflictiva, etc. Se busca indagar, asimismo, el modo en que las dinámicas de conflicto emergentes en dicho contexto excepcional, se reconfiguraron (o no) en la inmediata post pandemia.

Las siguientes preguntas guían este trabajo: ¿cuáles son las características de la organización y acción colectiva en este sector de la clase trabajadora? Considerando su carácter esencial ¿cómo impactó la pandemia en el poder de movilización de estos/as trabajadores/as? Teniendo en cuenta que los/as trabajadores/as de la salud están conformados por diferentes colectivos (médicos, profesionales no médicos, enfermeros, residentes, concurrentes, técnicos, etc.), ¿qué diferencias pueden apreciarse entre los distintos colectivos que componen este sector tan fragmentado y heterogéneo?; ¿Cómo incide dicha heterogeneidad en su poder de movilización y negociación?

²⁶ El presente artículo reúne resultados parciales alcanzados en el marco del proyecto UBACYT “Condiciones de trabajo, formas de organización y acción colectiva de los/as trabajadores/as en la pandemia y pospandemia en argentina (2020-2023)”, dirigido por Clara Marticorena.

Para alcanzar el objetivo propuesto, se aborda el análisis de las características del sector de la salud en la CABA, y de las organizaciones sindicales que representan a los/as trabajadores/as de la salud pública en dicho territorio. A su vez, se analizan las regulaciones y disposiciones gubernamentales durante la pandemia, especialmente aquellas vinculadas al sector salud. Para el estudio de la conflictividad sectorial realizamos un análisis cuantitativo de la Base de Conflictos Laborales de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social - STEySS (ex Ministerio). Dicha tarea es complementada con el análisis cualitativo de fuentes periodísticas, publicaciones sindicales y entrevistas a informantes clave.

Además de inscribir el análisis propuesto en términos de su impacto en el poder de movilización y negociación de este colectivo de trabajadores/as, la investigación busca contribuir con una mirada agregada al estudio del sector de salud en la CABA, cuyo abordaje se encuentra escasamente desarrollado desde una perspectiva sectorial, dado que los trabajos relevados desde las ciencias sociales suelen centrarse en alguna categoría profesional, predominando estudios sobre enfermería, y desde una perspectiva eminentemente cualitativa.

Abordaje teórico-metodológico

Para el análisis propuesto se desarrolla un abordaje metodológico mixto, basado en el análisis de fuentes secundarias (estadísticas, documentales y hemerográficas), complementado con fuentes primarias.

En este trabajo consideraremos la conflictividad laboral, la cual puede adoptar múltiples formas, y expresarse en modalidades que abarcan desde el lugar de trabajo –solapado con el hogar para muchos/as trabajadores/as durante la pandemia- hasta la esfera pública. Para ello recurrimos a la Base de Conflictos laborales de la STEySS (Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (ex Ministerio) que, desde el año 2006, releva conflictos colectivos de trabajo en base a 120 medios de prensa de todo el país²⁷. Si bien las bases de conflictividad basadas en fuentes hemerográficas difícilmente puedan captar conflictos menores o cotidianos, resulta una herramienta fundamental para el análisis de las dinámicas sectoriales y agregadas de la conflictividad laboral (Ghigliani, 2009; Fransozi, 2017; Laitano y Nieto, 2022).

El período considerado se extiende desde 2016 al 2022, con el fin de ubicar en un contexto más amplio los años de la pandemia e incorporar los años previos, signados por políticas de desfinanciamiento del sector de la salud en CABA. Además de la frecuencia de los conflictos laborales, se tuvieron en consideración las siguientes variables: a) agregación territorial (municipio; provincia; todo el país); b) agregación económica (un establecimiento o empresa; más de un establecimiento o empresa; toda la rama de actividad); c) tipo de reclamo (salarial; no salarial); d) tipo de conflicto (con paro; sin paro) y e) actores que impulsan la acción

²⁷ “La unidad de análisis adoptada es el conflicto colectivo de trabajo, entendiendo por tal la serie de eventos desencadenados a partir de la realización de una acción conflictiva por parte de un grupo de trabajadores o empleadores con el objeto de alcanzar sus reivindicaciones laborales. Entre otras cosas, esto implica que en un mismo conflicto pueden llevarse a cabo varias acciones conflictivas.” (MTESS, 2018: 2). En esta investigación se presenta el análisis de las distintas acciones conflictivas que integran un conflicto colectivo de trabajo.

conflictiva (sindicatos, trabajadores autoconvocados, comisiones internas, otras organizaciones)²⁸.

Las mismas resultan relevantes en tanto permiten considerar diversas dimensiones del conflicto laboral que pueden dar cuenta de las formas de organización de un colectivo de trabajadores/as. Por ejemplo, la agregación territorial y económica permite dar cuenta de los niveles de organización de los/as trabajadores/as y el alcance del impacto de las acciones conflictivas en el funcionamiento de la actividad del sector, el tipo de reclamo permite conocer las demandas del sector, e indirectamente, sus condiciones de trabajo y salario. El tipo de reclamo predominante puede ser considerado, asimismo, como expresión de posiciones defensivas (reclamos por pagos adeudados, por despidos, etc.) u ofensivas (aumento salarial, regularización de contratos, etc.). Si bien estas categorías han sido objeto de diversos debates en el campo de las relaciones laborales (Kelly, 1998), y es necesario analizarlas en relación con los procesos sociales en cuyo marco tienen lugar, no dejan de ser relevantes para el estudio de la acción colectiva y la posición relativa de los/as trabajadores/as en relación a los empleadores. En cuanto al tipo de acción, permite observar las distintas formas de lucha que despliega un colectivo de trabajadores/as, adoptando formatos más o menos radicales, desde ocupaciones, bloqueos, paros, hasta manifestaciones y acciones de visibilización o difusión. Por último, en cuanto a los actores que protagonizan la conflictividad, permite conocer el carácter más o menos institucionalizado y estructurado de la organización de los/as trabajadores/as del sector, brindando elementos relevantes para el análisis de las dinámicas y formas que asume el conflicto.

El análisis de la base de conflictos es complementado con el análisis cualitativo de fuentes periodísticas y boletines sindicales, junto con entrevistas a informantes clave seleccionados²⁹. La sistematización de las regulaciones laborales sancionadas durante la pandemia se basó en el boletín oficial y fuentes oficiales.

La acción colectiva de los/as trabajadores/as de la salud y su poder de clase

Como mencionamos anteriormente, los/as trabajadores/as de la salud vienen protagonizando en las últimas décadas y, particularmente, durante la pandemia, intensos conflictos laborales en distintas latitudes, configurando una verdadera “marea blanca”.

Para abordar la acción colectiva de estos/as trabajadores/as recuperamos sucintamente diferentes desarrollos en torno al poder de clase. Como desarrollamos en Marticorena y D’Urso

²⁸ Para abordar esta dimensión elaboramos dos variables propias, una para observar el tipo de organización (autoconvocados, sindicatos, asociaciones profesionales, etc.) y otra para indagar las acciones conflictivas en función del actor principal que las desarrolla, ya sea sólo o con otros actores.

²⁹ En esta oportunidad, con el fin de tener una aproximación general a la conflictividad sectorial, hemos complementado el análisis de la base de conflictividad de la secretaría de trabajo con entrevistas a representantes de distintas categorías profesionales dentro del sector. Para ello hemos entrevistado a un representante sindical que integra la Asociación de Médicos Municipales y la FESPROSA (Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina), a una representante de ATOGBA (Asociación de Terapeutas Ocupacionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) y Federación de Profesionales de la Salud de CABA, a una representante de la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) y de la Federación de Profesionales de CABA y a 2 residentes de la Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA.

(2021), entre los enfoques destinados al análisis del poder de clase que destacan condiciones estructurales y asociativas, Wright (2000) y Silver (2005) constituyen un punto de partida ineludible. Mientras que el poder asociativo es el que resulta de la organización colectiva de los/as trabajadores/as (en comités de empresa, sindicatos, partidos), el poder estructural hace referencia al poder que los colectivos laborales pueden ejercer por su situación en el sistema económico, cuyo carácter estratégico depende de su impacto disruptivo en el ciclo de acumulación del capital. Silver distingue, a su vez, dos subtipos de este poder estructural: el poder de negociación en el mercado de trabajo (vinculado a la situación de la oferta y demanda de fuerza de trabajo), y el poder de negociación en el lugar de trabajo, resultado de la “situación estratégica de un grupo particular de trabajadores dentro de un sector industrial clave.” (Silver, 2005: 27). El enfoque de los recursos de poder (Schmalz et. al. 2018 y 2019) recuperó estos conceptos agregando el concepto de poder social, vinculado a la capacidad de establecer alianzas con otros sectores y grupos sociales, e instalar discursivamente en la opinión pública las demandas como socialmente legítimas, y el de poder institucional, vinculado a la capacidad de establecer o modificar regulaciones laborales en favor de los/as trabajadores/as³⁰.

La movilización y conflictividad de los/as trabajadores/as de la salud en el siglo XXI, con el protagonismo de luchas y huelgas masivas, abrió preguntas por el carácter estratégico de este colectivo, cuya relevancia se puso más que nunca de manifiesto con la pandemia del COVID 19. Si bien la posición de estos/as trabajadores/as ha sido emparentada a la de los/as docentes y trabajadores/as de servicios sociales, Szabó destaca las particularidades que presentan. Según el autor, el sector de la salud es un sector complejo e integrado, con diferentes calificaciones requeridas para distintas tareas, y bajo presiones contradictorias de proletarización y profesionalización (Szabó, 2020: 412). Al compararlo con el sector de la educación, resalta su potencial impacto disruptivo:

“Además, lo que está en juego en la acción colectiva para los usuarios de los servicios es más importante en la asistencia sanitaria. En el caso de una huelga escolar, los padres pueden tener que organizar el cuidado de sus hijos o verse obligados a ausentarse más días de su lugar de trabajo. Sin embargo, la disrupción se siente más directamente en la sanidad, porque los usuarios del sistema sanitario se encuentran en una situación más vulnerable que en el caso de la educación.” (Szabó, 2020: 412, traducción propia)

En este punto, Szabó retoma a Silver (2005), quien destaca el poder estructural de los/as docentes sobre la base de una creciente demanda, intensidad laboral e inmunidad a la relocalización, para señalar que los mismos argumentos pueden ser aplicados a los/as profesionales de la salud:

“...el envejecimiento de las sociedades occidentales requiere más servicios sanitarios y asistenciales, lo que aumenta la demanda de mano de obra. Además, la asistencia sanitaria se basa en la interacción humana en tiempo real y cara a cara, por lo que el poder estructural de la mano de obra es difícil de reducir mediante tecnologías que ahorren trabajo o mediante la

³⁰ En trabajos previos hemos planteado diversas críticas al enfoque de los recursos de poder. Si bien no nos detendremos a desarrollarlas en este artículo, cabe señalar que entre las principales críticas al enfoque es posible mencionar la reducción del análisis del poder de clase al poder sindical, el uso del término “recurso” como una posesión o capacidad preexistente y dada, no como una construcción producto de la organización y acción colectiva, la noción instrumental de estrategia, entre otros aspectos. Para un análisis crítico véase Marticorena y D’Urso (2021 y 2022).

deslocalización (Oesch, 2006). En un aspecto, la posición estructural de los profesionales sanitarios es aún más fuerte que la de los educadores.” (Szabó, 2020: 412, traducción propia)

A partir del análisis de conflictos significativos en Dinamarca, Estonia, Hungría e Irlanda entre 1999 y 2012, Szabó (2020) resalta la importancia que asume en estos conflictos la adaptación de formas de protesta clásicas (la huelga, básicamente), la articulación de demandas por la mejora de los servicios y la coordinación entre grupos de trabajadores:

“...se perfilan tres elementos clave para el éxito de las tácticas: sustituir la huelga masiva por un repertorio más específico de reivindicaciones, enmarcar las demandas salariales en una lucha más amplia por la mejora de los servicios sanitarios y coordinar las acciones de protesta entre grupos de trabajadores con competencias diferentes.” (2020: 411, traducción propia).

Por su parte, Chan, Tsui y Tang (2023), al analizar la huelga de médicos de Hong Kong durante la pandemia, destacan el apoyo que concitó en otros sectores de trabajadores y diversos actores sociales, como elementos clave para sostener la movilización:

“Los trabajadores médicos adoptaron varias estrategias para reforzar el apoyo público y de la sociedad civil: un plan de acción basado en la escalada gradual para equilibrar los intereses inmediatos de los pacientes y los trabajadores de primera línea, así como la conexión con el público y los grupos de pacientes.” (2023: 99, traducción propia)

En una publicación reciente, Womack (Womack et al. 2023) analiza el poder socialmente estratégico de los/as docentes y enfermeros/as, diferenciándolos de aquellos trabajadores/as en una posición materialmente estratégica, como los posicionados en los “cuellos de botella” (choke points) de las cadenas de valor, cuyo poder material descansa en su posición en la organización técnica de la producción capitalista. McAlevey (2023) desarrolla una de las principales críticas a esta idea, planteando la discusión acerca de la importancia de los conflictos en la educación (como la huelga docente de West Virginia), como algo más que una crisis social. McAlevey señala que “Desde el punto de vista de los organizadores [de la huelga], la cuestión es, ¿los trabajadores son capaces de crear una crisis lo suficientemente grande que fuerce a los empleadores a hacer concesiones?” (2023: 110, traducción propia)

En su respuesta, Womack resalta el poder *social* de docentes y trabajadores/as de la salud en relación con la escala de los conflictos como un elemento clave de su carácter disruptivo: “Si estos trabajadores se mueven poco, ganan poco. Si ellos actúan en grande, ganarán realmente en grande, económicamente, contra el capital, por ellos mismos y por su clase.” (Womack et al., 2023: 147, traducción propia). En cuanto al poder material de estos/as trabajadores/as, Womack destaca un efecto directo, cuando paran de trabajar para el capital y lo hacen para la clase obrera, e indirecto, en tanto la salud y la educación son la precondition de la producción, la restauración y reproducción de la fuerza de trabajo (Marticorena, 2023).

En el caso de los/as trabajadores/as de la salud, ¿el carácter esencial de su trabajo durante la pandemia transformó a estos/as trabajadores/as en estratégicos/as en los términos de Womack? Como veremos más adelante, la emergencia sanitaria fue una condición que permitió visibilizar el poder social de este colectivo de trabajadores/as, lo cual motivó mayores niveles de movilización de un colectivo fuertemente precarizado, cuyas condiciones de trabajo empeoraron en el marco de la pandemia. En este sentido, surge la pregunta acerca de si el poder de movilización de estos/as trabajadores/as se tradujo en un mayor poder de negociación, aspecto sobre el cual indagaremos en los próximos apartados.

Las características del sector de la salud en Argentina

Diversos autores destacan el carácter fragmentado, descentralizado y heterogéneo del sector salud en Argentina (Belardo, 2020; Tobar et al., 2012; Acuña y Chudnovsky, 2002). La fragmentación refiere a la compleja división administrativa, de financiamiento y de cobertura que implica la existencia, a partir de las reformas de los 90, de tres grandes sectores: subsistema público, subsistema de medicina privada y subsistema de obras sociales. El carácter descentralizado del sector refiere a cómo su administración recae principalmente en las provincias y municipios, mientras que su coordinación queda en manos del Estado Nacional. Por último, su heterogeneidad alude a la diversidad de categorías de trabajadores (profesionales, no profesionales, técnicos, auxiliares, residentes, administrativos, etc.) que componen el sector, a la par que da cuenta de las múltiples especialidades existentes (clínicos, cirujanos, pediatras, etc.).

A partir de los años '90 se observa un aumento de la proporción de asalariados, una pérdida de autonomía profesional, el crecimiento del pluriempleo (debido a la caída en los salarios y un aumento de los trabajos a tiempo parcial), la extensión de la jornada laboral y un crecimiento de la precarización y del trabajo informal (Aspiazu, 2010; Baldi, 2018)³¹.

Se trata de un sector mayormente feminizado. Aspiazu (2017) señala que las mujeres suelen ocupar los puestos de menor calificación y reconocimiento social. Subraya que el sistema de salud se construye en base a prácticas y discursos que sostienen y reproducen desigualdades de género y que, por su carácter feminizado, la enfermería se encuentra subestimada, aunque resulte fundamental para la atención y el sostenimiento del sistema.

El sistema de salud se encuentra estructurado en torno a una lógica jerárquica enraizada en el modelo médico hegemónico, que establece valoraciones diferenciales en función de la profesión y rango de los/as distintos/as trabajadores/as, entre profesionales médicos y no médicos, enfermeros, técnicos, residentes, concurrentes. Como veremos más adelante, ello se expresa también en las formas de organización y acción colectiva predominantes.

Según la última Encuesta Nacional sobre Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud y Seguridad (ECETSS) realizada en 2018 (SRT, 2019), el sector de los servicios sociales y de salud daba cuenta del 6,5% de la población ocupada, siendo el 69,4% mujeres. Esta rama se ubica en tercer lugar, luego de trabajo doméstico y enseñanza, en porcentaje de ocupados con pluriempleo. Este sector posee el mayor porcentaje de trabajadores bajo exigencias emocionales (51,9%) y el segundo en importancia en exigencias vinculadas al ritmo de trabajo (41,8%). El módulo de relaciones laborales permite apreciar, por su parte, que el 35,4% de los asalariados registrados del sector se encuentran afiliados a un sindicato, levemente por debajo del total de asalariados registrados sindicalizados (36,9%). Si bien ello puede considerarse un indicador del poder asociativo de los/as trabajadores/as del sector, es importante señalar que se trata de un sector fuertemente fragmentado en cuanto a su organización sindical.

³¹ Tal como señalan Massano y Cappaninni (2023), se trata de tendencias presentes ya en los años 80, al menos con respecto a los profesionales médicos, en tanto expresión de procesos de pauperización y proletarianización parcial.

Durante la pandemia, convivió en tensión un discurso que resaltó el heroísmo del personal de salud, con un aumento de la precarización y flexibilización laboral (Aguirre, 2021; Ramacciotti y Testa, 2021; Salerno, 2020), destacándose la sobrecarga laboral, a través de procesos de extensión e intensificación de la jornada, el estrés producto de la alarmante situación durante el COVID, y la falta de condiciones de trabajo adecuadas, salarios insuficientes, entre otras (Elbert et al., 2022, Collado, 2022, Iglesias et. al., 2022). La pandemia puso en primer plano la crisis estructural del sistema de salud (especialmente del de la salud pública) vinculado a los ajustes estructurales de las décadas del 80 y 90, y la creciente precarización de su personal (Salvia et al., 2022).

Se han realizado múltiples informes acerca del aumento del estrés, el *burnout*, la depresión, la ansiedad y las dificultades de conciliar el sueño del personal de salud, especialmente entre enfermeros y residentes, quienes constituyeron la primera línea de atención frente al COVID-19 (Novas et al. 2022; Castro et al. 2022; Scatularo et al. 2021). La sobrecarga de tareas de cuidado, que recae mayormente sobre las mujeres trabajadoras, se profundizó durante la pandemia debido al cierre de establecimientos educativos. A su vez, en el caso de las trabajadoras del sector salud, al ser consideradas personal esencial, no contaron con las licencias otorgadas en otros sectores de actividad para tareas de cuidado. Este sector, por su parte, no adoptó una dinámica de teletrabajo en forma generalizada. La telemedicina fue implementada parcialmente, especialmente en el sector privado y en los Centros de Salud y Atención Comunitaria (CESAC) públicos de la CABA, para realizar el seguimiento de pacientes.

El sistema de salud pública en CABA

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en consonancia con el resto del país, tiene su sistema de salud dividido en tres subsectores: público, privado y Obras Sociales. En el 2020 el 18% de la población de la Ciudad se atendía exclusivamente en la salud pública, porcentaje que ascendió al 20% para el año 2022³².

El sistema de salud pública de la CABA se encuentra integrado por 14 hospitales de agudos, 2 hospitales generales de niños, 19 hospitales especializados, 47 Centros de Salud y Acción Comunitaria y 17 Centros médicos barriales distribuidos en las comunas de la Ciudad, 1 Centro de cuidado integral, 2 Centros de salud mental, 2 Centros odontológico-infantiles, y hospitales de gestión mixta (nacional y GCBA), como el Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. "Prof. Dr. Juan P. Garrahan"³³.

Durante el periodo 2016-2019 la salud pública porteña vivió un proceso de recorte presupuestario, que se expresó en una caída real de los fondos destinados a dicho ministerio y en una pérdida de su peso dentro del presupuesto total del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que pasó en cuatro años del 17% al 14,8% (Costa y Vacarezza, 2023). En el 2020, se observa un aumento en la inversión en el sector de la salud pública de CABA, pero en 2022 ésta continuaba por debajo de 2016, indicando una caída del gasto público en salud entre puntas. La masa salarial también se redujo notablemente en el período, siendo en 2022 un 11% menor

³² Fuente: Instituto de Estadística y Censos de la CABA (IDECBA).

³³ Fuente: [Establecimientos - Hospitales y Centros de Salud | Buenos Aires Ciudad - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires](#)

al 2016 (Costa y Vacarezza, 2023). Ello expresa principalmente la disminución de la masa salarial destinada a la planta permanente.

Según información del GCBA correspondiente a septiembre de 2023, los/as trabajadores/as de la salud en el sector público llegaban al total de 37.696 personas, siendo el 53,6% parte de la carrera profesional hospitalaria, el 37% de la carrera de Enfermería y Especialidades Técnico-Profesionales de la Salud y el 9,4% residentes. La distribución de cada categoría según género, muestra que el 66,1% de los trabajadores en carrera profesional hospitalaria eran mujeres, ascendiendo este porcentaje al 74% en el caso de enfermería y especialidades técnico-profesionales y al 76% entre residentes del GCBA.

Desde 2018, los profesionales de la salud de CABA se rigen por el Escalafón Profesional (Ley N° 6.035 – Profesionales de la Salud), quedando por fuera enfermería, instrumentación quirúrgica y bioimágenes, que continúan rigiéndose por el Escalafón General de la administración pública de la ciudad (Ley N° 471 - Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), lo cual dio lugar a uno de los conflictos actuales del sector.

En cuanto a las residencias constituyen un sistema remunerado de capacitación de posgrado a tiempo completo basado en prácticas hospitalarias que duran entre 3 y 5 años -dependiendo la profesión-. El acceso a estas residencias se realiza a través de un examen único anual. El conjunto de condiciones laborales de los residentes se encuentra regulado por la ordenanza N°40.997, que explicita que los salarios de los residentes se encuentran “atados” proporcionalmente -según año de residencia- a los convenios colectivos de los médicos (incluidos en la ley de carrera profesional de la CABA). Es por este motivo que, en la CABA, los aumentos salariales de los residentes están sujetos a las negociaciones colectivas realizadas por la Asociación de Médicos Municipales y la Federación de profesionales del GCABA. Las concurrencias, en cambio, constituyen un sistema de capacitación profesional de posgrado a tiempo parcial y no remunerado. Es decir, los concurrentes no cuentan ni con salario ni con cobertura de ART.

La organización de los trabajadores de la salud en la Ciudad de Buenos Aires

La representación gremial de los/as trabajadores/as refleja la fragmentación general del sistema. En el subsistema de Obras Sociales, los/as trabajadores/as se encuentran bajo convenio y representación del sindicato del sector al que esa obra social corresponde; por su parte, los/as trabajadores/as de la salud privada se encuadran en la Asociación de Trabajadores de la Sanidad de Argentina - Seccional Buenos Aires, que representa a los/as trabajadores/as no médicos de hospitales privados, laboratorios y centros de cuidados, y que es miembro a nivel nacional de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA). Los/as médicos/as de la actividad privada se encuentran representados por asociaciones profesionales, como la Asociación de Médicos de la Actividad Privada (AMAP).

En el subsector público, la representación gremial muestra un grado aún mayor de fragmentación, distinguiéndose los sindicatos de rama, sindicatos “de oficio” o profesionales y agrupaciones gremiales propias de algunos hospitales (Por ejemplo, el Hospital Moyano, el

Hospital Garrahan)³⁴. Los/as trabajadores/as que cumplen tareas administrativas, o no tienen una calificación técnica reconocida por el GCBA (como los enfermeros) y se encuentran regidos por la ley de Escalafón General 471, se encuadran en los gremios de trabajadores estatales, el municipal Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) o Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que representan trabajadores de la administración pública nacional y de otras provincias.

Entre los/as trabajadores/as profesionales y técnicos existen diversas representaciones, que dividen a los/as médicos/as y a aquellos/as profesionales no-médicos/as. Los/as primeros/as, están representados por la Asociación de Médicos Municipales (AMM), que es uno de los sindicatos más representativos del sector en la CABA. Otros/as trabajadores/as profesionales en el sistema de salud, como trabajadores/as sociales, psicólogos/as, músico-terapeutas, entre otros, se nuclean en diversas asociaciones profesionales que confluyen en la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A estas organizaciones, que buscan representar a los/as trabajadores/as de todos los hospitales dependientes del GCBA, se suman las asociaciones profesionales por hospital, cuyas características y representatividad varían caso por caso, así como el tipo de profesionales que representan.

Dentro del universo de la representación gremial del subsector público se destacan dos problemáticas particulares que afectan a sectores clave del funcionamiento de los hospitales. La primera, es la situación de la enfermería. En los últimos años, la demanda por el reconocimiento del carácter profesional de la calificación necesaria para estas tareas (expresada en títulos de tecnicatura y licenciatura) y la inclusión de la enfermería dentro de la Ley de Profesionales de la Salud de CABA, estuvo presente en la arena pública, como veremos en el siguiente apartado. En la representación de este sector, se destacan la Asociación de Enfermería de Capital Federal (AECF), Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) y, con representación nacional, el Sindicato de Enfermería de la República Argentina (SITRE). La segunda problemática, refiere a los conflictos encabezados por residentes y concurrentes de hospitales y centros de gestión porteña autoorganizados en la Asamblea de Residentes y Concurrentes de la CABA.

Las regulaciones durante la pandemia

Además de las regulaciones generales que modificaron las condiciones de trabajo durante la pandemia³⁵, en el sector salud se establecieron regulaciones específicas vinculadas a la esencialidad del sector. Entre estas regulaciones es posible observar una serie de conquistas que expresan el despliegue de cierto poder institucional por parte de estos/as trabajadores/as en el contexto de la emergencia sanitaria.

Una de las primeras luchas en el marco de la pandemia se vinculó con la inclusión del COVID-19 como enfermedad profesional por la SRT (Superintendencia de Riesgos del Trabajo), declarada por decreto (367/2020). Este avance, tuvo, según la Federación Sindical de

³⁴ Véase el mapa sindical en el anexo.

³⁵ Se destaca la implementación del ASPO (DNU 297/2020), el DNU 329/2020 sobre prohibición de despidos y suspensiones (prorrogado vía DNU 487/2020 y DNU 624/2020), y el DNU 332/2020 que creó el Programa de emergencia de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), entre otras.

Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA, 2020), diversas limitaciones, dado que los/as trabajadores/as de actividades esenciales no sanitarias debían demostrar la relación fehaciente entre su trabajo y la infección por COVID 19. La FESPROSA señaló, en este sentido, la necesidad de la incorporación del COVID 19 en el listado definitivo de enfermedades profesionales, y reclamó normas complementarias que extendieran la cobertura al personal amparado por los autoseguros provinciales, el personal precarizado y monotributista, sin cobertura de ART.

Si bien los/as trabajadores/as de este sector fueron excluidos del goce de licencias para mayores de 60 años (a diferencia de otros sectores de actividad), manteniendo las licencias y trabajo remoto para personal de riesgo y embarazadas (Res. 207/2020), lograron obtener respuestas parciales (aunque precarias) a sus demandas salariales, por ejemplo, a través bonos extraordinarios (Decreto 315/2020), y la exención del impuesto a las ganancias al personal de salud (Ley 27549). Cada una de estas disposiciones fue producto de la lucha de los/as trabajadores/as de la salud, por mejoras salariales y condiciones de trabajo, así como por medidas de protección, siendo uno de los colectivos de trabajadores más directamente afectados por el contagio y muerte por COVID. Ello se plasmó en la Ley Silvio (Ley 27548) “Programa de Protección al Personal de Salud ante la pandemia de coronavirus COVID-19”, en la cual se determinaron medidas de bioseguridad que deberían cumplimentar los establecimientos de salud, así como la garantía de la provisión de equipamiento de protección personal para los/as trabajadores/as, entre otras normas.

Análisis de la conflictividad laboral en el sector salud (2016-2022)

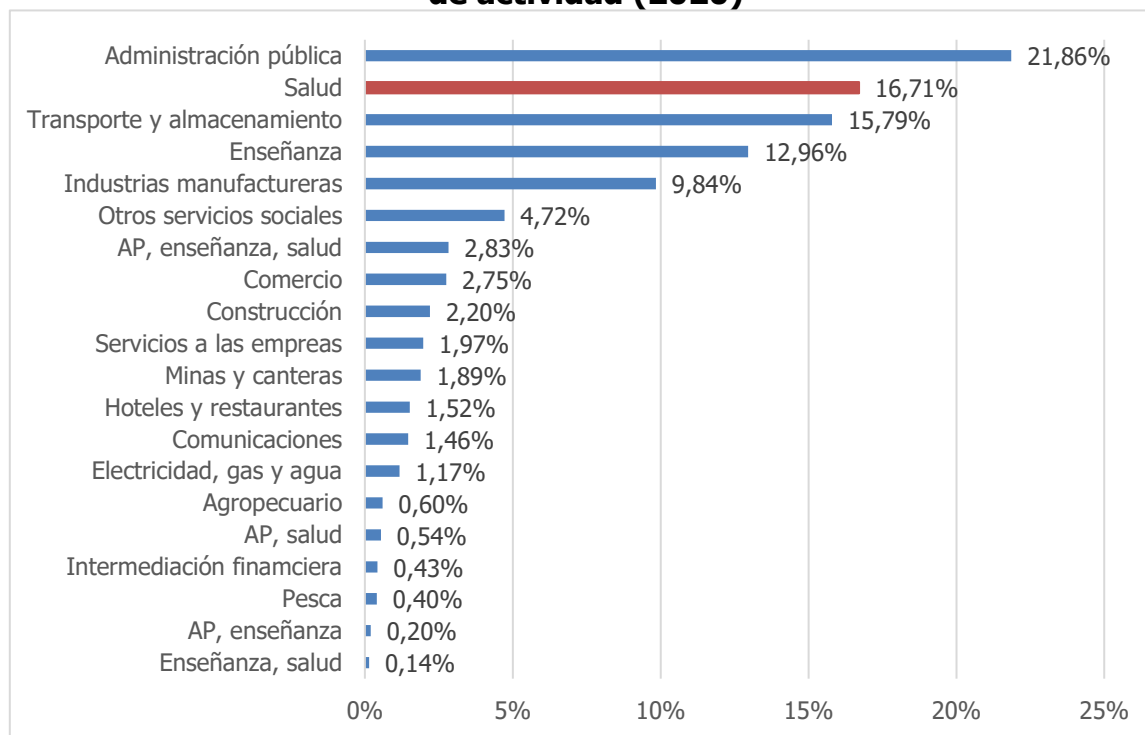
Inscriptas en un ciclo de desmovilización (Piva, 2024) y caracterizado por una clase obrera a la defensiva (Ghigliani, 2020), las acciones conflictivas durante la pandemia presentaron algunos rasgos generales que resulta necesario mencionar. Las condiciones de aislamiento social al inicio de la pandemia se tradujeron en una caída de la conflictividad social y laboral, pero pronto comenzaron a visibilizarse conflictos con características y demandas vinculadas a la situación de emergencia sanitaria y profundización de la crisis económica.

En este sentido, se destacó la disputa por el carácter esencial (o no) de las actividades, el intento de limitar recortes salariales, suspensiones y despidos, demandas por condiciones de salud y seguridad laboral, contratación de personal y regularización de contratos, y disputas por la visibilización de tareas de cuidado, llevadas adelante centralmente por mujeres y disidencias, entre otros aspectos (Basualdo et al., 2020; Marticorena y D’Urso, 2020; Nava y Grigera, 2022; Collado y Roitman, 2024). En cuanto a las formas de protesta, se realizaron “aplausazos” y abrazos simbólicos a lugares de trabajo, debido a las restricciones a la circulación, así como apagones virtuales en el caso de trabajadores/as que pasaron a desarrollar sus tareas en forma remota, como los/as docentes.

En este contexto, el sector salud se destacó por su elevado nivel de conflictividad laboral a nivel nacional. En el período analizado (2016-2022), las acciones colectivas del sector representaron el 15,14% del total. Este porcentaje sólo fue superado por la administración pública, que concentró el 28% de las acciones. Al analizar la distribución por rama de actividad para el año 2020 (gráfico 1), se observa que los conflictos laborales en la administración pública

cayeron 6,14 puntos porcentuales respecto al año previo, mientras que en el caso del sector salud se registra un incremento de 1,57 pp., lo cual reafirma el protagonismo de las luchas de los/as trabajadores/as del sector en el contexto de pandemia.

Gráfico 1: Distribución de la conflictividad laboral a nivel nacional por rama de actividad (2020)

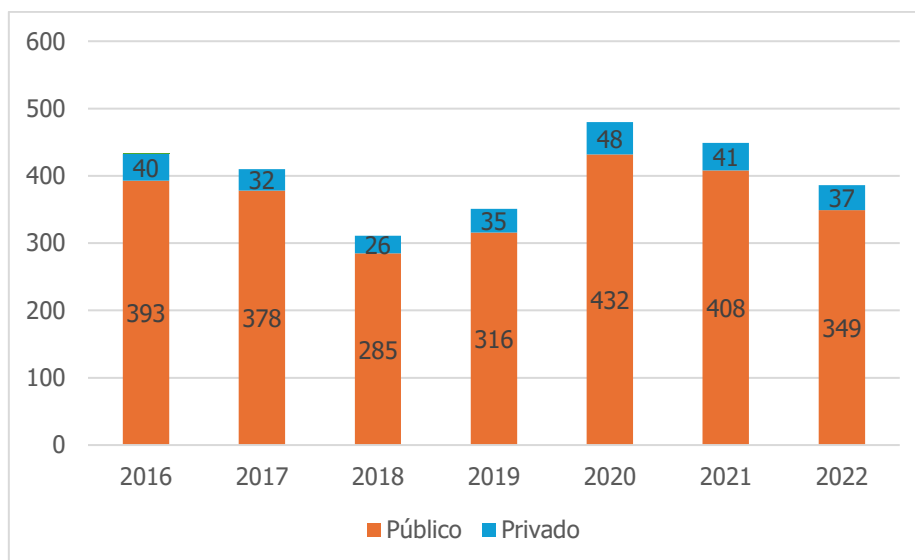


*AP significa Administración pública.

Fuente: Elaboración propia en base a STEySS

El análisis del período 2016-2022 nos permite observar el impacto de la pandemia teniendo en cuenta la evolución en los años precedentes, signada por las políticas de ajuste presupuestario. Como es posible apreciar en el gráfico 2, se produce un incremento de las acciones conflictivas en pandemia, retornando, en 2022 a los valores previos.

Gráfico 2: Distribución anual de las acciones conflictivas del sector salud en todo el país (2016-2022)*



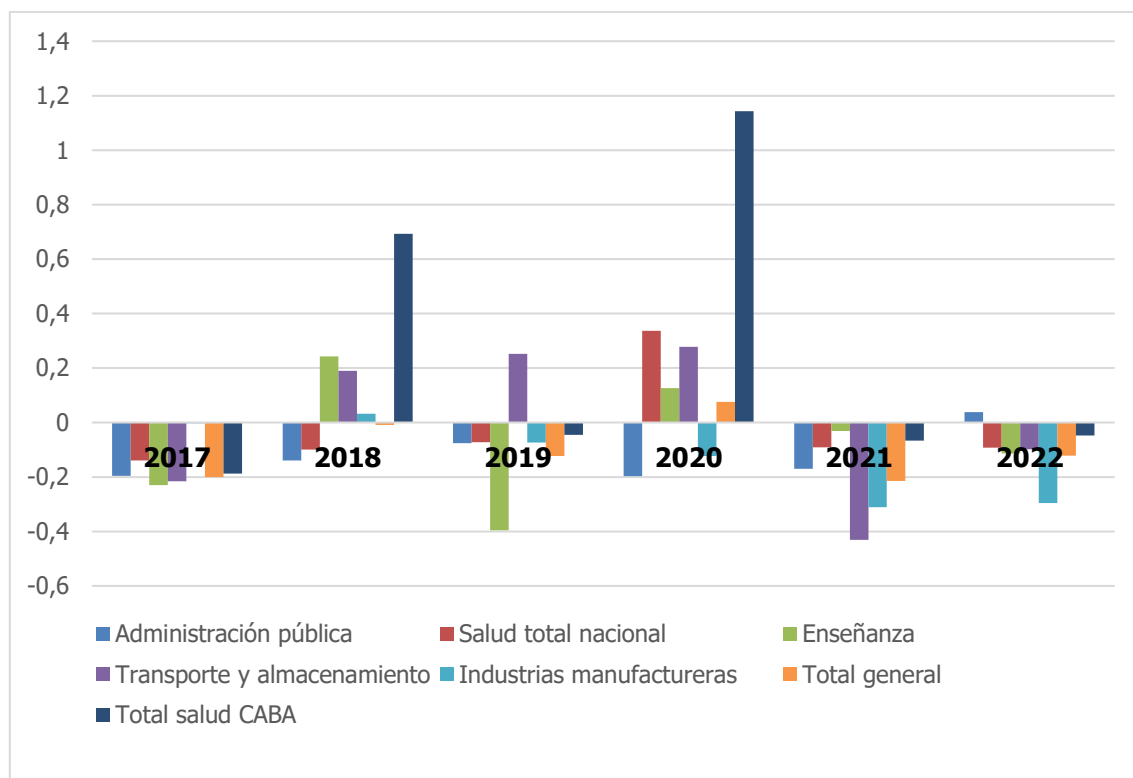
Fuente: Elaboración propia en base a STEySS.

* se excluyen del gráfico 21 acciones conflictivas que implicaron ambos ámbitos (estatal y privado) 3 en 2017; 1 en 2018; 4 en 2019; 11 en 2020; 1 en 2021 y 1 en 2022.

En cambio, en la CABA, las acciones conflictivas se incrementaron en pandemia y esos niveles se mantuvieron con posterioridad, como expresión de dinámicas conflictuales específicas.

En el gráfico 3 es posible apreciar la variación interanual de la conflictividad en los principales sectores que protagonizaron la protesta en el período estudiado, dando cuenta del significativo aumento que ésta tuvo en la CABA, con un incremento del 114% en 2020 respecto a 2019 mientras que, en el total general, esa variación fue del 8%. En 2021, la tasa de variación interanual de la conflictividad laboral disminuyó en todos los sectores analizados, no obstante, en el sector salud de la CABA esta caída fue una de las más bajas (-7%) junto con enseñanza (-3%), distanciándose de la tasa de variación interanual de -21% que se observa para el conjunto de los sectores.

Gráfico 3: Tasa de variación interanual de la conflictividad laboral - principales sectores (2016-2022)

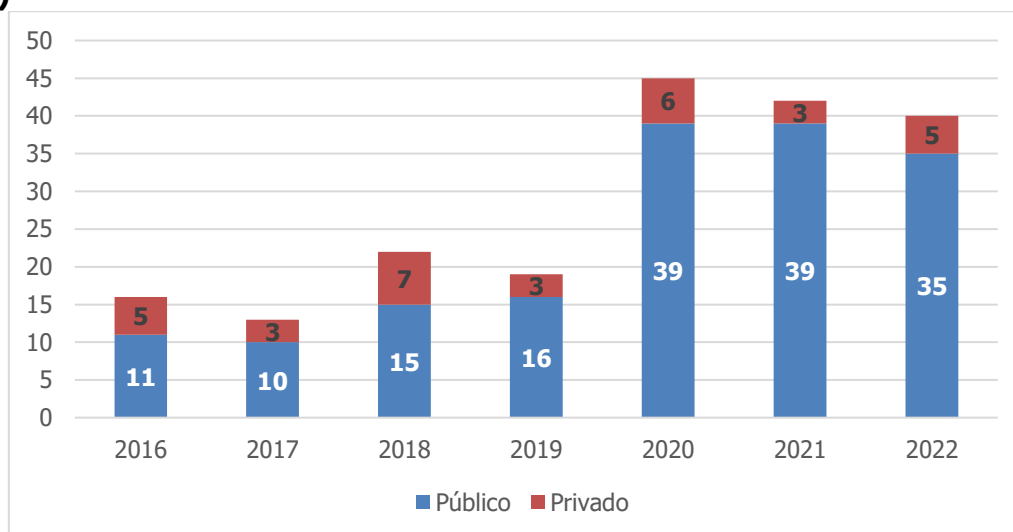


Fuente: Elaboración propia en base a STEySS

Al analizar la distribución de las acciones conflictivas por provincia para el período delimitado, se observa que la mayor cantidad se localizaron en la provincia de Buenos Aires (487), seguida de Santa Fe (260), Córdoba (210) y la CABA (199). Considerando únicamente las acciones conflictivas desarrolladas en el ámbito estatal, la dinámica no muestra grandes variaciones: Buenos Aires sigue concentrando el mayor número de acciones (431), seguida de Santa Fe (222), Córdoba (193), Chaco y CABA (165 acciones conflictivas en ambos casos).

La distribución anual de la conflictividad laboral en la CABA (grafico 4) muestra un salto en 2020, llegando a 45 acciones conflictivas, dinámica que se mantiene en los años posteriores (42 acciones en 2021 y 40 en 2022). Las acciones conflictivas del ámbito público representan el 83% del total (165) y siguen un movimiento similar al que ocurre al considerar los ámbitos privado y público conjuntamente: las acciones conflictivas ascienden en 2020, este valor se mantiene en 2021 y disminuye levemente en 2022.

El nivel de agregación de las acciones conflictivas situadas en la CABA, mantiene la misma dinámica que se observa al analizar el conjunto de acciones de todo el país: prevalecen las acciones descentralizadas, que implicaron a un solo establecimiento (56,3%) en relación a aquellas que implicaron a toda la rama de actividad (39,2%). Ahora bien, al considerar únicamente los conflictos del ámbito público las acciones conflictivas se distribuyen de forma más pareja, lo cual da cuenta de un importante nivel de centralización: hubo 85 acciones que implicaron un solo establecimiento y 87 a toda la rama de actividad, las restantes (8) son aquellas que se desarrollaron en más de un establecimiento. Un elemento distintivo vinculado con la centralización de las acciones conflictivas es el incremento de las acciones por rama de actividad en el contexto de pandemia, manteniendo niveles similares en los años posteriores. En el caso de la CABA se observa un salto de 2 acciones en 2019, a 19 en 2020, tendencia que mantiene en los años posteriores (21 acciones en 2021 y 22 acciones en 2023).

Gráfico 4: Distribución anual de las acciones conflictivas en CABA (2016-2022)*

Fuente: elaboración propia en base a STEySS

*Se excluyen del gráfico 2 acciones conflictivas del año 2019 que implicaron ambos ámbitos (privado y público)

En relación con el tipo de reclamo en el sector público de la CABA (tabla 2), es posible observar una prevalencia de los conflictos no salariales (96) respecto a los salariales (69). Al desagregar las acciones por tipo de reclamo, se destacan aquellas por mejoras salariales y su incremento en el contexto de pandemia, tendencia que se mantiene -e incluso se acentúa- en 2021 y 2022. En el caso de las acciones por reclamos no salariales, prevalecen aquellas por condiciones y medio ambiente laboral, que en el período analizado alcanzan su máximo en 2020 y luego, en 2021 y 2022, se acercan a los valores de los años previos a la pandemia. En 2020 se destacan los reclamos sobre la falta o mala calidad de los insumos, y en el 2021, reclamos sobre condiciones de trabajo y vacunación.

Asimismo, adquieren relevancia aquellas acciones por reclamos contractuales, destacándose los conflictos por despidos o renovaciones de contratos. Dentro del ítem “reclamos contractuales”, en el año 2020 adquiere relevancia la demanda de regularización de contratos laborales durante el primer año de pandemia. Las acciones conflictivas que se incluyen en esta categoría son protagonizadas por los sectores más precarios (enfermeros por reconocimiento profesional, residentes y trabajadores no médicos por regularización contractual). En los años siguientes, predominan los reclamos por despidos o renovación de contratos, originados en la sobrecarga de trabajo durante la pandemia y las nuevas contrataciones realizadas en ese contexto de emergencia.

Tabla 1: Acciones conflictivas según tipo de reclamo. Salud pública CABA (2016-2022).

Tipo de reclamo	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Reclamos salariales								
Demanda de mejoras salariales	2	2		3	13	17	18	55
Pagos adeudados					1	2		3
Negociación o Paritaria (Salarial)	5	2			2	1	1	11
Reclamos contractuales								

Despidos o renovación de contrato	1		5	2	1	7	9	25
Regularización del Contrato Laboral					8	3	3	14
Condiciones de trabajo								
Condiciones y Medio Ambiente Laboral		3	4	5	10	7	1	30
Trato Discriminatorio o Sanciones		2		1				3
Contextuales								
Demandas de seguridad	2	1		1	2			6
Otros								
Otras demandas	1		6	4	2	2	3	18
Total	11	10	15	16	39	39	35	165

Fuente: Elaboración propia en base a STESS

Respecto a la modalidad de lucha, el 68% de las acciones conflictivas de la CABA fueron sin paro, con una destacada prevalencia de las “movilizaciones y similares” que representaron más de la mitad de las acciones (52,7%). Esta dinámica se mantiene al observar únicamente las acciones situadas en el ámbito público, donde prevalecen las medidas sin paro y las “movilizaciones y similares”. Las movilizaciones, luego de una tendencia ascendente y un fuerte incremento en 2020 y 2021, caen en 2022. En efecto, durante la pandemia, ante las limitaciones planteadas por la cuarentena, se desplegaron distintas acciones de visibilización, como abrazos simbólicos a los establecimientos de salud porteños. En el caso de las acciones con paro, también se observa una tendencia ascendente en el contexto de pandemia, que continúa e incluso se acentúa en los años posteriores, llegando a 19 acciones con paro en 2022.

Tabla 2: Tipo de acción conflictiva en salud pública de CABA (2016-2022)

Tipo de acción	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Movilización y similares	4	6	10	10	18	22	9	79
Paros	5	3	1	2	8	10	19	48
Anuncios y alertas		1	1	3	7	4	4	20
Paros más bloqueos, cortes u ocupaciones	1		2	1	2	2	2	10
Bloqueos, cortes u ocupaciones sin paros	1		1		4	1	1	8
Total	11	10	15	16	39	39	35	165

Fuente: Elaboración propia en base a STESS

En cuanto a los actores que conducen el conflicto es posible observar diversas características específicas del sector. Pese a la preeminencia de las organizaciones sindicales en la organización de las acciones conflictivas, cabe destacar la importancia que asumen aquellos conflictos llevados adelante por actores no insertos en la estructura de las organizaciones sindicales. En este sentido, se observa la importancia de acciones conducidas por trabajadores autoconvocados, solos o como principal actor (el 18% del total de acciones en el período, siendo el segundo actor luego de ATE, que explica el 26% de las acciones), y la importancia de la Asamblea de Residentes y Concurrentes (que explica el 8% de las acciones).

El peso de las acciones de trabajadores autoconvocados y la constitución de la Asamblea de Residentes y Concurrentes, expresan ciertas tensiones en la representación de los/as trabajadores/as del sector, que no podemos abordar en esta oportunidad, pero que pueden estar ligadas tanto a las estrategias sindicales como a las dificultades de sindicalización de sectores profesionales.

En cuanto a las acciones protagonizadas por formas de organización sindical, se destaca la importancia de las acciones conducidas por instancias de base (delegados, CD/CI/JI, que alcanzan el 9%), por un lado, y por otro, la clara fragmentación sindical, donde se distinguen, además de los sindicatos estatales (ATE principalmente), los sindicatos de origen profesional (Médicos –AMM-, enfermeros – ALE-) y de lugares de trabajo (APyT Garrahan). Por último, se destaca el peso de acciones donde se articula el apoyo de diversos actores y colectivos de trabajadores/as del sector (29 de las 165 acciones conflictivas son impulsadas por más de un actor).

Al analizar en forma desagregada por año la evolución de la cantidad de acciones por organización principal/que conduce, se observa un salto en la conflictividad impulsada por sindicatos a partir de 2020. Pero mientras las acciones conducidas por ATE (solo o con otras organizaciones), tienen un salto en el primer año de pandemia y luego decrecen, las acciones impulsadas por la ALE (Asociación de Licenciados en Enfermería) se incrementan.

Tabla 3: Acciones conflictivas según actor principal. Salud pública CABA (2016-2022)

Organización que conduce/principal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total	%
ATE	2	3	3	5	14	10	6	43	26%
Autoconvocados/as	3	1	7	7	6	4	1	29	18%
APYT (Garrahan)	1			2	5	7	5	20	12%
ALE					2	6	11	19	12%
Delegados/JI/CD	1	4	3		1	3	3	15	9%
Asamblea Residentes y concurrentes	3				5	2	3	13	8%
AMM	1		1		2	2	5	11	7%
APSS*		2			1			3	2%
FESPROSA			1		1	1		3	2%
AGIHM**						2		2	1%
Otros				2	2	2	1	7	4%
Total	11	10	15	16	39	39	35	165	100

Fuente: Elaboración propia en base a STESS

*APSS: Asociación de Profesionales de Servicio Social

**AGIHM: Asociación Gremial Interdisciplinaria del Hospital Moyano

Ello nos plantea la importancia de profundizar en el análisis de las dinámicas de conflictividad de distintos colectivos de trabajadores/as de la salud. En el siguiente apartado mencionaremos el conflicto que viene protagonizando la enfermería en la Ciudad de Buenos Aires y el resonante conflicto de residentes que tuvo lugar en el año 2022.

Dinámicas de conflictividad emergentes

Enfermería

La importancia de la enfermería en la atención de la “primera línea” durante la pandemia, reforzó el histórico reclamo de estas trabajadoras por su reconocimiento profesional. Dicho reclamo tuvo un fuerte revés en el año 2018, con la sanción de la Ley N° 6.035 que, como mencionamos anteriormente, excluyó a la enfermería de las categorías incluidas, con el aval de AMM como de la Federación de Profesionales de la Salud. Esto se dio en el marco de una masiva movilización, narrada por una referente del sector como un “hito de la lucha de la enfermería”.

Este reclamo cobró nuevo impulso a partir de la pandemia, en tanto oportunidad de legitimar socialmente el reclamo del sector, sin embargo, no sucedió.

“El 2018 fue un golpe. (...) El que viniera la pandemia para muchos fue una oportunidad de: ‘ahora sí nos van a reconocer, porque ahora van a ver lo indispensables que somos’. Y eso no (...) todavía estamos lidiando con lo que generó en la enfermería que pese a la exposición, a los cambios que tuvimos que hacer en horarios, en actividades, en tareas, en que nos pusimos el hospital al hombro. (...) Era mucho, mucho trabajo y las enfermeras en general pensaban: ‘ahora sí nos van a reconocer’ y la pandemia no cambió nada, de hecho empeoró varias de las situaciones, porque sufrimos más tareas y es: ‘bueno, ahora que ya las hacen las enfermeras, que las sigan haciendo’, porque naturalizó y dejó claro que no valemos nada para el gobierno básicamente.” (Representante ALE, Julio de 2024)

La inclusión de la enfermería dentro de la ley de profesionales de la salud supondría que dejaran de encuadrarse en el escalafón general de la administración pública de CABA, y dejaran de estar representados por SUTECBA. El impacto en las organizaciones sindicales del sector, particularmente, la eventual pérdida de un significativo número de afiliados por parte de SUTECBA y el posible impacto en el peso de los sindicatos de médicos y profesionales en las relaciones laborales del sector (por un aumento más que significativo del peso de los profesionales no médicos) serían parte de los motivos detrás de la negativa del ejecutivo de la CABA para incluir a estas trabajadoras dentro de la ley 6035. Otro elemento clave respecto de este conflicto es que parece haber quedado circunscripto a enfermería sin un claro apoyo de otras categorías de trabajadores/as del sector, expresando la fragmentación en la conflictividad sectorial.

Estos/as trabajadores/as continúan luchando por su incorporación en la carrera profesional, apelando a las movilizaciones callejeras, audiencias públicas, presentación de recursos de amparo y proyectos legislativos, articulando la movilización y la acción institucional.

Residentes y concurrentes³⁶

Entre los conflictos de mayor relevancia y repercusión social del subsector de la salud pública de la CABA durante la salida de la pandemia, se destaca el conflicto protagonizado por

³⁶ Un análisis detallado del conflicto es desarrollado por Maia Vojnov en el marco de una Beca Estímulo UBACYT otorgada para el desarrollo del plan de trabajo “El conflicto de los/as trabajadores/as residentes en la CABA (2022) a la luz del impacto de la pandemia en el sector de la salud pública”.

residentes y concurrentes de los hospitales públicos de gestión exclusivamente porteña durante los meses de septiembre y noviembre del año 2022.

Este conflicto fue organizado a través de la Asamblea de Residentes y Concurrentes de la CABA: una asamblea de carácter autoorganizado que históricamente nuclea residentes y concurrentes de múltiples profesiones y de diversos hospitales públicos de la CABA (con mayor presencia de trabajadores/as del Tornú, el Gutiérrez y el Elizalde), por fuera de los sindicatos tradicionales del sector.

El conflicto comenzó el 21 de septiembre y finalizó el 15 de noviembre de 2022. Se caracterizó por su intensidad, expresada en el alto nivel de movilización y confrontación sostenida: se realizaron nueve semanas de movilización con cese de tareas y veintiún días seguidos de paro por tiempo indeterminado -garantizando guardias mínimas- (decisión votada en asamblea el 25 de octubre frente al Ministerio de Salud de CABA). En el marco de este conflicto se realizaron múltiples marchas diarias al Ministerio de Salud de CABA y a la jefatura porteña, a la vez que se realizaron marchas de velas, aplausazos (recuperando los repertorios difundidos en la pandemia), postas de salud, entre otras medidas.

Las principales demandas del conflicto consistieron en la exigencia de un aumento del 100% en una cuota para el salario básico neto de los residentes de primer año (que implicaba pasar de un salario neto de 120³⁷ mil pesos a uno de 250 mil, valor de la canasta básica porteña de ese momento) y, además, la asignación de salario y ART para concurrentes.

A lo largo de este conflicto, los residentes y concurrentes de la ciudad denunciaron la persistente persecución por ausentismo al interior de los hospitales (Suárez, 2022). Las respuestas ofrecidas por Fernán Quirós (el entonces Ministro de Salud porteña) a lo largo del conflicto consistían en el ofrecimiento de aumentos no remunerativos, en cuotas y menores al 100% exigido por la Asamblea. Sin embargo, el reclamo de los residentes logró instalarse socialmente. La escalada del conflicto provocó que, el 8 de noviembre, se realizara un paro nacional en conjunto -en solidaridad con los residentes- convocado por la Asociación de Médicos Municipales, SUTECBA, ATE, Federación de Profesionales de la salud del GCABA, FESPROSA, ALE, SITRE, entre otras.

Finalmente, el 15 de noviembre concluyó el conflicto, tras la firma de Médicos Municipales de un aumento del 99% en una cuota para los residentes, que llevó el salario a 200 mil pesos (Asociación de Médicos Municipales, 2022). A su vez, tras la negociación, se acordó abrir una mesa técnica entre el Ministerio de Salud porteño y la Asamblea para discutir las condiciones laborales de los concurrentes.

Reflexiones finales

A partir del análisis realizado, es posible observar que el carácter esencial le otorgó al sector una mayor centralidad y visibilidad para realizar reclamos en el contexto de pandemia, al tiempo que profundizó sus condiciones de precariedad laboral. En efecto, se observa un salto

³⁷ Cabe aclarar que este salario R1 refiere al percibido por residentes de hospitales de gestión porteña. Los residentes de hospitales de gestión nacional o mixta -como, por ejemplo, el Garrahan- tenían en ese momento un salario básico superior -180 mil pesos netos R1-.

en la conflictividad sectorial de la salud pública de la CABA durante la pandemia, que se mantiene en los años posteriores como resultado de la aún mayor precarización de las condiciones de trabajo durante la emergencia sanitaria. Este salto expresa la persistencia y profundización de las condiciones de precarización laboral en un sector golpeado por años de ajuste presupuestario.

El salto observado en la conflictividad expresa demandas del sector por condiciones de trabajo, contractuales y salariales, potenciadas por las medidas tomadas en pandemia. Efectivamente, la incorporación de personal en la pandemia para atender el aumento de la demanda en el sector, originó los posteriores reclamos frente a despidos de estos/as trabajadores/as contratados/as en forma precaria. Por otro lado, los bonos, y adicionales otorgados en el contexto de emergencia, dieron también lugar a posteriores reclamos sobre su inclusión al básico, etc. Es decir, la respuesta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, basada en una mayor precariedad laboral, se expresó en mayores demandas en contra de esta precariedad.

Ahora bien, el mayor deterioro de las condiciones de trabajo durante la pandemia, no alcanza para explicar el salto observado en la conflictividad sectorial, en tanto la acción colectiva no se deriva mecánicamente de las condiciones materiales en las que se encuentran insertos los sujetos. En este sentido, podríamos decir que la centralidad de los/as trabajadores/as de la salud en la pandemia puso de relieve su poder social, legitimando sus reivindicaciones hacia el interior del colectivo de trabajo, y hacia el conjunto de la sociedad, funcionando como impulso para la movilización.

También pudimos observar el fuerte nivel de fragmentación existente en la representación del sector. Reconsiderando la importante fragmentación y jerarquías que atraviesan al sector de la salud, al tiempo que su carácter interconectado en el proceso de trabajo, es posible plantear que la debilidad del sector en conquistar sus demandas vinculadas a mejoras salariales, estabilidad laboral, condiciones y medio ambiente de trabajo, se articula sobre la base de la fragmentación del colectivo de trabajadores/as.

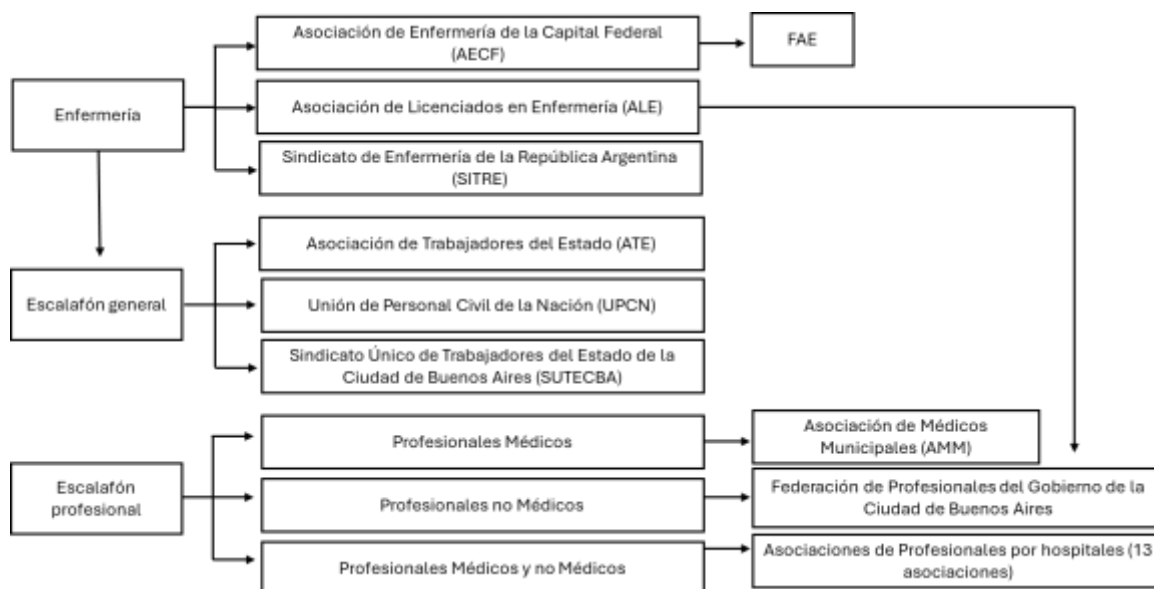
Tomando dos dinámicas de conflictividad emergentes, como la de enfermería y de residentes, podemos observar que el conflicto de residentes, que puede considerarse exitoso en el logro de las demandas inmediatas, fue capaz de articular al conjunto de los/as trabajadores/as de la salud, mientras que el conflicto protagonizado por las enfermeras no logró concitar, al momento, el apoyo de un arco más amplio, quedando circunscripto en el entramado de barreras jerárquicas, materiales y simbólicas que atraviesan al heterogéneo colectivo de trabajadores/as que forman parte del sector de la salud en la CABA.

El análisis alcanzado en este trabajo permite sostener, a modo de hipótesis provisoria, que pese al poder de movilización de los/as trabajadores/as del sector salud, la fragmentación del colectivo de trabajadores/as debilita su poder de negociación. Esto limita las posibilidades de mejorar sus condiciones laborales y salariales en un sector que resulta estratégico a nivel social, pero con escaso poder estructural en términos económicos.

En futuras indagaciones será necesario considerar las distintas estrategias de construcción sindical y el modo en que éstas reproducen o, por el contrario, buscan combatir la fragmentación, para abordar su vínculo con las características de la conflictividad hasta aquí analizadas.

Anexo

Figura 1. Mapa sindical de la Salud Pública en CABA



*Estas asociaciones en algunos casos incluyen al personal técnico de los hospitales.

Fuente: Elaboración propia en base a fuentes primarias y secundarias.

Bibliografía

Acuña, C. H. y Chudnovsky, M. (2002). El sistema de salud en Argentina. *Centro de Estudios para el Desarrollo institucional*. <http://www.bibleduc.gov.ar/areas/salud/dircap/mat/matbiblio/salud.pdf>

Aguirre, S. (2021). “Si gana salud, gana el pueblo”. Clase, etnia y género en el conflicto de salud de la provincia de Neuquén, Argentina (2021). *Polis [Online]*. 60. <http://journals.openedition.org/polis/20943>

Alonso, V., Hoffmann, M. M., Romero, P. M., Sánchez, L. P., Campoy, P. P., Fuertes, S., y Varela, M. S. (2022). “A nosotras no nos sirven los aplausos”. De la vocación a la visibilización de trabajadores de salud pública durante la pandemia en Mar del Plata, Argentina”. *Cuadernos de H ideas*, vol. 16, (núm. 16). <https://doi.org/10.24215/23139048e070>

Aspiazu, E. (2010). Los conflictos laborales en la Salud Pública en la Argentina. *Trabajo, Ocupación y Empleo. Serie Estudios* 9, MTEySS. Julio. <https://cdi.mecon.gob.ar/bases/doc/mintrab/trabajo/9.pdf>

----- (2017). Las condiciones laborales de las y los enfermeros en Argentina: entre la profesionalización y la precariedad del cuidado en la salud. *Trabajo y Sociedad*, (28), 11-35. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/71306>

Basualdo, V. y Peláez, P. (2020). Procesos de conflictividad laboral en el marco de la pandemia del COVID-19 en Argentina (marzo-mayo 2020). FLACSO. <https://www.flacso.org.ar/publicaciones/procesos-de-conflictividad-laboral-en-el-arco-de-la-pandemia-del-covid-19-en-argentina-marzo-mayo-2020/>

Belardo, M. (2020). Covid-19 y el sistema de salud en Argentina: lo que nos revela la pandemia. En Goren, N. y Ferron, G. *Desigualdades en el marco de la pandemia: reflexiones y desafíos*. EDUNPAZ.

Castro, H. M., Prieto, M. A., y Muñoz, A. M. (2022). Prevalencia de síndrome de burnout en personal de salud durante la pandemia de COVID-19 y factores asociados. Estudio de corte transversal. *Medicina (Buenos Aires)*, 82(4), 479-486. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0025-6802022000600479

Chan, C., Tsui, W. and Tang, L. (2023). The practice of social movement unionism: COVID-19 and the Hong Kong medical workers' strike. *Work in the Global Economy*, 3(1): 89–107. <https://doi.org/10.1332/273241721X16807754665367>

Collado, P. y Roitman, S. (2024). Conflicto laboral y politicidad emergentes en la Argentina pandémica. *Revista Utopía y Praxis Latinoamericana*, 29 (104). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10501681>

East, S., Laurence, T. y López Mourelo, E. (2020). Covid-19 y la situación de las trabajadoras de la salud en Argentina. *OIT-UNFPA-ONU Mujeres*. <https://www.ilo.org/es/publications/covid-19-y-la-situacion-de-las-trabajadoras-de-la-salud-en-argentina-0>

Elbert, R., P. Boniolo P., y P. Dalle, P. (2022). Trabajadores y trabajadoras en actividades claves durante la pandemia de Covid-19 en Argentina: precariedad, supervivencia y organización colectiva. *ILO Working Paper* 66. <https://www.ilo.org/es/publications/trabajadores-y-trabajadoras-en-actividades-claves-durante-la-pandemia-de-1>

Franzosi, R. (2017). La prensa como fuente de datos socio-históricos: Cuestiones sobre la metodología de recolección de datos a partir de periódicos. *Revista de Estudios Marítimos y Sociales*, 11. <https://estudiosmaritimossociales.org/archivo/remss-11/franzosi-pdf/>

Ghigliani, P. (2009). Acerca de los estudios cuantitativos sobre conflictos laborales en Argentina (1973-2009): reflexiones sobre sus premisas teórico-metodológicas. *Conflicto Social*, 2(2), 76-97. <https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/CS/article/view/424/382>

----- (2020). La clase obrera a la defensiva (2015-2020). *Plaza Pública*, 13(23), 134-158. <https://ojs2.fch.unicen.edu.ar/ojs-3.1.0/index.php/plaza-publica/article/view/853>

Kelly, J. (1998). *Rethinking industrial relations: mobilization, collectivism and long waves*. Routledge.

Laitano, G. y Nieto A. (2022). Introducción. En Laitano y Nieto (Comps.): *La conflictividad social en la historia reciente. Estudios sociohistóricos entre lo local y lo regional*. Teseo, pp. 15-70.

Marticorena, C. (2023). Reseña de *Labor Power and Strategy*. John Womack Jr. Edited by Peter Olney and Glenn Perušek. PM Press: Oakland. 2023. 208 pp. *Global Labour Journal*, 14(3), 315-318. <https://doi.org/10.15173/glj.v14i3.5540>

Marticorena, C. y D'Urso, L. (2020). Los/as trabajadores/as frente a la pandemia: regulaciones, negociación colectiva y conflicto. Serie *El trabajo en los tiempos de la Covid-19*, CEIL-CONICET, N° 7. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/121177>

----- (2021). El poder de los/as trabajadores/as: una revisión crítica de los abordajes conceptuales para su estudio. *Revista de Estudios Marítimos y Sociales*, N° 18. <https://estudiosmaritimossociales.org/remss/remss18/07.pdf>

----- (2022). Strategic position and trade union power: an analysis of trade union strategies in the automotive, chemical and edible oils sectors in Argentina (2003-2015). *Global Labour Journal*, 13(3), 281-304. <https://doi.org/10.15173/glj.v13i3.4929>

Massano, J. P. y Cappannini, A. (2023). Conflictividad y estructura social. Algunas reflexiones teóricas a partir de un estudio de caso: el conflicto CGT vs. corporaciones médicas de 1985-1986. *Estudios del Trabajo*, 65. <https://ojs.aset.org.ar/revista/article/view/128/197>.

McAlevey, J. (2023). How to read Womack. En Womack, J., Olney, P. and Perušek, G, *Labor Power and Strategy*. PM Press, 107-112.

Moody, K. (2017). *On new terrain*. Heymarket Books.

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) (2018). *Metodología para el relevamiento, sistematización y análisis de los conflictos laborales colectivos*. MTEySS.

Nava, A. y Grigera, J. (2022). “Pandemia y protesta social en América Latina: tendencias, actores y demandas de la conflictividad social y laboral en Brasil Argentina, Chile y Colombia. 2019-2020.” En *Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda*, X (20), 111-138. <https://www.archivosrevista.com.ar/numeros/index.php/archivos/article/view/347>

Novas, S. V., Nahmod, M., Nespral, M., Bori, C., Zappa, L. M., Korin, H., & Pena, F. (2022). Frecuencia de ansiedad, estrés postraumático y “burnout” en personal de salud en hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, en el contexto de la pandemia por COVID-19. *Vertex Revista Argentina De Psiquiatría*, 33(155), 25–35. <https://doi.org/10.53680/vertex.v33i155.133>

Nowak, J. y Gallas, A. (2014). Mass Strikes Against Austerity in Western Europe – A Strategic Assessment. *Global Labour Journal*, 5(3), 306-321. <https://doi.org/10.15173/glj.v5i3.2278>

Piva, A. (2024). Entre la resistencia y la desmovilización. Una aproximación cuantitativa al estudio del conflicto obrero en Argentina, 2006-2022. *Apuntes*, 97, 21-61. <https://doi.org/10.21678/apuntes.97.2195>

Ramacciotti, K. (ed.) (2023). *Estudiar, cuidar y reclamar. La enfermería argentina durante la pandemia de COVID-19*. Editorial Biblos.

Ramacciotti, K. y Testa, D. (2021). ¿Trabajadoras o heroínas? Cuidados sanitarios en tiempos de crisis. *Rev. Ciencias Salud*, 19, 1-19. <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.10598>

Salerno, P. (2020). Enfermeras en pandemia: el discurso público, entre el cuidado y la heroicida. *Poliedro*, 2020, 197-216. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/122582>

Salvia, A., Poy, S., Lorena Pla, J. [comps.]. *La sociedad argentina en la pospandemia: radiografía del impacto del covid-19 sobre la estructura social y el mercado de trabajo urbano*. Siglo XXI Editores. <https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/15414>

Scatularo, C., Battioni, L., Bellia, S., Costa de Robert, S., De las Nieves Gatti, M., Racki, M., Soracio, G., Lescano, A., Giorgini, J., & Pereiro, S. M. (2021). Impacto psicofísico de la pandemia COVID-19 en trabajadores de la salud en Argentina: Encuesta ImPPaCTS-SAC.20.

Revista argentina de cardiología, 89(3), 204-210.
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-7482021000300204

Schmalz, S., Ludwig, C. y Webster, E. (2018) The Power Resources Approach: Developments and Challenges. *Global Labour Journal*, 9(2): 113–134.
<https://doi.org/10.15173/glj.v9i2.3569>

----- (2019) Power Resources and Global Capitalism. *Global Labour Journal*, 10(1), 84–90. <https://doi.org/10.15173/glj.v10i1.3824>

Silver, B. (2005). *Las fuerzas del trabajo. Los movimientos obreros y la globalización desde 1870*. Editorial Akal.

Szabó, I. G. (2020). Professionals on the road to contention: social movement unionism in healthcare labour disputes across Europe. *Economic and Industrial Democracy*, 43(1), 410–30.
<https://doi.org/10.1177/0143831X20903090>

Tobar F., Olaviaga S., y Solano R. (2012). Complejidad y fragmentación: las mayores enfermedades del sistema sanitario argentino. *Documento de Políticas Públicas*. Análisis N° 108. CIPPEC.

Womack, J. (2008). *Posición Estratégica y Fuerza Obrera. Hacia una Nueva Historia de los Movimientos Obreros*. Fondo de Cultura Económica.

Womack, J., Olney P., and Perušek, G. (2023). *Labor Power and Strategy*. PM Press.

Wright, E. O. (2000). Working Class Power, Capitalist Class Interest, and Class Compromise. *American Journal of Sociology*, 105(4), 957–1002.

Fuentes

Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2022, 14 de noviembre). Revisión Paritaria. <https://www.medmun.org.ar/12955-revision-paritaria/>

Costa, J. P. y Vacarezza, C. (2023). El gasto público en la Ciudad de Buenos Aires entre 2016 y 2022: Capítulo Salud. *Informe CEPA*, N° 302. <https://centrocepa.com.ar/informes/422-el-gasto-publico-en-la-ciudad-de-buenos-aires-entre-2016-y-2022-capitulo-salud>

Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina – FESPROSA (2020). Boletín N° 06/2020. [Boletín N°06/2020 FESPROSA – FESPROSA](#)

Observatorio Federal de Recursos Humanos en Salud (2020). *Fuerza de trabajo en el sector salud en Argentina, datos 2019*. [Fuerza de trabajo en el sector salud en Argentina](#)

Suárez, M. (2022, 14 de Octubre). Pedido de listas y amenazas: residentes porteños denuncian persecución contra quienes paran. *Tiempo Argentino*. [Pedido de listas y amenazas: residentes porteños denuncian persecución contra quienes paran \(tiempoar.com.ar\)](#)

Superintendencia de Riesgos del Trabajo - SRT (2019). *Encuesta Nacional a trabajadores sobre Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud y Seguridad (ECETSS)*. CABA. [ecetss_informe.pdf \(argentina.gob.ar\)](#)

Semblanza

Clara Marticorena

Doctora en Ciencias Sociales (UBA). Investigadora Adjunta (CEIL-CONICET) y docente en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Últimas publicaciones: “Strategic position and trade union power: a comparative study of the automotive, chemical-petrochemical and oil sectors in Argentina (2003-2015)” en *Global Labor Journal* (2022, en coautoría con L. D’Urso); “Working-class conditions and resistances in contexts of austerity in Argentina”, en Atzeni Maurizio, Mezzadri Alessandra, et al. (Eds.) *Handbook of research on the Political Economy of Work*. Reino Unido: Edward Elgar (2023, en coautoría con L. D’Urso).

Lucila D’Urso

Doctora en Ciencias Sociales (UBA). Investigadora Docente Adjunta (ICO-UNGS) y Profesora Adjunta (UBA). Últimas publicaciones: “Trade union solidarity in crisis: The generative tensions of labour activism in Argentina” en *Work, Employment and Society* (2023, en coautoría con A. Fishwick); “Strategic position and trade union power: a comparative study of the automotive, chemical-petrochemical and oil sectors in Argentina (2003-2015)” en *Global Labor Journal* (2022, en coautoría con C. Marticorena).

Maia Vojnov

Estudiante avanzada de la Carrera de Sociología (FSOC-UBA). Becaria estímulo UBACYT. Integrante del proyecto UBACYT “Condiciones de trabajo, formas de organización y acción colectiva de los/as trabajadores/as en la pandemia y pospandemia en argentina (2020-2023)”.

Ernesto Alejandro Najmías

Estudiante avanzado de la Carrera de Sociología (FSOC-UBA). Integrante del proyecto UBACYT “Condiciones de trabajo, formas de organización y acción colectiva de los/as trabajadores/as en la pandemia y pospandemia en argentina (2020-2023)”.

Disciplina académica y subdisciplinas en las que se inscribe el artículo

Sociología laboral; Sociología del conflicto social; Relaciones laborales

Tipo, método o enfoque del estudio: Enfoque metodológico mixto; estudio sectorial.



TIPO DE CARRERA DE EGRESO EN EDUCACIÓN SUPERIOR COMO ESTRATIFICADOR EN MÉXICO: CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DE UN ESQUEMA PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA DESIGUALDAD DE RESULTADOS

César Augusto Ricardi Morgavi

cesar.ricardi@cucea.udg.mx

Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas, Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, Universidad de Guadalajara, Jalisco, México

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2595-1318>

José Navarro Cendejas

jose.navarro@cucea.udg.mx

Departamento de Políticas Públicas, Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, Universidad de Guadalajara, Jalisco, México

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5034-5424>

Resumen

La expansión educativa en el nivel terciario en México ha sido considerable en las últimas décadas. Sin embargo, a pesar de la ampliación de oportunidades, los resultados que obtienen los graduados en el mercado laboral son heterogéneos cuando se considera el tipo de carrera o programa elegido. A partir de los datos del Módulo de Movilidad Intergeneracional del INEGI de 2016, este artículo propone una clasificación de graduados de nivel terciario ocupados que permite observar la estratificación en el mercado laboral de profesionistas cuando se toma en cuenta el tipo de carrera o programa educativo elegido. Se consideran graduados de programas terciarios de corta duración (2 años) y de larga duración (4 años). Para determinar los resultados después de la educación superior se utilizan indicadores de posición de clase a partir de la ocupación y de atributos materiales de los graduados. Los resultados muestran que algunas especialidades de salud y de educación tienden a posicionarse en ocupaciones no manuales en mayor proporción que los graduados de áreas agrícolas y de carreras técnicas.

Palabras claves: Educación superior, estratificación horizontal, programas universitarios, desigualdad de resultados, México

THE KIND OF GRADUATION CAREER IN HIGHER EDUCATION AS A STRATIFIER IN MEXICO. DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A SCHEME FOR THE RESEARCH OF INEQUALITY OF OUTCOMES

Abstract

Educational expansion at the tertiary level in Mexico has been considerable in recent decades. However, despite the expansion of opportunities, the results obtained by graduates in the labor market are heterogeneous when considering the type of career or program chosen. Using data from INEGI's 2016 Intergenerational Mobility Module, this article proposes a classification of employed tertiary graduates that allows us to observe the stratification in the labor market of professionals when the type of career or educational program chosen is considered. Graduates of short-term (2 years) and long-term (4 years) tertiary programs are considered. Indicators of class position based on occupation and material attributes of graduates are used to determine outcomes after tertiary education. The results show that some health and education majors tend to be positioned in non-manual occupations in higher proportions than graduates from agricultural and technical fields.

Key-words: Higher education, horizontal stratification, university programs, inequality of outcomes, Mexico

O TIPO DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR COMO ESTRATIFICADOR NO MÉXICO: CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM ESQUEMA PARA INVESTIGAR A DESIGUALDADE DE RESULTADOS

Resumo

A expansão da educação a nível terciário no México tem sido considerável nas últimas décadas. No entanto, apesar da expansão das oportunidades, os resultados obtidos pelos diplomados no mercado de trabalho são heterogêneos quando se considera o tipo de carreira ou programa escolhido. Utilizando dados do Módulo de Mobilidade Intergeracional 2016 do INEGI, este artigo propõe uma classificação dos diplomados do ensino superior empregados que nos permite observar a estratificação no mercado de trabalho dos profissionais quando se tem em conta o tipo de carreira ou programa educativo escolhido. São considerados os diplomados de cursos superiores de curta duração (2 anos) e de longa duração (4 anos). Os indicadores de posição de classe da profissão e os atributos materiais dos diplomados são utilizados para determinar os resultados após o ensino superior. Os resultados mostram que alguns licenciados em saúde e educação tendem a ser colocados em profissões não manuais a uma taxa mais elevada do que os licenciados em áreas agrícolas e técnicas.

Palavras-chave: Ensino superior, estratificação horizontal, programas universitários, desigualdade de resultados, México

Introducción

La educación, y específicamente la educación superior, es considerada como uno de los principales mecanismos para reducir la desigualdad social. En la medida en que las personas alcanzan mayores niveles de estudio aumentan las posibilidades de acceder a mayores beneficios sociales. A nivel agregado, sociedades que tienen mayores niveles de logro educativo están vinculadas con mayores niveles de igualdad y equidad social. A pesar de que en México se ha aumentado considerablemente la cantidad de personas que han accedido a la educación superior en las últimas décadas, esta premisa es susceptible de ser matizada cuando se analizan a profundidad los resultados ocupacionales que obtienen los individuos a partir de la asistencia y graduación de la educación superior. Uno de los criterios que se puede utilizar para diferenciar los beneficios de la educación superior es la carrera estudiada, un criterio que ha sido poco investigado en la literatura previa sobre el caso mexicano.

Desde mediados del siglo pasado, la evolución del sistema educativo universitario mexicano está marcada por distintas etapas, más o menos estructuradas, que fluctúan entre el desarrollo planificado desde el Estado y el crecimiento anárquico e inercial motivado por la demanda de la población y del crecimiento de la matrícula en etapas preuniversitarias. Como fruto de esta dualidad se ha generado una notable estratificación de la oferta universitaria, que se constata en indicadores diferenciados en términos de distribución regional y de variedad de tipos de instituciones que va más allá de la clásica distinción público-privada.

Con datos del ciclo escolar 2023-2024, la matrícula de educación superior en el nivel de pregrado fue de cerca de 5 millones de estudiantes (4,962,475), 80% en modalidad escolarizada. Con respecto a la diversificación institucional, la matrícula en instituciones de educación superior (IES) públicas representa el 64.3% del total de la matrícula, pero esta oferta está segmentada en 11 categorías de IES: universidades públicas estatales (42.9% de la matrícula pública), universidades públicas federales (15.4%), universidades tecnológicas (8.5%), universidades politécnicas (3.7%), universidades públicas de apoyo solidario (2.4%), universidades interculturales (0.7%), institutos tecnológicos federales (11.7%), institutos tecnológicos descentralizados (7.9%), escuelas normales públicas (4.3%), centros públicos de investigación (0.1%) y “otras instituciones públicas” (2.4%) (SEP, 2024). Con respecto a las IES privadas, existe una amplia literatura en México que muestra la heterogeneidad de las instituciones y su oferta educativa en términos de costo, prestigio y calidad del servicio educativo (Muñoz y Silva, 2013, Ortega y Casillas, 2014, Silas 2005, 2013).

Teniendo en cuenta este contexto, el objetivo de este artículo es analizar la diferenciación que existe entre los graduados universitarios mexicanos de 25 a 64 años en función de la carrera estudiada, tomando como referencia el primer nivel terciario estudiado. Es decir, para este estudio consideramos a todas las personas que concluyeron un nivel terciario, que puede ser universitario (4 años) o técnico-vocacional (2 años). Para ello, utilizamos distintos indicadores sobre resultados ocupacionales y socioeconómicos que permiten tipificar a la población graduada ocupada en grupos vinculados al tipo de carrera estudiada. Los resultados permiten establecer un ordenamiento vertical o jerarquía de los graduados ocupados en función del tipo de especialidad y el nivel terciario estudiado.

El artículo está dividido en tres partes. En la primera, recuperamos los principales rasgos del estado de la cuestión sobre el efecto de la carrera estudiada en los resultados posteriores a la educación superior, haciendo énfasis en la literatura internacional, que es más profusa en este campo que la referida a México. En la segunda, se presentan los datos utilizados para el estudio, la construcción de las variables y los métodos estadísticos que permitieron construir la tipología

de graduados. A continuación, en la tercera parte, se presentan los resultados del ejercicio de clasificación y se discuten a la luz de la bibliografía. Finalmente, en la última parte se ofrecen una serie de conclusiones que derivan de los resultados y que apuntan a futuras investigaciones que podrían realizarse utilizando la clasificación obtenida.

Marco conceptual

En la sociología de la educación se han estudiado dos tipos de fenómenos relacionados con las consecuencias de la expansión educativa. Por un lado, la estratificación vertical, que distingue a los individuos en función del nivel educativo alcanzado. Cuando se analiza verticalmente la estratificación es importante considerar el efecto de la elevación de las tasas de participación en educación secundaria y, una vez que se alcanzan niveles satisfactorios de cobertura, en la educación terciaria, así como su impacto en fenómenos como las competencias para la empleabilidad y el aprendizaje a lo largo de la vida.

Sin embargo, la investigación más reciente ha mostrado la importancia de considerar no solo la estratificación vertical, sino también la horizontal, es decir, la que se produce cuando se analizan las diferencias que existen al interior de los niveles educativos, fundamentalmente a partir de la consideración de los diferentes tipos de instituciones educativas, y de los campos o especialidades de estudio, particularmente en sociedades en las que se presenta el fenómeno de la expansión educativa en el nivel terciario, que tiende a producir una jerarquización de instituciones educativas y de campos de estudio (Gerber y Cheung, 2008, Reimer, 2008). En este sentido, Hansen (2001) afirmaba que a partir de la expansión educativa —sobre todo en la educación superior— la diferenciación horizontal se había convertido en un criterio de selección más significativo para la ubicación de los individuos en los trabajos, incluso que la diferenciación vertical.

Al respecto de la estratificación horizontal, Lucas (2001) realizó una aportación significativa al campo con la propuesta de la hipótesis de la estratificación efectivamente mantenida (EMI), y que hace alusión a una diferenciación dentro de los niveles educativos, especialmente en la educación postobligatoria, que se refleja en las distintas opciones que ofrece el sistema educativo. Esto incluye tanto las diferencias entre instituciones como entre tipos de programas (carreras técnicas o generales) y entre especialidades formativas (variaciones entre carreras).

Así, existen dos dimensiones que se pueden considerar cuando se analiza la estratificación horizontal en la educación superior. Por un lado, la estratificación horizontal en la composición del alumnado, que se enfoca en estudiar el efecto del origen social en la distribución diferenciada, y jerarquizada, según tipo de institución o tipo de carrera elegida. Aquí, lo importante es observar las tendencias de ciertos grupos sociales a estar más presentes en instituciones o en carreras que se consideran más o menos prestigiosas en función de su relación con potenciales resultados posteriores en el mercado de trabajo. La segunda dimensión consiste en determinar precisamente las diferencias que se observan en resultados posteriores a la educación terciaria y cómo estas diferencias moldean la formación de grupos o clases sociales. Como se puede ver, ambas dimensiones están estrechamente relacionadas, aunque para su estudio es posible separarlas. En este artículo nos centramos particularmente en la segunda dimensión, es decir, en la desigualdad de resultados y, específicamente, en la distinción por tipo

de carrera, campo de estudio o especialidad estudiada en la población que pasó por al menos un nivel de educación terciaria (vocacional o universitaria).

En este sentido, la literatura internacional ha sido más amplia que la que trata sobre la población mexicana. En México, y en términos generales en Latinoamérica, la investigación se ha centrado históricamente más en determinar rasgos de la desigualdad vertical que en la horizontal. En cambio, en otras sociedades se han hecho avances considerables en explorar distintas dimensiones de la estratificación horizontal. En este apartado damos cuenta de investigaciones previas que se han centrado específicamente en la variable especialidad de estudio, como variable independiente para determinar resultados diferenciados en otras variables independientes vinculadas al mercado de trabajo. En este sentido, se ha encontrado, en diferentes contextos y particularmente en países desarrollados, que existe un efecto importante de la especialidad de estudio cuando se observan distintos indicadores.

En términos generales, se ha comprobado que existe una cierta polarización de los resultados ocupacionales entre áreas de estudio, destacando la consistencia en los hallazgos del área de humanidades —y algunas subáreas propias de las ciencias sociales— como la que suele presentar peores resultados desde el punto de vista del acceso al trabajo o la remuneración (Klein, 2010, Reimer et al., 2008). Aunque con algunos matices propios del contexto, esto ha sido consistente en los casos de Estados Unidos (Rumberger y Thomas, 1993, Thomas y Zhang, 2005), Noruega (Hansen, 2001), Países Bajos (Van de Werfhorst, 2002), Rusia (Gerber y Schaefer, en Gerber y Cheung, 2008), Reino Unido (Brennan y Shah, 2003) o Francia (Calmand y Epiphane, 2012). También se ha observado la misma tendencia en investigaciones de tipo comparativo, por ejemplo, a nivel europeo, en los que se añade la importancia de los aspectos institucionales que podrían mediar el efecto de la especialidad de estudios en resultados ocupacionales de graduados universitarios (García-Aracil, 2008, Reimer et al., 2008).

Cuando se analizan específicamente los ingresos, los resultados suelen ser consistentes en términos de la estratificación horizontal por campos formativos. Así, por ejemplo, Brown y Corcoran (en Gerber y Cheung, 2008), concluyen que existe un efecto del tipo de carrera en los ingresos económicos de los graduados universitarios, aunque mediado por otras variables tales como la ocupación, la experiencia, características de la industria y el tamaño de la empresa. Por su parte, según se mencionó anteriormente, Hansen (2001) encontró algunos efectos de la clase de origen en los ingresos económicos entre graduados noruegos en ciencias duras o áreas técnicas, pero no eran tan sustanciales entre los que tenían grados en áreas catalogadas como “blandas”. Las desventajas de las áreas blandas suelen contrastarse con las áreas “duras”, como el área STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés). Así, por ejemplo, Melguizo y Wolniak (2012) encontraron que los campos STEM están asociados con mayores ingresos para estudiantes que pertenecen a minorías étnicas o raciales en Estados Unidos y que, además, consiguieron trabajos relacionados con su campo de estudios.

Las desventajas que suelen presentar los graduados de áreas “blandas”, como humanidades o algunas de las ciencias sociales, si bien son consistentes en muchas de las investigaciones revisadas, suelen matizarse cuando se analiza la situación específica de los países y de sus mercados de trabajo. Por ejemplo, aunque la mayoría de estudios muestran que los graduados de humanidades presentan menores ingresos económicos, cuando se analiza el estatus socioeconómico alcanzado en distintos momentos de la trayectoria vital, los resultados son menos contundentes (Reimer et al., 2008). Por ejemplo, AQU Catalunya analizó los resultados de inserción seis años después de la graduación, que tendían a igualarse con el resto de áreas

de estudios medidas previamente con un periodo de cuatro años (AQU Catalunya, 2010). En este mismo sentido, Kim et al (2015), en un estudio longitudinal mostraron efecto a largo plazo de las diferencias de la especialidad de estudio para el caso de Estados Unidos, tanto en hombres como en mujeres, con amplias brechas en los ingresos a largo plazo, que incluso llegan a ser más amplias que las brechas de tipo vertical cuando se comparan graduados de *high school* con *college*.

El trabajo de Hansen (2001) resulta interesante porque permite comprender la relación entre el origen social de los graduados y los resultados en el mercado de trabajo, mediado por la especialidad de estudios. Así, en las carreras blandas, la clase de origen tiene más impacto, dadas las dificultades que tienen los empleadores para comprobar objetivamente el potencial desempeño de los candidatos a un puesto de trabajo. Por el contrario, en las carreras “duras”, al tener evaluaciones presumiblemente más objetivas, fundadas en el mérito y en las habilidades demostradas, el peso de la adscripción de clase disminuye.

En diferentes contextos, los estudios más recientes han analizado distintas dimensiones de la estratificación horizontal por campos, tales como los riesgos de la sobreeducación en población recién egresada (Rossen et al., 2019), el tiempo en que tardan los graduados en encontrar trabajo a tiempo completo (Qiyomiddin, 2024), el efecto de la especialidad de estudios en la inserción laboral de graduados de primera generación (Scanlon, 2023), las probabilidades de acceder al mercado de trabajo formal en Brasil (Viera, 2019), las brechas de género en el uso de habilidades analíticas en el trabajo (Horowitz y Ramaj 2024), la fertilidad de las mujeres (Begall y Mills, 2013), y la utilización de habilidades generales y específicas en el trabajo de la población adulta (Bol y Heisig, 2021).

En términos generales, los trabajos revisados muestran que existen evidencias claras sobre la segmentación del mercado de trabajo de profesionales en función del área de estudios, aunque con un énfasis importante en las primeras etapas de inserción laboral posteriores a la obtención de un diploma de nivel terciario. También se han observado distintos matices que ameritan mayor investigación sobre el fenómeno, así como una mayor caracterización de los resultados a nivel de países y de sistemas educativos específicos.

Métodos, materiales y variables

Construcción de los esquemas de clase y tipos de carreras

Para el análisis utilizamos el Módulo de Movilidad Social Intergeneracional (MMSI) basado en el diseño estadístico de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) (INEGI, 2017). Construimos un esquema de carreras profesionales de la educación de nivel superior —y dentro de este del de licenciatura, no incluimos posgrado— empleando la Clasificación Mexicana de Programas de Estudio por campos de formación académica 2011 (CMPE). La CMPE clasifica las carreras de educación superior y media superior por campos de estudio generando un esquema estandarizado que habilita la comparabilidad estadística entre las fuentes de datos que la emplean. Resulta del “esfuerzo de un trabajo interinstitucional sobre los programas de estudio que fueron clasificados de acuerdo con las variaciones en los contenidos reportados por las instituciones de educación” (INEGI, 2015: 4). La estructura de la clasificación desagrega hasta

tres niveles los campos de estudio, a un dígito, clasifica el campo general, a dos, especifica los subcampos y, a tres, detalla la unidad mínima desagregable de la carrera.

El primer paso para elaborar el esquema de categorías fue tomar la CMPE con claves de grupos a tres dígitos y cruzarla con la clasificación del nivel educativo, ambas variables contenidas en el MMSI. La variable de nivel educativo diferencia para la educación de nivel superior entre, profesional asociado y técnico superior universitario (nivel 4), nivel Normal de licenciatura (nivel 5), y nivel de licenciatura e Ingeniería (nivel 6). Este cruce inicial nos permite reorganizar la clasificación diferenciando por distinto nivel educativo al interior de un mismo campo de estudio. Por ejemplo, diferenciando en los egresados del campo de Educación (1), subcampo de Formación Docente (11) y, específicamente, del programa de Formación docente para educación básica, nivel preescolar (121), según sea su titulación de profesional, en este caso, de asociado/técnico superior universitario (4), quedando clasificados en lo que denominamos “profesiones técnicas de enfoque práctico”, en la posición 11 de la estructura del esquema con el código 4121 (tabla 1), de los egresados del mismo programa, pero de Normal de licenciatura (5), clasificados en “profesiones subalternas de educación”, en la categoría 10 del esquema con el código 5121, de los egresados del mismo programa, de licenciatura (o ingeniería) (6), dentro de lo que denominamos “profesiones especializadas de la educación”, con el código 6121 en la categoría 6.

Profesional asociado es un nivel de educación superior que requiere de la finalización de la educación media superior para ser cursado. Es una alternativa anterior a la licenciatura, destinada para quienes han adquirido los conocimientos científicos y artísticos avalados por un título técnico de nivel superior (INEGI, 2016a). Técnico superior universitario, es una alternativa a la licenciatura, de corta duración (de dos a tres años), con un enfoque específico en diversas ocupaciones que exige la culminación de la educación media superior. Normal de licenciatura, es un nivel de educación superior de cuatro años de duración que forma personas para la enseñanza docente en educación inicial hasta secundaria, incluyendo también la educación física, bilingüe, artística e intercultural. Licenciatura e Ingeniería, es una educación de nivel superior de tipo universitaria y tecnológica que ofrece una formación específica en un amplio espectro de campos de conocimientos, exige para su ingreso contar con el nivel de media superior, con una duración de cuatro a seis años, y forma para el desempeño profesional (INEGI, 2016a). A partir del cruce, agrupamos y ordenamos el siguiente esquema de 13 tipos de carreras que se presenta en la tabla 1.

Tabla 1: Esquema de clasificación de 13 carreras resultado del cruce del tipo de carrera con el tipo de educación de nivel superior

1	Especializadas de las Ciencias Naturales, Exactas y Computación	Licenciatura e ingeniería	6411-6441	Biología y bioquímica; Ciencias ambientales; Física; Química; Ciencias de la tierra y de la atmósfera; Matemáticas; Estadística; Ciencias de la Computación
2	Especializadas ingeniería y construcción	Licenciatura e ingeniería	6510-6517, 6531-6599	Ingeniería industrial, mecánica, electrónica y tecnología, programas multidisciplinarios o generales; Ingeniería mecánica y metalurgia; Electricidad y generación de energía, Electrónica y automatización; Ingeniería química; Ingeniería de vehículos de motor, barcos y aeronaves; Tecnología y protección del medio ambiente; Tecnología de la información y la comunicación; Arquitectura y urbanismo; Construcción e ingeniería civil
3	Especializadas en manufactura	Licenciatura e ingeniería	6521-6529	Industria de la alimentación; Industria textil, del calzado y piel; Industrias de materiales diversos (madera, papel, plástico y vidrio); Minería y extracción; Manufacturas y procesos, programas multidisciplinarios o generales
4	Especializadas en la atención a la salud	Licenciatura e ingeniería	6711, 6713	Medicina, Estomatología y odontología
5	Especializadas de las Ciencias Sociales, Administración y Derecho	Licenciatura e ingeniería	6310-6342	Psicología; Sociología y antropología; Ciencias políticas; Economía; Trabajo y atención social; Ciencias sociales y estudios del comportamiento, programas multidisciplinarios o generales; Comunicación y periodismo; Biblioteconomía; Negocios y comercio; Mercadotecnia y publicidad; Finanzas, banca y seguros; Contabilidad y fiscalización; Administración y gestión de empresa; Derecho; Criminología
6	Especializadas de la Educación	Licenciatura e ingeniería	6111-6119	Didáctica, pedagogía y currículo; Planeación y evaluación educativa; Orientación y asesoría educativa; Tecnología educativa
7	Especializadas de las Artes y Humanidades	Licenciatura e ingeniería	6210-6225	Belas artes; Música y artes escénicas; Técnicas audio-visuales y producción de medios; Diseño; Técnicas y habilidades artesanales; Artes, programas multidisciplinarios o generales; Teología; Lenguas extranjeras; Literatura; Historia y arqueología; Filosofía y ética; Humanidades, programas multidisciplinarios o generales
8	Especializadas de agronomía y veterinaria	Licenciatura e ingeniería	6611-6621	Producción y explotación agrícola y ganadera; Horticultura; Silvicultura; Pesca; Agronomía, silvicultura y pesca, programas multidisciplinarios o generales; Veterinaria
9	Subalternas de la salud	Licenciatura e ingeniería	6710, 6712, 6714-6717	Salud, programas multidisciplinarios o generales; Enfermería y cuidados; Diagnóstico médico y tecnología del tratamiento; Terapia y rehabilitación; Farmacia; Salud pública
10	Subalternas de la educación (psicología y tecnologías de la comunicación)	Normal de licenciatura Licenciatura e ingeniería	5111, 5113, 5110, 5121, 5122, 5123, 5124, 5126, 5127, 5128, 5120, 5311, 5517, 6120-6129	Didáctica, pedagogía y currículo; Orientación y asesoría educativa; Ciencias de la educación, programas multidisciplinarios o generales; Formación docente para educación básica, nivel preescolar, primaria, secundaria y medio superior; para educación física, artística o tecnológica; para la enseñanza de asignaturas específicas; para otros servicios educativos; para programas multidisciplinarios o generales
11	Técnicas de enfoque práctico	Profesional asociado y Técnico Superior Universitario	4121, 4127, 4128, 4213, 4312, 4315, 4331, 4332, 4334, 4335, 4441, 4511, 4512, 4513, 4514, 4515, 4517, 4510, 4521, 4522, 4532, 4611, 4712, 4713, 4714, 4715, 4841, 4842	Formación docente para educación básica, nivel preescolar; para enseñanza de asignaturas específicas y otros servicios educativos; Técnicas audio-visuales y producción de medios; Sociología y antropología; Trabajo y atención social; Negocios y comercio; Mercadotecnia y publicidad; Contabilidad y fiscalización; Administración y gestión de empresas; Derecho; Ciencias de la computación; Ingeniería mecánica y metalurgia; Electricidad y generación de energía; Electrónica y automatización; Ingeniería química; Ingeniería de vehículos de motor, barcos y aeronaves; Tecnología de la información y la comunicación; Ingeniería industrial, mecánica, electrónica y tecnología, programas multidisciplinarios o generales; Industria de la alimentación; Industria textil, del calzado y piel; Construcción e ingeniería civil; Producción y explotación agrícola y ganadera; Enfermería y cuidados; Estomatología y odontología; Diagnóstico médico y tecnología del tratamiento; Terapia y rehabilitación; Seguridad pública; Servicios militares
12	Servicios de seguridad	Licenciatura e ingeniería	6831-6842	Seguridad industrial; Seguridad pública; Servicios militares
13	Servicios personales	Licenciatura e ingeniería	6811-6821	Deportes; Servicios de embalsamamiento; Servicios de belleza; Secretariado y asistencia administrativa; Servicios de transporte

Fuente: Elaboración propia con base en el MMSI (INEGI, 2017)

El siguiente paso consistió en analizar el esquema de tipo de carrera bajo una perspectiva comparativa con estratificadores para ajustar su ordenamiento conforme a una diferenciación vertical, y reagrupar las categorías en aras de conseguir esquemas resumidos y confiables que se adapten al análisis multivariable. A esos efectos, construimos un esquema de clase ocupacional como primer estratificador basado en la propuesta de Solís (2010) y Solís y Cortés (2009), que adaptan el esquema CASMIN de Erikson y Goldthorpe (1992) al mercado ocupacional mexicano (tabla 2). Para la construcción del esquema de clases utilizamos la Clasificación Mexicana de Ocupaciones (CMO), que organiza las ocupaciones con base en la división técnica del trabajo, contemplando condiciones de empleabilidad como las del trabajo por cuenta propia o autoempleo (INEGI, s.f.). La CMO utiliza tres criterios para su construcción, la división técnica del trabajo, el nivel de calificación de las ocupaciones y tareas realizadas, la utilización de instrumentos, herramientas y/o materias primas semejantes para el empleo de las funciones entre ocupaciones (INEGI, s.f.).

El esquema no implica una evidente organización jerárquica de sus categorías (clases ocupacionales), en la medida en que el fundamento teórico del que parte Erikson y Goldthorpe (1992) establece su diferenciación cualitativa, no obstante, es posible asumir un ordenamiento vertical de las clases en los análisis, en la medida que “existe una coincidencia empírica entre el esquema propuesto por los autores y las ordenaciones por estatus, ingreso o escolaridad que se usan en las clasificaciones jerárquicas más comunes” (Solís y Cortés, 2009).

Tabla 2: Esquema de clase de seis categorías y especificación de las ocupaciones agregadas

Clase ocupacional	CMO (2 dígitos)	Ocupaciones agregadas
No manual alta calificación	11, 21, 61	Profesionistas, funcionarios directivos y gerentes de alto nivel en el sector público, privado y social
No manual baja calificación	12, 13, 14 y 62	Técnicos, trabajadores de la educación, trabajadores del arte, espectáculos y deportes, trabajadores de apoyo en actividades administrativas
Comercio	71	Comerciantes, empleados de comercio y agentes de ventas
Manual alta calificación	51, 52, 53, 55	Artesanos, trabajadores fabriles en la industria de la transformación, en actividades de reparación y mantenimiento, Operadores de maquinaria fija de movimiento continuo y equipos en el proceso de fabricación industrial, Conductores y ayudantes de conductores de maquinaria móvil y medios de transporte
Manual baja calificación	54, 72, 81, 82, 83	Ayudantes, peones y similares en el proceso de fabricación artesanal e industrial en actividades de reparación y mantenimiento, vendedores ambulantes, trabajadores en servicios personales, en servicios domésticos, en servicios de protección, vigilancia
Agraria	41	Trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y de caza y pesca

Fuente: Elaboración propia con base en la CMO (INEGI, s.f.)

Obtenido el esquema de clase, revisamos su validez a partir de su cotejo con los ingresos económicos a precios corrientes de la población ocupada. Para esto utilizamos la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (INEGI, 2020), constatando un ordenamiento vertical correlativo entre clases ocupacionales e ingreso, como se advierte en la siguiente tabla 3. A medida que se avanza de la clase agrícola a las manuales y de éstas a las no manuales, el ingreso promedio aumenta

Tabla 3: Medidas de ingresos económicos laborales corrientes en pesos según clase de los ocupados de 25 a 60 años de edad

	Media	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Rango
No manual alta calificación	74,073	60,246	35,656	93,668	2,910,326
No manual baja calificación	44,434	36,618	22,530	57,029	403,918
Comercio	33,052	24,836	11,902	43,368	672,501
Manual alta calificación	35,505	29,215	17,565	45,680	491,440
Manual baja calificación	28,874	22,696	13,180	37,565	588,356
Agrícola	19,928	13,258	6,014	25,063	1,743,205

Fuente: Elaboración propia con base en la ENIGH (INEGI, 2020)

El siguiente paso en el análisis para la validación del esquema de clase ocupacional y su ordenamiento “jerárquico” consistió en enfrentarlo a un conjunto de activos socioeconómicos y del hogar de la población ocupada de egresados empleando la MMSI. Realizamos un análisis de Componentes Principales (ACP) que ofrece un valor .917 de Kaiser-Meier-Olkin (KMO=.917), indicando que el modelo es válido y que las correlaciones bivariadas pueden ser explicadas por terceras variables. Por su parte, se confirma la validez del ACP con una prueba de esfericidad de Bartlett que resultó estadísticamente significativa ($p=.000$), rechazando la hipótesis de la independencia estadística entre las variables y aceptando la presencia de coeficientes de correlación y de conformación de ejes factoriales. En suma, los resultados de estos estadísticos nos informaron la conveniencia de avanzar con el ACP.

De los componentes principales obtenidos, retuvimos los primeros siete, aunque a partir del cuarto, como se observa en la tabla 2, la saturación es menor a 2, lo que se traduce en un descenso de la capacidad explicativa de la varianza. Acumulados, los siete componentes retenidos consiguen explicar poco menos del 50% de la varianza.

Tabla 4

Varianza explicada por los componentes del ACP			
Componente	Sumas de rotación de cargas al cuadrado		
	Total	% de la varianza	% del acumulado

1	3.083	10.630	10.630
2	2.940	10.136	20.767
3	2.046	7.056	27.823
4	1.694	5.843	33.666
5	1.411	4.864	38.530
6	1.394	4.807	43.337
7	1.226	4.226	47.563

Fuente: Elaboración propia con base en la ENIGH (INEGI, 2020)

El factor o componente 1 (tabla 5), incluye una serie de activos tecnológicos, digitales y electrodomésticos modernos caracterizados por su aparición más reciente en los hogares mexicanos, como son el acceso a internet, la disponibilidad de computadora, tableta electrónica, consola de videojuegos, televisión de paga, horno microondas y tostador eléctrico. En este primer componente, que cuenta con la mayor capacidad explicativa, correlacionó también el “servicio doméstico”, el que nos animamos a interpretar a la luz de la teoría de la clase ociosa propuesta por T. Veblen, como una práctica de consumo ostensible que otorga prestigio y estatus, además de utilidad, al encontrarse orientado a contratar servicios:

“que ayuden a cumplir con la rutina impuesta por el decoro [que] es considerado, por lo general, como desagradable para los ocupantes de la casa, pero se tolera y se paga su presencia para delegarles una parte de este consumo oneroso de bienes de la familia” (Veblen, 1989: 43-44).

Para Veblen “la presencia de los servidores domésticos (...) es una concesión que hace la comodidad física a la necesidad moral del decoro pecuniario. La manifestación más amplia del ocio vicario en la vida moderna está formada por los denominados deberes domésticos” (Veblen, 1989, p. 44). Deberes, como señalamos, que se traducen en servicios realizados en beneficio de la reputación de la familia como unidad corporativa, al dar muestra de su fortaleza pecuniaria diferenciadora del conjunto de clases sociales (Veblen, 1989).

El segundo componente, dadas las correlaciones, aproxima activos constituidos por electrodomésticos de más larga data de aparición en los hogares mexicanos y que, siguiendo la propuesta de Solís y Cortés (2009), etiquetamos como “activos tradicionales I”. Incluye refrigerador, estufa, licuadora, plancha eléctrica y lavadora (tabla 5). El tercer componente conjunta activos intangibles, como el acceso al crédito, tarjetas departamentales y cuenta bancaria, por lo que el factor cristaliza las disparidades en las oportunidades de acceso a bienes financieros, de ahorro, gasto e inversión. El cuarto componente lo definimos como “activos del hogar modernos II” e incluye medios de comunicación recreativos y de información (televisión digital, radio y reproductor de video). El quinto componente aún activos tradicionales de bajo costo y, posiblemente, vetustos, como son máquina de coser y ventilador. Este quinto componente lo consideramos con baja fuerza estratificadora. El sexto componente se integra por capitales muebles e inmuebles que pueden destinarse como medios de producción, como tener en propiedad un vehículo de trabajo, un local comercial o terrenos. El séptimo y último componente conjunta la posesión de una vivienda propia y de tierras para labores de campo (tabla 5).

Tabla 5: Matriz de componentes rotados del ACP para los activos socioeconómicos y del hogar

	Componentes						
	1	2	3	4	5	6	7
Línea telefónica fija	.793	.176	-.031	.075	-.006	.032	.046
Acceso a internet	.779	.231	.152	.098	.079	-.001	-.028
Computadora	.677	.163	.224	.197	.101	.060	-.010
Horno de microonda	.448	.323	.150	.242	.235	.025	.000
Tableta electrónica	.424	.032	.266	.365	.207	.079	-.125
Tostador eléctrico	.385	.043	.204	.272	.367	.087	-.035
Consola de videojuegos	.379	-.023	.228	.364	.258	.053	-.094
Servicio doméstico	.337	-.042	.294	.082	-.046	.328	-.036
Televisión de paga	.332	.238	.227	-.070	.301	.027	.030
Estufa	.108	.730	.057	.022	.027	.029	-.198
Refrigerador	.161	.701	.068	.004	.160	-.001	.046
Licuadora	.082	.632	-.048	.196	-.088	.077	.064
Plancha eléctrica	.122	.608	.024	.224	.009	.062	.001
Lavadora	.281	.577	.097	.091	.234	-.008	.073
Teléfono móvil	-.035	.502	.237	.101	.084	.010	-.172
Tarjeta de tienda deptal.	.048	.140	.727	.053	.060	-.008	.068
Tarjeta de crédito	.302	.032	.649	.150	.003	.174	.021
Cuenta bancaria	.268	.117	.562	.165	.083	.136	-.038
Reproductor de video	.131	.121	.180	.639	.117	.035	-.122
Radio	.092	.247	-.039	.595	.014	.010	.011
Televisor digital	.213	.211	.142	.451	-.060	-.063	.166
Máquina de coser	.141	.035	-.149	.193	.639	.117	.029
Ventilador	.051	.230	.352	-.102	.619	-.038	.006
Dueño local comercial	.171	.073	.010	-.130	-.113	.636	.026
Dueño de otra vivienda	.110	.004	.182	.039	.129	.556	-.189
Vehículo de trabajo	-.026	.073	-.139	-.013	.234	.470	.168
Otro terreno	-.131	.024	.174	.138	-.009	.409	.117
Propietario de vivienda hab.	.083	.026	.114	-.098	.014	-.056	.792
Tierras p/labores de campo	-.167	-.252	-.094	.100	.038	.279	.599

Nota: Método de rotación Varimax con normalización de Kaiser y convergencia en ocho iteraciones

La tabla 6 muestra la distribución del puntaje promedio de los activos según la clase de la población ocupada adulta de 25 a 60 años de edad. Los datos dan cuenta de que los hogares de

las clases ocupacionales altas cuentan con mayor disponibilidad de los activos modernos I, así como también que esta aumenta en la medida que se asciende en la jerarquía de clase. En contraste, los activos tradicionales I se distribuyen relativamente con un mismo peso entre las distintas clases, indicando que su capacidad de estratificar es baja, aunque sí polariza en la medida de su menor presencia en los hogares de las clases más altas (no manuales) y mayor en la más baja (trabajadores agrarios). Los datos para los activos tradicionales (refrigerador, estufa, licuadora, plancha eléctrica y lavadora) muestran una capacidad de estratificación baja, derivado de que su instalación en los hogares mexicanos es de larga data, como resultado del proceso industrializador y de que su adquisición ha sido generalizada, en contraste con el consumo de los activos modernos I, que conserva brechas en su adquisición y uso por parte de la población.

El factor del acceso al crédito y ahorro estratifica adecuadamente, distanciando las clases no manuales, de actividad comercial y pequeños propietarios agrarios, de las manuales y trabajadores agrarios. La clase de actividad comercial y los pequeños propietarios agrarios muestran puntajes altos, coherente con las prácticas de ahorro e inversión inherentes a las actividad económica y escala productiva que desarrollan. Los trabajadores agrarios y los trabajadores manuales evidencian barreras más férreas para acceder a este recurso.

En cuanto a la posesión de activos relacionados con medios de producción, como disponer de vehículo de trabajo (factor 6) y la propiedad de tierras para labores de campo (factor 7), tienen una presencia relevante en las clases ocupacionales agrarias (pequeños propietarios y asalariados agrícolas). En los hogares de las clases de mayor jerarquía tienen mayor presencia los activos modernos del hogar y el acceso al crédito y ahorro, mientras que, en las actividades manuales, la disponibilidad de estos es más baja y en su lugar predominan los activos tradicionales del hogar y medios de producción del sector primario. Observamos que los datos evidencian un gradiente de la distribución de los ingresos (tabla 3) y los activos socioeconómicos (tabla 6) según la clase ocupacional, validando el esquema de clase como una estructura jerárquica de estratificación social.

Tabla 6: Puntaje promedio de los activos según clase de la población ocupada de 25 a 60 años de edad, México, 2016

	Factor 1 Activos modernos I*	Factor 2 Activos tradicionales I	Factor 3 Acceso al crédito y ahorro*	Factor 4 Activos modernos II*	Factor 5 Activos tradicionales II	Factor 6 Medios de producción*	Factor 7 Tierras de labores de campo*
No manual alta	.88393	.09725	.73719	.40957	.40957	.30877	-.13275
No manual baja	.75660	.15426	.59185	.34637	.34637	-.01137	-.17888
Comercio	.79947	.14799	.60537	.27754	.27754	.40629	-.23252
Manual alta	.72469	.19270	.36923	.19795	.19795	.10089	-.07194
Manual baja	.49726	.19182	.38182	.26323	.26323	.00624	-.32199
Pequeños propietarios agr.	.16943	.19685	.90698	.52223	.52223	1.86974	1.66454
Trabajadores agrarios	.03135	.20551	-.49075	.16257	.16257	2.01453	1.43694

Nota: * Son factores relevantes en la estratificación.

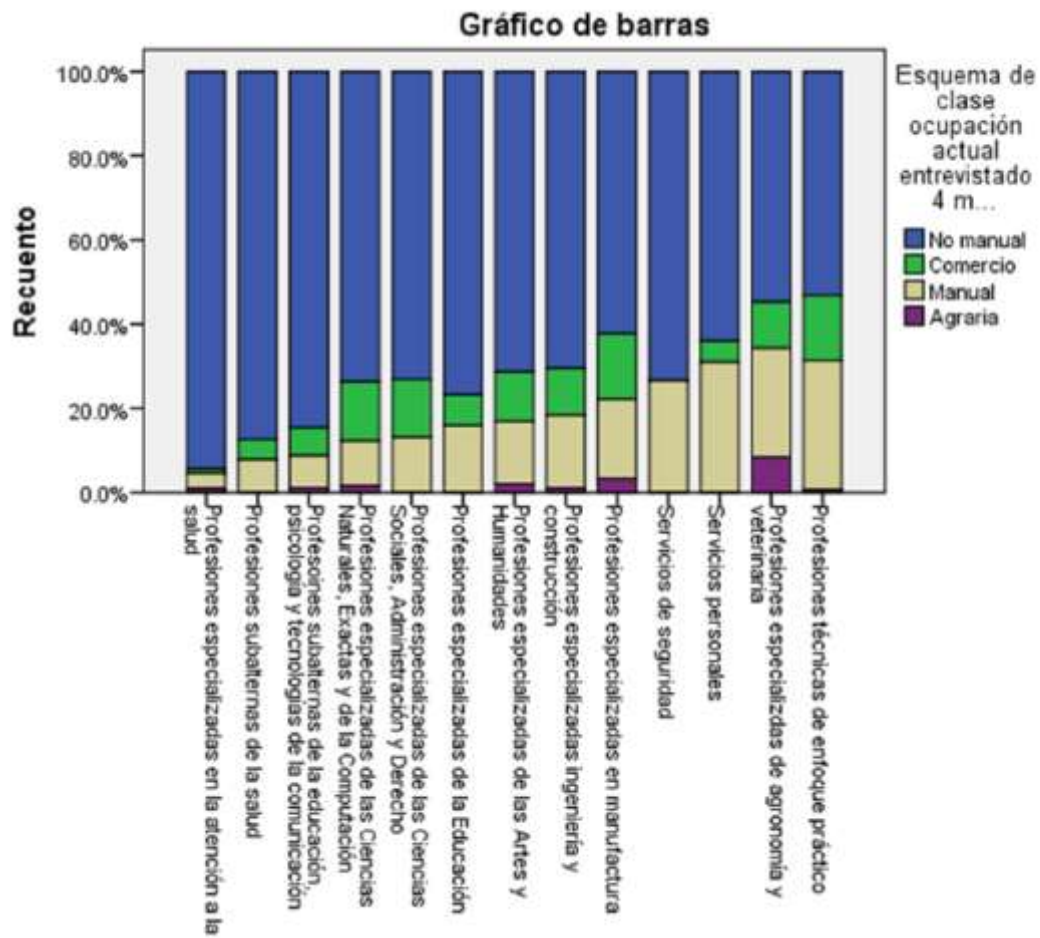
Validado el esquema de clases, lo colapsamos en cuatro macroclases, para cruzarlo con el esquema del tipo de carrera de la población ocupada egresada de nivel superior de 25 a 65 años de edad en su desagregación más amplia de 13 categorías (figura 1). Este ejercicio es el primer paso en el análisis del ordenamiento jerárquico del esquema de carreras con base la distribución porcentual de enclasmientos en las categorías ocupacionales.³⁸

Se obtiene así la siguiente distribución derivada de la asociación estadísticamente significativa ($p < .01$, V de Cramer = .140) entre carrera y clase, con los egresados ocupados de profesiones especializadas en la atención en la salud encabezando el ordenamiento, advirtiendo el mayor porcentaje de ocupados en actividades no manuales y el menor en las restantes clases, seguidos de los egresados de carreras profesionales subalternas de la salud. Como señala Errandonea (2004), las profesiones especializadas en la atención en la salud (médicos, estomatólogos y odontólogos) configuran un grupo extremadamente homogéneo, incluso más allá del indicador de los activos, que los aproxima y concentra para conformar un único clúster claramente diferenciado del resto, como lo demuestra cada uno de los ejercicios clasificatorios de nuestro análisis. Errandonea se refiere a que su homogeneidad deriva de indicadores como la proporción de estos que cuenta con estudios de posgrado, con ingresos económicos del hogar por sobre el que reciben las demás profesiones, encontrarse casados/as con conyugues con título universitario (homogamia de clase), integrar hogares nucleares y desempeñarse preferencialmente en el servicio público y privado más que en actividades docentes y de supervisión (Ídem)

En contraste con los profesionales especializados de la salud, los profesionales de carreras técnicas de enfoque práctico se ubican en el extremo opuesto, con el menor porcentaje de ocupados en la clase no manual y el mayor en la manual, próximos a los egresados de carreras especializadas de agronomía y veterinaria, que destacan por su distribución con mayor porcentaje en la clase agraria. De esta forma, presentamos un primer esquema tentativo de tipo de carreras (tabla 7).

Figura 1: Tipos de carreras de los egresados ocupados de 25 a 60 años de edad según clase ocupacional ordenadas (clase no manual como referencia)

³⁸ En el esquema de macroclases mantenemos la diferenciación entre clases manuales y no manuales y agrarias y no agrarias (Erikson y Goldthorpe, 1992).



Fuente: Elaboración propia con base en el MMSI (INEGI, 2017)

Tabla 7

Primer esquema de tipo de carrera ordenados en función de los resultados del cruce con el esquema de clase y propuesta de agrupación en esquemas de 5 y 6 categorías

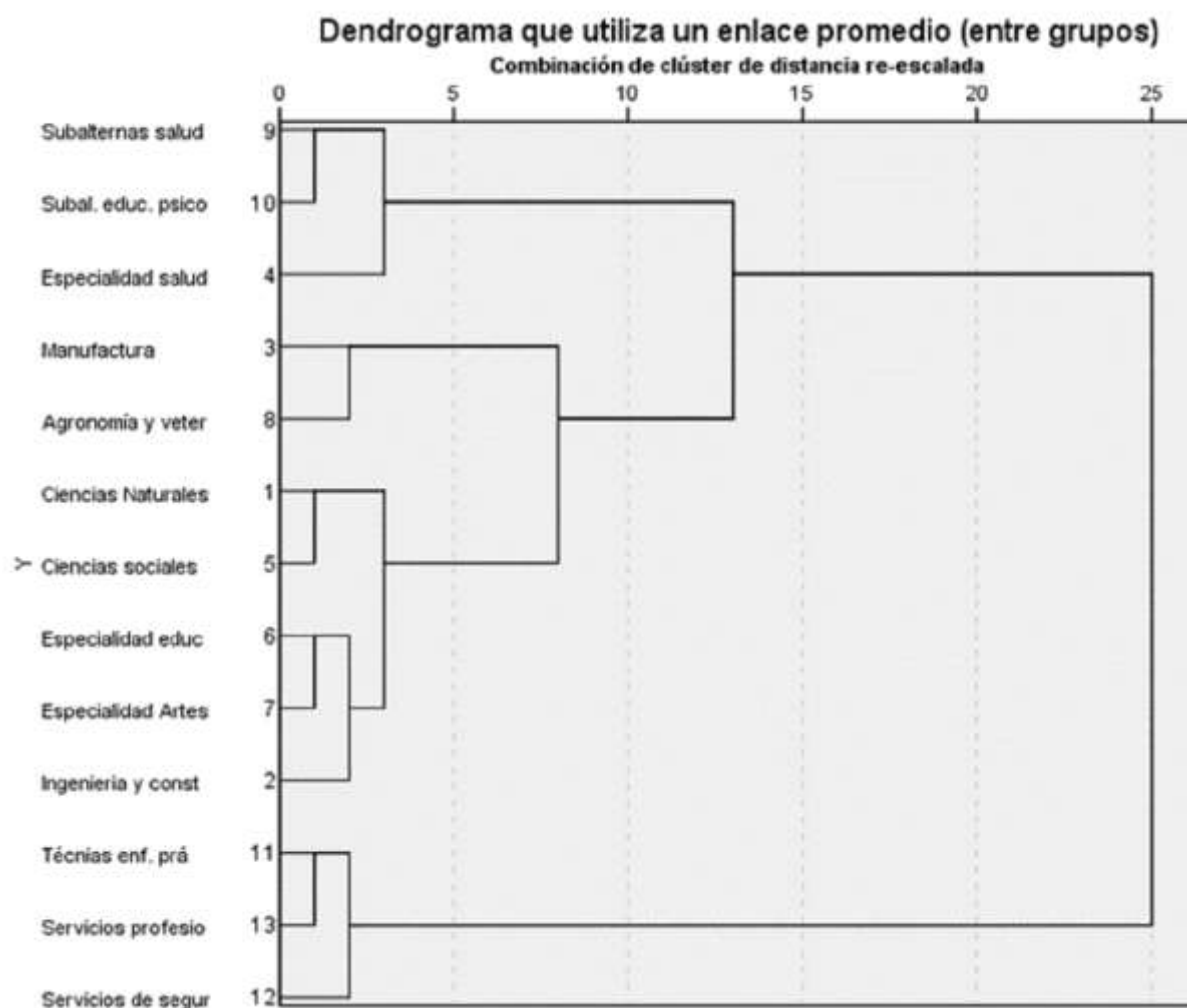
Esquema de 5 categorías	Esquema de 6 categorías	Orden vertical conforme a los porcentajes de enclasmientos	Numeración en la clasificación original	Tipo de carrera
1	1	1	4	Profesiones especializadas en la atención a la salud
2	2	2	9	Profesiones subalternas de la salud
		3	10	Profesiones subalternas de la educación (psicología y tecnologías de la comunicación)
3	3a	4	1	Profesiones especializadas de las Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación
		5	5	Profesiones especializadas de las Ciencias Sociales, Administración y Derecho
	3b	6	6	Profesiones especializadas de la Educación
		7	7	Profesiones especializadas de las Artes y Humanidades
	4	8	2	Profesiones especializadas ingeniería y construcción
		9	3	Profesiones especializadas en manufactura
4	5	10	12	Servicios de seguridad
		11	13	Servicios personales
	6	12	8	Profesiones especializadas de agronomía y veterinaria
5		13	11	Profesiones técnicas de enfoque práctico

Con el objetivo de contar con un esquema resumido de categorías del tipo de carrera, validado y adaptado al análisis, empleamos un análisis de conglomerados jerárquicos (ACJ). El dendograma es una representación gráfica de los resultados del ACJ que utiliza la función de enlace basada en la distancia media entre grupos (Sokal y Michener, 1958) para unir grupos o *clusters* con base en la evaluación de todas las distancias entre pares de puntos que corresponden al par de grupos que pueden ser unidos, facilitando la interpretación de la conglomeración a partir de una escala estandarizada (figura 2). A los efectos de nuestro análisis, sirve para identificar la homogeneidad de las macro categorías conformadas por la agregación de las categorías para alcanzar esquemas reducidos del tipo de carreras. El análisis de conglomerados jerárquicos utiliza las siete clases ocupacionales para colapsar las 13 categorías de carreras.

Los resultados del análisis sugieren la conveniencia de conservar la categoría de “especializadas de la salud” sin colapsar con otras y en la primera posición del esquema, ratificándose la alta homogeneidad de este colectivo profesional constatada también por Errandonea (2004). Por otra parte, sugieren aunar las profesiones subalternas de la salud con las subalternas de educación, las especializadas en Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación con las especializadas en Ciencias Sociales, Administración y Derecho, manteniéndolas separadas de las especializadas de la Educación y de las Artes y Humanidades. Asimismo, conjuntar en una única categoría las profesiones especializadas en ingeniería y la construcción, con las especializadas en manufactura, las de servicios de seguridad con las de servicios personales, y finalmente, las especializadas de agronomía y veterinaria con las técnicas de enfoque práctico.

Figura 2

Dendograma de los tipos de carreras enlazadas según las clases ocupacionales de los egresados de 25 a 60 años de edad



Nota: Se emplea la función de enlace promedio entre grupos. La distancia de la combinación de los *clúster* está re-escalada.

Conforme al ACJ obtenemos dos posibles esquemas resumidos, uno de cinco y otro de seis categorías que a continuación se vuelven a cruzar con el esquema de macroclases en una asociación estadísticamente significativa ($p < .01$, V de Cramer = .122) (figuras 3 y 4).

Figura 3

Agrupación en seis macrocategorías del tipo de carrera de los egresados ocupados de 25 a 60 años de edad según clase ocupacional ordenadas (clase no manual como referencia)

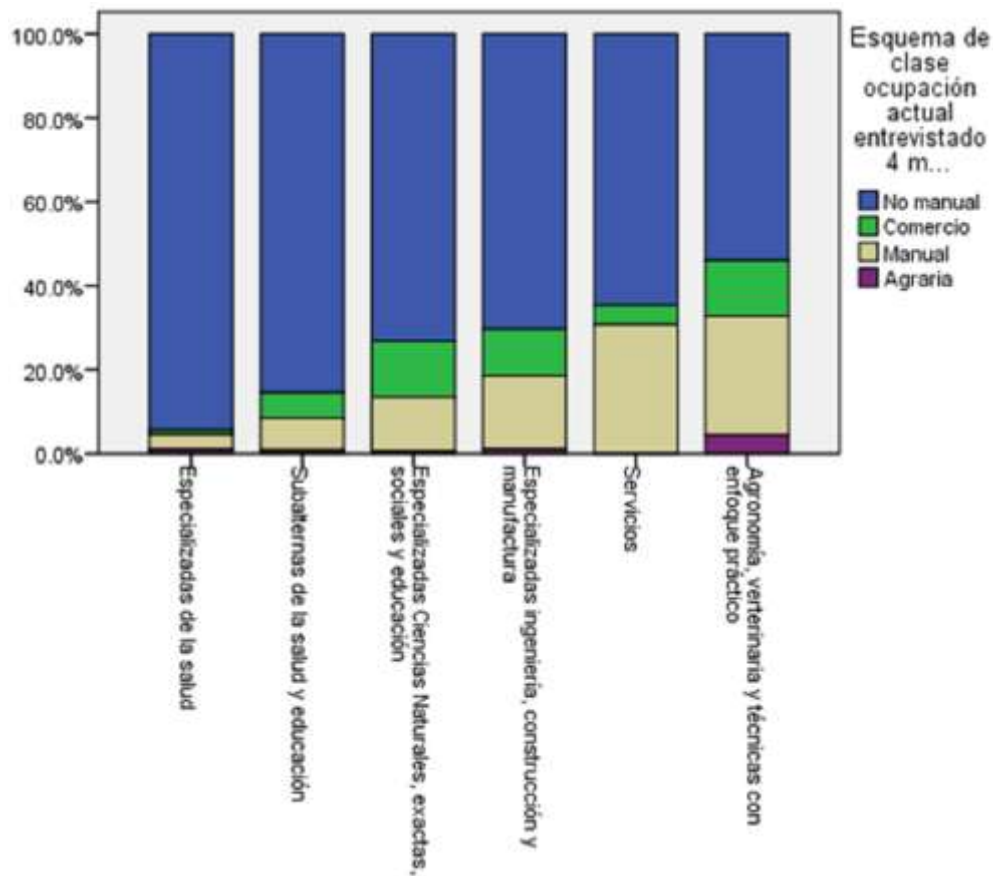
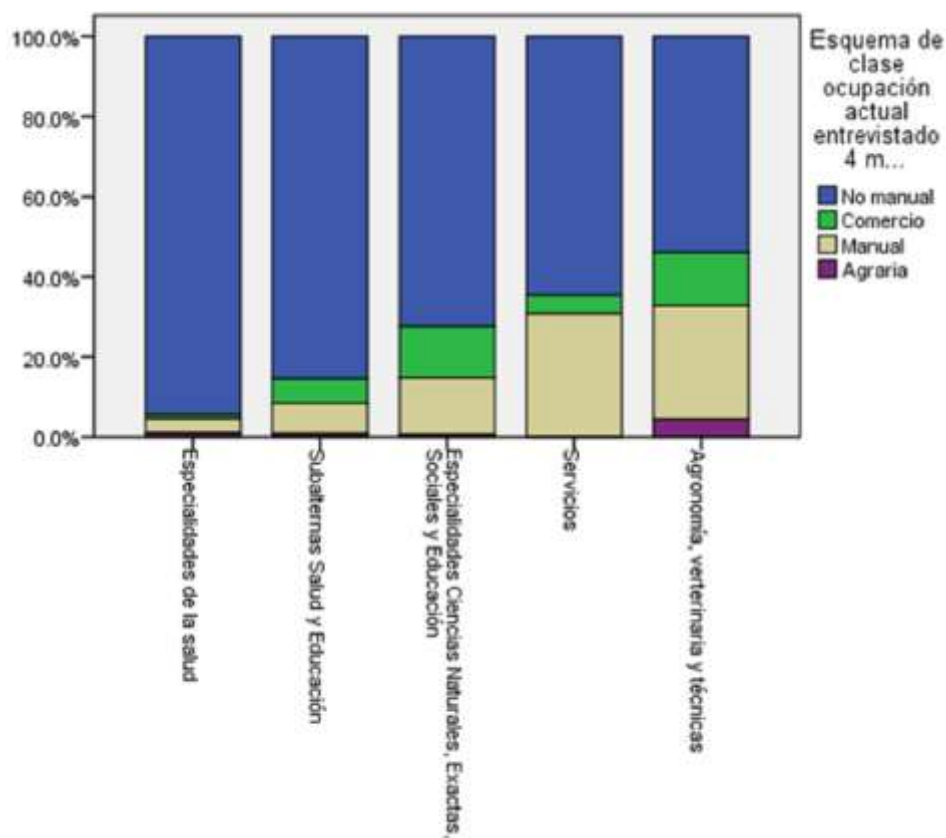


Figura 4

Agrupación en cinco macrocategorías del tipo de carrera de los egresados ocupados de 25 a 60 años de edad según clase ocupacional ordenadas (clase no manual como referencia)



El siguiente paso consiste en testear la distribución de activos en el esquema de seis macro categorías de tipos de carreras. La distribución de los puntajes indica que la posesión de activos modernos (factor 1) tiende a concentrarse en los hogares de egresados de carreras especializadas de atención en la salud y en las de servicios, en contraste con las de agronomía, veterinaria y técnicas de enfoque práctico, que registran la menor presencia (tabla 8). Las restantes profesiones especializadas se ubican en niveles intermedios. Los activos tradicionales I (factor 2) muestran baja variación, estando presentes relativamente por igual y con una baja discriminación entre los hogares de los egresados ocupados de las distintas carreras. Resalta una ligera mayor presencia en la de agronomía, veterinaria y técnicas de enfoque práctico y las subalternas de salud y educación.

Tabla 8. Puntaje promedio de los activos socioeconómicos y del hogar según tipo de carrera (esquema de seis categorías) de los egresados ocupados de 25 a 60 años de edad, México, 2016

	Factor 1 Activos modernos I	Factor 2 Activos tradicional es I	Factor 3 Acceso al crédito y ahorro	Factor 4 Activos modernos II	Factor 5 Activos tradicional es II	Factor 6 Medios de producción	Factor 7 Tierras de labores de campo
Especializadas de la salud	.91714	.12765	.76190	.49547	.15476	.23499	-.07627
Subalternas de la salud y la educación	.59012	.19243	.53455	.13577	.09984	.12189	-.04548

Especializadas ciencias naturales, exactas, sociales y educación	.79337	.14273	.55806	.34458	.09973	.14670	-.22068
Especializadas ingeniería, construcción y manufactura	.79825	.10305	.63082	.42437	.21399	.26092	-.19237
Servicios	.96860	.12049	.95290	-.24462	-.02188	.20796	-.29196
Agronomía, veterinaria y técnicas	.38404	.21758	.17578	.32391	.28852	.10697	.05501

El acceso al crédito y ahorro (factor 3) es el activo más alto en las especializadas de la salud y en las de servicios, y el más bajo en las de agronomía, veterinaria y técnicas de enfoque práctico. Los activos modernos II (factor 4), tienen mayor presencia en los hogares de egresados de carreras especializadas de la salud y menor en la de servicios y subalternas de la salud y la educación, mientras que los activos tradicionales II, de bajo costo, bajo valor (ventilador, máquina de coser) y consumo masificado, encuentran mayor presencia en los hogares de los egresados de las carreras de agronomía, veterinaria y técnicas de enfoque práctico, y en las especializadas de la construcción y manufactura. En cuanto a los activos considerados medios de producción (factor 6), encuentran mayor presencia, en este orden, en los egresados ocupados de las carreras especializadas en ingeniería, construcción y manufactura, las especializadas de la salud, y en menor medida, en las de servicios.

Finalmente, los activos como poseer una vivienda en propiedad y tierras para labores de campo, se concentran en los egresados de las carreras de agronomía, veterinaria y técnicas de enfoque práctico. Esto es un resultado congruente, si tenemos en cuenta que se trata de un colectivo, al menos en las dos primeras carreras profesionales (agronomía y veterinaria), con asiento fuera de las ciudades, en el medio rural, donde siete de cada 10 profesionales son hombres, caracterizado por ser altamente homogéneo. No obstante, podría estar oculta una heterogeneidad latente, solo descubrible con análisis más finos que pongan de manifiesto las diferencias significativas en cuanto a condiciones de empleabilidad y naturaleza de la actividad productiva entre profesionales de la horticultura, silvicultura, piscicultura, agronomía, producción ganadera y veterinaria (Errandonea, 2004).

En síntesis, para los hogares de los profesionales especializados de la salud se define un patrón bastante claro, mayores puntajes en los activos modernos del hogar, el acceso al crédito y ahorro y los medios de producción y segunda vivienda en propiedad, mientras que, en los hogares de profesionales de otros tipos de carreras su presencia es menor, con la excepción de Servicios y especializadas en ingeniería, construcción y manufactura en alguno activos. A la inversa, los hogares de los profesionales de las restantes carreras especializadas y las subalternas, se posicionan en una zona intermedia, mientras que los de agronomía, veterinaria y técnicas de enfoque práctico lo hacen en la base de la distribución, con la excepción en los activos tradicionales (electrodomésticos) y tierras para labores de campo.

Empleando la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del 2016 (INEGI, 2016b) cotejamos el orden que asume el esquema de tipo de carreras conforme al promedio mensual del ingreso económico corriente. Primero, lo realizamos para la clasificación original de las 13 categorías y revisamos cómo podrían colapsarse. Observamos que, entre las profesiones especializadas de los distintos campos científicos y disciplinarios, existe una baja diferenciación, con promedios entre MX \$5,235 y MX \$5,868, exceptuando las especializadas en manufactura, cuyo ingreso es más elevado (MX \$7,098), pero a su vez con una mayor dispersión (desviación estándar = MX \$13,095) (tabla 9).

Tabla 9. Media de los Ingresos económicos según tipos de carrera de la población de egresados ocupados de 25 a 60 años de edad

	Media	Desviación estándar
Especializadas de las Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación	5868	8762
Especializadas ingeniería y construcción	5752	10542
Especializadas en manufactura	7098	13395
Especializadas en la atención a la salud	5572	11936
Especializadas de las Ciencias Sociales, Administración y Derecho	5418	10950
Especializadas de la Educación	5699	10436
Especializadas de las Artes y Humanidades	5652	10456
Especializadas de Agronomía y Veterinaria	5647	9779
Subalternas de la salud	5235	8947
Subalternas de la educación psicología y tecnologías de la comunicación	2878	6407
Técnicas de enfoque práctico	4244	7516
Servicios de seguridad	7167	8210
Servicios personales	4690	8170

Fuente: Elaboración propia con base en la ENOE (INEGI, 2016b)

En los ocupados de profesiones subalternas existe una diferenciación entre los de subalternas de la salud, con ingreso económico promedio por debajo que las profesiones especializadas, pero muy cercano a éstas, y las subalternas de la educación, con el ingreso económico promedio más bajo de la estructura. Por debajo de los ocupados de profesiones técnicas de enfoque práctico y los de servicios profesionales, ubicados también en la base de la estructura. Nos llama la atención el ingreso económico promedio mensual de la categoría de servicios de seguridad (MX \$7,167, desviación estándar = MX \$8,210). Realizar este ejercicio nos habilita a efectuar unos últimos ajustes al esquema de categorías colapsadas (macrocategorías) que definimos hasta ahora.

Con base en los resultados hasta aquí alcanzados, tomamos la decisión de excluir las categorías de las carreras especializadas en manufactura, las de servicios de seguridad y las técnicas de enfoque práctico. Para optimizar el orden jerárquico del esquema agregado y su condición como un determinante de la estratificación, separamos y reubicamos las profesiones subalternas de salud y educación, separamos las especializadas de ciencias sociales y administrativas de las ciencias naturales y exactas, y mantenemos las especializadas de la salud en la cúspide de la estructura (tabla 10). Volvemos a cruzarlas con el ingreso económico y los

activos para verificar su consistencia (tablas 11 y 12 en anexo) y obtenemos el esquema de tipo de carrera definitivo.

Tabla 10

Esquema final reordenado de tipo de carrera de cuatro y siete categorías

Esquema de 4 categorías	Esquema de 6 categorías	Tipo de carrera
<u>1</u>	<u>1</u>	Especializadas en la atención a la salud
	<u>2</u>	Especializadas de las Ciencias Naturales y Exactas
<u>2</u>	<u>3</u>	Especializadas ingeniería y construcción
<u>3</u>	<u>4</u>	Especializadas de las Ciencias Sociales, Administración y Derecho
	<u>5</u>	Especializadas de las Artes y Humanidades
<u>4</u>	<u>6</u>	Subalternas de la salud
	<u>7</u>	Subalternas de la educación

Conclusiones

Con base en los resultados del análisis, construimos un esquema de tipos de carreras de nivel superior basado en un ordenamiento vertical a partir de su contraste empírico con estratificadores (esquema de clase social, activos e ingreso económico) para discutir su validación y proponer su uso en el análisis de la desigualdad de resultados y movilidad horizontal. El ejercicio de construcción y validación cruzó fuentes de información basadas en encuestas nacionales (MMSI, ENOE y ENIGH) para responder a la cuestión central de si el amplio número de tipos de carreras pueden agruparse en colectivos profesionales y guardar un orden vertical conforme a los logros y resultados de los egresados. En este primer ejercicio no diferenciamos por sexo biológico, tramos etarios, tipos de institución (privada o pública), si corresponden al nivel estatal o federal, y si son instituciones consolidadas o emergentes. Falta una discusión crítica y descripción densa de cada tipo de carrera (121 en total), de su origen y desarrollo histórico, tarea que excede los propósitos de este artículo, pero que es un paso obligado a dar en la siguiente etapa de la investigación.

Del análisis se desprende que las credenciales educativas de nivel superior se activan en el mercado laboral y al segmentar por grandes grupos de tipos de carreras se advierten las diferencias en el acceso a las “oportunidades de vida” (Breen, 2005), entendidas como el acceso a determinadas condiciones de vida, a la satisfacción subjetiva y al grado de control sobre bienes y servicios (Solís, 2010). La determinación de la base empírica de estas diferencias incluyó

técnicas basadas en la estimación de proximidades y distancias entre los diferentes grupos profesionales según sus acreditaciones educativas, como el Análisis de Conglomerados Jerárquicos. Un futuro análisis, bajo un enfoque cualitativo contribuiría a comprender la función de las estrategias individuales y colectivas de estos grupos, que comparten intereses comunes que los aproximan y distancias de otros, para conquistar las posiciones de clase basadas en el activo de las credenciales (títulos).

El esquema de tipo carreras final de siete y cuatro categorías revela la existencia de mecanismos de clausura social en términos de acceso a las oportunidades de vida y a las situaciones de clase que las proveen. La estructura social que revela el esquema puede interpretarse en términos de lo que Bourdieu denominó como campos de interacción, en este caso, entre colectivos profesionales a partir del tipo carrera, con los medios y capacidades de generar cohesión, pertenencia, defender intereses comunes y diferenciados en función de la distribución y tipos de capitales en juego que otorgan prestigio y poder y distingue a los grupos entre sí. Con este artículo esperamos estar dando las primeras evidencias de la existencia de pautas de disimilitud que aproximan y distancian grupos de egresados según tipo de carrera — lo que permite llegar a la propuesta del esquema— ofreciendo un instrumento para la investigación de los retornos de clase al tipo de credenciales de titulación y estimar el grado de cierre credencialista en México.

Bibliografía

AQU Catalunya. (2010). *Estudi d'inserció laboral dels graduats d'Humanitats de les universitats públiques catalanes. Seguiment al cap de sis anys*. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Begall, K., y Mills, M. C. (2013). The influence of educational field, occupation, and occupational sex segregation on fertility in the Netherlands. *European Sociological Review*, 29(4), 720-742. <https://doi.org/10.1093/ESR%2FJCS051>

Bol, T., y Heisig, J. P. (2021). Explaining wage differentials by field of study among higher education graduates: Evidence from a large-scale survey of adult skills. *Social Science Research*, 99, 102594. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2021.102594>

Boll, C., Rossen, A., y Wolf, A. (2019). Patterns of overeducation in Europe: The role of field of study. *IZA Journal of Labor Policy*, 9(1). <https://hdl.handle.net/10419/182107>

Breen, R. (2005). Foundations of a Neo-Weberian Class Analysis. En E. O. Wright (Ed.), *Approaches to Class Analysis* (pp. 31-50). Cambridge University Press.

Brennan, J., y Shah, T. (2003). *Access to What? Converting Educational Opportunity into Employment Opportunity. Final report*. The Open University.

Calmand, J., y Epiphane, D. (2012). L'insertion professionnelle après des études supérieures : des diplômés plus égaux que d'autres. *Formation emploi*, 117. https://shs.cairn.info/article/FORM_117_0011/pdf?lang=fr

Erikson, R. y Goldthorpe, J. (1992). *The constant flux: A study of class mobility in industrial societies*. Oxford University.

Errandonea, G. (2004). *Los profesionales y sus mecanismos de clausura. Las complejidades del credencialismo exclusionario*. (Tesis de Maestría en Sociología). FCS, UDELAR.

García-Aracil, A. (2008). College Major and the Gender Earnings Gap: A Multi-country Examination of Postgraduate Labour Market Outcomes. *Research in Higher Education*, 49(8), 733–757. <https://doi.org/10.1007%2Fs11162-008-9102-y>

Gerber, T. P., y Cheung, S. Y. (2008). Horizontal stratification in postsecondary education: Forms, explanations, and implications. *Annual Review of Sociology*, 34(1), 299-318. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.34.040507.134604>

Hansen, M. N. (2001). Education and economic rewards. Variations by social-class origin and income measures. *European sociological review*, 17(3), 209-231. <https://doi.org/10.1093/esr/17.3.209>

Horowitz, J., y Ramaj, S. (2024). Educational expansion, fields of study, and the gender gap in analytic skill usage on the job. *Research in Social Stratification and Mobility*, 89, 100877. <https://doi.org/10.1016/j.rssm.2023.100877>

Inegi (2015). Clasificaciones ENOE.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enoe/15ymas/doc/clasificaciones_enoe.pdf
— (2016a). Clasificación mexicana de planes de estudio por campos de formación académica.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825086664.pdf

— (2016b). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Primer trimestre.
<https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/#microdatos>

— (2016c). Módulo de Movilidad Social Intergeneracional.
<https://www.inegi.org.mx/programas/mmsi/2016/>

— (2017). Encuesta Nacional de Hogares.
<https://www.inegi.org.mx/programas/enh/2017/>

— (2020). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Nueva Serie.
<https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2020/>

— (s.f.). Clasificación Mexicana de Ocupaciones (CMO) - Histórica. Volumen I.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/clasificadoresycatalogos/doc/clasificacion_mexicana_d_ocupaciones_vol_i.pdf

ChangHwan, K., Tamborini, Ch., y Sakamoto, A (2015). Field of study in college and lifetime earnings in the United States. *Sociology of Education*, 88(4), 320-339. <https://doi.org/10.1177/0038040715602132>

Klein, M. (2010). *Mechanisms for the Effect of Field of Study on the Transition from Higher Education to Work*. (Working Papers No. 130). MZES. <http://www.mzes.uni-mannheim.de/publications/wp/wp-130.pdf>

Lucas, S. (2001). Effectively maintained inequality: education transitions, track mobility, and social background effects. *American Journal of Sociology*, 106(6), 1642–1690. <https://doi.org/10.1086/321300>

Melguizo, T., y Wolniak, G. (2012). The earnings benefits of majoring in STEM fields among high achieving minority students. *Research in Higher Education*, 53, 383-405. <https://doi.org/10.1007/s11162-011-9238-z>

Muñoz, C. y Silva, M. (2013). La educación superior particular y la distribución de oportunidades educativas en México. *Revista de la Educación Superior*, 42(166), 81-101. <https://www.scielo.org.mx/pdf/resu/v42n166/v42n166a4.pdf>

Ortega, J. y Casillas, M. C. (2014). Repensar la clasificación de las Instituciones de Educación Superior en México, una propuesta. *CPU-e, Revista de Investigación Educativa*, 19, 213-253. <https://www.redalyc.org/pdf/2831/283131303008.pdf>

Qiyomiddin, K. (2024). The effect of fields of study on the waiting time to employment: evidence from the National Graduate Survey of Canada 2005 and 2009/10 cohorts. *Journal of Education and Work*, 1-16. <https://doi.org/10.1080/13639080.2024.2335464>

Rumberger, R., y Thomas, L. (1993). The Economic Returns to College Major, Quality and Performance: A Multilevel Analysis of Recent Graduates. *Economics of Education Review*, 12(1), 1-19. [https://doi.org/10.1016/0272-7757\(93\)90040-N](https://doi.org/10.1016/0272-7757(93)90040-N)

Scanlon, Brigid A (2023). *Career Outcomes of First-generation Graduates*. Temple University.

SEP (2024). Principales cifras del sistema educativo nacional 2023-2024. Secretaría de Educación Pública.

Silas, J. (2005). Realidades y tendencias de la educación superior privada en México. *Perfiles Educativos*, 27(109-110), 7-37. <https://www.redalyc.org/pdf/132/13211002.pdf>

— (2013). Educación superior privada en México, 1986-2011. En Juan Carlos Silas (coord.), *Estado de la educación superior en América Latina* (pp. 187-214). ANUIES/ITESO.

Sokal, R. y Michener, C. (1958). A statistical method for evaluating systematic relationships. *University of Kansas Science Bulletin*, 38(22), 1409-1448.

Solís, P. (2010). Ocupaciones y clases sociales en México. En J. Serrano Espinosa y F. Torche (Eds.), *Movilidad social en México: Población, desarrollo y crecimiento* (pp. 329-372). Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

<https://ceey.org.mx/wp-content/uploads/2018/06/Movilidad-Social-en-M%C3%A9xico.-Poblaci%C3%B3n-desarrollo-y-crecimiento.pdf>

— y Cortés, F. (2009). La movilidad ocupacional en México: rasgos generales, matices regionales y diferencias por sexo. En C. Rabell Romero (Coord.), *Tramas Familiares en el México contemporáneo: Una perspectiva sociodemográfica* (pp. 395-432). UNAM, IIS, Colmex.

Thomas, S. L., y Zhang, L. (2005). Post-Baccalaureate Wage Growth within Four Years of Graduation: The Effects of College Quality and College Major. *Research in Higher Education*, 46(4), 437–459. <https://doi.org/10.1007/s11162-005-2969-y>

Van de Werfhorst, H. (2002). Fields of Study, Acquired Skills and the Wage Benefit from a Matching Job. *Acta Sociologica*, 45, 287–303. <http://www.doi.org/10.1177/000169930204500403>

Veblen, T. (1899). *Teoría de la clase ociosa*. Sociología Alianza.

Anexo

Tabla 11

Media de los Ingresos económicos según esquema de siete tipos de carrera de la población de egresados ocupados de 25 a 60 años de edad

	Media	Desviación estándar
Especializadas de la salud	5572	11936
Especializadas de las Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación	5868	8762
Especializadas Ingeniería y Construcción	5752	10542
Especializadas de las Ciencias Sociales, Administración y Derecho	5418	10950
Especializadas de las Artes y Humanidades	5652	10456
Subalternas de salud	5235	8947
Subalternas de educación	2878	6407

Tabla 12

Puntaje promedio de los activos socioeconómicos y del hogar según tipo de carrera (esquema de siete categorías) de los egresados ocupados de 25 a 60 años de edad, México, 2016

	Activos modernos del hogar I	Activos tradicionales I	Acceso al crédito y ahorro	Activos modernos II	Activos tradicionales II (de bajo valor)	Medios de producción	Tierras de trabajo
Especializadas de la salud	0.94919	0.11289	0.81607	0.52611	0.14815	0.24958	-0.07721
Especializadas de las Ciencias Naturales y Exactas	.8995	.8684	.6834	.32733	.86722	.12458	-.24717
Especializadas Ingeniería y Construcción	.8954	.8531	.70013	.46488	.24578	.27158	-.18108
Especializadas de las Ciencias Sociales, Administración y Derecho	0.84449	0.12444	0.66407	0.39372	0.13613	0.23575	-0.18679
Especializadas de las Artes y Humanidades	1.13228	.64395	.30328	.34122	.09788	.65496	-.33863
Subalternas de salud	.58058	.21947	.78471	.21292	.88678	-.10971	-.10331
Subalternas de educación	.63258	.17593	.49984	.87775	.06325	.24998	-.01670

Semblanzas

Dr. César Augusto Ricardi Morgavi

Doctor en Sociología (Universidad de Barcelona, España) y Ciencias Sociales (Universidad de Guadalajara, México), máster universitario en Investigación en Sociología (Universidad de Barcelona, España) y licenciado en Sociología (UDELAR, Uruguay). Profesor investigador en la Universidad de Guadalajara. Se especializa en desigualdades, estratificación social y la relación entre educación, mercado laboral, género y jóvenes. Ha publicado: <https://goo.su/b4x1hl> (CEEY), <https://goo.su/aOuE4> (CEED), <https://goo.su/ofGz> (POSO), <https://goo.su/ImChc3> (Espiral), y <https://goo.su/hzOqh65> (RLES).

Dr. José Navarro Cendejas

Doctor en Sociología (Universidad Autónoma de Barcelona), maestro en Ciencias Sociales (Universidad de Guadalajara) y licenciado en Desarrollo Educativo (Universidad La Salle). Profesor en el Departamento de Políticas Públicas y en el Instituto de Investigación Educativa del CUCEA, de la Universidad de Guadalajara. Se especializa en la relación jóvenes-educación-trabajo, transición escuela-trabajo y desigualdad de oportunidades educativas. Ha publicado: <https://goo.su/TBL0> (UNAM) y <https://goo.su/oSxxz0> (CLACSO).

Disciplina: Sociología

Subdisciplinas: Sociología de la educación y estratificación social

Tipo, método o enfoque del estudio: Análisis de Componentes Principales, Cuantitativo



DESIGUALDADES INTERSECCIONAIS ENTRE GRADUADOS E RESULTADOS NO MERCADO DE TRABALHO NO BRASIL, 2016-2022

André Vieira

andrevieira@id.uff.br

Universidade Federal Fluminense, Departamento de Sociologia e Metodologia das Ciências Sociais, Niterói, Brasil.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6699-2044>

Luanda Botelho

luanda.ufrj@gmail.com

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Rio de Janeiro, Brasil.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-5541-8698>

Camila Santos

santos_camila@id.uff.br

Universidade Federal Fluminense, Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Niterói, Brasil.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-2413-7031>

Resumo

Este estudo examina as mudanças nas desigualdades qualitativas entre grupos interseccionais de graduados no contexto da conclusão da educação superior e da inserção no mercado de trabalho no Brasil. Com base em dados de pesquisas nacionais realizadas em 2016 e 2022, foram construídos grupos interseccionais de graduados considerando gênero, raça, renda familiar e condição de deficiência, analisando-se sua distribuição nos diferentes segmentos da educação superior e os rendimentos por hora. Os resultados indicam que a expansão da educação superior tem sido acompanhada por ganhos desiguais entre os grupos de graduados, com dinâmicas distintas resultantes da interação entre categorias sociais, e não apenas de uma acumulação linear de desigualdades.

Palavras-chave: Educação superior; Mercado de trabalho; Estratificação social; Interseccionalidade; Desigualdade social.

INEQUIDADES INTERSECCIONALES ENTRE GRADUADOS Y RESULTADOS EN EL MERCADO LABORAL EN BRASIL, 2016-2022

Resumen

Este estudio examina los cambios en las desigualdades cualitativas entre grupos interseccionales de graduados en la conclusión de la educación superior y en el mercado laboral en Brasil. Basándonos en datos de encuestas nacionales de 2016 y 2022, construimos grupos interseccionales de graduados en función del género, raza, ingresos del hogar y condición de discapacidad, y analizamos su distribución en los segmentos de la educación superior y sus ingresos por hora. Los resultados muestran que la expansión de la educación superior ha sido acompañada por ganancias desiguales entre los grupos de estudiantes, con dinámicas distintas que surgen del entrelazamiento de categorías sociales, y no solo una simple acumulación de desigualdades.

Palabras clave: Enseñanza superior; Mercado de trabajo; Estratificación social; Interseccionalidad; Desigualdad social.

INTERSECTIONAL INEQUALITIES AMONG GRADUATES IN HIGHER EDUCATION AND LABOR MARKET IN BRAZIL (2016-2022)

Abstract

This study examines changes in qualitative inequalities among intersectional groups of graduates in the completion of higher education and in the labor market in Brazil. Based on national survey data from 2016 and 2022, we constructed intersectional groups of graduates based on gender, race, household income, and disability status, and analyzed their distribution across higher education segments and hourly earnings. The results show that the expansion of higher education has been accompanied by unequal gains among student groups, with distinct dynamics arising from the intersection of social categories, rather than just a simple accumulation of inequalities.

Keywords: Higher education; Labour market; Social stratification; Intersectionality; Social inequality.

Introdução

Além da persistência de barreiras de classe, gênero e raça, os estudos sobre estratificação social no Brasil e em outros países latino-americanos indicam que a sua sobreposição ou intersecção produz dinâmicas próprias de desigualdades, em particular no topo da estrutura social (Souza, Carvalhaes & Ribeiro, 2010; Silveira & Leão, 2020; González & Mejía Pérez, 2022; Argüelles et al., 2023; Santos, 2023; Quiñones, 2024). Entretanto, a expansão da escolarização no país e a crescente estratificação do sistema de educação superior apontam para questões ainda em aberto: em que medida os diferentes grupos sociais têm se beneficiado dessa expansão para a conclusão da graduação e sua posterior colocação no mercado de trabalho? Além disso, a implementação das políticas de democratização do acesso na graduação tem sido capaz de estreitar as distâncias sociais no término dessa etapa e entre os múltiplos grupos de graduados? Este estudo busca responder a essas questões mobilizando em conjunto a literatura sobre

transição educação superior-mercado de trabalho e os recursos analíticos e metodológicos da abordagem interseccional.

A literatura sobre estratificação horizontal na educação superior e resultados no mercado de trabalho têm documentado como as características demográficas e socioeconômicas dos estudantes são relevantes para o acesso aos diferentes cursos e oportunidades ocupacionais (Mont’Alvão, 2011; Ribeiro & Schlegel, 2015; Knop & Collares, 2019; Carvalhaes e Ribeiro, 2019; Rodrigues, 2023; Vieira, 2023). No entanto, poucos estudos têm avançado em entender em que medida as imbricações entre as várias categorias de identidade social constituem diferentes “configurações de desigualdade” entre graduados (McCall, 2001).

As abordagens interseccionais têm se mostrado uma ferramenta de análise valiosa para dar conta da complexidade (termo particularmente caro a essa literatura) da vida social que emerge quando o objeto de estudo é expandido para incluir múltiplas dimensões e categorias de análise (McCall, 2001). A crescente literatura sobre desigualdades qualitativas internas na educação superior, e sua estreita vinculação à trajetória de diversificação institucional do sistema, indica que a pesquisa sobre desigualdades tem muito a se beneficiar de abordagens sensíveis a entender como múltiplos eixos de desigualdade, como gênero, raça, classe e, mais recentemente, deficiência estão interligados, e quais são os seus impactos na manutenção das desigualdades educacionais e no mercado de trabalho (Gonzalez, 1984; Mello & Nuernberg, 2012; Vergès, 2020).

O caso brasileiro oferece um contexto atraente para a pesquisa sobre os resultados dos graduados devido aos processos específicos que orientaram a expansão da educação superior no país e às altas taxas de retorno ao diploma de graduação. Em primeiro lugar, foi apenas na última década que o sistema brasileiro conseguiu se tornar um sistema de massa, por meio de um crescimento significativo do setor privado com fins lucrativos e da implementação de políticas públicas que tornaram o sistema mais acessível para grupos tradicionalmente desfavorecidos, em particular os estudantes não brancos (Senkevics & Mello, 2019). No entanto, algumas características do sistema brasileiro limitaram sua capacidade de diversificação. Entre elas, estão a concentração da oferta educacional em algumas poucas combinações de áreas de estudo e em grandes grupos empresariais de capital aberto (Santos, Lima & Carvalhaes, 2020; Carvalho, Medeiros & Tagliari, 2023). Assim, a primeira contribuição do nosso estudo é investigar em que medida observamos disparidades nos resultados entre os grupos interseccionais de graduados nesse contexto.

Buscamos também avançar em novas possibilidades analíticas e metodológicas para estudos do campo da estratificação, que, salvo exceções, têm sido pouco atentos às mudanças nas desigualdades entre grupos sociais definidos a partir de múltiplos eixos. Ao adotarmos a interseccionalidade como recurso analítico, esperamos contribuir ainda para a pesquisa sobre cada eixo de análise individualmente – relações raciais, estudos de gênero, de classe e de deficiência (Hasenbalg, 1979; Hasenbalg & Silva, 1990; Silva & Prates, 2015; França, 2024). Para tanto, seguimos uma abordagem intercategorial de estudos interseccionais (McCall, 2005), para analisar em que medida as desigualdades na conclusão da educação superior e entre múltiplos grupos de graduados mudaram no período de 2016 a 2022. Os dados utilizados provêm do Suplemento Anual de Educação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-C, IBGE) de ambos os anos e do Suplemento sobre Pessoas com Deficiência de 2022. Os resultados encontrados oferecem subsídios para o debate sobre o alcance das políticas de expansão e democratização da educação superior, incluindo as políticas de ação

afirmativa, para a ampliação do acesso dos grupos atendidos aos diplomas e posições ocupacionais mais vantajosas.

Conclusão da graduação e retornos relativos em um sistema com expansão tardia

A constatação empírica de que trabalhadores com educação superior obtêm rendimentos mais elevados e ocupam posições em ocupações de maior status tem sido apoiada por um número crescente de estudos (Zucarelli, 2021; Vieira, 2023; Caseiro & Maciente, 2023). Além disso, adotando uma definição multidimensional de resultados no mercado de trabalho, os estudos têm considerado diversos tipos de resultados, incluindo salários e o status ocupacional de seu primeiro emprego (Breen, Hannan & O’Leary, 1995), taxas de desemprego no início de suas carreiras (Shavit & Müller, 2000) e desfechos profissionais ao longo da carreira (Maciente et al., 2015). No Brasil, assim como em outros países latino-americanos, a literatura sociológica tem avançado sobretudo em duas frentes de análise relacionadas à expansão e diversificação do sistema de educação superior (Vieira, Honorato & Rodrigues, 2022): entender não apenas o que explica as variações de resultados entre segmentos qualitativamente distintos da educação superior, mas em que medida persistem desigualdades entre os graduados. Neste estudo, dialogamos principalmente com essa segunda linha de pesquisa.

Os estudos empíricos sobre democratização do acesso e conclusão da educação superior no Brasil tem recorrido sobretudo a análises que consideram separadamente desigualdades entre categorias sociais, particularmente de gênero, raça e classe social (Ribeiro & Schlegel, 2015; Ribeiro & Carvalhaes, 2019; Mendes et al., 2021; Rodrigues, 2023). De modo geral, esses trabalhos apontam para padrões similares entre o sistema brasileiro e outros contextos no que diz respeito à conclusão dos cursos de graduação pelos diferentes grupos sociais. Nas carreiras tipicamente relacionadas a cuidados, como Educação, Humanidades e Saúde – com exceção de medicina –, há maior concentração de mulheres, enquanto os homens estão sobrerrepresentados naquelas carreiras relacionadas a Negócios, Engenharia e Tecnologia, com rendimentos médios superiores aos primeiros. Em paralelo, a segregação racial entre carreiras de graduação também reforça o padrão de “desvio” de estudantes de baixo estrato social e pretos e pardos para as carreiras menos prestigiadas de Humanidades e Ciências Sociais.

Há um debate no campo de estudos sobre estratificação interna à educação superior sobre a capacidade de a ampliação do acesso à rede pública de educação superior alterar padrões de acesso e conclusão entre os grupos mais vulneráveis. De modo geral, os resultados apontam para uma aparente contradição entre o aumento de graduados e os destinos ocupacionais desses grupos. Se, por um lado, é esperada sua participação em ocupações de maior prestígio, retorno econômico e estima social, uma vez que a rede pública tende a trazer essas oportunidades, aumentando as chances de ascensão de classe, por outro lado, os estudos apontam uma dificuldade na inserção em carreiras “imperiais” – a saber, Engenharias, Medicina e Direito – enquanto há uma sobrerrepresentação desses grupos nas profissões de menor retorno, relacionadas às Humanidades e Ciências Sociais (Ribeiro & Schlegel, 2015). Dentre as carreiras ditas imperiais, apenas uma delas, o Direito, tem sido mais frequentemente procurada pelos

estudantes provenientes da rede pública beneficiários das políticas de ações afirmativas³⁹ (Rios, 2023). Esses padrões de escolha indicam a persistência de desigualdades horizontais na educação superior que refletem e se combinam às disparidades do mercado de trabalho. Em particular, corroboram a reprodução das desigualdades ao manter os grupos interseccionais de mulheres, pessoas racializadas e de baixa renda em posições desvantajosas e, ainda, trazem questões relevantes para o debate sobre expansão da educação superior no Brasil e para a elaboração de políticas e melhorias daquelas já existentes.

A pesquisa sobre a persistência das diferenças sociais entre graduados no mercado de trabalho foi impulsionada pela expansão dos sistemas de educação superior e pelo subsequente aumento da participação da população adulta nessa etapa. O interesse nessa agenda tem crescido de modo particular em regiões como a América Latina e Caribe, em que tem havido uma expansão exponencial nas matrículas ao longo das últimas décadas, acompanhada por um processo igualmente rápido de diversificação na base institucional dos sistemas de educação superior (González et al., 2022; Labraña & Brunner, 2022). A literatura empírica sobre as desigualdades entre graduados tem encontrado evidências ambíguas sobre a persistência de desigualdades, sugerindo que, embora a origem social ainda influencie a obtenção de vantagens no acesso a ocupações de elite (Rivera, 2012, 2015), o alcance do diploma de graduação pode tornar a entrada dos graduados no mercado de trabalho mais meritocrática (Torche, 2011; Karlson, 2019).

Uma tentativa de explicação para a diminuição da associação entre origem e destino social entre trabalhadores com educação superior foi proposta pelo que ficou conhecido como o “poder equalizador” do diploma (Triventi, 2013). De acordo com essa perspectiva, a entrada de graduados no mercado de trabalho poderia ser caracterizada como um processo de seleção particularmente meritocrático. Os empregadores não considerariam as características adscritivas ou outros recursos parentais associados à origem social dos potenciais empregados, focando apenas em suas habilidades e educação. Com referência à hipótese de modernização (Treiman, 1970), esse argumento afirma que a burocratização ampliada do processo de seleção de funcionários reduz a dependência de atributos irrelevantes para o trabalho.

Uma segunda linha de explicação se refere ao processo de seleção social que ocorre em estágios anteriores da escolarização, como a conclusão da graduação (Mare, 1980; Triventi, 2013). Estudantes de classes sociais mais baixas têm menos probabilidade de continuar sua educação em cada transição educacional sucessiva. Como resultado, estudantes socialmente privilegiados têm mais chances de completar a graduação do que seus colegas de estratos baixos (Shavit & Blossfeld, 1993). De acordo com essa perspectiva, a crescente homogeneidade da população de estudantes nas últimas etapas do sistema educacional reduz a influência da origem familiar no destino ocupacional – não porque sejam irrelevantes, mas porque exerceram influência em estágios anteriores.

A literatura que examina disparidades sociais nos resultados do mercado de trabalho entre grupos de graduados experimentou um crescimento significativo nas últimas décadas, paralelamente à diferenciação e expansão dos sistemas de educação superior (Triventi, 2013; Klein, 2019). Um conjunto variado de trabalhos tem constatado que o acesso desigual a cursos

³⁹ O acesso aos institutos federais de educação superior (Ifes) é regido por um sistema de reserva de vagas que combina múltiplos critérios sociais (i.e. frequência de todo o ensino médio em escola pública e baixo rendimento per capita mensal) e raciais (i.e. autodeclaração como pretos, pardos e indígenas) que se condicionam mutuamente.

e instituições de níveis distintos de prestígio pode contribuir para as disparidades entre graduados tanto no início quanto ao longo da carreira, estando correlacionadas com a entrada em posições de gerência bem remuneradas e funções com progressão de status superior ao longo do tempo (Jacob & Klein, 2019). No entanto, encontramos apenas alguns estudos que examinaram disparidades baseadas na classe de origem ou nível socioeconômico no Brasil, apesar do crescente número de estudos que examinam desigualdades entre graduados no mercado de trabalho (Ribeiro & Schlegel, 2015; Reis & Machado, 2016; Carvalhaes & Ribeiro, 2019). Além disso, desconhecemos estudos que relacionem os resultados econômicos entre graduados de diferentes segmentos do sistema aos grupos interseccionais aos quais pertencem.

A literatura tem apontado, ainda, que pessoas com deficiência mais escolarizadas alcançam melhores resultados no mercado de trabalho, estando mais ocupadas e auferindo maiores salários do que as pessoas com deficiência com menor nível educacional em diferentes países. A conclusão da educação superior potencializa esses dois efeitos, incrementando a empregabilidade e o retorno salarial das pessoas com deficiência (Sannicandro, 2018; Albinowski; Magda & Rozszczypała, 2023).

Contudo, alguns estudos indicam que, mesmo se não houvesse desigualdade educacional entre as pessoas com e sem deficiência, os resultados desses dois grupos no mercado de trabalho não seriam equiparados. Bryan e coautores (2023) construíram diferentes cenários contrafactuais para tentar explicar a diferença de 33 pontos percentuais entre o nível de ocupação das pessoas com deficiência e o das pessoas sem deficiência no Reino Unido em 2019. Em um cenário em que pessoas com e sem deficiência estivessem igualmente educadas, a diferença entre os níveis de ocupação seria reduzida em apenas 12% (ou 4 pp). Já os cenários em que se simula a retirada de outras barreiras estruturais conseguiriam reduzir até 85% da diferença. Com objetivos semelhantes, Albinowski, Magda e Rozszczypała (2023), demonstraram que, na União Europeia, em situação de igualdade em relação à escolarização, a diferença entre o nível de ocupação das pessoas com deficiência de 25 a 34 anos de idade e o das sem deficiência na mesma faixa etária seria reduzida em 20%. Em outras palavras, somente um quinto da disparidade existente entre os grupos em 2019 foi explicado por diferenças no seu perfil educacional.

Esse conjunto de achados corroboram a importância de políticas para promover o acesso à educação para as pessoas com deficiência, mas sem alçá-las à condição de “salvadoras da pátria”. Abordar somente o aspecto da oferta da mão de obra, sem atacar outras barreiras estruturais que a literatura identifica como óbices para a equidade na inserção no mercado de trabalho não parece ter força para reduzir substancialmente a situação de desvantagem imposta às pessoas com deficiência.

São comumente apontadas como barreiras estruturais as barreiras físicas – arquitetônicas, nos meios de transporte, no ambiente de trabalho – (Neri et al., 2003, Almeida, 2019, Bryan et al., 2023), atitudes negativas por parte de empregadores (Baldwin & Johnson, 1994; Baldwin & Johnson, 1995; Bredgaard & Salado-Rasmussen, 2020) e a própria forma como o mundo do trabalho é organizado, em termos de jornadas de trabalho e parâmetros de produtividade (Abberley, 1999; Erevelles, 2000).

Também é importante compreender que o grupo definido como pessoas com deficiência não é homogêneo, o que aparece nas investigações sobre os retornos à educação. No entanto, a ênfase das análises tem recaído sobre a heterogeneidade decorrente dos tipos e momento de

surgimento da deficiência (Lamichane & Sawada, 2013, Henderson & Houtenville; Wang, 2017) e sobre as diferenças nos resultados de homens e mulheres (Lamichane & Watanabe, 2023). Neste estudo, buscamos incorporar cor ou raça e rendimento domiciliar ao debate.

Interseccionalidade na análise de múltiplas desigualdades

A literatura sobre interseccionalidade aplicada ao estudo das desigualdades tem como origem os questionamentos intensificados a partir de 1970 àquelas vertentes teóricas, até então predominantes, que consideravam um único elemento como gerador de desigualdades sociais. Nesse contexto, o marxismo posiciona o capitalismo no centro dos estudos sobre diferenças e desigualdades, o feminismo de segunda onda concentra-se sobre o patriarcado e, por último, o pensamento racial atribui ênfase ao racismo (Pereira, 2021). As contribuições do feminismo negro, desenvolvido sobretudo no Brasil e Estados Unidos, e a teoria interseccional, têm apresentado possibilidades de avanço analítico para as interpretações teoricamente orientadas das disparidades sociais.

Estudos recentes sobre a interseccionalidade têm defendido que o uso do termo, cunhado por Kimberlé Crenshaw no final da década de 1980 e início da década de 1990, não seja demarcado como ponto de partida da interseccionalidade (Collins & Bilge, 2021; Pereira, 2021; McCall, 2001). O principal argumento dessas autoras, demonstrado nos trabalhos de Anna Julia Cooper e Sojourner Truth, é de que os cruzamentos entre eixos de opressão já estavam inseridos nas agendas dos movimentos de mulheres negras antes da institucionalização e da existência do termo, sobretudo entre as categorias raciais e de gênero, para refletir sobre a situação da mulher negra. Entre as décadas de 1960 e 1980, intelectuais ativistas não brancas avançaram na direção de interpretação das desigualdades sensível à combinação de múltiplos eixos, como gênero, raça e classe. O debate em torno de novas proposições teóricas foi acompanhado por refinamento analítico e terminológico: temos como “tripla discriminação”, “discriminação composta” e “cargas múltiplas”, empregados para representar sistemas de dominação como elementos que se somam entre si, foram superadas por conceitos e expressões alinhadas à noção de entrelaçamento de opressões, incluindo a interseccionalidade (Crenshaw, 1989), consubstancialidade (Kergoat, 2010) e a metáfora do nó (Saffioti, 2004).

Apesar da ênfase nas dimensões racial, de gênero e classe comuns na literatura sobre interseccionalidade, essa proposta, de natureza tanto teórica, quanto empírica, entende que diferentes categorias sociais, nacionalidade, sexualidade, deficiência, contribuem para determinar vantagens e desvantagens sociais (Collins & Bilge, 2021). Crenshaw (1989) argumenta que a interseção entre categorias geraria distintas configurações de discriminação e posições sociais, com estruturas de sobreposição variadas entre tempos e espaços. O conteúdo substantivo dessas sobreposições teria natureza relacional – a relevância do gênero pode sobressair em função da raça em determinado contexto e, em outro, pode ocorrer o contrário. Nessa mesma linha, França (2024) propõe que o pressuposto analítico da interseccionalidade implica compreender que os elementos das várias categorias sociais participam reciprocamente do processo de construção social, na medida em que diferenças em uma categoria produz desigualdades na outra – e.g. “gênero cria classe quando as diferenças de gênero produzem estratificações nas relações de trabalho”.

Neste estudo, buscamos incorporar as ferramentas analíticas da interseccionalidade como recursos capazes de capturar desigualdades na educação superior e mercado de trabalho a partir das imbricações de quatro eixos: raça, gênero, estrato social e condição de deficiência. Em particular, empregamos a abordagem intercategoria, ou simplesmente categórica, para analisar a intersecção do conjunto completo de dimensões de múltiplas categorias e, assim, examinar tanto a vantagem quanto a desvantagem de forma simultânea (McCall, 2005). Em estudos multigrupos, como este pode ser classificado, não é a intersecção de categorias em um único grupo social (por exemplo, homem branco de classe baixa ou mulher negra de classe alta) que interessa, mas as relações entre os grupos sociais definidas por todo o conjunto de grupos que constituem cada categoria. Para além da comparação entre os grupos que constituem cada categoria (homens e mulheres, brancos e não brancos etc.), parte-se do pressuposto de que essas categorias formam grupos sociais mais detalhados constituídos pelas várias combinações.

Com base na literatura anterior sobre desigualdades entre graduados e contribuições da abordagem interseccional, buscamos responder às seguintes perguntas de pesquisa: em que medida o avanço na inclusão agregada de estudantes tradicionalmente desfavorecidos, sobretudo pretos, pardos e indígenas (PPI) e de estratos baixos, tem sido acompanhado por ganhos desiguais de alcance educacional e resultados no mercado de trabalho? Em outras palavras, podemos esperar que a maior participação na educação superior tenha levado ao estreitamento das disparidades, por exemplo, entre homens e mulheres com educação superior, independentemente da raça e estrato social, ou entre estratos baixos e altos, a despeito do grupo racial ou de gênero? Por último, de que forma as desigualdades entre graduados está vinculada à diferenciação qualitativa entre cursos de graduação?

Dados e método

Este estudo utiliza o Suplemento Anual de Educação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-C, IBGE) dos anos de 2016 e 2022. Esse suplemento contém informações desagregadas tanto das características institucionais da educação superior (categorias administrativas e graus acadêmicos), quanto dos resultados dos graduados em diferentes posições ocupacionais, incluindo ocupação e rendimentos no trabalho. O período escolhido marca a primeira e a última edição desse levantamento, e permite analisar mudanças no cenário observado.

Para as pessoas com deficiência foi necessário adotar base de dados distinta, tendo em vista que as características que identificam o grupo não constam de forma permanente na PNAD-C. Assim, o estudo recorre ao suplemento sobre pessoas com deficiência aplicado somente no terceiro trimestre de 2022. Esse suplemento pode ser cruzado com as informações do questionário básico do levantamento, como sexo, cor ou raça, renda domiciliar, nível de instrução, condição de ocupação e rendimentos no trabalho.

Os grupos interseccionais foram construídos a partir das características de sexo, cor/raça, deficiência e renda domiciliar per capita. Os grupos de cor/raça foram divididos entre pretos, pardos e indígenas (PPI) e os demais (não-PPI), enquanto a definição de pessoa com deficiência seguiu os critérios adotados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2023). A renda domiciliar per capita foi classificada de duas formas: 1) para análises dos grupos desagregados de graduados provenientes do Suplemento Educação da PNAD-C que não

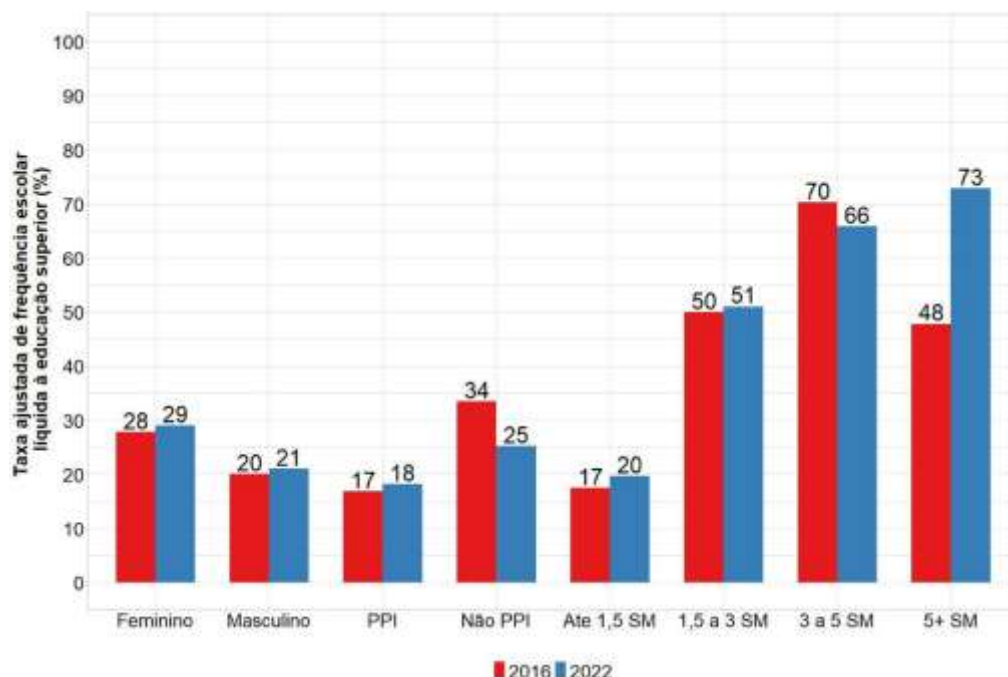
consideravam os segmentos do curso de graduação, utilizamos as faixas de até 1,5 salário mínimo (S.M.), 1,5 a 3 S.M., 3 a 5 S.M. e 5 ou mais S.M; 2) para análises considerando os segmentos do curso de graduação e as pessoas com deficiência, agregamos as faixas de renda domiciliar per capita considerando de 1 a 3 SM “renda baixa”, enquanto 3 ou mais SM foi classificado como “renda média-alta”. Esta última classificação foi adotada em virtude da limitação da amostra para as análises mencionadas. Consideramos como resultados de interesse no mercado de trabalho o nível de ocupação e o rendimento por hora habitualmente trabalhada em todos os trabalhos, padronizado para quatro semanas. A amostra foi constituída pelos graduados de 18 a 40 anos. Recorremos a técnicas de análise descritiva para a apresentação dos resultados.

Resultados

Dimensões institucionais da educação superior e resultados de grupos interseccionais

A expansão massiva da educação superior brasileira na última década tem sido acompanhada de incrementos sucessivos de acesso de diferentes grupos sociais, sobretudo para alguns tradicionalmente em desvantagem. Na Figura 1, apresentamos a taxa ajustada de frequência escolar líquida das pessoas de 18 a 24 anos na educação superior, que é indicador convencional de acesso e considera também quem já concluiu a graduação. Entre 2016 e 2022, as mulheres ampliaram a sua distância em relação aos homens na frequência aos cursos de graduação, enquanto a população de pretos, pardos e indígenas avançou mais rapidamente do que os brancos. Por outro lado, nesse mesmo período, a vantagem dos jovens de renda alta aumentou substancialmente em relação aos demais grupos, com a sua participação (72,9% em 2022) crescendo cerca de quatro vezes a dos jovens de mais baixa renda (19,7% em 2022). Assim, em 2022, a probabilidade de um jovem da elite econômica estar frequentando um curso de graduação é quase quatro vezes maior do que a de um jovem de renda baixa, e a de um jovem branco em relação a um jovem não branco, duas vezes maior.

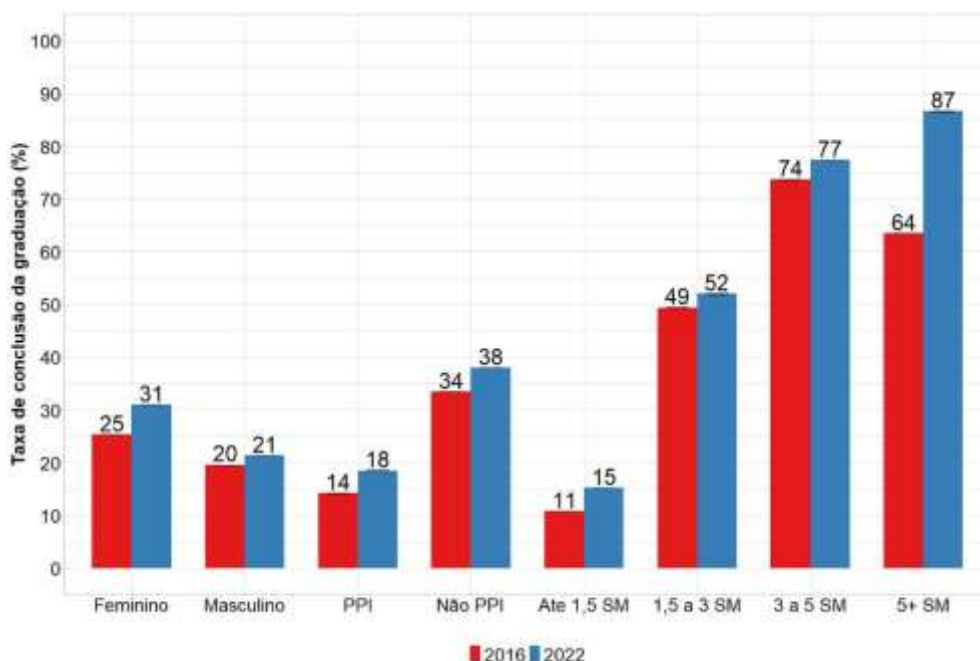
Figura 1. Taxa ajustada de frequência escolar líquida das pessoas de 18 a 24 anos na educação superior por sexo, raça e rendimento domiciliar per capita (Brasil, 2016-2022)



Fonte: Elaboração própria a partir do Suplemento Anual de Educação da PNADC/IBGE 2016 e 2022.

A ampliação do acesso ao sistema de educação superior no agregado não tem implicado em oportunidades equivalentes de admissão aos diferentes segmentos do sistema, nem de conclusão do curso de graduação, seja ele qual for. A Figura 2 mostra a taxa de conclusão dessa etapa por grupo social, considerando as pessoas com idade de três a cinco anos acima da esperada para a frequência ao curso superior de graduação. Além de ser um indicador de eficiência do sistema, a sua análise desagregada também permite entender o nível de equidade global da educação superior. Embora tenha havido aumento da taxa de conclusão para todos os grupos de gênero, raça e rendimento domiciliar entre 2016 e 2022, os incrementos não apenas ocorreram de forma notavelmente desigual, como reforçaram disparidades. Podemos observar na Figura 2 que as distâncias se mantiveram no mesmo patamar (20 pontos percentuais) entre grupos de jovens brancos e não brancos, e ampliaram-se entre mulheres e homens (de cinco para 10 pontos percentuais) e entre jovens de renda mais alta e mais baixa (de 53 para 72 pontos percentuais).

Figura 2. Taxa de conclusão da educação superior (ISCED 4 ou 5), por sexo, cor/raça e rendimento domiciliar per capita (Brasil, 2016-2022)



Fonte: Elaboração própria a partir do Suplemento Anual de Educação da PNADC/IBGE 2016 e 2022. Nota: taxa de conclusão mede a proporção de pessoas com idade de 3 a 5 anos acima da esperada para a frequência ao último ano do nível selecionado, que completaram esse nível (IBGE, 2024).

Ainda que a ampliação da participação dos diferentes grupos sociais na educação superior mitigue em alguma medida a desigualdade vertical, o modo como o sistema brasileiro tem expandido e diversificado a sua oferta tem levado a novas formas de estratificação (Knop & Collares, 2019; Carvalhaes & Ribeiro, 2019). Nesse sentido, há evidências de um processo de “democratização segregativa” por meio do qual o sistema desenvolve ou fortalece uma hierarquia de competências que, por sua vez, se traduz em hierarquias sociais (Merle, 2002). Por essa razão, o debate sobre “equidade” na educação superior tem avançado para considerar não apenas aqueles que participam ou não dessa etapa, mas sim quem participa, onde e como – em suma, o jogo de *status* mudou dos limites do sistema para dentro dele (Bexley, 2016). Nesta seção, damos um passo nessa direção analisando os segmentos do sistema de ES (neste caso, categorias administrativas e graus acadêmicos) em que se gradua os variados grupos interseccionais.

A Tabela 1 apresenta a participação percentual por setor da IES dos diversos grupos de graduados entre 2016 e 2022. Nesse período, aumentou a participação dos grupos baixa renda (homens e mulheres PPI e homens não PPI) entre os graduados dos dois setores, mas sobretudo entre aqueles das IES públicas. Em linhas gerais, os grupos PPI de baixa renda tornaram-se aqueles com maior participação, entre graduados homens e mulheres das públicas, o que converge com a literatura indicando queda da estratificação vertical no acesso às universidades públicas, em grande medida por conta da implementação de políticas de ação afirmativa na última década. Ademais, a força do processo de feminização, sobretudo por mulheres negras, da educação superior também é indicada pelo fato de que as mulheres PPI de renda baixa passaram a representar o grupo com maior participação entre os graduados das públicas e caminham para sê-lo também entre aqueles das privadas. Em que pese o fato de que as IES privadas sejam aquelas que incluem a grande maioria da população de estudantes PPI,

trabalhadores e de baixa renda no sistema de educação superior brasileiro, observamos avanços menores na participação desses grupos entre os graduados do setor privado.

Tabela 1. Percentual de graduados de 18 a 40 anos por grupo social e setor da IES (Brasil, 2016 e 2022)

Grupo	2016		2022	
	Privada	Pública	Privada	Pública
Feminino				
Não PPI Renda baixa	26.4 (0.6)	21.7 (0.8)	24.9 (0.5)	21.7 (0.7)
Não PPI Renda média/alta	10.7 (0.6)	11 (0.8)	7.4 (0.5)	5.2 (0.7)
PPI Renda baixa	16.8 (0.6)	20.1 (0.8)	20.9 (0.5)	24.6 (0.7)
PPI Renda média/alta	2.9 (0.6)	3.6 (0.8)	2.5 (0.5)	2.2 (0.7)
Masculino				
Não PPI Renda baixa	18.7 (0.6)	15.8 (0.8)	17.8 (0.5)	16.5 (0.7)
Não PPI Renda média/alta	10.4 (0.6)	10.7 (0.8)	8.8 (0.5)	8.4 (0.7)
PPI Renda baixa	11.2 (0.6)	13.2 (0.8)	14.9 (0.5)	18.6 (0.7)
PPI Renda média/alta	3 (0.6)	3.8 (0.8)	2.9 (0.5)	2.9 (0.7)
Total	100	100	100	100

Fonte: Elaboração própria a partir do Suplemento Anual de Educação da PNADC/IBGE 2016 e 2022. Nota: erro-padrão entre parêntesis.

Na Tabela 2, observamos a distribuição dos grupos de graduados por grau acadêmico (tecnológico e bacharelado ou licenciatura), que é a segunda dimensão qualitativa dos cursos de graduação disponível para os graduados no Suplemento Educação da PNAD-C. Os grupos PPI de renda baixa foram aqueles que mais ampliaram a sua participação entre os graduados tanto de cursos tecnológicos, quanto de bacharelados e licenciaturas. Os homens desse grupo foram aqueles que mais avançaram no período, com aumentos de 5,0 pp. nos cursos tecnológicos e 4.2 pp. nos cursos não tecnológicos. Para os demais grupos, houve estagnação ou queda na participação entre os graduados dos cursos não tecnológicos. Para além disso, os resultados reforçam o claro componente racial na população que frequenta e conclui os cursos tecnológicos, de forte orientação para o mercado de trabalho e tradicionalmente considerados o segmento menos prestigioso do sistema (Brock & Schwartzman, 2005; Barbosa, 2010): mesmo entre os grupos de renda média ou alta, os grupos PPI foram os únicos que tiveram estabilidade ou mesmo aumento de participação nesses cursos.

Tabela 2. Percentual de graduados de 18 a 40 anos por grupo social e grau acadêmico (Brasil, 2016 e 2022)

Grupo	2016		2022	
	Bacharelado/Licenciatura	Tecnológico	Bacharelado/Licenciatura	Tecnológico
Feminino				

Não PPI Renda baixa	25.8 (0.6)	22.9 (1.4)	24.4 (0.4)	22.2 (1.3)
Não PPI Renda média/alta	11.2 (0.6)	5.1 (1.4)	7.2 (0.4)	3.8 (1.3)
PPI Renda baixa	17.5 (0.6)	18.1 (1.4)	22.2 (0.4)	20.3 (1.3)
PPI Renda média/alta	3.2 (0.6)	1.2 (1.4)	2.5 (0.4)	1.3 (1.3)
Masculino				
Não PPI Renda baixa	17.3 (0.6)	25.4 (1.4)	16.7 (0.4)	22.4 (1.3)
Não PPI Renda média/alta	10.7 (0.6)	8.1 (1.4)	8.9 (0.4)	5.9 (1.3)
PPI Renda baixa	11.1 (0.6)	15.9 (1.4)	15.3 (0.4)	20.9 (1.3)
PPI Renda média/alta	3.2 (0.6)	3.3 (1.4)	2.9 (0.4)	3.2 (1.3)
Total	100	100	100	100

Fonte: Elaboração própria a partir do Suplemento Anual de Educação da PNADC/IBGE 2016 e 2022.

Passando agora para os resultados do rendimento do trabalho dos graduados, apresentados na Tabela 3, observamos, por um lado, um aumento das distâncias salariais entre os grupos sociais do topo e da base da estrutura social e, por outro, dinâmicas distintas entre grupos raciais e de renda. Dois resultados podem ilustrar esses padrões. Primeiro, comparando os grupos de maior e menor rendimento em ambos os anos, encontramos um aumento da diferença entre os ganhos de homens não PPI de renda média ou alta e mulheres PPI de renda baixa (de 3,2 para 3,8 vezes). No entanto, quando comparamos a distância do grupo de maior renda (homens não PPI de renda média ou alta) com aquele grupo cujo rendimento mais avançou no período (mulheres PPI de renda média ou alta), passamos a observar uma queda da distância (de 54,0% para 49,8%). Ainda assim, é bastante indicativo do patamar da desigualdade entre essas categorias sociais o fato de que a renda das últimas em 2022 era inferior àquela que os primeiros possuíam em 2016. Em síntese, se, por um lado, estudos anteriores encontraram que a desigualdade salarial média entre grupos combinados de raça e gênero diminuiu ao longo das últimas décadas (Silveira & Leão, 2020), percebemos a partir desta análise que o estudo das disparidades de renda ainda tem muito a se beneficiar de abordagens que considerem diferenças intra e entre grupos que considerem categorias adicionais, como estrato social.

Tabela 3. Rendimento horário médio de graduados de 18 a 40 anos por grupo social (Brasil, 2016 e 2022)

Grupo	2016		2022	
	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino
Não PPI Renda baixa	13.3 (0.2)	15.9 (0.3)	16.3 (0.2)	18.9 (0.3)
Não PPI Renda média/alta	32.3 (1.2)	39 (1.1)	40.8 (1.4)	56.3 (3.5)
PPI Renda baixa	12 (0.2)	14.5 (0.4)	14.8 (0.3)	16.7 (0.3)
PPI Renda média/alta	25.3 (0.9)	34.5 (1.3)	37.6 (2.4)	43.3 (1.6)

Fonte: Elaboração própria a partir do Suplemento Anual de Educação da PNADC/IBGE 2016 e 2022.

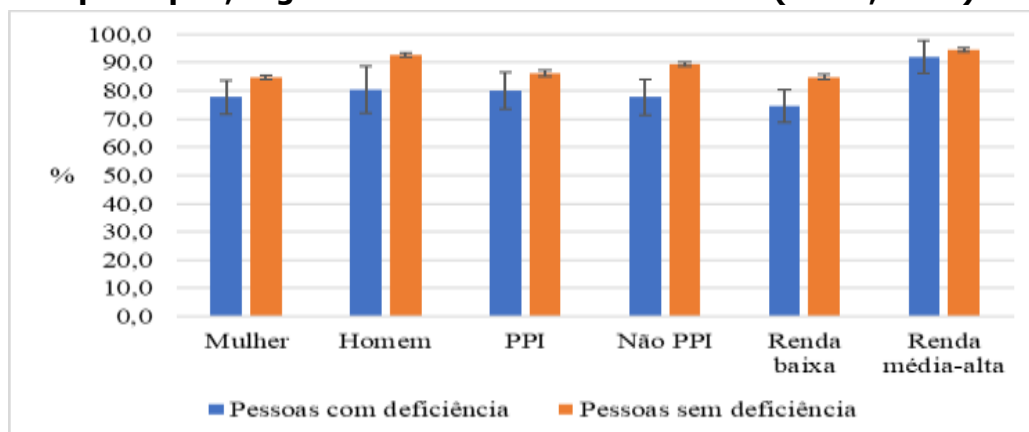
Desigualdades entre graduados com e sem deficiência

Neste estudo, ao focalizarmos somente as pessoas com nível superior completo, chegamos a resultados que corroboram a desvantagem das pessoas com deficiência quanto a estarem ocupadas e auferirem rendimentos equiparáveis aos das pessoas sem deficiência com a mesma formação. Em 2022, o nível de ocupação das pessoas com deficiência graduadas, de 18 a 40 anos de idade, era de 78,8%, quase 10 p.p abaixo das pessoas sem deficiência que haviam concluído o ensino superior (88,1%). Além disso, enquanto as pessoas sem deficiência graduadas recebiam R\$30 por cada hora trabalhada, as pessoas com deficiência apenas R\$24.

Ao cruzarmos a deficiência com características de sexo, cor ou raça e renda familiar, percebemos que a combinação de categorias sociais resulta em uma configuração de desigualdade ampliada e reforço de desvantagens para alguns grupos. O maior contraste se dá na intersecção entre deficiência e renda domiciliar per capita. Em 2022, o nível de ocupação das pessoas com deficiência residentes em domicílios com renda baixa era de 74,5% e o das pessoas sem deficiência em domicílio com renda média-alta, 94,6% (Figura 3).

Fazer parte desses domicílios mais privilegiados coloca também as pessoas com deficiência em posição de maior acesso a emprego. Com efeito, o nível de ocupação das pessoas com deficiência moradoras de domicílios com renda média-alta era de 92,0%, sem diferença estatisticamente significativa em relação aos seus pares sem deficiência. Em extensa revisão bibliográfica, Hästbacka, Nygard e Nyqvist (2016) identificaram dentre os facilitadores da participação das pessoas com deficiência na vida social a disponibilidade de maiores recursos financeiros e redes de suporte. Na literatura em geral, também as redes de contato aparecem com um papel importante na alocação em postos de trabalho (Granovetter, 1973; Lin, 1999; Hirata, 2002).

Figura 3. Nível de ocupação por sexo, cor/raça, faixa de rendimento domiciliar per capita, segundo a existência de deficiência (Brasil, 2022)



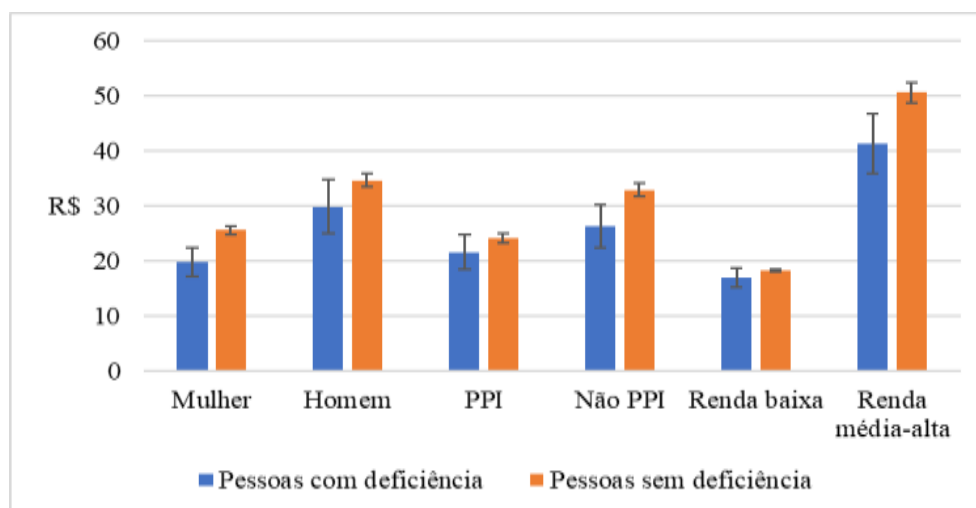
Fonte: Elaboração própria com base no Suplemento de Pessoas com Deficiência da Pnad Contínua/IBGE 2022.

Por outro lado, as evidências indicam que a alocação desses dois grupos que estão nos domicílios com melhor renda não se dá em vagas com a mesma qualidade em termos de remuneração. Enquanto os profissionais com deficiência auferiam, em média, R\$41 por hora

trabalhada, os profissionais sem deficiência obtinham, em média, R\$51 pelo mesmo tempo de labor (Figura 4). Tal achado está alinhado aos estudos que observam que as pessoas com deficiência estão mais inseridas em ocupações com menores rendimentos (Maroto & Pettinicchio, 2014; Almeida, 2019) ou que identificam a presença de discriminação salarial das pessoas com deficiência, mesmo quando o efeito de variáveis como sexo, escolaridade e ocupação são controlados (Baldwin & Johnson, 1994; Baldwin & Johnson, 1995; DeLeire, 2001; Soares, Covre-Sussai & Sento-Sé, 2022; Mantovani et al, 2023).

Já os trabalhadores com deficiência residentes em domicílio com renda baixa recebiam, em média, remuneração equivalente a dos trabalhadores sem deficiência, R\$17 e R\$18 por hora, respectivamente, diferença não estatisticamente significativa. Entre eles, o que é discrepante é o nível de ocupação, sugerindo a presença de barreiras que dificultam o acesso ao mercado de trabalho ou, ainda, que o possível recebimento do Benefício de Prestação Continuada (BPC)⁴⁰, no valor de um salário mínimo nacional, evite que pessoas com deficiência se sujeitem a empregos que não ofereçam um patamar de remuneração compatível com a sua formação.

Figura 4. Rendimento/hora habitual em todos os trabalhos, por sexo, cor/raça, faixa de rendimento domiciliar per capita, segundo a existência de deficiência, 2022



Fonte: Elaboração própria com base no Suplemento de Pessoas com Deficiência da Pnad Contínua/IBGE 2022.

⁴⁰ O BPC garante o recebimento de um salário mínimo mensal pela pessoa com deficiência que resida em domicílio com renda per capita de até $\frac{1}{4}$ do salário mínimo. O BPC não pode ser acumulado com remuneração, mesmo que a renda domiciliar per capita de referência não seja atingida. Desse modo, é uma hipótese plausível que pessoas com deficiência que recebam o BPC não desejem trocá-lo por remunerações insatisfatórias, dado que existe, ainda, o risco de ficar sem trabalho e ter de reiniciar o processo de concessão do benefício. Nos últimos anos, para incentivar o ingresso ou retorno da pessoa com deficiência ao mercado de trabalho, foi criado o Auxílio-inclusão: ele substitui o BPC caso a pessoa com deficiência comece a trabalhar, tem metade de seu valor e pode ser acumulado com remuneração de até 2 salários mínimos. Por ocasião do término da relação de trabalho, o BPC pode ser restaurado, se a pessoa mantiver os critérios de elegibilidade ao benefício. Para mais informações, consultar o portal de solicitação de benefícios previdenciários do governo brasileiro, disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/categorias/trabalho-e-previdencia/previdencia/beneficios>.

A interação entre sexo e deficiência revela as mulheres com deficiência em desvantagem em relação a todos os demais grupos. Embora a diferença no nível de ocupação dessas mulheres (77,8%) comparado ao dos homens com deficiência (80,4%) não seja estatisticamente significativa, seu rendimento médio por hora de trabalho era apenas dois terços do deles – R\$20 e R\$30, respectivamente.

A persistência das desigualdades por gênero atuando ao mesmo tempo que as barreiras por motivo de deficiência aproxima os indicadores das mulheres sem deficiência e dos homens com deficiência ao menos no recorte populacional ora analisado – pessoas graduadas de 18 a 40 anos de idade. Os homens sem deficiência, então, sobressaem com o nível de ocupação mais elevado (92,7%) e o maior ganho por hora de trabalho (R\$35).

Direcionando o enfoque para os grupos por cor ou raça, entre as pessoas sem deficiência, as brancas ou amarelas aparecem com nível de ocupação mais elevado (89,4%) do que as pessoas pretas, pardas ou indígenas (86,1%) e remuneração 37,5% mais alta, corroborando as desigualdades raciais tradicionalmente documentadas nas estatísticas oficiais e pela academia. Entretanto, esse padrão não se repete entre as pessoas com deficiência. As brancas ou amarelas apresentaram nível de ocupação mais baixo e rendimento mais elevado, mas as diferenças observadas não são estatisticamente significativas.

Considerações finais

A crescente relevância das desigualdades qualitativas entre graduados no mercado de trabalho tem atraído a atenção de estudos para o exame da relação entre as dimensões institucionais da educação superior e a origem social dos graduados. Entretanto, na medida em que tem enfatizado as disparidades mensuradas separadamente por categorias de análise, sobretudo gênero, raça e classe social, a maior parte dessa literatura ainda é pouco sensível a variações nas desigualdades entre grupos definidos pelas interseções entre essas categorias. Neste estudo, buscamos contribuir para preencher essa lacuna examinando, a partir de levantamentos domiciliares nacionais, as mudanças nas desigualdades de conclusão da graduação e de resultados no mercado de trabalho, medidas para o conjunto completo de grupos construídos de forma interseccional (gênero, raça, renda domiciliar e condição de deficiência). Ao adotarmos a interseccionalidade como recurso analítico, esperamos superar algumas das limitações da abordagem convencional sobre desigualdades entre graduados, captando com um nível maior de granularidade se a expansão da educação superior tem sido acompanhada por ganhos desiguais entre os grupos de estudantes.

Os resultados encontrados apontam para diferentes padrões de desigualdade tanto na educação superior, a depender da dimensão institucional considerada, quanto no mercado de trabalho. Em que pese a ampliação da participação dos diferentes grupos de gênero, raça e estrato social na educação superior brasileira, observamos que os incrementos na conclusão da graduação, medidos de forma agregada, ocorreram de forma a manter ou reforçar desigualdades. Assim, as distâncias nas taxas de conclusão mantiveram-se inalteradas entre grupos raciais, e ampliaram-se dentro dos grupos de gênero e estrato social. Por outro lado, encontramos padrões distintos para os vários grupos interseccionais de graduados quando consideramos os segmentos em que terminam a graduação. Em linhas gerais, vemos que a expansão do sistema nos últimos anos foi acompanhada de maior inclusão dos grupos PPI e de

baixa renda entre os graduados dos setores público e privado, e de maior participação dos grupos PPI, sobretudo de homens, entre os cursos superiores de tecnologia.

De forma consistente com as diferenças qualitativas do diploma alcançado pelos grupos interseccionais de graduados e a literatura prévia sobre estratificação horizontal nessa etapa de ensino, também encontramos evidências de aumento das distâncias salariais entre os grupos de graduados do topo e da base da estrutura social, com vantagens pronunciadas para homens e pessoas brancas. Nessa direção, os resultados indicam que os maiores avanços médios foram alcançados pelos grupos de brancos de renda alta, enquanto os menores foram observados para os homens PPI de renda média e baixa. Por outro lado, além da presença das mulheres PPI de renda média entre os grupos com maior aumento relativo dos rendimentos, merece atenção o fato de que o segundo maior incremento relativo de rendimento entre os grupos interseccionais foi registrado pelas mulheres PPI de alta renda. Este resultado dialoga com os estudos que têm indicado alta procura pelas áreas de Negócios e Administração por parte das estudantes mulheres beneficiárias de políticas de ação afirmativa nas IES públicas e de financiamento estudantil nas privadas.

Entre as pessoas com deficiência, não é possível avaliar sua trajetória ao longo do tempo, em razão da indisponibilidade de dados para 2016, mas constata-se, em 2022, a heterogeneidade de resultados no mercado de trabalho entre os grupos detentores de diploma de graduação, em especial quanto aos rendimentos, com desvantagem para as mulheres e as pessoas PPI. É interessante observar, porém, que, enquanto a interação entre sexo e deficiência aumenta a distância entre mulheres e homens, o cruzamento entre cor ou raça e deficiência diminui a distância entre pessoas PPI e não PPI, corroborando a interseccionalidade como um entrelaçamento e não apenas somatório de opressões.

Apesar da expansão da educação superior e implementação de políticas de democratização do acesso, encontramos evidências sugestivas de um estreitamento limitado das distâncias sociais entre grupos de graduados no mercado de trabalho. Podemos questionar a efetividade dessa expansão para a diminuição das desigualdades entre graduados no sentido de que coexiste com a persistência de mecanismos de segregação ou “desvio” dos grupos mais vulneráveis para segmentos do sistema de menor o social e econômico, reproduzindo papéis sobrepostos de gênero e raça nas carreiras profissionais. Ainda que os dados disponíveis sejam limitados, os resultados encontrados a partir da consideração das dimensões qualitativas da educação superior apoiam essa interpretação, uma vez que os grupos tradicionalmente em desvantagem têm ampliado o seu acesso, particularmente, nos graus acadêmicos de menor retorno relativo, como é o caso dos cursos tecnólogos.

Por sua vez, essa dinâmica desigual de acesso às oportunidades abertas na educação superior aparece refletida no aumento das disparidades salariais, com desvantagens sobretudo para homens e mulheres PPI de baixa renda. Ainda que os dados não permitam avançar nessa direção, uma possível explicação desses resultados pode estar em que o grupo das mulheres PPI, mesmo as da elite econômica, têm menos chances de atuarem em suas áreas de formação e acessarem profissões de elite. Uma das principais contribuições deste estudo e da agenda de pesquisa do qual faz parte consiste, portanto, em indicar a existência não de um “teto” unidimensional apenas de classe, raça ou gênero para a mobilidade social, mas de um teto móvel de acordo com as dinâmicas geradas pela interseção de categorias sociais.

Os resultados deste estudo indicam a necessidade de aprimoramento das políticas públicas de expansão da educação superior e mercado de trabalho na direção de atuarem diretamente nas desigualdades estruturais, por meio de ações que induzam o acesso pelos grupos vulneráveis aos segmentos educacionais de maior valor social e os protejam dos processos de segregação ou discriminação no mercado de trabalho. Novos estudos sobre a relação entre educação e trabalho que enfoquem múltiplas categorias sociais, incluindo raça, gênero, classe e deficiência — categoria que carece, ainda, de inclusão permanente na PNAD-C para ser melhor analisada —, podem não apenas avançar na análise das diferenças intra e entre categorias sociais, como subsidiar medidas de inclusão e reparação aos grupos vulnerabilizados.

Bibliografia

Abberley, P. (1999). *The Significance of work for the citizenship of disabled people*. Paper presented at the University College Dublin.

<https://disability-studies.leeds.ac.uk/wp-content/uploads/sites/40/library/Abberley-sigofwork.pdf>

Albinowski, M., Magda, I., Rozszczypala, A. (2023). The Employment Effects of the Disability Education Gap in Europe. *IZA Discussion Paper*, (15932). <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4354409>

Almeida, L. A. D. (2019). *Deficiência e desigualdades no Brasil: pobreza, inserção no mercado de trabalho e renda*. (Tesis de Doctorado), Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, Universidad Federal de Minas Gerais.

Alon, S. (2009). The Evolution of Class Inequality in Higher Education: Competition, Exclusion, and Adaptation. *American Sociological Review*, 74(5), 731–755. <https://doi.org/10.1177/000312240907400503>

Argüelles, M. del C., Peñate Leiva, A. I., Díaz Pérez, D., Núñez Morales, I., Zabala Argüelles, M. del C., Peñate Leiva, A. I., Díaz Pérez, D., & Núñez Morales, I. (2023). Desigualdades sociales en la sociedad cubana actual. Desafíos para la educación. *Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina*, 11(3). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2308-01322023000300017&lng=es&nrm=iso&tlng=es

Baldwin, M., & Johnson, W. (1994). Labor Market Discrimination against Men with Disabilities. *The Journal of Human Resources*, 29(1), 1–19. <https://doi.org/10.2307/146053>

Baldwin, M., & Johnson, W. (1995). Labor Market Discrimination against Women with Disabilities. *Industrial Relations: A Journal of Economy and Society*, 34(4), 555–577. <https://doi.org/10.1111/j.1468-232X.1995.tb00388.x>

Barbosa, M. L. (2010). Diplomas e saberes: acadêmicos, tecnólogos e desigualdade no Brasil. In V. Fartes (Coord.), *Educação, (trans)formação e saberes profissionais no mundo em mudanças* (pp. 67–101). UFBA.

Bredgaard, T., & Salado-Rasmussen, J. (2021). Attitudes and behaviour of employers to recruiting persons with disabilities. *Alter, European Journal of Disability Research*, 15(1), 61-70. <https://doi.org/10.1016/j.alter.2020.04.004>

Brock, C., & Schwartzman, S. (2005). *Os desafios da educação no Brasil*. Nova Fronteira.

Bryan, M., Bryce, A., Roberts, J., & Sechel, C. (2023). The Role of Education in The Disability Employment Gap. *Sheffield Economic Research Paper Series*, (2023010). <https://www.sheffield.ac.uk/media/41526/download?attachment>

Carvalhaes, F., Medeiros, M., & Tagliari Santos, C. (2023). Higher Education Expansion and Diversification: Privatization, Distance Learning, and Market Concentration in Brazil, 2002–2016. *Higher Education Policy*, 36(3), 578–598. <https://doi.org/10.1057/s41307-022-00275-z>

Carvalhaes, F., & Ribeiro, C. A. C. (2019). Estratificação horizontal da educação superior no Brasil: Desigualdades de classe, gênero e raça em um contexto de expansão educacional. *Tempo Social*, 31(1), 195–233. <https://doi.org/10.11606/0103-2070.ts.2019.135035>

Caseiro, L. C. Z., & Maciente, A. N. (2023). Desigualdades de remuneração entre egressos dos cursos de graduação em ciências, tecnologias, engenharias e matemática (CTEM). Texto para Discussão (TD) 2947. Ipea. <https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/12694>

Choo, H. Y., & Myra, M. F. (2010). Practicing intersectionality in sociological research: a critical analysis of inclusions, interactions, and institutions in the study of inequalities. *Sociological Theory*, 28(2): 129-149. <https://doi.org/10.2307/25746220>

Collins, P. H., Bilge, S. (2021). *Interseccionalidade*. Boitempo.

DeLeire, T. (2001). Changes in Wage Discrimination against People with Disabilities: 1984-93. *Journal of Human Resources*, 36(1), 144-158. https://econpapers.repec.org/article/uwpjhriss/v_3a36_3ay_3a2001_3ai_3a1_3ap_3a144-158.htm

Erevelles, N. (2000). Educating unruly bodies: critical pedagogy, disability studies, and the politics of schooling. *Educational Theory*, 50(1), 25-47. <https://doi.org/10.1111/j.1741-5446.2000.00025.x>

Gonzalez, L. (1984). *Por um Feminismo Afro-Latino-Americano: Ensaio, Intervenções e Diálogos*. Zahar.

González, Y. P. C., Mora, S. Z. J., & Morillo, R. G. M. (2022). Tendencias y desafíos políticos y socio culturales de la educación superior contemporánea en Latinoamérica. *Revista Boletín Redipe*, 11(1), Artigo 1. <https://doi.org/10.36260/rbr.v11i1.1628>

González, J. L., & Mejía Pérez, G. (2022). Desventajas educativas, sociales y tecnológicas en tiempos de pandemia: La interseccionalidad en las estudiantes de una unidad UPN en la Ciudad de México. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 52(3), 371–392. <https://doi.org/10.48102/rlee.2022.52.3.505>

Granovetter, M. S. (1973). The Strength of Weak Ties. *American Journal of Sociology*, (78), 1360-1380. <https://www.cs.cmu.edu/~jure/pub/papers/granovetter73ties.pdf>

Hasenbalg, C. (1979). *Discriminação e desigualdades raciais no Brasil*. Graal.

Hasenbalg, C. A., & Silva, N. do V. (1990). Raça e oportunidades educacionais no Brasil. *Cadernos de Pesquisa*, 73, Artigo 73.

Hästbacka, E., Nygard, M. & Nyqvist, F. (2016). Barriers and facilitators to societal participation of people with disabilities: A scoping review of studies concerning European countries. *Alter, European Journal of Disability*, 10(3), 201-220. <https://doi.org/10.1016/j.alter.2016.02.002>

Henderson, D. J., Houtenville, A. & Wang, L. (2017). The Distribution of Returns to Education for People with Disabilities. *Journal of Labor Research*, (38), 261-282. <http://doi.org/10.1007/s12122-017-9245-8>

Hirata, H. (2002). *Nova divisão sexual do trabalho? Um olhar voltado para a empresa e a sociedade*. Boitempo.

IBGE. (2024). Estatísticas de gênero: Indicadores sociais das mulheres no Brasil (3º ed). IBGE.

Jacob, M., & Klein, M. (2019). Social origin, field of study and graduates' career progression: Does social inequality vary across fields? *The British Journal of Sociology*, 70(5), 1850–1873. <https://doi.org/10.1111/1468-4446.12696>

Kergoat, D. (2010). Dinâmica e consubstancialidade das relações sociais. *Novos estudos CEBRAP*, (86). <https://doi.org/10.1590/S0101-33002010000100005>

Klein, M. (2019). *When and for Whom Does It Pay to Attend a Prestigious University? Social Origin, Elite Education and Graduates' Career Trajectories*. The University of Queensland.

Knop, M., & Collares, A. C. M. (2019). A influência da origem social na probabilidade de concluir os diferentes cursos de ensino superior. *Sociedade e Estado*, 34(2), 351–380. <https://doi.org/10.1590/s0102-6992-201934020001>

Labraña, J., & Brunner, J. J. (2022). Transformación de la educación superior latinoamericana y su impacto en la idea de la universidad. *Perfiles Educativos*, 44(176), Artigo 176. <https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2022.176.60539>

Lamichane, K., & Sawada, Y. (2013). Disability and returns to education in a developing country. *Economics of Education Review*, (37), 85-94. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2013.08.007>

Lamichane, K., & Watanabe, T. Intersection of Gender and Disability on Returns to Education: A Case from Metro Manila, Philippines. (2023). *Merits*, (3), 682-699. . <https://doi.org/10.3390/merits3040041>

Lin, N. Building a Network Theory of Social Capital. (1999). *Connections*, 22(1), 28-51. <https://faculty.washington.edu/matsueda/courses/590/Readings/Lin%20Network%20Theory%201999.pdf>

Mantovani, G. G., Paiva, V. F. de, Souza, S. de C. I. de & Gomes, M. R. (2023). Desigualdades salariais para pessoas com deficiência: aspectos macrorregionais e o mercado de trabalho paranaense. *DRd - Desenvolvimento regional em debate*, (13), 01-28. <https://doi.org/10.24302/drd.v13.3106>.

Mare, R. D. (1980). Social Background and School Continuation Decisions. *Journal of the American Statistical Association*, 75(370), 295. <https://doi.org/10.2307/2287448>

Marotto, M., & Pettinichio, D. (2014). Disability, structural inequality, and work: The influence of occupational segregation on earnings for people with different disabilities. *Research in Social Stratification and Mobility*, (38), 76-92. <https://doi.org/10.1016/j.rssm.2014.08.002>

McCall, L. (2001). *Complex inequality: Gender, class, and race in the new economy*. Routledge.

Mello, A. G. de, & Nuernberg, A. H. (2012). Gênero e deficiência: interseções e perspectivas. *Revista de Estudos Feministas*, 20(3), 635-655. <https://doi.org/10.1590/S0104-026X2012000300003>

Mendes, T., Houzel, L., Milanki, B., Medeiros, C., Rocha, F. E., Elgaly, P., Almeida, V. de, & Carvalhaes, F. (2021). Azul ou rosa? A segregação de gênero no ensino superior brasileiro, 2002-2016. *Cadernos de Pesquisa*, (51), <https://doi.org/10.1590/198053147830>

Merle, P. (2002). *La démocratisation de l'enseignement*. La Découverte.

Mont'Alvão, A. (2011). Estratificação educacional no Brasil do século XXI. *Dados*, 54, 389–430. <https://doi.org/10.1590/S0011-52582011000200006>

Neri, M., Pinto, A., Soares, W., & Costilla, H. (2003). *Retratos da deficiência no Brasil*. FGV/IBRE, CPS.

Pereira, B. C. J. (2021). Sobre usos e possibilidades da interseccionalidade. *Civitas: Revista De Ciências Sociais*, 21(3), 445–454. <https://doi.org/10.15448/1984-7289.2021.3.40551>

Quiñones, L. (2024). Políticas y programas de acción afirmativa en educación superior: Fenomenología e interseccionalidad. *Sinéctica*, 62. [https://doi.org/10.31391/s2007-7033\(2024\)0062-010](https://doi.org/10.31391/s2007-7033(2024)0062-010)

Reis, M. C., & Machado, D. C. (2016). Uma análise dos rendimentos do trabalho entre indivíduos com ensino superior no Brasil. *Economia Aplicada*. 20(4), 415-439. <https://doi.org/10.11606/1413-8050/ea140616>

Ribeiro, C. A. C., & Schlegel, R. (2015). Estratificação horizontal da educação superior no Brasil (1960 a 2010). En Arretche, M. (Org.), *Trajetórias das desigualdades: como o Brasil mudou nos últimos cinquenta anos* (pp. 133-162). Editora Unesp.

Rivera, L. A. (2012). Hiring as Cultural Matching: The Case of Elite Professional Service Firms. *American Sociological Review*, 77(6), 999–1022. <https://doi.org/10.1177/0003122412463213>

_____. (2015). *Pedigree: How elite students get elite jobs*. Princeton Univ. Press.

Rodrigues, L. (2023). Estratificação Horizontal do Ensino Superior Brasileiro e as Profissões Imperiais: Os Concluintes de Medicina, Engenharia e Direito entre 2009 e 2017. *Dados*, 67(1). <https://doi.org/10.1590/dados.2024.67.1.312>

Saffioti, H. (2004). *Gênero, patriarcado, violência*. Fundação Perseu Abramo.

Sannicandro, T., Parish, S. L., Fournier, S., Mitra, M. & Paiewonski, M. (2018). Employment, income, and SSI effects of postsecondary education for people with intellectual disability. *American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities*, 123 (5), 412-425. <https://doi.org/10.1352/1944-7558-123.5.412>

Santos, J. A. F. (2023). Interações entre origem de classe, raça e gênero no acesso ao topo social no Brasil. *Tempo Social*, (35), 37–61. <https://doi.org/10.11606/0103-2070.ts.2023.206600>

Santos, C. T., Lima, Raquel. G. de, & Carvalhaes, F. (2020). O Perfil Institucional do Sistema de Ensino Superior Brasileiro após Décadas de Expansão. En Barbosa, M. L.(Eds.), *A expansão desigual do ensino superior no Brasil* (pp. 27–56). Editora Appris.

Senkevics, A. S., & Mello, U. M. (2019). O perfil discente das universidades federais mudou pós-lei de cotas? *Cadernos de Pesquisa*, (49), 184–208. <https://doi.org/10.1590/198053145980>

Shavit, Y., & Blossfeld, H.-P. (Orgs.). (1993). *Persistent inequality: Changing educational attainment in thirteen countries*. Westview Press.

Silva, M. R. L., & Prates, I. (2015). Desigualdades raciais no Brasil: um desafio persistente. In M. Arretche (Coord.). *Trajetórias das desigualdades: como o Brasil mudou nos últimos cinquenta anos* (pp. 163-189). Editora Unesp.

Silva, M. R. L., Rios F., & França, D. (2013). Articulando gênero e raça: a participação das mulheres negras no mercado de trabalho (1995-2009). *En Dossiê mulheres negras: retrato das condições de vida das mulheres negras no Brasil*. Ipea.

Silveira, L. S., & Leão, N. S. (2020). O impacto da segregação ocupacional por gênero e raça na desigualdade de renda no Brasil em três décadas (1986-2015). *Revista Latinoamericana de Población*, 14(27), Artigo 27. <https://doi.org/10.31406/relap2020.v14.i12.n27.2>

Soares, J., Covre-Sussai, M., & Sento-Sé, I. V. (2022). Discriminação salarial de trabalhadores(as) com deficiência no Brasil: Uma análise interseccional por gênero e raça/cor. *Civitas: Revista De Ciências Sociais*, (22), 1-12. <https://doi.org/10.15448/1984-7289.2022.1.41686>.

Souza, P. F. de, Ribeiro, C. A. C., & Carvalhaes, F. (2010). Desigualdade de oportunidades no Brasil: Considerações sobre classe, educação e raça. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, (25), 77–100. <https://doi.org/10.1590/S0102-69092010000200005>

Treiman, D. J. (1970). Industrialization and Social Stratification. Em E. O. Laumann (Org.), *Social Stratification: Research and Theory for the 1970s*. Bobbs-Merril.

Triventi, M. (2013). The role of higher education stratification in the reproduction of social inequality in the labor market. *Research in Social Stratification and Mobility*, (32), 45–63. <https://doi.org/10.1016/j.rssm.2013.01.003>

Vergès, F. (2020). *Um feminismo decolonial*. Ubu Editora.

Vieira, A. de H. P. (2023). Desigualdades sociais na entrada no emprego formal entre graduados da educação superior. *Tempo Social*, 35(1), Artigo 1. <https://doi.org/10.11606/0103-2070.ts.2023.200986>

Vieira, A. de H. P., Honorato, G., & Rodrigues, L. (2022). Educação superior e resultados no mercado de trabalho no Brasil: Uma revisão da literatura e dos dados disponíveis. *Revista Brasileira de Sociologia - RBS*, 10(25), Artigo 25. <https://doi.org/10.20336/rbs.879>

Zuccarelli, C. (2021). Trabalhadores com educação superior e as transformações no mundo do trabalho. *EccoS – Revista Científica*, (57), Artigo 57. <https://doi.org/10.5585/eccos.n57.10782>

Fuentes

Rios, F. [ANPOCS] (19 de noviembre de 2023). Ações afirmativas em curso. [Video] YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=K6Kp8N3joHA>

SEMBLANZA

André Vieira

Doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor de Sociologia na Universidade Federal Fluminense. Coordena o Grupo de Pesquisa sobre Desigualdades Estruturantes (Desestrutura/UFF). Publicou recentemente “Social origin, skills, and graduates? formal employability in Brazil: how does it vary across fields of study and institutions?” (Edward Elgar Publishing, 2024) e “Habilidades, Emprego e Salários de Graduados da Educação Superior no Brasil” (Revista Dados, 2024).

Luanda Botelho

Doutoranda em Ciências Sociais e Mestre em Sociologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atua como professora assistente na Universidade Federal do Rio de Janeiro e analista no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Publicou recentemente “Trajetória da identificação das pessoas com deficiência no Brasil” e “Mães, cuidadoras e trabalhadoras: a sobrecarga na maternidade atípica e desigualdades no mercado de trabalho”.

Camila Santos

Bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense, mestranda em Sociologia na Universidade Federal Fluminense e pesquisadora assistente no Grupo de Pesquisa sobre Desigualdades Estruturantes (Desestrutura/PPGS/UFF), Núcleo de Estudos Guerreiro Ramos (Negra/UFF) e do Núcleo Afro/Cebrap.

Disciplina: Sociología

Subdisciplina: mercado de trabajo.

Tipo, método o enfoque del estudio: análisis estadístico.



CARACTERIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CLASES SOCIALES EN HONDURAS (2019 Y 2023)

José Octavio Llopis Hernández

jose.llopis@unah.edu.hn

Departamento de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7939-705X>

David Pineda Talavera

dpineda@unah.edu.hn

Departamento de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6996-2185>

Kevin Alberto Cruz

cruz.kevin@unah.edu.hn

Departamento de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8327-0150>

Mario Enrique Pineda Talavera

enrique.pineda@unah.edu.hn

Departamento de Economía. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0618-8791>

Resumen

Este artículo tiene como objetivo caracterizar la estructura de clases sociales de Honduras según sexo, territorio y edad, en 2019 y 2023. Analíticamente, adhiere a la propuesta teórica neoweberiana que tiene como centralidad el mercado de trabajo para la definición de la clase social. Metodológicamente, se emplea el modelo de clases sociales de Erikson, Goldthorpe y Portocarrero (EGP) adaptado a las condiciones estructurales de Honduras. Las fuentes de información son las bases de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares y Propósitos Múltiples (EPHPM) del Instituto Nacional de Estadística (INE). Los resultados revelan un cambio relativo en la composición de la estructura de clases, se presenta una contracción en la clase de servicios, especialmente entre los profesionales de baja graduación; mientras aumenta la asalarización de trabajadores manuales en sectores industriales, acompañada de una marcada disminución de trabajadores independientes en el ámbito rural. Las mujeres experimentan una reducción en su participación en el sector servicios y continúan concentradas en ocupaciones precarias e informales. A nivel territorial, se observa una concentración de clases agrícolas en las zonas rurales y de clases de servicios en las ciudades. Finalmente, los jóvenes reducen su participación en las clases agrícolas y presentan dificultades para acceder a empleos formales, en contraste con la población adulta, que muestra una mayor estabilidad laboral.

Palabras clave: clases sociales; mercado laboral; Honduras; modelo de clases; desigualdad social.

CHARACTERIZATION OF THE SOCIAL CLASS STRUCTURE IN HONDURAS (2019 AND 2023)

Abstract

This article aims to characterize the social class structure of Honduras according to sex, territory and age, in 2019 and 2023. Analytically, it adheres to the neo-Weberian theoretical proposal that has the labor market as central to the definition of social class. Methodologically, the social class model of Erikson, Goldthorpe and Portocarrero (EGP) adapted to the structural conditions of Honduras is used. The sources of information are the microdata bases of the Permanent Survey of Households and Multiple Purposes (EPHPM) of the National Institute of Statistics (INE). The results reveal a relative change in the composition of the class structure, there is a contraction in the service class, especially among low-ranking professionals; while the salaried employment of manual workers in industrial sectors increases, accompanied by a marked decrease in independent workers in rural areas. Women experience a reduction in their participation in the service sector and continue to be concentrated in precarious and informal occupations. At the territorial level, there is a concentration of agricultural classes in rural areas and service classes in the cities. Finally, young people reduce their participation in agricultural classes and have difficulties accessing formal jobs, in contrast to the adult population, which shows greater job stability.

Keywords: social classes; labor market; Honduras; class model; social inequality.

CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE CLASSES SOCIAIS EM HONDURAS (2019 E 2023)

Resumo

Este artigo tem como objetivo caracterizar a estrutura de classes sociais de Honduras segundo sexo, território e idade, em 2019 e 2023. Analiticamente, adere à proposta teórica neoweberiana que tem o mercado de trabalho como central para a definição de classe social. Metodologicamente, utiliza-se o modelo de classe social de Erikson, Goldthorpe e Portocarrero (EGP) adaptado às condições estruturais de Honduras. As fontes de informação são as bases de microdados do Inquérito Permanente aos Agregados Familiares e Fins Múltiplos (EPHPM) do Instituto Nacional de Estatística (INE). Os resultados revelam uma relativa mudança na composição da estrutura de classes, há uma contração da classe de serviços, principalmente entre os profissionais de baixo escalão; enquanto o emprego assalariado dos trabalhadores manuais nos sectores industriais aumenta, acompanhado por uma diminuição acentuada dos trabalhadores independentes nas zonas rurais. As mulheres registam uma redução na sua participação no sector dos serviços e continuam a concentrar-se em ocupações precárias e informais. No nível territorial, há concentração de classes agrícolas nas áreas rurais e de classes de serviços nas cidades. Por fim, os jovens reduzem a sua participação nas classes agrícolas e têm dificuldades de acesso a empregos formais, em contraste com a população adulta, que apresenta maior estabilidade no emprego.

Palavras-chave: classes sociais; mercado de trabalho; Honduras; modelo de classe; desigualdade social.

Introducción

En las últimas décadas, se ha presentado una renovación de los estudios de clases sociales en la región latinoamericana para explicar la estructura y las desigualdades sociales. Esta tendencia encuentra su asidero en la búsqueda de explicaciones vinculadas a las particularidades inherentes al desarrollo de cada sociedad, sobre todo, aquellas caracterizadas por la heterogeneidad estructural que configuran relaciones laborales con altos niveles de informalidad y precariedad durante el actual modelo de desarrollo.

El creciente número de estudios se ha inclinado por la utilización del modelo de Erikson, Goldthorpe y Portocarrero (EGP), adaptándolo a las condiciones propias de América Latina debido a sus bondades metodológicas y empíricas para construir la estructura de clases sociales. En esta misma línea, se ha mostrado el peso de las dinámicas de la movilidad social de clase (Solís, 2016), también se ha indagado en la relación entre clase, origen, educación y destino comparando Buenos Aires y Montevideo (Boado, 2023); la posición de clase y el acceso a derechos sociales como pensiones e ingresos en América Latina (Chávez, Cobos & Solís, 2022); y el vínculo entre clase social e ingresos en diferentes coyunturas políticas para el caso argentino (Chávez Molina & Rodríguez de la Fuente, 2021).

Honduras presenta una serie de características que ameritan introducir el análisis de clase social. Por un lado, los estudios sobre mercado laboral muestran la persistente desigualdad, con una dinámica económica de baja productividad, una alta informalidad y un mercado laboral que ofrece empleo precario (Del Cid & Ordoñez, 2002; Llopis Hernández; Michel & Walker, 2019). Por otro lado, existen acercamientos a los estudios de clase en los últimos años, los cuales adoptan distintos esquemas teóricos relacionados con el marxismo y enfoques estructurales para el caso hondureño (Briceño, 2022; Pineda Talavera, 2018).

El presente trabajo tiene como objetivo central caracterizar la estructura de clases sociales de Honduras según sexo, territorio y edad, adhiriéndose a la perspectiva neoweberiana del enfoque EGP, debido a que permite la comparabilidad de los hallazgos entre diferentes realidades de países latinoamericanos (Solís, 2016; Chávez, Cobos & Solís, 2022). Además, permite una mirada particular sobre el mercado de trabajo como ámbito definitorio de las posiciones de clase. Adicionalmente, para tener una mirada más completa sobre la estructura de clases sociales, se seleccionaron los años 2019 y 2023 con el fin de obtener una primera aproximación en dos momentos específicos: en el contexto previo y posterior a la pandemia. De igual manera, la selección de los años de análisis también obedece a la disponibilidad de datos de las bases de la Encuesta Permanente de Hogares y Propósitos Múltiples (EPHPM).

En la primera sección se presenta una revisión de los antecedentes de investigaciones sobre clases sociales en Honduras. En la segunda sección se expone el abordaje teórico-metodológico de este trabajo y son descritos los criterios de adaptación del modelo EGP para América Latina y, específicamente, las decisiones que orientan la elaboración de la estructura de clases para Honduras. Finalmente, el tercer apartado contiene los principales hallazgos del estudio: una notable reducción del peso de las clases agrícolas, la contracción de las clases de servicios, especialmente entre los profesionales de baja graduación, el aumento de los trabajadores asalariados manuales y la reducción de trabajadores independientes.

Antecedentes: estudios de clases sociales en Honduras

En el transcurso del siglo XXI, las clases sociales en Centroamérica y el resto del continente han experimentado importantes procesos de transformación, y Honduras no es la excepción. En un contexto de liberalización económica, diversificación productiva, flexibilización laboral, precarización del trabajo, migración y cambios demográficos, también acontece una reconfiguración en la estructura de clases en el contexto de la sociedad hondureña que permanece poco estudiada, bien sea porque Honduras no figura en algunos análisis recientes que sobre la temática se han realizado en América Latina, o porque en el ámbito académico nacional no se han logrado avances que reflejen la magnitud de dichos cambios.

Al igual que en los demás países de la región, aunque en una menor escala, en Honduras se ha observado un renovado interés en estudiar las clases sociales en años recientes. En la segunda mitad del siglo XX el antecedente más notable fue la caracterización de la transformación de la estructura de clases rurales (Del Cid, 2019), trabajo realizado en el marco del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) que reflejaba el relegamiento de los terratenientes tradicionales dentro de la economía nacional, el auge de una burguesía

agroexportadora y la división del campesinado en un sector autónomo minoritario y dependiente, que conformaba la mayoría de la población rural.

Las políticas reformistas impulsadas durante las décadas de los sesenta y setenta fueron desplazadas por los Programas de Ajuste Estructural, caracterizados principalmente por el abandono del agro (situación que afectó directamente al campesinado minifundista y sin tierra), el debilitamiento de las políticas de apoyo al mercado interno y una política económica centrada en el sector financiero, el ajuste de precios de servicios públicos, la reducción del Estado, la privatización y la liberalización de la economía (Hernández, 2007). De esta manera se acude a la preponderancia del enfoque de pobreza para estudiar las carencias materiales (Pineda Talavera, 2018), el cual tiene entre sus principales características la despolitización de las discusiones respecto a la distribución de recursos, en tanto excluye el poder como variable de análisis central, limitando su visión hacia una interpretación de las carencias materiales como manifestaciones de bajos niveles de integración social, priorizando el análisis entre individuos y no estructural para explicar los problemas de pobreza, sin cuestionar el patrón de distribución de la riqueza.

A nivel de la región centroamericana, en las últimas décadas existen estudios que cuestionan el enfoque de pobreza, promoviendo una nueva perspectiva que explica las causas del deterioro material. Así, sustentándose en las ideas fundacionales de Marx y Weber para reubicar la discusión de clases desde una perspectiva estructural y relacional, en los desarrollos recientes de Wright (2009), y rescatando los aportes desde una mirada más centroamericana esbozada por Pérez Sáinz y Mora Salas (2006), los estudios de la estructura de clases en Honduras han tomado un nuevo impulso, dando cuenta de los efectos generados por la profundización de una nueva lógica de acumulación e inserción al capitalismo globalizado.

Pineda Talavera (2018) elaboró un primer esbozo de la estructura de clases en Honduras a partir de las propuestas de Pérez Sáinz (2004) y Pérez Sáinz y Mora Salas (2009), tomando en cuenta siete variables: categoría ocupacional, jornada laboral, ubicación del establecimiento, tamaño del establecimiento, nivel de credenciales educativas, nivel de ingresos y estabilidad en el empleo. Estos criterios permitieron construir una estructura de seis clases: a) capitalistas, b) pequeña burguesía, c) trabajadores de élite, d) pequeña burguesía que no contrata fuerza laboral, e) trabajadores asalariados desprotegidos laboralmente y f) excedente laboral. El análisis centrado en 2006, 2010 y 2013 evidenció el aumento de la marginación, una reducción de la clase capitalista que indicaba una mayor concentración y control de los recursos. Además, los trabajadores de élite y trabajadores asalariados desprotegidos presentaron un aumento relativo que no se sostuvo, ya que este se contrajo para 2013, mientras la pequeña burguesía que no contrata fuerza laboral mostró un proceso inverso.

Desde el marxismo clásico, Briceño (2022) propone un mapa de clases sociales donde se aproxima a la clase burguesa de acuerdo con tres criterios: propiedad sobre los medios de producción, control de la fuerza de trabajo y del capital. El resultado del ejercicio analítico identificó una clase burguesa dividida en cuatro niveles: a) gran burguesía, b) burguesía, c) mediana burguesía y d) pequeña burguesía. En relación con las formas de reproducción de clases dominadas o subalternas estableció tres grandes sectores: a) la clase campesina, b) unidades microempresariales basadas en la sobreexplotación del trabajo, y, c) el proletariado. Según este abordaje, la clase campesina estaba constituida por unidades económicas minifundistas centradas en la producción de subsistencia, unidades de economía doméstica y unidades colectivas de producción. La clase de microempresarios se conformaba por unidades

familiares de economía mercantil simple, mientras el proletariado representaba a los obreros cuya inserción al sistema productivo se caracterizaba por la venta de su fuerza de trabajo.

Estos estudios recientes plantean dos ideas importantes. Briceño (2022) concluye que, en las últimas décadas, se consolidó en Honduras una burguesía agraria transnacional con fuertes vínculos con los sectores financiero y agroindustrial, lo que significó una reconfiguración de la estructura de las clases dominantes respecto al modelo ISI, período en el cual predominaron las clases agrícolas tradicionales.

Por su parte, Pineda Talavera (2018), caracterizó la estructura de clases argumentando que la clase capitalista había concentrado más recursos y se caracterizaba por una mayor participación de hogares con jefatura masculina, mientras que la clase de los trabajadores de élite concentrada en el sector secundario y terciario estaba constituida por hogares con mayor jefatura femenina.

Si bien los estudios de Pineda Talavera (2018) y Briceño (2022) reflejan una renovación por los estudios de clases sociales en Honduras, ambas caracterizaciones muestran una tipificación aplicable al caso hondureño, pero imposibilita la comparación con otros países de la región. Además, se considera necesario continuar con estudios más recientes que permitan una actualización de la estructura de clases en el contexto previo y post pandemia. Considerando estas reflexiones, se estima pertinente someter el modelo EGP a una réplica para el caso hondureño y observar su potencia analítica.

Abordaje teórico-metodológico: modelo EGP adaptado a Honduras

La revitalización de los estudios sobre clases sociales ha estado relacionada con un debate clásico de la sociología, mediante el cual se buscó explicar la composición de una sociedad en un momento histórico determinado y su recomposición a partir de coyunturas específicas. En la década de los sesenta y setenta, los debates en torno al desarrollo desde las teorías de la modernización, estructuralista y de la dependencia impulsaron estudios sobre las clases sociales en América Latina. Recientemente han surgido nuevos enfoques adaptando modelos como el EGP a las transformaciones sociales en la región, en diálogo con marcos teórico-metodológicos de Europa y Estados Unidos (Solís, Benza y Boado, 2016).

Este trabajo adhirió al argumento de Solís, Benza y Boado (2016) sobre las similitudes empíricas entre los modelos neomarxistas y neweberianos de clases sociales y la importancia de reflexionar sobre las adecuaciones necesarias en cada país. Los autores también señalan que el modelo EGP ha sido utilizado a nivel internacional como un recurso teórico-metodológico para entender y analizar las clases sociales y la movilidad social. Esto obedece a que el modelo ubica las clases sociales en función de sus posiciones en la estructura de relaciones laborales, lo que implica identificar la posición de la persona en el mercado de trabajo y qué tipo de relación tiene con su ocupación.

Recientemente Chávez Molina, Cobos y Solís (2022) han realizado un ejercicio comparativo del esquema EGP para América Latina, demostrando el alcance metodológico de este modelo. Este cuerpo de literatura ha permitido agrupar los siguientes criterios claves para esbozar un mapa de clases sociales en la región: diferenciación entre condiciones de formalidad/informalidad con base en las condiciones productivas; el reconocimiento de la heterogeneidad de los mercados de trabajo latinoamericanos, caracterizados por la precariedad y dualidad en su estructura y el agrupamiento de ciertos sectores como élites económicas y administrativas (Solís, Benza, & Boado, 2016; Chávez Molina, Cobos, & Solís, 2022).

En función de esta discusión, se considera que la utilización de este modelo presenta tres bondades analíticas. Primero, desde un punto de vista teórico-metodológico, permite capturar las clases sociales en Honduras a la luz de la heterogeneidad estructural de su mercado laboral, asumiendo que esta dimensión es central para la generación y distribución de las desigualdades sociales. Segundo, posibilita entender su composición en diferentes niveles de agregación, lo que permite construir distintas cantidades de macro clases y sus subdivisiones, según el interés analítico. Finalmente, ofrece la posibilidad de comparar los resultados del esquema de clases construido en este estudio con otros países.

Siguiendo la propuesta de Solís (2016), en este estudio se utilizó el esquema EGP bajo la clasificación de siete macro clases. En primer lugar, la clase de servicios agrupa a un contingente de personas en posiciones de clase privilegiada con capacidad de gestión de recursos administrativos y gerenciales. En segundo lugar, los trabajadores formales de rutina son asalariados que desempeñan labores rutinarias de oficina, pero en una posición jerárquica inferior respecto a la clase de servicios.

En tercer lugar, la categoría de pequeños empleadores y trabajadores independientes se compone de pequeños patrones con diferentes grados de profesionalización caracterizados primordialmente por ser no asalariados. En cuarto lugar, los trabajadores formales asalariados representan a empleados asalariados con un grado alto o intermedio de calificación en sus actividades. Este grupo abarca desde operarios, capataces o supervisores con diferentes grados de especialización. También incluye a trabajadores manuales de baja cualificación que ostentan una posición jerárquica más básica. En quinto lugar, los trabajadores asalariados y por cuenta propia en el sector informal se ubican en posiciones de baja calificación en diferentes sectores económicos. Su característica de informalidad se refiere a que trabajan en unidades productivas de pequeña escala, por tanto, con una baja productividad.

En sexto lugar, la clase agrícola independiente engloba a personas que pueden tener control sobre ciertos recursos y una posición más autónoma (como los cuenta propia en actividades agrícolas). Finalmente, la clase agrícola asalariada comprende al “típico” asalariado en la producción agropecuaria que primordialmente ejecuta labores como peón, labrador o jornalero. En este caso, también se incluye a los trabajadores familiares no remunerados agrícolas. En la tabla 1 se presenta el esquema de las siete macro clases descritas anteriormente y sus respectivas subdivisiones.

Uno de los aspectos metodológicos más importantes al momento de adaptar el esquema a Honduras fue delimitar en términos analíticos y empíricos la distinción formal e informal considerando la heterogeneidad estructural del mercado laboral. Para el caso hondureño la distinción entre formal e informalidad se estableció en cinco empleados por empresa, a diferencia de otros estudios que mantienen el criterio en 10 trabajadores (Solís, Benza, & Boado, 2016; Chávez Molina, Cobos, & Solís, 2022).

Los estudios nacionales sobre la informalidad en el mercado laboral refuerzan esta decisión metodológica, ya que esta es alta y transversal, reflejando una dinámica dual del mercado de trabajo que ha persistido por décadas, en unidades productivas que emplean a menos de cinco trabajadores, predominantemente en micro y pequeñas empresas familiares (Del Cid y Ordoñez, 2002; Consejo Hondureño de la Empresa Privada, 2017; Michel & Walker, 2019).

Se utilizó como fuente de información la base de microdatos de las EPHPM del INE, tomando los años 2019 y 2023 (INE, 2019; INE, 2023); en ambos momentos nuestro universo de análisis

fueron las personas ocupadas con edad mayor a los 15 años. Estas encuestas utilizan un muestreo probabilístico, estratificado y bietápico, permiten la comparabilidad estadística y son representativas a nivel nacional. Aunque diseñadas para fines diferentes a la caracterización de la estructura de clases, su periodicidad, cobertura y confiabilidad las hicieron valiosas para este análisis.

Tabla 1. Esquema EGP de clases sociales y subdivisiones de clase

Esquema EGP de 7 macro clases	Subdivisiones de clase	Adaptación
Clase de servicios	Profesionales, administradores y oficiales de alta graduación directivos de grandes establecimientos	I + II
	Profesionales o autoempleados profesionales	
	Profesionales, administradores y oficiales de baja graduación	
Trabajadores formales de rutina	Empleados de rutina no manuales de alto nivel (administración y comercio)	IIIa + b
	Empleados de rutina no manuales, ventas en grandes empresas (mayores a 5 empleados)	
Pequeños empleadores y trabajadores independientes	Empleadores con menos de 5 ocupados	Iva + b
	Autoempleados en ocupaciones calificadas y semicalificadas	
Trabajadores formales asalariados	Trabajadores manuales, calificados y semicalificados en grandes establecimientos (mayores a 5 empleados)	V + VI
	Trabajadores manuales, no calificados en grandes establecimientos (mayores a 5 empleados)	VIIa
Trabajadores asalariados y por cuenta propia en el sector informal	Asalariados de comercio de pequeños establecimientos (menores a 5 empleados)	IIIa + b
	Autoempleados en ocupaciones no calificados	IVa + b
	Trabajadores manuales, no calificados y semicalificados en pequeños establecimientos (menores a 5 empleados)	V + VI
	Trabajadores manuales, no calificados en pequeños establecimientos (menores a 5 empleados)	VIIa
Clase agrícola independiente	Trabajadores independientes del sector agrícola	IVc
Clase agrícola asalariada	Trabajadores asalariados y familiares no remunerados en actividades agrícolas	VIIb

Fuente: elaboración propia a partir de Solís (2016) y Chávez, Cobos y Solís (2022).

La construcción del esquema de clases se realizó por medio de la operacionalización de las siguientes variables: primero se usó como criterio el código ocupacional del Clasificador Nacional de Ocupaciones de Honduras (CNOH-2018), luego la categoría ocupacional y la ocupación principal. También se empleó la distinción del tamaño del establecimiento en el que trabaja la persona, esto permitió ubicar a las clases sociales en función de su pertenencia a las dimensiones de formalidad e informalidad.

La adaptación del modelo EGP en Honduras continúa una línea de investigación propuesta por otros estudios sobre las clases sociales, que ha demostrado utilidad teórica y empírica para caracterizar la heterogeneidad estructural propia de sociedades desiguales como la hondureña. Los resultados expuestos a continuación para los años 2019 y 2023 ilustran las asimetrías entre las clases sociales y su relación con categorías como sexo, territorio y edad. De esta forma, esta investigación al tiempo que reflejó las características particulares del caso hondureño también contribuye a las discusiones para explicar las desigualdades estructurales de la región.

Resultados

El mercado de trabajo en Honduras

Uno de los rasgos distintivos del mercado laboral hondureño es el elevado nivel de precariedad del empleo, ya que la mayoría de la población ocupada se inserta en puestos de trabajo sin garantías laborales. Para el 2019, el país contaba con una población de 9,151,940, de la cual el 43.8% conformaba la población económicamente activa⁴¹ (4,007,336); el 61.3% eran hombres y 38.7% mujeres. Sin embargo, la participación masculina en el mercado laboral era de 75.1% y, en contraposición, en las mujeres era apenas de 41.4%. La tasa de desempleo abierto era de 5.7% a nivel nacional, no obstante, los principales problemas de empleo se observan a nivel de subempleo visible, categoría que contiene a personas ocupadas, pero trabajan menos de 36 horas a la semana y desean trabajar más (10.6%) y tasa de subempleo invisible, que contempla a las personas que trabajan más de 36 horas, pero tuvieron ingresos inferiores a un salario mínimo (50%) (INE, 2019).

Para 2023, la población del país ascendió a 9,701,532; de esta el 39.5% constituía la fuerza laboral (3,835,319), siendo el 61.8% masculina y 38.2% femenina, y la tasa de participación era de 74.4% y 38.1%, respectivamente. La tasa de desocupación creció en comparación con los años previos a la pandemia y alcanzó la cifra de 7.4%. En aquel año la tasa de subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo era de 10.1% y la tasa de subocupación por insuficiencia de ingresos era de 40% (INE, 2023).

En relación con las ramas de actividad que absorben la mayor cantidad de ocupados destacan la agricultura, el comercio y la industria. Para 2019 la agricultura representaba el 30.5% de los ocupados y para 2023 la cifra descendió a 26.3%. Por su parte, el comercio concentró el 19.2% y el 21.2% en los mismos años. Finalmente, la industria incrementó ligeramente su proporción de 13.5% en 2019 al 14.2% en 2023 (INE, 2019; INE, 2023).

⁴¹ Entre 2019 y 2023 se modificaron las categorías de Población Económicamente Activa por Fuerza de Trabajo, Subempleo Visible por Subocupación por Insuficiencia de Tiempo y Subempleo Invisible por Subocupación por Insuficiencia de Ingresos.

Como en la mayoría de los países latinoamericanos, Honduras presenta altos niveles de informalidad. Por un lado, las personas ocupadas no asalariadas representaban el 51.9% en 2019 y el 41.2% en 2023. Por otro lado, un sector importante del empleo no garantizaba acceso y protección a derechos sociales y laborales, siendo este un elemento transversal en todos los sectores económicos, afectando con mayor profundidad a los trabajadores con niveles educativos bajos, a los jóvenes con edades entre los 15 y 24 años y a las personas mayores de 65 años (Noé et al, 2020: 16). Este patrón de precariedad ha sido constante en las últimas décadas: la inserción laboral no garantiza alcanzar un salario mínimo, gozar de un contrato laboral, cumplimiento de una jornada laboral conforme a ley y la cotización al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) (Pineda Talavera, 2019).

Cambios en la estructura de clases sociales en 2019 y 2023

Si bien el período comprendido entre 2019 y 2023 es limitado para observar modificaciones significativas en la estructura de clases sociales, este momento se caracterizó por el impacto de la pandemia de COVID-19, cuyos efectos fueron el confinamiento, la desaceleración económica y las políticas de contención de los derechos de los trabajadores, generando como resultado la erosión de los ingresos y otros derechos asociados a las clases trabajadoras (Costa Dias, et al, 2020; Rodríguez de la Fuente, 2022).

En Honduras, esta primera aproximación a la estructura de clases sociales deja algunas evidencias sobre cambios relativos en su composición, observables tanto si se considera la estructura de 15 clases, como el modelo de siete macro clases sociales; confirmando efectos estructurales diferenciados.

Al analizar las clases de servicios, un primer elemento a destacar es que, en términos absolutos, no se recuperó la cantidad de ocupados a las condiciones previas a la pandemia. En este sentido, la subclase más castigada, como se observa en la tabla 2, fueron los profesionales de baja graduación. La clase de servicios en términos generales se redujo en 0.7%, ubicándose en un 12.3% en 2023, lo que significó casi 50 mil personas ocupadas menos como se evidencia en la tabla 3. Por las características de la estructura productiva de Honduras se observa que la clase de servicios no es tan amplia, heterogénea y dinámica, al igual que otros países de la región como Ecuador, El Salvador o Nicaragua (Chávez Molina, Cobos y Solís, 2022). En el caso hondureño las ocupaciones en el sector servicios reflejan la paradoja de que dicho sector es uno de los más dinámicos de la economía, pero con poca capacidad de generación de empleo.

En relación con las clases no manuales asalariadas formales de rutina, se evidencia una leve asalariación mediante el incremento de ocupados en ventas en grandes empresas. En efecto, las clases formales tuvieron una mayor inserción en este tipo de actividades comerciales formales. En otras palabras, la clase formalizada solo experimentó un incremento en los empleados de ventas. Estas dinámicas se asocian a las tendencias propias de la recuperación relativa de una economía basada en el consumo y el crecimiento de sectores como el comercio, ya que como argumenta Segovia (2021) las remesas se han convertido en un factor que permite obtener divisas, estabilizar la economía del país y promover el consumo de productos, sin necesidad de invertir en la producción nacional.

También Segovia (2021) enfatiza que la producción continúa siendo tradicional en el sector agrícola, esto se expresa en la fabricación de productos de escaso valor añadido. En este capitalismo de tipo rentista-transnacional el desarrollo industrial y la diversificación económica

ha sido escasa, porque no ha tenido los resultados esperados y tampoco ha sido capaz de generar bienestar económico, por su dependencia estructural de las remesas y el sector maquilador industrial. Por ello, el ingreso económico primordialmente está orientado al consumo y al subsidio para la importación de productos. Estos procesos económicos tienen una incidencia directa en la estructura productiva del país, y, por tanto, en la estructura de clases sociales.

En el caso de la clase denominada pequeños empleadores y trabajadores independientes con niveles medios y altos de calificación, hubo una reducción de 2.2% si se comparan los años 2019 y 2023. Esta situación refleja que los autoempleados calificados y semicalificados experimentaron dificultades para insertarse al mercado laboral después de la pandemia, este mismo patrón se observa en los autoempleados agrícolas. Por tanto, pareciera que en estructuras productivas duales como la latinoamericana y en particular la hondureña, la informalidad es un rasgo estructural (Del Cid, Rafael; Fidel, Ordóñez, 2002; Michel & Walker, 2019), reflejado en los datos que muestran las dificultades que enfrentan especialmente los autoempleados para sostener su inserción en el mercado laboral.

Por su parte, la tendencia hacia la asalarización se observa en una leve modificación de las personas ocupadas en labores manuales a todo nivel de calificación. Los datos muestran que estas clases crecieron en términos absolutos en casi 50 mil ocupados. En este caso, tanto los trabajadores calificados como los no calificados incrementaron su presencia vinculada con la absorción de fuerza de trabajo de operarios, maquinistas y operadores en distintos tipos de industria, especialmente textil, construcción y otro tipo de manufacturas. Las cifras para esta clase (que representó un 14.5 % de los ocupados) son similares a otros países de la región, caracterizados por una industrialización tardía (como Ecuador o El Salvador) y que no poseen estructuras amplias de asalariados en diversos tipos de industrias (Chávez Molina, Cobos, & Solís, 2022).

Al visualizar la composición de los trabajadores asalariados y cuenta propia en el sector informal se evidencian las condiciones heterogéneas propias de estructuras productivas latinoamericanas, las cuales también se manifiestan para el caso de Honduras. Por ejemplo, los trabajadores y cuenta propia en condición de informalidad que trabajan en pequeños establecimientos se incrementaron en 2.7% entre 2019 y 2023.

Más significativo resulta el cambio dentro de las subclases, como se muestra en la tabla 2, donde el incremento se concentra en los trabajadores manuales de todo nivel de calificación que trabajan en situación de informalidad. Este incremento contrasta con la reducción en los trabajadores cuenta propia en ocupaciones calificadas y semicalificadas, en este caso, el rasgo característico de esta clase es que sus actividades están asociadas a unidades productivas a pequeña escala, menores a cinco empleados, asociado con el bajo acceso a capital, productividad limitada y pocas garantías a derechos laborales. Por tanto, la informalidad es una dimensión relevante cuando se observa los límites en el acceso a derechos sociales con respecto a la clase social (Chávez Molina, Cobos, & Solís, 2022).

Las clases asalariadas y no asalariadas informalizadas en Honduras representan más de un 20% de los ocupados, lo que se asemeja a otras estimaciones realizadas del peso de este sector, que en Latinoamérica se ubica aproximadamente en 24% (Michel & Walker, 2019). **Tabla 2. Estructura de 15 subdivisiones de clases sociales en Honduras, población ocupada mayor de 15 años, 2019 y 2023**

Esquema EGP de 7 macro clases	Subdivisiones de clase	2019		2023	
		Absoluto	%	Absoluto	%
Clase de servicios	Profesionales, administradores y oficiales de alta graduación directivos de grandes establecimientos	65,624	1.8	70,104	2
	Profesionales o autoempleados profesionales	89,881	2.5	80,275	2.3
	Profesionales, administradores y oficiales de baja graduación	315,931	8.7	276,111	8
Trabajadores formales de rutina	Empleados de rutina no manuales de alto nivel (administración y comercio)	103,262	2.8	112,988	3.3
	Empleados de rutina no manuales, ventas en grandes empresas (mayores a 5 empleados)	90,165	2.5	119,413	3.4
Pequeños empleadores y trabajadores independientes	Empleadores con menos de 5 ocupados	99,529	2.7	107,138	3.1
	Autoempleados en ocupaciones calificadas y semicalificadas	745,602	20.5	633,392	18.3
Trabajadores formales asalariados	Trabajadores manuales, calificados y semicalificados en grandes establecimientos (mayores a 5 empleados)	340,457	9.4	366,028	10.6
	Trabajadores manuales, no calificados en grandes establecimientos (mayores a 5 empleados)	114,514	3.1	136,093	3.9
Trabajadores asalariados y por cuenta propia en el sector informal	Asalariados de comercio de pequeños establecimientos (menores a 5 empleados)	151,344	4.2	155,343	4.5
	Autoempleados en ocupaciones no calificados	118,265	4.8	241,229	7
	Trabajadores manuales, no calificados y semicalificados en pequeños establecimientos (menores a 5 empleados)	176,019	4.8	241,229	7
	Trabajadores manuales, no calificados en pequeños establecimientos (menores a 5 empleados)	215,573	5.9	249,876	7.2
Clase agrícola independiente	Trabajadores independientes del sector agrícola	512,083	14.0	318,746	9.2
Clase agrícola asalariada	Trabajadores asalariados y familiares no remunerados en actividades agrícolas	500,668	13.8	522,311	15.1
TOTAL		3,638,917	100	3,467,289	100

Fuente: elaboración propia con datos del INE (2019 y 2023).

En otras palabras, independientemente de su relación con el salario un importante segmento de ocupados se inserta en unidades de baja productividad.

Esta creciente informalización de los trabajadores asalariados está relacionada con los efectos de la pandemia que han sido notorios en otros países como Argentina, en el cual las clases sociales más castigadas han sido las que se ubican en este sector ya que:

Las chances relativas de haber sufrido despidos o renuncias forzada es casi el triple que, en los obreros formales, y cinco veces superiores que en los empleados administrativos y de servicios sociales, y también cinco veces superiores que en las clases medias asalariadas (directivos, profesionales, supervisores y técnicos) (Boniolo, Dalle & Elbert, 2022: 47).

En el caso de Honduras, frente a una alta informalidad en las condiciones tanto de autoempleo como asalariados resulta relevante indagar más las condiciones en las cuales la pandemia tuvo un efecto desigual entre clases sociales. Esto merece especial atención al observar las dinámicas propias de las clases agrícolas dadas sus particularidades, así como el importante peso absoluto y relativo de estas clases en la estructura social hondureña. En términos generales, antes de la pandemia prácticamente tres de cada 10 trabajadores se ubican en actividades agrícolas con un significativo peso de las clases de trabajador independiente (es decir el campesinado) así como trabajadores asalariados y familiares no remunerados. Es importante recordar que en Honduras el peso del trabajo familiar no remunerado (particularmente mujeres, niñas y niños) es una de las bases de la composición del trabajo en actividades agrícolas (Del Cid, 2012).

En 2023 las clases agrícolas representaban un 24.3% del total de los ocupados, lo que significó una reducción de casi 5% con respecto a 2019. Tal descenso se concentró en la reducción de los trabajadores independientes agrícolas, que eran más de medio millón en 2019, pero en 2023 solo se observaron 318 mil ocupados. En otras palabras, asistimos a un proceso de desagrarización, observado particularmente en la reducción de estos trabajadores independientes ligados esencialmente a la producción de granos básicos en las zonas rurales del país. Por su parte, los trabajadores agrícolas asalariados obtuvieron un leve incremento absoluto y relativo en estos años.

Esta reducción significativa de los trabajadores independientes abre una de las principales vías de investigación a futuro sobre las condiciones que explican por qué ocurrió este descenso. Preliminarmente, se puede esbozar que los efectos de la pandemia se han observado más claramente en la dificultad de las ocupaciones no asalariadas en recuperarse de la situación postpandemia. Por otro lado, en Honduras es ampliamente conocido que las actividades agrícolas ubicadas en el sector rural son las que menos ingresos perciben, concentrándose en lo que se llama “el núcleo duro de la pobreza”, por lo cual las condiciones de la pandemia pudieron haber empeorado las condiciones de estos ocupados.

Finalmente, las clases agrícolas, especialmente los trabajadores independientes, son segmentos poblacionales envejecidos. Por ello, otro aspecto a estudiar es la posible transición de algunas personas ocupadas en esta clase hacia una condición de inactividad. Vinculado a lo anterior, otra línea de trabajo podría ser analizar más a fondo la relación entre la reducción de estos trabajadores y las dinámicas migratorias tanto internas como internacionales, especialmente de los jóvenes rurales quienes tienen ingresos insuficientes para subsistir mediante el desempeño de actividades agrícolas.

Tabla 3. Estructura de siete macro clases de clases sociales en Honduras, población ocupada mayor de 15 años, 2019 y 2023

Esquema EGP de 7 macro clases	2019		2023	
	Absoluto	%	Absoluto	%
Clase de servicios	471,435	13.0	426,490	12.3
Trabajadores formales de rutina	193,427	5.3	232,401	6.7
Pequeños empleadores y trabajadores independientes	845,130	23.2	740,530	21.4
Trabajadores formales asalariados	454,971	12.5	502,121	14.5
Trabajadores asalariados y por cuenta propia en el sector informal	661,201	18.2	724,690	20.9
Clase agrícola independiente	512,083	14.1	318,746	9.2
Clase agrícola asalariada	500,668	13.8	522,311	15.1
Total	3,638,917	100.0	3,467,289	100.0

Fuente: elaboración propia con datos del INE (2019 y 2023).

Clase social según sexo

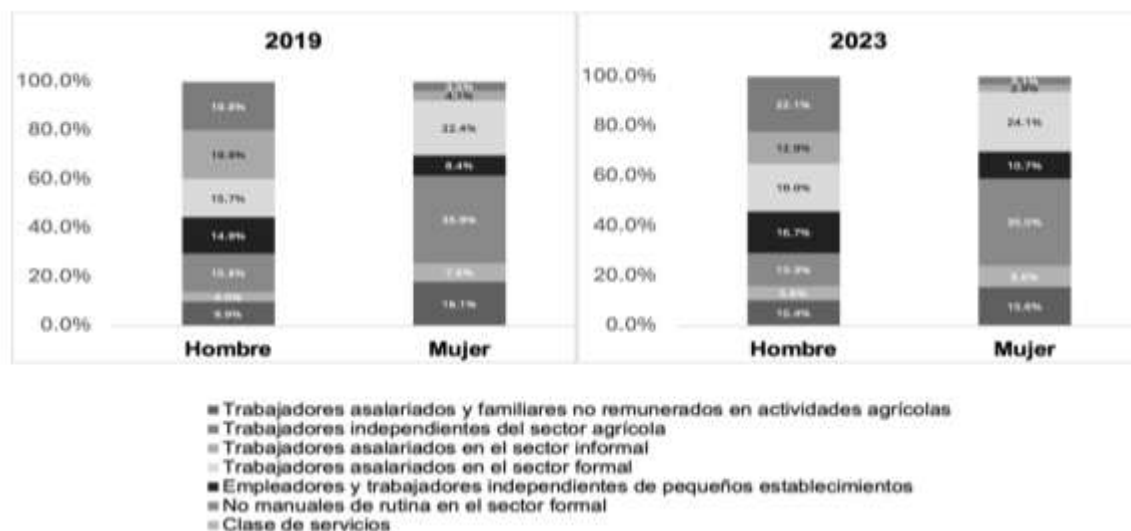
Honduras posee una de las tasas de participación laboral femenina más bajas de la región, esto resulta significativo para matizar el análisis por sexo de la estructura de clases (Michel & Walker, 2019). En 2019, la clase de servicios mostraba mayor presencia de mujeres (18.1%) que de varones (9.9%). En 2023 las mujeres experimentaron un descenso ubicándose en un 15.6%, mientras los hombres representaron un 10.4% sobre el total de cada sexo. Los datos muestran que las mujeres ocupadas en el sector servicios tuvieron un descenso importante de más de 40 mil personas. En consecuencia, para el 2023 había más hombres incorporados en esta clase social.

Esto muestra la importancia de analizar la inclusión deficitaria de las mujeres en el mercado de trabajo y, por ende, las dinámicas asociadas a su pertenencia de clase. Al analizar las tres subclases del sector servicios queda evidenciado que las mujeres se concentran en la clase de profesionales administrativas y oficiales de baja graduación, que fue la subclase que más se redujo. En otras palabras, las mujeres se incluyen en sectores más dinámicos, pero su acceso a puestos gerenciales o profesionales autoempleado es más limitado. Además, su inclusión deficitaria se observa de manera más contundente en la medida en que fueron las más afectadas según los datos del periodo postpandemia.

La estructura de clases analizada mediante el sexo muestra que los hombres tienden a distribuirse de manera más homogénea entre las distintas macro clases, especialmente en las

clases asalariadas formales e informales; en ambas clases agrícolas y en el sector servicios, especialmente en puestos directivos y de autoempleados. En cambio, las mujeres tienen una presencia más segmentada hacia cierto tipo de clases, ya que se concentran en las clases de servicios, empleadores y trabajadores independientes, así como asalariadas informales. Estas tres macro clases agrupan siete de cada 10 mujeres ocupadas, expresando una inclusión deficitaria de las mujeres en actividades productivas con escasa regulación laboral.

Gráfico 1. Clase social según sexo, 2019 y 2023



Fuente: elaboración propia con datos del INE (2019 y 2023)

Cuando se analiza la macro clase de los pequeños empleadores y trabajadores independientes se observa con mayor claridad el proceso de feminización de este tipo de ocupaciones. Las mujeres se concentran en ocupaciones caracterizadas por actividades como ventas ambulantes, pequeños comercios, unidades productivas de servicios a pequeña escala. En 2019 esta macroclase representaba en los hombres un 15.8% mientras en las mujeres era un 35.9% sobre el total de cada sexo.

En cambio, al observar las dos macro clases asalariadas se evidencia una mayor masculinización, ya que se presenta una mayor participación de hombres como operarios, maquinistas y obreros en industrias de procesamiento, ensamblajes o maquilas. En 2019 representaron un 14.9% y las mujeres un 8.4%, sobre el total de cada sexo. En 2023, ambos sexos crecieron en términos absolutos modificando su peso relativo, ya que los hombres representaban un 16.7% y las mujeres un 10.7% sobre cada sexo. En consecuencia, el crecimiento relativo de esta clase refleja la tendencia hacia la asalariación y formalización en ambos sexos.

En la clase asalariada informal la feminización en términos relativos dentro de las mujeres es una característica notoria. Al analizar la composición al interior de cada sexo el peso relativo de las mujeres es significativo dentro de esta clase. En 2019 los hombres representaban un 15.7% mientras las mujeres concentraban un 22.4% dentro de cada sexo. Para 2023 esta situación se mantuvo similar para las mujeres con 24.1%, mientras en los hombres se experimentó un incremento ubicándose en un 19%. En otras palabras, el peso relativo de las

mujeres en esta macro clase es importante, aunque se observa un creciente proceso de masculinización en las condiciones de asalariados informales.

Las clases agrícolas muestran un proceso de concentración de la presencia masculina. Sin embargo, queda como tarea pendiente analizar las condiciones de subregistro laboral y de las actividades económicas de las mujeres en estas ocupaciones, especialmente porque no son tomadas en cuenta o son registradas como familiares no remunerados.

Al analizar la composición interna de las clases por sexo queda evidenciado el peso de la masculinización de las clases agrícolas, ya que prácticamente un 40% de los ocupados hombres pertenecían a estas clases en 2019, mientras en 2023 la proporción descendió en 35%. En cambio, las mujeres ocupadas en las clases agrícolas representaban apenas el 7.6% en 2019 y 6.0% en 2023.

Los cambios en la composición de estas macroclases muestra que la clase más castigada en estos años fueron los trabajadores independientes del sector agrícola (el campesinado). Entre 2019 y 2023 estos trabajadores independientes hombres se redujeron en más de 170 mil personas y casi 20 mil en las mujeres. Como se ha indicado, estos datos muestran vías de trabajo para analizar y comprender más a fondo las dinámicas del proceso de desagrarización, aunque queda por investigar si este proceso está ligado a dinámicas como la migración o la proletarización limitada en el campo.

Clase social según territorio

El territorio también constituye un mecanismo de segmentación de las clases sociales en Honduras. Los datos indican algunas dinámicas importantes. En primer lugar, un peso relativamente alto de la clase de servicios en todas las ciudades en ambos años. En segundo lugar, una reducción del peso relativo de la clase de empleadores y trabajadores independientes de pequeños establecimientos en las zonas urbanas. En tercer lugar, el aumento del peso relativo de los trabajadores asalariados formales en las ciudades y, en cuarto lugar, la concentración de aproximadamente la mitad de la población rural en las clases agrícolas.

En 2019 el Distrito Central (capital del país) se muestra que un 25.5% de la población ocupada se concentraba en la clase de servicios y en San Pedro Sula (centro urbano industrial) el 21.7%. Esta cifra era menor en las ciudades medianas (18%) y las ciudades pequeñas (15.7%). En las áreas rurales el 5.2% de la población se ubicaba en esta clase social. Para el 2023 no se observaron variaciones significativas, salvo en las ciudades medianas donde se constató una reducción de aproximadamente 40 mil personas en la clase de servicios.

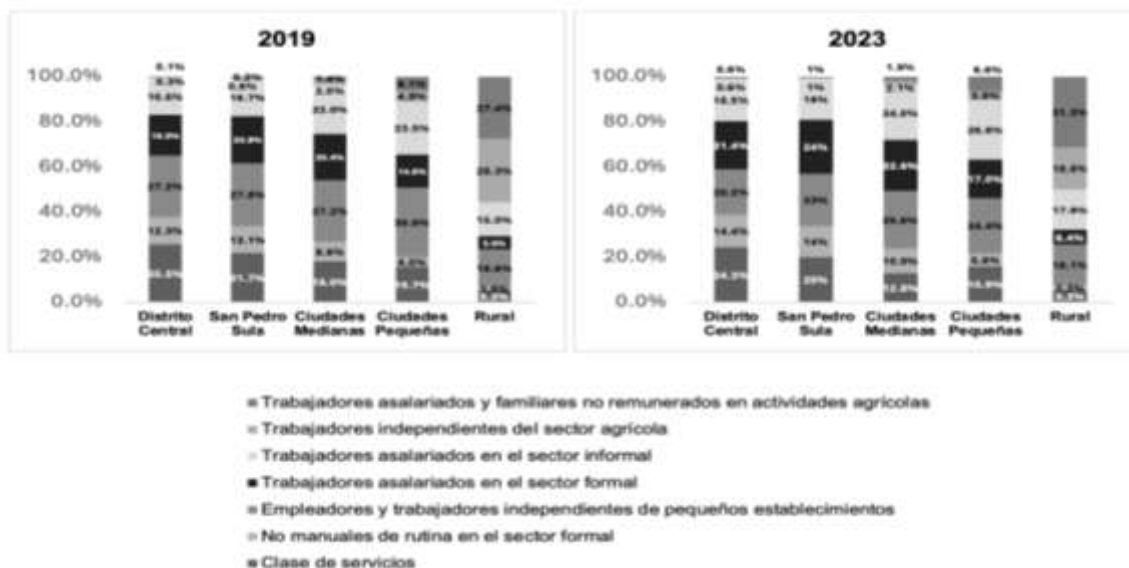
En el territorio urbano se observó un cambio importante a nivel de la clase de empleadores y trabajadores independientes de pequeños establecimientos. En el Distrito Central esta clase representaba el 27.2% en 2019 y para el 2023 esta cifra había descendido hasta 20.2%. En las ciudades pequeñas la reducción también fue notable, ya que en 2019 dicha clase comprendía el 30.6% de los ocupados y para el 2023 el 24.4%. En San Pedro Sula y en las ciudades medianas se observó una reducción menor; en el primer caso la presencia de la población ocupada en esta clase pasó de 27.8% en 2019 a 23% en 2023, en el segundo caso la variación fue desde 27.2% a 25.6% en los mismos años de estudio.

La clase de trabajadores asalariados en el sector formal concentraba un porcentaje alto de la población ocupada en todos los territorios geográficos analizados. De tal forma, en el 2019 representaba 18% de la población del Distrito Central y para el 2023 su peso relativo creció

hasta el 21.4%. Una tendencia similar se observó en las demás ciudades: en San Pedro Sula en 2023 fue de un 24%, en las ciudades medianas las cifras fueron de 22.6 % y, finalmente, en las ciudades pequeñas se ubicó en un 17%.

Al observar el territorio rural se encontró que en 2019 el 55.7% de los ocupados se ubicaban en las clases agrícolas, mientras que para el 2023 esta cifra era de 50.1%. En contraste, en las ciudades pequeñas esta clase representó aproximadamente el 10 % de la población ocupada en ambos años y en las ciudades medianas aproximadamente el 3%. En el Distrito Central las clases agrícolas comprendían el 0.4% en 2019 y alcanzaron el 1.2% en 2023; para San Pedro Sula los valores cambiaron desde 0.8% hasta el 2% en los mismos años. En estas zonas la reducción relativa de la población ocupada en clases agrícolas estuvo acompañada por un incremento del peso de las clases de empleadores y trabajadores independientes de pequeños establecimientos y de trabajadores asalariados en el sector informal. En el primer caso se constató el paso del 16.6% en 2019 hasta 18.1% en 2023. Para la clase de trabajadores asalariados en el sector informal el cambio fue desde 15% en 2019 hasta 18.8% en 2023.

Gráfico 2. Clase social según territorio, 2019 y 2023



Fuente: elaboración propia con datos del INE (2019 y 2023)

Clase social según edad

El análisis de clase social caracterizada según rangos etarios expone la distribución diferenciada de los ocupados. Para 2019 los jóvenes ocupados de 15 a 24 años estaban ubicados, predominante, en tres macro clases asalariadas: formales con un 13.5%, informales con 28.8% y agrícolas 30.2%. Estas clases concentraban a siete de cada 10 jóvenes ocupados, patrón similar en 2023 con algunas modificaciones, ya que el peso relativo de los formales pasó al 19.3%, los informales a 32% y los agrícolas descendieron a 22.2%.

Las personas comprendidas en los grupos etarios de 25 a 34 y 35 a 44 años presentan características similares. Tienen un peso relativo importante en el sector servicios, pero principalmente se concentran en tres macro clases: empleadores y trabajadores independientes en pequeños establecimientos; asalariados formales e informales. En estas tres clases, tanto en

2019 como 2023, se encuentran más de la mitad de los ocupados comprendidos en estas edades. Esto obedece a que las personas están en un periodo de mayores adquisiciones de habilidades, mayor experiencia laboral o acceso a trabajos más estables.

Los datos indican que a mayor rango etario existe una mayor concentración en ciertos tipos de clase social, esto es evidente desde los 45 años en adelante. A partir de esta edad, las personas ocupadas se concentran predominante en tres macro clases: empleadores y trabajadores independientes en pequeños establecimientos; asalariados informales y trabajadores independientes del sector agrícola. En ambos años representan más de la mitad de los ocupados. En especial, a mayor envejecimiento más presencia como pequeños empleadores o trabajadores independientes agrícolas, lo que refleja la pertenencia a clases autoempleadas con condiciones de precariedad y limitado acceso a ciertos derechos sociales. En cambio, el peso relativo de las personas en situación de adultez o tercera edad va reduciéndose en las clases de servicios, así como en los asalariados agrícolas.

Comentarios finales

Este estudio permitió constatar que entre 2019 y 2023 la estructura de clases en Honduras experimentó ciertas modificaciones. Uno de los cambios más destacados fue la contracción de las clases de servicios y el aumento en la informalidad laboral en distintas clases, lo que refleja una erosión de las condiciones laborales y una mayor vulnerabilidad económica. En el marco de estos cambios, el sector agrícola mostró una tendencia clara hacia la desagrarización, evidenciada por la reducción significativa de trabajadores independientes en el campo. La disminución en términos absolutos y relativos de esta clase evidencia un debilitamiento del campesinado tradicional, lo que podría estar vinculado a dinámicas migratorias o la transición hacia la inactividad de poblaciones rurales envejecidas. Sin embargo, se observó también un ligero incremento en los trabajadores agrícolas asalariados, sugiriendo una transformación hacia formas de trabajo más precarias y dependientes.

Por su parte, la participación de las mujeres en la estructura de clases mostró patrones de segmentación y precarización laboral. Aunque las mujeres tenían una presencia notable en el sector servicios, se observó un aumento en su vulnerabilidad como resultado de la reducción de su participación. Además, las mujeres están concentradas en las clases asociadas a una mayor condición de informalidad y precariedad.

La comparación entre las dinámicas urbanas y rurales revela una creciente divergencia en la estructura de clases según el territorio. En las áreas urbanas, en el período de estudio se observó una expansión relativa de las clases asalariadas formales, especialmente en las grandes ciudades. Esta tendencia contrasta con las áreas rurales, donde persiste una alta concentración en clases agrícolas, aunque con una diversificación en la presencia de clases informales, aunque con una reducción significativa en la participación de trabajadores independientes. Este proceso de concentración y precarización en las zonas rurales sugiere un agravamiento de las desigualdades territoriales.

Finalmente, conviene destacar la dinámica de las clases sociales en relación con la juventud del país. En efecto, la inserción laboral de los jóvenes en Honduras mostró una clara tendencia hacia la informalidad y una disminución en su participación en el sector agrícola. Mientras que la proporción de jóvenes en empleos formales aumentó ligeramente, su participación en trabajos agrícolas se redujo de manera drástica, lo que refleja un alejamiento de las actividades rurales y un proceso de movilización hacia empleos urbanos, aunque muchas veces en condición de precariedad. En contraste, la población adulta mantuvo una mayor presencia en clases asalariadas formales e informales, pero con una distribución más equilibrada. Se constató que a medida que la edad aumenta hay una mayor concentración de adultos en ocupaciones autoempleadas y agrícolas. Estos patrones indican que los jóvenes enfrentan mayores desafíos para acceder a empleos estables y formales, lo que podría tener implicaciones importantes para su movilidad social y estabilidad económica a largo plazo.

En conclusión, este estudio ofrece una caracterización actualizada de la estructura de clases sociales en Honduras para 2019 y 2023, que confirma la relevancia del modelo EGP como herramienta teórico-metodológica apropiada para avanzar en el análisis de la heterogeneidad estructural de la región. Al adaptar este modelo a las particularidades del caso hondureño, se ofrece una perspectiva renovada que conecta dinámicas regionales, la informalidad, la precarización laboral y la persistente dependencia estructural de actividades económicas tradicionales.

Bibliografía

Briceño, R. (2022). *Transformaciones estructurales de relaciones de clases sociales. El caso de la formación social hondureña en contexto de la globalización capitalista e instauración del Estado neoliberal, 1990-2018*. Tegucigalpa: Tesis para optar al grado de Maestría en Sociología. Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Boado, M. (2023). Cincuenta años de movilidad social intergeneracional de clase en Buenos Aires y Montevideo, 1960-2012. *Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales*, 62(237), 84–107. Recuperado de: <https://revistas.ides.org.ar/desarrollo-economico/article/view/494>

Boniolo, P., Dalle, P., & Elbert, R. (2022). El impacto desigual de la pandemia en las condiciones de trabajo: una perspectiva de clases sociales. *Revista de la Carrera de Sociología Entramados y Perspectivas*, 33-71.

Chávez Molina, E., Cobos, D., & Solís, P. (2022). Estructura de clases, heterogeneidad del mercado laboral y condiciones de vida en América Latina. *Realidad Económica*, 65-102.

Chávez Molina, E., & Rodríguez de la Fuente, J. (2021). Clases sociales y desigualdad en la Argentina contemporánea (2011-2019). *Realidad Económica*, 51(339), 9–36. Recuperado de: <https://ojs.iade.org.ar/index.php/re/article/view/147>

Costa Dias, M., Joye, R., Postel-Vinay, F., & Xu, X. (2020). The Challenges for Labour Market Policy during the COVID-19 Pandemic. *Fiscal Studies*, 41(2), 371-382. Obtenido de <https://doi.org/10.1111/1475-5890.12233>

Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP). (2017). Encuesta empresarial. Tegucigalpa: COHEP.

Del Cid, R. (2012). Caso Honduras. En FAO, Políticas de mercado de trabajo y pobreza rural en América Latina (págs. 149-203). Roma: FAO.

Del Cid, R. (2019). Aproximación al estudio de las clases sociales en el agro hondureño. En R. Romero, Antología del pensamiento hondureño contemporáneo (págs. 211-231). Buenos Aires: CLACSO.

Del Cid, R.; Ordóñez, F. (2002). Trabajo decente y pobreza en Honduras. Hacia un pacto social para un crecimiento económico con equidad y el combate de la pobreza extrema. Tegucigalpa: OIT.

Hernández, A. (2007). Del reformismo al ajuste estructural. Tegucigalpa, Honduras: Editorial Guaymuras.

INE. (2019). Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EPHPM). Tegucigalpa, Honduras: Instituto Nacional de Estadística.

INE. (2023). Encuesta Permanente de Hogares y Propósitos Múltiples (EPHPM). Tegucigalpa, Honduras: Instituto Nacional de Estadística.

Michel, V., & Walker, I. (2019). Honduras: Diagnóstico del trabajo. Washington: Banco Mundial.

Llopis Hernández, J. O. (2016). El empleo precario asalariado en Honduras. Los impactos diferenciales por edad y sexo, 2007-2013. Buenos Aires: CLACSO

Noé, H., Delgado, R., & Ely, N. (2020). Covid-19 y el mercado laboral en Honduras. Un estudio exploratorio. Tegucigalpa, Honduras: Universidad Tecnológica Centroamericana.

Pérez Sáinz, J. P. (2004). La estructura social ante la globalización: procesos de reordenamiento social en Centroamérica durante la década de los 90. San José, Costa Rica: FLACSO - Costa Rica.

Pérez Sáinz, J. P., & Mora Salas, M. (2006). Exclusión social, desigualdades y excedente laboral: reflexiones analíticas sobre América Latina. *Revista Mexicana de Sociología*, 431 - 465.

- (2009). Excedente económico y persistencia de las desigualdades en América Latina. *Revista Mexicana de Sociología*, 411 - 451.

Pineda Talavera, M. (2018). La transformación de la estructura de clases sociales en Honduras, durante el actual modelo de acumulación (2006, 2010 y 2013). San José, Costa Rica: Tesis para optar al grado de Maestría en Sociología. Universidad de Costa Rica.

- (2019). Honduras: precariedad laboral en la clase asalariada durante el modelo de acumulación neoliberal. *Íconos*, 101-123.

Rodríguez de la Fuente, J. J. (2022). Evolución reciente de las clases sociales y la desigualdad en un contexto de pandemia. *Revista de la Carrera de Sociología Entramados y Perspectivas*, 12(12), 72-106. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9135436>

Segovia, A. (2021). El gran fracaso: 150 años de capitalismo ineficiente, concentrador y excluyente en Centroamérica. Guatemala: F&G Editores.

Solís, P., Benza, G., & Boado, M. (2016). Movilidad intergeneracional de clase: una aproximación sociológica al estudio de la movilidad social. En P. Solís, & M. Boado, Y sin embargo se mueve... estratificación social y movilidad intergeneracional de clase en América Latina (págs. 1-31). CDMX: COLMEX.

Solís, P. (2016). Aspectos metodológicos en el análisis de la movilidad social. En P. Solís, & M. Boado, Y sin embargo se mueve... estratificación social y movilidad intergeneracional de clase en América Latina (págs. 31-74). CDMX: COLMEX.

Wright, E. O. (2009). Comprender la clase. *New Left Review*, 98-112.

Semblanzas

José Octavio Llopis Hernández

Licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Maestría en Sociología por FLACSO-Ecuador. Docente del Departamento de Sociología (UNAH). Miembro del Grupo de Trabajo “Desigualdades comparadas: clase social, género y

etnia” (CLACSO). Sus actuales líneas de investigación son: sociología económica, mercados laborales y desigualdad social. Correos electrónicos: josellh89@gmail.com, jose.llopis@unah.edu.hn

David Pineda Talavera

Licenciado y Máster en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Docente del Departamento de Sociología (UNAH). Miembro del Grupo de Trabajo “Desigualdades comparadas: clase social, género y etnia” (CLACSO). Sus líneas de investigación son: jóvenes, mercado laboral, educación y clases sociales. Correo electrónico: dpineda@unah.edu.hn y david.pineda.talavera@gmail.com

Kevin Alberto Cruz

Licenciado y Máster en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Docente del Departamento de Sociología de la UNAH. Sus líneas de investigación están relacionadas con infancias y juventudes; migración y representaciones sociales. Correos electrónicos: cruz.kevin@unah.edu.hn; albert.nivek@gmail.com

Mario Enrique Pineda Talavera

Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Máster en Sociología por la Universidad de Costa Rica. Docente del Departamento de Economía de la UNAH y jefe del Departamento de Estudios Fiscales y Económicos del Servicio de Administración de Rentas (SAR). Sus líneas de investigación son: mercado laboral, clases sociales y desarrollo económico. Correos electrónicos: enrique.pineda@unah.edu.hn; mariopt9227@gmail.com

Disciplina académica y subdisciplinas: Sociología: Sociología de las clases sociales – Economía: Economía Política

Tipo, método o enfoque de estudio: Cuantitativo, transversal.



ESTRUCTURA SOCIAL Y OCUPACIONAL EN AGLOMERADOS URBANOS DE ENTRE RÍOS: DESCRIPCIÓN A PARTIR DE ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES

Matías Leonel Romero

matias.romero@uner.edu.ar

Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Instituto de Estudios Sociales (INES). Paraná, Entre Ríos.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2292-3952>

Resumen

El presente artículo tiene como objetivo estudiar la estructura social y ocupacional urbana de la provincia de Entre Ríos, utilizando como fuente de datos la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y Encuesta Permanente de Hogares Total Urbana (EPH-TU), entre los años 2003 y 2022. Se estudian los aglomerados de Gran Paraná y Concordia (EPH) y Resto de Entre Ríos (EPH-TU).

Se considera el estudio de clases como una herramienta que puede darnos un panorama de los fenómenos sociales y económicos de determinada sociedad, y por ello se puede ligar la estructura ocupacional y estructura social, tomando como punto de partida el entramado productivo de la provincia. Para la reconstrucción de la estructura social se utiliza la Condición Socio-Ocupacional desarrollada por Torrado (1992). Uno de los principales interrogantes acerca de este espacio geográfico es si existe una estructura social y ocupacional homogénea, o no, y respondiendo este interrogante se podrá estudiar la provincia como una unidad social y económica.

Los resultados obtenidos indican que existen diversos entramados y encadenamientos productivos al interior de la provincia, lo que genera que haya una heterogeneidad en términos de estructura laboral y social, reflejando estas heterogeneidades presentes en las relaciones de producción en las relaciones sociales de clases.

Palabras clave: Mercado de trabajo; Estratificación Social; Estudios Subnacionales.

SOCIAL AND OCCUPATIONAL STRUCTURE IN URBAN AGGLOMERATIONS OF ENTRE RÍOS: DESCRIPTION BASED ON THE PERMANENT HOUSEHOLD SURVEY.

Abstract

The objective of this article is to study the urban social and occupational structure of the province of Entre Ríos, using as a data source the Permanent Household Survey (PHS) and the Total Urban Permanent Household Survey (TU-PHS), between the years 2003 and 2022. The agglomerations of Gran Paraná and Concordia (PHS) and the Rest of Entre Ríos (PHS-TU) are studied.

The study of classes is considered as a tool that can give us an overview of the social and economic phenomena of a given society, and therefore the occupational structure and social structure can be linked, taking the productive framework of the province as a starting point. To reconstruct the social structure, the Socio-Occupational Condition developed by Torrado (1992) is used. One of the main questions about this geographical space is whether there is a homogeneous social and occupational structure or not, and by answering this question it will be possible to study the province as a social and economic unit.

The results obtained indicate that there are various productive networks and chains within the province, which generates heterogeneity in terms of labor and social structure, reflecting these heterogeneities present in production relations in social class relations.

Key words: Labor market; Social Stratification; Subnational Studies.

ESTRUTURA SOCIAL E OCUPACIONAL EM AGLOMERADOS URBANOS DE ENTRE RÍOS: DESCRIÇÃO A PARTIR DA ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES.

Resumo

O presente artigo tem como objetivo estudar a estrutura social e ocupacional urbana da província de Entre Ríos, utilizando como fonte de dados a Pesquisa Permanente de Domicílios (PDD) e a Permanente de Domicílios (PDD-TU), entre os anos de 2003 e 2022. São estudados os aglomerados de Gran Paraná e Concordia (EPH) e o Resto de Entre Ríos (EPH-TU).

Considera-se o estudo de classes como uma ferramenta que pode oferecer uma visão dos fenômenos sociais e econômicos de determinada sociedade. Por isso, é possível relacionar a estrutura ocupacional com a estrutura social, tendo como ponto de partida a rede produtiva da província. Para a reconstrução da estrutura social, utiliza-se a Condição Sócio-Ocupacional desenvolvida por Torrado (1992). Uma das principais questões sobre este espaço geográfico é se existe ou não uma estrutura social e ocupacional homogênea. Ao responder a essa questão, será possível estudar a província como uma unidade social e econômica.

Os resultados obtidos indicam que existem diversas redes e encadeamentos produtivos no interior da província, o que gera uma heterogeneidade em termos de estrutura laboral e social, refletindo essas heterogeneidades presentes nas relações de produção nas relações sociais de classes.

Palavras-chave: Mercado de trabalho; Estratificação Social; Estudos Subnacionais.

Introducción

En la Sociología económica, la clase social es una categoría que puede ser utilizada en términos de variable independiente: con la clase social se pueden explicar diversos fenómenos sociales

y encontrar un camino causal entre este último y la clase social de las personas o grupos (Wright, 2005).

Para operacionalizar el concepto de clase social empíricamente, algunas perspectivas teóricas utilizan la ocupación como fuente primaria de identificación de grupos, jerarquías y categorías ocupacionales. Es por ello que el objetivo de este trabajo es tomar la ocupación como base de dicha categoría y preguntarnos ¿Existe en Entre Ríos una homogeneidad en el mundo del trabajo que nos permita hablar luego de una clase social entrerriana? De ser posible ¿Alcanzan los datos disponibles para ello?

Siguiendo con los interrogantes anteriores, dado que la estructura laboral de la provincia en su conjunto es un área de relativa vacancia en los estudios de mercado laboral, podremos aquí preguntarnos si la provincia contiene en su interior a una única estructura laboral, parecida a los que es el “trabajo entrerriano” o “trabajadores entrerrianos”, haciendo uso de una referencia literaria utilizada por Mario Wainfeld, reflexionando acerca de los cambios del capitalismo actual y sus efectos en la clase y el movimiento obrero (Abal Medina et al., 2017, p. 14). El tema de este artículo no intenta describir al movimiento obrero ni a la clase obrera en sí, pero si pensar la estructura ocupacional puede ser pensada en un contexto de unidad u homogeneidad entre el Total Argentino y Entre Ríos.

En nuestro caso, la provincia de Entre Ríos nos plantea el desafío de la escasez de datos, la diversidad en términos geográficos y de estructura económica para poder hablar de “una sola clase de hombre (o mujer)”. Analizando la estructura ocupacional podríamos dar algunas pistas para poder examinar si esta idea de homogeneidad se ve plasmada en la realidad. En este sentido, retomamos el trabajo de Torrado en el cual se precisan aportes metodológicos para el estudio de clases sociales y se define a dicha estructura de clases como un conjunto de posiciones que tienen un correlato en las relaciones sociales de producción y que están implicados en estos procesos en una sociedad histórica y geográficamente situada (Torrado, 1978).

Retomando la idea de los autores clásicos de la sociología de la clase como un “predictor” de comportamientos y actitudes, dialogaremos con las mismas para poder estudiar el fenómeno en el contexto provincial urbano de Entre Ríos.

En el primer apartado de este trabajo presentaremos algunos de los principales debates teóricos sobre el análisis de clases sociales y sobre las formas de medición a partir del mercado de trabajo. Luego de recopilar algunos antecedentes de la estructura ocupacional, examinando evolución en el tiempo, cobertura geográfica y temporalidad de los estudios realizados, se describe brevemente la estructura productiva en Entre Ríos. La medición empírica de la estructura ocupacional se realizará para analizar los principales cambios en la misma durante las primeras dos décadas del siglo XXI. Para cumplir este objetivo se cuenta con las bases de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y Encuesta Permanente de Hogares Total Urbano (EPH-TU) de INDEC y se utilizan variables referentes al tamaño de las empresas, categoría ocupacional de los trabajadores, calificaciones, y características de los puestos de trabajo. Finalmente, intentaremos responder a la pregunta que da inicio a este trabajo para poder analizar a más largo plazo la estructura y los cambios sociales de la provincia de Entre Ríos.

Marco teórico y Antecedentes

¿Qué es la clase social y cómo la medimos?

Los estudios de movilidad social intergeneracional y de estructuras de clase tienen un desarrollo amplio en la sociología de los últimos 50 años aproximadamente, con su anclaje latinoamericano y argentino en este mismo periodo. En primer lugar, trabajos pioneros de Germani, Jorrat y Beccaria se instituyen como los primeros análisis de las estructuras sociales y la movilidad social, publicándose entre las décadas del '50 y '80, y un renovado interés por la temática entre el inicio del nuevo milenio y la actualidad, pudiendo citar numerosos trabajos de Jorrat, Torrado y Dalle; en ambos periodos de escritura se destaca la presencia de movilidad social ascendente y de clases medias amplias, con un crecimiento de clases populares en periodos económicos recesivos (Romero, 2022; Solís y Boado, 2016). Sin embargo, existe una vacancia de trabajos de este tema para contextos subnacionales, pudiendo mencionar el trabajo de Benza y Heredia (2018) para la provincia de Chaco como una aproximación al estudio de estructuras de clases provinciales o el trabajo de Dalle, Jorrat y Riveiro (2018) considerando el peso de las estructuras regionales en la movilidad social.

Si pasamos a describir la influencia de las clases sociales en la vida de las personas, podemos tomar como una frase para resumir a la de Wright (2005:22): “*lo que tienes determina lo que consigues*”, es decir, los bienes o activos que posee una persona van a ser determinantes para poder conseguir otros bienes; algo que parece una obviedad si no cuestionamos las palabras “tener” y “conseguir”. Es decir, hay una gama inimaginable de cosas que las personas pueden tener y conseguir, dependiendo de cómo usemos y entendamos estas palabras. En este sentido, existen varias posturas teóricas, desde la marxista hasta la perspectiva bourdiana, en el cual los activos que poseen las personas definen su posición en una estructura relacional de clases: si una persona posee activos distintos a los demás, su posición es distinta en la estructura de clases. Es por esta misma razón que es difícil construir esquemas de clases sociales universales, pero, el acuerdo de la mayoría es utilizar una perspectiva ocupacional, una de las formas de operacionalizar es tomar las variables ocupacionales de condición de actividad, sector de actividad, calificación y jerarquía ocupacional y tamaño de la empresa, para así estimar la que “bienes” se incluyen entre las posesiones de las personas (Clemenceau et al., 2016).

Solo para mencionar dos casos de formulación teórica de las clases sociales, la perspectiva marxista es una de las más restrictivas en cuanto a cómo se forma una clase social, incluyendo solo posesiones materiales, con la dualidad capital/trabajo, y la de Bourdieu es una de las más amplias, incluyendo capital físico, capital educativo o intangible (que puede valorizarse en el mercado) y le suma el capital social.

En este sentido, la variable ocupacional es central por dos razones: en primer lugar por fuentes de datos de las que se dispone, en las cuales se utilizan datos cuantitativos para obtener información de la ocupación pero no otras variables multidimensionales, por lo que no se podría tomar el esquema o la perspectiva de Bourdieu (Wright, 2005) y el interés de analizar como en la particularidad de la provincia se pueden ver aspectos del modo de producción capitalistas con un correlato nacional e internacional, y características distintivas del propio contexto económico de la provincia. En este punto, en nuestro problema de investigación es determinante la variable ocupacional en el cálculo de clases sociales dada la inserción económica de las personas, y porque interesa partir desde allí para estudiar clases sociales en Entre Ríos.

Los trabajos de Clemenceau et al (2016) y de Sacco et al. (2022) describen diversas aristas de los estudios de estructura social y sus anclajes teóricos que luego pueden operacionalizar estos conceptos con variables concretas. En este sentido, las estructuras de clase desarrolladas y retomadas por estos autores son el esquema EGP, utilizado internacionalmente y desarrollado por Erikson, Goldthorpe y Portacarrero, el esquema de ISEI de Ganzeboom y el desarrollado por Chávez Molina y Rodríguez de la Fuente, denominado CObHE. Estos esquemas toman diversas especificaciones para el cálculo de clases sociales, el ISEI, por ejemplo, es un esquema gradacional que toma, además de un entramado objetivo de la ocupación, su inserción en términos de prestigio de la ocupación (Sacco et al, 2022). Por otro lado, tanto el esquema EGP como el CObHE toman variables de ocupación en términos relacionales con el foco en aspectos del entramado social y las relaciones de trabajo (contratos de trabajo y de servicios en EGP) y su inserción laboral en relación a la perspectiva de la heterogeneidad estructural (empleos de mayor productividad ligados a sectores más o menos productivos).

En este contexto, se dan cuenta de algunas decisiones teórico metodológicas presentes en este trabajo. En primer lugar, se decide operacionalizar las clases sociales a través de la ocupación dado el carácter central que tienen las estructuras económicas en este tipo de esquemas y la disponibilidad de fuentes de datos para nuestro estudio. Como disponemos de bases de datos que nos brindan información sobre la ocupación de las personas, tomamos esos datos como indicadores de posiciones sociales en la estructura de clases.

En segundo lugar, se decide utilizar el clasificador de Torrado (1992) dado que, como se recupera en los autores citados más arriba, el CSO toma una diferenciación a nivel de clases con una mayor homogeneidad posible al interior de los grupos y que dota de flexibilidad para poder hacer desagregaciones a nivel del interior de cada clase, dando cuenta del proceso de acumulación económica vigente en cada caso; por otro lado, se toma en cuenta la PEA de la provincia dado que nos permite ligar la estructura económica y ocupacional con la estructura social, es decir, cómo las personas se insertan en el sistema económico vigente en un contexto determinado (Clemenceau et al, 2016).

Finalmente, para calcular estructuras sociales se elige a la provincia como unidad geográfica y se trabaja con su entramado Urbano, es decir, los dos mayores aglomerados urbanos en la EPH, para poder dar una primera descripción en torno a la relación de las estructuras económicas y sociales y cómo estas últimas han evolucionado en las primeras décadas del siglo XXI, dado que existe una vacancia de estudios sobre esta temática, todo esto también unido a la vacancia de estudios de este tipo, que plantean la necesidad de poder hacer estudios descriptivos sobre el tema en la provincia.

Antecedentes de estudios sobre estructura ocupacional en Entre Ríos.

Por otro lado, dado que nos interesa estudiar la estructura ocupacional y social de la provincia de Entre Ríos, tomamos como principal antecedente un trabajo del mercado laboral en la Región Centro realizado por Orsini et al. (2019), donde se ponen en relevancia diversos aspectos del cambio de la estructura productiva en la región y en provincia, o el trabajo de Mateo, Rodríguez y Mateo (2017) en el cual se examina la historia de la población y despoblación relativa de la provincia. En estos trabajos se puede dar una caracterización de la estructura productiva y ocupacional en términos de los censos nacionales desde 1991 hasta 2010, en el primer trabajo, y desde 1869 y 2010 en el segundo.

Siguiendo a estos autores, la participación laboral de la Región Centro y de Entre Ríos tienen un amplio desarrollo del sector terciario en términos de empleo, acompañando las tendencias latinoamericanas en el periodo. En este sentido, el desarrollo del sector terciario (sumado a lo que se denomina hipertrofia del sector público) se relaciona con una tendencia que recogen Mateo, Rodríguez y Camarda (2017): cuando se dan episodios expansivos de la industria en Argentina, la provincia de Entre Ríos actúa como una expulsora de población y cuando se dan contracciones del mismo, ocurre lo contrario.

Por otro lado, se mencionan otros dos aspectos relacionados entre sí: en primer lugar, la provincia tiene una estructura poblacional envejecida y feminizada en los periodos con saldo migratorio negativo, mientras que esto se revierte cuando las personas se quedan en la provincia ante la falta de oportunidades laborales en otras provincias (como Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba); mientras que Orsini et al (2018) menciona que el incremento de la participación laboral femenina y las disminuciones de las situaciones de “otros” en inactividad laboral se compatibilizan con los procesos de incremento de actividad económica.

Se sintetizan en estos dos trabajos tendencias en términos de la estructura laboral y económica de la provincia en las últimas décadas: disminuyó la participación económica en términos de Producto Bruto Geográfico de los sectores industriales y se incrementa el sector primario, mientras que en términos laborales incrementa el empleo en el sector terciario más que en el resto de los sectores (Orsini et al, 2019). Por otro lado, las tendencias de largo plazo de poblamiento y despoblamiento nos indican que la estructura económica de la provincia posee menores niveles de producción industrial que en provincias cercanas, entonces, cuando incrementa dicha actividad las personas dejan la provincia en busca de otras fuentes laborales (Mateo et al, 2017).

Estos hallazgos se relacionan con antecedentes trabajados por Flores (2023) y Bevilacqua et al. (2024). En estos trabajos se analiza la provincia de Entre Ríos en su heterogeneidad estructural, en el primer caso, y en la diversificación de las exportaciones, en el segundo caso, ambos en el contexto de la Región Centro. En estos trabajos se comprueba que la provincia de Entre Ríos tiene un perfil productivo altamente primarizado o que contiene en su interior dos sectores productivos: el sector primario que tiene competitividad, productividad y ganancias, mientras que el sector industrial se ve ligado a la agroindustria y a la metalmecánica (relacionada a estas producciones), mientras que en las provincias de Córdoba y Santa Fe hay mayores posibilidades de desarrollo y exportación de actividades industriales.

Sumado a estos antecedentes que describen la estructura productiva de Entre Ríos, el estudio de Orsini y Domínguez (2009) describe un proceso que se ha profundizado con la inserción de la soja como un cultivo importante dentro de la Pampa húmeda argentina y ha generado que regiones o provincias que no eran tradicionalmente productoras de este cultivo lo utilicen, de la mano de las mejoras tecnológicas introducidas, el incremento del precio de la misma y de la aparición de actores sociales nuevos que pueden dar un sustento a esta producción en términos de capital y organización de la producción. Es así que en la provincia incrementan tanto la superficie como las cantidades cultivadas. Este incremento de la producción tiene un impacto económico pero también un impacto social, generando migraciones del campo a la ciudad y la desaparición de pequeñas explotaciones que optan por alquilar sus propiedades o, directamente, venderlas.

Por otro lado, más allá de trabajos que toman a Entre Ríos como una unidad geográfica de estudio, hay diversos antecedentes de actividades específicas importantes en la provincia: actividad forestal, citrícola o frutihortícola, avícola, entre otras.

Entre estos trabajos podemos destacar la existencia de actividades económicas que concentran gran cantidad de mano de obra ocupada, en este caso, los departamentos de la zona norte - este de Entre Ríos (Concordia, Federación y Colón). En términos laborales, los estudios dan cuenta de cómo las actividades frutihortícolas, forestales y citrícolas tienen esquemas de contratación de mano de obra de forma irregular, en condiciones de no registro laboral, que se nutren de aglomerados urbanos cercanos o de migración interna de otras provincias. Estas actividades generan tasas de actividad y empleo inestables, con ocupados que deben recurrir a buscar otros trabajos o empleos parciales, con su consecuente impacto en la pobreza (Bardomas, 2009; Jordán, 2014; Muñoz, 2015).

Por otro lado, los trabajos de Reta y Toler (2013) y Reta (2005) estudian el aglomerado de Concordia a partir de la Encuesta Permanente de Hogares y como la informalidad laboral influye en las condiciones de pobreza e indigencia de los hogares. En este caso, destacan que la informalidad conlleva una lógica funcional al capitalismo en la cual las personas se insertan de forma endeble en el proceso productivo y ello conlleva un menor costo salarial, propiciando la acumulación de capital en los propietarios e incremento de la producción, reiniciando así el esquema con la presencia constante de esta informalidad inicial.

La conclusión a la que arriban ambas autoras en sus trabajos es que la pobreza y la indigencia no se deben exclusivamente a la inactividad laboral, sino que estos enclaves de informalidad y precarización laboral generan que las personas con menores niveles educativos y las mujeres sean quienes principalmente tienen problemas de inserción laboral o que tengan empleo pero con problemas de ingresos, consecuentemente queden atrapadas en situaciones de vulnerabilidad.

De estos antecedentes podemos plantear algunos datos en los cuales los/as autores/as llegan a conclusiones similares de sus trabajos. En primer lugar, la Entre Ríos posee una estructura productiva heterogénea, que plantea una combinación de actividades primarias con gran importancia en términos de PBG y una gran proporción de personas ocupadas en el sector terciario, ligando la industria a los eslabones más cercanos a actividades agropecuarias. En segundo lugar, en algunas de las actividades laborales intensivas en mano de obra se encuentran características relacionadas a la informalidad y el no registro laboral, lo que plantea problemáticas de ingresos y condiciones laborales de las personas, con un impacto en las tasas de pobreza e indigencia.

Dado que en este trabajo nos interesa construir la estructura ocupacional de la provincia y, a partir de ella, su estructura social, podremos realizarnos como pregunta: con esta historia de la estructura laboral y demográfica de la provincia ¿Cómo pasamos de la estructura laboral a la estructura social? ¿Influye en la estructura social el escaso desarrollo industrial y la presencia de actividades intensivas en mano de obra en el sector primario y de servicios? Dado que se estudiarán dos aglomerados particulares ¿Qué influencia podrían tener las desigualdades territoriales en la estructura social?

Con estos interrogantes, podremos analizar los datos de la Encuesta Permanente de Hogares para responder a una pregunta más general a modo de disparador planteado anteriormente, que

es: ¿Existe un “trabajador entrerriano”? Ese modelo ideal de estructura laboral ¿Nos lleva a una estructura social invariable en la provincia?.

Metodología

Para llevar a cabo la tarea de poder describir y analizar la estructura laboral entrerriana, se utilizarán las bases de la Encuesta Permanente de Hogares y de la Encuesta Permanente de Hogares-Total Urbano, que son recolectadas y puestas a disposición por el Instituto de Estadística y Censos (INDEC).

Para el recorte geográfico utilizado se tienen a disposición las bases de datos de los aglomerados de Gran Paraná y Concordia (EPH) y del Resto de Entre Ríos (EPH-TU). Por otro lado, se tomarán datos del Total de Aglomerados Urbanos para realizar comparaciones y poner en contexto los datos provinciales dentro de los nacionales.

El recorte temporal es desde el tercer trimestre de 2003 (primer trimestre disponible) a cuarto trimestre de 2022, dado que interesa ver un análisis de mediano plazo de la estructura ocupacional en la provincia abarcando diversos periodos de política económica y de evolución de la dinámica macroeconómica. Para el aglomerado Resto de Entre Ríos se utilizan los terceros trimestres entre 2010 y 2022 (a excepción de 2015).

Para el análisis, se calcularán indicadores de la Tasa de Actividad, Empleo y Desempleo, para dar un marco general de las dinámicas en el mercado laboral, luego se calcularán datos de la calidad y calificación de los puestos de trabajo: Categorías ocupacionales, calificación del empleo y tamaño de empresas (para poder ver un indicador proxy de la productividad). Por otro lado, también se analizará al interior de la categoría de activos, empleados y desocupados para encontrar inequidades entre grupos demográficos: discriminamos por varones y mujeres y luego por jóvenes y adultos.

Finalmente, en el caso del estudio de estructura social, como se menciona anteriormente, se utiliza el clasificador desarrollado por Torrado (1992) denominado Condición Socio-Ocupacional (CSO), con los cálculos propuestos por (Sacco et al., 2022). Esta decisión se basa en que, se sostiene la hipótesis de que la estructura productiva y ocupacional de la provincia posee una heterogeneidad entre inserciones laborales formales e informales, similares a lo desarrollado en dicho clasificador.

El cálculo de la CSO se presenta para los aglomerados de Gran Paraná y Concordia dado que se tomando para ello bases unidas de cuatro trimestres entre los años 2006 a 2022, excluyendo al Resto de Entre Ríos dado que la cantidad de casos pequeña puede dar un mayor coeficiente de variación de los datos.

Desarrollo

Breve descripción de la estructura productiva entrerriana:

Como se mencionó anteriormente, la provincia de Entre Ríos tiene una fuerte presencia de actividades primarias y sus derivados en términos proporcionales. Para describir de forma sintética la actividad económica de la provincia tomaremos el Producto Bruto Geográfico

(PBG) de la misma dividido por actividades. Analizamos su estructura interna y lo comparamos con las provincias de Santa Fe y Córdoba (integrantes de la Región Centro)⁴² y el Valor Agregado Bruto de la producción a nivel total nacional.

Los datos indican que la mayor actividad es la producción de servicios (60% del PBG), de la cual el Comercio (G) ocupa una parte muy importante (el 31% de las actividades productoras de servicios), seguida por el sector Transporte, almacenamiento y comunicaciones (I) con un 16% de la producción de servicios. Por otro lado, de la producción de bienes la actividad relativamente más importante es la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (A) que ocupa el 45% de las actividades productoras de bienes, seguida por un 43% de la Industria Manufacturera (D), que como se mencionó antes está ligada a sectores agroalimentarios.

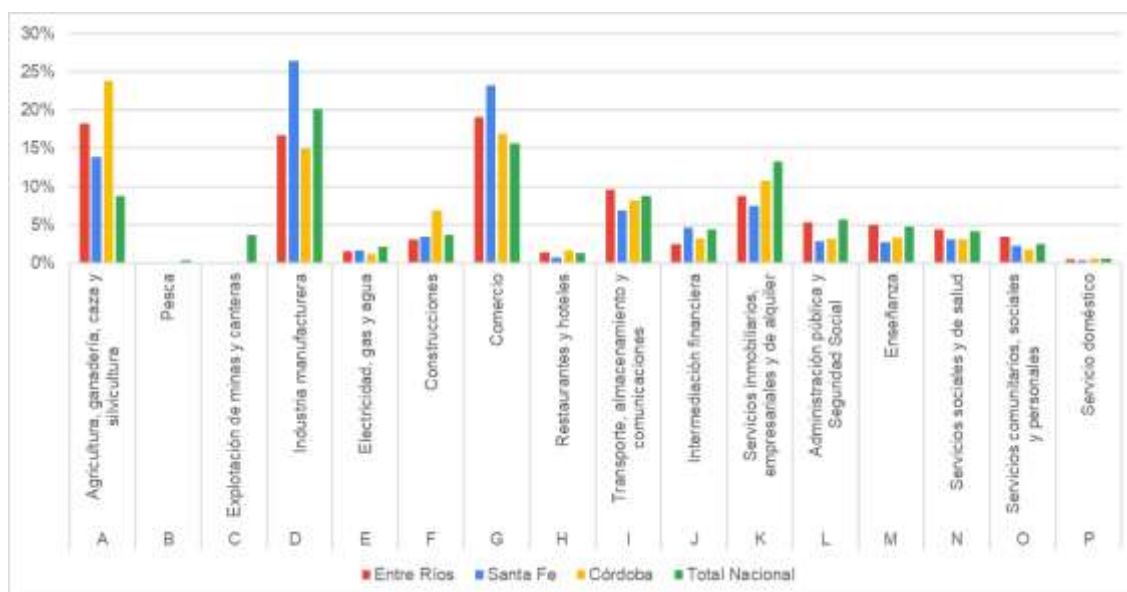
Si comparamos con las provincias de la Región Centro, se ve que hay una importancia de las actividades primarias en todas las provincias, mayor al promedio nacional, mientras que solo en el caso de Santa Fe se está por encima del total nacional en Industria. En cuanto a la producción de servicios, en la actividad Comercio la provincia de Entre Ríos se encuentra en un nivel intermedio entre Santa Fe y Córdoba, las tres mayores al promedio nacional.

Un aspecto a destacar es que en las actividades de servicios la provincia posee mayor importancia relativa sobre las dos provincias vecinas y el total nacional: Transporte, almacenamiento y comunicaciones (I), Administración pública y seguridad social (L), Enseñanza (M) y Servicios comunitarios sociales y personales (O). Entre las cuatro actividades acumulan un 23% del PBG provincial.

En resumen, podríamos decir que la provincia tiene una importancia de las actividades primarias al igual que las provincias de la región, pero con menor impacto de la industria (y como se mencionó antes en los antecedentes, producción ligada a la agroindustria); y con una importancia relativa de actividades de servicios mayor que en el promedio nacional (las mencionadas actividades G, I, L, M y O).

⁴² Se toma la decisión de comparar con estas provincias dado que en los antecedentes descritos también se utiliza dicho marco geográfico para comparar a Entre Ríos (Orsini et al, 2019; Flores, 2023; Bevilacqua et al, 2024).

Gráfico 1: Producto Bruto Interno de Argentina y Producto Bruto Geográfico de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Total anual 2021.



Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de Entre Ríos (DGEyCER), IPEC, Dirección General de Estadísticas y Censos de Córdoba e INDEC.

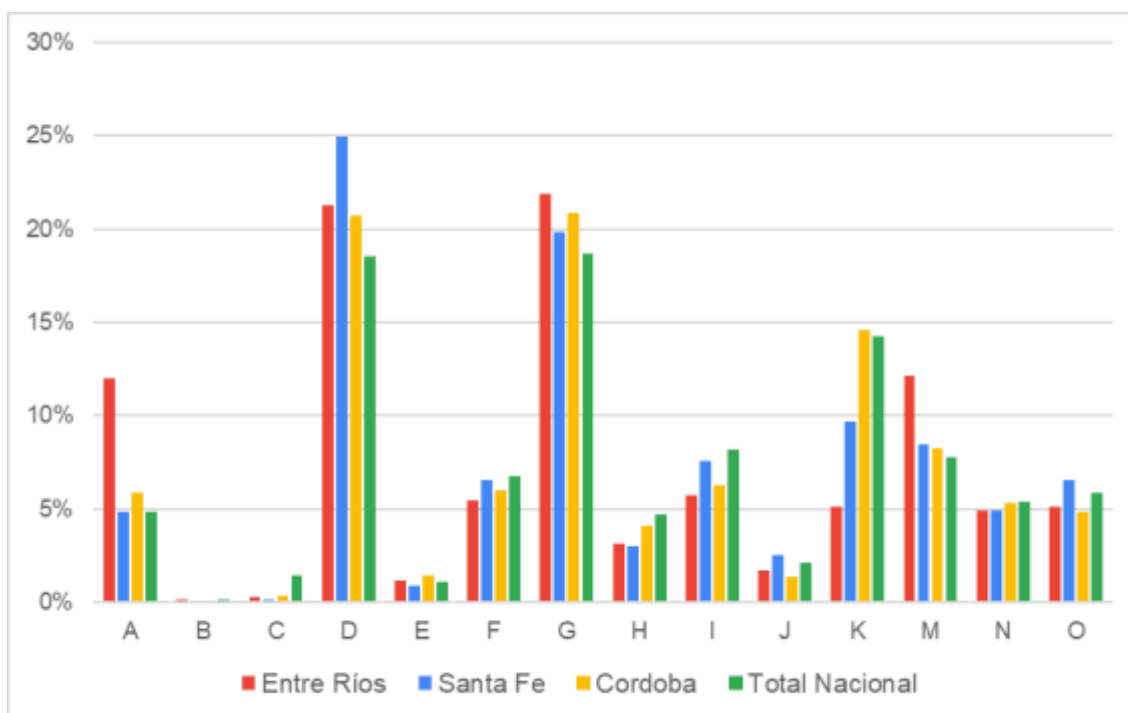
Por otro lado, si revisamos los datos de empleo registrado en el sector privado en el cuarto trimestre de 2023, provistos por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, y se compara también a nivel nacional y de la Región Centro, veremos una estructura similar a la anterior.

En la provincia de Entre Ríos hay una mayor proporción de personas ocupadas registradas en los sectores de producción de servicios, de las cuales la mayor parte están en el sector de Comercio (G) (un 22% del total) y en la producción de bienes están en su mayor proporción en los sectores de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (A) y en Industria Manufacturera (D) (representan un 12% y 21%. respectivamente).

En términos de comparación regional y nacional se aprecia que la provincia tiene una proporción de empleo registrado en actividades del sector primario mayor al promedio nacional, Santa Fe y Córdoba, más que duplicando estas proporciones; y en relación a la industria es mayor al promedio nacional, pero intermedio entre Santa Fe y Córdoba (con la primera teniendo la mayor proporción). Cabe destacar que en Entre Ríos la proporción de personas ocupadas en la industria en la actividad “Alimentos” es de 59% mientras que en Santa Fe es 34% y en Córdoba 38%. Esto nos brinda un panorama del perfil agroindustrial de la provincia.

Finalmente, en la producción de servicios en Entre Ríos tiene mayor importancia el sector Comercio (G), y en Enseñanza (M) y Transporte (I), con un 11% y 6% respectivamente, mayores al promedio regional y provincial en el primer caso y pero menor en el segundo.

Gráfico 2: Empleo privado registrado por actividad (desagregado a dos dígitos) en el Total Nacional, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Cuarto trimestre de 2023.



Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de Entre Ríos (DGEyCER), IPEC, Dirección General de Estadísticas y Censos de Córdoba e INDEC.

Luego de estos datos de la producción de Entre Ríos, daremos una descripción de la estructura ocupacional del entramado urbano de la Provincia.

Análisis de datos de la estructura ocupacional entrerriana:

Analizaremos en primer lugar datos básicos de la dinámica laboral de los aglomerados estudiados. Los datos para los aglomerados de Gran Paraná y Concordia pueden calcularse como promedios entre el tercer trimestre de 2003 y el cuarto trimestre de 2022, mientras que en el Resto de Entre Ríos se calcula el promedio de los terceros trimestres entre 2010 y 2022 (con excepción del año 2015).

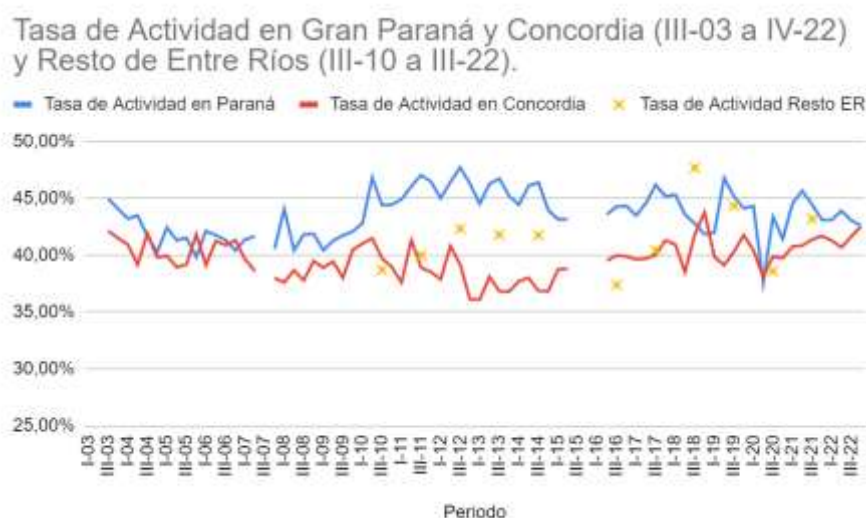
Podemos observar en la Tabla 1 que en los aglomerados Gran Paraná y Resto de Entre Ríos las tres tasas promedio calculadas son similares, mientras que en Concordia las Tasas de Actividad y de Ocupación tienen niveles menores, y la Tasa de Desocupación es mayor. En otras palabras, a simple vista estas cifras muestran una desigual inserción laboral de las personas y dinámica del mercado laboral en Concordia distintas con respecto a Gran Paraná o el Resto de Entre Ríos.

Tabla 1: Tasas de Actividad, Ocupación y Desocupación promedio en Gran Paraná, Concordia (tercer trimestre de 2003 a cuarto trimestre de 2022) y Resto de Entre Ríos (terceros trimestres entre 2010 y 2022).

Indicador/ Aglomerados	Tasas de Actividad	Tasas de Empleo	Tasa de Desocupación.
Gran Paraná	43,6%	40,5%	7,1%
Concordia	39,7%	36,5%	7,9%
Resto de Entre Ríos	41,5%	38,6%	6,6%
Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Permanente de Hogares y Encuesta Permanente de Hogares - Total Urbano.			

En cuanto a las dinámicas laborales en estos aglomerados, si examinamos la Tasa de Actividad y Ocupación observamos que tienen similares movimientos aunque en Concordia hay diversos periodos en los cuales se muestra un estancamiento de la participación laboral mayor que en Paraná. Sumado a esto, a principios del periodo de estudio se da un incremento de la ocupación con disminución de la actividad laboral, dadas las mejores condiciones macroeconómicas o la salida del mercado de personas que estaban en el mismo por cuestiones coyunturales.

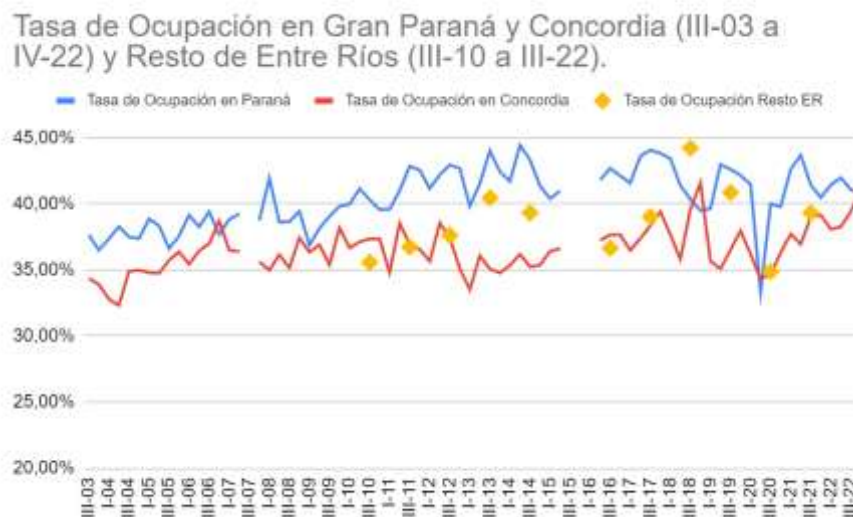
Gráfico 3: Tasa de Actividad en Gran Paraná y Concordia (tercer trimestre de 2003 a cuarto trimestre de 2022) y Resto de Entre Ríos (terceros trimestres entre 2010 y 2022).



Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Permanente de Hogares y Encuesta Permanente de Hogares - Total Urbano.

En cuanto al Resto de Entre Ríos, también vemos que sigue tendencias generales de movimientos de mercado laboral de Gran Paraná en el periodo en el que se poseen datos.

Gráfico 4: Tasa de Ocupación en Gran Paraná y Concordia (tercer trimestre de 2003 a cuarto trimestre de 2022) y Resto de Entre Ríos (terceros trimestres entre 2010 y 2022).



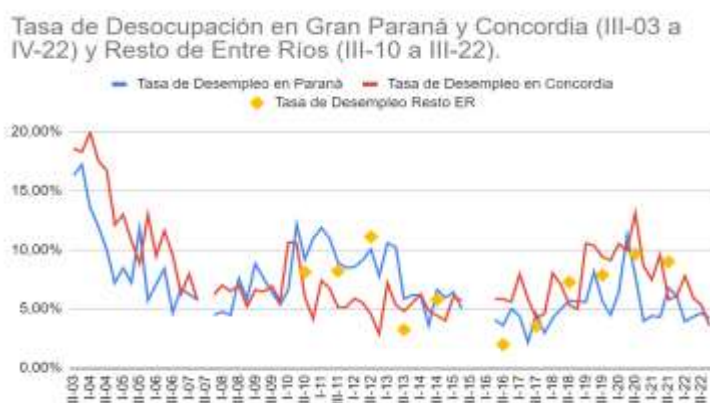
Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Permanente de Hogares y Encuesta Permanente de Hogares - Total Urbano.

Lo interesante es examinar estos tres indicadores en términos de evolución de las variables en cuanto a la posible distinción de periodos al interior del mismo. Podríamos situar en el análisis tres periodos de acuerdo a la evolución de estos indicadores que reflejan tendencias comunes tanto a nivel de los tres aglomerados mencionados como del total del país.

En primer lugar, entre el inicio del periodo en el tercer trimestre de 2003 y el año 2008 se puede apreciar una tendencia decreciente de las tasas de participación laboral y un crecimiento de la ocupación lo que también implica una reducción de la tasa de desocupación.

A partir del año 2009, se da una tendencia divergente entre Gran Paraná y Concordia, en primer lugar, hay un crecimiento de la participación laboral del primer aglomerado mientras que este indicador disminuye y se estanca en el periodo 2009-2015, al mismo tiempo las tasas de ocupación y desocupación tienen tendencia decreciente. Lo que implica que el mercado laboral de Gran Paraná comienza a absorber este incremento de masa laboral entrante, situación que no se da completamente en Concordia. En el año 2010 obtenemos información del aglomerado Resto de Entre Ríos, de los terceros trimestres entre 2010 y 2014, se ve la tendencia similar entre este aglomerado y Gran Paraná: estancamiento o caída en participación laboral e incremento en empleo con disminución de desempleo. Cabe destacar que los tres aglomerados finalizan con una caída de la tasa de Ocupación, dando cuenta de esta dinámica de estancamiento o salida de la actividad laboral de las personas.

Gráfico 5: Tasa de Desocupación en Gran Paraná y Concordia (tercer trimestre de 2003 a cuarto trimestre de 2022) y Resto de Entre Ríos (terceros trimestres entre 2010 y 2022).



Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Permanente de Hogares y Encuesta Permanente de Hogares - Total Urbano.

Finalmente, entre 2016 y 2022 se ve una tendencia similar en los tres aglomerados: un inicio del periodo con crecimiento de la actividad, ocupación y desocupación, dadas el ingreso o reingreso de personas al mercado laboral y un incremento del empleo entre 2016 y 2018, para luego tener una dinámica de caídas en la actividad y empleo con incremento del desempleo, es decir, una contracción del mercado laboral en general hasta el pico más bajo de dicha contracción en la pandemia. Luego de la pandemia, se evidencia un periodo de recuperación iniciado en 2021 y continuado en 2022, dado por incrementos en el empleo y disminución del desempleo, con tendencias disímiles en la actividad laboral en cada aglomerado.

Por otro lado, la categoría ocupacional muestra una similitud promedio en términos de la distribución de cada categoría. La diferencia entre Gran Paraná y Concordia con el aglomerado restante se da en favor para la categoría “Obrero o empleado” mientras que en Resto de Entre Ríos tienen una importancia mayor en “Cuenta Propia” y, sumado a esto, casi duplica la categoría “Trabajador Familiar Sin Remuneración (TFSR)”, dando una idea de la diferente importancia del trabajo familiar en el interior de la provincia. En este sentido, la distinción entre autónomos o asalariados, como se calcula en la Condición Socio-Ocupacional de Torrado (1992), resulta clave para entender el mercado laboral, y por consiguiente, la estructura social en la provincia.

Tabla 2: Categoría ocupacional promedio en Gran Paraná, Concordia (tercer trimestre de 2003 a cuarto trimestre de 2022) y Resto de Entre Ríos (terceros trimestres entre 2010 y 2022).

CATEGORÍA	PATRÓN	CUENTA PROPIA	OBRERO O EMPLEADO	TFSR
GRAN PARANÁ	4,4%	20,0%	75,0%	0,7%
CONCORDIA	5,0%	20,5%	73,4%	1,1%
RESTO DE ENTRE RÍOS	4,8%	22,7%	71,1%	1,4%

Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Permanente de Hogares y Encuesta Permanente de Hogares - Total Urbano.

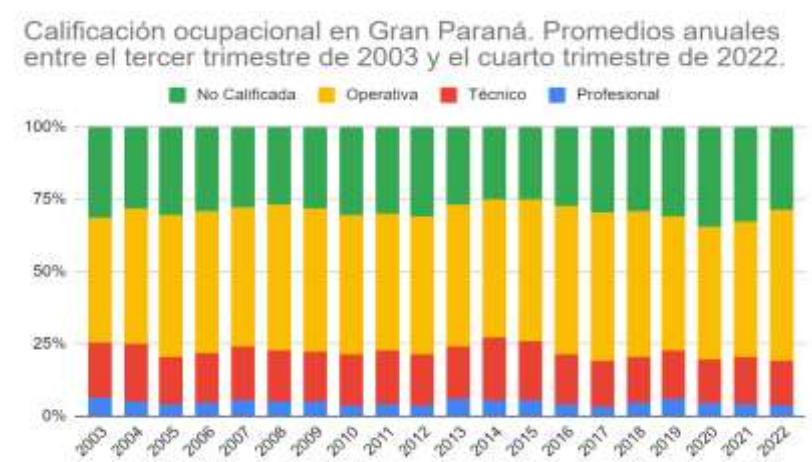
Las calificaciones ocupacionales también se distribuyen en promedio de una forma similar para los tres aglomerados, con una importancia relativa mayor en las categorías “Operativas” y “No calificados”, con diferencias de participación porcentuales entre Gran Paraná, por un lado, y Concordia y Resto de Entre Ríos, por el otro. Sin embargo, si tomamos estas distribuciones en términos de evolución temporal obtendremos como resultado que cuando las tasas de ocupación incrementan tendencialmente, los estratos no calificados disminuyen su participación relativa y cuando hay periodos de caídas de dicha tasas, ocurre lo contrario, situación que se ve reflejada en los aglomerados de Gran Paraná y Concordia.

Tabla 3: Calificación ocupacional promedio en Gran Paraná, Concordia (tercer trimestre de 2003 a cuarto trimestre de 2022) y Resto de Entre Ríos (terceros trimestres entre 2010 y 2022).

CATEGORÍA	PROFESIONAL	TÉCNICO	OPERATIVA	NO CALIFICADA
GRAN PARANÁ	4,4%	15,9%	49,2%	30,5%
CONCORDIA	1,7%	13,7%	47,6%	37,0%
RESTO DE ENTRE RÍOS	1,6%	14,5%	50,1%	33,9%

Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Permanente de Hogares y Encuesta Permanente de Hogares - Total Urbano.

Gráfico 6: Calificación ocupacional en Gran Paraná. Promedios anuales entre 2003 y 2022.

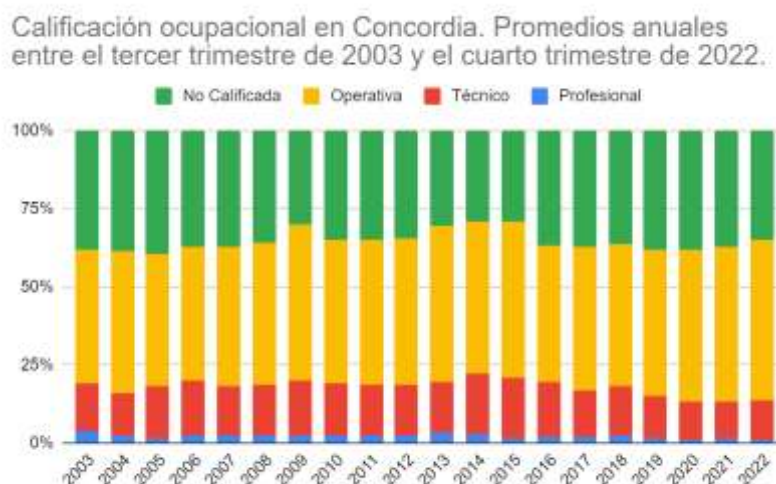


Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Permanente de Hogares y Encuesta Permanente de Hogares - Total Urbano.

Un aspecto a destacar es que las calificaciones “Profesional” de los aglomerados Concordia y Resto de Entre Ríos tienen en promedio una participación porcentual un 1,7% y 1,6% respectivamente, menor en comparación con Gran Paraná (4,7%). Es decir, que en promedio tienen una menor cantidad relativa de trabajadores calificados y mayor proporción de

trabajadores en la categoría “No calificados” (Concordia tiene un 37% y Resto de Entre Ríos tiene un 33,9% en contraposición a un 30,5% de Gran Paraná).

Gráfico 7: Calificación ocupacional en Concordia. Promedios anuales entre 2003 y 2022.



Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Permanente de Hogares y Encuesta Permanente de Hogares - Total Urbano.

Otro indicador de la estructura laboral de la provincia es la cantidad de empleados que tienen los establecimientos en que trabajan las personas, para hacer un proxy entre la productividad media de los establecimientos y la cantidad de personas empleadas, agrupando por pequeños establecimientos (o menos productivos) en menos de 5 empleados, establecimientos medianos, entre 5 y 40 empleados y grandes establecimientos, con más de 40 empleados. Cuando se calcula este indicador, veremos que en Gran Paraná tiene, en promedio, una distribución equitativa entre las empresas las tres categorías de cantidad de empleados (o productividad), mientras que en Concordia y Resto de Entre Ríos acumulan mayor cantidad de empresas o unidades productivas con pocas personas empleadas. Además, Gran Paraná posee alrededor de 15% más de empleados en empresas grandes que los restantes aglomerados; por otro lado, aquellas empresas que tienen menores cantidades de empleados poseen un 6% más en Concordia y un 10% más en Resto de Entre Ríos comparando con Gran Paraná.

Tabla 4: Tamaño de establecimiento promedio en Gran Paraná, Concordia (tercer trimestre de 2003 a cuarto trimestre de 2022) y Resto de Entre Ríos (terceros trimestres entre 2010 y 2022).

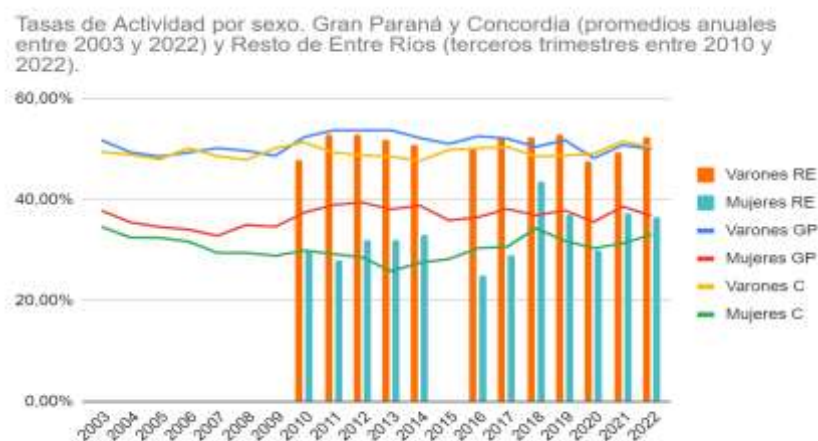
CATEGORÍA	HASTA 5 EMPLEADOS	ENTRE 5 Y 40 EMPLEADOS	MÁS DE 40 EMPLEADOS
GRAN PARANÁ	36,1%	27,9%	35,9%
CONCORDIA	42,3%	30,0%	20,7%
RESTO DE ENTRE RÍOS	46,1%	26,8%	20,4%

Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Permanente de Hogares y Encuesta Permanente de Hogares - Total Urbano.

Además de aproximarnos a distintos indicadores de la estructura laboral en términos de categorías ocupacionales, calificación y tamaño de los establecimientos podremos examinar cuales son las tasas del mercado laboral de acuerdo a características demográficas de la población: sexo y edad.

En primer lugar calcularemos promedios anuales de tasas de actividad por sexo. En este sentido, se observa la brecha de género⁴³ en los tres aglomerados está presente para el indicador en distintas intensidades: 39%, 62% y 56% para Gran Paraná, Concordia y Resto de Entre Ríos respectivamente. Esto indica que en los tres aglomerados los varones tienen mayores tasas de ocupación promedio en todo el periodo, con la mayor disparidad en Concordia. En el siguiente gráfico examinamos dichas tasas para las mujeres, estas muestran en Gran Paraná un incremento a medida que avanza el primer periodo de estudio mientras que en Concordia el comportamiento es a la inversa, y se revierte nuevamente esta tendencia a una estabilidad en las tasas de actividad de mujeres en Gran Paraná y un crecimiento en Concordia. Por otro lado, en el aglomerado Resto de Entre Ríos el periodo 2010-2014 muestra una leve tendencia creciente y una oscilación entre 2016 y 2022. Sumando estos tres sucesos podríamos sostener la hipótesis de que la inestabilidad laboral de las mujeres asociada a los roles de cuidados tienen un impacto en términos de salidas y entradas del mercado a medida que las condiciones económicas y de dinámicas laborales familiares lo posibiliten/necesiten (Romero, 2020).

Gráfico 8: Tasa de Actividad en Gran Paraná y Concordia (tercer trimestre de 2003 a cuarto trimestre de 2022) y Resto de Entre Ríos (terceros trimestres entre 2010 y 2022). Distribución por sexo.



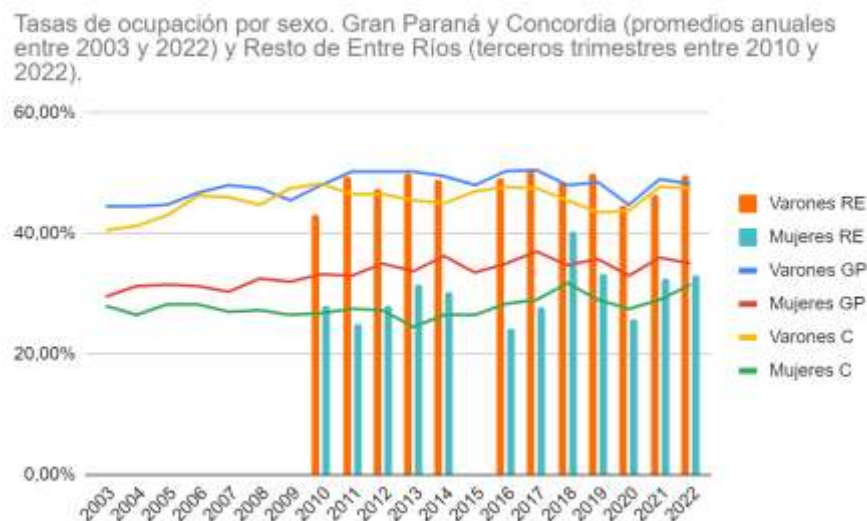
Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Permanente de Hogares y Encuesta Permanente de Hogares - Total Urbano.

Si observamos las tasas de ocupación la dinámica es similar, con brechas de tasas de ocupación son de 43%, 64%, 61% para Gran Paraná, Concordia y Resto de Entre Ríos, ampliando la brecha aún más que en el caso de la actividad y con una dinámica general de

⁴³ Se utiliza la expresión de brecha de género aunque la medición de EPH sea en términos de sexo, dado que el indicador y las mediciones tradicionales del tema se procesan en esos términos.

crecimiento del empleo de las mujeres en los aglomerados Gran Paraná y Concordia y una tendencia muy similar a la actividad en Resto de Entre Ríos.

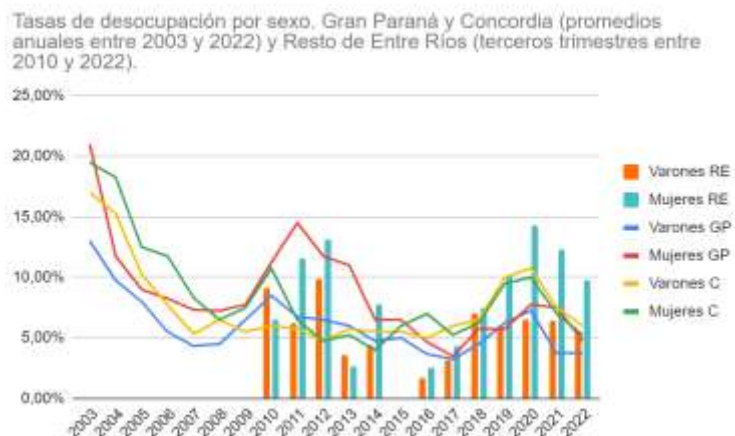
Gráfico 9: Tasa de Ocupación en Gran Paraná y Concordia (tercer trimestre de 2003 a cuarto trimestre de 2022) y Resto de Entre Ríos (terceros trimestres entre 2010 y 2022). Distribución por sexo.



Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Permanente de Hogares y Encuesta Permanente de Hogares - Total Urbano.

En cuanto a las tasas de desocupación, las brechas invierten su sentido matemático pero mantienen la desigualdad para las mujeres: tienen mayores tasas de desempleo por lo que las mismas son -30% para Gran Paraná, -11% para Concordia y -32% para Resto de Entre Ríos. La evolución de estos indicadores es muy similar en este caso, salvo por el periodo 2010-2013 para Gran Paraná: incrementa mucho más que en los demás aglomerados, casi duplicando el indicador para varones en el mismo aglomerado y luego vuelve a niveles similares que los demás aglomerados. Otro aspecto a destacar es la evolución de las tasas de desempleo en relación al empleo y la actividad: los momentos en que incrementan más o menos el desempleo en cada aglomerado coincide con dinámicas de poca absorción del mercado laboral de la masa activa de potenciales trabajadores.

Gráfico 10: Tasa de Desocupación en Gran Paraná y Concordia (tercer trimestre de 2003 a cuarto trimestre de 2022) y Resto de Entre Ríos (terceros trimestres entre 2010 y 2022). Distribución por sexo.



Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Permanente de Hogares y Encuesta Permanente de Hogares - Total Urbano.

Al examinar estos tres indicadores con una distinción por sexo se evidencian dos cosas: primero, las dinámicas en términos de brechas de género tienen una evolución propia en cada aglomerado, en segundo lugar, encontramos nuevamente tres periodos de cambios de la dinámica actividad-empleo-desempleo: un primer periodo con caída de la actividad, incremento del empleo y disminución marcada del desempleo (2003-2009), un segundo periodo marcado por incremento leve de la actividad general, pero no siempre para mujeres, con incremento en la ocupación y caída en el desempleo (2010-2015) y el último periodo donde incrementan el empleo, actividad y desempleo, es decir, se visualizan más que nunca las rigideces del mercado laboral y con una mayor manifestación de ello para mujeres de los dos aglomerados más pequeños (Concordia y Resto de Entre Ríos).

En cuanto a los indicadores del mercado laboral por rangos de edad, podremos observar que las brechas de participación se muestran más amplias. Al dividir a la población en personas entre 15 y 29 años y 30 a 65 años podemos observar que las personas del rango de edad mayor tienen mayores tasas de actividad y ocupación y menores tasas de desempleo. Para dar una cifra concreta, lo que nos dice la Tabla 5 es que, de tres personas activas laboralmente en los aglomerados dos serían de entre 30 y 65 años y una entre 15 y 29 años, de cuatro personas empleadas, tres serían del rango mayor y solo una del rango de menor edad y de personas desempleadas, en Gran Paraná tres de cada cuatro personas serían jóvenes y en el resto dos de cada tres serían jóvenes y las restantes mayores.

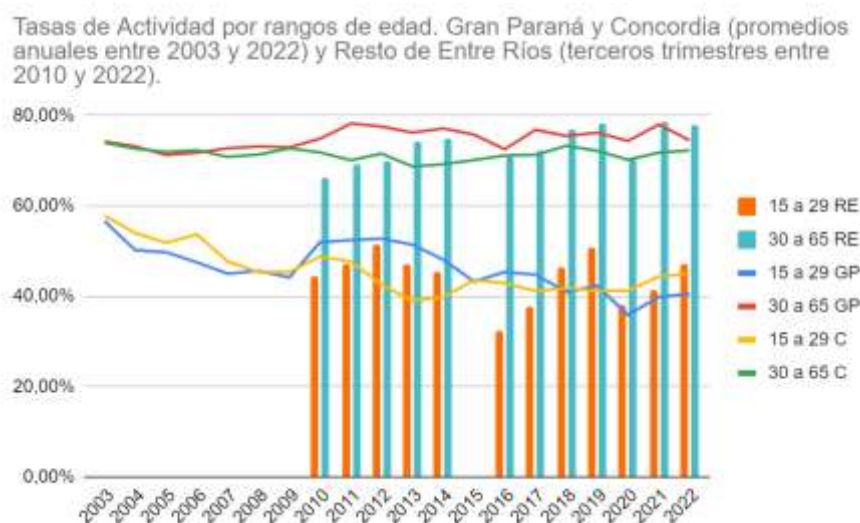
Tabla 5: Brechas de edad en tasas de Actividad, Empleo y Desempleo en Gran Paraná y Concordia (tercer trimestre de 2003 a cuarto trimestre de 2022) y Resto de Entre Ríos (terceros trimestres entre 2010 y 2022).

BRECHAS	15 A 29/30 A 65 ACTIVIDAD	15 A 29/30 A 65 OCUPACIÓN	15 A 29/30 A 65 DESOCUPACIÓN
GRAN PARANÁ	62%	85%	-74%
CONCORDIA	57%	74%	-62%
RESTO DE ER	66%	85%	-67%

Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Permanente de Hogares y Encuesta Permanente de Hogares - Total Urbano.

En primer lugar, podemos examinar que en la tasa de actividad hay una tendencia constante a lo largo de todo el periodo en las personas mayores que abarca los tres aglomerados, mientras que para el rango de personas más jóvenes está tasas disminuye de forma importante entre 2003 y 2009 (Gran Paraná y Concordia), para incrementar en los años siguientes y luego volver a disminuir.

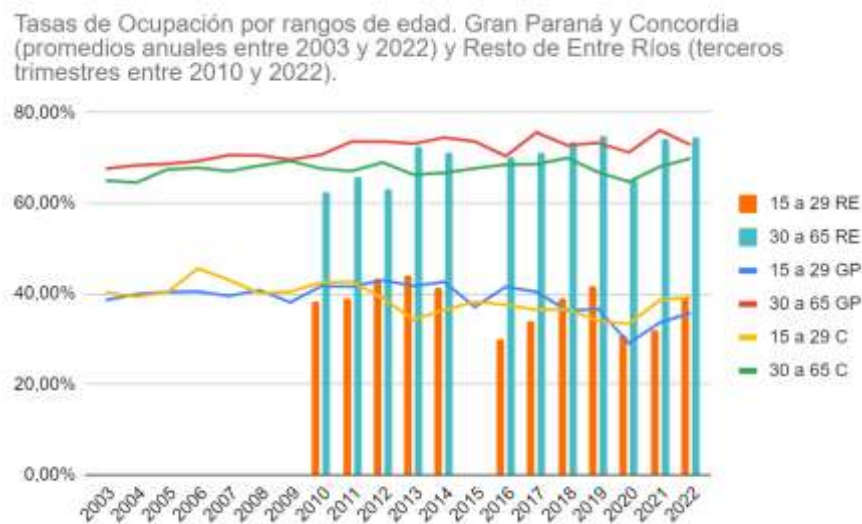
Gráfico 11: Tasa de Actividad en Gran Paraná y Concordia (tercer trimestre de 2003 a cuarto trimestre de 2022) y Resto de Entre Ríos (terceros trimestres entre 2010 y 2022). Distribución por rangos de edad.



Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Permanente de Hogares y Encuesta Permanente de Hogares - Total Urbano.

Luego, en cuanto a la ocupación, esta incrementa para el rango de personas mayores pero se mantiene constante o en caída en el rango más joven, con crecimientos que parecen ser sostenidos solo en el aglomerado Resto de Entre Ríos y en periodos que acompañan la tendencia macroeconómica nacional: crecimiento de 2016 a 2018 y 2021 a 2022.

Gráfico 12: Tasa de Ocupación en Gran Paraná y Concordia (tercer trimestre de 2003 a cuarto trimestre de 2022) y Resto de Entre Ríos (terceros trimestres entre 2010 y 2022). Distribución por rangos de edad.

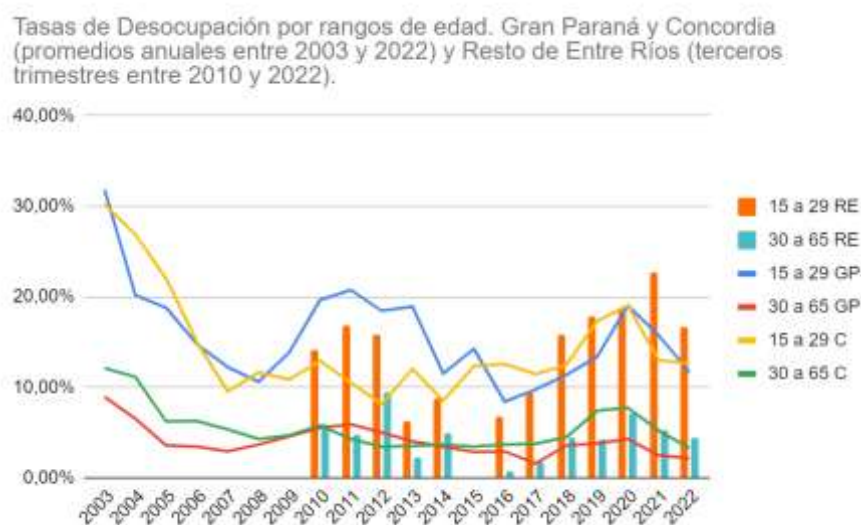


Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Permanente de Hogares y Encuesta Permanente de Hogares - Total Urbano.

En cuanto a la evolución de la desocupación, este indicador toma una dinámica en relación a los tres períodos sucesivos en términos macro: hay una disminución en gran medida en jóvenes para el periodo de 2003 a 2009, con su correlato en caídas de la actividad económica y no incremento en ocupación. Por otro lado, cuando se revierte la tendencia descendente (entre 2010-2015) incrementa el desempleo y en mayor medida incrementa para el rango de personas más jóvenes y queda relativamente estable para el rango de mayor edad, esta dinámica muestra un desgaste o límite de incorporación de personas jóvenes por caída en la actividad y salida del mercado laboral de jóvenes reflejado en menos desempleo. Finalmente, el periodo de inestabilidad macroeconómica imperante entre 2016 y 2022 se da una dinámica de estabilidad de actividad económica, caída de ocupación e incremento del desempleo para las personas más jóvenes: las personas que se mantienen en la actividad no incrementan las tasas de ocupación y las que ingresan o pierden su empleo no logran encontrar uno.

Para resumir estos datos sin profundizar demasiado, podría decirse que el entramado urbano de Entre Ríos tiene una estructura ocupacional heterogénea en términos de calificaciones ocupacionales entre los tres aglomerados, con mayores calificaciones, tamaño de establecimientos y menor proporción de Trabajadores Familiares en el aglomerado de mayor tamaño, pero que conservan gran cantidad de personas en categorías empleado y obrero y trabajos de calificaciones intermedias. No se constatan diferencias demasiado preponderantes en términos de dinámica laboral, podemos decir que los grupos más afectados por contracciones macroeconómicas son mujeres y jóvenes.

Gráfico 13: Tasa de Desocupación en Gran Paraná y Concordia (tercer trimestre de 2003 a cuarto trimestre de 2022) y Resto de Entre Ríos (terceros trimestres entre 2010 y 2022). Distribución por rangos de edad.



Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Permanente de Hogares y Encuesta Permanente de Hogares - Total Urbano.

En este sentido, se refleja la estructura productiva heterogénea y la preponderancia de empleos en el sector primario y de servicios en relación a población urbana. Este hecho nos brinda un soporte en términos de entramado económico estructural para determinar luego las relaciones ocupacionales y, por ende, de clases sociales.

A continuación, se exponen datos de la Estructura Social de los aglomerados Gran Paraná y Concordia para el año 2022, utilizando la CSO, y un cálculo por año para cada aglomerado desde 2006 hasta el 2022, para evaluar los cambios posibles dentro de esta estructura.

Estructura social de Entre Ríos: aproximación a partir de los aglomerados de Gran Paraná y Concordia.

Uno de los objetivos de este trabajo es avanzar sobre la construcción de una estructura ocupacional en la provincia de Entre Ríos que nos permita poder estudiar clases sociales a través de un esquema o estratificación por clases, en este caso utilizando el clasificador de Condición Socio-Ocupacional.

El Clasificador de Condición Socio-Ocupacional es utilizado para este trabajo dado que recupera los entramados económicos como una forma de ligar estructura económica y estructura social. En este sentido, como se menciona anteriormente, se opta por este clasificador dado que recupera las bases económicas en las cuales la población se sustenta para obtener posiciones en la estructura social. Como se disponen de datos cuantitativos, es posible utilizar definiciones y operacionalizaciones que den cuenta de la estructura económica y ocupacional que está detrás de la estructura de clases, y no se puede ir a factores superestructurales como los jurídicos, políticos o ideológicos (Clemenceau et al, 2016).

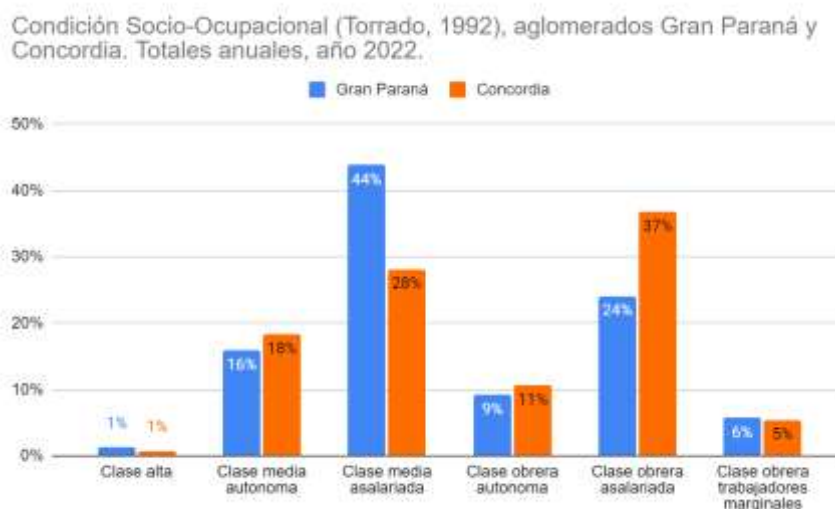
Este tipo de cálculos plantea algunas dificultades en entramados subnacionales o regionales que se relacionan a la representatividad de los datos, la cobertura geográfica y las disparidades o heterogeneidades propias de cada región. Entonces, calcular estructuras de clase de forma anual o con bases de datos unidas para poder agregar datos es una forma de salvar esta dificultad.

Sumado a esto, al inicio del trabajo nos interrogamos acerca de la existencia de una “estructura social entrerriana”, que sea representativa o contenga las diversas realidades provinciales. En este caso, se presenta el cálculo para los dos aglomerados más grandes de la provincia de Entre Ríos, para evaluar sus diferencias; y seguidamente un cálculo de la evolución de estas estructuras en cada aglomerado para examinar si presentan tendencias distintas de cambio en dichas estructuras de clase.

Si observamos el primer gráfico siguiente, veremos que el aglomerado Gran Paraná contiene en su estructura un mayor porcentaje de personas en la categoría “Clase media asalariada”, mientras que en Concordia es mayor la proporción de “Clase obrera asalariada”, en el resto de la categorías, no se presentan mayores diferencias entre clases.

La hipótesis que podemos desarrollar sobre esta distribución es que está basada en el heterogeneidad productiva y laboral presente entre estos aglomerados: en Gran Paraná hay mayor cantidad de personas empleadas de calificación “Profesional”, en establecimientos de mayor cantidad de personas trabajando y con mayor proporción de trabajadores “Obreros o Empleados”, mientras que, según se examinó en los antecedentes, en Concordia hay mayor dinámica en la actividad primaria (citricola, frutihortícola o forestal) o agroindustrial, lo que brinda mayores posibilidades de estar empleado/a en un trabajo de características de clase obrera asalariada. Sumado a esto, Gran Paraná contiene a la capital provincial como gran centro administrativo y de consumo que brinda mayores posibilidades a trabajadores profesionales.

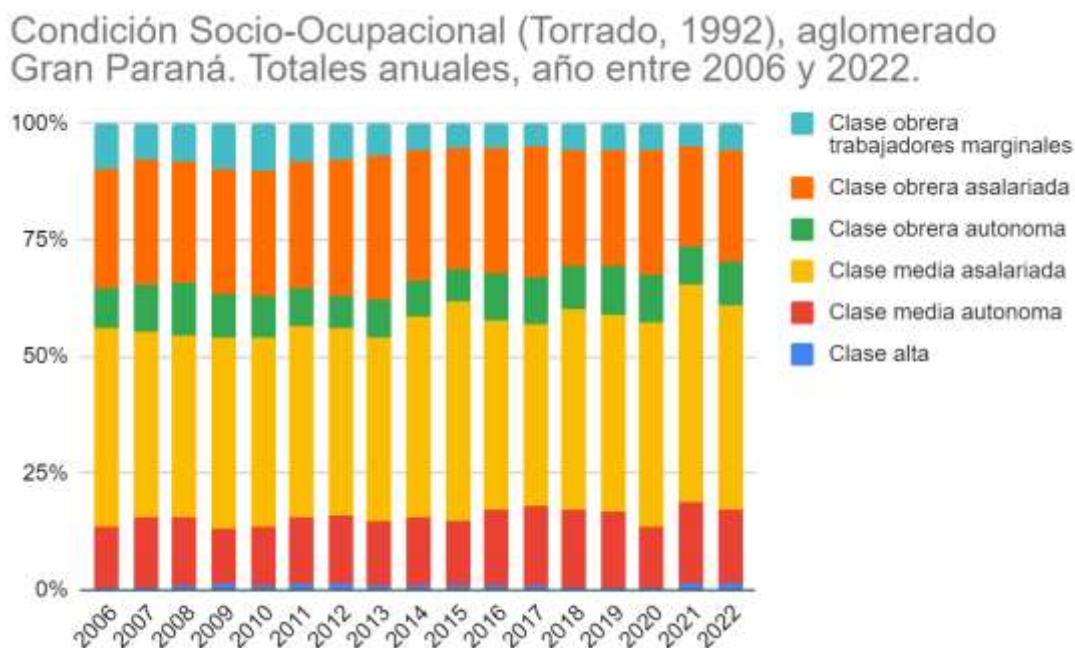
Gráfico 14: Condición Socio-Ocupacional por aglomerado. Gran Paraná y Concordia. Año 2022.



Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Permanente de Hogares.

Por otro lado, en términos de evolución de las estructuras de clase, las proporciones de cambio entre las estructuras siguen algunos patrones similares en el periodo. En primer lugar, incrementan las clases medias asalariadas en ambos aglomerados hacia el año 2015, para luego disminuir su participación relativa entre 2015 y 2020 en el caso de Gran Paraná y con una tendencia de disminución hasta 2022 en Concordia. Estos incrementos se ven reflejados en disminuciones de Clases obreras y Clases Obreras marginales en ambos aglomerados cuando inicia el periodo y con la volatilidad en los cambios de los estratos de clases media y obreras asalariadas, visible en mayor magnitud en Gran Paraná.

Gráfico 15: Condición Socio-Ocupacional en Gran Paraná. Porcentajes por año desde 2006 a 2022.

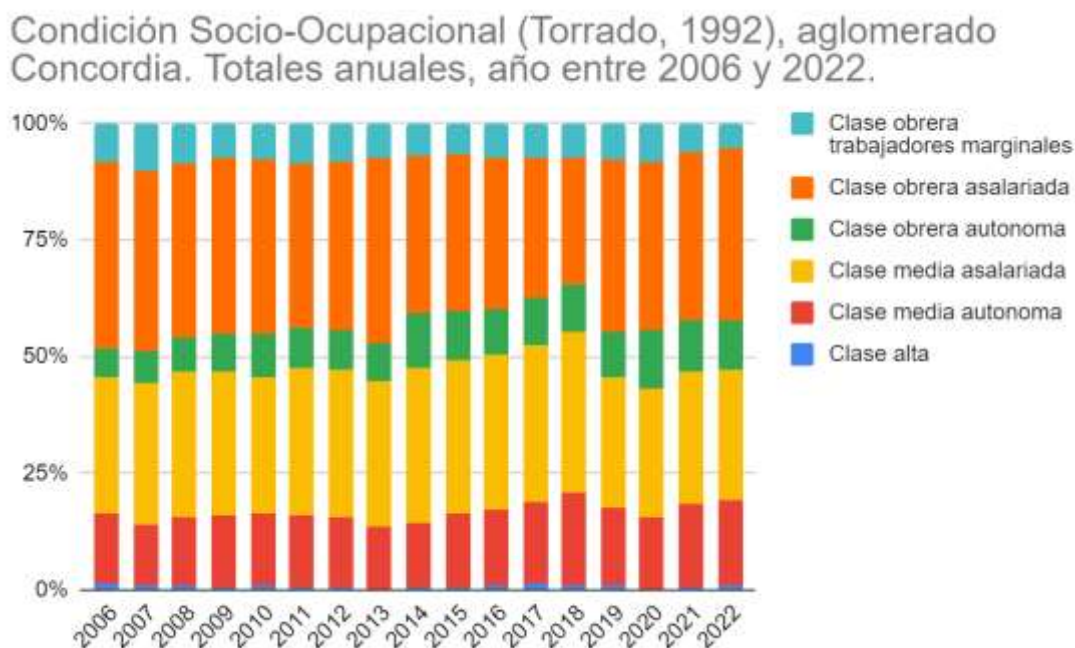


Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Permanente de Hogares.

Los estratos de clase autónoma, tanto de clase media como de clase trabajadora poseen una cierta estabilidad en todo el periodo en ambos aglomerados, reflejándose más en las clases medias autónomas que en las trabajadoras, que tienen un piso mínimo de 7% en Gran Paraná y de 6% en Concordia, que varía en un sentido contrario a las clases asalariadas, comenzando con una estabilidad más marcada en el periodo y acentuando su incremento a finales del periodo (2015 en adelante), cuando las condiciones macroeconómicas y laborales se hacen más dificultosas.

Un aspecto a destacar es que las clases marginales no parecen configurar un problema en el sentido cuantitativo ni en términos de dinámica, dado que el promedio de 8% en Concordia y de 6% en Gran Paraná no tienen incrementos o disminuciones que demuestren ser un factor de volatilidad o de escape desde otras clases hacia esta misma.

Gráfico 16: Condición Socio-Ocupacional en Concordia. Porcentajes por año desde 2006 a 2022.



Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Permanente de Hogares.

Aquí se pudo esbozar una estructura y evolución de las clases sociales urbanas de la Provincia de Entre Ríos, sirviendo de base para poder continuar con el análisis de la estructura ocupacional y social de la provincia de Entre Ríos. Cabe destacar que este es un estudio que brinda una primera descripción y aproximación a la estructura de clases en la provincia, por ello se detallan algunas preguntas y problemas de investigación futuras.

Reflexiones finales

El objetivo de este trabajo es recuperar la estructura socio-ocupacional y su evolución en los últimos 20 años en el contexto urbano de Entre Ríos, utilizando para ello la Encuesta Permanente de Hogares. Esto, con la finalidad de reconstruir una estructura de clases basada en las ocupaciones de las personas.

En este marco, las clases sociales se estudian como una forma de determinar condiciones de personas o grupos de personas con una característica o categorías comunes: las personas de determinadas clases sociales comparten consumos, condiciones de vida, etc. Entonces, analizar las estructuras de clase nos diría algo sobre el acceso a condiciones de vida en determinada sociedad, en este caso, la entrerriana.

Las clases sociales, también tienen un trasfondo de orden económico y jurídico político, con mayor o menor grado de importancia de cada uno de acuerdo a qué autor se lea: para Marx la economía (o las relaciones sociales de producción) es anterior al orden jurídico y para Weber esta relación está invertida (Sautu, 2011).

A partir de esto, podremos tomar una definición breve de la estructura económica de Entre Ríos: la principal actividad económica es la producción primaria, de industria manufacturera alimenticia y de servicios de comercio y actividades inmobiliarias. A su vez, la mayor parte de los empleos registrados se encuentran en estos sectores. La estructura laboral, social y las rigideces estructurales que presentan las dinámicas sociales reflejan esta estructura.

Pasando a la estructura laboral y ocupacional, los aglomerados del entramado urbano de la provincia comparten diversas características que hacen pensar una homogeneidad en términos laborales. En primer lugar, las estructuras ocupacionales de Gran Paraná, Concordia y Resto de Entre Ríos poseen tres cuartas partes de su fuerza laboral en empleados u obreros, con alrededor de un 20% cada uno de trabajadores por cuenta propia y el resto se divide entre un 5% en promedio de patrones y una ínfima parte de Trabajadores Familiares Sin Remuneración, que crecen a medida que el aglomerado es más pequeño (podría pensarse como señal de la informalidad laboral).

Por otro lado, un rasgo distintivo es la importancia del empleo de calificaciones operativas y no calificadas en la provincia, sólo con Gran Paraná en un 5% de ocupados con calificación profesional y en el resto 2%, sumando las personas de menor calificación más de un 80% de los ocupados en los tres aglomerados. Si ligamos esta situación al tamaño del establecimiento donde trabajan, la mayor cantidad de personas está empleada en establecimientos medianos y pequeños, con los pequeños teniendo mayor preponderancia en Concordia y Resto de Entre Ríos, y una importancia mayor de establecimientos grandes en Gran Paraná.

Con esto podemos afirmar que la mayor parte de la fuerza laboral ocupada en la provincia con mayores calificaciones y tamaños de establecimientos está en Gran Paraná, mientras que en los demás predominan los establecimientos pequeños y medianos y las calificaciones menores. Sin embargo, se debe evaluar la relación entre el trabajo y sus características con el aporte económico de cada aglomerado a las actividades más importantes, dado que Concordia tiene una mayor actividad económica en relación al sector primario, siendo este el más importante en la provincia.

Teniendo en cuenta la evolución general de las tasas de actividad, ocupación y desempleo, se comparten ciertas características específicas relacionadas, como es de esperarse, al contexto macroeconómico: la participación laboral y el empleo, así como el desempleo siguen tendencias generales de tres momentos, el primero con una caída en actividad económica y desempleo, y crecimiento de la ocupación, signo de la recuperación post crisis (2003 a 2009); luego crecimiento de la actividad con una ocupación oscilante (muchos más en Concordia y RER), generando incremento en el desempleo, o al menos un estancamiento en la caída del desempleo. Finalmente, se da un periodo discontinuado de crecimiento económico con crecimiento de la ocupación entre 2016 y 2018 y 2021 y 2022, que también conllevan incremento de la actividad y desempleo; es decir, la imposibilidad del mercado de absorber la oferta laboral y de amortiguar mediante el empleo la caída de los ingresos.

El último aspecto a destacar sobre el mercado laboral de ambos aglomerados es que las principales afectadas dentro de la problemática de desempleo o falta de empleo son las personas jóvenes y las mujeres (si combinamos mujeres con jóvenes el efecto debería ser conjunto) con menores tasas de actividad, ocupación y mayor desempleo, también siendo quienes tienen mayores transiciones y volatilidad, las mujeres y los jóvenes deben salir *al* mercado laboral ante

insuficiencias de ingreso y tienen mayor desempleo y menos empleo pero también son quienes deben salir primero *del* mercado cuando hay recesión.

Para reconstruir la estructura social de la provincia de Entre Ríos, utilizamos los aglomerados de Gran Paraná y Concordia presentes en la EPH entre 2006 y 2022, tomando el clasificador denominado Condición Socio-Ocupacional (CSO). Un hecho a destacar es que en el año 2022 ambos aglomerados tienen distintas participaciones porcentuales de clases medias, en Gran Paraná hay una mayor participación de clases medias asalariadas mientras que en Concordia la mayor proporción está ocupada por las clases obreras asalariadas. Sin embargo, las tendencias en términos de evolución de estas clases son similares: a inicio del periodo crecen las clases medias en detrimento de las clases autónomas y las clases trabajadoras marginales mientras que en periodos de crisis macroeconómica las clases autónomas crecen en comparación al resto y disminuyen las clases medias y obreras asalariadas.

Cabe destacar que estos cálculos se realizan con las personas activas en el mercado laboral, por lo que cuando hay momentos de salida del mercado laboral o incrementos de la inactividad laboral o desempleo se generan cambios en las proporciones que no se condicen exactamente con incrementos en términos absolutos de las clases y si con disminuciones absolutas de las demás.

Las reflexiones que podríamos tomar de estos cálculos de estructuras de clase es que los aglomerados poseen estructuras de clase distintas de acuerdo a sus heterogeneidades laborales y productivas, que se plasman luego en las posibilidades laborales de las personas y, por consecuencia, en las estructuras socio-ocupacionales. Estos datos son una base para poder construir indicadores a futuro de condiciones de vida y diversos fenómenos sociales asociados a las clases sociales. Sin embargo, como recuperamos de Torrado (1978), el estudio de estas clases sociales debe complementarse con el estudio de los aspectos ideológicos, jurídicos y políticos que intervienen en la conformación propia de estas clases (p. 349).

Bibliografía

Abal Medina, P., Natalucci, A., & Rosso, F. (2017). ¿Existe la clase obrera? <https://www.eldiplo.org/wp-content/uploads/2020/04/3-existe-la-clase-obrera.pdf>

Bardomas, S. M. (2009). *Trabajadores de aquí y de allá: La migración a dos mercados de trabajo agrícola de la Argentina*. <https://notablesdelaciencia.conicet.gov.ar/handle/11336/55018>

Benza Solari, G. M., & Heredia, M. L. (2018). *La estructura social provincial: Reflexiones sobre la geometría de la sociedad inspiradas en el Chaco*. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/136944>

Bevilacqua, L., Mingo, G., & Gottig, N. (2024). Análisis del rol de la industria entrerriana en la matriz exportadora, período 2001-2022. *Revista Tiempo de Gestión*, 35, 56-74.

Clemenceau, L., Melián, M. C. F., & de la Fuente, J. J. R. (2016). *Análisis de esquemas de clasificación social basados en la ocupación desde una perspectiva teórica-metodológica comparada*. IIGG.

Dalle, P., Jorrat, J. R., & Riveiro, M. (2018). Movilidad social intergeneracional. En *La Argentina en el siglo XXI: cómo somos, vivimos y convivimos en una sociedad desigual*.

Encuesta Nacional sobre Estructura Social. (pp. 147-182).

Flores, N. E. (2023). La brecha de productividad e innovación en Entre Ríos. Una caracterización a partir del modelo de Brechas Estructurales de Desarrollo de CEPAL (2003-2020). *Pampa (Santa Fe)*, 28, 72-72. <https://doi.org/10.14409/pampa.2023.28.e0072>

Jordán, A. (2014). Formas de organización sindical y prácticas gremiales en el Complejo Agroindustrial Frutícola de la provincia de Entre Ríos (Argentina). *Trabajo y sociedad*, 23, 205-226.

Mateo, J. A., Camarda, M., & Rodríguez, L. (2017). *Poblamiento, despoblamiento y repoblamiento de la provincia de Entre Ríos: Un ensayo de demografía histórica (1869-2010)*. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/74430>

Muñoz, R. (2015). Condiciones de trabajo en las nuevas producciones frutícolas de exportación: El caso del arándano en la provincia argentina de Entre Ríos, 2002-2010. *Trabajo y sociedad*, 25, 371-386.

Orsini, G. A., & Domínguez, N. (2009). *Impactos en la estructura agraria por la ampliación de la frontera agrícola en base a la expansión del cultivo de soja en la Región Pampeana: La historia reciente de Entre Ríos*. https://www.academia.edu/3355207/Impactos_en_la_estructura_agraria_por_la_ampliaci%C3%B3n_de_la_frontera_agr%C3%ADcola_en_base_a_la_expansi%C3%B3n_del_cultivo_de_soja_en_la_Regi%C3%B3n_Pampeana_la_historia_reciente_de_Entre_R%C3%ADos

Orsini, G., Serfaty, N., Locher, M. V., Haberkorn, M. J., & Bevilacqua, M. (2019). “Una aproximación a la estructura del empleo en la Región Centro”. XIV Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, 7 al 9 de agosto de 2019, Buenos Aires (Argentina). Grupo Temático N 4: Trabajo, trabajadores y estructura social Coordinadores: Verónica Maceira, Agustín Nieto y German Rosati. https://aset.org.ar/congresos-antiores/14/ponencias/4_Orsini.pdf

Reta, M. (2005). El trabajo en las clases sociales más desprotegidas. ¿Factor de inclusión o exclusión social? IV Jornadas de Sociología de la UNLP 23-25 de noviembre de 2005 La Plata, Argentina. *La Argentina de la crisis: Desigualdad social, movimientos sociales, política e instituciones*. <https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/library?a=d&c=eventos&d=Jev6620>

Reta, M., & Toler, S. (2013). Informalidad laboral por inserción endeble: El caso de Concordia (Entre Ríos, Argentina). *Ciencia, docencia y tecnología*, 46, 97-121.

Romero, M. L. (2020). La inserción laboral de las mujeres en la región centro (2003-2018): Diferencias entre varones y mujeres. de *ECONOMÍA y SOCIEDAD*, 117.

_____. (2022). Título: *Movilidad Social en Argentina desde fines del siglo XIX hasta nuestros días: una aproximación desde los estudios clásicos y los recientes*. <http://jornadassociologia.fahce.unlp.edu.ar/xi-jornadas/actas/ponencia-220711114641479523/@download/file/RomeroPONMesa16.pdf>

Sacco, Nicolás; José Rodríguez de la Fuente y Sofía Jaime (2022). Libro de Cocina para el Análisis de las Clases Sociales en Argentina. <https://nsacco.github.io/clases-arg/>

Sautu, R. (2011). *El análisis de las clases sociales: Teorías y metodologías*. Ediciones Luxemburg.

Solís, P., & Boado, M. (2016). *Y sin embargo se mueve... Estratificación Social y movilidad intergeneracional de clase en América Latina*. (Primera). El Colegio de México.

Torrado, S. (1978). Clases sociales, familia y comportamiento demográfico: Orientaciones metodológicas. *Demografía y economía*, 12(3), 343-376.

_____ (1992). Estructura social de la Argentina, 1945-1983. En *Estructura social de la Argentina, 1945-1983* (pp. 556-556).

Wright, E. O. (2005). *Approaches to class analysis*. Cambridge University Press.

Semblanza

Matías Leonel Romero

Licenciado en Economía y Doctorando en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Becario Doctoral cofinanciado de CONICET y UNER. Investiga sobre Juventudes y desigualdades de clases sociales en la Provincia de Entre Ríos. Docente en Universidad Autónoma de Entre Ríos y Universidad Nacional del Litoral.

Disciplina: Sociología Económica.

Subdisciplina: Estratificación Social.

Tipo de estudio: estudio descriptivo.

ARTÍCULOS



SOBREEDUCACIÓN Y SOBREPOBLACIÓN RELATIVA. LA FUERZA DE TRABAJO UNIVERSITARIA ARGENTINA POR SECTOR DE EMPLEO A LO LARGO DEL PERÍODO 2004-2023

Lola Fainsod

lolifainsod20@gmail.com

Universidad de Buenos Aires. Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (CEPED), Facultad de Ciencias Económicas (FCE). Instituto Interdisciplinario de Economía Política. Buenos Aires, Argentina. CONICET - Universidad de Buenos Aires. Instituto Interdisciplinario de Economía Política. Buenos Aires, Argentina.

Damián Kennedy

damian.kennedy.fco@gmail.com

Universidad de Buenos Aires. Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (CEPED), Facultad de Ciencias Económicas (FCE). Instituto Interdisciplinario de Economía Política. Buenos Aires, Argentina. CONICET - Universidad de Buenos Aires. Instituto Interdisciplinario de Economía Política. Buenos Aires, Argentina.

Ignacio Paola

ignaciolpaola@gmail.com

Universidad de Buenos Aires. Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (CEPED), Facultad de Ciencias Económicas (FCE). Instituto Interdisciplinario de Economía Política. Buenos Aires, Argentina. CONICET - Universidad de Buenos Aires. Instituto Interdisciplinario de Economía Política. Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN

En nuestro país, al menos desde comienzos de este siglo, la sobreeducación de la fuerza de trabajo universitaria se constituyó en un fenómeno de carácter estructural, en exceso a las propias necesidades cíclicas. Dicho carácter estructural conlleva al debate respecto a la “funcionalidad” de los excedentes de población.

El presente artículo se propone como objetivo principal investigar la dinámica evidenciada por los universitarios sobreeducados según *sector* de empleo (formal, informal y público) en relación con aquella ocupada en puestos de trabajo acorde a su formación, tanto en términos de significancia cuantitativa como de ingresos y calidad del vínculo laboral. La fuente de

información está constituida por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) continua, relevada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El período de análisis abarca los subperíodos 2004-2014 y 2016-2023.

Dos son los resultados principales. Por un lado, que una creciente porción de la fuerza de trabajo universitaria su ocupa en el *sector formal* (independientemente del ciclo económico) y el *sector público* (en el primer subperíodo), mientras que en el *sector informal* se evidencia un crecimiento moderado en el segundo subperíodo. Por el otro, que la fuerza de trabajo universitaria sobreeducada en el *sector formal* y el *sector público* constituye, de modo general, un elemento regulador del ingreso y calidad del empleo de aquella en puestos profesionales del *sector formal* (con más fuerza en el primer subperíodo), mientras que -al menos de modo contundente- lo propio no puede afirmarse en relación con los universitarios del *sector informal*.

Palabras clave: Calificación del puesto, Universitarios, Sector de empleo, Salarios, Calidad del empleo.

OVEREDUCATION AND RELATIVE SURPLUS POPULATION. ARGENTINIAN UNIVERSITY WORKFORCE BY EMPLOYMENT SECTOR OVER THE PERIOD 2004-2023

Abstract

In our country, at least since the beginning of this century, the overeducation of the university workforce has become a structural phenomenon, exceeding cyclical needs. This structural characteristic leads to a debate regarding the "functionality" of the surplus population.

The main objective of this article is to investigate the dynamics evidenced by overeducated university graduates according to employment sector (formal, informal, and public) in relation to those employed in jobs aligned with their education, both in terms of quantitative significance and income and quality of the employment relationship. The information source is the survey Encuesta Permanente de Hogares (EPH) conducted by the Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). The analysis period covers the sub-periods 2004-2014 and 2016-2023.

There are two main findings. Firstly, a growing portion of the university workforce is employed in the formal sector (regardless of the economic cycle) and the public sector (in the first sub-period), while a moderate increase in the informal sector is observed in the second sub-period. Secondly, the overeducated university workforce in the formal and public sectors generally acts as a regulating element for the income and quality of employment of those in professional positions in the formal sector (more strongly in the first sub-period), whereas this cannot be definitively asserted for university graduates in the informal sector.

Key-words: Job qualification, University graduates, Employment sector, Wages, Job quality

EXCESSO DE EDUCAÇÃO E POPULAÇÃO EXCEDENTE RELATIVA. FORÇA DE TRABALHO UNIVERSITÁRIA ARGENTINA POR SETOR DE EMPREGO NO PERÍODO 2004-2023

RESUMO

Em nosso país, pelo menos desde o início deste século, a supereducação da força de trabalho universitária tornou-se um fenômeno estrutural, em excesso às necessidades cíclicas. Esse caráter estrutural leva a um debate sobre a "funcionalidade" da população excedente.

O principal objetivo deste artigo é investigar a dinâmica dos estudantes universitários com excesso de escolaridade de acordo com o setor de emprego (formal, informal e público) em relação àqueles empregados em empregos alinhados com sua formação, tanto em termos de significância quantitativa quanto em termos de renda e qualidade do vínculo empregatício. A fonte de informações é a Pesquisa Permanente de Domicílios (Encuesta Permanente de Hogares, EPH), uma pesquisa contínua realizada pelo Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). O período de análise abrange os subperíodos 2004-2014 e 2016-2023.

Há dois resultados principais. Por um lado, uma parcela crescente da força de trabalho universitária está empregada no setor formal (independentemente do ciclo econômico) e no setor público (no primeiro subperíodo), enquanto o setor informal apresenta crescimento moderado no segundo subperíodo. Por outro lado, a força de trabalho universitária com formação superior nos setores formal e público é, em geral, um elemento regulador da renda e da qualidade do emprego dos primeiros em cargos profissionais no setor formal (mais fortemente no primeiro subperíodo), enquanto que - pelo menos de forma convincente - o mesmo não pode ser afirmado em relação aos graduados universitários no setor informal.

Palavras-chave: Qualificação profissional, Graduados universitários, Setor de emprego, Salários, Qualidade do emprego.

INTRODUCCIÓN⁴⁴

La existencia una parte de la fuerza de trabajo como sobrepoblación relativa para las necesidades inmediatas de la acumulación de capital -que conserve los atributos productivos necesarios para la participación en el proceso de producción- constituye un elemento necesario para garantizar el movimiento fluido de la misma, por dos razones fundamentales: por un lado, resulta una fuerza de trabajo disponible para momentos de expansión del ciclo económico (o para ser empleada en actividades nuevas); por el otro, impone un límite al salario (y a las condiciones laborales en general) de la fuerza de trabajo en activo (Marx, 1995 [1867]). Sobre la base de lo anterior se desarrolla un extenso y rico debate en torno a la “funcionalidad” de los excedentes de población.

Por un lado, la teoría de la marginalidad plantea la existencia de un sector competitivo de baja productividad, cuyos ocupados no cuentan con las aptitudes productivas apropiadas para regular las condiciones de contratación de los del sector monopólico, perdiendo su carácter de “ejército de reserva” y convirtiéndose, por tanto, en una “masa marginal” respecto de éste (Nun, 1969). Esta segmentación del mercado de trabajo se encuentra también presente en el enfoque del sector informal urbano, sector de empleo que constituye una forma de ocupación de los excedentes de fuerza de trabajo que no logra absorber el sector dinámico de la economía, y en

⁴⁴ El artículo se realizó en el marco del Proyecto UBACyT 21020230200164BA (Categoría Modalidad I – Conformación 3 – Programación 2023) dirigido por Damián Kennedy. Los autores agradecen a Lucas Terranova y Guido Weksler por sus comentarios a versiones anteriores de este artículo, así como también al resto de los integrantes del CEPED, quienes aportaron comentarios adicionales en la presentación grupal de los principales resultados del trabajo. Asimismo, expresamos nuestro profundo agradecimiento a los evaluadores anónimos por sus comentarios a versiones anteriores de este artículo, que permitieron una exposición más clara de varias categorías y pasajes del texto. Finalmente, debe destacarse que es una preocupación de los autores la utilización de un lenguaje que no discrimine a varones y mujeres. Sin embargo, con el propósito de evitar reiteraciones que dificulten la lectura, en adelante se emplea el masculino genérico clásico, teniendo presente que con ello se remite a todos/as los/as trabajadores/as.

la que, dada su característica baja productividad relativa (dado el bajo monto de capital necesario), se evidencian sus peores condiciones relativas en términos de empleo e ingresos (Poy, 2017; Salvia, 2012). Adicionalmente, el sobreempleo en el sector público (definido como un número de puestos que excede el necesario dada la cantidad y la calidad de los servicios prestados) en ocasiones también se identifica como una manifestación de la absorción insuficiente de mano de obra por parte del sector dinámico (Monza, 1993)⁴⁵.

Por el otro, Marticorena (2011) ha cuestionado la segmentación propuesta en ambos enfoques (aunque con énfasis en el primero), señalando que las modalidades latentes y estancada de la sobrepoblación relativa son ignoradas, reduciendo el ejército industrial de reserva a la modalidad fluctuante⁴⁶. En el mismo sentido, Rosati (2021) pone el foco en las transiciones laborales que ocurren desde el segmento secundario (masa marginal / sector informal) al segmento primario (sector monopólico / sector formal) del mercado de trabajo, de modo que los mismos aparecen más bien como diferentes posiciones que pueden ser ocupadas por diversos sujetos (lo que no anula la existencia de diferencias entre los mercados de trabajo).

La problemática de la sobreeducación (esto es, la existencia de trabajadores ocupados en puestos de trabajo en los que desempeña tareas de menor complejidad en relación con su grado de formación) resulta -al menos en nuestro país- un fenómeno sumamente interesante para intervenir en el referido debate. En términos conceptuales, en tanto es posible afirmar que la fuerza de trabajo sobreeducada impone un límite al salario (y a las condiciones laborales en general) de la fuerza de trabajo en ocupaciones acordes a su grado de formación⁴⁷. En términos empíricos, en tanto en Argentina desde la década del noventa evidencia un notable crecimiento (con particular incidencia en jóvenes, mujeres y trabajadores de menor experiencia) (INDEC, 1997 y 1998; Maurizio, 2001; Riquelme y Herger, 2003; Pérez, 2005; Salas, 2006; Salvia e Iñigo, 2011). Fundamentalmente por razones metodológicas (que se exponen en el primer apartado) el presente artículo se focaliza en la fuerza de trabajo universitaria, la cual no estuvo exenta de la creciente sobreeducación al menos desde inicios del presente siglo, con persistencia entre personas pertenecientes a distintos grupos etarios (y no exclusivamente en los inicios de la vida laboral) (Donaire, 2017; Weksler, 2020).

En tal contexto, el presente artículo se propone como objetivo principal investigar la dinámica evidenciada por la fuerza de trabajo universitaria sobreeducada según *sector* de empleo (formal, informal y público) en relación con aquella ocupada en puestos de trabajo

⁴⁵ Más allá de lo intuitivo de la definición de sobreempleo, su aplicación al análisis no resulta tan directa, en tanto el empleo público depende de factores normativos, demográficos, dimensión territorial, etc. Un análisis detallado puede encontrarse en Arakaki y Terranova (2023).

⁴⁶ Las determinaciones de las modalidades de existencia de la sobrepoblación relativa identificadas por Marx, siguiendo a Cazón *et al* (2018) pueden sintetizarse así: la sobrepoblación relativa fluctuante es aquella que se ve repelida y luego atraída de la producción en función del ciclo económico. La sobrepoblación relativa latente se encuentra formada por la población rural que es desplazada hacia la ciudad cuando las actividades primarias se maquinizan. La sobrepoblación relativa estancada es aquella fuerza de trabajo en activo pero ocupada de manera irregular, con condiciones de empleo por debajo del nivel medio normal de la clase trabajadora (constituyéndose en una fuente extraordinaria de valorización para los capitales individuales). Finalmente, en la exposición pueden encontrarse elementos que describen a la sobrepoblación relativa consolidada, esto es, una porción de la población arrojada al pauperismo, con constante pérdida de atributos productivos y, por tanto, crecientemente no apta para el trabajo (Iñigo Carrera, 2008).

⁴⁷ Si bien existe una clara asociación entre nivel de ingreso y calidad del vínculo, se considera relevante el tratamiento de dichas dimensiones separadamente, dado que a partir de la tasa de no registro se procuran captar otras características del vínculo laboral, que dan cuenta de una mayor precariedad del mismo.

acorde a su formación, tanto en términos de significancia cuantitativa como de ingresos y calidad del vínculo laboral⁴⁸. Dos hipótesis principales guían el trabajo: por un lado, que los universitarios sobreeducados presentan una creciente participación en los tres sectores de empleo; por el otro, que se evidencia un achicamiento de la brecha de ingresos y de calidad del vínculo respecto a los universitarios en puestos profesionales del *sector formal* (aunque perdurando sus peores niveles relativos), reflejando una mayor presión de los universitarios sobreeducados respecto a aquellos en puestos profesionales. De esta forma, se espera sumar argumentos respecto a las limitaciones de las categorías de *sector formal* y *sector informal* a los fines de la identificación y análisis de la fuerza de trabajo excedente a las necesidades inmediatas de la acumulación (sin con ello negar la riqueza de los enfoques de la masa marginal y el sector informal urbano, particularmente habida cuenta de las muy fructíferas evidencias empíricas que a partir de ellos se genera -especialmente en lo que corresponde al segundo-).

La fuente de información está constituida por las bases usuarias de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) continua, relevada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El período de análisis abarca el lapso 2004 – 2023, a lo largo del cual se considerarán los subperíodos 2004-2014 y 2016-2023, distinción que se justifica tanto por razones técnicas propias de la fuente de información (que se expondrán más adelante) como por constituir el primero un ciclo de crecimiento económico, de la demanda de fuerza de trabajo, del poder adquisitivo de los ingresos reales y de reducción de la precariedad laboral, y el segundo uno de estancamiento económico y de la demanda de fuerza de trabajo generalizado, y de retroceso en términos de ingresos reales y precariedad laboral⁴⁹.

A tales fines, el presente artículo se organiza de la siguiente manera. En el primer apartado se exponen los criterios metodológicos adoptados tanto para la determinación de los sectores de empleo como para la identificación de los sobreeducados universitarios, así como también algunas precisiones relevantes respecto a la EPH. El segundo apartado, por su parte, se focaliza en la evolución de la distribución de la fuerza de trabajo universitaria en puestos profesionales y sobreeducada por *sector* de empleo (*formal, informal, y público*). Sobre esta base, el tercer apartado se centra en el análisis del nivel y evolución de ingresos y precariedad de la fuerza de trabajo universitaria sobreeducada por sector de empleo en relación con la aquella ocupada en puestos profesionales del *sector formal*. Finalmente, en el último apartado se presentan las principales conclusiones del artículo, así como también se identifican algunas posibles líneas de investigación futuras.

FUNDAMENTOS Y CRITERIOS METODOLÓGICOS

⁴⁸ Debe destacarse que dicha afirmación se realiza con un carácter general, esto es, sin tener en cuenta las particularidades de las características de las distintas fuerzas de trabajo universitarias, cuestión que dota de una rigidez mayor a la idea del potencial reemplazo que pueda ejercer la fuerza de trabajo sobreeducada.

⁴⁹ Estrictamente, el subperíodo 2004-2014 encierra años de retroceso y estancamiento, de igual modo que el subperíodo 2016-2023 incluye años de crecimiento y retroceso. Más aún, desde el punto de vista de la evolución del producto, lo correcto sería considerar el lapso 2004-2011 como de crecimiento y el lapso 2012-2023 de estancamiento. No obstante, a los fines de simplificar el análisis y tomando en consideración el tipo de información con la cual aquí se trabaja, se optó por considerar los subperíodos según las características de la EPH, los cuales resultan aproximadamente los mismos que los que surgen de la evolución económica general.

En torno a la Encuesta Permanente de Hogares

La EPH tiene por objeto relevar las características sociodemográficas y socioeconómicas de la población de los principales aglomerados urbanos del país. En su actual modalidad continua produce datos con frecuencia trimestral, encontrándose vigente desde el tercer trimestre de 2003. Dados los objetivos propuestos en el presente artículo, su utilización como fuente de información requiere de la explicitación de algunas consideraciones específicas de distinto carácter, las cuales se exponen sin orden de importancia.

En primer lugar, dado el reducido tamaño de la población de estudio, en el presente artículo los valores de cada variable analizada corresponden al promedio anual. En este sentido, a) se excluye del análisis los años 2003 y 2015 (para los cuáles se cuenta información sólo para dos trimestres), y b) debe tenerse en cuenta que en la información de 2007 y 2016 corresponde al promedio de tres trimestres (en tanto no se cuenta con información del tercer y primer trimestre, respectivamente). En segundo lugar, debe mencionarse que, si bien la intervención del INDEC a lo largo del lapso 2007-2015 afectó explícitamente a la información correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), existen distintas evaluaciones respecto a la generalidad de los indicadores producidos por el organismo durante este período⁵⁰, contexto en el cual entre 2013 y 2014 se llevó a cabo la incorporación de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010⁵¹. Por dichas razones, los datos de esos años deben ser tomados con cautela. En tercer lugar, la información correspondiente al año 2020 no sólo refleja particularmente el impacto que en el mercado de trabajo tuvieron las restricciones a la circulación de personas y el cierre total o parcial de diversas actividades como consecuencia de la irrupción de la pandemia de coronavirus COVID-19, sino también se haya afectada por el cambio de modalidad de captura de información (de presencial a telefónica). Por esta razón, a lo largo del presente artículo no se considera dicho año en el análisis, en tanto su inclusión puede distorsionar las tendencias de más extenso alcance temporal.

Tomando en consideración lo mencionado en los tres párrafos precedentes, en el presente artículo se analizarán separadamente los subperíodos 2004-2014 y 2016-2023 (excluyendo del análisis el año 2020).

⁵⁰ En lo que respecta a la EPH, no se ha encontrado evidencia acerca de manipulación estadística en pos de mejorar el desempeño en indicadores sociales. Sí en cambio se documentan discrepancias compatibles con desprolijidades de producción y gestión primaria de los datos de la encuesta, y particularmente un marcado deterioro en el ratio de no respuesta de la misma (Minoldo y Born, 2019).

⁵¹ Entre el tercer trimestre 2013 y el segundo trimestre 2014 se incorporaron a la EPH un conjunto de cambios a partir de los resultados del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda de 2010, que implicaron no solo volúmenes de población diferentes, sino que también afectaron a la composición de la muestra en términos de sexo y-particularmente- de edad, evidenciándose una pérdida de participación del rango 30-49 años (Arakaki, 2016), en el cual la población universitaria tiene alta concentración. En este sentido, en la revisión realizada en 2016 se mantuvieron vigentes las proyecciones de población (excepto Partidos del GBA), a la par que las estructuras poblacionales por sexo y edad se retrotraen a las vigentes antes de la incorporación de los referidos cambios en 2013. Más específicamente, en dicha revisión para algunos aglomerados se detectó que los resultados difundidos no abarcaban la totalidad de estos (quedando fuera del relevamiento las áreas periféricas), a la par que para los Partidos del GBA la población total difería de la que correspondería de aplicarse la proyección de población utilizada entonces para todos los aglomerados (INDEC, 2016). Como se afirmó previamente, en 2016 se mantuvieron las proyecciones de población total (excepto GBA), a la par que las referidas áreas faltantes se incorporaron a partir del primer trimestre de 2018 para su estudio, aunque no se incluyeron en los informes de prensa, lo que sucede desde el primer trimestre de 2019, cuando se completó la actual cobertura de los 31 aglomerados urbanos (INDEC, 2019).

En torno a la identificación de la sobreeducación universitaria

A los fines de identificar empíricamente la existencia de trabajadores ocupados en puestos de trabajo en los que desempeña tareas de menor complejidad en relación con su grado de formación en el presente artículo se adopta el método objetivo o de análisis del puesto, que constituye el habitualmente utilizado en nuestro país para este tipo de análisis (a la par que el que mejor se ajusta a los términos en los cuáles se planteó la problemática en la Introducción). Para ello se requiere la información, para cada puesto de trabajo, del nivel educativo de quien lo ocupa y de las tareas vinculadas y habilidades requeridas para el mismo⁵².

En este sentido, la EPH provee información respecto al nivel educativo de los individuos, así como también de las características de la ocupación que desempeñan. En relación con lo primero, la información corresponde al máximo nivel educativo que un individuo cursa o cursó, así como a su efectiva finalización. En relación con lo segundo, el Clasificador Nacional de Ocupaciones (CNO) clasifica a las ocupaciones a partir de la articulación de cuatro dimensiones, una de las cuales es la calificación ocupacional⁵³. Esta última *“da cuenta de la complejidad de los procesos de trabajo (...) se trata de una característica objetiva de ese proceso que determina los conocimientos y habilidades requeridos a las personas que lo ejercen y que, por ende, “califica” el grado de complejidad de las ocupaciones y no de las personas”* (INDEC, 2018: 29), y se desagrega en cuatro categorías de ocupaciones: profesional, técnica, operativa y no calificadas. A los fines del presente artículo interesan particularmente las ocupaciones de calificación profesional, las cuales *“son aquellas en las que se realizan tareas múltiples, diversas y de secuencia cambiante, que suponen conocimientos teóricos de orden general y específico acerca de las propiedades y características de los objetos e instrumentos de trabajo y de las leyes y reglas que rigen los procesos. Estas ocupaciones requieren de conocimientos adquiridos por capacitación formal específica y por experiencia laboral equivalente”* (INDEC, 2018: 29).

En tal contexto, INDEC (1997) señala que los conocimientos requeridos en las ocupaciones profesionales se adquieren generalmente por la capacitación formal de nivel universitario, a la par que en INDEC (1998) se presentan las siguientes correspondencias entre calificación de la tarea y máximo nivel educativo: ocupación no calificada - primario incompleto; ocupación operativa - secundario incompleto, ocupación técnica - terciario (completo o incompleto) o universitario incompleto; y ocupación profesional - universitario completo⁵⁴. Obviamente, no cabe esperar una relación lineal entre dichas calificaciones y niveles de formación, tanto por el

⁵² Siguiendo la síntesis presentada en Weksler (2020), en la actualidad se reconocen también otros dos métodos para la delimitación y cuantificación de la sobreeducación: el subjetivo (basado en la percepción de los trabajadores) y el empírico (basado en un estadístico descriptivo -promedio, moda o mediana según el caso- de los años educativos observados en quienes desempeñan dicha ocupación).

⁵³ Las tres restantes son: carácter ocupacional, jerarquía ocupacional y tecnología ocupacional.

⁵⁴ En dicho documento se presenta una definición algo diferente de la calificación profesional, a la que se denomina científico-profesional: *“son las que se aplican a objetos complejos y heterogéneos, que utilizan como instrumentos fundamentalmente procesos intelectuales además de eventuales maquinarias y/o equipos; que realizan no sólo tareas múltiples diversas y de secuencias cambiante, sino fundamentalmente innovadoras que suponen conocimientos teóricos de orden general y específico acerca de las propiedades y características de los objetos e instrumentos de trabajo y de las leyes y reglas que rigen los procesos. Estas ocupaciones requieren de conocimientos adquiridos por capacitación formal específica y excepcionalmente por experiencia laboral equivalente”* (INDEC, 1998: 15).

hecho que los límites son en el mayor de los casos difusos, como porque la adquisición de atributos productivos para la realización de una tarea puede realizarse en la propia experiencia laboral. En este sentido, y siguiendo a Weksler (2020), en este trabajo se optó por focalizar en las ocupaciones de calificación profesional, en tanto al requerirse para ellas conocimientos teóricos de orden general y específico el vínculo con la formación universitaria se presenta de forma relativamente directa. Sin perjuicio de ello, debe considerarse que para las ocupaciones de calificación técnica también se requieren conocimientos teóricos, aunque sólo de orden específico (paralelamente a habilidades manipulativas)⁵⁵. De esta forma, es posible que tareas de calificación técnica requieran de formación universitaria, situación que al considerar la correspondencia ocupación profesional - universitario completo podría implicar una sobreestimación de la sobreeducación⁵⁶.

En este contexto, en el presente trabajo se distingue entre los universitarios en puestos profesionales y los universitarios sobreeducados (esto es, insertos en una ocupación de calificación técnica, operativa o no calificada, o desocupados). Para la identificación en la EPH de los individuos con dicha formación se utilizan conjuntamente las variables CH12 y CH13 (nivel educativo más alto cursado y finalización o no de ese nivel), de modo de considerar a quienes a) hayan finalizado sus estudios universitarios, b) se encuentren en curso de estudios de posgrado y c) hayan finalizado estudios de posgrado. Por su parte, para la identificación de la calificación de la tarea se utiliza el quinto dígito de la variable correspondiente al Clasificador Nacional de Ocupaciones.

En torno a las categorías ocupacionales y los sectores de empleo

En tanto el presente artículo procura inscribirse en el debate en torno a los vínculos entre las distintas porciones de la sobrepoblación relativa con la fuerza de trabajo plenamente activa, se optó por excluir del análisis a los patrones⁵⁷ y a los inactivos⁵⁸. Así, el universo bajo estudio se encuentra determinado por la fuerza de trabajo universitaria ocupada bajo las categorías de

⁵⁵ Más específicamente, la definición indica que ocupaciones de calificación técnica “*son aquellas en las que se realizan tareas generalmente múltiples, diversas y de secuencia cambiante que suponen paralelamente habilidades manipulativas y conocimientos teóricos de orden específico acerca de las propiedades y características de los objetos e instrumentos de trabajo y de las reglas específicas que rigen los procesos involucrados. Estas ocupaciones requieren de conocimientos y habilidades específicas adquiridos por capacitación formal previa o experiencia laboral equivalente*” (INDEC, 2018:29).

⁵⁶ En un sentido similar, Donaire (2017), quien en su estudio considera a la fuerza de trabajo con educación superior (universitaria y terciaria) en relación con los puestos de calificación profesional y técnica, señala que las ocupaciones de calificación técnica no tienen una correspondencia tan fuerte con la formación a nivel terciario, en tanto tiene sentido considerar que una porción no desdeñable de población con estudios secundarios, en cuya formación se incluye el conocimiento técnico, tienen también las aptitudes para llevar a cabo ese trabajo.

⁵⁷ Más específicamente, se considera que la capacidad de reemplazo ejercida sobre los universitarios en puestos profesionales por parte de los patrones sobreeducados presenta un mayor grado de mediación que la ejercida por las restantes categorías ocupacionales. En tal contexto, debe destacarse que a lo largo del período bajo estudio los patrones universitarios representan entre el 4% y el 8% del total de universitarios.

⁵⁸ En la misma línea que lo especificado en la nota al pie previa, se considera que de modo general los universitarios inactivos no se encuentran disponibles inmediatamente para participar del mercado de trabajo, en tanto no revestirían, en principio, el carácter de “trabajador desalentado”. Sin perjuicio de esta decisión, se trata de una problemática que requiere un mayor grado de atención. En este contexto, debe mencionarse que los universitarios inactivos constituyen entre el 10% y el 20% del total de universitarios, en crecimiento a lo largo de la serie 2004-2023.

asalariado (identificando oportunamente entre registrados y no registrados⁵⁹), cuentapropista y trabajador familiar sin salario; y aquella en situación de desocupación. Para el análisis del ingreso laboral de asalariados y cuentapropistas se consideró el correspondiente a la ocupación principal (variable P21).

Por su parte, dado el objetivo principal del presente artículo, a fuerza de trabajo universitaria se clasifica según su pertenencia al sector *formal*, *sector informal*, *sector público* o *sector desocupado*. En este contexto, en el Cuadro 1 se presentan los criterios adoptados, que se nutren tanto de lo propuesto originalmente por PREALC (1978) como de las modificaciones en torno a la composición de los sectores de empleo presentadas en otras investigaciones (Monza y López, 1995; Poy, 2020)

Cuadro 1. Clasificación de la totalidad de la población económicamente activa en función de su sector de inserción económico ocupacional⁶⁰.

Tipo de inserción económico-ocupacional	Definición operacional
Sector formal	- Asalariados en establecimientos privados con más de cinco ocupados, excluyendo beneficiarios de planes de empleo. - Cuentapropistas en puestos profesionales.
Sector informal	- Asalariados en establecimientos privados de menos de cinco ocupados, excluyendo beneficiarios de planes de empleo. - Trabajo doméstico remunerado. - Cuentapropistas en puestos no profesionales. - Trabajadores familiares sin remuneración.
Sector público	Asalariados en establecimientos públicos, excluyendo beneficiarios de planes de empleo.
Desocupados	- Desocupados - Ocupados cuya ocupación principal es un plan de empleo.

Fuente: elaboración propia en base a PREALC (1978), Monza y López (1995) y Poy (2020).

Como se desprende de lo anterior, en tanto los puestos de trabajo de cuentapropistas pertenecen al sector formal o sector informal según sean -respectivamente- de carácter profesional o no profesional, la clasificación propuesta excluye la existencia de cuentapropistas universitarios sobreeducados en el sector formal y de cuentapropistas universitarios en puestos profesionales del sector informal. Frente a ello se presenta la alternativa de considerar a la

⁵⁹ Como resulta habitual, a tales fines de tomó en consideración en la EPH la variable PP07H, que expresa la respuesta a la pregunta “¿Por ese trabajo tiene descuento jubilatorio?”.

⁶⁰ Para la delimitación de los grupos en la encuesta se emplearon las variables PP04C y PP04C99 referidas al tamaño del establecimiento de trabajo, donde se pregunta a distintos rangos posibles de respuesta “¿Cuántas personas, incluido...trabajan allí en total?”. Al mismo tiempo, los asalariados públicos se delimitan con la pregunta PP04A, cuya primera respuesta indica la pertenencia estatal del lugar de trabajo. El trabajo doméstico remunerado, por su parte, se separa a través del sector de ocupación revelado en las preguntas PP04B_COD o PP04B_CAES, que contienen el clasificador CAES-MERCOSUR en su versión tradicional o 1.0. Finalmente, aquellos individuos cuyo principal ingreso proviene de un plan de empleo se distinguen a través de la variable PP07E. Al respecto, cabe mencionar que la consideración de beneficiarios de planes de empleo en conjunto con la población desocupada aparece en consonancia con una de las formas de estimar desocupación que efectuaba el INDEC a principios de milenio, dado el surgimiento y el rápido crecimiento de los beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar. Esta metodología era conocida como “hipótesis B”.

totalidad de los puestos de trabajo cuentapropistas como pertenecientes al sector informal, aunque ello conllevaría a un debate respecto al carácter de sobrepoblación relativa de aquellos universitarios en puestos profesionales, a la par que dificultaría la capacidad de diálogo con las investigaciones desarrolladas bajo el enfoque del sector informal urbano.

&

En resumidas cuentas, en el presente artículo la fuerza de trabajo universitaria asalariada y cuentapropista queda inicialmente dividida en siete grupos, según la calificación del puesto y sector de empleo: a) universitarios en puestos profesionales del sector formal, b) universitarios sobreeducados del sector formal, c) universitarios en puestos profesionales del sector informal, d) universitarios sobreeducados del sector informal; e) universitarios en puestos profesionales del sector público; f) sobreeducados universitarios del sector público; y g) universitarios desocupados. No obstante, en tanto el conjunto del sector informal aglutina, por su propia definición, excedentes de fuerza de trabajo, a la par que -como quedará seguidamente en evidencia- allí prácticamente no se encuentran puestos profesionales ocupados por universitarios, la mayor parte del análisis se desarrollará considerando unificadamente a los universitarios de dicho sector.

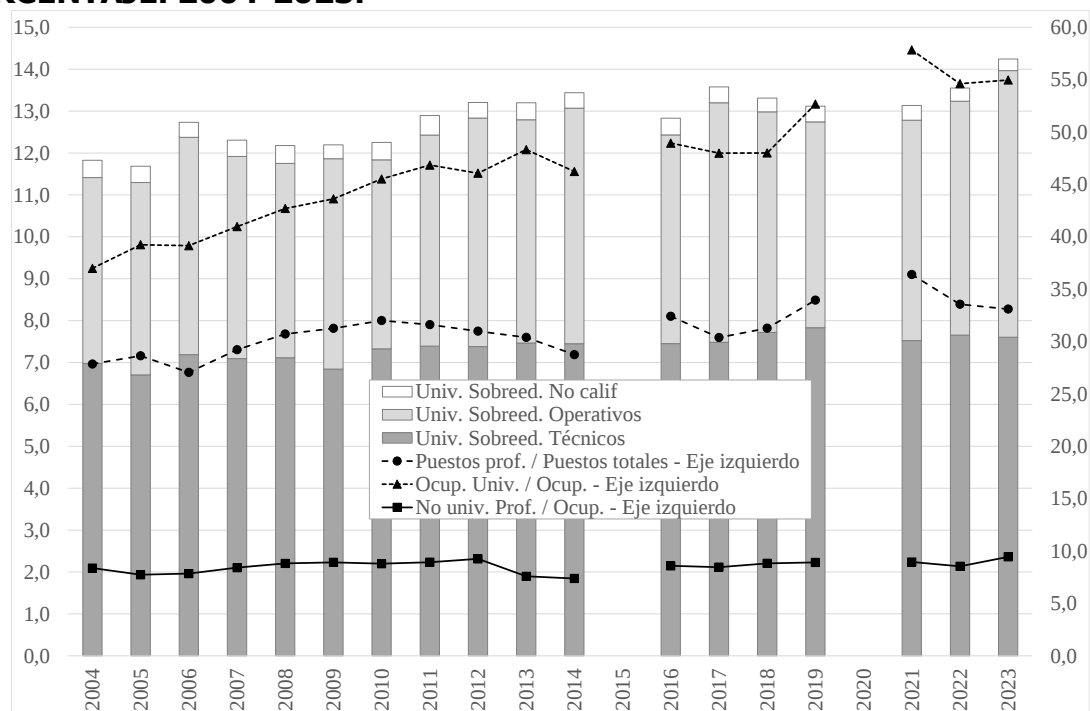
En tal contexto debe remarcarse que la consideración como un potencial reemplazo de la fuerza de trabajo universitaria ocupada en puestos profesionales del sector formal de a) los universitarios sobreeducados del sector formal, b) los universitarios sobreeducados del sector público, c) los universitarios del sector informal y d) los desocupados, se realiza con un carácter absolutamente general. Ello en el sentido que no se toman en consideración las características específicas de las distintas fuerzas de trabajo universitarias, las cuales dotan de una rigidez mayor a la idea de un potencial reemplazo.

LA FUERZA DE TRABAJO UNIVERSITARIA SEGÚN *SECTOR DE EMPLEO*.

Tal como se anunció en la Introducción, el presente apartado se propone analizar el nivel y evolución de la sobreeducación universitaria en relación con los ocupados con título universitarios en puestos profesionales, diferenciando los sectores de empleo, a lo largo de los años 2004-2014 y 2016-2023. A tales fines, inicialmente el Gráfico 1 presenta la evolución tanto de los puestos de calificación profesional como la participación de personas con estudios universitarios completos sobre el total de ocupados. Como allí puede verse, a lo largo de ambos subperíodos crece la proporción de ocupados con nivel educativo universitario completo: mientras que entre 2004 y 2014 el crecimiento de la participación universitaria es del 9,2% al 11,6% (2,4 pp.) del total de ocupados, entre 2016 y 2023 resulta del 12,2% al 13,7% (1,5 pp.). En contraposición, la proporción de puestos profesionales en ambos lapsos se mantiene -con oscilaciones- relativamente estable, en torno al 7% en el primero de ellos y al 8% en el segundo. Como consecuencia, de modo independiente a la evolución económica general, la

sobreeducación universitaria muestra una tendencia ascendente, pasando del 47,3% en 2004 al 53,8% en 2014, y del 51,3% en 2016 al 57% en 2023.⁶¹

GRÁFICO 1. UNIVERSITARIOS, PUESTOS PROFESIONALES Y NO UNIVERSITARIOS PROFESIONALES EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE OCUPADOS (LÍNEAS – EJE IZQUIERDO) Y TASA DE SOBRE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA SEGÚN CALIFICACIÓN (BARRAS – EJE DERECHO). EN PORCENTAJE. 2004-2023.



Fuente: elaboración propia en base a EPH.

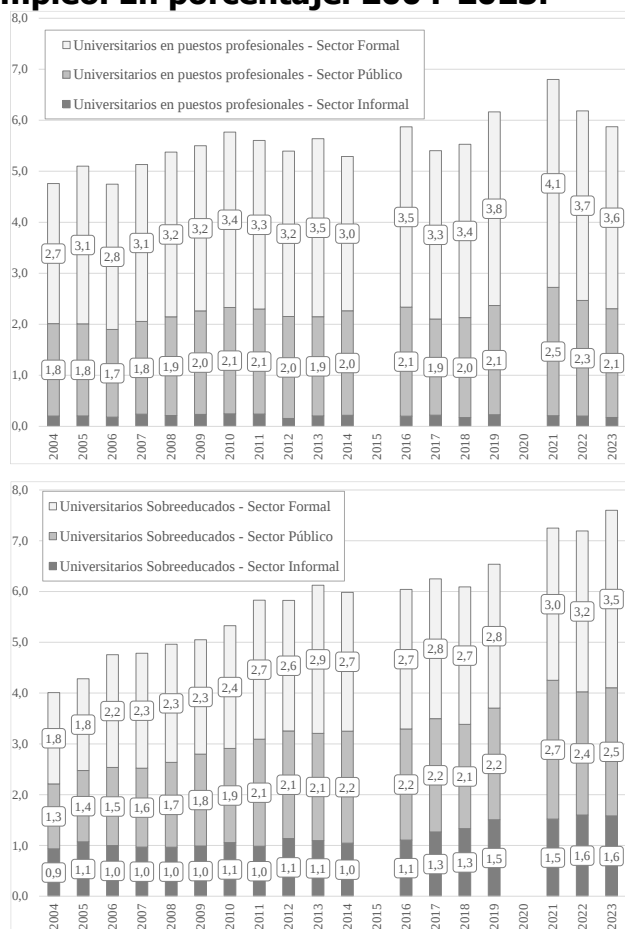
Por su parte, en el mismo gráfico se observa que si bien los universitarios sobreeducados se encuentran principalmente en ocupaciones de carácter técnico (entre el 55% y el 60%), no resulta menor la proporción ocupada en actividades de carácter operativo (entre el 35% y el 40%), para las cuales indudablemente no se requiere una formación universitaria. Incluso más, a lo largo de los dos subperíodos dicha distribución evidencia un leve crecimiento de estas últimas en detrimento de las de calificación técnica. En este sentido, si bien -tal como se mencionó previamente- es posible que el nivel de la sobreeducación universitaria se encuentre sobreestimado al considerar únicamente las ocupaciones profesionales, a partir del crecimiento de universitarios en ocupaciones operativas puede afirmarse que no se encuentra sobreestimado el crecimiento de la sobreeducación universitaria a lo largo del período bajo estudio.

En el Gráfico 2 se presenta la distribución de los universitarios por sector de empleo, diferenciando entre aquellos en puestos profesionales (Panel A) y sobreeducados (Panel B). A partir de este, resulta de interés destacar tres cuestiones. En primer lugar, el contraste

⁶¹ Al mismo tiempo, se pone de relieve que existe una proporción relativamente constante, en torno al 2% de los ocupados, de individuos que ocupan puestos profesionales sin tener calificación universitaria. En principio, se trataría de fuerza de trabajo que ha adquirido las habilidades necesarias para el desempeño de la tarea en el propio puesto de trabajo. Sin perjuicio de ello, dicha situación escapa del objeto de estudio planteado en el presente trabajo.

evidenciado entre dichas porciones de universitarios. Más específicamente, mientras que los universitarios empleados en puestos profesionales mantienen una proporción relativamente estable o con un leve incremento dentro de ambos períodos (del 4,9% en 2004 al 5,3% en 2014, y del 6% en 2016 al 5,9% en 2023 -Panel A-), aquellos sobreeducados evidencian una tendencia sistemáticamente creciente (entre 2004 y 2014 dicha proporción se expandió del 4% al 6%, mientras que entre 2016 y 2023 lo hizo del 6% al 7,8% -Panel B-).

GRÁFICO 2. Universitarios ocupados en puestos profesionales (panel A) y universitarios sobreeducados (panel B) en relación con el total de ocupados según sector de empleo. En porcentaje. 2004-2023.



Fuente: elaboración propia en base a EPH.

En segundo lugar, que si bien los universitarios ocupan muy pocos puestos profesionales en el sector informal (concentrándose aproximadamente un 60% en el sector formal y un 40% en el público -Panel A-), el mismo resulta relevante en términos de absorción de universitarios sobreeducados: más específicamente, aunque con menor importancia a la de los otros dos sectores, a lo largo de todo el período el valor más bajo resulta del 17,5% (2014), con picos del 25% (2005) y 23,1% (2019) (Panel B).

En tercer lugar, y sin perjuicio de lo mencionado previamente, dentro del crecimiento de la sobreeducación universitaria a partir de la información plasmada en el Panel B es posible identificar un comportamiento diferencial entre subperíodos. Así, a entre 2004 y 2014 el

crecimiento de la proporción de universitarios sobreeducados respecto al total de ocupados que se observa en los tres sectores de empleo presenta una participación relativamente estable en el sector formal (en torno al 45%), creciente en el sector público (del 32% al 37%) y decreciente en el sector informal (del 23% al 18%). Por su parte, a lo largo del lapso 2016-2023 se invierte en lo que respecta a la participación del sector público y el sector informal, en tanto el primero presenta una tendencia decreciente (del 36% al 33%) y el segundo una creciente (del 18% al 21%)., De esta forma, sin olvidar que la sobreeducación universitaria crece en los tres sectores, caben resaltar dos cuestiones: a) que de forma estable en términos de participación, el sector formal es para todo el período el de mayor importancia cuantitativa para los universitarios sobreeducados; y b) que, en el primer subperíodo el sector público es el "protagonista" en la absorción de la creciente sobreeducación de la fuerza de trabajo universitaria argentina, rol asumido por el sector informal en el segundo subperíodo.

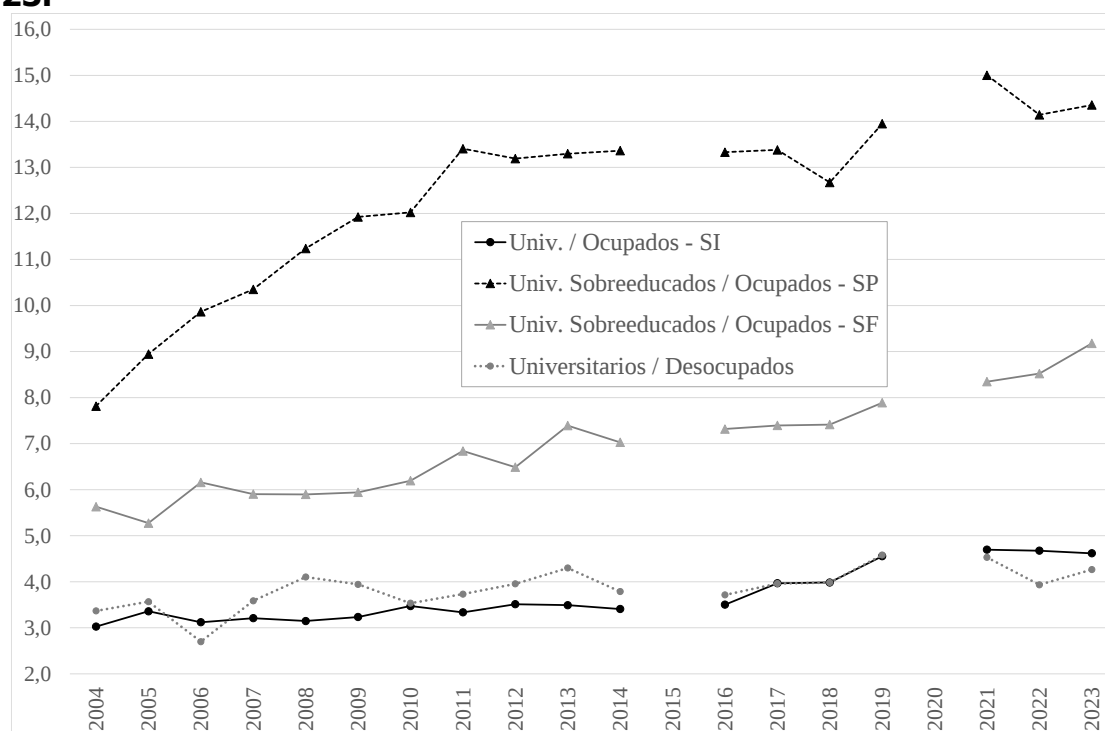
De manera complementaria a lo observado en el Panel B del Gráfico 2, el Gráfico 3 muestra la proporción que de universitarios sobreeducados respecto al total de ocupados de cada sector. Como allí puede verse, a lo largo de ambos subperíodos dicha proporción presenta una tendencia particularmente creciente en el sector público, la cual se replica, con menor importancia relativa en el primer subperíodo, en el sector formal. Del mismo modo, en el sector informal dicho crecimiento ocurre a lo largo del segundo subperíodo.

Más específicamente, en lo que respecta al sector público entre 2004 y 2014 la proporción en cuestión ascendió del 7,8% al 13,4% -más de un 70%-, mientras que entre 2016 y 2023 lo hizo del 13,3% al 14,4% -un 8%-. Por su parte, en el sector formal se evidencia un crecimiento del 5,6% al 7% en el primer subperíodo -un 25%- y del 7,3% al 9,2% -un 26%- en el segundo. En lo que toca al sector informal, la relativa estabilidad 2004-2014 contrasta con el crecimiento de más de la tercera parte entre 2016 y 2023 (de 3,5% a 4,6%). Finalmente, la proporción de universitarios desocupados respecto al total de desocupados aparece en ambos subperíodos con niveles muy similares a los evidenciados para el sector informal. Sin perjuicio de ello, cabe notar que para algunos lapsos al interior del primer subperíodo presenta una tendencia creciente (aunque lo concluye en un nivel prácticamente idéntico), a la par que hacia finales del segundo subperíodo se observa una pequeña brecha en relación con el sector informal.

A partir de lo anterior es posible extraer tres conclusiones relevantes, que se exponen sin orden de importancia. En primer lugar, tomando en cuenta el papel estabilizador que el empleo público ha jugado a lo largo de la historia (Fernández y González, 2020), a lo largo del período bajo análisis la expansión de la sobreeducación universitaria en el sector público contribuyó a mitigar la presencia de fuerza de trabajo universitaria en el sector informal y la desocupación, particularmente durante el primer subperíodo. En este sentido, la evolución evidenciada en el sector público podría ser considerada una forma concreta de la captación estructural (esto es, más allá del movimiento cíclico) de una porción de la sobrepoblación relativa (Donaire 2019; Seiffer y Rivas, 2017). En segundo lugar, que el sector informal cobra importancia como absorción de una porción de la sobreeducación en el contexto del estancamiento económico generalizado. En tercer lugar, a partir de la progresiva presencia de universitarios sobreeducados en el sector formal, podría considerarse que el mismo reviste una creciente

importancia como modalidad de absorción de sobrepoblación relativa, de modo independiente a la evolución económica⁶².

GRÁFICO 3. UNIVERSITARIOS SOBREENEDUCADOS DEL SECTOR FORMAL Y SECTOR PÚBLICO, Y UNIVERSITARIOS DEL SECTOR INFORMAL. RELACIÓN RESPECTO AL TOTAL DE OCUPADOS DEL SECTOR. EN PORCENTAJE. 2004-2023.



Fuente: elaboración propia en base a EPH.

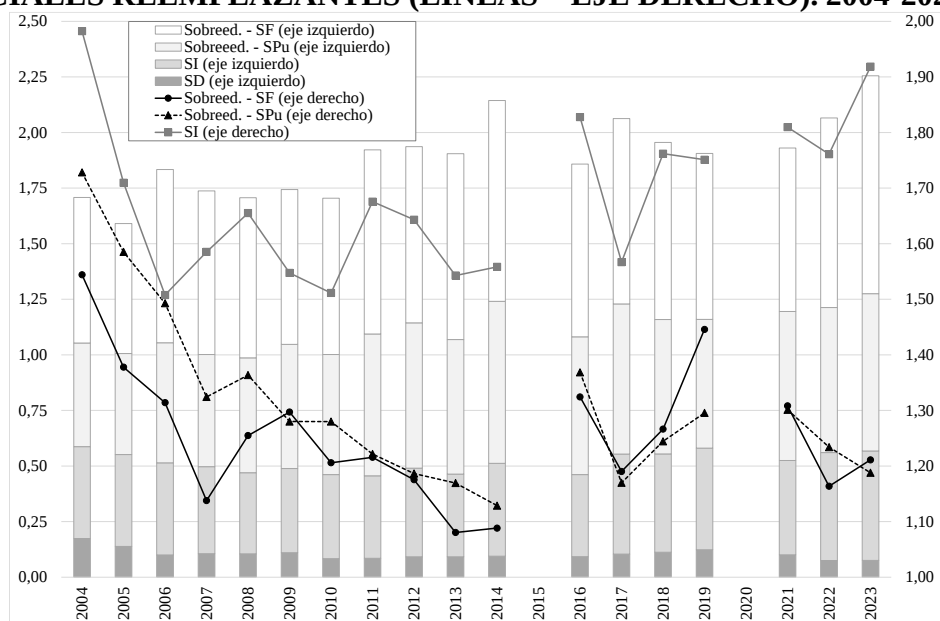
⁶² En versiones preliminares del presente artículo se ha incluido en este apartado el análisis por sexo y grupo de edad, el cual no ha sido considerado en la versión final por cuestiones de espacio. No obstante, se sintetizan aquí los principales hallazgos. En términos de sexo, las mujeres representan entre el 50% y el 55% de los universitarios (tendencia creciente en 2004-2014 y estable en 2016-2023) y entre el 55% y el 60% de los sobreeneducados universitarios (estabilidad en 2004-2014 y decreciente en 2016-2023), con particular incidencia en el sector público (entre el 60% y 65% del total). En términos de edad, y en particular en lo que respecta a la incidencia de los jóvenes (hasta 35 años) en la sobreeneducación, en el *sector formal* en el primer subperíodo analizado se evidencia una mayor participación relativa, que tiende a desaparecer en el segundo período, evidenciando una distribución similar a la del resto de los sectores de empleo. De esta manera, al considerar las dimensiones sexo y edad, es posible concluir que crecientemente no constituyen un factor diferencial de los universitarios sobreeneducados.

INGRESOS Y PRECARIEDAD LABORAL EN EL CONTEXTO DE LA EVOLUCIÓN SOBREEDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Tomando en consideración las conclusiones alcanzadas previamente, el presente apartado se propone analizar el vínculo entre a) la dinámica de la relación entre la fuerza de trabajo universitaria que -en términos generales- constituiría un potencial reemplazo de aquella ocupada en los puestos profesionales del sector formal y b) el nivel y la evolución relativa entre dichas porciones de la fuerza de trabajo de, por un lado, el ingreso de la ocupación principal y, por el otro, la calidad del vínculo laboral. A tales fines se construye el Gráfico 4.

Como allí puede verse -y como se desprende de lo planteado en el apartado anterior-, en ambos subperíodos se verifica un notorio crecimiento de la relación que los universitarios sobreeducados del sector formal, del sector público y los universitarios del sector informal representan respecto a los universitarios en puestos profesionales del sector formal. Más específicamente, el número de ocupados que cada universitario en un puesto profesional del sector formal tenía como potencial reemplazo aumentó de 1,71 a 2,14 entre 2004 y 2014, y de 1,86 a 2,26 entre 2016 y 2023, tendencia que en este segundo su período se manifiesta de manera relativamente oscilante (probablemente debido a las fluctuaciones propias del estancamiento económico general). Dicha dinámica general-como también se desprende del apartado anterior, se evidencia- en ambos períodos para el sector formal y el sector público, y en el segundo de ellos para el *sector informal*.

GRÁFICO 4. FUERZA DE TRABAJO UNIVERSITARIA SEGÚN GRUPOS DE POTENCIAL REEMPLAZO RESPECTO AL TOTAL DE UNIVERSITARIOS PROFESIONALES DEL SECTOR FORMAL (BARRAS – EJE IZQUIERDO). INGRESO DE LA OCUPACIÓN PRINCIPAL DE UNIVERSITARIOS PROFESIONALES DEL SECTOR FORMAL RESPECTO AL DE GRUPOS POTENCIALES REEMPLAZANTES (LÍNEAS – EJE DERECHO). 2004-2023.



Fuente: elaboración propia en base a EPH.

En lo que respecta a la brecha de ingresos, antes que nada debe destacarse que a lo largo de ambos subperíodos el ingreso de la ocupación principal de los universitarios en puestos profesionales del *sector formal* resulta mayor al correspondiente a los sobreeducados del *sector formal* y el *sector público*, y a los universitarios del *sector informal*. En este sentido, es posible afirmar que esta fuerza de trabajo se encuentra disponible con relativa inmediatez para ocupar un puesto profesional en el *sector formal*.

Sobre esta base, en el contexto de la expansión generalizada de la demanda de fuerza de trabajo y del poder adquisitivo de los ingresos laborales (2004-2014), es posible observar que en paralelo al incremento de la proporción de fuerza de trabajo potencialmente reemplazante de aquella ocupada en puestos profesionales del *sector formal* se observa -de modo general- un deterioro del ingreso relativo de estos últimos. A la vez, ello ocurre con particular ímpetu en relación con los universitarios sobreeducados del *sector formal* y el *sector público* (grupos donde, como fue mencionado, se concentró la creciente sobreeducación universitaria).

En efecto, en el año 2004 el ingreso de los universitarios en puestos profesionales del *sector formal* resultaba 54% más elevado que el de los sobreeducados del *sector formal*, 73% mayor al de los sobreeducados del *sector público* y casi el doble del de los universitarios del *sector informal*, mientras que para 2014 este diferencial de ingresos resultaba, respectivamente, del 9%, 13% y 56%. En dicho contexto general, cabe notar que en los tres grupos la reducción de la brecha de ingresos se estabiliza (o revierte parcialmente) en el lapso 2007-2010 (coincidiendo con la estabilización de la fuerza de trabajo que actúa como potencial reemplazo), para luego continuar su tendencia decreciente en el caso del *sector formal* y *sector público* (mientras que para el *sector informal* se mantiene oscilante en el nivel alcanzado en 2007).

Por su parte, a lo largo del segundo subperíodo (2016-2023) también se observa una reducción de la brecha de ingreso entre los universitarios en puestos profesionales del *sector formal* y aquellos universitarios sobreeducados en el *sector formal* y el *sector público*. Más específicamente, la relación del ingreso de los trabajadores en puestos profesionales en el *sector formal* con ambos pasa de ser, aproximadamente, del 35% al 20% superior. Dicha reducción muestra, en ambos casos, un comportamiento oscilante, paralelamente a los cambios de signo evidenciados por la proporción que dicha fuerza de trabajo representa respecto de aquella ocupada en puestos profesionales del *sector formal* (a excepción de lo ocurrido en 2022-2023 para los sobreeducados del *sector formal*, en tanto se observa una ampliación en la brecha de ingresos junto con un incremento de la proporción que representa respecto de los ocupados en puestos profesionales de dicho sector). En tal contexto, debe notarse que la reducción de la brecha de ingresos entre puntas resulta menor a evidenciada en el subperíodo anterior frente a una importante expansión de la fuerza de trabajo potencialmente reemplazante; ello posiblemente sea expresión de la mayor capacidad de los asalariados en puestos profesionales del *sector formal* de sostener su ingreso en el contexto del deterioro generalizado de los ingresos reales (y, en particular, de la aceleración inflacionaria de 2022-2023).

En lo que respecta a los universitarios del *sector informal* en el segundo subperíodo, en el contexto del crecimiento de su tamaño relativo respecto a los ocupados en puestos profesionales del *sector formal* se observa una constancia de su ingreso relativo hasta 2022, a lo que se suma una ampliación de la brecha en el último año. Esta situación que puede considerarse expresiva de la mayor exposición que dicho grupo tiene frente a la caída generalizada de ingresos en

general, a lo que cabe adicionar el probable impacto diferencial de la particular aceleración inflacionaria sucedida en dichos años.

A los fines de analizar la dinámica evidenciada por la precariedad laboral se construye el Gráfico 5. Al respecto, siendo que la estimación de la tasa de no registro (TNR) se realiza exclusivamente para los asalariados, surge el interrogante respecto al tratamiento que debe darse a los trabajadores por cuenta propia (más aun teniendo en cuenta que, por definición, aquellos en un puesto profesional se incluyen en el *sector formal* y aquellos sobreeducados en el *sector informal*). En tal contexto, se optó aquí por considerar separadamente, por un lado, la tasa de no registro del total de asalariados y, por el otro, el agregado de asalariados no registrados y cuentapropistas.

Aclarado lo anterior, de igual modo a lo señalado en el análisis de ingreso, antes que nada debe notarse que a lo largo de todo el período - la precariedad de los universitarios sobreeducados del *sector formal* y de los universitarios del *sector informal* resulta superior a la evidenciada por los universitarios profesionales del *sector formal*, de modo que es posible afirmar que se encuentran disponibles con relativa inmediatez para ocupar uno de dichos puestos⁶³ (Gráfico 5).

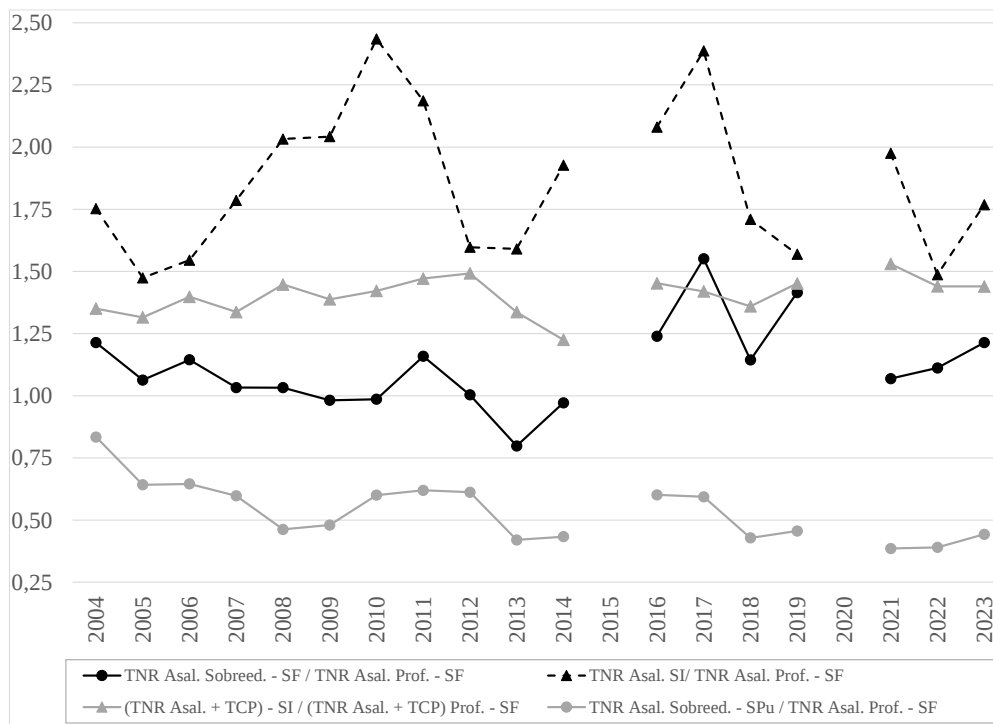
En tal contexto, en dicho gráfico puede observarse que las distintas relaciones allí expresadas muestran un comportamiento menos marcado que el observado en el caso de los ingresos. En lo que respecta a la TNR de los universitarios asalariados sobreeducados del *sector formal*, la misma resulta a comienzos del primer subperíodo un 25% mayor que la de sus pares en puestos profesionales, resultando prácticamente igual a fines de este. Dicho movimiento se repite, con menor intensidad y mayores oscilaciones, en el segundo subperíodo hasta 2021, mientras que lo sucedido entre 2022 y 2023 retrotrae la situación a la vigente en 2016. Esta evidencia, de igual modo a lo señalado en el análisis de ingresos, puede considerarse expresiva de la mayor capacidad de sostener una condición relativa favorable por parte de los ocupados en puestos profesionales del *sector formal* en contextos de contracción de la demanda de trabajo y reducción del salario real. Por su parte, en lo que respecta a los asalariados sobreeducados del *sector público* en relación con aquellos en puestos profesionales del *sector formal*, la TNR - siempre en un nivel menor- presenta en el primer subperíodo una evolución similar a la previamente descrita, caída que se sostiene -con menor importancia- en el segundo subperíodo.

En cuanto a la proporción de los universitarios asalariados no registrados del *sector informal* en relación con aquellos en puestos profesionales del *sector formal* -siempre superior al 50%-, durante el primer subperíodo se mantiene estable entre los extremos, aunque con profundas oscilaciones (probablemente reflejo de un problema de representatividad estadística del grupo en cuestión). Por su parte, en el segundo subperíodo se evidencia -con oscilaciones- una tendencia decreciente, lo cual contrasta con la evolución relativa del ingreso de los asalariados en puestos profesionales del *sector formal* apuntada previamente.

GRÁFICO 5. TASA DE NO REGISTRO (TNR) Y TASA DE CUENTAPROPISMO (TCP) DE UNIVERSITARIOS SOBREEDUCADOS DEL SECTOR FORMAL, SECTOR PÚBLICO Y UNIVERSITARIOS DEL SECTOR INFORMAL RESPECTO A

⁶³ Cabe notar que en 2013 la TNR de los asalariados universitarios sobreeducados del *sector formal* resulta menor a la de sus pares en puestos profesionales, lo cual probablemente se vincule con las particularidades de la EPH para el bienio 2013-2014 previamente comentadas.

OCUPADOS EN PUESTOS PROFESIONALES DEL SECTOR FORMAL. 2004-2023.



Fuente: elaboración propia en base a EPH.

Finalmente, al incluir en el análisis de la precariedad del puesto laboral a los cuentapropistas (en los puestos profesionales del *sector formal* y en el conjunto del *sector informal*), para ambos subperíodos la relación en cuestión se ubica de manera relativamente estable en torno a un 40%. En particular, en el primer subperíodo se advierte un incremento hasta 2012, contrario a la tendencia observada en el ingreso relativo, seguido de un retroceso en el bienio 2013-2014 (movimiento que debe interpretarse con cautela debido a los cambios introducidos en la EPH durante esos años).

En resumidas cuentas, la reducción relativa de la brecha de ingreso y -en menor medida- de la precariedad laboral de los universitarios en puestos profesionales del *sector formal* frente al crecimiento de la proporción que respecto a ellos significan los universitarios sobreeducados en el *sector formal* y el *sector público* constituye evidencia para sostener que este último conjunto de fuerza de trabajo actúa como un elemento regulador del ingreso y calidad del empleo de aquellos. A la vez, dicha afirmación se presenta con más fuerza en el subperíodo de generalizado crecimiento de la demanda de fuerza de trabajo y del ingreso laboral real, y con menos fuerza en el segundo subperíodo, poniendo de manifiesto que los universitarios en puestos profesionales del *sector formal* logran amortiguar relativamente menor el impacto de la caída generalizada del ingreso laboral real.

Por su parte, en el caso de los universitarios del *sector informal* pareciera jugar con menor fuerza dicho rol, en tanto las tendencias son en general menos pronunciadas que las del *sector formal* y *sector público*, a la vez que refieren a un conjunto relativamente menor de la población bajo estudio. Más específicamente, a lo largo del período de expansión, el leve incremento en

la absorción de la fuerza de trabajo universitaria sobreeducada se da junto con un mejoramiento relativo del ingreso (aunque un empeoramiento relativo en la calidad del empleo), mientras que el período de contracción general del empleo y salario real, cuando el sector cobra mayor protagonismo en la absorción de universitarios, las condiciones relativas en términos de calidad laboral y nivel de ingresos se mantienen estables (con excepción de 2023, cuando se registra un retroceso relativo de ambas dimensiones).

CONCLUSIONES Y LINEAS A FUTURO

Desde mediados de la década del setenta en nuestro país se verifica un achicamiento o estancamiento de la escala de la acumulación en términos de valor y, consecuentemente, una menor demanda relativa de fuerza de trabajo. El incremento de largo plazo de la tasa de desocupación y subocupación constituye el reflejo inmediato de ello, aunque la cuestión no se agota allí. Desde entonces se verifica, por un lado, un incremento tanto del trabajo asalariado no registrado como de la producción de baja escala (donde resalta el cuentapropismo de subsistencia) y, por el otro, el deterioro de largo plazo del salario real, todo lo cual redundando en una multiplicación de la población bajo la línea de pobreza (Arakaki, 2018; Kennedy, 2018; Poy, 2017). En consecuencia, es posible afirmar que una porción creciente de la población logró vender su fuerza de trabajo sólo a condición de que se la pague por debajo de su valor constituyéndose en sobrepoblación relativa estancada (Donaire, 2019; Iñigo Carrera, 2007; Kennedy, 2018; Marticorena, 2011; Seiffer y Rivas, 2017). Al proponerse investigar para los subperíodos 2004-2014 y 2016-2023 (respectivamente, de expansión y estancamiento de la demanda general de fuerza de trabajo) las características evidenciadas por la creciente fuerza de trabajo universitaria sobreeducada según *sector* de empleo (tanto en términos de significancia cuantitativa como de ingresos y calidad del vínculo laboral), el presente artículo procuró constituir un estudio específico de una modalidad concreta de existencia de la sobrepoblación relativa en nuestro país, particularmente enfocado en sumar argumentos respecto a las limitaciones de las categorías *sector formal* y *sector informal* a los fines de la identificación y análisis de la fuerza de trabajo excedente a las necesidades inmediatas de la acumulación.

En este sentido, en el segundo apartado se puso de manifiesto que: i) entre el 40% y 45% de los universitarios sobreeducados son ocupados del *sector formal*, entre 30% y 35% del *sector público*, entre el 20% y el 25% del *sector informal*, mientras que el 5% son desocupados; ii) a lo largo del primer subperíodo se observa un crecimiento de dicha proporción en el *sector público* y una caída en el *sector informal*, ocurriendo lo contrario en el segundo subperíodo; y iii) que los universitarios sobreeducados representan una proporción marcadamente creciente del total de ocupados del *sector formal* y del *sector público* a lo largo de ambos subperíodos, y en menor medida del *sector informal* a lo largo del subperíodo caracterizado por el estancamiento en la demanda de fuerza de trabajo. A partir de ello no sólo se abonó a la hipótesis de que el *sector público* puede considerarse como una forma de captación estructural de una porción de sobrepoblación relativa, sino que también puede afirmarse que el *sector formal* (vía sobreeducación) reviste una creciente importancia en idéntico sentido (de modo independiente a la evolución económica), de modo adicional al *sector informal* y la desocupación.

Sobre esta base, y en el marco del debate en torno a la capacidad de las distintas porciones de fuerza de trabajo excedente para constituir un elemento regulador del salario (y a las

condiciones laborales en general) de la fuerza de trabajo plenamente en activo, en el tercer apartado del artículo se analizó la evolución relativa entre los universitarios en puestos profesionales del *sector formal* y la fuerza de trabajo universitaria que constituiría un potencial reemplazo esta, tanto en términos de ingreso como de calidad del vínculo laboral. En este sentido, se puso de manifiesto allí que: i) en ambas dimensiones los universitarios en puestos profesionales del *sector formal* presentan a lo largo de ambos subperíodos una mejor condición relativa, de modo que es posible afirmar que los universitarios sobreeducados del *sector formal* y el *sector público*, y los universitarios del *sector informal*, se encuentran disponibles con relativa inmediatez para ocupar un puesto profesional en el sector formal; ii) en ambos subperíodos se observa una clara reducción del ingreso de los universitarios en puestos profesionales del *sector formal* en relación a sus pares sobreeducados del *sector formal* y el *sector público*, aunque con menor fuerza y mayores oscilaciones en el subperíodo de estancamiento de la demanda de fuerza de trabajo; iii) para el caso del *sector informal* dicho comportamiento se replica solo en los primeros años del primer subperíodo, mientras que en el resto de los años la brecha de ingreso se mantiene estable o evidencia un empeoramiento relativo para los universitarios ocupados en el mismo; y iv) en términos de precariedad se observan tendencias similares, aunque menos pronunciadas.

A partir de dichas evidencias es posible extraer dos conclusiones de importancia. Por un lado, que los universitarios sobreeducados del *sector formal* y el *sector público* constituyen, de modo general, un elemento regulador del ingreso y calidad del empleo de la fuerza de trabajo universitaria en puestos profesionales del *sector formal*, con más fuerza en el subperíodo de generalizado crecimiento de la demanda de fuerza de trabajo. Por el otro, al menos de modo contundente lo propio no puede afirmarse en relación con los universitarios del *sector informal*, aunque debe tenerse en cuenta que aún en el lapso en que su significancia crece respecto al empleo total del sector (esto es, el segundo subperíodo) también lo hace la correspondiente a los sobreeducados del *sector formal* y el *sector público*. De modo adicional, a partir de lo anterior es posible afirmar que, si se considera a modo de referencia que el ingreso y precariedad laboral de los universitarios en puestos profesionales del *sector formal* constituye en términos generales el valor de la fuerza de trabajo en cuestión, dicha masa de sobrepoblación relativa ha vendido su fuerza de trabajo abiertamente por debajo de su valor, constituyendo una fuerte extraordinaria de plusvalía (decreciente a lo largo del período, dado el referido achicamiento de la brecha de ingresos)⁶⁴.

Un conjunto no menor de problemáticas se presenta relevante para tener en cuenta en futuras investigaciones, de las cuales se mencionan aquí sólo algunas. Específicamente en lo que respecta al universo de estudio del artículo, antes que nada se deberá ahondar en la correspondencia entre la formación universitaria y parte de los puestos de trabajo de calificación técnica, a partir de un análisis más detallado de la rama de actividad y del carácter ocupacional de las tareas y realizadas por la fuerza de trabajo universitaria sobreeducada. A su vez, a partir de la comparación de la rama de actividad y el carácter ocupacional de las tareas realizadas por los universitarios en puestos profesionales, se deberá procurar identificar si al menos parte de la diferencia de ingresos y calidad del puesto se explica por ello. En igual sentido se deberá

⁶⁴ Se omite aquí la discusión en torno a si el ingreso de los universitarios en puestos profesionales del *sector formal* constituye en sí el valor de la fuerza de trabajo. En caso de que dicho ingreso también se encuentre por debajo de su valor, a los fines del presente trabajo ello implicaría que la fuerza de trabajo universitaria que no se encuentre ocupada en puestos profesionales del *sector formal* percibe un ingreso “aún menor” respecto al valor que el que la brecha de ingreso indica.

ahondar en la incidencia de las cualidades personales (sexo y edad) en dicho diferencial. Finalmente, considerando la totalidad de la fuerza de trabajo, a partir de los hallazgos del artículo surge la pregunta respecto al impacto que en el *sector informal* tiene el hecho que crecientes porciones de fuerza de trabajo no universitaria sea reemplazada por universitarios para tareas no profesionales en el *sector formal* y el *sector público*.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arakaki, A. (2016). “La segmentación del mercado de trabajo, desde una perspectiva estructuralista. Argentina, 2003-2013”. (Tesis de Maestría en Economía). Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Arakaki, A. (2018). “Hacia una serie de pobreza por ingresos de largo plazo. El problema de la canasta”. *Realidad Económica* N° 316, Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE).

Arakaki, A., & Terranova, L. (2023). “¿Por qué el desempleo es bajo en Argentina? Anatomía de los mercados de trabajo provinciales en Argentina”. Ponencia presentada en el 16° Congreso Nacional de Especialistas en Estudios del Trabajo, ASET, Buenos Aires, 2-4 de agosto.

Cazón, F., Graña, J. M., Lastra, F., & Kozlowski, D. (2018). “Hacia un marco general para el análisis de la diferenciación de la fuerza de trabajo en Argentina”. En D. Kennedy (Ed.), *Debates en torno a las condiciones actuales de reproducción de la fuerza de trabajo argentina en perspectiva histórica*. Buenos Aires: FCE-UBA.

Donaire, R. (2017). “¿Persistencia de una masa de reserva entre los egresados superiores en Argentina?”. *Estudios del Trabajo*, Vol. 53, 1-39.

Donaire, R. (2019). “Superpoblación relativa en Argentina. Un análisis a partir de tres mediciones (2003/2010/2017)”. 14° Congreso Nacional de Especialistas en Estudios del Trabajo, Buenos Aires, ASET.

Fernández, A. L., & González, M. L. (2020). “Empleo público en Argentina: características y cambios en su composición y formas de contratación entre 2003 y 2018”. *Trabajo y sociedad*, N° 35, Instituto de Estudios para el Desarrollo Social - Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Santiago del Estero, invierno, 545-571.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). (1997). *Las ocupaciones en el área metropolitana de Buenos Aires: principales características y cambios en el período 1991/1995*. Serie Estructura Ocupacional 1, INDEC – Secretaría de Programación Económica, Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, Buenos Aires.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). (1998). *La calificación ocupacional y la educación formal. ¿Una relación difícil?*. Serie Estructura Ocupacional 4, INDEC – Secretaría de Programación Económica, Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, Buenos Aires.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). (2016). Consideraciones sobre la revisión, evaluación y recuperación de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Anexo Informe de Prensa. Mercado de trabajo: principales indicadores. Segundo trimestre de 2016. INDEC, Buenos Aires.

(https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/anexo_informe_eph_23_08_16.pdf)

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). (2018). Clasificador Nacional de Ocupaciones. INDEC, Buenos Aires.

(https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/clasificadores/definiciones_conceptuales_cno.pdf)

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). (2019). Consideraciones sobre la revisión, evaluación y recuperación de la EPH. Nota metodológica actualizada para el uso de los datos a partir del primer trimestre de 2019. EPH. INDEC, Buenos Aires.

(https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/EPH_nota_metodologica_1_trim_2019.pdf)

Iñigo Carrera, J. (2007). *La formación económica de la sociedad argentina. Vol. 1*. Imago Mundi, Buenos Aires.

Iñigo Carrera, J. (2008). *El capital: Razón histórica, sujeto revolucionario y conciencia*. Buenos Aires: Imago Mundi.

Kennedy, D. (2018). “El rol del deterioro estructural del salario real argentino desde mediados de los años setenta”. En D. Kennedy (Ed.) *Debates en torno a las condiciones actuales de reproducción de la fuerza de trabajo argentina en perspectiva histórica*. Universidad de Buenos Aires: FCE-UBA.

Marticorena, C. (2011). “¿Masa marginal o ejército industrial de reserva? Consideraciones sobre marginalidad y sobrepoblación relativa”. En A. Bonnet (comp.) *El país invisible. Debates sobre la argentina reciente*. Editorial Continente, pp. 199-222.

Marx, K. (1995 [1867]). *El Capital. Crítica de la Economía Política*. México D. F.: Fondo de Cultura.

Maurizio, R. (2001). “Demanda de trabajo, sobreeducación y distribución del ingreso”. Trabajo presentado en V Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, Buenos Aires.

Minoldo, S., & Born, D. (2019). *Claroscuros: 9 años de datos bajo sospecha (EPH en Argentina entre 2007 y 2015)*. Estudios Sociológicos Editora.

Monza, A. (1993). “La situación ocupacional argentina: diagnóstico y perspectivas”. En A. Minujín (Coord.) *Desigualdad y exclusión: desafíos para la política social en la Argentina de fin de siglo*. UNICEF, Buenos Aires.

Monza, A., y López, N. (1995). “Un intento de estimación del sector informal urbano en la Argentina”. *Desarrollo Económico*, Vol. 35, N° 139, pp. 467-474.

Nun, J. (1969). “Superpoblación relativa, ejercito industrial de reserva y masa marginal”. *Revista Latinoamericana de Sociología del ITDT*, vol V, nro. 2.

Pérez, P. (2005). “Sobreeducación en el mercado de trabajo argentino en un período de desempleo masivo (1995-2003)”. Trabajo presentado en Séptimo Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, Buenos Aires.

Poy, S. (2017). *Heterogeneidad de la estructura ocupacional y segmentación del mercado de trabajo. Gran Buenos Aires, 1974-2014*. Trabajo y Sociedad. N° 29, invierno 2017, Santiago del Estero, Argentina.

Poy, S. (2020). *Heterogeneidad laboral y procesos de empobrecimiento de los hogares en Argentina (2003-2017)*. *Problemas Del Desarrollo*, 51(201), 3-28.

PREALC. (1978). *Sector informal. Funcionamiento y políticas*. Santiago de Chile: Organización Internacional del Trabajo.

Riquelme, G. C., & Herger, N. (2003). “Educación y formación de los trabajadores en Argentina 2003: resignificación y desafíos para la atención de demandas”. Trabajo presentado en 6° Congreso Nacional de Estudios del Trabajo organizado por Asociación Argentina de Especialistas del Trabajo, Facultad de Ciencias Económicas (UBA), Buenos Aires.

Rosati, G. (2021). *Masa marginal y superpoblación relativa: discusiones al rededor de dos conceptos y su relevancia empírica*. Lavboratorio, Nro. 31, pp. 211-226.

Salas, J. M. A. (2006). “La sobrecualificación entre los jóvenes ocupados de Argentina en el período 1995-2003”. Informe final del concurso: Transformaciones en el mundo del trabajo: efectos socioeconómicos y culturales en América Latina y el Caribe. Programa Regional de Becas CLACSO.

Salvia, S. P., & Iñigo, L. (2011). “Acumulación y relación capital-trabajo: La reproducción deficiente de la fuerza de trabajo”. *Trabajo y sociedad*, N° 17, Vol. 15, 95-104.

Salvia, A. (2012). *La trampa neoliberal. Un estudio sobre los cambios en la heterogeneidad estructural y la distribución del ingreso en Argentina: 1990-2003*. Buenos Aires: EUDEBA.

Seiffer, T., & Rivas Castro, G. I. (2017). “La política social como forma de reproducción de la especificidad histórica de la acumulación de capital en Argentina (2003-2016)”. *Estudios del Trabajo*, Asociación Argentina de Especialistas en estudios del Trabajo, Buenos Aires, segundo semestre.

Weksler, G. (2020). “Sobreeducación entre los egresados universitarios argentinos: evidencias de una problemática estructural para el período 2013-2018”. *Estudios Del Trabajo*, N° 59.

SEMBLANZA

Lola Fainsod

Estudiante de la Licenciatura de Economía en la UBA. Fue becaria de pasantía PROPAI en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP UBA-CONICET) y becaria CIN en el Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (CEPED). Actualmente se encuentra realizando prácticas profesionales en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. También participa como colaboradora en la materia de Cuentas Nacionales en la Facultad de Ciencias económicas de la UBA.

Damián Kennedy

Licenciado en Economía (UBA), Doctor de la Universidad de Buenos Aires con orientación en Economía. Profesor Titular Regular (en trámite) de Economía II (Licenciatura en Sociología – FSOC – UBA) y Profesor Adjunto Regular de Estructura Social Argentina (Licenciatura en Economía – FCE – UBA). Investigador Independiente CONICET. Director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (CEPED – FCE, Asociado al IIEP UBA-CONICET)

Ignacio Paola

Es becario UBACYT categoría Maestría en el marco del proyecto “La evolución y composición del producto social anual argentino en perspectiva internacional y su expresión en las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo. El período 2012-2022 en el marco de las transformaciones desde la década de 1970”, bajo la dirección de Damián Kennedy.

Disciplina: Ciencias económicas.

Subdisciplina: mercado de trabajo.

Tipo, método o enfoque del estudio: análisis estadístico.



PRECARIZACIÓN LABORAL EN EL AMBA: REFLEXIONES SOBRE EL TIEMPO, SALARIO Y SOBRECARGA DE TRABAJO EN ÁMBITOS LABORALES FEMINIZADOS

Paula Daniela Franco

paulad.franco@bue.edu.ar

Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del Consejo del Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6693-7929>

Germán Duarte

germanduarte12@gmail.com

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0902-7790>

Matías Gomiz

matiasgomiz@gmail.com

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4493-9661>

Resumen

El escenario actual del capitalismo está atravesado por una crisis de reproducción social, en cuyo epicentro se encuentran los sectores de trabajo feminizado. Son las trabajadoras mujeres las que desarrollan tareas de reproducción social en ámbitos de salud, educación, limpieza y espacios socio-comunitarios a cambio de una remuneración que se ve afectada por la precarización laboral. Jornadas de trabajo extendidas, sobrecarga en las tareas, salarios bajos y tareas realizadas en el ámbito del hogar en relación al núcleo familiar que son llevadas a cabo mayoritariamente por mujeres para la reproducción de las personas, particularmente de la fuerza de trabajo. Se reflexiona sobre dimensiones que se vinculan con el salario y la sobrecarga de trabajo (dentro y fuera de la jornada laboral) y su impacto en la familia y en el desarrollo personal de las mujeres de la clase trabajadora. Para ello se tiene en cuenta una metodología de tipo cualitativa donde se analizan 30 entrevistas semi-estructuradas distribuidas en los sectores feminizados mencionados en el AMBA en el año 2022. De esa forma, nos interrogamos acerca de cómo afecta la precarización del trabajo, en cuanto al salario y la sobrecarga de tareas, en el núcleo familiar de las trabajadoras de actividades de la

reproducción social asalariada que poseen altas tasas de feminización y nos proponemos explorar de qué modo impacta sus hogares.

Palabras clave: feminización; precarización; trabajo; mujeres; entrevista

JOB INSECURITY IN THE AMBA: REFLECTIONS ON TIME, SALARY AND WORK OVERLOAD IN FEMINIZED WORK ENVIRONMENTS

Abstract

The current scenario of capitalism is marked by a crisis in social reproduction, with feminized sectors of work at its epicenter. Women workers perform tasks of social reproduction in fields such as health, education, cleaning, and socio-community spaces in exchange for remuneration affected by job insecurity. Extended working hours, task overload, low salaries, and household chores related to family care predominantly carried out by women for the reproduction of individuals, particularly the workforce, are observed. Reflections are made on dimensions related to salary and work overload (both within and outside working hours) and their impact on the family and the personal development of working-class women. This is approached through a qualitative methodology analyzing 30 semi-structured interviews conducted in the mentioned feminized sectors in the AMBA in 2022. Consequently, we inquire about how job insecurity, concerning salary and task overload, affects the family nucleus of women engaged in paid social reproduction activities, characterized by high rates of feminization, and aim to explore how it impacts their households.

Keywords: feminization; job insecurity; work; women; interview

PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO NO AMBA: REFLEXÕES SOBRE TEMPO, SALÁRIO E SOBRECARGA DE TRABALHO EM AMBIENTES DE TRABALHO FEMINIZADOS

Resumo

O cenário atual do capitalismo é atravessado por uma crise de reprodução social, no epicentro da qual estão os setores de trabalho feminizado. São as trabalhadoras mulheres que desenvolvem tarefas de reprodução social nos âmbitos de saúde, educação, limpeza e espaços sócio-comunitários em troca de uma remuneração que é afetada pela precarização do trabalho. Jornadas de trabalho prolongadas, sobrecarga de tarefas, baixos salários e atividades realizadas no ambiente doméstico, em relação ao núcleo familiar, são desempenhadas majoritariamente por mulheres para a reprodução das pessoas, particularmente da força de trabalho. Reflete-se sobre dimensões relacionadas ao salário e à sobrecarga de trabalho (dentro e fora da jornada de trabalho) e seu impacto na família e no desenvolvimento pessoal das mulheres da classe trabalhadora. Para isso, utiliza-se uma metodologia de tipo qualitativa, analisando-se 30 entrevistas semi-estruturadas distribuídas nos setores feminizados mencionados no AMBA no ano de 2022. Assim, questiona-se como a precarização do trabalho, em termos de salário e sobrecarga de tarefas, afeta o núcleo familiar das trabalhadoras de atividades de reprodução social assalariada que possuem altas taxas de feminização, buscando-se explorar de que forma isso impacta seus lares.

Palavras-chave: feminização; precarização; trabalho; mulheres; entrevista

Introducción

En el siguiente escrito académico nos proponemos investigar en el contexto de crisis de reproducción social, cómo se materializa la precarización laboral sobre la clase que vive del trabajo en sectores laborales feminizados, en un marco de ajuste a las instituciones de gestión pública del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Es decir, indagar de qué modo afecta la vida personal de las trabajadoras, la precarización del salario, la extensión de la jornada de trabajo en sus diferentes formas, y la pobreza de tiempo como resultado de la multiplicidad de tareas que realizan tanto remuneradas como no remuneradas. A tal efecto, entrevistamos a trabajadoras de la educación del nivel Inicial y Primario como parte de un proyecto de investigación más amplio, que incluye a trabajadoras socio-comunitarias, del cuidado de la salud y de tareas de limpieza.

Este estudio se inscribe en el marco de una crisis de reproducción social, donde las mujeres enfrentan una doble carga: por un lado, las condiciones precarias en sus trabajos remunerados, y por otro, el trabajo no remunerado en el hogar, esencial para la reproducción de la fuerza laboral y la creación de valor. De esta forma, la pregunta central de nuestra investigación es: ¿Cómo afecta la precarización del trabajo, en términos de salario y sobrecarga de tareas, al núcleo familiar de las trabajadoras de actividades de reproducción social que presentan altas tasas de feminización?⁶⁵

Para abordar esta cuestión, desarrollamos dos dimensiones. La primera analiza el aspecto salarial, su impacto en el sostenimiento de la vida y el rol de la mujer en el hogar⁶⁶. La segunda dimensión se enfoca en la sobrecarga laboral y la flexibilización de la jornada, considerando cómo las horas extras, dobles jornadas y la rotación de francos afectan tanto al núcleo familiar como al desarrollo personal de las trabajadoras.⁶⁷ Estas dimensiones se articulan con nuestra hipótesis, que plantea que la crisis de la reproducción social agrava la precarización laboral en los sectores feminizados, generando múltiples efectos adversos sobre las trabajadoras y sus familias.

Marco teórico

El concepto de crisis de reproducción social, en el que enmarcamos nuestro problema de investigación, lo tomamos de Nancy Fraser (2016), quien plantea que dicho concepto está atravesado por dos de los principales temas de debate público en la actualidad: la crisis del trabajo y la Nueva Ola Feminista. En ese sentido, se tiene en cuenta que no es una crisis del

⁶⁵ Para responder este interrogante construimos una bibliografía que incluye los trabajos de Antunes (2005), Longo (2012), Arruzza y Bhattacharya (2020), Fraser (2015), James (2002) y Bourdieu (1999), Vickery (1977), Damián (2003), Boltvinik (2005), y García Sainz (2017), de cuyo análisis surge que las trabajadoras mujeres de estos sectores vienen padeciendo procesos de precarización en un mercado laboral sumamente fragmentado

⁶⁶ En esta dimensión, exploraremos preguntas como: ¿Sos jefa de hogar? ¿El salario te alcanza para vivir y mantener a tu familia?

⁶⁷ Aquí, investigaremos cómo combinan el trabajo remunerado con las tareas no remuneradas, generando una carencia de tiempo para su desarrollo personal. Las preguntas clave son: ¿Cómo es una jornada laboral diaria? ¿Tenés más de un trabajo? ¿Cómo impacta en tu vida familiar y personal? ¿Cómo se distribuyen las tareas domésticas en el hogar?

ámbito doméstico sino de la forma en la que se reproduce el trabajo⁶⁸.

Esta investigación analiza actividades laborales feminizadas vinculadas a la reproducción social (salud, educación, limpieza y sectores comunitarios) en el contexto argentino, particularmente en el AMBA, donde la precarización laboral afecta especialmente a las mujeres. Como señala Fraser (2016), el trabajo de reproducción social no asalariado sostiene el funcionamiento del capitalismo, lo que justifica su análisis desde una perspectiva de género.

Antunes (2005) describe la expansión de la precarización en el "nuevo proletariado", donde las mujeres son relegadas a trabajos de baja calificación y alta intensidad, combinando empleo remunerado y tareas domésticas. Esto agrava desigualdades pese a avances parciales en su emancipación. En Argentina, esta dinámica también se refleja en la economía popular, que surge como respuesta al desempleo estructural, pero no constituye una solución duradera. Según Longo (2012), la precariedad laboral⁶⁹ se manifiesta en el empleo (flexibilización y subcontratación), el trabajo (degradación y rutina) y las relaciones laborales (fragmentación sindical). Estas dinámicas, globalizadas tras la crisis de 1973, profundizaron en Argentina con la última dictadura militar y el neoliberalismo, afectando especialmente a las mujeres trabajadoras.

Desde la perspectiva de la reproducción social, Bhattacharya (2015) destaca que las trabajadoras sostienen tanto la producción como la reproducción de la fuerza laboral, mientras que Arruzza y Bhattacharya (2020) visibilizan cómo las tareas domésticas y de cuidado limitan su tiempo personal y perpetúan desigualdades de género. Además, la "pobreza de tiempo" es central en este análisis⁷⁰. Vickery (1977) y García Sainz (2017) sostienen que la falta de tiempo doméstico, sumada a la división sexual del trabajo, reduce las posibilidades de formación, ocio y bienestar de las mujeres, profundizando la pobreza multidimensional en hogares sin ingresos suficientes. Este enfoque permite comprender cómo la precarización laboral y las dinámicas de género se intersectan, afectando el bienestar de las trabajadoras y el equilibrio entre su vida personal y laboral.

Fuentes y metodología

El estudio se basa en una metodología cualitativa para investigar la precarización laboral en sectores feminizados en el contexto del ajuste en instituciones públicas y su impacto en los hogares de las trabajadoras. La técnica principal fue la entrevista semiestructurada en profundidad. Se realizaron 30 entrevistas a mujeres trabajadoras de sectores de educación, salud, limpieza y comedores comunitarios en el AMBA en 2022, con edades principalmente entre 40 y 60 años, salvo tres casos de 30 años.

⁶⁸ A su vez, pensar la reproducción social sirve para pensar el capitalismo en su conjunto ya que "las raíces de la actual "crisis de los cuidados" se encuentran en la inherente contradicción social del capitalismo o, en realidad, en la forma aguda que esa contradicción asume hoy, en el capitalismo financiarizado" (Fraser, 2016).

⁶⁹ Para la autora, la precarización, como consecuencia de la flexibilización, en el mercado laboral, se generaron a partir de las limitaciones del modelo de acumulación que entró en crisis, las cuales llevaron al capital a implementar, a escala global, "nuevos mecanismos para lograr disminuir el costo de la fuerza laboral, reducir el tiempo de trabajo innecesario, y disciplinar a los trabajadores", avanzando sobre los derechos laborales conquistados en la posguerra.

⁷⁰ Este concepto fue introducido, a partir de los 60s, por los trabajos de Claire Vickery (1977), quien fue la primera en desarrollar una metodología específica para medir el uso del tiempo en las sociedades modernas, estableciendo su desigual distribución, aunque fue criticada por tener un enfoque excesivamente economicista.

Las entrevistadas, en su mayoría responsables de tareas domésticas y familiares, fueron consultadas sobre la precarización laboral, el impacto del ajuste en los servicios públicos y las tareas de reproducción social en sus hogares. Las entrevistas se estructuraron en cuatro bloques temáticos para abordar la dinámica entre trabajo y vida personal, buscando identificar continuidades y diferencias en la percepción de las entrevistadas. El objetivo es analizar cómo la precarización laboral y la carga de trabajo afectan a estas trabajadoras y reflejan un patrón estructural en el modelo de acumulación de capital en Argentina, aportando al conocimiento sobre las formas de explotación laboral en sectores altamente feminizados.

Precarización laboral ¿Qué dicen las trabajadoras?

Esta dimensión analiza las entrevistas realizadas en la etapa de trabajo de campo a través de las dimensiones⁷¹ antes mencionadas, en pos de verificar, en los testimonios de nuestras entrevistadas, de qué modo se manifiestan en sus jornadas y tareas remuneradas y cómo impactan en sus núcleos familiares y trabajos no remunerados.

Dimensión 1: Impacto del salario.

Esta dimensión analiza la composición de los ingresos de las trabajadoras, su suficiencia para cubrir necesidades personales y familiares, y su impacto en el hogar. Los salarios, cada vez más insuficientes, afectan especialmente a quienes son el principal sostén económico, generando tensiones en la dinámica familiar. Sin embargo, la forma de ingreso y su distribución varían según el sector. La insuficiencia salarial es un factor clave en la pobreza, afectando las trayectorias infantiles, generando conflictos familiares e impidiendo que las familias cumplan funciones esenciales. Según los testimonios, esta situación obliga a las trabajadoras a prolongar sus jornadas, contribuyendo a la "pobreza de tiempo", que exploraremos en la siguiente dimensión. En esta primera instancia, nos enfocamos en cómo los ingresos determinan el acceso a recursos básicos como salud, educación, alimentación y cuidado emocional, impactando directamente en la calidad de vida del núcleo familiar.

Trabajadoras de limpieza

El trabajo de las trabajadoras de limpieza en hospitales es esencial, como se evidenció durante el aislamiento obligatorio⁷², cuando fueron reconocidas como trabajadoras esenciales. Sin embargo, este reconocimiento no se refleja en sus salarios, según los testimonios. Aunque la contratación es formal, gestionada por empresas privadas que licitan servicios en hospitales públicos, las trabajadoras denuncian que el salario es insuficiente y no se corresponde con la carga laboral.

⁷¹ Como observaremos en el desarrollo de cada dimensión, las diferencias entre las distintas actividades se dan dentro de un marco de coincidencias determinado, a nivel general, por la precarización laboral creciente y la crisis de la reproducción social.

⁷² El "aislamiento social, preventivo y obligatorio" fue una medida sanitaria a nivel nacional por la pandemia de COVID-19 en Argentina mediante el Decreto 297/2020.

Una problemática recurrente en las entrevistas es la pérdida de salario ante ausencias por enfermedad, que incluye descuentos por el día no trabajado y la pérdida del presentismo. Como menciona Ana: “Me comí dos COVID-19. Cosa con lo cual, los días que yo no estuve acá, no se me pagó”. También es común que la semana laboral incluya días feriados o fines de semana, los cuales deberían ser pagados al doble de una jornada normal, aunque no ocurre⁷³. Podemos ver un ejemplo de este tipo de situaciones en el testimonio de Verónica⁷⁴:

“Por las seis horas, estaría bueno que sea de lunes a viernes, que no sea sábado domingo y feriado porque viste que la ley de comercio se paga doble, aunque a nosotras por feriado igual trabajado te dan un franco más, o sea no te pagan doble, te dan un franco más” (Verónica, 45 años)

Al consultar a las entrevistadas acerca de la recomposición salarial, la respuesta fue que los aumentos y bonos que perciben no suelen tener utilidad, ya que por la forma y tiempos en que se proyectan, terminan quedando licuados por la inflación, lo cual se traduce mes a mes en pérdida del poder adquisitivo:

“El aumento tendrían que haberlo dado así, de una, no un mes sí, una parte otro mes, no. Tendrían que haberlo dado de una sola vez, si ya te vuelvo a decir, las cosas aumentan todos los días (...) te lo alargan, y ni sirve. Para qué dan el aumento si ahora sube el boleto, después sube lo otro, y el aumento no es nada, seguís en la misma” (Mariela, 47 años)

A esto se le suma que en muchos casos, los insumos de protección no son provistos por la empresa y son las propias trabajadoras las encargadas de obtenerlos con su propio dinero, sobre todo cuando, a partir de la pandemia del COVID-19, se exigen cuidados obligatorios que así los requieren, como dijo Ana que cuenta que ha tenido que pagar sus propios cuidados personales para protegerse.

De todo lo expuesto, lo que podemos observar es que las entrevistadas perciben una merma constante en sus ingresos, ya que pierden poder adquisitivo frente a la inflación y no se actualizan correctamente, a lo que se suma la obligación de utilizar esos ingresos para pagar insumos necesarios para su trabajo, todo lo cual se vincula a lo que dice Longo (2012) acerca de la precarización laboral como una emergente de la relación de poder entre el capital y el trabajo, donde el primero busca avanzar sobre los derechos en función de reducir los costos. La pobreza en los ingresos ha obligado a las entrevistadas muchas veces a buscar trabajos extra de limpieza en hogares particulares, por hora y de manera informal, lo cual profundizaremos en la segunda dimensión.

Estas mujeres de “la-clase-que-vive-del-trabajo”, como explica Antunes (2005), no se desenvuelven en el sector productivo pero realizan una tarea de servicio fundamental si consideramos que los que sí son trabajadores del sector productivo precisan gozar de buena salud y por ende de Hospitales higienizados para tratarse. Hospitales donde nuestras trabajadoras venden su fuerza de trabajo por un salario precarizado, algo que también

⁷³ En el art. 166 de la Ley de Contrato de Trabajo 20744/1974, se indica que los días feriados trabajados son jornadas adicionales, por lo cual se debería cobrar la remuneración normal de una jornada laboral más un monto de igual cantidad, es decir, que los feriados se pagan doble.

⁷⁴ Se han modificado los nombres de forma consensuada a aquellas trabajadoras que así lo manifestaron para proteger y resguardar sus identidades.

evidencia la creciente imbricación de los sectores de servicios con el mundo productivo, y su subordinación a este último. En el ámbito de la salud pública, se vive con mayor crudeza la crisis de reproducción social de la que hablaba Fraser (2004), de lo cual es una expresión la precarización en el salario de las trabajadoras y el traslado de los costos, que deberían afrontar las empresas de limpieza, a ellas mismas.

Socio-comunitarias

Las trabajadoras de comedores comunitarios presentan particularidades que las distinguen de otros sectores. Reciben el plan social “Potenciar Trabajo”⁷⁵, que si bien es una forma de remuneración por tareas de reproducción social, no se considera salario, ya que no incluye los beneficios ni el marco legal de un contrato laboral, según la Ley 20.744/1974⁷⁶, y tampoco está regido por un convenio colectivo. Como señala esta trabajadora:

“Los Potenciar no están bajo convenio. A mí me tocaría estar bajo gastronomía, con otro valor hora, beneficios, seguro de la Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART), obra social y aportes jubilatorios, cosas que no tenemos” (Yesica, 42 años).

Estas trabajadoras realizan tareas similares a las de otros trabajadores del sector gastronómico, pero sin las protecciones legales correspondientes. Como argumenta Longo (2012), las condiciones de contratación reflejan la precariedad laboral, mostrando cómo el propio Estado flexibiliza estas condiciones, precarizando el empleo de trabajadoras que cumplen funciones similares a las de un empleo formal. Además, la distinción entre “salario” y “plan social” genera una tensión en las trabajadoras, quienes perciben el plan como un estigma, pese a que también están vendiendo su fuerza de trabajo:

“Lo que antes era el Salario Social y ahora el Potenciar Trabajo... la palabra ‘salario’ hacía sentir a las compañeras útiles, dignificadas... Empecé a comprender que nadie nos regala nada” (Ana, 60 años)

En línea con la crítica de Antunes (2005) sobre el “tercer sector”, las trabajadoras de comedores comunitarios enfrentan una precarización aún mayor, sumada a la insuficiencia de ingresos que las obliga a buscar trabajos informales adicionales. Cuando se les pregunta si el ingreso del Plan Potenciar es suficiente, la mayoría responde que no, pero logran que alcance mediante una serie de estrategias como trabajos informales (limpieza de hogares, ventas autónomas), subsidios, asignaciones y ayudas familiares. Este complejo entramado de fuentes de ingreso requiere constantes trámites burocráticos y gestión de recursos, reflejando la precariedad de sus condiciones de vida.

“Empecé a vender ropa por pedidos porque con esto estoy endeudada. Antes alcanzaba, pero ahora no. En tres meses no llego al supermercado sin deuda” (Merlene, 32 años)

⁷⁵El programa nacional “Potenciar Trabajo” se creó en 2020 en la Argentina con el propósito de contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas y, de esa manera, promover la inclusión social para personas en situación de vulnerabilidad social y económica.

⁷⁶ La Ley de Contratos de Trabajo n° 20.744: Es la norma legal que regula las relaciones laborales de los trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia, excluyendo a los empleados de la Administración Pública.

Marlene y otras trabajadoras deben recurrir a trabajos adicionales para cubrir sus deudas, que corresponden a productos básicos de consumo familiar. Además, muchas viven en barrios sin servicios básicos como gas o agua potable, lo que obliga a gestionar recursos de manera aún más precaria, profundizando la desigualdad respecto a trabajadoras de sectores mejor remunerados. García Sainz (2017) argumenta que los ingresos altos pueden compensar la pobreza de tiempo al contratar servicios domésticos. Sin embargo, las trabajadoras de sectores precarios enfrentan la contracara: su pobreza de tiempo se ve acentuada por las condiciones laborales y sociales en las que se encuentran.

Enfermeras

Las enfermeras entrevistadas coinciden en que sus salarios no reflejan las responsabilidades ni la capacitación requeridas, lo que ha generado una pérdida de poder adquisitivo debido a la falta de actualización salarial y los recortes en las bonificaciones. Dos entrevistadas mencionan dificultades para cubrir sus gastos, mientras que otras dependen económicamente de sus parejas. Fue expresada de forma elocuente por Susana:

“No es justo. La verdad que estamos muy debajo de todo, y lo que es que aumenta cada año que es lo mismo, es muy poquito. Nosotros, por ejemplo, sin ir más lejos este mes tuvimos un aumento de casi \$8.000, que si vas al mercado no traes absolutamente nada. Así que de un mes para otro cuando ellos te dan el aumento, ya te aumentó todo el triple. Entonces realmente no te sirve. Creo que no estamos muy bien pagos por lo que hacemos, realmente”(Susana, 43 años)

Además, todas las entrevistadas reclaman el reconocimiento de la Licenciatura en Enfermería. Se sienten subvaloradas en comparación con otros profesionales, ya que, según Natalia, el gobierno las clasifica como personal administrativo. Carolina, licenciada en enfermería y profesora universitaria, compara su salario con el de un auxiliar, a pesar de su mayor preparación.

La falta de reconocimiento material y simbólico (Paugam, 2000) se refleja en la insatisfacción, ya que no se valora ni el esfuerzo formativo ni las tareas desempeñadas. Esta subestimación también se relaciona con la crítica de Antunes (2005) sobre la incorporación de la mano de obra femenina en trabajos menos valorados, pues la mayoría de las enfermeras son mujeres, mientras que los médicos, sobre todo los de mayor jerarquía, son predominantemente hombres.

La insuficiencia salarial afecta las relaciones familiares, como señala Susana, quien depende de su esposo para llegar a fin de mes. Muchas trabajadoras deben recurrir a empleos adicionales, como en clínicas privadas o realizando horas extras, para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Esta situación también limita la capacidad de ahorro, ya que las trabajadoras manifiestan estar "con lo justo". Aunque existen diferencias con otras actividades, como las trabajadoras sociocomunitarias, en todas se observa una precarización salarial que impacta en la estabilidad familiar y genera una sobrecarga de trabajo que contribuye a la pobreza de tiempo, con consecuencias en la salud y el desarrollo personal.

Docentes

Cuando se indagó a las docentes acerca de si es justa la remuneración obtenida,

considerando el trabajo realizado, la mayoría de las respuestas de las docentes fue que la paga no es acorde a las tareas, la cantidad de horas, la capacitación profesional y la responsabilidad que implica estar a cargo de las infancias. Este punto atraviesa el problema de la precarización (Longo, 2012; Bouffartigue y Bérout, 2009) al considerar el sueldo en comparación a las tareas y el servicio brindado por parte de estas mujeres, así como también el tema del reconocimiento material y simbólico, y sus consecuencias para la satisfacción y el desarrollo personal de las trabajadoras (Paugam, 2000).

Una de las docentes entrevistadas cumple su función como directora de un jardín de infantes, es decir, pertenece al equipo de conducción. Cuando se le preguntó si su salario le parece justo mencionó por un lado, la responsabilidad que recae sobre su figura y por otro, que en su caso, cobra su sueldo con la mayor antigüedad ya que está próxima a jubilarse.

“En cuanto a si es justo y remunerativo, yo creo que por el tipo de responsabilidad y compromiso que tengo en la escuela me parecería que no es un sueldo que sea acorde, porque la carga y la responsabilidad es muchísima. Yo tengo, sobre mí, 220 niños de 3 a 5 años, aproximadamente una planta funcional de 40 docentes y sumándose también al equipo de auxiliares y de comedor que es una empresa tercerizada” (Patricia, 57 años)

En la misma pregunta, una maestra de sección hizo hincapié en lo mismo que mencionaba la directora y además agregó:

“En relación a la cantidad de cosas que hacemos fuera del Jardín, (el salario) sería justo si mi trabajo terminara en el momento en que finaliza la jornada. Pero la realidad es que te ves el fin de semana trabajando, a la mañana, tarde, noche y eso ya lo hace mucho más chico al salario” (Pamela, 42 años).

Lo que nos da una pauta de que la jornada laboral se extiende al ámbito del hogar y personal. Todos los casos coincidieron en ser trabajadoras registradas cuyo empleador es el Estado perteneciente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al tratarse de escuelas públicas. Son docentes que se desempeñan en cargos de doble jornada, es decir, entre 6 y 8 horas por día porque sino “no les alcanza”. Aunque, en contraposición, como aspecto positivo se señaló que se trata de un trabajo en blanco, con aportes, obra social y acceso a licencias.

“Creo que tendríamos que ganar mucho más por lo que hacemos y porque el salario dignifica a una persona. Pero el día 31 a las doce de la noche el sueldo está depositado. Aún, en pandemia”. (Silvana, 55 años)

Para Longo (2012), los sectores que gozan de horario fijo y menos tensión durante la jornada de trabajo son vistos como privilegiados por otros trabajadores. En contraposición, se destaca como aspecto negativo los prejuicios que se encuentran en torno a ser “maestra jardinera”, hacia la mirada de un otro y la búsqueda por la aprobación y valorización de la tarea. Paugam (2000) habla del trabajo precario cuando el trabajo no tiene un debido reconocimiento material y simbólico, y entonces el trabajador no encuentra satisfacción en su empleo. En ese sentido, en palabras de las docentes, se menciona en reiteradas ocasiones la formación, capacitación y compromiso social en su trabajo a pesar de no contar con un sueldo que lo refleje (Franco, 2024).

El análisis de la composición de ingresos en los cuatro sectores estudiados revela tanto similitudes como diferencias significativas entre las trabajadoras entrevistadas. Mientras que las enfermeras, docentes y personal de limpieza están registradas formalmente y empleadas por el Estado, las trabajadoras socio-comunitarias perciben ingresos a través de planes sociales, como el Potenciar Trabajo, que carecen de derechos y beneficios asociados al salario formal. Este marco de precarización evidencia cómo, en palabras de Fraser, los salarios “caen por debajo de los costos de reproducción socialmente necesarios” (2016: 127).

Aunque todas las trabajadoras coincidieron en que sus ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades, este “no alcance” se manifiesta de manera diferenciada según el sector. En el caso del personal de limpieza, con un sueldo promedio de \$50.925, las trabajadoras deben costear insumos de protección personal y buscar empleos complementarios. Por su parte, las trabajadoras comunitarias perciben un ingreso aún menor, de \$28.950, que suelen complementar con changas como limpieza de hogares o apoyo familiar, tareas enmarcadas en lo que se denomina “un sector feminizado, informalizado y racializado” (Varela, 2021: 10).

Las enfermeras, con ingresos cercanos a \$84.000, sufren además la pérdida del poder adquisitivo y demandan reconocimiento profesional como Licenciadas en Enfermería. Las docentes, con salarios promedio de \$88.000, enfrentan variaciones según antigüedad y funciones, pero también se enfrentan a las limitaciones de ingresos que las obligan a extender sus jornadas laborales, lo que refleja, según Fraser (2016), un desprecio estructural por las relaciones sociales que sostienen la productividad capitalista⁷⁷. Para la autora, el trabajo de reproducción social, históricamente asignado a las mujeres y mayoritariamente no remunerado, sigue interfiriendo en la vida personal y familiar de las trabajadoras, intensificando la precarización y la pobreza de tiempo.

En síntesis, la flexibilidad en la composición de los ingresos y la persistente precarización laboral reflejan desigualdades estructurales que afectan de manera particular a las mujeres, quienes enfrentan una doble carga entre el trabajo remunerado y el no remunerado, profundizando las brechas de género y trabajo en los sectores analizados.

Dimensión 2: Sobrecarga en la Jornada Laboral

Esta dimensión analiza la extensión e intensificación de las jornadas laborales de las trabajadoras, ya sea por horas extra, dobles jornadas, pluriempleo o la asignación de tareas adicionales debido a la reducción de personal o la rotación de horarios y francos. Estas demandas, sumadas a la carga del trabajo doméstico, tienen un fuerte impacto en su salud, núcleo familiar y desarrollo personal.

Aunque la sobrecarga laboral varía según el sector, todas comparten una flexibilidad generalizada en las jornadas que incrementa la “pobreza de tiempo”: una restricción en la capacidad de las trabajadoras para dedicar tiempo al ocio, el autocuidado y el acompañamiento familiar. Este fenómeno refuerza desigualdades de género derivadas de la histórica división sexual del trabajo, que asigna a las mujeres mayor responsabilidad en las tareas de cuidado y

⁷⁷ A noviembre de 2022, el salario mínimo en Argentina era de \$57.900, mientras que la Canasta Básica Total alcanzaba los \$139.783 (INDEC). Este desfase económico impide que muchas trabajadoras accedan a servicios en el mercado, alargando su jornada laboral y dificultando el trabajo de reproducción social no remunerado en el hogar (Varela, 2021).

domésticas.

Trabajadoras de limpieza

Como mencionamos en la dimensión anterior, las trabajadoras de limpieza en el sector de salud tienen un empleo formal, pero enfrentan flexibilización en sus jornadas laborales, como los francos rotativos, lo que dificulta la organización de su tiempo personal y familiar.

“Los días de guardia, feriados, sábado y domingo, por ejemplo nosotros trabajamos, tenemos un sábado por ejemplo franco, la otra semana domingo, después sábado, después domingo. Los feriados son por guardia, le toca un feriado a una guardia, otro feriado a otra, un feriado a una guardia otro feriado a otra... Entonces ahí te piden colaboración porque somos pocos... Por ejemplo día de la madre, día de la madre éramos cinco, cinco personas de limpieza para todo el hospital” (Verónica, 45 años)

Además, en situaciones de baja en el personal, las trabajadoras deben asumir tareas adicionales sin compensación, lo que aumenta su agotamiento físico y mental. Este exceso de tareas genera agotamiento, lo que afecta a las trabajadoras tanto en el trabajo como en sus hogares. Como indica Ana, muchas veces solo descansan para recuperarse para el día siguiente:

“llega un momento en que te explota la cabeza con todo esto, porque no estás trabajando bien. Lo haces a disconformidad, o sea, no estás bien en el trabajo, si vos estás bien, das más. Me cansa, no tengo ganas de hacer nada, me agota, últimamente me agota más, o será que yo estoy vieja, pero me cansa más, llego a casa y duermo... Antes no era así” (Ana, 60 años)

Como podemos ver, el agotamiento que genera esta sobrecarga en las trabajadoras tiene un impacto directo en el hogar ya que en casos como el de Ana, solo vuelven a su casa para reponer su fuerza de trabajo para el día siguiente. Otro rasgo saliente en este sector que ya mencionamos en el apartado de Impacto del Salario, es la necesidad de las trabajadoras de aumentar sus ingresos con un segundo trabajo en esto que se conoce como pluriempleo. El pluriempleo es otra estrategia que utilizan para complementar sus ingresos, trabajando de manera informal en hogares.

“¿De qué era ese trabajo? Ese segundo trabajo que tenías...

R: De niñera... ¡Ah! y ahora me estoy yendo los sábados, por hora.

P: ¿Y qué haces? ¿Limpieza... O niñera?

R: Ante era niñera, pero ahora los nenes están grandes y voy a hacer la limpieza” (María, 60 años)

Este tipo de polivalencia, como la describe Longo (2012), flexibiliza aún más las condiciones laborales. Al finalizar su jornada, las trabajadoras también asumen la mayoría de las tareas domésticas, lo que les deja poco tiempo para actividades personales o familiares. María comparte cómo sus responsabilidades le impidieron continuar su educación:

“Lo que pasa es que yo cuando era chica también... Ahí me di cuenta porque atendía a mi abuela, que estaba enferma de cáncer. También la ayudé mucho. Andaba con la bolsita de colostomía y yo siempre se la quería cambiar. Mi mamá, como era chica, por ahí me decía que no. Y ahí me di cuenta de lo que quiero. De chica. Nunca tuve la oportunidad, porque

del más grande yo me quedé mamá soltera. Mi pareja ahora hace 5 años, mi hijo tiene 19 y... costó... Estudiar, salir adelante. El secundario lo tenía hecho, pero no había seguido ninguna carrera porque me tuve que poner a trabajar.” (María, 60 años)

Como podemos ver en el testimonio de María, su historia de vida la llevó a ocuparse del cuidado de su familia impidiéndole seguir sus estudios porque las tareas de cuidado sumadas a la necesidad de trabajar la dejaban sin tiempo para encarar una carrera. Sin embargo también resulta interesante cuando habla de su hija que a diferencia de ella sí pudo seguir sus estudios, pero sin poder pasar tiempo con su familia.

“Hace 33 años que estoy acá. Me perdí un montón de cosas. Pero bueno, hay que salir a trabajar porque hoy en día no alcanza. Yo la veo a ella que sale de acá, se va a estudiar, tiene que atender la casa. No está nunca con los nenes. Yo digo, se está perdiendo lo mejor de los nenes. Porque eso no lo recuperás más” (María, 60 años)

La falta de tiempo limita la posibilidad de estudiar, descansar o disfrutar del tiempo libre. Priscila, trabajadora de limpieza, combina su empleo con el cuidado de sus hijos y las tareas domésticas, un trabajo esencial pero no remunerado que recae históricamente en las mujeres. Como señala Fraser (2015), estas labores son fundamentales para la reproducción de la sociedad y la acumulación de capital. Algunas entrevistadas buscan redistribuir las tareas del hogar. Mariela destaca que sus hijos colaboran en la cocina, la limpieza y el lavado, ya que ella los enseñó. Sin embargo, esta iniciativa no resuelve la crisis de cuidados que, según Fraser (2015), es una contradicción estructural del capitalismo, que explota el trabajo de reproducción social sin retribuirlo adecuadamente.

Además, las trabajadoras que asumen labores de limpieza o cuidado infantil como segundo empleo muestran cómo el mercado se apropia de estas actividades esenciales. Este fenómeno, como sostienen Arruzza y Bhattacharya (2020), evidencia que el trabajo de reproducción social es una fuente clave de ganancias en el contexto neoliberal.

Trabajadoras socio-comunitarias

El sector de trabajadoras de comedores comunitarios quizás sea el más golpeado en materia de precarización. Como antes mencionamos, lo que perciben por sus tareas es insuficiente y despojado de derechos laborales como aportes previsionales o seguros, por lo que deben recurrir al pluriempleo y a estrategias que diversifiquen los ingresos.

En el caso de las trabajadoras de comedores comunitarios encontramos una particularidad en cuanto a su organización. Al consultarles sobre la cadena de mando, no parece haber una figura que cumpla el rol de jefe que fije funciones y horarios. Hay una referente que en general es la compañera que les permitió ingresar pero el clima de trabajo se asemeja más al de una cooperativa donde hay distribución de tareas pero de un modo flexible y fluctuante en la medida de lo necesario. Esta flexibilidad se traduce en cambios de tareas y en ocasiones en extensión de la jornada de trabajo.

“Y uno sabe cuando llega al barrio y nunca cuando se va. Porque siempre hay emergentes, hay situaciones que te llevan a quedarte más tiempo. Eso no lo medís” (Ana, 53 años)

Como nos comenta Ana, en determinadas situaciones surgen emergentes que obligan

a las trabajadoras a quedarse más tiempo del que deberían cumplir. Pero también como en el caso de las trabajadoras de limpieza, encontramos que al no tener ingresos suficientes por estas tareas, deben recurrir al pluriempleo, es decir, buscar un segundo ingreso que les permita sobrellevar los gastos del hogar.

“Y bueno acá en el trabajo que tengo en el barrio de Recoleta (CABA) es de una señora que tiene dos departamentos y los alquila a turistas, entonces depende de eso, de los turistas... Ahora por ejemplo el siete llega un turista de Estados Unidos, se queda una semana, y yo soy la que hace el trabajo de mucama” (Carla, 55 años)

En las palabras de Carla podemos ver el grado de adaptabilidad para realizar distintos tipos de trabajo pero también se puede entrever cómo ya mencionamos, el mercado encuentra nuevos nichos de ganancia en las tareas de cuidado o de limpieza.

“Me levanto a las siete de la mañana, siete y media vengo para el comedor, empiezo a preparar, cocino, sirvo la comida a las doce o una, después se termina y le doy de comer a Debo, a las chicas de acá, tipo una y media o dos me voy, y hoy por ejemplo llego a casa, me baño, y salgo a trabajar por hora en Recoleta” (Carla, 55 años)

Como también comenta Carla, muchas trabajadoras cumplen su jornada en el comedor y se trasladan a un segundo trabajo, que en general son tareas de limpieza en hogares particulares, cuidado de niños, o con algún emprendimiento personal. Como resultado de esto muchas veces las trabajadoras pasan todo el día fuera de sus hogares lo que además de producirles agotamiento, les quita tiempo para compartir con su núcleo familiar, para realizar las tareas del hogar. En ocasiones esta carencia de tiempo atenta contra el desarrollo personal de las trabajadoras impidiéndoles estudiar como nos cuenta por ejemplo Marlene:

“Yo siempre quise terminar la secundaria pero todas las horas se me superponen. No me daba para dejar a mi hija en la escuela y llegar al estudio y volver a retirarla” (Marlene, 32 años)

Esto se suma a las carencias que padecen en los entornos donde residen, como la falta de red de gas natural, o de agua potable, lo que les suma otra tarea para su adquisición. Partiendo de estas desventajas, en los testimonios de nuestras entrevistadas al momento de consultarles como se distribuyen las tareas al interior del hogar, a pesar de los movimientos por los derechos de la mujer que buscan visibilizar las desigualdades en torno a los roles de género, podemos observar que persiste un mayor peso sobre la mujer a la hora de encargarse de las tareas domésticas y de cuidado “antes, durante y después” de la jornada laboral, todo lo cual consume por completo el tiempo de las trabajadoras dejándoles prácticamente nada de tiempo libre para ocio, recreación, o incluso descanso.

Decimos “antes” porque se encargan del desayuno y traslado de los niños a las escuelas, “durante” porque ante emergencias familiares son ellas quienes acuden y “después” por las tareas del hogar que desarrollan al terminar su jornada de trabajo. A menudo la cadena de cuidados se extiende entre las mujeres de la familia al momento de cuidar o trasladar a hijos, sobrinos o nietos. A la vez, visibiliza los múltiples frentes que deben atender las mujeres siendo a la vez trabajadora, madre, encargada de cuidados, de limpieza y demás tareas necesarias para la reproducción social del núcleo familiar.

“Entonces imagínate, si en eso de que yo me tenga que levantar todos los días, llevar los chicos al colegio, venir, cocinar, trabajar, hacer, armar, desarmar; no tengo tiempo para mí” (Yesica, 42 años)

Lo curioso es que al consultarles sobre qué hacen en su tiempo libre muchas veces las trabajadoras responden que se ocupan de las tareas domésticas asumiendo que ante la disponibilidad de tiempo, este se utiliza para las tareas de reproducción al interior del hogar.

“Haciendo cosas en casa, arreglando, limpiando, cocinando, hago cosas de tareas, en tu casa tenemos muchas cosas de tareas, hay que limpiar lavar cocinar, tengo dos perros también están ahí les tengo que dar de desayunar, tengo gato... Me lleva trabajo” (Sara, 54 años)

El hecho de que las mujeres asuman la responsabilidad de llevar a cabo estas tareas en desmedro de su tiempo libre no es azaroso. Como señalan Arruzza y Bhattacharya (2020: 39) la reproducción social se estructura desde la socialización, es decir, en la reproducción de actitudes, predisposiciones, subjetividades y en la internalización de formas de disciplina. Pero también señala la autora que este proceso no se limita al espacio del hogar únicamente.

“No, porque es parte de lo que es ser mujer. La mujer tiene que lavar, planchar, cocinar, ordenar, organiza los chicos, organiza la escuela, el trabajo de uno, la vida de uno y... el resto. O sea, es algo que es parte de lo que te toca” (Yesica, 42 años)

En el relato de Yesica se materializa esta estructura que describen Arruzza y Bhattacharya (2020), y es por eso que resulta interesante el impulso o al menos el intento por generar una conciencia en las generaciones futuras de modo que crezcan con otra subjetividad en relación a la responsabilidad de las tareas del hogar y de cuidado que históricamente han sido cargadas (y lo siguen siendo) sobre la mujer.

Enfermeras

Como surge de las entrevistas realizadas a enfermeras del AMBA revelan que la flexibilización laboral y la sobrecarga de tareas han generado un impacto significativo en sus hogares y desarrollo personal. En el ámbito de la salud pública, caracterizado por la creciente demanda ciudadana y la insuficiencia de personal, estas problemáticas se agravaron tras la pandemia de COVID-19, que consolidó cambios laborales inicialmente presentados como excepcionales. La reducción de equipos y la no reposición de personal jubilado o fallecido han sobrecargado a las trabajadoras. Carolina relata:

“Los equipos se achicaron, todos. De todos los servicios se achicaron: antes tenían más equipo en quirófano, tenían cardiólogo, tenían los anestesistas, dos instrumentadoras; y ahora, tienen una instrumentadora, el cardiólogo no está, salvo en una cirugía que se necesite un cardiólogo, como que fueron bajando costos, si fuera un privado serían costos (...) Yo cuando entré a este servicio, éramos cuatro enfermeras y una jefa en el turno mañana; y yo ahora tengo dos enfermeras y yo que sería la jefa, o sea que me falta la mitad del equipo, tengo el cincuenta por ciento del personal.” (Carolina, 50 años)

De manera similar también se señala:

“Y éramos pocos, porque muchos compañeros se murieron, no están. Los que se jubilan, no reponen, entonces como que tenés dónde (inentendible), porque no reponen a la gente que se murió, que se fue, que se jubiló, no reponen. Entonces estamos en la misma, haciendo el mismo trabajo, de que éramos muchos más. Antes de la pandemia éramos muchos más y hacíamos más poco trabajito, digamos, las compañeras que se fueron, que murieron. Muchos en la pandemia se murieron y no repusieron del gobierno. Al menos del gobierno no, así que tenemos más trabajo y no nos reponen, nos pagan lo mismo (...) Andamos haciendo más tareas en el sentido que los pacientes siguen siendo los mismos, pero ante menos personal, nosotros nos cargamos con más trabajo”. (Natalia, 51 años)

La insuficiencia salarial obliga a muchas enfermeras a trabajar en dos empleos, lo que genera una “pobreza de tiempo” (Boltvinik, 2005) que afecta su bienestar. El pago de horas extras es raro y, cuando existe, suele eliminarse rápidamente. En su lugar, se ofrecen días compensatorios, cuya utilización depende de decisiones jerárquicas, provocando tensiones entre el personal. Es por eso que la distribución de las horas frecuentemente es motivo de conflicto:

“Tuvimos una pequeña discusión con mi supervisora y siempre fui cubriendo baches por todos lados. Y, en un momento que le reclamé algo, ella se llevó más de lo que dijo el resto, entonces dije: bueno, no vengo más. Cuando necesites a alguien busca a otra, porque no vengo. Entonces de ahí en más no hice más horas extras” (Susana, 43 años)

Si bien el conflicto tiene que ver con la falta de personal y con que no se pagan las horas extra, ni se cumple siquiera con la compensación prometida, esto deriva en conflictos entre compañeras de trabajo, más que en una demanda colectiva contra las autoridades responsables de esa situación. En ese sentido, una solución que surgió, seguramente como consecuencia de la perspectiva individualista con que se aborda el problema, consiste en que los trabajadores se paguen entre ellos los reemplazos, lo cual agrava la situación descrita en la Dimensión 1. Así lo describe esta trabajadora:

“Por la cantidad de carga horaria que tengo con la facu, o sea, lo que me demanda, decidí hacer eso: pagar a alguna compañera que me pueda cubrir mi horario, y pagarle la guardia de trabajo” (Karen, 31 años)

Ante esta precarización, algunas trabajadoras pagan a compañeras para cubrir sus turnos. En ese sentido, la falta de personal también afecta la distribución de tareas, sobrecargando a las más experimentadas y generando conflictos internos. De esa forma, Carolina y Susana señalan que, aunque sus cargos deberían limitarse a funciones de coordinación y supervisión, terminan realizando también tareas asistenciales que corresponden a sus subordinadas debido a la escasez de personal. Carolina, a cargo del servicio, se ve obligada a combinar sus responsabilidades de supervisión con labores de atención directa a pacientes. De manera similar, Susana, supervisora de turno, destaca que, aunque no debería atender pacientes, también se ve forzada a cubrir esas tareas.

Como podemos ver, además de tener que trabajar horas extras o tener más de un empleo, estas trabajadoras se desempeñan en una actividad que exige mucha responsabilidad, enfrentando el deber de cumplir con tareas que las exceden o no están suficientemente capacitadas para realizar. Analizaremos esta situación a la luz del concepto de pobreza de tiempo con perspectiva de género (García Sainz, 2017), a fin de dar cuenta de las consecuencias de la flexibilidad laboral que veníamos describiendo. Además del impacto en

el hogar que genera esta situación, podemos observar que también afecta a la salud psicofísica de las trabajadoras y a sus posibilidades de desarrollo personal.

Decíamos que para comprender integralmente las consecuencias de la flexibilización laboral⁷⁸ es fundamental considerar el concepto de pobreza de tiempo, ya que es un factor determinante a la hora de valorar el bienestar de la población (Damián, 2013). El caso de Karen ilustra esta problemática: debe repartir su tiempo entre dos trabajos, un posgrado en enfermería neonatal y sus responsabilidades personales, enfrentando una sobrecarga que impacta su salud física y emocional. Ella relata cómo optó por pagar a colegas para cubrir guardias, evitando la devolución de horas que la agotaba aún más:

“Me levanto, obviamente que para mí los lunes son trágicos porque vengo de los fines de semana que hago 14 horas (...). Parece mentira, pero esa hora menos de descanso me afecta” (Karen, 31 años)

La falta de tiempo no solo limita la posibilidad de autocuidado, como buscar atención médica o psicológica, sino que agrava el estrés, un problema que, según Karen, somatiza en su cuerpo, afectando su bienestar integral. Este testimonio evidencia cómo la flexibilidad laboral y la carga horaria perpetúan el deterioro psicofísico de las trabajadoras.

Además, el uso del humor aparece como un mecanismo para lidiar con estas experiencias traumáticas. Una enfermera bromeó sobre el impacto psicológico del trabajo en Neonatología diciendo que “no es recomendable que se queden más de 10 años allí porque sino van a terminar con alguna medicación”. Este tipo de humor resignifica las adversidades, pero también normaliza el deterioro psicofísico en estos espacios laborales. La sobrecarga también repercute en las dinámicas familiares y personales.

“En casa estaba muy cansada y cuando uno está cansado, está irritable. Estoy procesándolo de otra manera, tratando, porque también hago un pico de hipertensión, de renegar acá de la vida misma, pero bueno...” (Carolina, 50 años)

Este estrés, lejos de ser percibido como resultado de condiciones estructurales, suele ser internalizado como una falta personal de equilibrio o capacidad de gestión. En otras palabras, los testimonios muestran cómo la pobreza de tiempo y la crisis de reproducción social impactan profundamente la salud de las trabajadoras, quienes no cuentan con los recursos ni el tiempo necesario para recuperarse. Este ciclo de precarización afecta no solo su rendimiento laboral, sino también su calidad de vida, al priorizar las exigencias del trabajo por sobre sus necesidades personales y familiares.

Docentes

Como se mencionó anteriormente en la dimensión que analiza el salario y el impacto en la economía doméstica, las docentes cumplen una jornada laboral de más de un cargo y

⁷⁸ En las entrevistas analizadas, las trabajadoras expresan todo tipo de conflictos con sus maridos o con sus hijos, relacionados a que se les reclama cumplir con el rol que el patriarcado les asigna en el hogar y no pueden satisfacer esa expectativa, por falta de tiempo o de energía, como consecuencia de la flexibilidad en la jornada laboral y la sobrecarga de tareas.

además realizan horas por fuera de su contrato de trabajo, las cuales no son remuneradas sino que corresponden a “la imposición de esas condiciones objetivadas y alienadas sobre los trabajadores como un poder separado que ejerce el mando sobre ellos” (Antunes, 2005: 8).

“Mi cargo es doble turno así que son 4 horas a la mañana, 4 horas a la tarde y trabajaré una hora más realmente. Porque uno llega siempre media hora antes para preparar las cosas y te terminás yendo media hora después o 40 minutos después. Hago horas extras pero no son pagas” (Betty, 47 años).

Lo que reflejan todas las entrevistadas es la necesidad por cumplir sus horas en la institución y a su vez, las horas de trabajo adicional como armado de materiales, planificar, contestar mails, capacitarse, buscar recursos, etc. Un aspecto que se repite tiene que ver con la suma adicional de tareas a raíz de la pandemia. Esta les exigió utilizar nuevas tecnologías como dispositivo mediador del aprendizaje entre los alumnos e incorporó herramientas que antes no se utilizaban. Lejos de significar un avance positivo, las trabajadoras mencionan que todas esas tareas realizadas durante el período de aislamiento obligatorio luego se agregaron a la presencialidad sumando de esa forma más trabajo y responsabilidades.

“A parte de las 8 horas de trabajo, no es sólo la capacitación, el tiempo que te insume, sino que después de la pandemia también hubo un cambio donde todo lo tecnológico tuvo un impacto muy importante. Entonces, se suma también a que muchas de las tareas que antes eran, digamos, en papel, ahora se están realizando a través de sistemas administrativos. Y, a su vez, también, en mi caso particular, me pasa que me comunico, como medio de comunicación, por mail, con las familias, y esto también me demanda... tendría que hacerse dentro del horario, pero la demanda de la escuela, a veces, es tanta que no lo llego a cumplir dentro de la escuela. Entonces, generalmente, sí, lo completo, lo programo... Aprendí a programar los mails para no mandar un mail a las 3 de la mañana... Pero sí, después a parte también te insume preparar las capacitaciones con los docentes, realizar las planificaciones docentes. Todo eso, por más que por agenda tendrías que organizarlo dentro de la escuela, no siempre se cumple”. (Patricia, 57 años)

El sistema de contrato de las docentes en donde cumplen sus funciones como “suplentes”, “interinas” o “titulares” según la antigüedad y puntaje obtenido a lo largo de su carrera no permite realizar horas extras ya que legalmente se les paga por las horas de lunes a viernes firmadas en la declaración jurada de toma de posesión del cargo. Todo lo que es por fuera de ese horario, no sólo no está cubierto por la ART sino que tampoco es pago. Sin embargo, las docentes realizan estas horas para cumplir mejor su labor dentro de la institución educativa. Estas incluyen ingresar antes de horario o retirarse por fuera del mismo y trabajar desde sus casas.

“Tenes momentos donde el maestro es permeable. Guardas todo lo que tenías preparado y te llevas a tu casa. Yo corto la tira, ella las flores y ese día no vas a las 7 de la mañana, vas 6.15am para poder preparar todo y que a las 7 cuando llegan, esté listo. ¿Entendes? Todo esto por motus propio (...) Me las ingenio para hacer la actividad aunque no tenga recursos” (Silvana, 55 años)

En las entrevistas realizadas se resaltan constantemente el trabajo que se suma a la tarea diaria de una jornada extendida. En el escalafón de cargos docentes de nivel inicial se encuentra el rol de maestra de sección, quien según el Reglamento Escolar de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, tiene la obligación de planificar, elaborar informes y a su vez estar a cargo del grupo como responsable legal, entre otras cuestiones. Este cargo en una jornada doble es de 6 horas y media diarias. En cambio, el rol de maestra celadora tiene que atender en el horario de comedor y trabajar de manera conjunta con el docente de la sala funcionando como pareja pedagógica. A su vez, son quienes suelen cubrir eventuales inasistencias y licencias de las docentes cuando estas no excedan los dos días consecutivos. A diferencia de la maestra de sección, este cargo en una jornada doble trabaja 1 hora y media más, cumpliendo 40 horas semanales bajo un salario menor, sobre este punto, una de las entrevistadas comentó que:

“Por llevarme mucho trabajo a mi casa he dejado el cargo de Maestra de Sección, como le llamamos nosotros, al que está al frente del grupo. Como celadora, no te llevás tanto trabajo a tu casa, no planificás y bueno llegó un momento donde se me hacía muy difícil, porque tenía que hacer las tareas de la casa y no podía llegar y ocuparme de planificar, hacer los informes de mis alumnos, preparar material... Esas son horas que uno trabaja en tu casa no se pagan, no podes hacer horas extras en la escuela porque la jornada es de 4 horas” (Laura, 46 años)

En ese sentido, esta docente deja en evidencia que al ser tanta la demanda de tareas que sobrecargan su función, ella optó por tomar el cargo de menor jerarquía y remuneración resignando de esta forma cuestiones que tienen que ver con el propio crecimiento profesional en cuanto a la posibilidad de ascender, acreditar antigüedad y cobrar un sueldo más elevado. Este punto nos resulta sumamente interesante ya que también visibiliza por un lado, la naturalización de tener que trabajar un cargo doble, de seguir realizando tareas por fuera del horario y a su vez, la pérdida del tiempo personal y de ocio (Franco, 2024).

“Si yo pudiera trabajar un solo turno, yo sería mil mejor maestra. Esto de trabajar 2 o 3 jornadas, porque también en algún momento he trabajado en adultos, son 2 o 3 trabajos. Si uno tuviera la responsabilidad de 1 turno a cargo y otro turno donde te juntaras con tus compañeros, planificaras, corrigieras y la la la con más responsabilidad, con discusión, con aportes teóricos, obviamente el trabajo y la educación serían distintos. Pero está como instaurado que para sobrevivir necesitás tener un cargo doble. Que obviamente también es super cansador, no está bueno” (Betty, 47 años)

Teniendo en cuenta estas citas, retomamos las palabras de Longo (2012) con respecto a que el tiempo de trabajo se dispone enteramente hacia el capital, la disposición de las trabajadoras se adecua a sus requerimientos, y su tiempo de vida se organiza detrás del tiempo de trabajo. Como es mencionado en los otros sectores analizados, el caso de las docentes de nivel inicial también refleja que no sólo realizan su horario laboral y horas extras (no remuneradas) sino que también cumplen con las demandas y tareas de sus casas.

“Un feriado, yo tengo que decir “bueno no, vayan y yo aprovecho para hacer estas cosas”. Y a veces sí, yo me veo afectada y me da bronca porque digo, la verdad es que el feriado lo tengo para descansar y lo estoy “aprovechando” para adelantar, o mejor dicho para no atrasarme. Porque si vos tenés en cuenta, yo entro a las 7:45 y los nenes entran a las 7:45, y yo me voy a las 16:10 y los nenes se van a las 16:10. Dentro de mi horario de trabajo no existen ni 10 minutos en donde yo diga yo entro a las 7 y tengo desde las 7 hasta las 7:45 para, reunirme con el personal, hablar con la directora, preguntar alguna gestión, hacer alguna gestión administrativa, No

existe. Y muchas veces en el horario que yo descansarí, de 12 a 13, aprovecho para ir a hablar con la directora alguna cierta cosa, porque en esto que nosotros hablábamos de hacer un informe o planifica” (Pamela, 42 años)

En ese sentido, a través del testimonio de Pamela, podemos entender que el tiempo de trabajo quita la posibilidad de por ejemplo, poder aprovechar un día no laboral como es un feriado. La pobreza de tiempo se refiere a la carencia que los hogares sufren de éste debido a que sus miembros trabajan en exceso o no tienen recursos humanos suficientes para cubrir sus requerimientos de trabajo doméstico (incluyendo cuidado de menores). Esto tendrá como consecuencia la desatención o abandono de otras actividades, como el estudio, la convivencia familiar, o el tiempo libre en general.

“Antes tenía más tiempo libre, pero desde que tomé el cargo de directora lo fui perdiendo un poco. Pero creo que nos pasó después de la pandemia de estar las 24 horas. Con esto de la tecnología, tampoco cortas, porque tenés el mail, tenés el grupo de Whatsapp. Creo que la demanda fue tanta que, a su vez, las directoras incluso hasta las supervisoras se empezaron a poner un parámetro para empezar a cortar, para decir, bueno, fines de semana no nos comunicamos salvo que sea una urgencia, tratamos de organizarlo, porque realmente nos va invadiendo mucho” (Patricia, 57 años).

A través de este fragmento, Patricia, directora de un jardín de CABA, nos comenta la falta de este tiempo de esparcimiento por estar abocada al trabajo por fuera y dentro de la institución educativo. Ella deja en claro que la labor docente implica el trato con un otro, en este caso, la comunidad educativa, que involucra no sólo a los actores dentro de la escuela sino también estudiantes y familias.

Como dice García Sainz (2017), este alargamiento de las jornadas puede provocar déficit temporal porque las trabajadoras no disponen de tiempo para el descanso y el ocio, pero el encogimiento de las mismas, hasta extremos de subempleo, no permite obtener ingresos suficientes para vivir dignamente. Además, “la flexibilidad contractual, la excesiva flexibilidad de la jornada, la fragmentación horaria y la plena disponibilidad generan privación de tiempo, impiden tener soberanía sobre el tiempo propio y para organizarlo en función de expectativas personales y de relaciones sociales” (Franco, 2024: 230). Resulta llamativo que la respuesta unánime ante la falta de tiempo libre fue siempre la necesidad de poder recuperar el mismo.

“P- ¿Te queda tiempo libre?

R- No.

P- ¿Y si lo tuvieras qué harías?

R- Sentarme a tomar un café, en un bar, tranquila... (Risas) El tiempo libre lo hago porque es justo y necesario. Pero bueno...” (Laura, 46 años)

Como la docente Laura señala, este tiempo “justo y necesario” también se refleja en el deseo de poder retomar un viejo emprendimiento, estudiar, trabajar menos horas y hasta poder realizar más actividades con los propios hijos. Haciendo una relación con las dimensiones anteriores sobre salario y sobrecarga de trabajo, nos parece pertinente y enriquecedor la inclusión del tiempo como recurso disponible para dar cuenta de la situación de pobreza de los hogares. Como señala Vickery (1977) se considera que para mantener un estándar básico de calidad de vida, precisan de unos ingresos mínimos, pero también de tiempo que, destinado a la producción doméstica, permita garantizar el bienestar de los miembros del hogar.

A modo de resumen de esta amplia dimensión, en principio podemos decir que en relación con la dimensión 1, la precarización en el salario trae como consecuencia que las trabajadoras deban realizar más de un empleo. Esta precarización también se ve reflejada en la cantidad de horas “extras” realizadas y el incremento continuo en las tareas. En los cuatro sectores hay una extensión o intensificación de la jornada laboral la cual puede relacionarse con la flexibilización en las condiciones laborales entendida como “la flexibilidad en la jornada laboral, en el espacio de trabajo y/o en las tareas a realizar” (Longo, 2012: 380).

En el caso de limpieza, esta flexibilización se hace visible en la inestabilidad de los horarios al tener días rotativos como en el sector socio-comunitario a través del “pluriempleo”. En las enfermeras está por un lado la exigencia de plena disponibilidad y la intensificación de tareas dentro de la jornada. En las docentes el trabajo con frecuencia desborda la jornada teniendo que continuar las tareas en el propio hogar. La demanda y el estrés que se generan ante los emergentes y la necesidad de cubrir puestos de trabajo se observa, por ejemplo, en el caso de las enfermeras por la falta de personal. Problema que se repite también en las docentes de nivel inicial.

Así como marcamos en la dimensión anterior que los aspectos de precarización que observamos se encuentran presentes pero de manera diferente en cada sector, la pobreza de tiempo de las trabajadoras es quizás el rasgo que mayor continuidad encuentre en los 4 ámbitos laborales que estamos estudiando. De lo expuesto en esta dimensión podemos observar que en los cuatro sectores la flexibilidad de la jornada de trabajo y los desórdenes horarios ocasionan privación de tiempo, puesto que la plena disponibilidad para el empleo sumado a la desigual distribución de tareas domésticas reducen la autonomía sobre el tiempo propio de las trabajadoras. El tiempo comprometido en las tareas domésticas está estrechamente vinculado con el orden social de género. La división sexual y social del trabajo, que rige en la mayor parte de las sociedades, atribuye a las mujeres el trabajo reproductivo, de manera que son ellas quienes tienen más comprometido su tiempo con el desempeño de actividades domésticas no remuneradas. El tiempo es un recurso fundamental de los hogares y su disponibilidad (o su carencia) afecta directamente la calidad de vida. El tiempo, junto con los ingresos, que habitualmente se contemplan en los indicadores de pobreza relativa, puede revelar situaciones de pobreza escondida tras déficits o privaciones de tiempo.

CONCLUSIONES

Con el fin de retomar y ordenar los puntos salientes de lo expuesto anteriormente, procederemos a sintetizar nuestras observaciones sobre cada dimensión de análisis con algunas reflexiones. Nuestro objetivo era observar cómo se expresa la precarización laboral en ámbitos feminizados haciendo foco en tres aspectos: el salario, la sobrecarga de trabajo y la consecuente pobreza de tiempo de las trabajadoras, a fin de analizar el impacto que tienen en la vida personal de las trabajadoras y en las relaciones con su núcleo familiar.

Partimos de la hipótesis de que el salario de las trabajadoras es insuficiente, sus jornadas de trabajo están sobrecargadas y que las mujeres ocupan un doble rol en tanto trabajadoras por un lado y responsables del proceso de reproducción social quitándoles cualquier posibilidad de tiempo libre. En tal sentido podemos decir que en líneas generales lo recabado en el trabajo de

campo no se aleja demasiado de la hipótesis formulada pero es necesario advertir que la precarización se presenta de formas diferentes en función del ámbito laboral que estemos analizando.

Tales interpretaciones surgen de la lectura exhaustiva de las entrevistas a las trabajadoras de las distintas esferas de trabajos de la reproducción social. Cuando comenzamos a analizar la primera dimensión pudimos notar rápidamente la percepción de insuficiencia en los salarios por parte de todos los sectores. Sin embargo, la forma en que se precarizan los salarios de las trabajadoras varía en cada caso pero como punto en común encontramos que la mayoría de las trabajadoras, en todos los sectores, comentan que utilizan parte de su salario en la compra de materiales/insumos para poder realizar mejor su labor, y el resto en artículos de necesidad básica del hogar.

En cuanto a la segunda observamos que la sobrecarga de trabajo en ocasiones desborda la jornada de trabajo y en otros casos la comprime. En los sectores de limpieza y comedores comunitarios no son frecuentes las horas extra pero las tareas pueden intensificarse dentro de la jornada comprimiéndola. En el caso de las docentes tampoco hay horas extra pero las trabajadoras se llevan tareas al hogar con frecuencia desbordando la jornada de trabajo. Las enfermeras padecen ambas modalidades. Por momentos se intensifica la jornada laboral y en ocasiones deben presentarse fuera de la jornada ya que se les exige plena disponibilidad. Finalmente y como consecuencia de la sobrecarga de trabajo, indagamos sobre la falta de autonomía sobre el tiempo propio de las trabajadoras en tanto que realizan un trabajo asalariado, pero además son las principales encargadas de organizar y llevar adelante las tareas domésticas y de cuidado indispensables para la reproducción social de las familias.

No obstante, nos parece interesante reflexionar sobre algunos aspectos que atraviesan varios ámbitos laborales entre los aquí estudiados. Las mujeres que entrevistamos demuestran un alto grado de adaptabilidad a las circunstancias en todos los ámbitos. Los llamados *emergentes*, entendido como situaciones que surgen espontáneamente y alteran el orden o planificación del día, son comunes a los 4 espacios laborales que estudiamos. Ante estas situaciones las trabajadoras logran encontrar soluciones a veces solas, otras en conjunto o incluso aportando dinero propio si es necesario. A su vez, también se repite que ante algún imprevisto dentro del ámbito familiar se recurre a figuras femeninas para poder subsanarlo como “suegras, cuñadas, hermanas, tías” lo que nos da la pauta que esta cadena de cuidados globales sigue siendo una tarea feminizada.

Ante todo lo expuesto, el impacto que produce este proceso de precarización en los hogares de las trabajadoras se materializa por un lado en la búsqueda constante de mejorar los ingresos de manera que la pérdida de poder adquisitivo repercuta de la menor forma posible en los recursos y servicios necesarios en la reproducción de la familia. Por otro lado, la sobrecarga de trabajo en sus diferentes formas se traduce en problemas de salud físicos y emocionales, períodos de estrés y escasez de tiempo libre para compartir con el núcleo familiar. En cuanto a lo que denominamos la pobreza de tiempo de las trabajadoras, notamos en las entrevistadas un amplio grado de versatilidad que les permite atender un abanico diverso de actividades a diario, tanto en lo laboral como en el ámbito familiar, ya que persiste una desigual distribución de tareas domésticas y de cuidado que recaen mayoritariamente en las trabajadoras al finalizar su jornada de trabajo. Esta desigual distribución de tareas ocupa la mayor parte del tiempo de las trabajadoras por fuera de sus trabajos generando una carencia de tiempo libre para desarrollo

personal como continuar los estudios, actividades recreativas o para compartir tiempo con la familia.

BIBLIOGRAFÍA

Antunes, R. (2005). “La clase-que-vive-del-trabajo. La forma de ser actual de la clase trabajadora”, en Ricardo Antunes Los sentidos del trabajo, Herramienta, Buenos Aires.

Arruzza, C. y Bhattacharya, T. (2020). “Teoría de la Reproducción Social: elementos fundamentales para un feminismo marxista” en *Archivos de Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda*, Año 9, N°16. Buenos Aires: CEHTI.

Bhattacharya, T. (2015). “Como no saltarse la clase: la reproducción social del trabajo y la clase obrera global”, en *Revista Intersecciones*. Disponible en: <http://www.intersecciones.com.ar/index.php/articulos/43-como-no-saltarse-a-la-clase-la-reproduccion-social-del-trabajo-y-la-clase-obrera-global>

Boltvinik, J. (2005). *Ampliar la mirada. Un nuevo enfoque de la pobreza y el florecimiento humano*. Guadalajara.

Bourdieu, P. (1999). “Comprender”, en *La miseria del mundo*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, pp. 527-543.

Damián, A. (2003). La pobreza de tiempo. Una revisión metodológica. *Estudios Demográficos y Urbanos*, 18(1), 127–162.

Franco, P. D. (2024). Un estudio sobre la educación infantil en Ciudad de Buenos Aires: entre la feminización y la precarización laboral. jornada laboral, condiciones de trabajo y “¿tiempo de ocio?” *Revista Ecúmene de Ciencias Sociales*, 1(9), 223-241.

Fraser, N. (2015). *Las contradicciones del capital y los cuidados*. New Left Review, 100, 111-132.

García Sainz, C. (2017). El impacto de la crisis económica en la pobreza de tiempo y la desigualdad de género. *Arbor*, 193 (784): a382.

James, D. (2002) *Escuchar en medio del frío: La práctica de la historia oral en una comunidad de la industria de la carne argentina*. Sudamericana. Doña María, Buenos Aires.

Paugam, S. (2000) *Le salarié de la precaricé*, PUF, Paris.

Longo, J. (2012) “Las fronteras de la precariedad: Percepciones y sentidos del trabajo de los jóvenes trabajadores precarios de hipermercados”, *Trabajo y Sociedad*, N° 19, Santiago del Estero, Argentina.

----- (2009). La juventud precarizada. Impactos y sentidos de la precarización en los trabajadores de Carrefour La Plata. In *XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana*

de Sociología. VIII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Asociación Latinoamericana de Sociología.

Varela, P. (2021). Y sin embargo, el trabajo. *7 Ensayos. Revista latinoamericana de sociología, política y cultura*, 3, 96-106.

Vickery, C. (1977). "The Time-Poor: A New Look at Poverty", *The Journal of Human Resources*, Vol. XII, núm. 1, Winter, Madison, The University of Wisconsin Press, pp. 27-48.

Semblanza

Paula Daniela Franco

Magíster en Teoría Política y Social (UBA), Licenciada y Profesora en Ciencias de la Comunicación Social (UBA). Doctoranda en Ciencias Sociales (UBA). Becaria interna doctoral en el CEIL - CONICET. Docente. Investigadora en formación en áreas de educación, género y trabajo.

Germán Duarte

Licenciado en Sociología (UBA). Investigador en formación.

Matías Gomiz

Licenciado en Sociología (UBA). Docente de escuela media y superior. Investigador en formación.

Organismos colaboradores: Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CEIL / CONICET) - Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (FSoc / UBA)

Disciplina académica: Sociología.

Subdisciplina: Sociología del trabajo.

Tipo, método o enfoque del estudio: Metodología cualitativa - entrevistas en profundidad.



¿QUÉ PIENSA SOBRE ECONOMÍA Y SOCIEDAD EL “CAMPO”? APROXIMACIÓN A LAS SUBJETIVIDADES POLÍTICAS EN EL AGRO PAMPEANO ACTUAL

María Dolores Liaudat

doloresliaudat@gmail.com

CONICET - Instituto de Economía y Sociedad en la Argentina Contemporánea, Universidad Nacional de Quilmes - Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, Bernal, Argentina.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2782-4926>

Resumen

Este trabajo realiza una primera aproximación al análisis de las subjetividades políticas de los actores vinculados al agro pampeano, intentando dar cuenta del peso de los discursos públicos en disputa en una serie de tópicos claves. Específicamente se analiza la influencia de la puja entre posiciones ideológicas neoliberales y nacional-populares sobre temáticas socioeconómicas, y entre posiciones conservadoras y progresistas sobre cuestiones culturales y sociales, buscando dar cuenta si existe alguna diferencia entre las opiniones de los actores agrarios y las del resto de la sociedad. El análisis se basa en los datos construidos a partir de una encuesta *online* de carácter nacional llevada a cabo en julio de 2023. Los datos muestran el predominio de posiciones neoliberales y conservadoras en los actores vinculados al agro pampeano, así como también el mayor peso de estos posicionamientos ideológicos respecto al resto del país. No obstante, en algunas temáticas específicas identificamos el peso relevante de posiciones más cercanas al discurso nacional-popular y progresista.

Palabras claves: subjetividades políticas, agro pampeano, discursos, actores agrarios, sociedad

WHAT DOES THE “COUNTRYSIDE” THINK ABOUT ECONOMY AND SOCIETY? AN APPROACH TO POLITICAL SUBJECTIVITIES IN CONTEMPORARY PAMPEAN AGRICULTURE.

Abstract

This paper makes a first approach to the analysis of the political subjectivities of the actors linked to the pampean agriculture, trying to account for the weight of the public discourses in dispute in a series of key topics. Specifically, we analyze the influence of the struggle between neoliberal and national-popular ideological positions on socioeconomic issues, and between conservative and progressive positions on cultural and social issues, seeking to determine whether there is any difference between the opinions of the agrarian actors and those of the rest of society. The analysis is based on data constructed from a nationwide online survey conducted in July 2023. The data show the predominance of neoliberal and conservative positions in the actors linked to agriculture in the Pampas, as well as the greater weight of these ideological positions compared to the rest of the country. However, in some specific topics we identified the relevant weight of positions closer to the national-popular and progressive discourse.

Key words: political subjectivities, Pampean agriculture, discourses, agrarian actors, society.

O QUE O “CAMPO” PENSA SOBRE A ECONOMIA E A SOCIEDADE? ABORDAGEM DAS SUBJETIVIDADES POLÍTICAS NA ATUAL AGRICULTURA PAMPA

Resumo

Este trabalho faz uma primeira abordagem à análise das subjetividades políticas dos atores ligados à agricultura dos Pampas, tentando dar conta do peso dos discursos públicos em disputa sobre uma série de temas-chave. Especificamente, analisa-se a influência da luta entre as posições ideológicas neoliberais e nacional-populares nas questões socioeconômicas, e entre as posições conservadoras e progressistas nas questões culturais e sociais, procurando dar conta se existe alguma diferença entre as opiniões dos actores agrários e os do resto da sociedade. A análise é baseada em dados construídos a partir de uma pesquisa nacional online realizada em julho de 2023. Os dados mostram a predominância de posições neoliberais e conservadoras nos atores ligados à agricultura dos Pampas, bem como o maior peso dessas posições ideológicas em relação ao resto do país. Contudo, em alguns temas específicos identificamos o peso relevante de posições mais próximas do discurso nacional-popular e progressista.

Palavras-chave: subjetividades políticas, agricultura pampa, discursos, atores agrários, sociedade

Introducción

La producción agropecuaria argentina, en particular la pampeana, y las políticas públicas adoptadas en torno a ella y sus actores sociales han jugado un papel fundamental en los ciclos económicos y péndulos políticos a lo largo de la historia. Sin ir muy lejos el “conflicto del campo” del 2008 jugó un rol determinante en la emergencia de una alternativa liberal y conservadora en el escenario nacional, y en la reorganización, por ende, del campo político en función de dos grandes coaliciones alineadas según el eje izquierda-derecha (Schulíaquery y Vommaro, 2020).

Sin embargo, a pesar de la relevancia que ha tenido el agro pampeano en el reordenamiento del mapa político de los últimos quince años, son muy escasas las investigaciones que abordan las subjetividades políticas de sus actores. En los estudios sociales agrarios de nuestro país, subjetividad y política frecuentemente han sido analizados de manera independiente. En este campo, la mayor parte de las investigaciones que han trabajado sobre aspectos subjetivos se

han centrado en las reconfiguraciones de las identidades y representaciones ligadas a la actividad productiva, particularmente a partir del avance de los agronegocios. Y, por otro lado, quienes han abordado aspectos políticos han hecho foco en las políticas públicas hacia el sector o en la confrontación, en este marco, entre las asociaciones gremiales y el Estado.

Como excepción encontramos una serie de investigaciones que abordaron las disputas discursivas durante el conflicto agrario del 2008, identificando la influencia de sentidos liberales sobre el Estado y la distribución de la riqueza social principalmente en las organizaciones de productores (Gras y Hernández, 2009; Palma, 2016; Yabkowski, 2010; Varesi, 2014). Y, un conjunto de trabajos realizados en los últimos años desde nuestro grupo de investigación sobre los posicionamientos ideológicos de los actores agrarios de la provincia de Buenos Aires (Balsa, De Martinelli y Liaudat, 2017; Liaudat, 2018; Moreno, Liaudat y López Castro, 2020, 2023). Estas investigaciones dieron cuenta de la predominancia de posiciones contrarias a la intervención del Estado en el sector y la existencia de un fuerte sentido anti-populista entre los actores agrarios, influenciados por la perspectiva liberal y conservadora que predominó históricamente en las corporaciones agropecuarias.

En un contexto donde parecería existir una creciente orientación hacia la derecha en términos ideológicos del conjunto de la sociedad argentina (Balsa, 2024) nos preguntamos si estos sentidos que identificamos en los actores agrarios bonaerenses se extienden al resto de los actores vinculados al agro pampeano, cuál es la mirada predominante en torno a diversos tópicos claves en el debate público nacional de los últimos años y particularmente si existe alguna diferencia con los posicionamientos del resto de la sociedad, es decir si ¿son los actores agrarios pampeanos más neoliberales y conservadores que el resto de la sociedad?

Siguiendo los aportes de la psicología crítica latinoamericana, entendemos a la subjetividad política como un desdoblamiento de la subjetividad social. El concepto de subjetividad social hace referencia a una realidad humana que no se produce al interior de los individuos sino en las interacciones sociales: se constituye en las experiencias compartidas y en las relaciones que las personas sostienen entre sí, en momentos históricos y en contextos culturales concretos (González Rey, 2002). La base de la subjetividad es experiencial y los sentidos subjetivos integran procesos tanto simbólicos como afectivos. La subjetividad política implica un momento susceptible de ser diferenciado dentro de la subjetividad social basado en la construcción de sentidos de connotación política que refieren a lo público, lo que es común a todos (Díaz y González, 2012). Estos sentidos no se construyen únicamente en aquellos ámbitos asociados a la política, sino que proceden de diversos espacios de la vida.

De este modo, aquí no se pretende hablar de un sujeto político aislado, separado de su subjetividad social, sino que lo asumimos como un sujeto que se constituye, precisamente, en la relación y entre la relación social, que siempre se encuentra atravesada por disputas de poder. Es que el sujeto político no se forma en un vacío ideológico, sino que se ve fuertemente influenciado por los discursos dominantes en los espacios públicos y de socialización. Tal como lo señaló Gramsci (1986) las luchas por la hegemonía se dan, no solo en términos del conjunto de la sociedad, sino también al interior de cada uno de nosotros. Estamos atravesados por discursos e ideologías, presentes o pasadas, que hemos ido internalizando, y también por los impactos que tienen, sobre nuestras subjetividades, las prácticas que desplegamos cotidianamente, condicionados por la sociedad en la que tenemos que vivir.

En este trabajo se abordarán las subjetividades políticas de los actores vinculados al agro pampeano, intentando dar cuenta del peso de los discursos públicos en disputa. Específicamente se prestará atención a la influencia de la puja entre posiciones ideológicas neoliberales y nacional-populares sobre temáticas socioeconómicas, y entre posiciones conservadoras y progresistas sobre cuestiones culturales y sociales. El análisis se basa en los datos construidos a partir de una encuesta *online* de carácter nacional llevada a cabo en julio de 2023 en el marco de un proyecto de investigación con objetivos de investigación más amplios.

Luego de esta introducción, el trabajo comienza con la exposición de la estrategia metodológica. A continuación, se desarrollan los principales resultados de esta investigación organizados en tres subapartados: los posicionamientos sobre cuestiones socioeconómicas, las opiniones sobre cuestiones sociales y culturales, y el análisis de los patrones de respuesta. Finalmente, se exponen una serie de reflexiones a modo de conclusión.

Estrategia metodológica

Con el objetivo de realizar una aproximación a las subjetividades políticas de los actores vinculados al agro pampeano analizamos los resultados de una encuesta *online* de alcance nacional realizada a fines de julio del 2023 por el laboratorio SocPol del IESAC-Universidad Nacional de Quilmes. La misma se realizó en el marco del proyecto de investigación PICT "Subjetividades políticas en tensión durante la pandemia y la pospandemia en Argentina", integrado por investigadores/as de la UNQ, UNC, UNTREF, UBA, UNLP, UNRN y UNaM.

La investigación se propuso objetivos amplios, que iban desde la reconstrucción creencias y sentidos sobre la vida, las opiniones sobre medidas de gobierno, y las posiciones en torno a diversos sectores sociales y de la economía nacional. Los cuestionarios de las encuestas fueron elaborados en base a los resultados de entrevistas abiertas, realizadas previamente en todo el país, y sometidos a pre-testeos de tipo cognitivo y tradicional previo a su implementación. Se formularon más de setenta preguntas sobre subjetividades políticas y creencias ideológicas. En este sentido, la encuesta nos permitió conocer múltiples facetas acerca de cómo pensaba la sociedad argentina sobre distintos temas.

Todas las preguntas fueron de respuesta cerrada e intentaron ofrecer opciones que expresaran diferentes posiciones, asociadas a dos disputas discursivas que orientan el debate político contemporáneo: el eje nacionalismo popular-neoliberalismo, y progresismo-conservadurismo (Iosa, 2012, Balsa, 2024). En particular, para este trabajo se escogieron diez preguntas. Cinco de ellas corresponden a una escala que busca medir el nivel de neoliberalismo o de nacionalismo-popular, y se consideraron las siguientes dimensiones: la perspectiva fiscal, el papel del Estado, las relaciones laborales y las perspectivas acerca de la pobreza y sobre los ricos. Las otras cinco corresponden a una escala que mide el grado de progresismo o conservadurismo de la sociedad y se abordaron las siguientes dimensiones: el apoyo al patriarcado, la xenofobia, el respeto irrestricto a la autoridad y al orden, y el punitivismo. La mayoría de estas dimensiones se las ha medido en base al posicionamiento frente a frases con cierto grado de vinculación con la forma en que se concretiza el debate político-ideológico en

Argentina, aunque buscando que ninguna frase sea fácilmente identificable con alguna fuerza política⁷⁹.

Se realizó una campaña de publicidad en redes sociales (*Facebook* e *Instagram*) a través de 324 segmentos publicitarios: dos o tres por cada provincia (según importancia de las localidades; cuatro en el caso de provincia de Buenos Aires) y dentro de ellos diferenciando tres grupos etarios y a los dos géneros principales, graduándose los montos de la publicidad según el peso demográfico de cada segmento, con un reajuste según la tasa de respuestas en la mitad de la campaña. Se alcanzaron a 1.346.000 personas (con 2.700.000 impresiones de la publicidad). De ellas, 27.500 clickearon en el anuncio y unas 5.806 comenzaron la encuesta y 4.213 la completaron. Para promover la contestación se realizó el sorteo de una notebook entre las/os respondientes que permitió captar la atención de personas habitualmente poco interesadas en responder encuestas.

Se ajustaron a los parámetros poblacionales (Censo 2010, INDEC) el peso de cada una de las regiones y dentro de ellas la distribución por tipo de departamento, género y grupo etario. Luego se ajustó la distribución del máximo nivel educativo alcanzado en cada una de las regiones y tipo de departamento, en base a los datos de la EPH 2021 y una estimación del incremento en relación al Censo 2010 del nivel educativo para los departamentos que no tenían aglomerados según mejora general de los aglomerados. La muestra logró una elevada representatividad por zonas geográficas, género y edad y las estimaciones de las conductas electorales fueron asombrosamente próximas a los resultados pasados y a los de la elección que tenía lugar unas semanas más tarde.

Dentro de la muestra se seleccionó para este trabajo a aquellas personas de las provincias y jurisdicciones que conforman la región pampeana (Buenos Aires, CABA, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba) y que respondieron tener algún tipo de vínculo económico con el sector agropecuario. En total son 177 personas que tienen vínculo directo (porque actualmente trabajan o porque su último trabajo fue en el agro) y/o indirecto con el sector (porque su principal sostén de hogar trabaja o su último trabajo fue en el agro). En este sentido, la muestra buscó ampliar el espectro de perfiles usualmente relevados al analizar al agro pampeano, incluyendo no sólo a los diferentes tipos de actores agrarios (productoras/es, trabajadoras/es, profesionales, etc) insertas/os laboralmente (en el presente y en el pasado reciente) en la actividad agropecuaria, sino también a sus familiares directos⁸⁰, y se distribuyó del siguiente modo: mujeres (37%) y varones (63%)⁸¹; menos de 30 años (23%), entre 30 y 65 años (63%) y 66 años o más (14%), nivel educativo primario completo o incompleto (40%), secundario completo o incompleto (38%) y universitario completo o incompleto (22%); interior de la

⁷⁹ Para más información sobre la construcción de estos índices se recomienda leer Balsa (2024).

⁸⁰ Por este motivo cuando a lo largo del trabajo utilicemos los conceptos “actores agrarios” o “actores vinculados al agro” de modo simplificado para facilitar la lectura, debe comprenderse que nos referimos a este conjunto diverso de actores con intereses materiales ligados a la actividad agropecuaria en la región.

⁸¹ Tal como se puede observar, la muestra con la que trabajamos cuenta con una proporción bastante mayor de hombres que de mujeres. Esto se explica porque el sector agrario se encuentra fuertemente masculinizado. El CNA 2018 dio cuenta que son mujeres sólo 16% de las/os ocupadas/os permanentes, cerca del 21% de las/os productoras/es o socias/os de las explotaciones agropecuarias, y un poco más del 38% de las/os residentes en EAPS. Si bien nuestro relevamiento incluyó otros perfiles que no son registrados en el CNA como vinculados al sector agropecuario (docentes en escuelas agrarias, empleadas/os en organismos estatales, rentistas, etc), estos números nos dan una pauta del fuerte predominio masculino en el sector que se representa en la distribución de género de nuestra muestra.

provincia de Buenos Aires (49%), CABA (4%), Córdoba (21%), Entre Ríos (5%), La Pampa (5%) y Santa Fe (16%). Específicamente dentro de la muestra, el grupo que respondió estar actualmente trabajando en el sector agropecuario se encuentra constituido por 70 personas y se distribuyeron en las siguientes ocupaciones: trabajador/a autónomo/a no profesional (21,4%), trabajadora/es manuales (obrero/as, peones, empleadas domésticas, changarines) (20%), pequeñas/os productoras/es, empresarias/os o comerciantes (18,6%), profesionales independientes autónomas/os (agrónoma/os, veterinaria/os, etc) (15,7%), empleada/o de comercio o administrativa/o estatal o privado (10%), trabajador/a en una cooperativa (5,7%), profesionales asalariadas/os (incluye maestra/os, profesora/es en escuelas rurales y agrarias) (4,3%) y empresarias/os o gerentes de empresas agropecuarias (4,3%). Con el objetivo de identificar el grado de representatividad de la muestra de los actores vinculados laboralmente al agro, se contrastaron estos perfiles con los datos del Censo 2010, y se visualizó que la muestra logró una elevada representatividad de la diversidad de actores agrarios presentes en la región.

Para el tratamiento de los resultados se utilizó un programa de procesamiento de datos estadísticos. La estrategia de análisis identificó, en primer lugar, el peso de las diferentes respuestas cerradas frente a las preguntas seleccionadas; en segundo lugar, se comparó los resultados con los del resto del país; y finalmente, se analizaron los patrones de respuesta de manera conjunta y comparada con el resto del país.

Resultados

A continuación, se presentarán las opiniones de los actores vinculados al agro pampeano sobre grandes tópicos de importante presencia en la esfera pública de nuestro país, ordenados en dos subapartados en función de las dos disputas discursivas que atraviesan la discusión política contemporánea: el debate sobre cuestiones socioeconómicas entre posiciones neoliberales y nacional-populares, y sobre diversas temáticas sociales y culturales entre posiciones conservadoras y progresistas. Finalmente, en un tercer subapartado se analizarán las correlaciones en las respuestas a las diferentes preguntas y se medirá de modo comparado el nivel de neoliberalismo-nacionalismo popular y de conservadurismo-progresismo en el agro pampeano y en el resto de la sociedad.

Posicionamientos sobre cuestiones socioeconómicas

La lucha entre opciones “estadocéntricas” y “mercadocéntricas” en los términos de Cavarozzi (2010), ha marcado el enfrentamiento político de fracciones mayoritarias de argentina/os a lo largo de la historia, aunque variaron las posiciones y roles de algunos actores, y los instrumentos de confrontación pública. Esta disputa se recrudeció en la última década en el marco de la denominada “grieta” que confrontaba a la/os partidaria/os del proyecto nacional-popular de Néstor Kirchner y Cristina Fernández con la/os de la derecha neoliberal representada por Mauricio Macri, y particularmente a partir de la emergencia de La Libertad Avanza, la fuerza de ultraderecha conducida por Javier Milei que actualmente detenta la presidencia del país.

El denominado “conflicto del campo” del año 2008 por la fijación de retenciones móviles a la exportación⁸² jugó un papel clave en la gestación de esta “grieta”, convirtiéndose en uno de

⁸² A partir del anuncio de la resolución 125/08 por parte del gobierno de Cristina Fernández, se desarrolló uno de los conflictos más importantes de la historia del agro argentino. Esta resolución establecía el aumento a las retenciones a la exportación de productos agropecuarios y la adopción de un carácter móvil para las mismas en función de la evolución de los precios internacionales. En rechazo a esta medida se conformó la denominada Mesa

sus hitos fundadores (Lattuada, 2021). Es que, estas disputas si bien se remontan a debates históricos que ha atravesado la sociedad argentina, se comienza a configurar con fuerza en la escena pública nacional con el “conflicto del campo”, donde aparecieron enfrentados dos proyectos claros de sociedad con visiones opuestas sobre el rol del Estado y el mercado, de la estructura impositiva y específicamente de las estrategias de desarrollo y los grupos que debían conducirla (Varesi, 2014). En esta discusión, la/os principales representantes gremiales del “campo” quedaron del lado de quienes desde la derecha política intentaron re-instalar a nivel social un discurso pro mercado y arremetieron con fuerza contra las ideas nacional-populares promotoras de un Estado fuerte, de políticas de inclusión social y regulación de los mercados (Martínez, 2013).

En este apartado, a través de los datos que nos brinda la encuesta, damos cuenta, que esta mirada neoliberal es predominante entre los actores vinculados al agro pampeano y al referirse a temáticas que exceden la intervención estatal en el sector. Asimismo, exponemos que dicha perspectiva tiene mayor peso que en el resto de la sociedad. No obstante, destacamos que, en algunas temáticas específicas, existe un grupo importante de actores agrarios que marca un distanciamiento crítico de las posturas más neoliberales.

Para analizar los posicionamientos sobre cuestiones socioeconómicas comenzamos analizando una de las preguntas de la encuesta que decía *¿Cuál de esta frase representa mejor su idea sobre el Estado?* En la distribución de las respuestas se visualiza el gran éxito del discurso neoliberal que defenestra al Estado intervencionista (Anderson, 2019) al existir en las respuestas una fuerte asociación entre Estado y significantes negativos. Casi un 83% de nuestros interlocutores eligió opciones críticas que proponen reducirlo: cerca de un 39% sostuvo que *El Estado es demasiado grande y no tiene que meterse en la economía, hay que reducirlo drásticamente y hay que despedir muchos empleados públicos* y casi un 44% respondió que *Habría que reducir un poco el papel del Estado en la economía y hay que despedir a algunos empleados públicos*.

Al indagar si existe alguna especificidad en estos posicionamientos en relación al resto del país teniendo en cuenta el peso de la perspectiva liberal en las entidades y medios sectoriales (Liaudat, 2018), identificamos que, previsiblemente, la mirada de los actores agrarios pampeanos es más anti-Estado que la del resto de la sociedad. Si bien los posicionamientos que plantean la necesidad de reducir o recortar el Estado tuvieron un peso muy importante en todo el país (más del 67%), es bastante menor al peso que tuvieron dichas opiniones entre los actores del agro pampeano (83%) (Tabla N°1).

de Enlace (compuesta por las principales entidades del sector) que junto con productores “autoconvocados” tomaron medidas de acción directa en contra de la resolución. Estas acciones se extendieron a lo largo de cuatro meses, hasta que la resolución se rechazó en el Congreso de la Nación.

Tabla N°1 ¿Cuál de estas frases representa mejor su idea sobre el Estado? según región

	Agrarios pampeanos	resto del país	Total
El Estado es demasiado grande y no tiene que meterse en la economía, hay que reducirlo drásticamente y hay que despedir	38,6%	37,5%	37,5%
Habría que reducir un poco el papel del Estado en la economía y hay que despedir a algunos empleados públicos	43,8%	29,9%	30,5%
El Estado tiene que dirigir la economía y para ello no está mal que sea grande	17,5%	32,6%	32,0%
Total	100%(171)	100%(3822)	100%(3993)

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta 2023

De este modo, en relación a lo señalado por los estudios previos (Palma, 2016; Varesi, 2014; Moreno, Liaudat y López Castro, 2020, 2023) identificamos, que las posturas críticas del Estado parecerían ser predominantes en el conjunto de los actores vinculados de distinto modo al agro pampeano y al referirse no solo a la intervención del Estado en el sector. En función de las respuestas es posible imaginar que ha hecho mella la visión liberal de un Estado sobredimensionado y entorpecedor de la actividad privada (Yabkowsky, 2010).

Sin embargo, no podemos confirmar estas aseveraciones solo a partir de una pregunta, considerada aisladamente. Con el objetivo de profundizar en la mirada sobre el Estado, analizamos otro interrogante que refería a un tema clave en el sector agrario como es la intervención estatal a través de los impuestos. La pregunta decía *En relación con los impuestos, ¿cuál frase representa mejor su forma de pensar?* Nuevamente aquí observamos el predominio de posiciones liberales que sostienen que la carga impositiva es una traba para el libre desarrollo de la iniciativa privada. Más del 64% de nuestras/os interlocutoras/es sostuvo que había que reducir “mucho” o “poco” los impuestos para lograr que los empresarios inviertan más. De este modo, la mirada crítica a la carga impositiva que registramos en los actores agrarios bonaerenses (Moreno, Liaudat y López Castro, 2020) en relación a las tributaciones que el Estado realiza en el sector, se expanden al conjunto de los actores vinculados al agro pampeano y al referirse a las políticas impositivas que pagan todas/os las/os empresarias/os.

Sin embargo, se debe destacar que las opciones más cercanas a la perspectiva nacional-popular, que expresaban acuerdo con la intervención estatal y son críticas del empresariado que evade impuestos, tuvieron un peso no menor (alrededor de un 36%). Más del 23% optó por *Hay que realizar más controles para evitar que la mayoría de los empresarios evada* y casi el 13% por *Hay que poner presos a los ricos que evaden impuestos, porque si no el Estado no tiene los recursos que se necesitan*. Al cruzar las respuestas a esta pregunta con la anterior, nos damos cuenta que, escogieron estas opciones no solo quienes -coherentemente- habían optado por la respuesta que *El Estado tiene que dirigir la economía*, sino también un grupo importante de quienes consideraban que se debía reducir un poco el papel de Estado (más del 45% de ellas/os). Esto puede dar cuenta de que, si bien las críticas al estado burocrático e ineficiente tiene importante eficacia interpelativa entre los actores estudiados, esto no implica necesariamente la adhesión del conjunto de los actores agrarios a la libertad de mercado con las características prístinas con la que la promueven sus defensores neoliberales. Por el contrario, en relación a

determinados tópicos que se vinculaban con situaciones personales (como la injusticia que vivencian los pequeños productores frente a los grandes empresarios que encuentran los vericuetos para evadir impuestos) emergen tensiones claras. Este tipo de matices o tensiones también fueron registrados por Gras y Hernández (2009) en las asambleas de productores durante el “conflicto del campo” donde emergían discursos contradictorios que se movían entre la exigencia de la liberalización total y el pedido de intervención estatal.

Asimismo, al comparar las opiniones sobre los impuestos del agro con el resto del país se observa el mayor peso de las perspectivas liberales en los actores agrarios (64% frente al 51% del resto de la sociedad que escogió dichas opciones) (Tabla N°2). En el resto de la sociedad argentina las opiniones sobre el tema se encontraban sumamente divididas. Es que, tal como señala Balsa (2024) cuando las ideas neoliberales son llevadas al terreno más concreto, en este caso la vivencia de la injusticia del pago de impuestos por las mayorías sociales y la evasión de los mismos por parte de las/os ricas/os, estas tienen dificultades para hacer pie en la conciencia de la ciudadanía.

Tabla N°2. En relación con los impuestos, ¿cuál frase representa mejor su forma de pensar? según región

	Agrarios pampeanos	resto del país	Total
Hay que poner presos a los ricos que evaden impuestos, porque sino el Estado no tiene los recursos que se necesitan	12,7%	16,5%	16,3%
Hay que realizar más controles para evitar que la mayoría de los empresarios evada	23,1%	32,3%	31,9%
Hay que reducir un poco los impuestos que pagan los empresarios, para así lograr que inviertan más	23,7%	19,8%	19,9%
Hay que reducir mucho los impuestos que pagan los empresarios, pues solo así se va a lograr que haya inversiones	40,5%	31,4%	31,8%
Total	100,0%	100,0%	100%(4075)

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta 2023

Por otra parte, indagamos en los posicionamientos de los actores agrarios sobre la desigualdad social. Las causas de dicha problemática aparecen recurrentemente en la esfera pública en debate entre las visiones neoliberales y nacional-populares. Sin embargo, esta discusión en el agro parecería haber perdido relevancia ante el declive del discurso agrarista crítico que, en gran parte del siglo XX, había logrado instalar un diagnóstico de la cuestión agraria según el cual los problemas sociales se explicaban por la desigualdad en la estructura social agraria (Liaudat, 2018). Aquí nos preguntamos por la influencia de las explicaciones neoliberales sobre la desigualdad social entre los actores vinculados al agro pampeano, o, por el contrario, de las ideas nacional-populares (o incluso agraristas) que cuestionan las faltas de oportunidades y la crítica a ciertos sectores del empresariado.

Para indagar en este tópico, se utilizaron dos consignas que buscaban identificar la forma en que las personas explican la existencia de ricos y pobres. La primera de ellas decía *le proponemos pensar en la razón principal por las cuales hay personas que viven en situación de pobreza*. La mayor parte de nuestros interlocutores escogió opciones que se vinculan a las típicas explicaciones neoliberales al respecto (más del 78%), colocando en las/os pobres la responsabilidad por su situación, al responder que la razón de que vivan en la pobreza es porque

no quieren trabajar (casi el 31%) y porque *no tienen suficiente educación* (cerca del 16%). Por otro lado, un grupo importante ubicó la causa en *la culpa de los políticos* (casi el 32%), un tema que ha sido instalado con fuerza en los últimos años en la esfera pública por parte del discurso neoliberal y que expresa una especie de “clima de época”. Aquellas opciones que dan cuenta de una mirada crítica de la clase empresarial y del sistema social en el que vivimos solo alcanzaron cerca del 18%.

La segunda consigna planteaba *¿Y cómo le parece que han hecho su fortuna la mayoría de los grandes empresarios?*, en el mismo sentido la mayoría eligió opciones que se vinculaban a diferentes tipos de explicaciones neoliberales para justificar la desigualdad social. Las respuestas *mediante su trabajo y esfuerzo*, ligada a una visión meritocrática, fue apoyada por el 43% y la respuesta *implementando ideas innovadoras*, más propia de la mirada neoschumpeteriana, que ganó mucho peso en los últimos años en el sector de la mano del discurso de los agronegocios (Liaudat, 2018), obtuvo más del 22% de apoyo, sumando en total más del 65% de respaldo. No obstante, en este caso, a diferencia de la pregunta anterior, las miradas más críticas de los grandes empresarios sumaron casi el 30%: *explotando a los trabajadores* (casi el 18%) y *robando al pueblo* (casi 12%)

Al comparar los posicionamientos de los actores agrarios con los del resto del país, nuevamente identificamos un mayor peso de opiniones neoliberales en los primeros. En la pregunta que indaga por las causas de la pobreza, las respuestas que se encuentran en sintonía con este discurso cosecharon más del 78% de respaldo, mientras que en el resto del país cerca del 65% de las personas escogieron esas opciones. Especialmente sobresale el distanciamiento en la respuesta *porque no quieren trabajar*, que es la que más fuertemente culpabiliza a los pobres por su situación: el 31% de los actores agrarios eligió esta opción frente a solo el 11% del resto del país (Tabla N°3).

Tabla N°3 Ahora, le proponemos pensar en la razón principal por las cuales hay personas que viven en situación de pobreza según región

	Agrarios pampeanos	resto del país	Total
Porque no tienen suerte	0%	0,7%	0,7%
Porque no quieren trabajar	30,7%	10,9%	11,8%
Porque no hay suficientes oportunidades	16,5%	28,0%	27,5%
Porque no tienen suficiente educación	15,9%	18,4%	18,3%
Por culpa de los políticos argentinos	31,8%	35,6%	35,4%
Por culpa de los empresarios	1,1%	2,7%	2,6%
Por ninguna de estas razones	4,0%	3,6%	3,6%
Total	100% (176)	100% (3949)	100% (4125)

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta 2023

A su vez, en la pregunta sobre cómo hicieron su fortuna las/os grandes empresarias/os, mientras las respuestas neoliberales (“mediante su trabajo y su esfuerzo” e “implementando ideas innovadoras”) fueron apoyadas por más del 65% de los actores agrarios pampeanos, en el resto del país el 49% optó por las mismas. O mirado desde otra perspectiva, los

posicionamientos críticos de las clases altas obtuvieron el apoyo de más del 47% del resto del país y más del 29% de los actores agrarios pampeanos (Tabla N°4).

Tabla N°4 ¿Y cómo le parece que han hecho su fortuna la mayoría de los grandes empresarios? según región

	Agrarios pampeanos	resto del país	Total
Mediante su trabajo y esfuerzo	42,9%	35,3%	35,6%
Gracias a la suerte	5,3%	3,3%	3,4%
Explotando a los trabajadores	17,6%	30,4%	29,8%
Implementando ideas innovadoras	22,4%	14,1%	14,4%
Robando al pueblo	11,8%	16,9%	16,7%
Total	100% (170)	100% (3824)	100% (3994)

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta 2023

Sin embargo, en un tema clave como son los derechos de las/os trabajadoras/es, particularmente en un sector como el agrario caracterizado por el alto nivel de informalidad laboral (Villulla, 2015), no predominaron posiciones neoliberales. Recordemos que, según esta perspectiva, en el poder excesivo del movimiento obrero se encuentra una de las causas principales del entorpecimiento de la acumulación de la inversión privada con sus reivindicaciones salariales y sus presiones orientadas a que el Estado aumente sin cesar los “gastos sociales parasitarios” (Anderson, 2003:7-8).

Específicamente, indagamos en esta cuestión con la pregunta *¿qué piensa en relación con las leyes que regulan el trabajo?* La opción más elegida fue *Habría que ampliar los derechos de los trabajadores y que alcancen a todos los que hoy están "en negro" (casi el 41%)*, mientras que un 17% escogió la opción *No se tiene que hacer cambios que flexibilicen el régimen de trabajo, porque terminan siempre perjudicando a los trabajadores*. De esta forma, a diferencia de la interpretación de las causas de la desigualdad social, en esta temática, predominó en parte importante de los actores consultados una mirada cercana a la nacional-popular.

No obstante, se debe destacar que en los actores agrarios pampeanos existió un mayor respaldo que en el resto del país a la opción acorde al discurso neoliberal, tal como se puede observar en la tabla 5:

**Tabla N°5 ¿Y qué piensa en relación con las leyes que regulan el trabajo?
según región**

	Agrarios pampeanos	resto del país	Total
Habría que acabar los llamados "derechos de los trabajadores" que solo promueven la industria del juicio e impiden que...	34,1%	22,1%	22,6%
No se tiene que hacer cambios que flexibilicen el régimen de trabajo, porque terminan siempre perjudicando a los trabajadores	17,3%	15,4%	15,5%
Habría que ampliar los derechos de los trabajadores y que alcancen a todos los que hoy están "en negro"	41,0%	57,4%	56,7%
No sé nada, ni me interesa esto de las leyes laborales	7,5%	5,1%	5,2%
Total	100% (173)	100% (3830)	100% (4003)

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta 2023

Como se puede visualizar el 34% de los actores consultados escogió la opción que planteaba *Habría que acabar los llamados "derechos de los trabajadores" que solo promueven la industria del juicio e impiden que las empresas crezcan*, mientras que el 22% del resto de la sociedad lo hizo, dando cuenta que aun en un eje donde existen importantes consensos sobre la relevancia de los derechos de los trabajadores, la mirada del agro pampeano sigue siendo un poco más neoliberal que la del resto de la sociedad.

Posicionamientos sobre cuestiones sociales y culturales

En nuestro país, luego del aplastamiento de las experiencias revolucionarias y del genocidio planificado de la última dictadura militar, el ideario progresista que impulsa una agenda de cambios sociales y culturales en diversas cuestiones (desigualdad de género, diversidad sexual, derechos humanos, autoritarismo en educación, etc.) se convirtió en una opción reformista y moderada de la acción política, llegando a hegemonizar en los primeros años del siglo XXI el espacio político. Según Zugarramurdi (2007), si en los '80 las ideas progresistas, encarnadas por el presidente Alfonsín, se asociaron a la defensa de la democracia frente al autoritarismo, y a una incipiente preocupación por los derechos humanos, desde el 2002, empezó a configurarse la creencia de que la continuidad del modelo neoliberal era la que había complicado el programa progresista. Néstor Kirchner, y luego Cristina Fernández, articularon las ideas progresistas con las nacional-populares, y le imprimieron nuevos sentidos como las ideas de capitalismo humano, integración latinoamericana, garantismo en políticas de seguridad, centralidad en los derechos humanos y de la inclusión social. Estas ideas fueron aceptables para la opinión pública como respuesta a la crisis en la que se encontraba el país, a tal punto que la mayor parte de las fuerzas políticas buscaban identificarse con el progresismo (Zugarramurdi, 2007). De este modo, este ideario fue ganando lugar y se concretó en leyes y otro tipo de medidas políticas que lo convirtieron en derechos y políticas públicas.

Sin embargo, desde el "conflicto del campo" y particularmente con la llegada de Macri a la presidencia en el año 2015, algunos de discursos (neo)conservadores, que desde hacía unos años habían comenzado a ganar terreno a nivel global, ocuparon lugares de enunciación estatal.

Y luego, con la irrupción de las/os libertarias/os en la escena política argentina se desplazó la crítica al progresismo y la izquierda hacia el extremo en la dimensión cultural.

En este apartado nos preguntamos por la opinión los actores vinculados al agro pampeano sobre una serie de cuestiones progresistas (y la correspondiente reacción conservadora): el feminismo, el lenguaje denominado “inclusivo”, la tradición receptiva de la inmigración (en particular, contra la proveniente de países limítrofes), las políticas de inclusión como forma de reducir el delito, y el estímulo de perspectivas críticas en educación. Específicamente indagamos en la capacidad interpelativa tienen estas ideas en un sector como el agrario donde las entidades tradicionales han adoptado históricamente un sentido fuertemente conservador (Lattuada, 1987)⁸³ que, a su vez, se encuentra arraigado en las prácticas de los actores agrarios. Tal como han dado cuenta diversos analistas (Stolen, 2004, Muzlera, 2009a), estas prácticas se asocian a mandatos del orden patriarcal de fuerte peso en agro tales como la invisibilización del trabajo femenino, la división sexual del trabajo, el otorgamiento de ciertos derechos y privilegios a los hombres (como la titularidad de la tierra), y el respeto irrestricto a su autoridad y al orden en general.

En términos generales encontramos entre los actores vinculados al agro pampeano un predominio de posiciones conservadoras sobre temáticas sociales y culturales, aunque no mucho más conservadoras que en el resto de la sociedad. Sin embargo, existen algunos tópicos, como las soluciones para reducir el delito o la educación, donde parece tener cierta eficacia interpelativa el progresismo. Para abordar la influencia de estos discursos sobre aspectos sociales y culturales, comenzamos analizando una de las preguntas de la encuesta que decía *¿Qué piensa del movimiento feminista?* Sólo el 10% de nuestras/os interlocutores expresó algún nivel de apoyo a este movimiento, respondiendo que están de acuerdo con *todo* o con *la mayoría* de lo que hacen, el 46% dijo que *no está de acuerdo con nada de lo que hacen* y casi el 44% respondió que *sólo está de acuerdo con algunas de las cosas que hacen*.

A su vez, si bien el rechazo al movimiento feminista fue muy alto en todo el país, al comparar a los actores agrarios con el resto de la sociedad observamos que son un poco más conservadoras/es. La respuesta que expresaba mayor rechazo hacia el movimiento feminista fue elegida por el 46% de los actores agrarios, frente a casi el 41% del resto del país (Tabla N°6).

Tabla N°6 ¿Qué piensa del movimiento feminista? según región

	Agrarios pampeanos	resto del país	Total
Estoy de acuerdo con todo lo que hacen	2,3%	5,7%	5,5%
Estoy de acuerdo con la mayoría de lo que hacen	8,0%	14,6%	14,4%
Solo estoy de acuerdo con algunas de las cosas que hacen	43,8%	38,9%	39,1%
No estoy de acuerdo con nada de lo que hacen	46,0%	40,7%	41,0%
Total	100% (176)	100% (3953)	100% (4129)

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta 2023

⁸³ Entre algunas de las creencias conservadoras que sostienen, se encuentra la idea de que el poder público les corresponde por derecho, y que la familia es la base de la organización social y el Estado en el ente que debe asegurar los derechos naturales de los individuos (Lattuada 1987, p.22 y 33).

En el mismo sentido, se posicionaron frente a una pregunta sobre el uso del denominado lenguaje inclusivo. Con este término nos referimos a la utilización de la e, el arroba @ o la x para marcar la terminación de género, en pos de evitar la discriminación y garantizar la inclusión en el mensaje. Al indagar en el nivel de aprobación que tiene esta forma de comunicar (y la eficacia interrelativa del discurso conservador al respecto) entre los actores vinculados al agro pampeano observamos la existencia de un fuerte rechazo: alrededor de un 68% sostuvo que le molestaba (40%) o que le daba bronca (28%). De este modo, nuestros interlocutores expresaron una defensa del *statu quo* en el uso del lenguaje.

Resulta relevante destacar que este posicionamiento, si bien puede vincularse a las ideas conservadoras de fuerte arraigo en el sector, es probable que se haya visto influenciado por las importantes reacciones contrarias que el uso del lenguaje inclusivo generó en los medios de comunicación y en las redes sociales en el marco de la reacción (neo) conservadora que ha buscado desacreditar al feminismo desde la ironía y el lenguaje meme (Gayozzo, 2022).

Asimismo, cuando comparamos el posicionamiento respecto del resto del país, identificamos que la mirada de los actores agrarios pampeanos es un poco más conservadora (68% frente al 60% del resto del país) (Tabla N°7).

Tabla N°7 Cuando escucha hablar en lenguaje inclusivo, por ejemplo 'les chiques' o 'todes' ¿Le gusta o le molesta? según región

	Agrarios pampeanos	resto del país	Total
Me encanta	0,6%	2,8%	2,7%
Me gusta	2,8%	5,0%	4,9%
Me da igual	29,0%	31,9%	31,8%
Me molesta	39,8%	34,2%	34,4%
Me da bronca	27,8%	26,1%	26,2%
Total	100% (176)	100% (3979)	100% (4155)

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta 2023

Por otro lado, en un país que en teoría se sustenta en el mito fundante de la nación como crisol de razas, en los últimos años como parte de la habilitación de discursos de odio por la derecha se han instalado opiniones ofensivas hacia las/os inmigrantes (principalmente los de países limítrofes). En este marco, nos interesaba indagar qué eficacia tienen estos discursos en el sector agrario, donde la inmigración tuvo un lugar central en el desarrollo productivo a comienzos del siglo XX de la mano de las/os colonas/os y chacareras/os que venían de Europa, a tal punto que aún hoy en muchos pueblos agrícolas pampeanos se habla de sus descendientes como “los gringos” (Bidaseca y Gras, 2009:67).

Con este objetivo analizamos una pregunta que decía *En relación a los inmigrantes que vienen de Bolivia y Paraguay, ¿cuál de las siguientes frases se aproxima más a lo que usted piensa?* Solo el 21% de los actores agrarios sostuvo que *Hay que darles un trato igual al que tienen los argentinos*, mientras que un 32% tuvo posiciones claramente xenófobas sosteniendo

que *Habría que hacer que muchos se vuelvan a sus países de origen* (más del 19%) o que *Habría que prohibir la llegada de más inmigrantes* (13%) (Tabla N°8). Esta mirada predominante sobre las/os inmigrantes supone una distorsión del ideal multicultural en que históricamente se basó el desarrollo agropecuario en el país y las políticas públicas estatales. Probablemente el origen de la inmigración pesó en las evaluaciones sobre el tipo de políticas al respecto, expresando cierto racismo sobre aquellas/os que no cumplan con los estándares eurocéntricos y occidentales.

A su vez, al comparar con el resto del país observamos nuevamente que los actores agrarios pampeanos expresaron posiciones un tanto más conservadoras. Mientras el 32% de ellas/os escogió alguna de las respuestas xenófobas, el 24% lo hizo en el resto del país (Tabla N°8).

Tabla N°8 En relación a los inmigrantes que vienen de Bolivia y Paraguay, ¿cuál de las siguientes frases se aproxima más a lo que usted piensa? según región

26,20%	Agrarios pampeanos	resto del país	Total
Habría que hacer que muchos se vuelvan a sus países de origen	19,5%	16,6%	16,7%
Habría que prohibir la llegada de más inmigrantes, aunque no hacer que se vuelvan a sus países los que ya están acá	12,6%	7,8%	8,0%
Habría que permitirles que se queden pero que paguen por los servicios públicos que usen	47,1%	46,1%	46,1%
Hay que darles un trato igual al que tienen los argentinos	20,7%	29,5%	29,1%
Total	100% (174)	100% (3939)	100% (4143)

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta 2023

Por otro lado, los defensores de las ideas neoliberales le otorgaron un lugar central a la construcción de la inseguridad como un problema central asociado exclusivamente al control del delito y desde una retórica conservadora enfocaron sus críticas en lo que denominan “el garantismo progresista”, proponiendo endurecer las penas. De acuerdo a Catanzaro et al (2016) desde este discurso la inseguridad toma forma de un axioma: se asocia a delitos protagonizados por los sectores populares y su solución se circunscribe a la esfera de las protecciones civiles.

Tanto en las pequeñas y medianas ciudades de la región pampeana donde residen la mayor parte de los actores agrarios, como específicamente en el ámbito rural, el tema de la inseguridad desde un discurso conservador ha ganado peso en los últimos años. Con frecuencia las entidades del agro y los medios sectoriales se pronuncian al respecto, denunciando diferentes tipos de delito contra la propiedad (abigeato, robos de producción, sustracción de herramientas o maquinas, roturas de silobolsas) y la inacción del Estado en el tema⁸⁴.

Para indagar en la mirada sobre la inseguridad en la encuesta preguntamos *Imagínese que usted fuera el presidente y tuviera que elegir UNA MEDIDA para reducir el delito, ¿cuál de estas medidas tomaría?* La opción más escogida por los actores vinculados al sector fue

⁸⁴ A modo de ejemplo se recomienda ver: <https://www.infobae.com/economia/2021/09/05/inseguridad-rural-un-estudio-precisa-que-en-lo-que-va-del-ano-se-vandalizaron-60-silobolsas/>, <https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/inseguridad-rural-un-drama-que-persiste-y-limita-la-capacidad-productiva-nid25022023/>, <https://tn.com.ar/campo/2023/09/30/inseguridad-rural-en-el-norte-de-buenos-aires-y-sur-de-santa-fe-la-creciente-amenaza-que-atravesia-el-campo/>

Promover leyes más duras (más del 58% escogió esta opción), que junto con la opción *Poner más policías en la calle* sumo casi el 63% de las respuestas. Por ende, las opciones punitivistas, vinculadas al pensamiento conservador, fueron las más elegidas. Sin embargo, cabe destacar que un número no menor (más del 37%) escogió opciones asociadas al discurso progresista el cual sostiene que, en el marco del Estado de bienestar, la seguridad se asocia a protecciones sociales y laborales. En sintonía con esta idea, sostuvieron que la respuesta a la inseguridad debe ser *generar más oportunidades trabajo* (casi el 32%) y *urbanizar las villas* (casi el 6%). Es decir, a garantizar ciertas condiciones de vida para que nadie tenga “ni deseo ni necesidad de cometer injusticias”, tal como pregonaba el ideario progresista (Iosa, 2012: 141).

Asimismo, si comparamos a los actores agrarios con el resto del país, observamos de nuevo que estos se posicionaron de modo más conservador. Mientras las opciones más punitivistas fueron escogidas por el 63% de ellos, el 50% del resto del país las escogió (Tabla N°9)

Tabla N°9 Imagínese que usted fuera el presidente y tuviera que elegir UNA MEDIDA para reducir el delito, ¿cuál de estas medidas tomaría? *agropampeanos y resto

	Agrarios pampeanos	resto del país	Total
Poner más policías en la calle	4,5%	6,6%	6,5%
Urbanizar las villas	5,6%	5,6%	5,6%
Promover leyes más duras	58,2%	43,5%	44,2%
Generar más oportunidades de trabajo	31,6%	44,3%	43,8%
Total	100% (177)	100% (3998)	100% (4175)

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta 2023

Por último, frente al estímulo de las actitudes críticas en los espacios educativos por parte de las políticas progresistas, la reacción (neo)conservadora ha estado difundiendo la necesidad de volver a instalar el orden y la autoridad en las aulas. Nos preguntamos qué visión existe sobre este tema en un sector como el agro pampeano donde históricamente la autoridad paterna en el marco de las explotaciones familiares ha sido indiscutida, pero también donde han surgido en los últimos años de la mano del discurso de los agronegocios ciertos replanteos sobre las lógicas autoritarias en la organización del trabajo.

Específicamente para realizar una aproximación a este tema, analizamos una pregunta de la encuesta que decía *¿Para usted cómo sería mejor la escuela secundaria?* si bien más de un tercio de los actores agrarios sostuvo, en un sentido conservador, que *Las autoridades deben imponer el orden y los estudiantes tienen que acatarlos sin críticas* (33,5%), el 47% optó porque *Es importante que haya un poco de orden, pero también que los estudiantes puedan formular críticas*, y el 20% que *Los docentes deben estimular el espíritu crítico y la participación de los alumnos en los centros de estudiantes* (Tabla N°10), dando cuenta del peso no menor de algunas ideas progresistas en lo que respecta a la educación. Aunque en estas posiciones también es posible que esté ejerciendo cierta influencia los nuevos sentidos introducidos al respecto por el discurso de los agronegocios de la mano de la promoción del *management* moderno que

propone una reformulación de las formas jerárquicas tradicionales de autoridad (Liaudat y Moreno, 2022)⁸⁵.

A su vez, al comparar con el resto del país, otra vez el posicionamiento de los actores agrarios fue más conservador. Mientras que un 33% de las/os mismas/os escogió que *Las autoridades deben imponer el orden y los estudiantes tienen que acatarlo sin críticas*, un poco más del 21% del resto del país lo hizo.

Tabla N°10 ¿Para usted cómo sería mejor la escuela secundaria? según región

	Agrarios pampeanos	resto del país	Total
Las autoridades deben imponer el orden y los estudiantes tienen que acatarlo sin críticas	33,5%	21,5%	22,0%
Es importante que haya un poco de orden, pero también que los estudiantes puedan formular críticas	46,6%	43,9%	44,0%
Los docentes deben estimular el espíritu crítico y la participación de los alumnos en los centros de estudiantes	19,9%	34,5%	33,9%
Ns Nc	0	0,2%	0,1%
Total	100% (176)	100% (3990)	100% (4166)

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta 2023

La pregunta que nos surge en este momento es si alcanza con analizar las diferentes respuestas de forma separada para configurar lo que podríamos llamar la posición ideológica de los actores agrarios. Como plantean Catanzaro et al (2016) los análisis de datos aislados habituales en los estudios de opinión difundidos en los medios masivos de comunicación tienden a desatender la red de relaciones en la que un elemento adquiere su valor para la lectura y, por omisión, se lo adjudican inmediatamente al dato mismo, como si constituyera una entidad autoevidente. Es en su relación con otras respuestas donde se puede lograr cierta interpretación. El interrogante que emerge, entonces, es si tanto las opiniones o valoraciones sobre las cuestiones socioeconómicas como aquellas que refieren a temáticas culturales y sociales se vinculaban entre sí configurando patrones de respuestas relativamente repetidos, o si cada persona producía combinaciones específicas de modo que no sea posible encontrar muchas regularidades en la asociación de respuestas, aspecto que analizaremos a continuación.

¿Neoliberales y conservadores? Análisis de los patrones de respuesta

Para poder entender los patrones de asociación entre las preguntas, le asignamos valores numéricos a las contestaciones⁸⁶. Luego de esto, calculamos el coeficiente de Pearson (usualmente llamado coeficiente de correlación) que mide la relación lineal entre dos variables,

⁸⁵ Las megaempresas de los agronegocios han introducido nuevas formas de organización del trabajo de la mano del management moderno, que supone formas más flexibles, estructuras menos piramidales y la promoción de la autonomía de los empleados. Esta modalidad de organizar las relaciones laborales se contraponen con las lógicas de autoridad verticales y paternalistas que imperaron tradicionalmente en el agro argentino (Liaudat y Moreno, 2022)

⁸⁶ En la mayoría de las preguntas, a los valores extremos de respuestas le asignamos el 0 (en las respuestas claramente nacional-populares o progresistas) y el 100 (en las respuestas más fuertemente neoliberales o conservadores), 50 a la respuesta neutra, y 25 y 75 a las intermedias. Cuando eran cuatro opciones, usamos el 33 y 66 para las intermedias. Pero hubo casos con opciones más específicas en las que utilizamos otros valores, como 20 y 80.

es decir si al aumentar los valores de una de ellas hay un aumento o descenso proporcional de la otra. El valor oscila entre +1 (cuando una sube a la par de la otra) y -1 (cuando la relación sea exactamente opuesta, es decir las personas que eligen la opción más baja en una pregunta eligen la más alta en la otra, y así). El coeficiente tendrá un valor de 0 cuando no haya relación (al menos en forma lineal).

En relación al eje neoliberalismo-nacionalismo popular, se observa que en todos los casos hay un importante nivel de asociación, es decir cuando los actores agrarios respondieron de forma neoliberal en una pregunta también lo hicieron en la otra, y viceversa cuando respondieron de modo nacional-popular en una pregunta también lo hicieron en la otra. Se observó una alta correlación entre casi todas las respuestas, en general en torno a coeficientes de 0,4 o 0,5, lo cual es un indicador de que las personas respondieron con bastante coherencia ideológica en torno a estos.

Por otra parte, en relación al eje conservadurismo-progresismo, identificamos la existencia de asociación entre las respuestas: cuando las respuestas eran más conservadoras en una pregunta, tendía a haber respuestas conservadoras en la otra, y viceversa. De todos modos, en comparación con lo analizado en torno al eje neoliberalismo, aquí no identificamos relaciones muy fuertes (oscilaron entre 0,2 y 0,3), excepto entre las posiciones sobre el movimiento feminista y lenguaje inclusivo (cuya correlación fue de 0,5).

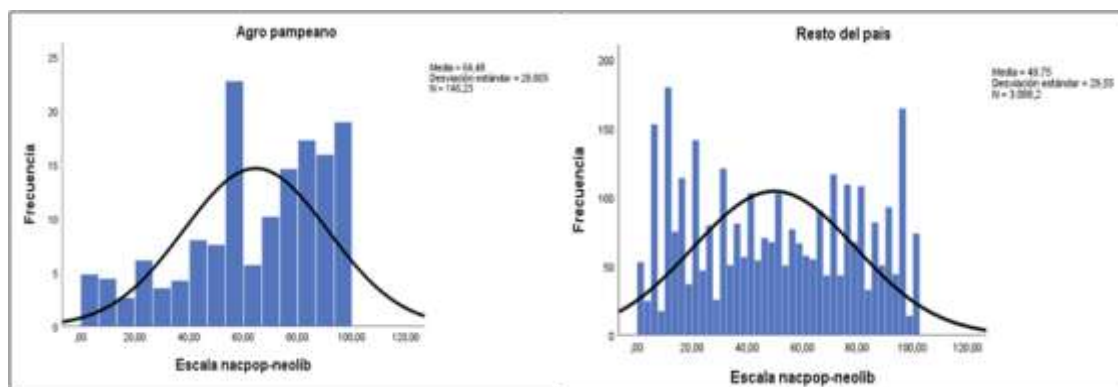
Por otro lado, convertir las respuestas en números nos permitió no solo medir la relación lineal entre dos preguntas, sino también construir una escala. Según Balsa (2024) una escala es la combinación de varias preguntas a fin de caracterizar con mayor precisión a las personas en un conjunto unificado de cuestiones. En el análisis que estamos realizando aquí, nos permite estudiar cuan neoliberales o nacional-populares o cuan conservadores o progresistas son los actores vinculados al agro pampeano considerando todas las preguntas a la vez. La mayor ventaja de las escalas es que un solo valor podemos sintetizar varias preguntas y la caracterización de las personas no depende, por ende, de las respuestas dadas de modo aislado.

Entonces, una vez se han convertido las preguntas en variables numéricas, es posible sumarlas, dividir las por la cantidad de preguntas y construir una escala de neoliberalismo y de conservadurismo, que tomará valor 100 si todas las respuestas fueron neoliberales o conservadores, valor 0 si todas fueron nacional-populares, o una serie de valores intermedios, ya sea que persona escogió siempre respuestas intermedias, sea que en algunas preguntas escogió opciones extremas en un sentido, y en otras extremas en el otro. Al tener un único valor para cada persona podemos ver como se distribuían los casos, si se concentraban en las posiciones más extremas o si, más bien, en las intermedias, y si había alguna tendencia hacia el predominio de una posición ideológica o la otra.

En relación a las posiciones sobre cuestiones socioeconómicas, se determina que el valor promedio entre los actores vinculados al agro pampeano fue de 64 puntos, y la mediana (dato de una distribución por arriba y por abajo del cual cae la mitad de las frecuencias) que es insensible a valores extremos y por ende evita sesgos, fue de 69 puntos, lo que da cuenta de un claro predominio de posiciones neoliberales. Se ratifica así, a través de este análisis más cuantitativo, lo que ya habíamos registrado en el análisis de los patrones de respuesta.

A su vez, si comparamos la media de los actores agrarios pampeanos en la escala de neoliberalismo con la del resto la sociedad, se observa con claridad el mayor peso de estas posiciones entre los primeros ya que la media del resto del país en dicha escala fue de 49 puntos, y la mediana estuvo en un valor muy cercano: 48 puntos. Tal como podemos observar en el Gráfico N°1, entre los actores agrarios pampeano la mayor cantidad de casos se encuentra del lado derecho (es decir, cercanos a posiciones neoliberales) y hay un grupo muy importante que expresa valores extremos en posiciones neoliberales. De hecho, el valor del conjunto de datos que tiene una mayor frecuencia absoluta (la moda) fue de 85 puntos lo que visibiliza el gran peso de posiciones fuertemente neoliberales. En cambio, en el resto de la sociedad la distribución es mucho más uniforme en todos los niveles, con un importante grupo de personas claramente neoliberales, otro importante grupo claramente nacional-populares, y todo otro grupo que se encuentra en posiciones intermedias cercanos a uno u otro polo, dando cuenta de la centralidad de la polarización ideológica en cuestiones socioeconómicas que atraviesa a la sociedad argentina en los últimos años (Balsa, 2024).

Gráfico N°1. Distribución de los casos en la escala de nacionalismo-popular-neoliberalismo en Agro pampeano y en el Resto del país.



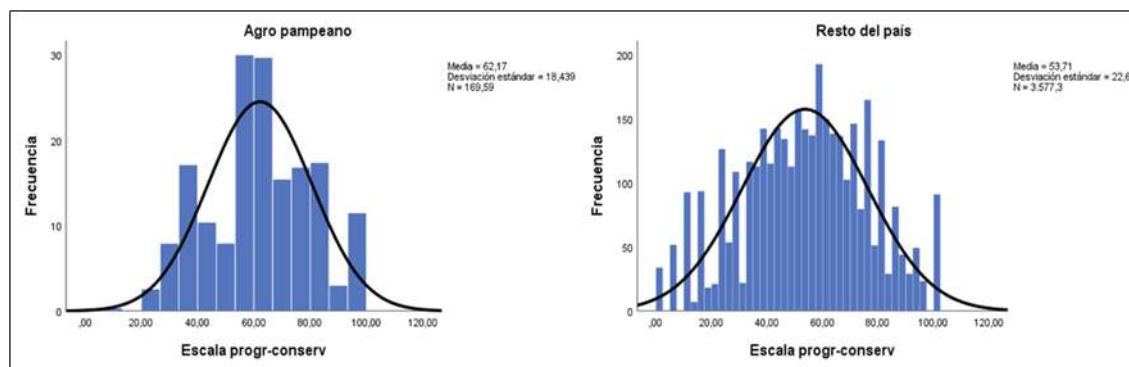
Fuente: elaboración propia en base a Encuesta 2023

En relación al eje progresismo-conservadurismo, se determina que el valor promedio entre los actores vinculados al agro pampeano fue de 62 puntos y la mediana fue similar, 61 puntos, es decir bastante más equilibrado que en la escala anterior, pero con una evidente tendencia hacia el conservadurismo. Asimismo, si comparamos la media de los actores agrarios pampeanos con la del resto de la sociedad en la misma escala, se observa una clara diferencia, ya que la misma es de 54 puntos (casi igual que la mediana que fue de 55 puntos), aunque no es tan marcada como en el eje nacionalismo-popular-neoliberalismo.

Tal como se puede observar en el Gráfico 2, la distribución de los casos entre los actores vinculados al agro pampeano se encuentra mayormente del lado derecho, donde se concentran los valores altos en la escala de conservadurismo. De hecho, la calificación que identificamos con mayor frecuencia (la moda) fue de 80 puntos. Asimismo, es necesario destacar que la mayor parte de las personas que se ubican en los valores intermedios de la escala no lo hace por haber optado por respuestas neutrales, sino por haber brindado respuestas con sentidos opuestos, por ejemplo, escogiendo opciones fuertemente anti-feministas en las dos preguntas correspondientes y opciones más progresistas o neutrales en los otros interrogantes. En cambio, la distribución de casos en el resto del país se acerca bastante a la forma acampanada (o de

distribución normal), donde sólo pequeñas minorías se ubicaron en posiciones extremas (claramente progresistas o conservadoras) y la gran mayoría se encontró en valores intermedios de la escala.

Gráfico N°2. Distribución de los casos en la escala de progresismo-conservadurismo en Agro pampeano y en el Resto del país



Fuente: elaboración propia en base a Encuesta 2023

Finalmente nos preguntamos si existe alguna relación entre las posiciones sobre temas socioeconómicos y sobre temas sociales y culturales. Para responder a este interrogante calculamos el coeficiente de correlación y hemos identificado una vinculación muy fuerte entre estas dos dimensiones de las personas, con una correlación de 0,5. Es decir, la enorme mayoría de los actores vinculados al agro pampeano que tienen valores altos en la escala de nacionalismo popular-neoliberalismo también los poseía en la escala de progresismo-conservadurismo expresando, por ende, posiciones neoliberales y conservadoras, y en sentido contrario, quienes tenían valores bajos en una escala también los tenían en la otra, expresando posiciones cercanas a las nacional-populares y progresistas.

Estos resultados dan cuenta de que, aun en un sector como el “campo” que ha quedado asociado en la polarización política de los últimos años con la derecha, existía una importante fractura atravesada por las coordenadas de la “grieta política”, entre un grupo mayoritario que se identifica con posiciones neoliberales y mayormente conservadoras, y un grupo no menor (de alrededor de un tercio de los actores consultados) que se vincula a posiciones nacional-populares y progresistas.

Conclusiones

En este trabajo hemos realizado un primer intento por caracterizar cómo piensan los actores vinculados al agro pampeano sobre diversas cuestiones económicas, culturales y sociales que refieren a la vida en común. Hacemos énfasis en la idea de primer abordaje ya que el hecho de que los datos estén contruidos por medio de una técnica particular, como son las encuestas *online*, constituye una limitación de su estudio que, en parte, reduce la complejidad del tema. En este sentido, un análisis más profundo sobre las subjetividades políticas requiere de la complementación con otras técnicas (como entrevistas en profundidad o grupos focales) que permitan estudiar cuestiones como las trayectorias identificatorias o los procesos cognitivos y afectivos asociados a los posicionamientos políticos. Considerando esta limitación, a

continuación, compartimos algunas conclusiones que funcionan más a modo de hipótesis y de identificación de nuevas posibles líneas de indagación, que podrán ser abordadas en futuros estudios con mayor profundidad analítica.

Frente a las preguntas que nos hacíamos al comienzo de este trabajo, podemos afirmar el predominio de posiciones neoliberales y conservadoras en los actores vinculados al agro pampeano, así como también el mayor peso de estos posicionamientos ideológicos respecto al resto del país.

De este modo, en relación a los planteos realizados por otros estudios cualitativos respecto a la hegemonía de la perspectiva liberal en actores agrarios bonaerenses, esta investigación permite señalar que dicha perspectiva se extiende al conjunto de los actores que se vinculan con el agro en toda la región pampeana, y al referirse a temas que exceden la intervención estatal en la actividad agropecuaria. Particularmente identificamos una mirada muy negativa sobre el Estado en general, un fuerte rechazo a los impuestos caracterizados como una traba para la inversión privada y una explicación mayoritaria sobre la desigualdad que deposita la responsabilidad en los individuos: en los pobres porque no quieren trabajar o no se educan y en los ricos por su esfuerzo o mentalidad innovadora. No obstante, es interesante resaltar que registramos cierto distanciamiento de las posiciones neoliberales sobre la legislación laboral. Asimismo, es posible distinguir el predominio de posturas conservadoras respecto a temáticas sociales y culturales. Específicamente observamos un fuerte rechazo al feminismo y algunas prácticas promovidas por el mismo (como el lenguaje inclusivo) y la relevancia de posiciones punitivistas frente al delito y de posiciones antinmigrantes. Sin embargo, visualizamos cierta distancia de las posturas más conservadoras en el plano de la educación y una adhesión relevante a determinados planteos progresistas sobre la seguridad.

Por otra parte, se identifica un importante nivel de coherencia en las posiciones de las/os encuestadas/os que se distancia la incoherencia ideológica que se suele imputar a las sociedades contemporáneas (Bauman, 2003). Esta coherencia se expresa en que la mayoría de nuestros interlocutores respondió en un sentido similar en términos ideológicos en las diferentes preguntas sobre cuestiones socioeconómicas y socioculturales. Y, también en la existencia de una asociación muy fuerte entre los posicionamientos neoliberales y conservadores, y entre posturas nacional-populares y progresistas.

Estas opiniones de los actores vinculados al agro pampeano las entendemos como expresión de una determinada subjetividad política en tanto se producen mediante actos reflexivos que ubican al sujeto en un plano colectivo. Pero sostenemos, siguiendo a Gramsci (1986), que los sujetos se encuentran inmersos en un campo de fuerzas desde el cual diferentes vectores ideológicos contribuyen con su proceso de construcción subjetiva. Por esto consideramos que, para comprender las causas de las posiciones neoliberales y conservadoras entre los actores agrarios pampeanos, es importante indagar en la eficacia interpelativa de los discursos en disputa. Más allá de que el campo discursivo a nivel nacional se haya corrido hacia la derecha en los últimos años, consideramos que específicamente en el sector, hay dos vectores ideológicos que podrían estar influyendo en dichos posicionamientos desde hace décadas.

Por un lado, la hegemonía de una mirada liberal sobre el Estado y la política entre las organizaciones colectivas que buscan representar al sector. Esta lectura se ha vuelto predominante entre el conjunto de las entidades tradicionales al perder peso desde la última dictadura militar el discurso agrarista crítico y desdibujarse el rol de la Federación Agraria

(Liaudat, 2018). Pero también, se ha radicalizado a partir de la promoción del discurso de los agronegocios por las nuevas entidades del sector (tecnológicas, por cadena), que, desde una óptica neoliberal, cuestionan el rol del Estado como promotor del desarrollo y del bienestar del conjunto social. De este modo, hace ya varios años tanto en los congresos como en los medios de comunicación sectoriales se difunde una mirada única anti-Estado, que seguramente ha influido en las opiniones de nuestras/os interlocutoras/es, y que se visibilizó con fuerza en el marco del conflicto del campo del 2008.

Por otro lado, en el marco de dicho conflicto se gestó una alternativa política de derecha que vino a romper con cierta hegemonía progresista en el campo político y que busco presentarse como la representante de los intereses del campo. Ante los errores iniciales del gobierno de Cristina Fernández en el diseño de la política de retenciones y de comunicación en el marco del conflicto (apelando a tópicos como el de oligarquía para referirse a los diversos actores que participaban del mismo) así como sus limitaciones para fragmentar a las fuerzas movilizadas, la mayor parte de los actores agrarios se vieron interpelados crecientemente por las fuerzas derecha, cuestión que se expresa en sus comportamientos electorales de los años siguientes.

Sin embargo, tal como señala González Rey (2002), en la constitución de las subjetividades políticas juegan un papel central las experiencias compartidas. En el agro pampeano, existen al menos dos tipos de prácticas que podrían estar abonando al predominio de posiciones neoliberales y conservadoras. En primer lugar, las experiencias de confrontación con el Estado por políticas impositivas y comerciales que han generado, según Muzlera (2009b), una especie de “cultura anti-Estado” entre los actores del sector. Esta cultura comenzó a ganar peso en términos históricos a mediados de siglo XX en el momento en que parte importante de las/os chacareras/os arrendatarias/os se convirtieron en propietarios de tierras y el Estado dejó de verse como un aliado para conseguir el acceso a la tierra para convertirse en quien “mete la mano en el bolsillo” de los productores sin dar nada a cambio (2009b:334). Y, en segundo lugar, los sentidos conservadores se vinculan con prácticas patriarcales fuertemente arraigadas en el agro, como la invisibilización del trabajo femenino, el otorgamiento de ciertos derechos y privilegios a los hombres y el respeto irrestricto a su autoridad y al orden en general (Stolen, 2004).

La primacía de este tipo de posiciones entre los actores del agro pampeano se vuelve especialmente problemática en un contexto de fuerte avance de la concentración productiva en el sector. La mayor parte de los actores agrarios que se ven afectados por la misma, no logran cuestionar el orden económico y social existente al adoptar esta mirada tan fuerte anti-Estado y defensora del *statu quo*.

Sin embargo, cabe destacar la existencia de un grupo (de alrededor de un tercio de los actores consultados) que expresa posiciones más cercanas al discurso nacional-popular y progresista (con especial fuerza en algunos tópicos como en la defensa de una educación crítica, de los derechos de los trabajadores o en el cuestionamiento a los empresarios que evaden impuestos). Estos resultados se hallan en sintonía con lo hallado en un estudio previo sobre el agro bonaerense (Moreno, López Castro y Liaudat, 2023) donde registramos que alrededor de un cuarto de los actores agrarios presentaban una perspectiva menos refractaria a la intervención del Estado en la economía del sector. Estas miradas, que, en algunos casos, podrían vincularse a una especie de “buen sentido” (Gramsci, 1986) que nace de la práctica de algunos actores subalternos, permiten problematizar la idea del “campo” como una identidad unificada que nuclea al conjunto de los actores agrarios.

La intención de este trabajo fue mostrar una primera fotografía de las posiciones ideológicas de los actores vinculados al agro en la región pampeana y visibilizar la particularidad de su posición en relación al resto del país, pero consideramos que emergen de este análisis al menos dos interrogantes a ser profundizados en futuras investigaciones. Nos referimos, por un lado, a si existen diferencias internas en el grupo social estudiado en función de variables claves como la clase social, el género, o el vínculo directo e indirecto con la actividad agropecuaria. Por otro lado, en función de los pocos estudios previos, parecería que los actores agrarios mantienen una continuidad en sus posicionamientos en las últimas décadas, y es el resto de la sociedad la que se acerca a ideas liberales y conservadoras que históricamente fueron predominante en el sector. La pregunta que nos surgen, entonces, es de qué modo los actores agrarios desde el “conflicto del campo” en adelante abonaron al corrimiento del campo discursivo y político hacia la derecha, y, en ese marco, qué capacidad han alcanzado de imponer sus intereses.

Bibliografía

Anderson, P. (2003). Capítulo 1. Neoliberalismo: un balance provisorio. En: E. Sader y P. Gentili (comps.) *La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social*. (11-18). Buenos Aires: CLACSO.

Balsa, J. (2024). *¿Por qué ganó Milei? Disputas por la hegemonía y la ideología en Argentina*. Buenos Aires: Fondo de la Cultura Económica

Balsa, J; De Martinelli, G; y Liaudat, D. (2017) La ideología de los productores rurales bonaerenses en la actualidad. En: De Martinelli, G., y Moreno, M. (2017) (comps) *Cuestión agraria y agronegocios en la región pampeana. Tensiones en torno a la imposición de un modelo concentrador* (pp.139-196). Bernal: Editorial UNQ, 2017.

Bauman, Z. (2003). *Modernidad líquida*. México: Fondo de Cultura Económica.

Bidasca, K. y Gras, C (2009). Los 90 y después. Criterios de pertenencia, exclusión y diferenciación social en tres pueblos del corredor sojero. En: C, Gras y V, Hernández (coords) *La Argentina rural De la Agricultura familiar a los agronegocios* (págs. 65-86). Buenos Aires: Editorial Biblos.

Catanzaro, G., Elisalde, S., y Seghezzi, G. (2016). La ideología de la inseguridad en la Argentina actual, *Sociedade e Cultura*, Vol. 16 (1), 21-36, <https://www.revistas.ufg.br/fchf/issue/view/1832/showToc>

Cavarozzi, M (2010). *Autoritarismo y democracia: 1955-1996: la transición del estado al mercado en la Argentina*. Buenos Aires: Eudeba.

Díaz, A., y González, F. (2012). Subjetividad política y psicologías sociales críticas en Latinoamérica: ideas a dos voces. *Univesitas Psychologica*, 11(1), 325-338, <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64723234026>

Gayozzo, P. (2022). Agustín Laje y el Neo-Conservadurismo Latinoamericano de derecha. *Revista Argentina de Ciencia Política*. Vol. 1, Núm.29, 306-344.

Gras, C. y Hernández, V. (2009). “Son los piquetes de la abundancia”. Actores y Estado en el conflicto agrario en Argentina. *XXVIII International Congress of the Latin American Studies Association*. Rio de Janeiro, Brasil.

Gramsci, A (1986). *Cuadernos de la Cárcel*. México: Editorial Era.

González Rey, F. (2002). *Sujeto y subjetividad: Una aproximación histórico-cultural*. México: Thomson.

Iosa, J. F (2012). Progresismo y conservadurismo. Un principio de análisis; Editorial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. *Filosofía del Derecho*; 1; 1; 5-2012; 135-146.

Lattuada, M. (2021). *La política agraria en tiempos de la grieta. Argentina (2003-2019)*. Ciudad de Buenos Aires: Teseo- Universidad Abierta Interamericana.

Lattuada, M. (1987). *Política agraria del liberalismo-conservador 1946-1985*. Buenos Aires: CEAL

Liaudat, D. y Moreno, M. (2022). Management, agronegocios y relaciones de trabajo. Analisis de su aplicación en dos megaempresas argentinas (Adecoagro y Los Grobo). *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, p.97-120.

Liaudat, D. (2018). Hegemonía, discursos e identificaciones en el agro pampeano. Análisis de los agronegocios y su eficacia interpelativa en los actores agropecuarios. (Tesis de doctorado). Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. Disponible en RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes

Martínez, F. (2013) Aproximación a algunos tópicos del “discurso kirchnerista”. En: J, Balsa (comp). *Discurso, política y acumulación en el kirchnerismo* (págs. 47-57). UNQ: CCC.

Moreno, M; López Castro, N. y Liaudat, D. (2023). Agro, Estado y pandemia. La posición de los actores vinculados al sector agropecuario en los espacios locales bonaerenses. *Revista de Ciencias Sociales, Segunda Epoca*, vol13. p. 129-151.

Moreno, M; Liaudat, D; y López Castro, N (2020). Campo y Estado en la pampa argentina. La perspectiva de los actores agrarios ante la intervención estatal en el sector (provincia de Buenos Aires, 2007-2020). *Revista Latinoamericana de Estudios Rurales*; Año: 2020 vol. 5

Muzlera, J. (2009a). *Chacareros del siglo XXI. Herencia, familia y trabajo en la Pampa Gringa*. Buenos Aires: Imago Mundi.

Muzlera, J. (2009b). Cultura y estructura social: herramientas para el análisis de conflictos en el agro bonaerense contemporáneo. *Anuario Del Centro De Estudios Históricos Profesor Carlos S. A. Segreti*, (9), 323–336. <https://doi.org/10.52885/2683-9164.v0.n9.23185>

Palma, A. (2016). Campo y distribución: signos ideológicos e iniciativa discursiva en la polémica por los impuestos a la exportación agropecuaria en la Argentina (año 2008). *Oralia* 19, 201-225. <https://doi.org/10.25115/oralia.v19i1.7056>

Schuliaquery, I. y Vommaro, G. (2020). Introducción: la polarización política, los medios y las redes: coordenadas de una agenda en construcción. En: *Revista SAAP: Sociedad Argentina de Análisis Político*, Vol.14, N°2, 2020, págs. 235-247, <https://doi.org/10.46468/rsaap.14.2.I>

Stolen, A. (2004). *La decencia de la desigualdad: género y poder en el campo argentino*. Buenos Aires: Antropofagia.

Varesi, G. (2014). El “conflicto del campo” de 2008 en Argentina: Hegemonía, acumulación y territorios. *Geograficando*, 2014 10(2). Disponible em: <http://www.geograficando.fahce.unlp.edu.ar>

Yabkowski, N. (2010). “Nosotros, ellos... Todos. Los sentidos de la representación política y los recursos discursivos utilizados para ganar legitimidad en el conflicto”. En R. Aronskind y G. Vommaro (Comps.), *Campos de batalla. Las rutas, los medios y las plazas en el nuevo conflicto agrario* (67-118). Buenos Aires: UNGS-Prometeo

Villulla, J.M. (2015) *Las cosechas son ajenas. Historia de los trabajadores rurales detrás del agronegocio*. Buenos Aires: Editorial Cienflores.

Zugarramardi, M. (2007). *Significaciones del progresismo en Argentina*. [Tesis para obtener el título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación]. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

Semblanza

María Dolores Liaudat

Doctora en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Investigadora Asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el Instituto de Economía y Sociedad en la Argentina Contemporánea. Docente concursada en la Universidad Nacional de La Plata. Entre las últimas publicaciones relacionadas con el tema se encuentran:

- Moreno, M; López Castro, N. y Liaudat, D. (2023). Agro, Estado y pandemia. La posición de los actores vinculados al sector agropecuario en los espacios locales bonaerenses. *Revista de Ciencias Sociales*, Segunda Época, vol13. p. 129-151.
- Liaudat, D. (2023) Se dice de mí... Las tensiones entre el campo y el resto de la sociedad en el discurso de los actores agropecuarios pampeanos (2013-2020). *Pampa*, p 1-60.

Disciplina académica: Sociología

Subdisciplinas en las que se inscribe el artículo: Sociología agraria, Sociología política

Tipo, método o enfoque del estudio: Metodología cuantitativa



IDENTIDADES Y SUBJETIVIDADES POLÍTICAS DE LOS/LAS CIUDADANOS ARGENTINOS SOBRE EL ROL DEL ESTADO, LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA Y LOS REFERENTES DE GOBIERNO DEL FRENTE DE TODOS EN LA SEGUNDA OLA DEL COVID

Hernán Fair

hernanfair@conicet.gov.ar

CONICET - Instituto de Economía y Sociedad en la Argentina Contemporánea-CIC,
Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2082-8257>

Resumen

Este artículo analiza las representaciones sociales de los/las ciudadanos/as argentinos sobre el rol del Estado, la gestión del COVID del gobierno del Frente de Todos, las responsabilidades y expectativas, durante la segunda ola de la pandemia (2021). Encontramos posicionamientos en tensión sobre el gobierno de Alberto Fernández, su gestión de la pandemia, la visión sobre las libertades y las responsabilidades políticas, que se expresaron con diferentes intensidades, grados y matices. Una parte de los/las entrevistados/as reconocen las circunstancias excepcionales e imprevisibles de la pandemia, mencionan la “devastación” y el “atropello al pueblo” del gobierno macrista y el accionar “irresponsable”, “oportunista” y “mezquino” de la oposición. Además, valoran el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) (“ayudó a mucha gente”), apoyan las restricciones sanitarias y las prioridades de vacunación y destacan la necesidad de priorizar el “bien de todos” por sobre el interés individual, evitar el “descontrol del sistema sanitario”, cuidar la “salud” de las personas y “salvar vidas”. Otros/as, expresan fuertes críticas a la gestión gubernamental de la pandemia porque “la economía no se está moviendo”, “la inflación es cada vez más alta”, falta trabajo y “hay muchos pobres”. Además, critican la lentitud del plan de vacunación, la “falta de organización” y la “cantidad de contagiados”, las restricciones a la libertad individual y la corrupción. En ese marco, en una parte de los/las entrevistados/as observamos una pérdida de legitimidad y fuerte desencanto en

la figura del Presidente, que mutó de una sensación de aprecio y confianza inicial (“Lo apreciaba”; “Le tenía fe”; “Me encantaba”; “Era tan coherente”), a una imagen de desilusión, vergüenza o desengaño (“No me representa”; “Me va vergüenza”; “Estoy totalmente defraudada”). En otros casos, encontramos sensaciones de bronca e indignación generalizada con el gobierno nacional. Por último, en el contexto de la crisis económica, social y sanitaria, en una porción de los/las ciudadanos observamos concomitantemente críticas más generales a la política, los políticos (la “casta”) y pérdida de confianza en las instituciones (“Nos fallaron”; “Estoy descreído de todo”), así como un rechazo al pago de impuestos (“Son nuestros impuestos”), el gasto público (“La maquinita imprimiendo”) y las medidas de ayuda social del Estado (“Crían haraganes y vagos ¡A montones!”). Esto muestra indicios de una crisis de representatividad política y un relativo avance e intensificación de posiciones neoliberales.

Palabras clave: Gobierno de Alberto Fernández; Coronavirus; Discursos en conflicto; Identidades políticas; Libertad; Neoliberalismo.

IDENTITIES AND POLITICAL SUBJECTIVITIES OF ARGENTINE CITIZENS ON THE ROLE OF STATE, THE MANAGEMENT OF PANDEMIC AND THE GOVERNMENT FIGURES OF FRENTE DE TODOS DURING THE SECOND WAVE OF COVID

Abstract

The paper analyzes the social representations of Argentine citizens about the role of the State, the management of COVID by the government of Frente de Todos, the responsibilities and expectations, during the second wave of the pandemic (2021). We found positions in tension around the government of Alberto Fernández, his management of the pandemic, the vision of the freedoms and the political responsibilities, which expressed with different intensities, degrees and nuances. Some interviewees recognize the exceptional and unpredictable circumstances of the pandemic, the “devastation” and the “attack on the people” of Macrist government and the “irresponsible”, “opportunistic” and “mean” actions of the opposition. In addition, they value the payment of the IFE (“it helped a lot of people”), support health restrictions and vaccination priorities and highlight the need to prioritize the “good of all” over individual interest, avoid the “lack of control of the health system”, take care of people’s “health” and “save lives”. Others express strong criticism of the government’s management of the pandemic because “the economy is not moving”, “inflation is getting higher”, there is a lack of work and “there are many poor people”. In addition, they criticize the slowness of the vaccination plan, the “lack of organization” and the “number of infected people”, the restrictions on individual freedom and corruption. In this framework, in some interviewees we observed a loss of legitimacy in the President, which changed from an initial feeling of appreciation and trust (“I appreciated him”; “I had faith in him”; “I loved it”; “It was so coherent”), to an image of disillusion, shame or disappointment (“It doesn’t represent me”; “I’m ashamed”; “I’m totally disappointed”). In other cases, we found feelings of anger and generalized indignation with the national government. Finally, in the context of the economic, social and health crisis, some citizens concomitantly expressed general critics of politics, ‘the politicians’ (the “caste”) and loss of trust in institutions (“They failed me”; “I’m disbelieving of everything”). As well as to a rejection of paying taxes (“They are our taxes”), public spending (“The little machine printing”) and the State’s social aid measures (“They raise lazy people and

a lots!”). This shows signs of a crisis of political representativeness and a relative advance and intensification of neoliberal positions.

Key-words: Government of Alberto Fernández; Coronavirus; Speeches in struggle; Political identities; Freedoms; Neoliberalism.

IDENTIDADES E SUBJETIVIDADES POLÍTICAS DE CIDADÃOS ARGENTINOS SOBRE O PAPEL DO ESTADO, A GESTÃO DA PANDEMIA E OS REFERENTES GOVERNAMENTAIS DA FRENTE DE TODOS NA SEGUNDA ONDA DA COVID

Resumo

Este artigo analisa as representações sociais dos cidadãos argentinos sobre o papel do Estado, a gestão da COVID do governo da Frente de Todos, as responsabilidades e as expectativas durante a segunda onda da pandemia (2021). Encontramos posições tensas sobre o governo de Alberto Fernández, sua gestão da pandemia, a visão das liberdades e as responsabilidades políticas, que foram expressas com diferentes intensidades, graus e nuances. Alguns dos entrevistados reconhecem as circunstâncias excepcionais e imprevisíveis da pandemia, mencionam a “devastação” e o “atropelamento do povo” do governo Macrista e as ações “irresponsáveis”, “oportunistas” e “mesquinhas” da oposição. Além disso, eles valorizam o pagamento da Renda Familiar Emergencial (IFE) (“ajudou muitas pessoas”), apoiam as restrições de saúde e as prioridades de vacinação e enfatizam a necessidade de priorizar o “bem de todos” em relação aos interesses individuais, evitar a “falta de controle do sistema de saúde”, cuidar da “saúde” das pessoas e “salvar vidas”. Outros expressam fortes críticas à gestão da pandemia pelo governo porque “a economia não está se movendo”, “a inflação está cada vez mais alta”, há falta de empregos e “há muitas pessoas pobres”. Eles também criticam a lentidão do plano de vacinação, a “falta de organização” e o “número de pessoas infectadas”, as restrições à liberdade individual e a corrupção. Nesse contexto, alguns dos entrevistados observaram uma perda de legitimidade e um forte desencanto com a figura do presidente, que passou de um sentimento inicial de apreço e confiança (“Eu o apreciava”; “Eu tinha fé nele”; “Eu o amava”; “Ele era tão coerente”) para uma imagem de desilusão, vergonha ou decepção (“Ele não me representa”; “Estou envergonhado”; “Estou totalmente decepcionado”). Em outros casos, encontramos sentimentos de raiva e indignação generalizada com o governo nacional. Por fim, no contexto da crise econômica, social e de saúde, observamos em uma parcela dos cidadãos uma crítica concomitante mais geral à política, aos políticos (a “casta”) e à perda de confiança nas instituições (“Eles falharam conosco”; “Eu não acredito em tudo”), bem como uma rejeição ao pagamento de impostos (“São nossos impostos”), aos gastos públicos (“A máquina de impressão”) e às medidas de assistência social do Estado (“Eles criam pessoas preguiçosas e preguiçosas, muitas delas!”). Isso mostra sinais de uma crise de representatividade política e um relativo avanço e intensificação das posições neoliberais.

Palavras-chave: Governo de Alberto Fernández; Coronavírus; Discursos em conflito; Identidades políticas; Liberdade; Neoliberalismo.

Introducción*

* Este artículo se inscribe en el marco del Proyecto de Investigación y Desarrollo “Identidades, experiencias y discursos sociales en conflicto en torno a la pandemia y la pospandemia: un estudio multidimensional sobre las

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud anunció oficialmente que el Coronavirus (COVID-19) constituía una pandemia, lo que generó un profundo impacto a nivel mundial. El presente trabajo se centra en el caso argentino. Se propone como objetivo indagar en los discursos de ciudadanos y ciudadanas argentinos/as sobre el rol del Estado, la imagen de la política y de los/las referentes de gobierno del Frente de Todos, en la segunda ola de la pandemia (2021). La hipótesis inicial sostiene que la pandemia del COVID se constituyó en un acontecimiento dislocador de las subjetividades que exacerbó posiciones previas, generó una sensación de malestar y bronca en una parte de la ciudadanía argentina, contribuyó a la pérdida de confianza en el gobierno nacional y a un avance e intensificación de posiciones individualistas y neoliberales.

Entendemos al neoliberalismo como un discurso político constituido por un conjunto de políticas públicas de ajuste y reforma estructural del Estado y un nuevo modo de producción y organización del trabajo, que estructuran un determinado modelo de acumulación de capital; y como un proyecto ético-político constituido por una serie de valores, prácticas, imaginarios y racionalidades de gobierno que representan una determinada concepción ideológica del mundo. La concepción neoliberal del mundo se condensa en una lógica discursiva hiper-mercantilista, individualista, eficientista y privatista, que defiende la apropiación privada y la mercantilización de todos los ámbitos y espacios, la privatización de los bienes públicos y comunes y la destrucción de los derechos sociales de los/las trabajadores mediante una lógica de acumulación por desposesión. Además, naturaliza como valores positivos el egoísmo, la desigualdad social, la competencia despiadada en el mercado, la explotación económica y la precarización laboral, promueve la fragmentación social, la ruptura de los lazos de solidaridad, la marginalidad y exclusión de las mayorías populares y la criminalización de la protesta social (Fair, 2023a).

La metodología de este trabajo se basa en un análisis discursivo de entrevistas, desde un enfoque de Análisis Político de Discurso (APD) (Buenfil, 1994). Se inscribe en el marco de un proyecto de investigación más amplio, que realizó 46 entrevistas semiestructuradas en las principales regiones del país entre 2021 y 2022, a través de una muestra representativa y segmentada que mantuvo las proporcionalidades de género, edad, ocupación, preferencias políticas, lugar de residencia y clase social⁸⁷. Hemos seleccionado una muestra aleatoria de 13 entrevistas realizadas en abril y mayo de 2021. Este recorte pretende profundizar en el análisis de las representaciones discursivas de una parte de los/las ciudadanos argentinos⁸⁸. El artículo se enfoca en las discursividades en conflicto y en los aspectos enunciativos y argumentativos. De este modo, se busca contribuir a ahondar en aspectos claves de las identidades y las subjetividades políticas de los y las ciudadanos durante la fase crítica de la pandemia del COVID. Las identidades son entendidas no como esencias, sino como construcciones

incertidumbres, odios, solidaridades, cuidados y expectativas desiguales en todas las regiones de Argentina”, Convocatoria PISAC-COVID 2019, período 2020-2022. Fue financiado por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (AGENCIA I+D) y dirigido por Javier Balsa.

⁸⁷ En la investigación participaron 18 Universidades de todo el país, divididas en siete subredes temáticas. Este trabajo se inserta dentro de la Subred temática “Ideologías, pasiones e identidades políticas”.

⁸⁸ De los 13 entrevistados/as, siete son de género masculino y seis femenino, con edades de entre 33 y 60 años, de las zonas de Alta Gracia (Córdoba), Chaco, La Plata (Provincia de Buenos Aires), San José (Misiones), ciudad de Córdoba, Bernal (Provincia de Buenos Aires), La Rioja e Iruya (Salta), diferentes trabajos (dos amas de casa, cuatro empleados/as asalariados, tres comerciantes, un trabajador independiente, dos jubilados/as y una empleada doméstica) y clases sociales (siete de clase media-baja, cuatro de clase media y dos de clase media-alta). De la muestra, ocho entrevistados/as apoyaron (o se presume que apoyaron) a Alberto Fernández en 2019 y cinco no lo votaron.

discursivas que se constituyen a través del orden simbólico e imaginario en un juego de marcación de la diferencia y exclusión y se vinculan a elementos parcialmente sedimentados (Stuart Hall, 1997; Aboy Carlés, 2001: 44-47). Las entrevistas fueron realizadas por sistemas interactivos (Meet o Zoom), por teléfono o de manera presencial, con una duración promedio de entre una hora y una hora y media cada una⁸⁹.

La estrategia analítica se basa en fragmentos textuales de las entrevistas. Se centra en las argumentaciones (Amossy, 2016) que construyen los/las entrevistados/as a partir de las cadenas de equivalencias (cadenas que articulan dos o más significantes o palabras de forma equivalente), fronteras (significantes que contraponen dos o más palabras de un modo antagónico), las analogías, metáforas y metonimias (Laclau, 1993, 2003a, 2014), junto con el análisis enunciativo de las marcas de subjetividad.

Para la teoría francesa de la enunciación, los enunciados dejan marcas textuales del locutor que se constituyen como huellas discursivas (Verón, 1997: 16; García Negroni, 2008). Estos “indicadores de subjetividad” (Benveniste, 1997: 185) o “marcas de subjetividad” (García Negroni y Tordesillas, 2023: 59) refieren a las *huellas* del sujeto que el acto de enunciación deja como impronta en el enunciado. La deixis personal (marcas del yo, nosotros, tu, ustedes, vs. él, ellos) y espacio-temporal (el “aquí” y “ahora” del discurso) y las modalizaciones (los distintos grados en los que el locutor adhiere a su propio discurso, como la probabilidad, la certidumbre, la verosimilitud) constituyen algunas de las múltiples marcas presentes en la superficie del enunciado y que reenvían a su enunciación, en el sentido de la relación intersubjetiva que se establece entre el que enuncia y su enunciado⁹⁰ (García Negroni y Zoppi Fontana, 1992: 21). Su relevancia se debe a que muestran las actitudes y valoraciones políticas del enunciadador y el vínculo que establece con sus destinatarios⁹¹ (Balmayor, 1999: 118-119; Sigal y Verón, 2003).

Colocaremos el eje en los adjetivos. Las adjetivaciones permiten, en cierto contexto discursivo, resaltar o mitigar cualidades evaluativas. Además, contribuyen a abordar las emociones (positivas o negativas) en el lenguaje. Estos componentes afectivos y emocionales (el *pathos*) pueden ser analizados discursivamente, al reconstruirse en relación a los argumentos en los que se inscriben (Amossy, 2016: 32). Los adjetivos situados en el lado interno de la frontera otorgan una valencia positiva a lo enunciado. Los adjetivos de valencia negativa refuerzan el rechazo a enunciados del lado externo de la frontera. También analizaremos los usos de la deixis, frases impersonales, exclamaciones, hipérboles, adverbios, ironías, citas intertextuales y la negación polémica, que contribuyen al estudio polifónico de la enunciación y la argumentación (García Negroni y Zoppi Fontana, 1992; Plantin, 2012; Amossy, 2016; García Negroni y Tordesillas, 2023) y los implícitos, que conciernen a las asunciones,

⁸⁹ Preservamos en el anonimato los nombres de los/las entrevistados/as para mantener la confidencialidad de los datos.

⁹⁰ Como señalan Sigal y Verón, “el nivel del enunciado es aquel en el que se piensa cuando se habla de contenido de un discurso; el enunciado es aquello que se dice”, mientras que “el plano de la enunciación es ese nivel del discurso en el que se construye no lo que se dice, sino la relación del que habla con aquello que dice” (Sigal y Verón, 2003: 23).

⁹¹ Los/las referentes de la Teoría de la Enunciación francesa emplean conceptos como “locutor”, “alocutor” “enunciador” o “sujeto de enunciación”, para caracterizar al que enuncia. Algunos/as distinguen entre el sujeto empírico que es el autor efectivo de lo enunciado, el locutor responsable de su enunciación y el/los enunciadador/es construido/s en el discurso. Por su parte, definen como “enunciatario”, “alocutario” o “destinatario” a el/la o los/las destinatarios/as a los que se dirige o evoca quien enuncia (García Negroni y Tordesillas, 2023).

presupuestos o lugares comunes no explicitados en los textos. Estos principios compartidos son relevantes, ya que sostienen los discursos y contribuyen a legitimarlos (Angenot, 2012: 38-39).

Es importante destacar que los enunciados se vinculan con condiciones sociales, contextuales e históricas específicas (Foucault, 1973; Angenot, 2012: 74-83 y ss.). Eliseo Verón (1987a, 1987b) define como “condiciones sociales de producción” o “condiciones sociales productivas” a estos aspectos extra-lingüísticos que dan cuenta de las “restricciones” de generación de un discurso. Según el semiólogo, “el sistema productivo deja huellas en los productos” que “puede ser fragmentariamente reconstruido”, por lo que “analizando productos, apuntamos a procesos” (Verón, 1987b: 124). De esta forma, las marcas de subjetividad y otros aspectos enunciativos deben analizarse en relación con sus condiciones sociohistóricas y coyunturales, a partir de las *huellas* textuales de los discursos visibles en la superficie material (Verón, 1987b: 125-129). Otro aspecto relevante, a nivel epistemológico, es que el estudio de las modalidades y estrategias de enunciación no constituye un análisis objetivista. Verón distingue entre el analista (intérprete), su referente (objeto) y aquello que este representa (signo) (Verón, 1987b: 104) y enfatiza en el carácter “interpretativo” del análisis del discurso (Verón, 1997: 31), el cual es “susceptible de una multiplicidad de lecturas” (Verón, 1997: 21; Sigal y Verón, 2003).

Usaremos conceptos gradualistas para distinguir relacionamente intensidades en los discursos. Como señala Aboy Carlés, el estudio de la *intensidad* de la equivalencia permite identificar gradientes de articulación/antagonismo entre los elementos (Aboy Carlés, 2010: 21). En este sentido, en el APD los enunciados de los/las entrevistados se pueden distinguir textualmente a través de una escala gradual de intensidades, que se basa en una relación de un más o hacia un menos (*gradualidades*), en lugar de en oposiciones basadas en categorías privativas (del tipo vida vs. muerte, todo o nada)⁹² (Courtés, 1997: 390-391). A modo de ejemplo, una escala de adjetivos calificativos podría ser: *monstruoso, espeluznante, aterrador, espantoso, horrible, horripilante, feo, bonito, guapo, bello, galán, hermoso, precioso, adonis*. La adición de los sufijos *muy, bastante y extremadamente*, contribuye a potenciar o a atenuar gradualmente lo enunciado (Carel y Ducrot, 2005: 102). La misma estrategia cualitativa escalar utilizaremos para diferenciar las posiciones de la muestra (*casi todos, muchos, algunos, unos pocos, casi nadie o casi ninguno; gran parte, una parte, una pequeña parte, la mayoría, una minoría*), de manera tal de evitar generalizaciones indebidas. Con base en las regularidades de los discursos, en las conclusiones resumiremos los principales argumentos y los significantes “flotantes” o en disputa que encontramos⁹³.

Para abordar los discursos nos basamos en una serie de ejes temáticos-previamente definidos en la muestra, vinculados con las representaciones de los/las referentes del Gobierno Nacional (expectativas sobre la elección presidencial del 2019, imagen de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner), su gestión de la pandemia (políticas públicas frente al Coronavirus, relación con la oposición, opiniones sobre las restricciones sanitarias y las libertades), las responsabilidades políticas y las expectativas sobre el futuro personal y del país⁹⁴. A partir de

⁹² Profundizamos sobre el uso de conceptos gradualistas en el Análisis Político del Discurso en Fair (2018).

⁹³ Debido al tamaño de la muestra, las conclusiones son provisorias y se basan en indicios. De todos modos, como señala Arnoux, el análisis de las huellas del discurso da indicios reveladores de ciertas regularidades significativas (Arnoux, 2009: 20-21).

⁹⁴ Estos ejes temáticos condensan las siguientes preguntas del cuestionario: ¿Cómo le resultaron los controles y la necesidad de permiso para circular? ¿Qué piensa de los controles actuales? ¿Qué piensa de lo que hizo el gobierno frente a la pandemia? ¿Siente que el gobierno intervino por demás en su vida y le quitó libertades? ¿Qué

estos ejes, buscamos ahondar en aspectos claves de las subjetividades de los y las ciudadanos/as durante el acontecimiento dislocador del COVID.

Laclau acuñó la noción de “dislocación” como un concepto análogo a lo Real lacaniano, que expresa la existencia de una falla constitutiva que disloca a toda formación (Laclau, 1993: 53). Según Laclau, lo Real tiene presencia histórica “dentro de lo simbólico” y genera “efectos desestructurantes” a nivel social, pero también tiene una dimensión “positiva” que “amplía el área de libertad de los sujetos históricos” y abre la posibilidad de construir, de modo contingente, nuevos significados (Laclau, 1993: 62-63 y ss.). Como lo destaca en un trabajo posterior:

“Sin alguna positivización de lo negativo, sin alguna presencia de lo Real en el campo de la simbolización, tendríamos una condición negativa puramente inerte, sin ningún efecto discursivo y, por lo tanto, sin ninguna influencia histórica posible” (Laclau, 2003b: 187).

En este sentido, la pandemia del Coronavirus puede definirse como un fenómeno *intensamente dislocador* que muestra el encuentro intempestivo con lo Real, quiebra percepciones y significados sedimentados y genera efectos traumáticos, pero también permite constituir nuevas subjetividades políticas a través del orden simbólico.

Representaciones sociales sobre la gestión del Gobierno en la pandemia

En el momento en el que se realizaron las entrevistas (abril-mayo de 2021) gobernaba a nivel nacional el Frente de Todos, coalición política formada por peronistas y kirchneristas, liderada por el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández. En las elecciones presidenciales de octubre de 2019, la dupla del Frente de Todos venció en primera vuelta a la fórmula Macri-Pichetto (Juntos por el Cambio).

Las posiciones de los/las entrevistados frente a la gestión gubernamental de la pandemia durante la segunda ola pueden dividirse en posiciones críticas y de apoyo, con diferentes grados y matices (en términos de más o menos fuertes).

Posiciones críticas de la gestión de Alberto Fernández

Los/las entrevistados con posiciones críticas de la gestión de Alberto Fernández (6 en total sobre 13) pueden ser desglosados a partir de sus argumentaciones. Una parte se centra en las medidas de restricción sanitaria frente a la pandemia. Estos sectores definen a las restricciones a la libre circulación como un “encierro” y relacionan las políticas iniciales que tomó el Gobierno Nacional con medidas desesperadas, excesivas (“fueron demasiado para lo que se

expectativa le generó la elección presidencial de 2019? ¿Cómo se imagina que van a ser los próximos tres años del gobierno de Alberto Fernández? ¿Cómo ve el futuro del país? ¿Quiénes son los responsables de que el futuro sea así? ¿Se puede hacer algo? ¿La política puede cambiar el futuro?

venía”; “tendrían que haber sido las restricciones no tan absolutas”), apresuradas (“para mí fue muy rápido, nos encerraron a todos”), equivocadas (“se manejaron mal”) y desorganizadas (“lo primero que tendrían que haber cerrado era el aeropuerto”):

Yo creo que al principio fueron (medidas) desesperadas, fueron demasiado para lo que se venía, porque recién empezábamos, o sea, nadie estaba preparado para esto y nadie sabía cómo enfrentarlo, pero para mí fue muy rápido, nos encerraron a todos (...) lo primero que tendrían que haber cerrado era el aeropuerto, para que no entre nadie (...). Yo digo que ahora no creo que sea conveniente, sí restringir algunas cosas, pero lo que pasa es que la gente está desesperada. Esto no ayuda, ¿entendés? La gente va a seguir saliendo y haciendo su vida, porque me parece que no, el encierro ahora no sirve (...). Yo creo que tendrían que haber sido las restricciones no tan absolutas, sino medianas, eeeh, o sea, más o menos tranqui [tranquilas], para que todo el mundo pueda laburar por cierto tiempo, y tomar conciencia de qué no debemos hacer (...) ¿Cómo te puedo decir?, manejar el tiempo y el respeto por el otro. No sé, hacerlo de otra forma (Mujer, 58 años, ama de casa).

Yo creo que se manejaron mal al principio, digamos, en hacer la movida que hicieron de cerrar comercios, todo (Hombre, 30 años, comerciante).

Una entrevistada señala que el Gobierno no tuvo éxito para prevenir el avance del COVID, sino que realizó “manotazos de ahogado”:

Yo creo que fueron manotazos de ahogados, eeeh, el tema era prevenir esta segunda ola. No se previno en absoluto y la teníamos encima (...) (Mujer, 58 años, ama de casa).

La metáfora del “manotazo de ahogado”, que denota a un gobierno sin rumbo, se replica en otro entrevistado, que vincula las medidas restrictivas frente al Coronavirus con sus efectos económicos negativos (“quebró la economía”):

(Lo que hizo el gobierno con la pandemia) fue manotazo de ahogado de vicio, quebró la economía de vicio (sic.) (...). Tendríamos que haber seguido generando camas y poder atender. Convivir con el virus, para poder trabajar (Hombre, 53 años, empleado).

Otros, consideran que la gestión del Gobierno Nacional frente al COVID fue “desastrosa”, porque se “apresuró mucho” a “cerrar todo”, pero la pandemia igualmente llegó al país. Además, sostienen que las medidas restrictivas “fundieron” a la gente, ya que limitaron la posibilidad de trabajar e hicieron que cerraran comercios:

Yo pienso que se apresuró mucho el gobierno en querer cerrar todo, en cerrar escuelas, cerrar comercios, evitar que la gente se junte, que salga a la calle a trabajar. Con los sentidos de que la pandemia llegó lo mismo (sic.), digamos, a nuestro país. Desde que se inició (la pandemia), enseguida tomaron las precauciones de cerrar todo y el virus supuestamente llegó mucho más tarde al país y, en ese transcurso, fueron momentos donde me parece que fue

desastroso todo lo que pasó. Se fundió gente, cerraron comercios, la gente la empezó a pasar mal. Y el virus lo tenemos lo mismo (Hombre, 40 años, comerciante).

Un entrevistado, a través de una aserción mitigada (“yo creo”⁹⁵), relaciona la decisión de reiniciar las clases con un gobierno inoperante y desastroso:

Yo creo que esas medidas que tomó el gobierno respecto a la pandemia, el arranque de clases, está totalmente un desastre. Creo que el gobierno no sabe cómo actuar en esos casos y quiere normalizar para que no se note tanto que institucionalmente son un desastre y hacen esos lanzamientos que juega y atenta contra la vida de cada uno, porque no hay un control (Hombre, 36 años, comerciante).

Otro, señala, de un modo gradualmente más asertivo (“Sí o sí tiene que”), que el Gobierno no controló las fronteras a tiempo y dejó ingresar el virus al país. De este modo, actuó de manera tardía e infructuosa (“sí o sí nos íbamos a contagiar”), ya que igualmente en algún momento los controles debían relajarse:

La primera decisión que no se tomó fue cerrar la frontera y dejamos entrar el virus. Llegó tarde. Ahora, de todos modos, por más que nos aislemos como burbuja país, ¿cómo vamos a hacer para funcionar? Sí o sí tienen que entrar barcos, sí o sí tiene que salir la producción. Sí o sí tiene que haber movimiento, o sea, sí o sí nos íbamos a contagiar (Hombre, 53 años, empleado).

Otra entrevistada relaciona al gobierno con la falta de inversión para comprar las vacunas (“el gobierno no ha invertido”), proteger a la gente y reducir las muertes causadas por la pandemia:

Acá lo malo que tenemos nosotros, lo negativo que tenemos, es que no podemos vacunarnos. Eso creo que sería importantísimo, porque ya estaríamos protegidos, con las defensas contra este bicho, y eso nos juega en contra. (No podemos vacunarnos) porque el Gobierno no ha invertido, no ha invertido porque está fundido (...). Yo creo que es fundamental, es fundamental la vacuna ahora para poder evitar que se siga muriendo gente y poder sobrellevar esta pandemia (Mujer, 58 años, ama de casa).

A pesar de estas posiciones críticas de la gestión gubernamental de la pandemia, uno de los entrevistados reconoce, a través de una analogía médica, el contexto desfavorable y constrictivo que le tocó gobernar a Alberto Fernández:

¡Pobre (Alberto) Fernández, que venía con otro plan! Apareció la pandemia y chau. Hubo que tomar decisiones que nunca se las deseo a nadie que tomar. Es lo mismo que estar en un

⁹⁵ El subjetivema en primera persona *creo que* mitiga la expresión de una certidumbre y expresa grados de duda del enunciador frente a su enunciado (Balmayor, 1999: 117; García Negroni y Tordesillas, 2023: 91-92).

hospital y tener un solo frasquito para darle a 5 personas, y tenés que decidir a quién se lo das, y a todos les salva la vida (Hombre, 53 años, empleado).

Gestión de la pandemia y economía

En la mayoría de los/las entrevistados (7 en total), la posición sobre la gestión gubernamental de la pandemia se relaciona con aspectos económicos. Una entrevistada afirma que, en lugar de invertir en las vacunas, el Gobierno derrochó la escasa plata disponible (“el despilfarro de dinero que no hay”) para “regalar dinero” en el IFE⁹⁶ a mucha “gente” que “no trabaja”. Este dinero, además, proviene de los impuestos que pagan los contribuyentes (“son nuestros impuestos”):

Yo espero que se pongan de acuerdo, compren vacunas, que es lo primordial, organicen la vida de la gente, que es la que colabora para que ellos estén ahí, que tomen conciencia de la ciudadanía, porque es la gente que paga los impuestos, es la gente que tiene derecho a su vacuna, y que dejen de regalar el dinero como están haciendo ahora en Buenos Aires, porque esas son vacunas para los demás (...). Hay gente que trabaja y que ha recibido el IFE y que está bien merecido, porque es una ayuda, y hay un 50% o 60% que no trabaja y recibe el IFE, y lo sé de casos, ¿viste? Qué se yo, la señora que contratamos para cuidar a mi mamá, las hijas, las dos hijas, tienen 18 y 19 años y recibieron el IFE, ¿me entendés? Las tres cuotas de IFE. Entonces esa falta de organización en ese sentido, que la gente que habrá recibido, y bueno, el despilfarro de dinero que no hay, y que son nuestros impuestos y que tenemos el derecho a tener esa vacuna (Mujer, 58 años, ama de casa).

A través del uso del “punto de vista evidencial directo” (García Negroni, 2019) (“Lo sé de casos”; “las dos hijas tienen 18 y 19 años y recibieron el IFE”), la entrevistada evoca un marco de discurso previo referido a un registro perceptual que pretende autenticar su dicho como un enunciado verdadero.

Otros, señalan que el Gobierno gasta mucho dinero en planes y asignaciones sociales que ayudan a los que no trabajan y “viven del Estado”, en lugar de ocuparse de quienes realmente trabajan:

El gobierno me parece que no hace nada para que la gente trabaje y no quiera vivir del Estado, sin tantos planes ni asignaciones (Hombre, 40 años, comerciante).

Algunos/as se muestran indignados con los planes y ayudas del gobierno a los pobres, e incluyen un tono (Bajtín, 1982) irónico en sus críticas:

⁹⁶ El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) es un bono de 10.000 pesos que otorgó el gobierno de Alberto Fernández durante la pandemia, que “busca paliar el impacto de la emergencia sanitaria sobre la economía de las familias argentinas más afectadas”. Estaba dirigido a trabajadores/as informales, monotributistas sociales y de categorías A y B, personal doméstico y beneficiarios/as de la Asignación Universal por Hijo o el Plan Progresar de entre 18 y 65 años que no dispusieran de otros ingresos económicos (www.argentina.gob.ar).

¡No puede ser que familias enteras en los barrios pobres estén ganando 100 mil pesos con los planes y yo no llegue a los 40 (mil pesos) laburando! (Hombre, 53 años, empleado).

Ta [Está] lindo que ayude el gobierno, ¿no? pero vos decís eeeh, dentro de, eeeh, te doy un año, un año y medio, y andá devolviéndome la plata; entonces la gente se preocupa por hacer algo (Mujer, 50 años, ama de casa y modista).

De este modo, observamos que gran parte de las críticas al accionar del Gobierno Nacional se centra en el pago de ayudas sociales a los sectores más vulnerables de la población, lo que incentivaría la vagancia (“No hace nada para que la gente trabaje”) con el dinero que aportan los/las contribuyentes (“Andá devolviéndome la plata”).

Como señala Dubet, actualmente asistimos a un régimen de las “desigualdades solitarias”. La “individualización de las desigualdades” acentúa las comparaciones, sobre todo las más cercanas, y genera “una extrema sensibilidad a las desigualdades ‘finas’ que acentúa la frustración, los celos y el resentimiento” (Dubet, 2023: 126). En ese marco:

“La comparación con los más cercanos acentúa los sentimientos de injusticia fiscal mucho más que la equidad ‘vertical’ que compara a ricos y pobres: me frustran más los ‘privilegios’ de quienes tengo cerca, que la posible inequidad de los impuestos según los ingresos” (Dubet, 2023: 126).

La consecuencia de esta lógica es una ruptura de los lazos de solidaridad social, una exacerbación de la competencia y una especie de “victimología general” (Dubet, 2023: 127) en la que todos se sienten víctimas de un trato injusto por parte del Estado, que favorecería a ciertos grupos o individuos cercanos, y no a los que realmente lo “merecen”. En lugar de dirigir la indignación, la ira y la frustración a las elites o clases dominantes con poder económico y reclamar que el Estado realice una redistribución del ingreso a través de impuestos progresivos a los más ricos, expresan celos y resentimiento en los ciudadanos pobres o trabajadores desempleados que son asistidos por el Estado y supuestamente tendrían “privilegios” sin merecerlos.

Pandemia, planes sociales y corrupción

En el marco de la crítica a “los planes”, una parte de los/las entrevistados críticos se centran en el accionar específico del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Una de las entrevistadas, ama de casa de 50 años de la provincia de Misiones, afirma, indignada, que los planes sociales generaron “vagos” y “haraganes” y lo articula al despilfarro de los recursos con la plata del bolsillo de “los que trabajan” y pagan sus impuestos (“¿Y de dónde sacó Cristina esas cosas para regalarle? del sueldo de los que trabajan, de impuestos”). De este modo, la

entrevistada percibe que ella está manteniendo con el fruto de su trabajo y el pago de impuestos a “vagos” que no quieren trabajar. El argumento (de base neoliberal) concluye en que una parte del dinero que los contribuyentes (la gente) pagan de sus impuestos para regalárselo a los pobres-vagos, lo robaba Cristina Kirchner (“ponele que le daba 500 pesos, y ella ¿cuánto se guardaba en el bolsillo?”) y destaca una supuesta impunidad (“Y hay pruebas, y tampoco le hacen nada”):

Dicen que Cristina (Kirchner) ayudó mucho a (los pobres) ¿Que ayudó a los pobres? ¡Crió haraganes y vagos! ¡A montones! Porque acá, en un pueblo chico, todos sabemos que le da a fulanito y que menganito (...), porque encima (un vecino) orgulloso dice: ‘este me regaló Cristina’ y yo le digo: ¿qué hizo usted con todo lo que le regaló Cristina? Está ahí (sic) ¿Y de dónde sacó Cristina esas cosas para regalarle? ¡Del sueldo de los que trabajan, de impuestos! ¡No salió del bolsillo de ellos! Dice (mi vecino) que ‘ay no, Cristina nos regalaba la plata’ ¡Sí! ¡Sí! Sí, ella le daba, ponele que le daba 500 pesos, y ella ¿cuánto se guardaba en el bolsillo? ¡Y hay pruebas, y tampoco le hacen nada! Ya pasó otro gobierno, y va pasar todo el gobierno (de Alberto), y no le van a hacer nada (Mujer, 50 años, ama de casa y modista).

La entrevistada construye un Ellos que articula al gobierno de Cristina Kirchner con los “vagos” que reciben dinero regalado del Estado, frente a un Nosotros implícito de ‘los contribuyentes’ que trabajan, cobran un sueldo y pagan sus impuestos para mantenerlos. A través del uso polifónico de la intertextualidad, como “instancia de reformulación de discursos ya proferidos en otro lugar” (Plantin, 2012: 59), y el énfasis enunciativo de la exclamación, podemos observar aquí tanto una estigmatización estereotípica de los pobres como “vagos” y “haraganes” que supuestamente “no quieren trabajar” (como si hubiera trabajo e iguales oportunidades para todos/as), como una indignación moral con Cristina Kirchner, quien “regalaría” la plata de los que sí trabajan y pagan sus impuestos (como si los/las pobres no lo hicieran) para financiarlos, además de “guardarse en el bolsillo” el resto. La lógica individualista de comparación con los seres cercanos deja de lado la crítica a los empresarios ricos y privilegiados que evaden o eluden el pago de impuestos al fisco por cifras multimillonarias y son quienes más deberían contribuir económicamente (además de ser copartícipes necesarios de los cohechos público-privados).

El discurso contra el pago de impuestos para asistencialismo social, la estigmatización de los pobres y la crítica al Estado y a los políticos (la “casta”) que le “roban” a los contribuyentes que “trabajan” y se “esfuerzan”, se vinculan con las ideas políticas de la escuela libertaria-anarcocapitalista de Murray Rothbard (2011, 2013). Para Rothbard, los impuestos son “robos” y el Estado es una “mafia” que usa la “violencia coercitiva” para recaudarlos (Rothbard, 2013: 41-42 y ss.). El economista ultra-neoliberal también se opone al “Estado asistencialista”. Según el estadounidense, el beneficiario de la asistencia social es un “irresponsable” que “vive ociosamente a expensas del Estado” y de “lo que produce el resto de la sociedad” (Rothbard, 2013: 190, 194), un Estado “depredador” que a su vez se basa en la recaudación de impuestos de los contribuyentes que trabajan. Desde esta concepción anarco-capitalista apoya la “total abolición del asistencialismo gubernamental”, la completa derogación de las transferencias de recursos públicos y cualquier medida redistributiva, igualitarista o compensadora de ayuda

social a los/las más desamparados⁹⁷ (Rothbard, 2013: 198 y ss.).

También podemos en esta entrevistada una colonización ideológica del discurso eficientista de la “reducción de costos”, desde una concepción economicista e instrumental de la gestión pública. Ello implica achicar los gastos del gobierno según una estricta lógica (neoliberal) orientada al “cliente”, de modo tal que el ciudadano/a deviene en un individuo-consumidor que debería juzgar al gobierno según un único criterio válido de eficiencia mercantil (Guerrero, 2019: 9-10 y ss.). La adopción de esta racionalidad económica individual y egoísta de mercado deja de lado la defensa de valores colectivos como la solidaridad, la justicia social y la ética comunitaria vinculada al bien común y naturaliza la rivalidad social entre los/las trabajadores (García Delgado, 2003; López, 2005). Además, la filosofía hiper-individualista y meritocrática destruye el concepto de responsabilidad colectiva y culpa a las víctimas por su condición de pobreza, precarización o desempleo (Bourdieu, 1999: 19).

Otro entrevistado menciona la articulación negativa entre el gobierno de Cristina Kirchner y el exceso de planes sociales (“Cuando estaba el gobierno de Cristina había muchos planes y yo no estaba de acuerdo”), aunque realiza una crítica más general a la corrupción y los “negocios” del gobierno, al que adjetiva en términos morales como “un asco”:

Y pasa que después uno lo que termina escuchando es que son todos negocios, negocios allá arriba, juntemos para la (suspira), más o menos lo que es Cristina (...).

No hay chance, estaba aceitado el negocio de Cristina y se hace a un lado porque se muere el viejo (refiere a Néstor Kirchner) y el negocio seguía funcionando, seguían llegando los bolsos (con dinero), y no tenían lugar ni siquiera dónde ponerlo, no tenían ni tiempo para contarlos, ¡ni lo pesaban!⁹⁸ ¡Es todo un asco! (Hombre, 48 años, empleado administrativo).

El desplazamiento metonímico de la parte por el todo (“son todos negocios”, “es todo un asco”) refuerza hiperbólicamente la sensación de bronca e indignación generalizada con el kirchnerismo.

Otras críticas se centran en el gobierno de Alberto Fernández. Destacan el escándalo de las llamadas ‘vacunas VIP’ para sectores cercanos al Gobierno (La Cámpora, el Movimiento Evita), sostienen que estos sectores “manejan” las vacunas y que se vacunaron antes que el resto⁹⁹. En ese marco, apelan a metáforas como “atropello”, expresan emociones “disfóricas” (Vitale, 2021: 80) (“hay cosas que me duelen”, “terrible”) o caracterizan peyorativamente al gobierno nacional como una “mafia” y a su accionar como una “burla” al ciudadano:

Como (la agrupación) La Cámpora, que dice que son 600 vacunas que se pusieron las vip (sic.), esas, son como 600 vacunas, y la que maneja las vacunas es La Cámpora. Mirá, yo no

⁹⁷ El economista (y actual Presidente) Javier Milei difundió estas ideas políticas ultra-neoliberales en la Argentina en los últimos años, primero desde programas masivos de televisión y luego también en las redes digitales.

⁹⁸ El entrevistado hace referencia al escándalo de corrupción del ex Secretario de Obras Públicas del gobierno kirchnerista José López del año 2016, condenado por enriquecimiento ilícito.

⁹⁹ En febrero de 2021 se difundió públicamente una denuncia sobre la existencia de un sistema de vacunación exclusivo (“VIP”) contra el COVID-19 para setenta funcionarios/as de primera línea y cercanos al gobierno en el Ministerio de Salud de la Nación, en un contexto de escasez de vacunas. El episodio irregular derivó en la renuncia del Ministro de Salud Ginés González García (*La Nación*, 23/02/2021).

sé, no tengo datos fehacientes, porque uno no sabe la verdad de todo, pero bueno, es lo que uno escucha. Obviamente no soy kirchnerista, no soy macrista, soy argentina. Soy argentina más que nada y hay cosas que me duelen, como esto (...). Es un atropello, es una burla lo que han hecho ellos de vacunarse todos, de vacunarse ellos antes que todos, es un atropello al ciudadano (Mujer, 58 años, ama de casa).

Hay también una mafia en todo esto (de las vacunas), terrible. Porque no puede ser que del Movimiento Evita estén vacunados (jóvenes) de 18 años y hay viejitos que todavía no estén vacunados (Mujer, 50 años, ama de casa y modista).

De este modo, construyen una frontera de exclusión frente al gobierno de Alberto y sus agrupaciones aliadas, al que articulan equivalencialmente con el atropello al ciudadano, la burla y la mafia. Estas adjetivaciones fuertemente descalificantes muestran una sensación de indignación general con el Gobierno.

Impacto de la pandemia en la situación económica y social

En el marco de los efectos socioeconómicos regresivos causados por las medidas de restricción sanitaria de la pandemia, las principales críticas a la gestión del Frente de Todos refieren a la situación económica y social. Varios entrevistados/as cuestionan los elevados niveles de inflación (“las cosas cuestan mucho más”, “la inflación es cada vez más alta”, “ola de aumentos”) y sus efectos regresivos (“desvaloriza nuestro dinero”, “no alcanza el dinero”):

Si hoy se están haciendo mal las cosas, yo creo que es en mayor parte en la economía (Hombre, 36 años, comerciante).

Antes uno entraba a un trabajo y seguías trabajando y te pagaban dignamente lo que valías. Ahora es como que no sé, uno gana, pero no alcanza el dinero, o es la plata que no sirve, no sé. Estamos muy manejados por los dólares y bueno, entonces se desvaloriza nuestro dinero (...). Como que yo siento que cada año alcanza menos la plata, porque las cosas cuestan mucho más que hace dos o tres meses atrás (Mujer, 59 años, jubilada).

Ahora es como que está todo muy, la inflación es cada vez más alta y tenés que tener alto sueldo para poder sobrevivir (Mujer, 46 años, empleada doméstica).

La ola de aumentos e inflación está, sabemos, al día de hoy, también (Hombre, 40 años, comerciante).

También mencionan, de un modo impersonal (“hay”, “ha crecido”), el incremento de la pobreza¹⁰⁰ y la falta de puestos de trabajo:

¹⁰⁰ La pobreza por hogares aumentó de 25,9% en el segundo semestre de 2019 a 30,4% en el primer semestre de 2020 y 31,2% en el primer semestre de 2021. La pobreza medida por personas creció de 35,5% a 40,9% y bajó

Hay muchos pobres. Estos últimos años ha crecido mucho la pobreza (Mujer, 46 años, empleada doméstica).

Para bajar la pobreza hay que tratar de generar empleo, más empleo, y me parece que no lo están generando (Hombre, 40 años, comerciante).

Este último entrevistado, comerciante de la provincia de Córdoba, menciona, además, el incremento general de la inseguridad (“El país está muy difícil. Ahora justamente vemos la delincuencia que hay, los robos que hay. Es una cosa impresionante¹⁰¹”) y el “ataque” constante del Gobierno al “campo”¹⁰² (“Ataca mucho al campo, el campo es el generador de todo en este país”), al que define genéricamente.

Posiciones de apoyo a la gestión de la pandemia del gobierno de Alberto Fernández

Otro conjunto de entrevistados/as (5 en total) respaldan, en general, las restricciones sanitarias que aplicó el gobierno de Alberto Fernández frente a la pandemia. A algunos/as le pareció bien las restricciones a la libre circulación para evitar que hubiere más muertes:

A mí al principio me parece que hizo bien (el gobierno) en parar, que no salieran tanto porque, si no, yo creo que íbamos a estar mucho peor de lo que estamos. Si nos hubieran dejado a todos andar, ir y venir, yo creo iba a ver más gente fallecida, me parece a mí. A mí, no sé, me parece eso, que ellos han tomado buena determinación en hacer restricciones, aunque a muchos les ha enojado todo eso. Les ha parecido muy mal, pero a otros no. A mí me pareció bien (Mujer, 59 años, jubilada).

Nunca me molestaron los controles (del gobierno por la pandemia), siempre me parecieron que son para bien (Hombre, 45 años, comerciante).

La decisión del Gobierno de “cerrar todo” de manera precavida ante la imprevisible llegada del COVID ayudó a organizar el sistema sanitario y las restricciones deben continuar:

Para mí (el gobierno) lo viene manejando bien, lo viene manejando bien desde el principio. Aunque se les juzgó que había tomado la decisión muy temprana de cerrar todo, me parece que no era para juzgar, porque nadie sabía qué iba a pasar. O sea, si lo hubiéramos sabido, todo el mundo, las cosas no hubiesen sucedido como sucedieron, ¿no? Porque, en principio, ese tiempo que se cerró todo antes le dio tiempo al gobierno de organizar un poco la cuestión de

levemente a 40,6%, en el mismo período. La indigencia, por su parte, aumentó del 5,7% a 8,1% y 8,2% medido por hogares y de 8% a 10,5 y 10,7%, medido por personas (INDEC, 2021).

¹⁰¹ El entrevistado, de la provincia de Córdoba, señala que “el país está muy difícil”, pero no puede deducirse que esta sea una crítica específica al gobierno de Alberto Fernández. Hay una subdimensión regional y local de las identidades que tiene su propia especificidad y fue trabajada en la investigación más amplia del proyecto, aunque en este artículo no la hemos abordado.

¹⁰² Con el apoyo genérico al “campo” el enunciador parece hacer referencia implícita al fuerte conflicto del 2020 entre el Gobierno Nacional y la cerealera Vicentín, que derivó en una judicialización de la política y concluyó en el intento fallido de expropiación estatal del grupo económico. Obsérvese que también replica indirectamente una narrativa o relato mítico (Genette, 1998) parcialmente sedimentado que vincula metonímicamente al “campo” como totalidad con el motor del progreso de la Argentina (“El campo es el generador de todo en este país”).

(la) salud, como para cuando viniera la mayor cantidad de infectados. Y ahora también estoy de acuerdo que las restricciones tienen que seguir (Mujer, 49 años, empleada administrativa).

Otro entrevistado enfatiza su respaldo a la decisión gubernamental de “cerrar todo” a través de la forma lingüística “totalmente”, que refuerza gradualmente la aserción (García Negroni y Tordesillas, 2023: 87). Señala que las restricciones, aunque pudieran generar rechazo a nivel personal, eran necesarias para evitar el descontrol del sistema sanitario público, priorizar el cuidado de la salud de la población y salvar vidas, en un contexto de pandemia:

Yo de mi parte estoy de acuerdo, por ejemplo, con el tema de cerrar todo, totalmente. Eso, al principio, a nadie le gustó, y yo me incluyo, pero después entendí que, si no hacían eso, iba a ser peor. También miro la parte de, o sea, miro del lado de ellos, me pongo en el lado de ellos como gobierno ¿No? Vos sos gobernante, tenés una pandemia ¿Qué hacemos? ¿Cerramos o no cerramos? ¿Eh? Si cerramos, salvamos parte de la población. Si no cerramos, se nos descontrola el sistema sanitario y ahí sí que estamos jodidos. Vos al restringir, al cerrar, al poner controles y todo eso, estás, les guste o no les guste a la gente, salvando vidas. Hay gente que no le importa el otro. Por eso no les gusta, viste, que los encierren. No les gusta que (...) no, no piensan en el otro. Ese es el tema. La salud esta primero. Si vos no tenés salud, chau. Es lo primero que tenés que tener (Hombre, 50 años, jubilado).

Este entrevistado destaca que hay gente egoísta que “no piensa en el otro” y critica las restricciones, en lugar de priorizar el cuidado de la salud y la vida de las personas. Además, apoya el manejo general del Gobierno frente a la pandemia en relación a escuchar a los científicos, las prioridades de vacunación y las clases virtuales:

Yo pienso que, o sea, vos estás en situación de pandemia, tenés que regirte por un científico. Alberto Fernández creo que tiene doctorado de abogacía, no sé, o algo así ¿Qué tiene que ver con lo científico, o sea, química y todas esas cosas? No tiene nada que ver. O sea que el tipo no entiende de esas cosas, por eso obviamente tiene que regirse por lo que le dicen los científicos.

Para mí, la docencia (el gobierno la manejó) excelente. A mí me encantó, porque le buscaron la vuelta. Le buscaron la vuelta hasta que le encontraron el punto y dijeron vamos a hacerlo virtual (Hombre, 50 años, jubilado).

Sin embargo, en una parte de estos/as entrevistados también encontramos críticas puntuales al gobierno de Alberto Fernández. Una entrevistada señala que las restricciones iniciales deberían haber sido más estrictas:

Por eso, digo yo, por eso me pareció perfecta las restricciones (que hubo) acá, y si hubieran sido más estrictas, yo creo que hubiéramos estado mejor, porque ahora se han desatado un poco cuando empezó agosto, junio (de 2020), qué se yo (Mujer, 59 años, jubilada).

Otro, apoya en general los controles iniciales, pero considera, *a posteriori* (“con el diario del lunes”), que las fronteras podrían haberse cerrado antes y el confinamiento inicial podría haber sido más “flexible”, ya que había pocos casos en ese momento:

A ver, quiero dejar en claro que siempre, quiero dejar en claro que mi opinión es ‘con el diario del lunes’, que el día a día todo es mucho más complicado; y una cosa es tomar una

decisión hoy sobre cosas que van a pasar mañana, que hablando hoy sobre las cosas que pasaron ayer. Pero lo que veo es que, al principio se subestimó un poco lo de esta pandemia, me parece que se tenía que haber cerrado, el tema de las fronteras se tenía que haber cerrado un poco antes; y lo que me pareció que se manejó un poco mal fue lo del confinamiento al principio. Que había muy pocos casos y no había la necesidad de encerrar tanto a la gente durante tanto tiempo. Se podía haber manejado distinto, más flexible (Hombre, 45 años, comerciante).

Un tercer entrevistado sostiene que faltó “más organización” del Gobierno en la distribución de las vacunas:

Y (al gobierno le) falta organización, falta más organización. Profundizar más y ser muy muy estricto con el tema de la distribución, por ejemplo, de la vacuna (Hombre, 50 años, jubilado, La Plata).

Pandemia y responsabilidades de la oposición

Un segundo aspecto que observamos en los/las entrevistados con una posición positiva de la gestión de la pandemia del Gobierno Nacional, es que la mayoría critican genéricamente el accionar de las fuerzas de oposición. Señalan, mediante una contradestinación indirecta, que “politizó todo”, se dedicó a “hacer campaña política” y solo pretendía echar “leña al fuego”, en lugar de ayudar a “solucionar los problemas” que generó la pandemia:

(Los de la oposición se) peleaban contra todo esto y eso es lo que no me gusta, porque están haciendo cosas que no deben hacer con todo lo que estamos viviendo. Yo creo que es re difícil manejar a un país alrededor de todo esto. Y encima que los demás han echado leña al fuego, en vez de ayudar a solucionar los problemas. No están haciendo otras cosas (Mujer, 59 años, jubilada).

(La oposición) politizó todo, y lo sigue haciendo. No ayudó para nada. No ayudó ni siquiera para ayudarlo (al gobierno) a guiarse (...), o si ellos tenían algo, que la oposición sabía más (sic.), no lo puso en común. Solo fueron críticas y buscar la manera de, la parte negativa, absolutamente negativa (Hombre, 60 años, comerciante).

Es lamentable que (los de la oposición) tengan que utilizar la salud de la gente para hacer campaña política. Es lamentable, lamentable, porque se está usando algo que no hay, no hay. No tiene lógica, no tiene nada, ni un sentido de nada (Mujer, 49, empleada administrativa).

Esta última entrevistada menciona el papel negativo que tuvo la falta de apoyo de las fuerzas de oposición y los “ataques constantes” a los referentes del Gobierno Nacional en la gestión del COVID:

Todo hubiese funcionado mejor si hubiese habido como más apoyo, ¿no?, (ya) que el gobierno, además de luchar contra una pandemia, tiene que recibir los ataques constantes de la oposición, que está, no sé, perdiendo el tiempo poniendo energía ahí, en su campaña, en vez de apoyar. Porque, de hecho, Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, somos cantidad, o sea que

es la provincia que más apoyo necesita, y bueno, tanto el Gobernador [Axel Kicillof], como el Presidente, han recibido ataques, ataques, ataques constantes (...) (Mujer, 49, empleada administrativa).

Otro entrevistado destaca el contexto excepcional en el que le tocó gobernar a Alberto, producto de una pandemia inédita, sumado a lo que define con la metáfora de la “devastación” macrista:

Estuvimos en una situación crítica, eh, una pandemia, que nunca, por lo menos yo, no la vi, no la conocí; y encima de eso, venir de un gobierno anterior que dejó un país totalmente devastado (Hombre, 60 años, comerciante).

En otros casos, refieren a las condiciones del país en el momento en que comenzó la pandemia, que potenció problemas preexistentes. De allí que el gobierno “hizo lo que se pudo”:

A ver, lo que pienso es que se hizo, se hizo lo que se pudo. Por ejemplo, no somos un país que esté apto para tener un confinamiento muy prolongado. Lamentablemente, no tenemos las condiciones dadas como para hacerlo (...). Digamos, nosotros ya veníamos con muchos problemas a nivel país. Bueno, y esto, esto acrecienta todo, ensalsa todo los problemas que teníamos, encrudece mucho más, me parece. Y bueno, me parece que nos va a costar muchísimo más levantar todo esto que deja la pandemia (Hombre, 45 años, comerciante).

Este ciudadano relaciona el accionar de la oposición con la “mezquindad política” y el “oportunismo”, pero luego señala que la propia política en Argentina es “muy mezquina”:

Donde puede aflorar la mezquindad política aflora, y con ganas, pero eso es lo que pienso siempre de toda oposición. Pienso que la política en nuestro país es muy mezquina, eso es lo que pienso. Pienso que el oportunismo lo usan todo el tiempo (...). Eso es lo que hace la oposición nuestra.

De todos modos, también señala un mayor grado de responsabilidad por parte del Gobierno:

Obviamente, cada uno tiene su grado de responsabilidad de que las cosas salgan como salgan. Obviamente, en todos los ámbitos cada uno tiene sus peros, pero yo siempre pienso que el que tiene mayor responsabilidad es el que gobierna, ¡siempre! (Hombre, 45 años, comerciante).

Posiciones equidistantes

Por último, observamos que algunos entrevistados/as muestran posiciones más complejas y equidistantes, que oscilan entre el apoyo y la crítica. En esta línea, una de las entrevistadas respalda el manejo presidencial de la pandemia en relación a que haya clases virtuales (“Para

mí, el Presidente tomó una buena decisión en cortar el tema de los colegios”) y la implementación de la IFE (“ayudó a mucha gente”). Pero señala que la vacunación avanza a pasos lentos en comparación con Estados Unidos (“Yo miro por la tele, por ejemplo Miami, que están prácticamente todos vacunados; y acá, la verdad que no sé. No se logra ni vacunar a todos los esenciales, por ejemplo”) (Mujer, 33 años, ama de casa).

Otra entrevistada apoya las medidas preventivas de restricción sanitaria (“Pienso que hizo bien en tomar la cuarentena antes”), las prioridades del plan de vacunación (“Coincido, digamos, con el Presidente, de que primero se vacune a la gente mayor y los que corren riesgo”) y el pago del IFE (“Lo que hizo bueno es eso de la ayuda con el IFE”). Sin embargo, también expresa críticas al avance lento del plan de vacunación (“Mi papá va a cumplir 72 años en junio y él está anotado para que le pongan la vacuna y todavía no se la pusieron”) (Mujer, 46 años, ama de casa).

Imagen política de Alberto y Cristina Fernández

En el marco de la pandemia y su impacto sanitario, económico y social, resulta interesante analizar la imagen sobre los/las principales referentes nacionales del gobierno del Frente de Todos. En la pregunta del cuestionario acerca de las expectativas sobre Alberto Fernández en las elecciones presidenciales de 2019, ocho entrevistados/as tenían una expectativa positiva o lo habían votado, frente a cinco que no lo apoyaron o tenían una expectativa negativa. En cuanto a la imagen actual (en el momento de las entrevistas), en una parte de los/las entrevistados/as observamos un fuerte desencanto con el Presidente (“No me representa”, “Me da vergüenza”), ya sea por los actos de corrupción, la “soberbia”, la falta de liderazgo, la inacción frente al COVID o la supuesta ausencia de diálogo con la oposición:

(Alberto) no me representa, me da vergüenza, me da vergüenza el accionar de él, la soberbia que tiene. No es una persona que tiene, eeeh, ¿cómo te puedo decir?, no lo siento que dialogue, me parece que es absoluto ¿Vos sabés una cosa? Yo te digo una cosa, yo a Alberto lo apreciaba, a mí me encantaba Alberto Fernández. Me encantaba porque era tan coherente, tan claro en su forma de ser, eeeh ¿cómo te puedo decir?, lo he visto y lo he escuchado mucho, y me gustaba porque era preciso, era sencillo, normal (...). Ahora (estoy) totalmente defraudada (Mujer, 58 años, ama de casa).

Esta entrevistada, aunque afirma que no lo votó en las elecciones presidenciales de 2019, tenía una imagen positiva de Alberto (“Lo apreciaba”, “me encantaba”, “era tan coherente, tan claro”), pero en 2021 (deixis temporal del “ahora” del enunciado) siente una desilusión total con el Presidente (“Totalmente defraudada”), ya que esperaba que iba a revertir la imagen negativa del kirchnerismo y de Cristina Kirchner (asociados implícitamente a la corrupción) para poner un “manto de honradez”¹⁰³:

¹⁰³ Otros entrevistados críticos señalan que Alberto no debía haberse aliado con Cristina Fernández, porque “no está bien vista” (empleado administrativo, 48 años), o catalogan al Presidente como “un títere de Cristina” (empleado, 53 años). La metáfora del títere se expandió en esos tiempos con el juego de palabras de “Albertíttere”.

Porque ¿vos sabés una cosa? Yo le tenía fe (a Alberto), sentía que venía a revertir esa imagen del kirchnerismo que tenían (desde) hace tantos años anteriores, y que él iba a poner un manto de honradez, de buena gente, de eeeeh, ¿cómo te puedo decir? (...) que no dejó Cristina (Mujer, 58 años, ama de casa).

Otra entrevistada, que tampoco lo votó en 2019, también le tenía “fe” a Alberto Fernández. Esperaba que, al llegar al Gobierno, se alejara de Cristina Kirchner (refiere a la metáfora de “dar una patada”). En cambio, señala que el Presidente no toma “decisiones propias” y que “la jefa” real es “ella” (por la Vicepresidenta):

Y yo le tenía fe a este (Alberto) Fernández ¡eh! No le voté, pero yo le tenía fe a él, porque se veía bien. Yo dije: él va (a) entrar en el gobierno y le va dar una patada a ella (a Cristina Kirchner). Porque él necesitaba de Cristina para subir ahí. Él solo no iba llegar. Él necesitaba de Cristina para dar el plan (sic.), pero yo tenía la esperanza que él llegaba y le pateaba. No, ella (por Cristina) está (como la) jefa. Ella le tomó el punto. Él no tiene decisión propia (...) (Mujer, 50 años, ama de casa y modista).

El empleo de la negación (“No tiene decisión propia”) cumple una función de desautorizar o descalificar el enunciado (García Negroni y Zoppi Fontana, 1992: 26). En este caso, la entrevistada descalifica la capacidad decisoria y la autoridad presidencial, que queda subordinada a la verdadera “jefa” (Cristina Kirchner).

Otro, expresa que nunca creyó en las promesas del gobierno. Ante la pregunta sobre qué expectativa le generó la elección presidencial de 2019, afirma que:

La verdad, te diría que ninguna. Porque, como (que) pensaba que venían a hacer lo que hicieron siempre, nada. Como que no le creía al gobierno. A todo lo que prometieron, no le creía nada (Hombre, 40 años, comerciante).

En este caso, no hay desilusión con el gobierno de Alberto, ya que nunca hubo ninguna ilusión (“Venían a hacer lo que hicieron siempre”, “No le creía nada”).

En contraste, otra entrevistada simboliza como un “alivio” la elección presidencial de Alberto, frente a lo que define como el “atropello al pueblo” y la “impunidad tremenda” del gobierno de Macri. Sin embargo, sostiene que quedó a la expectativa (“Esperando a ver qué pasaba”) con el accionar de Cristina Kirchner:

Sentí como alivio de que, por lo menos, no sabía si iba a hacer todo lo que me parecía que estuviera bien, pero no iba a haber tanto atropello, tanto atropello al pueblo, que fue lo que sentí en el gobierno anterior. Un atropello constante y una impunidad tremenda (...). Igual, siempre esperando ver, ¿no? con esa cosa de que Cristina (está) como vice y que algunos decían ‘no la van a dejar opinar’. Esperando a ver qué pasaba. Igual, es lo mismo que ahora, ¿no? (Mujer, 49, empleada administrativa).

Esta entrevistada valora positivamente a la Vicepresidenta. Destaca su capacidad de liderazgo (“Con Cristina me hubiese relajado más, porque sé que la iba a manejar de alguna manera”). En cambio, como vimos, otros entrevistados/as expresan una visión negativa de Cristina Kirchner, a quien relacionan con corrupción durante su gobierno y aumento del gasto público en planes sociales para los que ‘no trabajan’. El resto de los/las entrevistados (9 sobre 13) no hizo referencias a la figura de la Vicepresidenta.

¿Crisis de representatividad política?

En los discursos de algunos/as entrevistados encontramos una sensación de esperanza inicial y luego desilusión con el Presidente. Estas referencias a la fe y esperanza en Alberto (“Yo le tenía fe”, “Yo a Alberto lo apreciaba”, “A mí Alberto Fernández me encantaba”), parecen haber mutado a una imagen de vergüenza, falta de representatividad, desengaño o defraudación (“No me representa”, “Me da vergüenza el accionar de él”, estoy “totalmente defraudada”).

Los motivos se apoyan desde la desilusión por no haberse alejado de Cristina Kirchner y del kirchnerismo tras asumir la presidencia y por no haber combatido la corrupción (en sectores que no lo habían apoyado en 2019), a una desilusión por los problemas de gestión de la pandemia y sus efectos económico-sociales regresivos, que sería transversal a la posición ideológica.

Pero además, encontramos en una parte importante de los/las entrevistados críticas más generales a la política, “los políticos” y las instituciones representativas. Por ejemplo, uno de los entrevistados destaca, a través de la metáfora del “ataque” a la economía, el fuerte impacto negativo que tuvo la pandemia sobre su situación económica en particular:

Fue una pérdida total de trabajo. La parte económica fue el desestabilizador de todas las emociones que tuvimos, porque si bien uno la carga emocional lo puede llegar a manejar, en conjunto con la carga económica te puede llevar a destruir, si no lo sabes manejar (...). Y esto fue un ataque a la economía. La pasamos mal, porque una cosa es tener en la mente que no vas a recibir esa plata y otra cosa es vivirlo en el día a día que no tenés esa plata. Son gustos que no te podés dar, son cosas que no podés pagar, cosas que vos venías manejando y que ya no podés manejar (Hombre, 36 años, comerciante).

El entrevistado menciona en particular el aumento en los precios de los productos y la paralización económica (“la economía no se está moviendo”):

Cuando te empezás a mover ves el (aumento en el precio del) combustible, alimentos, ropa, farmacia y todas esas cosas, te das cuenta que estás parado en una situación bastante crítica.

No hay economía, la economía no se está moviendo, realmente no veo a quién puede haber ido bien con esta pandemia.

En el marco de la crisis económica, cuestiona el accionar del gobierno de Alberto Fernández (al que parece haber apoyado en 2019), al afirmar que “nos está yendo mal”. Pero también incluye a los diferentes gobiernos anteriores como responsables de la crisis:

Yo creo que todo como hoy llegamos a la situación que llegamos, es culpa de los gobiernos que tuvimos. No hay duda, fue una mezcla de todos los gobiernos.

Sin embargo, lo más interesante es que expresa una pérdida de “credibilidad política” y de “credibilidad institucional” más amplia. Afirma que muchas instituciones le “fallaron” y que perdió la “confianza”, se manifiesta muy “desanimado” y “descreído de todo”:

(Estoy) realmente desanimado, totalmente, es decir, perdí cosas que yo nunca pensé que iba a perder, como la credibilidad política, la credibilidad institucional. Me di cuenta que muchas instituciones nos fallaron como ciudadanos, como argentinos, y creo que va a costar reconstruir la confianza. Uno no la ve, porque está descreído de todo. Ahora se mostraron muchas acefalías (sic.) que antes no lo hubiéramos notado en un tiempo normal, pero ahora sí. Por eso realmente nos fallaron, fueron vidas que costaron, así que el ánimo lo veo, de mi parte, muy poco ánimo.

El “desánimo” y la desilusión (“realmente nos fallaron”), la falta de “credibilidad institucional” y el “dolor” que manifiesta este entrevistado excede a la situación económica personal o familiar y se desplaza a un descreimiento general (“uno está descreído de todo”) por las fallas de funcionamiento que tuvieron las instituciones y las políticas públicas para resolver los problemas de la gente:

En mi familia, gracias a Dios, no hubo (fallecidos por el COVID), pero sí me dolió mucho, porque tengo mucha empatía hacia la sociedad, y cómo la gente perdió la vida, por un lado, por mala información, por descuidos profesionales; y también los médicos, que dejaron la vida, por otro, y cómo todo sigue funcionando igual, eso fue lo que más me chocó (...). Como en ese fallo que tuvieron las instituciones hacia vos, o las políticas públicas hacia vos, y eso te costó la vida y todo sigue funcionando igual. Quedó una familia destruida y, por más que se llore o cambien institucionalmente las cosas, esa vida no se recupera. Y obviamente ver la cantidad de contagiados, o las secuelas que le quedó a mucha gente, que no se habla mucho.

La crítica a la gestión de la pandemia por la cantidad de contagiados y la pérdida irrecuperable de muchas vidas se extiende a una “falla institucional” más amplia, una falta general de preparación, organización y control por parte de las instituciones:

Cuando me tocó moverme para hacer algunas actividades, los permisos fueron un quilombo sacarlos, tema que las instituciones no estaban preparadas para llevar adelante ese tipo de labor, o sea, no estábamos a la altura de la situación. Si yo quería ir al centro, había muchas formas de llegar al centro, no había una única manera de hacerlo. Yo creo que ahí hubo una falla institucional y nos dio a entender que no estábamos a la altura de hacer ese tipo de controles (Hombre, 36 años, comerciante).

Estos testimonios muestran indicios de una crisis de representatividad política, en el sentido de una pérdida general de confianza o credibilidad en la dirigencia política, las instituciones representativas y/o en la palabra política¹⁰⁴.

Restricciones sanitarias y libertades

Algunos entrevistados/as (3 en total) señalan, desde una posición crítica, que el Gobierno Nacional les quitó libertades con sus medidas. Uno de los entrevistados se muestra indignado, ya que el Gobierno con las restricciones sanitarias “le quitó libertad” a mucha gente, libertad que vincula con la libertad de viajar, estar con familiares y trabajar. Al mismo tiempo, permitió el amontonamiento y manifestaciones sociales en las ciudades grandes:

(Nos quitó) la libertad de viajar, de estar con los familiares que uno quiere. Eso intervino un montón. Porque, bueno (el gobierno) le quitó libertad a un montón de gente y después permitió cosas, por otro lado, que indignan. Acá, en el pueblo, no lo vemos, pero vemos ciudades como Buenos Aires, Rosario, casi todo lo que es ciudades grandes del país, que tienen amontonamiento de gente terrible, manifestaciones (...). Y eso no lo controla, se le va de las manos. Entonces me parece que hay cosas que las ha hecho injustamente (Hombre, 40 años, comerciante).

Una entrevistada vincula a las medidas restrictivas del Gobierno en la pandemia con el “autoritarismo”, la “soberbia”, la falta de “humanidad” y la “falta de respeto” a la ciudadanía:

Se ha dado con muchísima autoridad, muchísima soberbia. Para mí, ha faltado mucha humanidad por el lado de la parte política, muchísimo, del gobierno actual. La verdad es que (el gobierno) ha mostrado un autoritarismo, y parecen dictaduras, ¡y eso que vivimos en democracia! Ha dejado ver eeeeh, el autoritarismo, la falta de respeto hacia el ciudadano, que es el que mantiene esos gobiernos. Porque tampoco podés encerrar a todo el mundo ya, vos ya no podés encerrar. Ya la gente tiene que tomar conciencia, no podés volver a encerrar a todo el mundo (Mujer, 58 años, ama de casa).

El uso reiterado del adverbio “muchísimo” (“muchísima autoridad”, “muchísima soberbia”, “ha faltado mucha”) y el tono imperativo que acompaña a la negación a través del auxiliar modal (“No podés encerrar”), actúan como reforzadores de la crítica al Gobierno Nacional.

Otro entrevistado caracteriza metafóricamente a las regulaciones gubernamentales como una situación de “guerra” (“Me pareció como si estuviésemos en guerra”). En el marco de la analogía militar de la pandemia con la guerra, este entrevistado prioriza lo económico

¹⁰⁴ En las entrevistas observamos que la crisis de representatividad se extiende transversalmente a los/las principales dirigentes de la oposición (en particular, a Macri), a instituciones representativas (medios de comunicación, jueces, Iglesia), al conjunto de la dirigencia política (“los políticos”, la “casta política”) y a la propia actividad política. Por motivos de espacio, no podemos profundizar sobre este tema en este trabajo. Cabe destacar, además, que la muestra es pequeña y no representativa como para llegar a una conclusión definitiva.

(“salgamos a laburar”), en desmedro del resguardo de la salud colectiva y la responsabilidad por las vidas de los ciudadanos (“se morirán 500, pero la vida continúa”):

Es como en la guerra. (Cuando) las decisiones políticas de Estados Unidos son que vayamos a la guerra, mueren 500 (personas), pero en beneficio. Entonces, en ese mismo sentido, sigamos con la pandemia, se morirán 500, pero la vida continúa. Generemos las camas y salgamos a laburar. Porque el virus va a seguir (Hombre, 53 años, empleado).

Otro conjunto de entrevistados/as (3 en total) señalan que las medidas de restricción sanitaria no les quitó libertades, o reconocen que hubo una limitación de las libertades, pero valoran positivamente dichas medidas. En las circunstancias excepcionales de la pandemia, no consideran que el Gobierno les quitó libertades o, en todo caso, destacan que lo hizo para defender el “bien de todos”:

¡No llamaría que me quitó libertades! Tampoco sentí, no lo sentí como un peso. Me parece que por ahí, ya te digo, me parece que fue demasiado en encierro, pero a ver, si estamos en una cuarentena y te dicen ‘esto no se puede hacer, esto se puede hacer’, obvio que libertades te quitan, pero bueno, ¡es el bien para todos! O sea, no creo que sea la libertad de una persona, sino de todos, por el bien de todos (Hombre, 45 años, comerciante).

No me quitó libertad (el gobierno) ¡Al contrario! Yo haría exactamente lo mismo (Mujer, 33 años, ama de casa).

El gobierno no me quitó libertades, fue el virus (risas). No me quito libertad, yo decidí acatar porque me pareció lo más razonable (Mujer, 49, empleada administrativa).

Por último, encontramos una posición intermedia. Por un lado, sostiene que el gobierno de Alberto Fernández le quitó a la gente que trabaja sin ingresos fijos la “libertad de trabajar”, al tiempo que los asalariados estaban “tranquilos” con sus sueldos mensuales asegurados:

(A algunos) les cortó la libertad de trabajar y, al no poder trabajar, corta la libertad, pero hay gente que tiene el sueldo seguro y estaban tranquilos, porque todos los meses llegaba el sueldo; pero hay gente que trabajaba el día y no pudo trabajar y la pasó muy mal, ahí los cortó individualmente (Hombre, 48 años, empleado administrativo).

Pero también reconoce que, en el marco de la pandemia, la libertad individual no puede ser “absoluta”, a riesgo de parecerse al “desastre” de Brasil durante el gobierno de Bolsonaro:

En estos tiempos de pandemia no se puede pedir libertad absoluta. Si largás a todos juntos a las calles, vamos a quedar como Brasil. Iba a ser un desastre (Hombre, 48 años, empleado administrativo).

De este modo, observamos una disputa entre una concepción individualista (liberal) sobre la libertad, frente a una concepción colectiva (comunitarista). La primera defiende una visión

negativa de la libertad, contra la intervención del Estado sobre las libertades individuales. La segunda, en cambio, se asemeja a la libertad positiva y la primacía del bien común y la solidaridad social, por sobre el individualismo asocial y el egoísmo privado. A diferencia del liberalismo, fundado en el interés propio, la corriente comunitarista critica los efectos perniciosos del individualismo exacerbado y enfatiza en el deber de una ciudadanía responsable y solidaria, asentada en valores colectivos y la inmersión del individuo dentro de su comunidad. Frente al formalismo liberal, sostiene que existen ciertas condiciones sociales y morales que requieren la intervención del Estado en la vida comunitaria y que los individuos deben ceder en ciertos casos a sus intereses privados ante los derechos de la comunidad para fortalecer los lazos de solidaridad y defender la dimensión social de la existencia humana¹⁰⁵.

Desde esta última concepción, una porción de los/las ciudadanos considera razonable y justo que, en las condiciones excepcionales de la pandemia, haya ciertos límites a la libertad individual extrema y el egoísmo privado para evitar una catástrofe humanitaria como hubo en Brasil (“Iba a ser un desastre”) y garantizar el bienestar del conjunto de la sociedad (“No creo que sea la libertad de una persona, sino de todos, por el bien de todos”). Como señalaba un entrevistado: “Hay gente que no le importa el otro”, que “no piensa en el otro”. Sin embargo, los controles del gobierno eran necesarios, porque estás “salvando vidas” y “la salud está primero” (Hombre, 50 años, jubilado).

Grados de optimismo/pesimismo sobre el futuro

Un último eje para ponderar la imagen de la ciudadanía en relación con el Gobierno Nacional refiere a las expectativas a futuro. En los/las entrevistados encontramos, en general, una visión pesimista sobre los próximos años de gobierno de Alberto y el futuro del país, que oscila entre que todo seguirá igual y que empeorará:

Es obvio que, por el tema este de la pandemia, se va a complicar todo. Toda la economía, todo lo que es salud (Hombre, 50 años, jubilado).

Esto no va a cambiar en nada, me parece. Me parece que vienen sin ninguna idea política buena (...). No sé, no le veo que hagan mucho por el país, este gobierno, en los dos años que le quedan (...). Al país va a ser muy difícil que lo saquen adelante (Hombre, 40 años, comerciante).

En el contexto de pandemia, algunos son gradualmente muy pesimistas, y hasta catastrofistas, sobre el futuro de la economía, la situación personal y del país:

¹⁰⁵ Sobre las diferencias entre la libertad negativa y la libertad positiva, véase Berlin (1993). En cuanto al debate filosófico entre las concepciones liberales y comunitaristas, véase Rodríguez (2010). Uno de los referentes de esta perspectiva, Charles Taylor (1994), critica el individualismo atomista del liberalismo (con la importante salvedad de Tocqueville), ya que promueve el “desinterés por los demás y por la sociedad”, la “primacía de la razón instrumental” basada en el análisis “costo-beneficio” económico y el “narcisismo” egoísta, en desmedro de los “fines” e “ideales morales” en cuestiones relevantes que “trascienden al yo”, como los deberes de “ciudadanía” y la “solidaridad” social (véase Taylor, 1994: 38-76 y ss.).

La economía, como estamos, y más o menos por lo que yo escucho, hemos retrocedido 50 años, y vamos a tardar 50 años más en recuperarla (...). Por más que laburemos, no vamos a vivir mejor. No, lamentablemente no. Con el gobierno que está, y con la maquinita imprimiendo, no vamos a salir nunca (Hombre, empleado, 53 años).

Yo creo que, si esto no cambia, creo que va a haber un gran estallido social (Hombre, comerciante, 36 años).

Una de las entrevistadas, en consonancia con sus fuertes críticas al rol de la dirigencia opositora, es prudente y expresa mucha preocupación por el futuro:

Y, no me lo imagino mucho. No quiero generarme grandes expectativas, porque me preocupa mucho el tema de la oposición. Y creo que son capaces de hacer cualquier cosa (Mujer, empleada administrativa, 49 años).

Entre los/las que apoyan la gestión de Alberto Fernández, sólo encontramos un entrevistado fuertemente optimista:

Lo que yo creo que él (Alberto) va a hacer es llamar a muchos inversionistas al país para que haya más crecimiento del tema del trabajo para la gente. Ahora veo que (Alberto) está bien, que está gobernando bien. Espero que siga así, y mejor todavía para el futuro, para el futuro de todos los argentinos (Hombre, empleado administrativo, 48 años).

Este caso es una excepción, en el marco de entrevistados/as que, en general, expresan preocupación, resignación o desesperanza sobre el futuro.

Conclusiones provisionarias

A partir del análisis de las entrevistas, encontramos en los/las ciudadanos argentinos posiciones en tensión sobre el gobierno de Alberto Fernández, su gestión de la pandemia, la concepción sobre las libertades y las responsabilidades políticas, que se expresaron con diferentes grados, intensidades y matices. Una parte de los/las entrevistados/as reconocen las circunstancias excepcionales e imprevisibles de la pandemia, mencionan la devastación y el atropello al pueblo del gobierno macrista y el accionar irresponsable, oportunista y mezquino de la oposición. Además, valoran el pago del IFE porque ayudó a mucha gente y apoyan las restricciones sanitarias, ya que evitaron que hubiere más muertes. Afirman que los controles eran necesarios para priorizar el cuidado de la salud de las personas y salvar vidas, en un contexto de pandemia. Estos sectores respaldan la decisión del Gobierno Nacional de escuchar a los/las científicos, las prioridades de vacunación y las clases virtuales.

Sin embargo, la mayoría de los/las entrevistados expresa fuertes críticas a la gestión gubernamental de la pandemia. Algunos/as consideran que las restricciones sanitarias deberían haber sido más estrictas. Otros/as, señalan que las fronteras se podrían haber cerrado antes y

que el confinamiento inicial podría haber sido más flexible, sostienen que las medidas iniciales que tomó el gobierno de Alberto Fernández fueron desesperadas, excesivas y apresuradas, que se manejó mal la situación, o lo metaforizan como manotazos de ahogado. Señalan que el gobierno se apresuró a cerrar todo, pero la pandemia igualmente se extendió, por lo que el resultado fue desastroso. Otros/as, consideran que no controló las fronteras a tiempo y dejó ingresar el virus al país, actuando de manera tardía e infructuosa. Además, critican la lentitud del plan de vacunación, la falta de organización en la distribución de las vacunas y la cantidad de contagiados. Algunos/as mencionan, indignados, el escándalo de las llamadas ‘vacunas VIP’ y asocian al gobierno con la corrupción y la impunidad, lo definen como una mafia, caracterizan su accionar como una burla a la gente o usan la metáfora del atropello al ciudadano.

Sin embargo, las principales críticas refieren al impacto de la gestión de la pandemia sobre la situación económica y social. Una parte importante de los/las entrevistados sostienen que el gobierno de Alberto Fernández fundió a la gente, cerraron comercios y quebró o paralizó a la economía. Argumentan que la economía no se está moviendo, que la inflación es cada vez más alta y sus efectos negativos sobre los ingresos. Afirman que se desvaloriza el dinero, que cada vez alcanza menos la plata, porque las cosas cuestan mucho más. Además, algunos/as critican la falta de trabajo, señalan que hay muchos pobres, que creció mucho la pobreza y la delincuencia.

En ese marco, en una parte de los/las entrevistados/as observamos una pérdida de legitimidad en la figura del Presidente, que mutó de una sensación de aprecio y confianza inicial (“Lo apreciaba”; “Yo le tenía fe”; “Me encantaba”; “Era tan coherente”), a una imagen de desilusión, vergüenza, desengaño o defraudación (“No me representa”; “Me va vergüenza”; “Estoy totalmente defraudada”). En 2019 tenían esperanza en Alberto Fernández, porque era coherente, claro, honrado, buena gente y creían que se iba a alejar de Cristina Kirchner y luchar contra la corrupción. Sin embargo, en 2021 expresan desilusión. Critican la corrupción, la soberbia, la falta de liderazgo, la inacción frente al COVID o la falta de diálogo con la oposición. Las apelaciones a que “No me representa”, estoy “Totalmente defraudada” o “Me da vergüenza el accionar de él”, junto con las críticas a la gestión de la pandemia que son transversales a la posición política, muestran una fuerte pérdida de legitimidad del Presidente y desencanto con su gobierno. El pesimismo y resignación sobre el futuro refuerzan esta idea.

Además, en el contexto de la crisis económica, social y sanitaria, en una porción de los/las ciudadanos observamos concomitantemente críticas más generales a la política (“La política en nuestro país es muy mezquina”), los políticos (la “casta”) y pérdida de confianza en las instituciones (“Perdí la credibilidad política, la credibilidad institucional”; “Muchas instituciones nos fallaron como ciudadanos”; “Estoy descreído de todo”). En ese marco, encontramos sensaciones de desconfianza, bronca e indignación generalizada con el gobierno nacional, pero también fuertes críticas a las fuerzas de la oposición. Todo esto muestra indicios de una crisis de representatividad política.

Otro aspecto relevante que observamos es una crítica general a la intervención del Estado. Diversos entrevistados/as afirman que el gobierno de Alberto Fernández despilfarra la plata de la gente que paga sus impuestos en subsidios como el IFE y gasta el dinero de los contribuyentes en planes y asignaciones sociales que ayudan a los que no quieren trabajar y pretenden vivir a costa del Estado. De este modo, señalan, indignados/as, que el gobierno cría a vagos y haraganes a montones y gasta los recursos públicos provenientes del bolsillo de los que sí trabajan (los contribuyentes), en los pobres-vagos que no lo hacen. En algunos casos, las críticas

a los planes sociales se extienden al gobierno de Cristina Fernández, al que también relacionan con la corrupción. En otros, rechazan a la “maquinita imprimiendo”.

Estas críticas muestran un desprecio y estigmatización típicamente neoliberal tanto hacia los/las ciudadanos pobres o trabajadores desempleados, como hacia la inversión pública y las formas de ayuda social del Estado a los sectores más vulnerables y desprotegidos. Vinculamos a este fenómeno con el régimen de desigualdades múltiples, que exagera la lógica neoliberal de comparación y competencia entre los/las propios trabajadores, fomenta la ira, indignación moral y resentimiento con los pobres y excluidos del sistema y destruye los lazos de solidaridad social. En ese marco, observamos una importante permeabilidad del discurso neoliberal. Ello se pone de manifiesto en las críticas al gasto público del Estado en subsidios, asignaciones y ayuda social, el rechazo al pago de impuestos y la defensa de concepciones individualistas-egoístas, competitivas y meritocráticas. La frontera entre la gente que trabaja y paga sus impuestos, frente a los “vagos” que no quieren trabajar y viven del Estado, condensa el avance de estas posiciones ideológicas.

Una última cuestión que analizamos concierne a las posiciones de los/las ciudadanos sobre las restricciones sanitarias y las libertades. Observamos que un conjunto de entrevistados/as sienten que el Gobierno con los controles les quitó libertad, significante que relacionan con la libertad de viajar y estar con familiares o la libertad de trabajar. Algunos/as relacionan las medidas restrictivas con el autoritarismo, la soberbia y la falta de humanidad y definen al Presidente como absoluto o autoritario. En cambio, otros/as ciudadanos argumentan que el Gobierno no les quitó libertades, o que lo hizo para defender el bien de todos, y que eran medidas razonables. Además, afirman que, en el contexto crítico de pandemia, no puede haber libertad absoluta, a riesgo de generar un desastre sanitario como el que hubo en Brasil con Bolsonaro. Algunos también mencionan que hay gente egoísta que no piensa en el otro y critica las restricciones, en lugar de priorizar el cuidado de la salud y la vida de todas las personas. De este modo, encontramos una disputa entre una concepción individualista (liberal) sobre la libertad, frente a una concepción colectiva (comunitarista). Esta última sostiene que, en las circunstancias excepcionales de la pandemia, debe haber ciertos límites a la libertad extrema y el egoísmo individual para defender el bien común, preservar la salud, la vida y la libertad del conjunto de la sociedad.

De esta forma, este trabajo abona la hipótesis inicial de nuestro proyecto de investigación PISAC acerca de la estrecha relación entre la pandemia y sus efectos socioeconómicos regresivos y la radicalización, intensificación (y en parte, extensión) de posiciones individualistas y neoliberales, aunque también muestra la persistencia de una tensión con posiciones solidarias y comunitarias ligadas a una matriz nacional-popular. Al mismo tiempo, muestra indicios de una expansión concomitante de la crisis de representatividad política, que parece ser transversal a los principales espacios partidarios. En el marco de las restricciones sanitarias, el agravamiento de la inflación, los problemas de gestión y el crecimiento de las muertes por COVID de la segunda ola de la pandemia, cierta sensación de indignación o desilusión con la “clase política” parece haber permeado en diversos sectores de la ciudadanía y podría expresar una crisis más general del Estado Social, del valor de la solidaridad y de la política como proyecto colectivo de inclusión social de las mayorías populares. De todos modos, debido al tamaño de la muestra, estos resultados sólo muestran algunos indicios y no son concluyentes.

El reciente triunfo del economista y *outsider* Javier Milei, con su discurso anarco-neoliberal y anti “casta”, en las elecciones presidenciales en Argentina, parece confirmar este avance e intensificación de las ideas híper-individualistas y anti-estatistas, así como la relativa pérdida de credibilidad de la dirigencia política tradicional (en particular de Alberto Fernández, quien no se presentó a una segunda candidatura en la elección presidencial).

Bibliografía

- Aboy Carlés, G. (2001). *Las dos fronteras de la democracia argentina. La reformulación de las identidades políticas de Alfonsín a Menem*. Rosario: Homo Sapiens.
- Aboy Carlés, G. (2010). “Populismo, regeneracionismo y democracia”, *PostData*, 15, 11-30.
- Amossy, R. (2016). “Por una retórica del dissensus: las funciones de la polémica”, en S. Montero (comp.), *El análisis del discurso polémico*. Bs. As.: Prometeo, pp. 25-35.
- Angenot, M. (2012). *El discurso social. Los límites históricos de lo pensable y lo decible*. Bs. As.: Siglo XXI.
- Arnoux, E. (2009). *Análisis del Discurso. Modos de abordar materiales de archivo*. Bs. As.: Santiago Arcos.
- Bajtín, M. (1982). “El problema de los géneros discursivos”, en *Estética de la creación verbal*, México: Siglo XXI.
- Balmayor, E. (1999). “La enunciación del discurso”, en R. Marafioti (comp.), *Recorridos semiológicos. Signos, enunciación, argumentación*. Bs. As.: EUDEBA, pp. 111-178.
- Balsa, J. y Cuesta, M. (2021). “De aprobados y aplazados. Pandemia, gestión, oposición y ciudadanía”, *El Cohete a la Luna*, 8 de agosto.
- Benveniste, É. (1997). *Problemas de lingüística general I*. México D.F.: Siglo XXI.
- Berlin, I. (1993). *Cuatro ensayos sobre la libertad*. Madrid: Alianza.
- Bourdieu, P. (1999). *Contrafuegos. Reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión neoliberal*. Barcelona: Anagrama.
- Buenfil Burgos, R. N. (1994). *Cardenismo: argumentación y antagonismo en educación*. México: DIE-Cinvestav/CONACYT.
- Carel, M. y Ducrot, O. (2005). *La semántica argumentativa*. Bs. As.: Colihue.
- Courtés, J. (1997). *Análisis semiótico del discurso. Del enunciado a la enunciación*. Madrid: Gredos.
- Dubet, F. (2023). *El nuevo régimen de las desigualdades solitarias. Qué hacer cuando la injusticia social se sufre como un problema individual*. Bs. As.: Siglo XXI.
- Fair, H. (2018). “Propuesta metodológica para investigar los elementos extralingüísticos y el impacto hegemónico desde la perspectiva de Laclau”, *Athenea*, 18(3).
- Fair, H. (2023a). “Perspectivas sobre el neoliberalismo: un estado de la cuestión”, *Ciencia, Docencia y Tecnología*, 34, 1-43.

- Fair, H. (2023b). “Cruces entre lo Real, lo Simbólico y lo Imaginario en la Teoría del Discurso de Laclau: modos de interacción óptica y transformaciones”, *Revista Brasileira de Ciencia Política*, 41, 1-33.
- Foucault, M. (1973). *El orden del discurso*. Barcelona: Tusquets.
- García Delgado, D. (2003). *Estado-Nación y la crisis del modelo*. Bs. As.: FLACSO.
- García Negroni, M. M. (2008). “Subjetividad y discurso científico-académico”, *Signos*, 41, 5-31.
- García Negroni, M. M. (2019). “El enfoque dialógico de la argumentación y la polifonía, puntos de vista evidenciales y puntos de vista alusivos”, *RILCE*, 35, 521-549.
- García Negroni, M. M. y Zoppi Fontana, M. (1992). *Análisis lingüístico y discurso político. El poder de enunciar*. Bs. As.: Centro Editor de América Latina.
- García Negroni, M. M. y Tordesillas Colado, M. (2023). *La enunciación en la lengua. Subjetividad, Polifonía y Dialogismo*. Bs. As.: Waldhuter.
- Genette, G. (1998). *Nuevo discurso del relato*. Madrid: Cátedra.
- Guerrero, O. (2019). “Neoliberalismo y neogerencia pública”, *Revista eletronica de Administracao*, 25, 4-21.
- Laclau, E. (1993). *Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo*. Bs. As.: Nueva visión.
- Laclau, E. (2003a). “Catacresis y metáfora en la construcción de la identidad colectiva”, *Phronesis*, 9(3).
- Laclau, E. (2003b). “Estructura, historia y lo político”, en J. Butler, E. Laclau y S. Žižek (comps.). *Contingencia, hegemonía, universalidad*. México: FCE, pp. 185-214.
- Laclau, E. (2014). “Articulación y los límites de la metáfora”, en *Los fundamentos retóricos de la sociedad*. Bs. As.: FCE, pp. 69-97.
- López, A. (2005). “Los fundamentos de la nueva gestión pública: lógica privada y poder tecnocrático en el Estado mínimo”, en M. Thwaites Rey y A. López (comps.). *Entre tecnócratas globalizados y políticos clientelistas: derrotero del ajuste neoliberal en el Estado argentino*. Bs. As.: Prometeo, pp. 71-90.
- Plantin, C. (2012). *La argumentación. Historia, teorías, perspectivas*. Bs. As.: Biblos.
- Rodríguez, R. (2010). “Liberalismo y comunitarismo: un debate inacabado”, *Studium*, 16, 201-229.
- Rothbard, M. (2011). *El hombre, la economía y el Estado*. Madrid: Unión editorial.
- Rothbard, M. (2013). *Hacia una nueva libertad: El Manifiesto Libertario*. Madrid: Unión editorial.
- Sigal, S. y Verón, E. (2003). *Perón o muerte. Los fundamentos discursivos del fenómeno peronista*. Bs. As.: Legasa.
- Taylor, C. (1994). *La ética de la autenticidad*. Barcelona: Paidós.
- Verón, E. (1987a). “La palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación política”, en AA.VV., *El discurso político*. Bs. As.: Hachette, pp. 13-26.

Verón, E. (1987b). *La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad*. Barcelona: Gedisa.

Verón, E. (1997). *Semiosis de lo ideológico y del poder*. Bs. As.: CBC.

Vitale, M. A. (2021). “Argumentación, polémica y emociones en Alberto Fernández ante el COVID-19”, *Cuaderno*, 136, 71-90.

Otras fuentes

INDEC (2021). “Pobreza e Indigencia en hogares y personas”, Índice Nacional de Estadística y Censos, República Argentina. URL: <https://www.indec.gob.ar>

Ministerio de Economía (MECON), República Argentina. URL: <https://www.argentina.gob.ar/economia/medidas-economicas-COVID19/ingresofamiliardeemergencia>

La Nación, “La lista de la vacunación VIP: quiénes son los 70 beneficiados por el Gobierno”, 23/02/2021. URL: <https://www.lanacion.com.ar/politica/la-lista-nid2610087/>

SEMBLANZA

Investigador Independiente en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y docente en la Universidad Nacional de Quilmes (Instituto de Economía y Sociedad en la Argentina Contemporánea-CIC), Bernal, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Se especializa en el análisis del discurso neoliberal en Argentina. ORCID: 0000 0002-2082-8257 Correo electrónico: hernanfair@conicet.gov.ar

Disciplina: Sociología

Subdisciplina: sociología política

Tipo, método o enfoque del estudio: análisis cualitativo.

COMUNICACIONES



ROMPIENDO BARRERAS: EL POTENCIAL DE LA IA EN LA INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

Julio Paredes

apr2206@gmail.com

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-8774-1464>

Resumen

El presente estudio explora el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la inclusión laboral de personas con hipoacusia profunda, un colectivo históricamente marginado en el entorno laboral debido a barreras tecnológicas y sociales. Mediante una encuesta dirigida a personas con discapacidad auditiva y el uso del algoritmo Random Forest, se analizaron las experiencias y expectativas sobre tecnologías inclusivas. Los resultados indicaron que un 87.5% de los encuestados considera que la IA mejoraría significativamente su integración laboral, con énfasis en la accesibilidad y la comunicación. Se discuten las oportunidades y los desafíos en la adopción de estas tecnologías, con un enfoque en empresas como Dillo.ai y Eldes, que ya han avanzado en su implementación. Los hallazgos sugieren que, aunque la IA tiene un potencial considerable para eliminar barreras, su adopción sigue siendo limitada, lo que resalta la necesidad de políticas públicas más sólidas y una mayor sensibilización en el ámbito empresarial.

Palabras clave: Inclusión laboral, hipoacusia profunda, inteligencia artificial, Random Forest, tecnologías inclusivas, accesibilidad.

BREAKING BARRIERS: THE POTENTIAL OF THE IA FOR THE INCLUSION OF HEARING IMPAIRED PEOPLE IN THE WORKPLACE

Abstract

This study explores the impact of artificial intelligence (AI) on the inclusion of people with profound hearing loss, a group historically marginalised in the workplace due to technological and social barriers. Through a survey of hearing impaired people and the use of the Random Forest algorithm, the experiences and expectations about inclusive technologies were analysed. The results indicated that 87.5% of respondents believe that AI would significantly improve their work integration, with an emphasis on accessibility and communication. Opportunities and challenges in the adoption of these technologies are discussed, with a focus on companies

such as Dillo.ai and Eldes, which have already made progress in their implementation. The findings suggest that while AI has considerable potential to remove barriers, its adoption remains limited, highlighting the need for stronger public policies and greater awareness at the business level.

Key-words: Workplace inclusion, profound hearing loss, artificial intelligence, Random Forest, inclusive technologies, accessibility.

QUEBRANDO BARREIRAS: O POTENCIAL DA IA PARA A INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA NO LOCAL DE TRABALHO

Resumo

Este estudo explora o impacto da inteligência artificial (IA) na inclusão de pessoas com perda auditiva profunda, um grupo historicamente marginalizado no local de trabalho devido a barreiras tecnológicas e sociais. Por meio de uma pesquisa com pessoas com deficiência auditiva e do uso do algoritmo Random Forest, foram analisadas as experiências e expectativas sobre tecnologias inclusivas. Os resultados indicaram que 87,5% dos entrevistados acreditam que a IA melhoraria significativamente sua integração no trabalho, com ênfase na acessibilidade e na comunicação. As oportunidades e os desafios na adoção dessas tecnologias são discutidos, com foco em empresas como a Dillo.ai e a Eldes, que já fizeram progressos em sua implementação. Os resultados sugerem que, embora a IA tenha um potencial considerável para remover barreiras, sua adoção continua limitada, destacando a necessidade de políticas públicas mais fortes e maior conscientização em nível empresarial.

Palavras-chave: Inclusão no local de trabalho, perda auditiva profunda, inteligência artificial, Random Forest, tecnologias inclusivas, acessibilidade.

Introducción

La inclusión laboral de personas con hipoacusia profunda continúa siendo un desafío importante, enmarcado tanto en aspectos tecnológicos como sociales. La falta de herramientas tecnológicas adecuadas, especialmente en lo que respecta a la comunicación, perpetúa la exclusión de este colectivo. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2021), más de mil millones de personas viven con alguna discapacidad, y muchas enfrentan dificultades para acceder al empleo. Las personas con hipoacusia profunda, debido a las limitaciones en la comunicación verbal, enfrentan barreras adicionales que dificultan su integración efectiva en el entorno laboral.

A pesar de los avances en inteligencia artificial, su implementación para facilitar la inclusión de personas con discapacidad auditiva sigue siendo insuficiente. Esta brecha tecnológica es una de las barreras más importantes para garantizar la igualdad de oportunidades. Desde un enfoque teórico, John Rawls (1971), en su teoría de la justicia, argumenta que una sociedad equitativa debe garantizar el acceso a oportunidades para todos, sin que las condiciones físicas representen un impedimento. En este contexto, la IA ofrece soluciones que pueden eliminar barreras de comunicación y fomentar la inclusión laboral de personas con hipoacusia profunda.

Sin embargo, algunas personas temen que la IA reemplace la mano de obra tradicional, lo que genera incertidumbre. Es importante destacar que, en lugar de desplazar trabajos, la IA puede crear oportunidades para formar una mano de obra de mayor calidad. Este enfoque social y tecnológico indica que los avances en IA pueden abrir nuevas puertas, facilitando el acceso al empleo para personas que trabajan desde casa o que enfrentan discapacidades, proporcionando un entorno laboral más inclusivo y adaptado. Como señala Kuhn (1962), cuando un sistema no resuelve los problemas que enfrenta, es necesario un cambio de paradigma. En este caso, el paradigma de exclusión de personas con hipoacusia profunda debe ser sustituido por un enfoque inclusivo apoyado en tecnologías avanzadas que motiven una transformación positiva del mercado laboral.

Materiales y Métodos¹⁰⁶

Encuesta Digital

Se diseñó una encuesta digital distribuida a través de Google Forms y dirigida a personas con hipoacusia profunda. La colaboración de las organizaciones Dillo.ai, Eldes y la ONG Súmate, liderada por Julieta Moranzoni, fue fundamental para abrir las puertas a esta población, que habitualmente es difícil de alcanzar debido a las barreras sociales y de comunicación. Gracias a su participación, se logró obtener respuestas valiosas que proporcionan un panorama claro sobre las barreras en el entorno laboral, el uso de tecnologías adaptativas y las expectativas sobre el impacto de la inteligencia artificial en la inclusión labora.

Análisis de Datos con Random Forest

Los datos recolectados fueron analizados utilizando el algoritmo Random Forest, que permitió identificar las variables más relevantes y detectar patrones en las respuestas de los encuestados. Random Forest, una técnica eficaz en machine learning, se utiliza para gestionar grandes volúmenes de datos y ofrecer predicciones precisas al identificar interacciones complejas entre variables.

Variables Claves Estudiadas

Las principales variables incluidas en el análisis fueron:

- **Edad:** Se dividió en cuatro grupos (20-30, 31-40, 41-50 y mayores de 50 años).
- **Género:** Masculino y femenino.
- **Nivel educativo:** Se clasificó en primario, secundario, técnico/terciario, universitario incompleto y completo.

¹⁰⁶ Se pueden ver los detalles y resultados en <https://lucianabaldo1.shinyapps.io/AplicacionIDSA/>

- **Uso de tecnologías:** Se evaluó el acceso y la familiaridad con tecnologías basadas en IA, como el reconocimiento de voz.

- **Expectativas laborales:** Preguntas sobre si los encuestados consideran que la IA mejoraría su inclusión laboral.

Resultados

Características Demográficas

El rango de edad más representado fue el de 31 a 40 años (40.8%), seguido por el de 41 a 50 años (16.7%). En cuanto al género, un 51.7% de los encuestados fueron mujeres y un 48.3% hombres. El nivel educativo más común fue el técnico/terciario (29.2%), seguido por la educación secundaria completa (28.3%).

Percepción de la IA en el Entorno Laboral

El análisis mediante Random Forest mostró que un 87.5% de los encuestados cree que la IA mejoraría significativamente su experiencia laboral. Las tecnologías de reconocimiento de voz y los asistentes virtuales fueron señalados como esenciales para mejorar la accesibilidad y reducir las barreras de comunicación.

Imagen 1: ¿Crees que mejoraría tu experiencia laboral con la utilización de la IA? Y ¿En qué aspectos crees que mejoraría?



Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de Encuesta sobre el impacto de las IA en la inclusión laboral de personas con hipoacusia, 2024.

Barreras Identificadas

Entre las barreras mencionadas, el 80% de los encuestados identificó la falta de accesibilidad tecnológica como un impedimento clave en el entorno laboral. Además, un 70% destacó la importancia de la capacitación en IA para mejorar su integración y participación en los equipos de trabajo.

Discusión

Los resultados del estudio confirman que la inteligencia artificial tiene un gran potencial para transformar el entorno laboral de las personas con hipoacusia profunda. En particular, tecnologías como el reconocimiento de voz y los asistentes virtuales son herramientas clave para reducir de manera significativa las barreras de comunicación que, históricamente, han limitado la participación de este colectivo en condiciones de igualdad.

Por otro lado, empresas como Dillo.ai y Eldes han sido pioneras en el desarrollo e implementación de soluciones basadas en IA que facilitan la integración laboral de personas con discapacidad auditiva. Estas compañías han logrado avances importantes al ofrecer tecnologías que mejoran la accesibilidad en el entorno laboral, derribando barreras y posibilitando una mayor inclusión. Sin embargo, es crucial que estas soluciones sean más ampliamente conocidas y adoptadas por otras organizaciones, dado su éxito en mejorar la calidad de vida y las oportunidades laborales de las personas con discapacidad.

A pesar de estos avances, la adopción masiva de tecnologías inclusivas sigue siendo un reto. Una de las principales limitaciones radica en la falta de políticas públicas adecuadas que promuevan activamente su uso. Tal como advierte Floridi (2006), el verdadero impacto de la tecnología en la vida de las personas con discapacidad solo se logrará si se desarrollan estrategias normativas que incentiven su adopción efectiva.

Asimismo, este estudio subraya cómo la implementación de IA puede ser un motor de cambio en países como Argentina, donde el uso de tecnologías inclusivas tiene el potencial de reducir significativamente las desigualdades y proporcionar oportunidades laborales más equitativas para las personas con discapacidad. No obstante, la falta de programas de formación adecuados y de estrategias claras sigue limitando el pleno aprovechamiento de estas soluciones. Por ello, es imperativo que se promuevan políticas públicas que incentiven la implementación de estas tecnologías para garantizar un entorno laboral más accesible y justo.

Conclusiones

La inteligencia artificial se perfila como una herramienta clave para mejorar la inclusión laboral de personas con hipoacusia profunda. Los resultados de este estudio, basados en la encuesta y el análisis mediante Random Forest, demuestran que la IA tiene el potencial de eliminar barreras, especialmente en lo que respecta a la comunicación y la accesibilidad.

Sin embargo, la implementación de estas soluciones requiere de un esfuerzo concertado por parte de las empresas y los gobiernos. La colaboración entre los sectores público y privado será crucial para asegurar que las tecnologías basadas en IA estén disponibles y sean accesibles para todos. Empresas como Dillo.ai y Eldes han liderado este camino, pero es esencial que más organizaciones sigan su ejemplo para lograr una inclusión laboral efectiva y global.

Finalmente, este estudio pone de manifiesto la necesidad urgente de crear políticas públicas que promuevan la capacitación en IA y fomenten la adopción de tecnologías inclusivas en el entorno laboral. El impacto global de estas tecnologías dependerá de la voluntad política y empresarial de transformar los entornos laborales en espacios más accesibles y equitativos.

Referencias Bibliográficas

Dillo.ai. (2024). Soluciones de inteligencia artificial para la inclusión laboral de personas con hipoacusia profunda. Recuperado de <https://dillo.ai>

Eldes. (2024). Inclusión de personas sordas mediante tecnología. Recuperado de <https://www.somoseldes.com/equipo>

Floridi, L. (2006). La ética de la información. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/50223435_Etica_de_la_informacion_su_naturaleza_y_alcance

Hernández, C., Márquez, H., & Martínez, F. (2015). Propuesta Tecnológica para el Mejoramiento de la Educación y la Inclusión Social en los Niños Sordos. *Formación Universitaria*, 8(6), 107-120. <https://doi.org/10.4067/S0718-50062015000600013>

Kuhn, T. S. (1971). *La estructura de las revoluciones científicas* (3ª ed.). México: Fondo de Cultura Económica. Recuperado de https://ifdc6m-juj.infed.edu.ar/aula/archivos/repositorio/0/101/T._S._Kuhn_-_La_Estructura_de_las_Revoluciones_Cientificas.pdf

Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2021). Disability and work: Global report. OIT. Recuperado de <https://www.ilo.org/es/temas/discapacidad-y-trabajo>

Organización Mundial de la Salud. (2018). Deafness and hearing loss. Recuperado de <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss>

Rawls, J. (1971). *Teoría de la Justicia*. Primera edición. Editorial: Harvard University Press. Recuperado de <https://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2019/12/doctrina48358.pdf>